



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE LA MUJER

**Violencia contra las mujeres en la
cooperación internacional al desarrollo:
un análisis de la política pública española
(2005-2010)**

Memoria para optar al grado de Doctora presentada por

Marina Martins Gonzalez

Bajo la dirección de

Dra. Ana María López Sala

Dra. Cristina Sánchez Muñoz

Madrid, septiembre de 2016.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (UAM)
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE LA MUJER (IUEM)
PROGRAMA DE DOCTORADO EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARES DE GÉNERO

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)
CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES (CCHS)
INSTITUTO DE ECONOMÍA, GEOGRAFÍA Y DEMOGRAFÍA (IEGD)
PROGRAMA “JUNTA PARA LA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS” – JAE PREDOCTORAL

TESIS DOCTORAL

**Violencia contra las mujeres en la cooperación
internacional al desarrollo: un análisis de la
política pública española (2005-2010)**

DOCTORANDA

Marina Martins Gonzalez

DIRECTORAS DE LA TESIS DOCTORAL

Dra. Ana María López Sala (IEGD/CSIC)

Dra. Cristina Sánchez Muñoz (UAM/IUEM)

*À minha mãe, Alice, ao meu pai, Vicente,
e ao meu irmão, Marcos,
pelo apoio incondicional.*

AGRADECIMIENTOS

Son muchos los agradecimientos que debo expresar por el apoyo recibido en diferentes momentos de la realización de esta tesis doctoral. Aunque en la mayoría de las ocasiones se trate de una labor solitaria, sin las personas que han estado a mi lado en los últimos años todo hubiera sido más difícil, y seguramente menos interesante.

En primer lugar, desearía hacer pública la más profunda gratitud a mis dos directoras de tesis: Dra. Ana M^a. López Sala y Dra. Cristina Sánchez Muñoz. Desde el instante en el que les presenté la propuesta de esta investigación, he recibido su confianza y entusiasmo. Con miradas distintas, pero complementares, las sugerencias y comentarios de ambas han sido esenciales para lograr la finalización de esta tesis. Debo señalar además que durante los cuatro años en que trabajamos en despachos vecinos, el profesionalismo y la dedicación de Ana López Sala me han inspirado a continuar con este trabajo.

También deseo reconocer la contribución que han realizado las instituciones a las que he estado vinculada. Por un lado, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que durante cuatro años me proporcionó una ayuda del Programa “Junta para la Ampliación de Estudios” – JAE Predoc, además de la financiación para la primera de mis tres estancias de investigación en el extranjero. Más específicamente, los agradecimientos se dirigen al Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD) por medio de su directora, Dra. Gloria Fernández-Mayoralas. Por otro lado, me gustaría expresar mi agradecimiento a la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), que me recibió y financió mi segunda estancia predoctoral. Debo una especial mención al Instituto Universitario de Estudios de la Mujer (IUEM), que aceptó mi propuesta de investigación, y a su equipo directivo. Asimismo, con mi agradecimiento a Cristina Sánchez Muñoz y a la Dra. Yolanda Guerrero Navarrete, actual y ex directoras del IUEM, quisiera hacer constar mi reconocimiento a las académicas que luchan para abrir y mantener espacios para los estudios feministas y de género en la academia española.

Hago públicos los agradecimientos a las profesoras Dubravka Zarkov (International Institute of Social Sciences, La Haya, Países Bajos), Alison Phipps y Lizzie Seal (University of Sussex, Brighton, Reino Unido) y Fanni Muñoz (Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú), por el apoyo brindado durante mis estancias en sus respectivas universidades, en los años 2011, 2013 y 2014. Además de las ayudas de movilidad proporcionadas por el CSIC y la UAM, disfruté de una beca del programa

“Santander Iberoamérica – Jóvenes Profesores Investigadores España 2013” para la realización de la tercera estancia de investigación mencionada.

Me siento asimismo enormemente agradecida a quienes hicieron posible, desde la Administración pública española, la obtención de la mayoría de los datos y documentos aquí analizados. De manera especial, quiero expresar mi gratitud a Olga Lago, del Instituto de la Mujer; Nava San Miguel, del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC); Beatriz Álvarez y Elisa Nieto, de la Unidad de Género de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), y al personal del centro de documentación del Instituto de la Mujer, de las unidades de apoyo de la AECID y del servicio de estadística del MAEC. También quiero agradecer a todas las personas contactadas y entrevistadas a lo largo de esta investigación que hayan compartido su tiempo y experiencias de manera amable y desinteresada.

Agradezco el compañerismo de Miko Stanek, Julio Pérez, Marta Seiz, Teresa Castro, Teresa Martín, Diego Fariña y demás colegas con los que he convivido en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC y que perseveran en el mundo de la investigación, pues en repetidas ocasiones me animaron a seguir.

Por último, deseo hacer algunos agradecimientos que exceden los límites académicos y profesionales:

A las amigas que Madrid me permitió conocer y que se han implicado en la elaboración de esta tesis de muchas maneras: Maíra Pizetta, Ady Povedano, Izaskun Candina, Sandra Astete, Sandra Brockson, Analú Hernández, Bea Franco, Sara Díaz, Jeanett Molina, Raquel de la Vega, Patricia Pintado, María González, Isabel Cortina, Constanza Sermeño; a las amigas que dejé en Brasil y que también acompañaron esta jornada: Fabi Vezzali, Marina Motomura, Thaís Brianezi, Luciene Antunes, Gi Modé, Laura Gianechinni, Tati Lotierzo, Priscila Delgado, Marcy Picanço, Lidia Neves y Luiza Clark;

A mi madre, Alice, sin cuyo asesoramiento informático no hubiera terminado este trabajo, y a toda mi familia, las gracias y un sincera petición de disculpas por las ausencias en los últimos años; y, a Carlos, mi amor, con quien tengo la fortuna de compartir a diario la vida de inmigrante en España, las gracias por la paciencia y la comprensión de siempre.

TESIS DOCTORAL

Violencia contra las mujeres en la cooperación internacional al desarrollo: un análisis de la política pública española (2005-2010)

Marina Martins Gonzalez

RESUMEN/ABSTRACT

El objetivo de la presente tesis, titulada *Violencia contra las mujeres en la cooperación internacional al desarrollo: un análisis de la política pública española (2005-2010)*, es estudiar cómo la política de cooperación internacional al desarrollo española ha enfocado las diferentes formas de violencia contra las mujeres, especialmente a partir de que se adoptara oficialmente la transversalidad de género en este ámbito, en 2005. Se trata de un estudio retrospectivo y, por ello, se considera la evolución en las intenciones y compromisos expresados de manera formal por los actores que definen y ejecutan esta política. Además, y de una manera novedosa en el campo de los estudios del desarrollo, en este trabajo se sistematizan y se examinan las propuestas de intervención de un amplio conjunto de acciones puestas en marcha para prevenir la violencia contra las mujeres, reducir su incidencia, atender a sus víctimas y actuar sobre las consecuencias de este problema en los diferentes contextos y países en los que opera la cooperación española al desarrollo.

Esta investigación puede entenderse como una contribución a paliar la falta de atención prestada al área en la que confluyen los estudios sobre cooperación internacional al desarrollo (específicamente en lo que dice respecto a la adopción de una perspectiva de género en ello) y aquellos sobre violencia contra las mujeres. Esta tesis doctoral posiblemente sea el primer estudio dedicado a conocer a fondo cómo se aborda la cuestión de la violencia contra las mujeres en diferentes fases de una determinada política de cooperación internacional al desarrollo. Con vistas a la consecución del objetivo propuesto, fue necesario, en primer lugar, buscar el anclaje teórico para la cuestión de la violencia contra las mujeres abordada por parte de una política gubernamental de cooperación internacional al desarrollo, explorando tres conceptos clave, todos de indudable polisemia e interdisciplinaridad: desarrollo,

cooperación internacional y violencia contra las mujeres. También fue necesario centrarse en la política española de cooperación internacional al desarrollo, con el fin de examinar tanto los factores internos como externos que influyen en la incorporación y definición de este problema en su agenda política. Finalmente, tuvo lugar el estudio de los elementos definitorios específicos de las acciones puestas en marcha sobre este problema.

El enfoque metodológico utilizado conjugó la entrevista abierta semiestructurada con la recopilación y el análisis de una diversa gama de documentos, así como la construcción y explotación de un banco de datos creado expresamente para la tesis. Fueron realizadas 51 entrevistas a actores relevantes de la política española de cooperación al desarrollo, entre los años 2013 y 2014. El análisis documental incluyó más de dos centenares de propuestas de intervención de la cooperación española al desarrollo, además de varias decenas de documentos sobre cooperación internacional, igualdad de género y violencia contra las mujeres. El proceso de recogida de las propuestas sobre violencia contra las mujeres fue arduo y lento, pero permitió la elaboración de un banco de datos inédito. Su contenido era antes prácticamente inaccesible, ya que se encontraba disperso en archivos de diferentes unidades administrativas de la cooperación española al desarrollo. Es importante destacar que la explotación de este banco de datos permitió identificar cómo las orientaciones generales de esta política se traducen en propuestas de actuación en lo que se refiere a la violencia contra las mujeres.

Otro elemento novedoso aportado por este trabajo es el uso de los marcos de interpretación aplicados al estudio de políticas públicas (*policy frame analysis*) con este tipo de documentos de la política española de cooperación al desarrollo. Se trata de una aproximación que permite tomar un conjunto de informaciones fragmentadas y dispersas por diferentes documentos y transformarlas en construcciones específicas que dan significado a la realidad a la que una política pública determinada busca responder. Esta investigación, más concretamente, parte de un examen de diferentes aspectos de los llamados marcos de 'diagnóstico' y 'pronóstico', identificados en las acciones de la cooperación española que se ocupan de la violencia contra las mujeres. El propósito de dicho examen es encontrar los enfoques predominantes de esta política pública.

ÍNDICE

ÍNDICE DE TABLAS, ILUSTRACIONES, GRÁFICOS Y ANEXOS	vi
LISTA DE ACRÓNIMOS Y SIGLAS.....	ix
PARTE I – PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	1
CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN	3
1.1. Objeto e interés de la investigación.....	7
1.2. Delimitación de la propuesta	14
1.3. Aclaraciones previas.....	19
1.4. Estructura de la tesis	22
CAPÍTULO 2 - METODOLOGÍA	27
2.1. Las entrevistas en profundidad.....	29
2.2. Análisis documental y construcción de la base de datos	33
2.3. La explotación del banco de datos Coopvidac	42
2.4. Decisiones y limitaciones metodológicas.....	49
PARTE II – MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO	53
CAPÍTULO 3 - EL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, UN FIN Y UN MEDIO A EXAMEN	55
3.1. Desarrollo: continuidad y divergencias de una idea.....	57
3.1.1. Nuevas teorías y (algunos) supuestos no tan nuevos.....	60
3.1.2. La búsqueda de alternativas.....	70
3.1.3. Género y desarrollo, una nueva apuesta de cambio.....	82
3.2. La cooperación internacional al desarrollo, sus intenciones e instituciones	85
3.2.1 La cooperación internacional al desarrollo como política pública.....	86

3.2.2. Ayuda al desarrollo y criterios oficiales de contabilización.....	90
3.2.3. ¿Cómo medir la atención a la violencia contra las mujeres en los flujos de ayuda internacional?	96
CAPÍTULO 4 – LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES BAJO ATENCIÓN INTERNACIONAL: TEORÍAS Y MÉTODOS	99
4.1. Acercamiento conceptual y algunas tipologías	101
4.2. Supuestos diferentes, denominaciones diversas.....	111
4.2.1. Violencia familiar y violencia patriarcal: dos enfoques contrapuestos	112
4.2.2. Algunas consideraciones sobre teorías y métodos	119
4.2.3. La socialización violenta y otros elementos interpretativos.....	122
4.3. Un problema público y mundial.....	124
4.3.1. Violencia sexual: nombrar, definir, ampliar.....	130
4.3.2. Otras categorías de alcance internacional.....	134
4.4. La violencia de género a debate en España.....	138
CAPÍTULO 5 - LÍMITES Y POSIBILIDADES: LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LA ACCIÓN DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO	145
5.1. La violencia contra las mujeres en la agenda del desarrollo	147
5.1.1. Consensos y marginación	149
5.1.2. Mediciones del desarrollo.....	155
5.2. Otros debates abiertos de los enfoques GED	159
5.2.1. Los vínculos con la lucha contra la pobreza.....	159
5.2.2. Masculinidades y la ‘domesticación’ de la violencia	160
5.2.3. Cuando el desarrollo (no) descubre la sexualidad	164
5.3. La ‘culturalización’ de la violencia como límite para una acción global ...	167
5.3.1. Adjetivos y esencialismos	168
5.3.2. Reflexión final sobre una lucha global	170
PARTE III – ANÁLISIS DE LA POLÍTICA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO DE ESPAÑA.....	173
CAPÍTULO 6 - EL LUGAR DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA AL DESARROLLO.....	175
6.1. De país receptor de ayuda internacional a donante	177
6.2. Primero las mujeres, luego el género, ¿y sólo entonces la violencia?	183

6.2.1. Primeros momentos, escasos compromisos	190
6.2.2. El enfoque GED entra en escena	193
6.2.3. Las negociaciones bilaterales	203
6.3. Hechos y percepciones sobre la atención a la violencia contra las mujeres en la cooperación española al desarrollo	205
6.3.1. Una mirada a la financiación destinada a la igualdad de género y acciones sobre violencia	209
6.3.2. Las acciones transversales y otros datos de interés	220
6.3.3. Multilateralismo y ‘diplomacia de género’	222
6.4. Algunas consideraciones finales	227
 CAPÍTULO 7 - ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS: ENFOQUES DE ACTUACIÓN RESPECTO LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	 231
7.1. Panorama general de las intervenciones relacionadas con la violencia contra las mujeres.....	233
7.2. Tres enfoques diferentes, pero no contrapuestos.....	238
7.2.1. El enfoque feminista y algunos de sus matices	240
7.2.2. El enfoque que naturaliza la violencia contra las mujeres.....	255
7.2.3. El enfoque indiferente en cuanto al género	261
7.3. Reflexiones sobre conceptos y prioridades ausentes	267
 CAPÍTULO 8 - CONCLUSIONES.....	 273
 EPÍLOGO	 285
 ANEXOS	 293
 BIBLIOGRAFÍA	 349

ÍNDICE DE TABLAS, ILUSTRACIONES, GRÁFICOS Y ANEXOS

Tabla 1. Perfiles y adscripción institucional de personas entrevistadas	32
Tabla 2. Perfiles y adscripción institucional de personas entrevistadas (Perú)	33
Ilustración 1. Proceso de construcción del corpus documental cuyo contenido conforma el banco de datos Coopvidac	38
Tabla 3. Intervenciones identificadas con documentación completa	40
Tabla 4. Intervenciones identificadas con documentación insuficiente	40
Tabla 5. Intervenciones identificadas sin documentación recibida	40
Tabla 6. Preguntas-guía aplicadas a documentos para la elaboración de Coopvidac....	46
Tabla 7. Otros contactos realizados a lo largo de la investigación.....	51
Tabla 8. Elementos para los significados del concepto de violencia.....	108
Ilustración 2. Planificación y procedimientos administrativos de la cooperación española al desarrollo	189
Gráfico 1. Evolución de la AOD neta estatal (total, distribuida sectorialmente y sectores relacionados con la igualdad de género), período 2001 a 2010.....	211
Gráfico 2. Principales países receptores de AOD neta, período 2005 a 2010.	213
Gráfico 3. Principales países receptores de AOD en sectores relacionados a la igualdad de género, período 2005 a 2010.....	213
Gráfico 4. AOD-VCM, según año y tipo de flujo (nivel estatal).	218
Gráfico 5. AOD-VCM, según año y región geográfica (nivel estatal).....	218
Gráfico 6. Principales receptores de AOD-VCM, según tipo de flujo (nivel estatal, acumulado del período 2005-2010).....	219
Gráfico 7. AOD-VCM, según año y sectores CAD (España, nivel estatal).	219
Tabla 9. Distribución de la AOD bruta española canalizada a través de UNIFEM, INSTRAW, Naciones Unidas y OMUDES (millones €) (2004-2010).	224

Ilustración 3. 50 palabras más utilizadas para describir las violencias contra las mujeres abordadas por acciones de la cooperación española al desarrollo.....	234
Tabla 10. Distribución del número de intervenciones analizadas, según enfoques adoptados y tipo principal de violencia abordada	237
Anexo 1. Guión inicial para la realización de las entrevistas.....	294
Anexo 2. Documentos de la cooperación española al desarrollo analizados.	297
Anexo 3. Referencias a violencia contra las mujeres en documentos geográficos (I) .	298
Anexo 4. Referencias a violencia contra las mujeres en documentos geográficos (II)	299
Anexo 5. Referencias a violencia contra las mujeres en documentos geográficos (III)	300
Anexo 6. Referencias a violencia contra las mujeres en documentos geográficos (IV)	304
Anexo 7. Referencias a violencia contra las mujeres en documentos geográficos (V).	306
Anexo 8. Expresiones relacionadas con la violencia contra las mujeres en las actas de Comisiones Mixtas de Cooperación.	308
Anexo 9. Listado de Códigos CAD y CRS para clasificar la AOD (resumen).	309
Anexo 10. Guión para codificación de objetivos, estrategias y prioridades del Marco del Pronóstico	313
Anexo 11. Acciones relacionadas con la violencia contra las mujeres, durante I Plan Director (según año y unidad financiadora)	316
Anexo 12. Intervenciones con documentación recibida y analizada (según unidad financiadora e instrumento de cooperación).....	319
Anexo 13. Intervenciones con documentación recibida e insuficiente (según unidad financiadora e instrumento de cooperación).....	339
Anexo 14. Intervenciones sin documentación recibida (según año, unidad financiadora instrumento de cooperación utilizado)	343

LISTA DE ACRÓNIMOS Y SIGLAS

ACNUDH	Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
ACNUR	Agencia de la ONU para los Refugiados
AECI	Agencia Española de Cooperación Internacional [hasta el año 2007]
AECID	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
AGE	Administración General del Estado
AOD	Ayuda Oficial al Desarrollo
AOD-VCM	Ayuda Oficial al Desarrollo destinada a intervenciones relacionadas con la violencia contra las mujeres
AP	Acción Prioritaria
CAD	Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. En inglés, <i>Development Assistance Committee (DAC)</i>
CAP	Convocatoria Abierta y Permanente [programa de subvenciones para actividades de cooperación al desarrollo]
Caricom	Comunidad de Estados del Caribe
CEDAW	Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, por las iniciales en inglés (<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women</i>)
CEPAL	Comisión Económica de las Naciones Unidas para la América Latina
Coopvidac	Banco de Datos de las proposiciones de la cooperación española al desarrollo sobre violencia contra las mujeres
CRS	Sistema de Reporte Sectorial del CAD para los desembolsos de AOD, por sus iniciales en inglés (<i>Creditor Reporting System</i>)
CTS	Escala de Táctica de Conflictos, por las iniciales en inglés (<i>Conflict Tactics Scale</i>)
DEP	Documento de Estrategia País
DGPOLDE	Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo [actualmente, División de Evaluación de Políticas para el Desarrollo y Gestión del Conocimiento en la Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo, SECIPI, MAEC]
EML	Enfoque del Marco Lógico
FAD	Fondo de Ayuda al Desarrollo
FF	Fondo Fiduciario
FIEM	Fondo para la Internacionalización de la Empresa

FIIAPP	Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas
FMI	Fondo Monetario Internacional
FONPRODE	Fondo para la Promoción del Desarrollo
GED	(Enfoque) Género en Desarrollo. En inglés, <i>Gender and Development approach (GAD)</i>
IDG	Índice de Desarrollo relativo al Género
IDG	Índice de Desarrollo de Género
IDH	Índice de Desarrollo Humano
IM	Instituto de la Mujer
IPG	Índice de Potenciación de Género
INSTRAW	Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la promoción de la Mujer, por las iniciales en inglés (<i>International Research and Training Institute for the Advancement of Women</i>)
LE	Línea estratégica
MAE	Ministerio de Asuntos Exteriores [hasta el año 2004]
MAEC	Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
MAP	Marco de Asociación País
MED	(Enfoque) Mujeres en Desarrollo. En inglés, <i>Women in the Development approach (WID)</i>
MGF	Mutilación Genital Femenina
NNUU	Naciones Unidas
OAH	Oficina de Acción Humanitaria
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
ODM	Objetivos de Desarrollo del Milenio
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
OE	Objetivo Estratégico
OEA	Organización de los Estados Americanos
OEI	Organización de los Estados Iberoamericanos
OH	Objetivo Horizontal
OIJ	Organización Iberoamericana de la Juventud
OIT	Organización Internacional del Trabajo
OMUDES	Organismos Multilaterales de Desarrollo
OMS	Organización Mundial de la Salud
ONG	Organización no Gubernamental

ONGD	Organización no Gubernamental para el Desarrollo
ONU	Organización de las Naciones Unidas
ONU Mujeres	Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer
OOII	Organismos internacionales
OTC	Oficina Técnica de Cooperación
PACI	Plan Anual de Cooperación Internacional
PAE	Plan de Actuación Especial
PIFTE	Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
SEAE	Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores
SECI	Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional
SECIPI	Secretaría de Estado para Cooperación Internacional y para Iberoamérica
SEGIB	Secretaría General Iberoamericana
SICA	Sistema de la Integración Centroamericana
SWAP	Apoyo Presupuestario Sectorial, por las iniciales en inglés (<i>Sector Wide Approach</i>)
UNFPA	Fondo de Población de las Naciones Unidas
UNICEF	Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
UNIFEM	Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer

PARTE I – PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN

Capítulo 1 - INTRODUCCIÓN

En objetivo de la presente tesis, titulada *Violencia contra las mujeres en la cooperación internacional al desarrollo: un análisis de la política pública española (2005-2010)*, es estudiar cómo la política de cooperación internacional al desarrollo española ha enfocado las diferentes formas de violencia contra las mujeres, especialmente a partir de que se adoptara oficialmente la transversalidad de género en este ámbito, en 2005. Se trata de un estudio retrospectivo y, por ello, se considera la evolución en las intenciones y compromisos expresados de manera formal por los actores que definen y ejecutan esta política. Además, y de una manera novedosa en el campo de los estudios del desarrollo, en este trabajo se sistematizan y se examinan las propuestas de intervención de un amplio conjunto de acciones puestas en marcha para prevenir la violencia contra las mujeres, reducir su incidencia, atender a sus víctimas y actuar sobre las consecuencias de este problema en los diferentes contextos y países en los que opera la cooperación española al desarrollo.

No es exagerado afirmar que el fenómeno de la violencia contra las mujeres se muestra en prácticamente todos los contextos y sociedades, sean o no consideradas éstas desarrolladas. Según señala un reciente informe de ONU Mujeres, “todas las regiones tienen niveles inaceptablemente altos de violencia contra las mujeres”, precisando que “el 35% de las mujeres de todo el mundo ha sido víctima física o sexual por parte de su pareja o de violencia sexual por parte de personas distintas de su pareja a lo largo de su vida” (ONU Mujeres 2015, 21). La notoriedad política y social que ha adquirido la cuestión de la violencia contra las mujeres, sin embargo, no es fortuita. Los movimientos feministas en diferentes partes del planeta ya llevan algunas décadas denunciando la existencia de este problema, nombrando a sus diferentes formas y reivindicando la atención a las víctimas, la prevención de las causas y la aplicación de condenas a los causantes.

No obstante, la consideración de la violencia contra las mujeres como una cuestión significativa en la promoción del desarrollo es más reciente, aunque durante al menos los veinte últimos años, las instituciones dedicadas a la cooperación internacional al desarrollo han sido llamadas a actuar contra ella. En el texto de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, aprobado en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, en 1993, ya se instaba al fomento de “la cooperación internacional y regional con miras a definir estrategias

regionales para combatir la violencia, intercambiar experiencias y financiar programas relacionados con la eliminación de la violencia contra la mujer” (ONU 1993, 5).

Por un lado, ha contribuido a que se preste una mayor atención a este problema la encomienda de la Plataforma de Acción de Beijing, aprobada durante la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995), cuyo fin era implementar una estrategia dual de promoción de la igualdad de género –combinando la puesta en marcha de intervenciones específicas en materia de género y promoción de los derechos de las mujeres, y la transversalidad del enfoque de género (*gender mainstreaming*)–. Según esta perspectiva, se reivindica que el desarrollo tenga una visión integral de la vida de mujeres y hombres y sus relaciones sociales, lo cual significaría tener en consideración la desigualdad de género en cualquiera de los sectores de intervención de la cooperación internacional y a la vez proponer la actuación sobre los elementos específicos que determinan la desigualdad de género. Dentro de esta mirada, que debe ser sistémica y transversal, la violencia basada en la desigualdad y discriminación de género se convierte en una cuestión de trascendental importancia. Por otro lado, se están poniendo en entredicho los resultados logrados con la propuesta del *gender mainstreaming*, acusándose un uso instrumental y tecnificado del concepto de género en este ámbito.

Todo ello contribuiría a que, en la mayor parte de los casos, las agencias, organismos internacionales y demás actores de la cooperación al desarrollo tuvieran una visión reducida y simplificada de la cuestión de la violencia contra las mujeres. Pese a esta constatación, es necesario reconocer la escasez de estudios que examinan a fondo y las respuestas al problema que se han llevado finalmente a cabo, más allá de los compromisos formales y los planteamientos abstractos formulados por los actores.

En España, la transversalidad del enfoque de género aún tardaría otros diez años desde la Conferencia de Beijing en llegar a la cooperación al desarrollo, quedando oficialmente reflejada en esta política en el momento en el que se empezó a buscar un mayor alineamiento con los compromisos internacionales en este ámbito, al inicio de la primera legislatura del socialista José Luís Rodríguez Zapatero (2004-2008). También en ese momento se intentaba impulsar a nivel interno nuevas acciones de promoción de la igualdad de género con la puesta en marcha de una serie de mecanismos institucionales y cambios legislativos para abordar la violencia de género y las diferentes manifestaciones de la discriminación y la desigualdad entre mujeres y hombres. Es cierto que prácticamente desde el inicio de la transición política hacia la democracia, se venían implementando medidas de promoción de igualdad de

oportunidades en los ámbitos laboral, político y económico, gracias en gran parte a la incorporación de demandas de organizaciones, activistas y políticas feministas en el proceso de reorganización del Estado tras el fin del período franquista (Astelarra 2005). Sin embargo, con la legislatura que se inició en 2004, este tipo de acciones gana un protagonismo renovado. En este contexto se aprobaron en 2004 la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género y, poco más de dos años después, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, en la que se trasladaban a la normativa española tres directivas europeas sobre la igualdad de trato y se establecían medidas para corregir diversas formas de discriminación por sexo en diferentes ámbitos de los sectores público y privado. Esta última ley, a diferencia de la relativa a las medidas contra la violencia de género, prevé la incorporación de disposiciones específicas a la política española de cooperación internacional al desarrollo, especialmente para otorgar un tratamiento transversal y específico a la igualdad entre mujeres y hombres en todas sus actuaciones, herramientas y documentos.

1.1. Objeto e interés de la investigación

En España, un aspecto bastante explorado por la literatura sobre violencia contra las mujeres es la discusión epistemológica respecto a la adecuación teórica y política de los términos utilizados para denominarla. Autoras como de Miguel (2005, 2008) y Puleo (2008) hacen una defensa explícita del uso de la expresión ‘violencia de género’, por considerar que logra poner de relieve la existencia y construcción de relaciones desiguales de género y la posibilidad de cambiarlas. Marugán Pintos (2012), por otro lado, entiende que, pese a un desplazamiento discursivo en el debate público y mediático en España desde el término ‘violencia doméstica/familiar’ a ‘violencia de género’, se sigue ocultando la amplitud de las relaciones de dominación masculina en las que se basan este tipo de actos de violencia. Según esta visión, los aspectos más visibles de la violencia de género han terminado por circunscribirla solamente a uno de sus ámbitos de ocurrencia, impidiendo una consideración más amplia sobre las causas de este problema. El posicionamiento de Valcárcel (2009) también es contrario al uso de esta expresión, ya que considera que el término violencia de género oculta quienes son las víctimas y quiénes son los agresores.

La cuestión de hasta qué punto la adopción de la expresión violencia de género reduce, amplía o incluso confunde el entendimiento de qué constituye la violencia

contra las mujeres tiene también mucha importancia cuando se examinan los trabajos dirigidos a la recogida de datos de incidencia y prevalencia de este fenómeno en la población española. Desde la promulgación del nuevo marco legislativo al que se ha hecho referencia, han proliferado las publicaciones e investigaciones al respecto, una tendencia que Arranz Lozano (2015) atribuye a la injerencia política de organismos estatales impulsores de políticas sobre igualdad de género. A partir de un metaanálisis de decenas de investigaciones publicadas entre los años de 2005 y 2012, esta autora muestra la existencia de un control directo del Estado sobre los estudios empíricos en este campo e indica que la mayoría de ellos utilizan como armazón teórico, única y acríticamente, la definición de violencia de género dada por la Ley Orgánica 1/2004 mencionada anteriormente. Hay que destacar, además, que otros análisis sobre instrumentos de recogida de datos estadísticos utilizados en las últimas décadas ya habían puesto de manifiesto el exiguo rigor metodológico del que adolecen (Pérez Díaz y MacInnes 2007; Osborne 2008).

Todo esto explicaría por qué cualquier forma de violencia contra las mujeres diferente de aquella que se ejerce en el ámbito de pareja se consideran escasamente en las investigaciones empíricas de este campo. Dos excepciones son un análisis exploratorio sobre los fenómenos del tráfico y la trata de mujeres en España (López Sala *et al.* 2011) y otro análisis en el que se define como grupo de estudio una muestra de mujeres, migrantes y españolas, que ejercen la prostitución y que han sufrido malos tratos en la pareja (Rodríguez Martínez 2015). La prevalencia de una visión poco crítica del debate público español sobre la violencia de género también contribuye a entender por qué raramente se menciona el exiguo reconocimiento de la diversa identidad de las mujeres. En este sentido, hay que mencionar la ausencia de voces de migrantes y gitanas en las reivindicaciones de las organizaciones de mujeres y movimientos feministas apuntada por Sandu (2013).

Es interesante destacar algunas investigaciones que comparan la experiencia española con la de otros países del entorno europeo. Uno de los referentes en este sentido es el trabajo de Bustelo, López y Platero (2007), que integra un estudio más amplio sobre políticas de igualdad en Europa y seis países europeos, incluyendo España (Bustelo y Lombardo 2007; Lombardo 2008), y a cuya propuesta analítica se volverá a hacer referencia más adelante por la inspiración metodológica que ha supuesto para este trabajo. A partir del análisis de un amplio conjunto de textos políticos y legales, las autoras observan que en España se interpreta la violencia contra las mujeres como una forma de desigualdad de género más frecuentemente que en otros países analizados. En

otro estudio comparativo, pero con un enfoque diacrónico, Roggeband (2012) contrasta la evolución de las respuestas políticas a la cuestión de la violencia doméstica/violencia de género desarrolladas en los Países Bajos y en España, atribuyendo la dinámica observada en el contexto español a una apuesta del movimiento feminista por interactuar con el Estado y su aparato judicial. En un trabajo anterior, la autora había analizado el intercambio y la adaptación de ideas adoptadas por organizaciones de mujeres de los dos países en las respuestas que proponían contra la violencia sexual (Roggeband 2004).

En todo caso, ninguna de las investigaciones mencionadas anteriormente ha tenido en consideración de manera específica el ámbito de actuación de la política pública de cooperación internacional al desarrollo o de alguno de sus actores más relevantes.

En el otro campo de estudio de interés para esta investigación, el de los estudios sobre el desarrollo, los análisis cuantitativos de la distribución de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de España en los últimos años dedican escaso espacio a aspectos relacionados con la igualdad de género. Ejemplos de esta exigua atención pueden encontrarse en Riquelme (2000), Gómez Gil (2003), Teijo García (2009a), Larrú (2010) y Larrú y Tezanos Vázquez (2012).

Los trabajos que se centran de manera prioritaria o exclusiva en las cuestiones relacionadas con el género, en general abordan aspectos descriptivos del proceso de institucionalización y de la evolución desde el enfoque Mujeres en Desarrollo (MED) al enfoque de Género en Desarrollo (GED), tanto en los períodos iniciales de esta política pública (Galvani Foresi 2000, 2001; Cirujano Campano 2005; Rodríguez Manzano 2005; Perona Larraz 2006), como en los años más recientes (San Miguel Abad 2009; Tomás Pérez 2010). Para el período inmediatamente posterior a la adopción de la transversalidad de género en 2005, existen también recomendaciones específicas para incluir esta perspectiva en ámbitos como la ayuda humanitaria (García Beltrán y Sanz Velasco 2009), la cooperación universitaria (Molina Bayón 2009; Murguialday Martínez 2009) o los niveles descentralizados de esta política pública (Pérez Baldovinos 2008)¹.

¹ Hay que señalar que muchos de los trabajos de tipo descriptivo sobre la incorporación de la perspectiva de género en esta política tienen como autoras a integrantes o exintegrantes de los equipos técnicos de organismos públicos dedicados a la cooperación internacional y al desarrollo de políticas de promoción de la igualdad de género, como la AECID, el MAEC y el Instituto de la Mujer.

Existen, asimismo, investigaciones que proponen mejoras en la actuación de la cooperación española al desarrollo –especialmente en la de sus dos principales organismos estatales, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC)–, en temas como la gestión de la información y género (Lagunas 2009) o la incorporación de la perspectiva de género en procedimientos, metodologías y prácticas de evaluación (Espinosa Fajardo 2011).

En el contexto de una crítica más amplia del sistema de cooperación internacional, hay trabajos en España que, desde la antropología sobre el desarrollo, se han dedicado a estudiar cuestiones de género, pero ninguno aborda programas dirigidos contra la violencia contra las mujeres de manera específica (Martínez Mauri y Larrea Killinger 2010), hasta donde hemos podido comprobar. El artículo de Gómez-Quintero y Franco Martínez (2012) se acerca a una perspectiva más crítica sobre el funcionamiento de la cooperación española al desarrollo en lo que se refiere a la igualdad de género, pero se dirige fundamentalmente a la definición de esta cuestión como una prioridad transversal en los mecanismos de funcionamiento de esta política pública. Los autores consideran esta inclusión inadecuada, expresando para ello argumentos de las teorías feministas posmodernas que, sin embargo, no son utilizadas para cuestionar la lógica de la cooperación internacional en su conjunto u otros objetivos o prioridades de actuación de esta política.

Otro ejemplo de la escasa atención que se ha venido prestando al objeto de investigación de esta tesis es que el examen de una forma específica de violencia contra las mujeres en la agenda internacional de España es extremadamente raro. El trabajo de Teresi (2008) es uno de los pocos que se aparta de esta tendencia. La autora propone analizar las iniciativas para luchar contra la trata de personas con fines de explotación sexual, especialmente de mujeres, en el ámbito de las relaciones bilaterales hispano-brasileñas. En este contexto, recomienda la puesta en marcha de acciones de cooperación al desarrollo centradas en este país sudamericano (de escasa priorización en la cooperación española) como una manera de incrementar la colaboración entre entidades de ambos países en lo que se refiere a la atención a las víctimas brasileñas que llegan a territorio español.

A grandes rasgos, ninguno de los estudios mencionados que analizan la adopción del enfoque de género en la cooperación española al desarrollo hace referencia a la aplicación de conceptos específicos en las propuestas de intervención que se financian en este campo. Evidentemente, la opacidad de las instituciones dedicadas a la

cooperación internacional y la falta de mecanismos para rastrear temas transversales con múltiples denominaciones, como la violencia contra las mujeres, contribuyen a que este no sea un terreno especialmente propicio para la investigación académica².

No es extraño, por lo tanto, que pese a un innegable aumento durante los últimos años de los estudios sobre la política pública española contra la violencia de género y sobre la dimensión de género presente en la cooperación internacional al desarrollo, no se encuentran, hasta el momento, investigaciones que propongan una visión que los interrelacione. Se podría llegar a suponer, erróneamente, que son campos sin vinculaciones teóricas o empíricas de interés, ya que incluso a nivel internacional es raro encontrar investigaciones académicas que los relacionen. Un artículo sobre las políticas suecas de cooperación al desarrollo en género y violencia contra las mujeres constituye una excepción. Las autoras (investigadoras de centros especializados en salud pública y clínica médica en aquel país) reclaman que los resultados de investigaciones en el campo de la salud pública sobre violencia de género en contexto de la pareja, así como de los estudios de género y de las demandas de los movimientos sociales locales, deben estar contemplados en los documentos de la política de cooperación al desarrollo (Öhman y Emmelin 2014).

Lo cierto es que en el campo de los estudios de género es de fundamental importancia conocer y entender lo que ocurre en las políticas y prácticas de cooperación internacional al desarrollo, más aún si se dedican a una cuestión de tanta relevancia. La cooperación internacional puede influir el trabajo realizado en el campo de la violencia contra las mujeres, su prevención y atención a víctimas a diferentes niveles. Indudablemente, destinar recursos financieros a organizaciones feministas y de mujeres es una de las maneras de hacerlo, aunque se considera casi siempre insuficiente o poco duradero (Riordan 2000; Bustinduy Amador 2009). En diferentes países, muchas organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la defensa de los derechos de las mujeres reciben o desearían recibir recursos y apoyo de agencias y organismos de la

² Diferentes organizaciones no gubernamentales publican periódicamente estudios sobre la actuación de la cooperación española al desarrollo en sectores de su interés, como salud, derechos sexuales y reproductivos, ayuda humanitaria y educación, prevaleciendo los análisis cuantitativos sobre la distribución de la ayuda oficial al desarrollo y la elaboración de recomendaciones (Mediano, Medina y López-Zuriaga 2011; Arancibia Tapia *et al.* 2012; Rey Marcos y Núñez Villaverde 2012). Más escasos son los estudios sobre cuestiones que no se identifican fácilmente en el conjunto de acciones financiadas y que pueden estar contempladas en diferentes sectores y objetivos de la política de cooperación, como la violencia contra las mujeres. A ese respecto, cabe mencionar un estudio que se centra en la discapacidad en el ámbito de la cooperación española al desarrollo, cuya autora hace hincapié en las dificultades para realizarlo debido a la escasez y la dispersión de información (Martínez Ríos 2012, 33).

cooperación internacional, aunque también existen organizaciones que prefieren mantenerse independientes a la hora de realizar sus intervenciones. La disponibilidad de recursos y la priorización de la violencia de género en la pareja u otra forma específica de violencia por parte de una determinada agencia internacional pueden, asimismo, ser factores que actúan en la transnacionalización de la preocupación por la violencia contra las mujeres, incentivando que organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil presten más atención a estas cuestiones a nivel nacional (Zhang 2009), o reforzando iniciativas ya en marcha en un diálogo con los actores locales (Öhman y Emmelin 2014).

Por todo lo anterior, esta investigación puede entenderse como una contribución a paliar la falta de atención prestada al área en la que confluyen los estudios sobre cooperación internacional al desarrollo (específicamente en lo que dice respecto a la adopción de una perspectiva de género en ello) y aquellos sobre violencia contra las mujeres. Esta tesis doctoral posiblemente sea el primer estudio dedicado a conocer a fondo cómo se aborda la cuestión de la violencia contra las mujeres en diferentes fases de una determinada política de cooperación internacional al desarrollo. Teniendo en cuenta la diversidad de concepciones y soluciones propuestas para este problema, es necesario examinar de manera detallada cómo se ha planteado en el ámbito de esta política pública en España.

Con vistas a la consecución del objetivo propuesto, es oportuno, en primer lugar, buscar el anclaje teórico para la cuestión de la violencia contra las mujeres abordada por parte de una política gubernamental de cooperación internacional al desarrollo. En este sentido, es fundamental la exploración teórica de tres conceptos clave, todos de indudable polisemia e interdisciplinaridad: desarrollo, cooperación internacional y violencia contra las mujeres, así como las posibles vinculaciones existentes entre ellos. También es necesario centrarse en la política española de cooperación internacional al desarrollo, con el fin de examinar tanto los factores internos como externos que influyen en la incorporación y definición de este problema en su agenda política. Finalmente, cabe estudiar los elementos definitorios específicos de las acciones puestas en marcha sobre este problema.

De este modo, las **preguntas orientativas** a las que se trata de responder a lo largo del trabajo son las siguientes:

1) ¿Cómo se aborda el problema de la violencia contra las mujeres en el campo de la cooperación internacional al desarrollo?

1.1) ¿Qué dice la literatura sobre el enfoque Género en Desarrollo respecto al trato que las instituciones de desarrollo deben a las diferentes formas de violencia contra las mujeres?

2) En relación a la política pública española de cooperación internacional al desarrollo, ¿cómo se incorpora y cómo se define la atención a las distintas formas de violencia contra las mujeres?

2.1) ¿Qué papel tienen las políticas estatales españolas de igualdad y contra la violencia de género?

2.2) ¿Qué papel tiene el contexto internacional en la promoción de la igualdad y de la lucha contra la violencia contra las mujeres?

3) ¿Cómo se caracteriza el conjunto de acciones de la cooperación española al desarrollo internacional que abordan la violencia contra las mujeres?

3.1) Frente a la diversidad de perspectivas sobre la violencia contra las mujeres, ¿cómo se define el/los enfoque(s) existente(s) en las orientaciones y acciones de la política española de cooperación internacional al desarrollo? ¿A qué responde(n)?

3.2) Considerando la existencia de múltiples organismos, instrumentos y modalidades de cooperación al desarrollo en la política pública española, ¿qué diferencias y similitudes se pueden encontrar en las acciones mencionadas y entre las orientaciones de planificación y de la ejecución de las acciones?

3.3) ¿Cómo se caracteriza la distribución geográfica en la puesta en marcha de las acciones mencionadas?

Asimismo, sin adelantar lo que se expondrá en detalle en el capítulo metodológico, hay que señalar que el **enfoque metodológico** utilizado conjuga la entrevista abierta semiestructurada con la recopilación y el análisis de una diversa gama de documentos, así como la construcción y explotación de un banco de datos creado expresamente para la tesis. Fueron realizadas 51 entrevistas a actores relevantes de la política española de cooperación al desarrollo, entre los años 2013 y 2014. El análisis documental incluyó más de dos centenares de propuestas de intervención de la cooperación española al desarrollo, además de varias decenas de documentos sobre cooperación internacional, igualdad de género y violencia contra las mujeres. El proceso de recogida de las propuestas sobre violencia contra las mujeres fue arduo y lento, pero permitió la elaboración de un banco de datos inédito. Su contenido era antes

prácticamente inaccesible, ya que se encontraba disperso en archivos de diferentes unidades administrativas de la cooperación española al desarrollo. Es importante destacar que la explotación de este banco de datos permitió identificar cómo las orientaciones generales de esta política se traducen en propuestas de actuación en lo que se refiere a la violencia contra las mujeres.

Otro elemento novedoso aportado por este trabajo es el uso de los marcos de interpretación aplicados al estudio de políticas públicas (*policy frame analysis*) con este tipo de documentos de la política española de cooperación al desarrollo. Como se expondrá a continuación, se trata de una aproximación que permite tomar un conjunto de informaciones fragmentadas y dispersas por diferentes documentos y transformarlas en construcciones específicas que dan significado a la realidad a la que una política pública determinada busca responder. Esta investigación, más concretamente, parte de un examen de diferentes aspectos de los llamados marcos de ‘diagnóstico’ y ‘pronóstico’, identificados en las acciones de la cooperación española que se ocupan de la violencia contra las mujeres. El propósito de dicho examen es encontrar los enfoques predominantes de esta política pública.

Para el desarrollo de esta tesis, se partió de determinados **supuestos** sobre el objeto de estudio. La propuesta de investigación no tendría razón de ser si no pensáramos que la violencia contra las mujeres tiene suficiente relevancia para ser considerada específicamente, como una de las prioridades de actuación de la cooperación internacional al desarrollo. Antes de conocer los datos y documentos a fondo, ya se podía intuir que los actores de la política española, en el período considerado, la habían asumido como un objetivo destacable hacia el cual dirigir esfuerzos y recursos, por encima de otras temáticas que compiten por recursos y atención en este ámbito. Mientras fraguábamos la propuesta de esta investigación, no nos pasó desapercibida la reiterada presencia del tema en la página de noticias institucionales de la AECID o en eventos organizados por diferentes organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD), en su mayoría apoyadas por la AECID, el Instituto de la Mujer y otros organismos públicos vinculados a la cooperación española al desarrollo.

1.2. Delimitación de la propuesta

Este trabajo aborda una temática específica dentro de una acción gubernamental más amplia: la cooperación al desarrollo de un país que actúa como ‘donante’ en el

‘sistema de ayuda’ internacional (Sogge 2002). Como se mostrará en el repaso teórico-conceptual sobre el tema del desarrollo elaborado para esta investigación, existen numerosas perspectivas que se muestran críticas con la lógica y la finalidad de la cooperación al desarrollo, sus instituciones y sus mecanismos. Al tiempo que se reconoce la importancia que los debates epistemológicos tienen para comprender el modelo sobre el cual se sostienen la acción y los estudios sobre el desarrollo (Sánchez Pérez 2010), esta investigación entiende la cooperación al desarrollo como algo relevante en la acción gubernamental y toma una parte específica de ella como su objeto de estudio.

En este sentido, se entiende la cooperación al desarrollo española como una **política pública** de carácter interno, aunque relacionada con el ámbito de la acción exterior del país, en la cual se hacen presentes otras políticas, como las de seguridad y defensa, lucha contra el terrorismo o promoción comercial y financiera. Además, se da prioridad a algunas de sus fases (dentro de un planteamiento descriptivo, no teórico, sobre el ciclo de política pública) al examinar la incorporación de la violencia contra las mujeres en esta política. La política pública de cooperación al desarrollo de España, como en el caso de la mayoría de los países donantes, es reciente si se compara con otros sectores de la administración pública (Ayuso 1998, 166). El arranque de su institucionalización puede identificarse con el ingreso del país en el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a principios de la década de 1990.

Los vínculos con el entorno de las relaciones internacionales son evidentes, pero este estudio se centra principalmente en los aspectos internos de esta política pública y no contempla examinar la perspectiva de los países ‘receptores’ de la ayuda. Así, aunque las intervenciones de España finalmente se desarrollen en terceros países, el objeto de esta investigación será solo entender cómo se proponen, aprueban y ponen en marcha estas intervenciones. Tampoco tenemos la pretensión de analizar la política pública de cooperación internacional al desarrollo en todos sus aspectos, actores, instituciones o mecanismos de funcionamiento, sino más bien adoptar una perspectiva selectiva y profundizar en el entendimiento de cómo se aborda la violencia contra las mujeres en los diferentes sectores, estrategias y acciones de sus principales actores.

De acuerdo con este planteamiento general, se presta especial atención a algunas de las **fases de la política** española de cooperación internacional al desarrollo. En el campo del análisis de las políticas públicas, es relativamente común describirlas simplifícadamente como una acción gubernamental encaminada a la solución de un

problema encontrado en la sociedad. Esta acción puede dividirse en diferentes fases, actividades y productos para su análisis (Grau Creus 2002). En esta conceptualización, una política pública empieza por la identificación de un problema público que debe ser solucionado; sigue con la transformación de este problema en un objeto de atención por parte de las autoridades político-administrativas; continúa con la planificación y la ejecución de actividades con el objetivo de solucionar el problema; y termina con la evaluación de los resultados de las acciones emprendidas. Este esquema de fases evidencia que cada una de ellas posee características y actividades específicas, lo que lleva a entender una política pública como un ciclo continuamente abierto a la retroalimentación entre estas etapas (Mény y Thoenig 1992; Knoepfel *et al.* 2007).

Aunque esta visión de la política pública como un proceso ordenado, lineal y cíclico es criticada por su artificialidad e inexactitud (las desviaciones y superposiciones entre las fases son recurrentes) y por su fragilidad teórica (en el sentido de que privilegia aspectos descriptivos en detrimento de modelos causales (Jenkins-Smith y Sabatier 1993)), tiene una importante utilidad metodológica en el examen de procesos políticos específicos. Esta perspectiva muestra una pauta clara de lo que puede ser observado, hace hincapié tanto en aspectos estructurales como en procesos y no deja de lado los resultados que estas políticas pueden alcanzar. En este sentido, al no existir trabajos anteriores dedicados al tema de esta investigación, se consideró que una contribución significativa de nuestro trabajo sería explorar las llamadas etapas iniciales de la política pública de cooperación española al desarrollo en lo que se refiere a la atención a la violencia contra las mujeres –identificación, formulación y toma de decisión, para Mény y Thoenig; emergencia del problema, *agenda-setting* y programación, para Knoepfel, Larrue *et al.*–.

Los siguientes capítulos tratarán de describir y explicar el surgimiento e inclusión del problema de las diferentes formas de violencia contra las mujeres en la agenda política de la cooperación al desarrollo, la elaboración de soluciones por parte de los actores de esta política y la decisión de las autoridades (reflejada en las acciones financiadas). Asimismo, la fase de ejecución o implementación, considerada una de las más complejas de los ciclos de las políticas públicas, tiene considerable importancia en esta investigación, pese a que no se examina en tanto detalle como las demás. A partir de un análisis de las propuestas para la financiación de determinadas acciones, se ha podido obtener información sobre aspectos propios de la fase de ejecución de una política pública, identificar los modos de intervención predominantes.

Además, se ha buscado identificar aspectos del problema de la violencia contra las mujeres que no se habían afrontado por la política pública objeto de estudio. Aunque asumamos que una política pública es frecuentemente una respuesta a los efectos negativos provocados por un problema social que se intenta solucionar, pueden existir situaciones en las cuales estos efectos negativos no sean visibles, no se expresen o, incluso, puede tratarse de un contexto en el cual falta el consenso para la acción del Estado (Knoepfel *et al.* 2007, 21).

A continuación, se enumeran otros aspectos que precisan más los propósitos analíticos de este trabajo: el marco temporal utilizado y, finalmente, los motivos que llevaron a no contemplar la cooperación descentralizada en este estudio.

La **acotación temporal** de la investigación a los años 2005-2010 se debe a nuestro interés por analizar en detalle un período en el que el tema de la violencia contra las mujeres en el ámbito de la cooperación española al desarrollo destacó especialmente. El año de 2005 marca el momento en el que se adopta oficialmente la transversalidad del enfoque de género en esta política pública, lo que significó considerar la igualdad de género como una prioridad sectorial específica y a la vez transversal a los demás sectores de cooperación. Este cambio supuso también que se dejara de centrar la atención exclusivamente en las mujeres para hacerlo en las desigualdades de las relaciones de género. Este compromiso se incluyó en el segundo Plan Director de la cooperación española (vigente entre los años 2005 y 2008), primer documento de planificación plurianual formulado durante la legislatura del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, considerada como una etapa de madurez de esta política pública por el impulso político que recibió y por el deseo explícito de aproximarse a los compromisos internacionales en términos de prioridades sectoriales y de volumen de recursos destinados.

Los cinco años anteriores al período estudiado, es decir 2000-2004, también se han tenido en cuenta con el propósito de examinar los cambios y continuidades en las cuestiones de igualdad de género y violencia contra las mujeres, y las percepciones expresadas por las personas entrevistadas, a pesar de la escasez de propuestas existentes y de la dificultad de acceso a los respectivos documentos³.

³ Ya fue difícil para el 2005 acceder a las propuestas de financiación de algunas de las unidades de la AECID, como se puede comprobar en los anexos. Cuanto más se retrocedía en el tiempo, mayores dificultades se encontraban para localizar los archivos y acceder a ellos en formato digital.

Se han intentado incluir, asimismo, los años de 2011 y 2012 en el análisis, para que coincidiera el período analizado con el final del tercer plan director (2009-2012). En el momento en que se solicitó la documentación analizada en este trabajo, las acciones correspondientes a esos dos años seguían en ejecución o en proceso de evaluación y auditoría (sobre todo en el caso de las unidades de la AECID, principal organismo financiador de las acciones analizadas). En el caso del Instituto de la Mujer, otra de las unidades administrativas más importantes con intervenciones específicas en el problema de la violencia contra las mujeres, el programa de cooperación internacional terminó en el 2010. Como se explicará en el capítulo metodológico, el proceso de obtención de esos documentos había sido largo y laborioso, y no era operativo iniciar nuevas rondas de contactos para solicitar los archivos de los años siguientes a los que ocupan esta investigación.

De todos modos, un marco temporal de diez años para los compromisos manifestados por la cooperación española y de cinco años en lo que se refiere a las propuestas financiadas es suficientemente amplio para identificar los elementos que interesan en la propuesta aquí presentada.

Finalmente, es importante aclarar por qué este estudio se restringe al **ámbito estatal** de la política española de cooperación internacional al desarrollo. Al limitarnos a este ámbito, descartamos examinar las intervenciones llevadas a cabo o financiadas por organismos de la cooperación descentralizada (comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones) y demás actores públicos y privados (fundaciones, universidades, empresas y sindicatos) que eventualmente desarrollan actuaciones sin recibir recursos de organismos estatales como la AECID. Esta decisión, tomada en una fase todavía inicial del diseño de la investigación, respondió a la necesidad de hacer el análisis viable, ya que incluir a los actores de la cooperación descentralizada habría supuesto tener en consideración los marcos legal e institucional de cada comunidad autónoma u organismo correspondiente, además de obtener y analizar las propuestas financiadas sobre el tema que se trata. Al menos hasta el año 2000, la cooperación al desarrollo estaba prácticamente ausente en los debates legislativos de ámbito autonómico (Porras, Gutiérrez y Morillo 2002). Sin embargo, más recientemente el aumento de la actuación en ámbito internacional del nivel descentralizado se ha visto acompañado por la elaboración de leyes, planes y estrategias y por la creación de estructuras e instrumentos de cooperación propios (Pérez Baldovinos 2008: 29). En lo que se refiere a la actuación de la cooperación descentralizada en temas de género y desarrollo, se considera que hubo avances significativos acordes con las prioridades

señaladas por los organismos centrales y sus documentos de orientación en los años en los que se centra este trabajo (Pérez Baldovinos 2009).

Otro aspecto importante en esta decisión se refiere a la naturaleza de las actividades desarrolladas por los actores de la cooperación descentralizada, más alejada de las características de una política gubernamental (Gómez Galán y Sanahuja 1999: 23) y con mayores dificultades para coordinar, mostrarse eficiente y escapar a los intereses partidistas (Schulz 2010: 3). En España, la mayoría de los recursos destinados a la cooperación al desarrollo y clasificados como Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) según los criterios de la OCDE los aporta la Administración General del Estado (AGE)⁴, siendo ésta, además, la principal responsable en la definición de sus prioridades. Las Comunidades Autónomas y entidades locales aunque tienen autonomía presupuestaria y responsabilidad en el impulso de sus propias acciones de cooperación al desarrollo, deben respetar las líneas generales y directrices básicas de los planes directores, propuestos por el Gobierno central y aprobados por el Congreso de los Diputados. Asimismo, es importante tener en cuenta que el conjunto de acciones financiadas con recursos estatales abarca una cantidad y una variedad significativa de intervenciones, tanto las realizadas directamente con los países receptores de la ayuda (cooperación bilateral directa) o vía ONGD que participan de convocatorias públicas (cooperación bilateral descentralizada), como las contribuciones a fondos y organismos internacionales (cooperación multilateral y multilateral) que hace el Estado español.

1.3. Aclaraciones previas

Este trabajo emplea preferentemente la **expresión ‘violencia contra las mujeres’** pues, como se expondrá a continuación, es el término utilizado en los compromisos internacionales más significativos (ONU 1993, 1995). Con esta expresión se hace referencia a todo acto de violencia dirigido contra las mujeres de cualquier edad, por el hecho de ser mujeres o que afecta a las mujeres en una mayor proporción. Incluye la violencia física, psicológica, sexual o de otro tipo, así como la amenaza de violencia que se produzca en ámbitos públicos o privados.

⁴ Entre los años 2005 y 2010, el porcentaje de AOD neto desembolsado por el conjunto de sus organismos estuvo entre el 84% y el 88% anual, según los seguimientos de los Planes Anuales de Cooperación Internacional (PACI) (MAEC-SECI 2006c, 2007k, 2008b, 2009d, 2010c, 2011b).

Como ya se ha mencionado, en España, la ‘violencia contra las mujeres’ suele ser nombrada como ‘violencia de género’, una expresión bastante difundida y aceptada en la academia (Ferrer Pérez 2008; Puleo 2008; Miranda López 2009; Osborne 2009; López Rodríguez 2011; Casado Aparicio, García y Selgas 2012). Con este término, se trata de hacer hincapié en que la causa de dicha violencia radica en la desigualdad socialmente construida entre mujeres y hombres. Sin embargo, consideramos que la utilización de la expresión ‘violencia de género’ en esta investigación podría dar lugar a una interpretación restringida del fenómeno al que queremos hacer referencia pues, frecuentemente, la ‘violencia de género’ se asocia a la definición legal vigente desde finales de 2004 a nivel estatal. La Ley Orgánica 1/2004 establece que la violencia de género es la violencia ejercida por los hombres hacia las mujeres, en el ámbito de las relaciones conyugales o afectivas, presentes o pasadas⁵.

Además, a nivel internacional, es frecuente que el significado de la expresión violencia de género abarque determinadas formas de violencia a las que los hombres también están sujetos⁶, cuando no cumplen los roles de género que socialmente se espera de ellos. Asimismo, somos conscientes de que la expresión violencia contra las mujeres, a secas, tampoco describe exactamente el fenómeno que ocupa esta investigación. Aunque logra abarcar una extensa variedad de prácticas y contextos de violencia, el término elegido presenta a las mujeres como víctimas, pero no evidencia quienes son los sujetos activos que ejercen la violencia ni los motivos que subyacen sus formas específicas.

También conviene indicar que esta investigación parte de una visión fundamentada por la **teoría feminista sobre la violencia contra las mujeres**, ya que entendemos este fenómeno como una expresión de las relaciones de género desiguales e injustas que todavía persisten entre hombres y mujeres, como se tratará de detallar en el examen teórico-conceptual realizado en los siguientes capítulos. Manifestar la adopción de una perspectiva feminista en el trabajo académico, en el sentido de buscar enmarcar

⁵ Dice el artículo 1 de la mencionada Ley Orgánica 1/2004: “La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes sean o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia” (España 2004).

⁶ Un estudio encargado por el Secretario General de Naciones Unidas, citado por Yakin Ertürk, la cual ocupó entre 2003 y 2009 el cargo de relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias (United Nations 2008, 42), llama la atención sobre esta ampliación en el uso del término violencia de género.

los conceptos y teorías dentro de unas relaciones de poder socialmente desiguales entre mujeres y hombres, puede tener múltiples connotaciones. Sin ignorar que las investigaciones definidas como feministas varían en cuanto a orientaciones epistemológicas (Blazquez Graf 2012), metodológicas (Bartra 2012), teóricas y políticas (Olesen 1994; Ramazanoğlu y Holland 2002), y que son considerablemente variadas en las temáticas a las que se dedican, es posible hacer hincapié en aspectos que reconocidamente las unen:

Lo que parece caracterizar algunos proyectos como feministas (...) es la dependencia de un marco normativo que interrelaciona "injusticia", políticas para "las mujeres" (sin importar la manera como esas categorías se entienden), prácticas éticas que evitan el "injusto" ejercicio del poder y la teoría que concibe el poder *genderizado* dentro de este marco normativo. (...)

Los proyectos de investigación pueden ser considerados feministas si se enmarcan en la teoría feminista y ambicionan producir conocimientos que serán útiles para la transformación efectiva de la injusticia y subordinación de género. (Ramazanoğlu y Holland 2002: 147)

En este contexto, no es exagerado decir que la violencia contra las mujeres tiene un lugar central en el conjunto de cuestiones de las que se ocupa este tipo de investigación, llegando a ser considerado uno de los temas de mayor relevancia en la producción de conocimiento por parte de los feminismos académicos (*ibíd.* 2002, 44). Asimismo, dentro del espectro de orientaciones y metodologías adoptado por los estudios feministas, percibido como cada vez más amplio y complejo, es creciente el interés por la teorización e investigación sobre el cuerpo y sobre temas relacionados con los derechos reproductivos, la violencia sexual y el derecho de las mujeres a la integridad corporal (Fonow y Cook 2005, 2215-6), entre otros.

Este trabajo se alinea con las investigaciones que se identifican con las preocupaciones feministas porque comparte sus principios generales de buscar la igualdad de género⁷, producir conocimientos que contribuyan a la transformación social (Nagy Hesse-Biber, Leavy y Yaiser 2004, 15) e interesarse por mejorar la condición de las mujeres (Bartra 2012, 68). Así, la decisión de estudiar cómo se aborda la violencia contra las mujeres en el ámbito de la cooperación española al desarrollo no es fortuita, sino que representa el deseo de la autora de contribuir a superar las distintas formas de violencia contra las mujeres y el sexismo que las legitima. Pensamos que una de las

⁷ Abordar un tema vinculado a las relaciones de género o a la situación de las mujeres en determinado contexto no significa necesariamente acogerse a una perspectiva feminista. En algunos casos, el tratamiento de estos temas puede actuar en sentido contrario al de los propósitos feministas. En un texto pionero sobre la mujer como objeto de estudio en las ciencias sociales, Izquierdo (1988) argumenta que cada vez que se toma como objeto de estudio a 'la mujer', y no la desigualdad sexual que determina el lugar que ocupan 'hombres' y 'mujeres' en las sociedades, se refuerza el sexismo.

maneras de colaborar con esta tarea es conocer y examinar a fondo las diferentes respuestas que se dan a este problema, incluyendo aquellas formuladas desde las políticas públicas de cooperación internacional.

Además, siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Mujeres y Ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC 2011), se busca adoptar un lenguaje no sexista y se evita el uso de formas gramaticales en masculino para hacer referencia a personas de ambos sexos y otras expresiones que dejan invisibles a las mujeres.

1.4. Estructura de la tesis

Este trabajo está estructurado en tres partes: presentación de la investigación, marco conceptual y teórico del estudio, y descripción y análisis de la política española de cooperación internacional al desarrollo, las cuales están divididas a su vez en ocho capítulos. La división entre conceptos/teoría y descripción/análisis de las partes II y III es bastante esquemática, pero sirve para resaltar las características principales de cada bloque de este trabajo y para enmarcar los pasos que se ha intentado seguir en su elaboración y redacción. Aun así, como recuerda Valles Martínez, es preciso reconocer la omnipresencia del análisis en todos los momentos de la investigación social, incluyendo los “análisis preliminares” presentes en las fases de diseño de la investigación y de recogida de materiales, y no solamente en el “análisis intenso” desarrollado a partir del material acumulado (2002: 149-150). Eso nos lleva a reconocer la presencia de actividad analítica también en los dos primeros bloques de la tesis, aunque se buscó concentrarla en la parte final del trabajo tras la discusión de los conceptos clave.

La **parte I** reúne este capítulo introductorio y el **capítulo 2**, en el que se trata del diseño metodológico elegido y se presentan en detalle la propuesta analítica, los datos utilizados y el proceso de construcción de los mismos.

La **parte II** de la tesis, correspondiente a los capítulos 3, 4 y 5, revisa y discute conceptos y teorías considerados centrales para orientar la investigación sobre las intervenciones de la cooperación internacional al desarrollo de España respecto a la violencia contra las mujeres.

En este sentido, el **capítulo 3** aborda el debate en torno a la idea de desarrollo, así como su aplicación en el campo de la cooperación internacional a nivel mundial.

Fundamentalmente, se revisa cómo las teorías y los distintos enfoques sobre el desarrollo tratan las mujeres como grupo social afectado por el desarrollo o partícipe de él, las desigualdades de género y, en especial, las diferentes formas de violencia contra las mujeres. Se abordan tanto los enfoques hegemónicos sobre el desarrollo como las conceptualizaciones consideradas alternativas o críticas, especialmente por la reciente contribución de estas últimas para que los temas de género fueran incluidos dentro de los estudios sobre el desarrollo y su aportación en la creación de un enfoque específico al respecto. Asimismo, se examina la cooperación internacional como uno de los instrumentos para lograr el desarrollo, entendiéndola como una política pública específica impulsada por un país donante en el marco de sus relaciones exteriores.

Igualmente importante en esta investigación es tener en cuenta la complejidad y la diversidad de las aproximaciones teóricas respecto a la violencia contra las mujeres. Por esta razón, el **capítulo 4** revisa cómo y desde qué perspectivas, especialmente en el campo de las ciencias sociales, esta problemática adquiere importancia, prestando atención al papel que desempeñan en este proceso las teorías feministas y de género y las reivindicaciones que han surgido al respecto desde los movimientos de mujeres y feministas en las últimas décadas. El foco central es esencialmente el debate a nivel internacional en torno a esta cuestión, pero también se aborda con detenimiento la discusión en torno a la conceptualización y uso que la expresión ‘violencia de género’ ha adquirido más recientemente en el contexto español. Aunque, como se ha explicado anteriormente, este no es el término más utilizado en esta investigación, es importante hacer referencia a él, debido a la atención a la violencia contra las mujeres que ha supuesto su uso en la agenda de las políticas públicas españolas en general, incluyendo la de cooperación internacional al desarrollo.

El **capítulo 5** aborda algunos puntos de encuentro entre la violencia contra las mujeres en los compromisos y la práctica de la cooperación internacional al desarrollo a nivel global. Se repasan los vínculos entre lo que se entiende por desarrollo y la violencia contra las mujeres, especialmente desde la consideración de que esta cuestión ha pasado a ser tenida en cuenta en las propuestas de medición del desarrollo y en la definición de las metas para alcanzarlo. Seguidamente, se señalan dificultades que se siguen encontrando a la hora de abordar la violencia contra las mujeres en este campo. De manera específica, examinamos cómo se presentan los vínculos con la lucha contra la pobreza, las masculinidades en el desarrollo, qué resistencias encuentra la inclusión de las cuestiones relacionadas con la sexualidad y qué implicaciones pueden tener esos elementos a la hora de enfrentar la violencia contra las mujeres en el ámbito de la

cooperación internacional al desarrollo. El capítulo concluye con una discusión sobre los riesgos de imponer un modelo conceptual y político sobre violencia contra las mujeres en la acción de la cooperación internacional al desarrollo.

La **parte III** conjuga la descripción y el análisis de la política española de cooperación internacional al desarrollo en relación con los planteamientos e intervenciones sobre la violencia contra las mujeres; reúne, además, las conclusiones de la investigación y un epílogo en que se incluyen datos más recientes sobre la situación de nuestro objeto de estudio.

El **capítulo 6** se inicia con un recorrido por la progresiva institucionalización de esta política pública española y su adopción del enfoque Género en Desarrollo. A continuación, se detalla la aparición de la cuestión de la violencia sufrida por las mujeres como una problemática sobre la cual la cooperación española al desarrollo trata de intervenir, especialmente desde el año 2005. Para ello, se parte de la literatura sobre la política pública de cooperación internacional al desarrollo de España, de datos obtenidos por medio de la realización de entrevistas y contactos, y de la consulta de diferentes tipos de documentos a lo largo de esta investigación. En este sentido, se realiza una detallada lectura y sistematización del contenido de los documentos oficiales de la cooperación al desarrollo de España en el período 2000-2010 (relativos a la planificación periódica, geográfica y sectorial), de las actas de las comisiones bilaterales firmadas con países receptores de la ayuda española y de otros documentos (entre los que cabe mencionar informes institucionales de organismos públicos tales como el Ministerio y la Secretaria de Igualdad, el Instituto de la Mujer, la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género y el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial). También se reúne, de forma inédita, información cuantitativa sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo española destinada a intervenir de manera directa sobre la violencia contra las mujeres, a la que nos referimos en este estudio con las siglas AOD-VCM.

En el **capítulo 7**, se presenta y se analiza el conjunto de propuestas de intervención sobre violencia contra las mujeres financiadas en el ámbito de la política pública española de cooperación internacional al desarrollo, cuyos contenidos se han reunido y sistematizado en el banco de datos Coopvidac, elaborado especialmente para esta investigación. Ocasionalmente, también se han utilizado evaluaciones, memorias institucionales e informes de proyectos publicados por organismos públicos, fundaciones y organizaciones no gubernamentales de desarrollo para confirmar o contrastar la información incluida en el banco de datos y en los análisis realizados. Lo

más relevante de este capítulo es la identificación de tres enfoques adoptados por la cooperación española al desarrollo en lo que respecta a las diferentes formas de violencia contra las mujeres. Esta identificación se ha realizado a partir de un exhaustivo análisis inspirado en la propuesta de los marcos de interpretación aplicados a las políticas públicas, para lo cual se ha utilizado el software de análisis cualitativo NVIVO 10.

Finalmente, el trabajo se cierra con el **capítulo 8**, que recoge las conclusiones de la investigación. En él respondemos a las preguntas que orientaron su elaboración y presentamos los resultados más significativos a la luz del marco teórico-conceptual construido. Asimismo, enunciamos algunas preguntas y otros aspectos que pueden inspirar futuros estudios sobre el tema.

En el **epílogo**, hacemos constar, de manera abreviada, los considerables cambios sufridos por la política española de cooperación internacional al desarrollo a partir del año 2011 y los posibles efectos sobre los enfoques y prioridades de promoción de la igualdad de género y de lucha contra la violencia contra las mujeres.

Con el propósito de no interrumpir la lectura de los capítulos, se reúnen al final las tablas que sistematizan los contenidos de los documentos analizados y otros anexos de interés mencionados a lo largo del texto.

CAPÍTULO 2 - METODOLOGÍA

Capítulo 2 - METODOLOGÍA

La propuesta de análisis de la política pública española de cooperación internacional al desarrollo y su intervención en el ámbito de las violencias contra las mujeres podría definirse como predominantemente cualitativa, por las características de apertura y flexibilidad y la posibilidad de una operación para “desentrañar significados” (Davila 1994, 51) que esta perspectiva favorece. Los datos utilizados en esta investigación provienen, por un lado, de una serie de fuentes elaboradas mediante diferentes técnicas (la entrevista abierta semiestructurada, el análisis documental, etc.), y por otro, de análisis estadístico descriptivo de los datos referentes a recursos financieros destinados a esta política.

2.1. Las entrevistas en profundidad

Desde el principio, se consideró fundamental establecer un diálogo directo con actores-clave de la política española de cooperación al desarrollo y con personas expertas en el tema pues, dado el carácter novedoso y el escaso desarrollo teórico del tema tratado, parte de las experiencias y de los datos necesarios difícilmente podrían obtenerse de otra manera. Así, la opción de conjugar la **entrevista abierta semiestructurada** –utilizando un guión predefinido de preguntas que al mismo tiempo fuera flexible para cambiar el orden de los temas o añadir otros derivados de la interacción en cada conversación– con la modalidad ‘especializada o de élite’ se presentó como la más adecuada para captar el sentido de las acciones llevadas a cabo por los actores y acceder a informaciones no disponibles o no sistematizadas.

Considerando que la entrevista abierta es útil “para obtener información de carácter *pragmático*, es decir, de cómo los sujetos diversos actúan y reconstruyen el sistema de representaciones sociales en sus prácticas sociales” (L.E. Alonso 1994, 226), se optó por su uso para ayudar a descifrar el sentido de las conductas de los actores de la política. Teniendo esto en cuenta, se ha preferido utilizar la entrevista abierta en su modalidad ‘especializada o de élite’⁸. Esta modalidad supone un tratamiento especial de

⁸ Especialmente en el sentido tomado de Dexter (*Elite and specialized interviewing*, 1970) y mencionado por Valles Martínez (2002, 27): “No se trata, únicamente, de entrevistas hechas a personajes importantes de la vida pública importante (élites de la política, de las finanzas o las profesiones de prestigio). Estamos, según el autor, ante un estilo de entrevista que recomienda siempre que los

la persona entrevistada en tres aspectos: poner énfasis en la situación del entrevistado; incentivar la participación del entrevistado en la estructuración del relato de la situación; y facilitar que la persona entrevistada introduzca sus ideas sobre lo que considera relevante. Este tipo de entrevista posee, además, tres funciones: generación de información para contrastar realidad y teoría; aproximación a informantes que actúan como expertos; y utilización de entrevistas al más alto nivel como llave maestra que permita el acceso a personas de menor rango o a documentación no publicada (Valles Martínez 1997). Por todo ello, aunque existía un guión de preguntas predefinido, éste era flexible e incorporaba preguntas o temas especialmente pensados para cada persona entrevistada (el anexo 1 registra el guión utilizado).

Se han realizado entrevistas a 51 personas, con una duración de entre cuarenta minutos y dos horas⁹. Las personas entrevistadas se pueden dividir en cuatro grupos: en el primero, se encuentran representantes de perfil técnico y político pertenecientes a organismos públicos –tanto los directamente relacionados con la política de cooperación al desarrollo en el ámbito nacional (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación – MAEC, Congreso de los Diputados), como aquellos que poseían acciones de cooperación vinculadas al tema investigado (en especial el Instituto de la Mujer y el extinto Ministerio de Igualdad, además de otros ministerios)–. Un segundo grupo está compuesto por personas vinculadas a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), de diferentes especializaciones, que realizan un destacado trabajo en el tema estudiado o que han recibido financiación para desarrollar acciones sobre la violencia contra las mujeres. Hay un tercer grupo de personas entrevistadas seleccionadas por su conocimiento y reconocida vinculación a temas de cooperación al desarrollo o derechos de las mujeres (activistas, académicas, consultoras). Además de la diversificación de perfiles, entre los que se incluyen profesionales de diferentes trayectorias, se ha buscado alcanzar un equilibrio al compaginar la participación de personas en puestos técnicos, políticos y gerenciales, con la de otras personas con experiencia en el Consejo de Cooperación, la Coordinadora de ONGD y sus respectivos grupos de trabajo de género.

objetivos del estudio lo requieran, y se esté ante un entrevistado ‘experto’ o ‘bien informado’ (en sentido llano).”

⁹ Una de las entrevistas, sin embargo, duró menos de veinte minutos, pues la persona entrevistada, aun habiendo aceptado inicialmente responder las preguntas, finalmente rechazó hacer comentarios relacionados con los objetivos de la entrevista.

Por último, entre los meses de marzo y mayo de 2014, se entrevistó en Lima, Perú, a personas con perfiles similares a los descritos en los grupos anteriores. Se intentó contar con representantes de instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales tanto españolas como peruanas, además de expertas y activistas¹⁰. Aunque la actuación de la cooperación española en este país también fuera abordada en esos contactos (un tema que se pretende explotar con más detenimiento en otra ocasión), se concentró la atención sobre aspectos generales de funcionamiento de esta política pública en el ‘terreno’ para complementar, confirmar o ponderar las informaciones que se habían obtenido anteriormente en el resto de las entrevistas, realizadas mayoritariamente en Madrid¹¹.

Las entrevistas en España se realizaron en dos fases: treinta de ellas se llevaron a cabo entre la primavera y el verano de 2013; ocho entre diciembre del mismo año y febrero de 2014; y la última se realizó en septiembre de 2014. Una de las personas fue consultada en dos momentos y ocho de ellas, residentes fuera de la Comunidad de Madrid o de España, por teléfono o por medio del programa comunicacional *Skype*¹². Todas las entrevistas, salvo cuatro de ellas, se grabaron y a continuación fueron transcritas.

Las tablas 1 y 2, a continuación, recogen la descripción de los perfiles de las personas entrevistadas, según los cuatro grupos de profesionales anteriormente mencionados¹³. Asimismo, conviene señalar que a lo largo de este trabajo, las referencias a las entrevistas se identificarán en letra cursiva por el número, el perfil y la adscripción institucional de la persona.

¹⁰ Estas entrevistas fueron posibles gracias a una estancia de investigación predoctoral disfrutada por la autora en la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en Lima, y financiada por el programa "Becas Santander Iberoamérica Jóvenes Profesores Investigadores España 2013".

¹¹ Hubiera sido interesante realizar entrevistas en distintos países receptores de los recursos de la cooperación española al desarrollo. Sin embargo, debido a los costes asociados a esa tarea no se pudo llevar a cabo. En ese sentido, la beca mencionada en la nota anterior proporcionó la oportunidad de efectuar este trabajo en al menos en un país. La información obtenida, a pesar de no ser exhaustiva, ofrece significativos elementos de análisis.

¹² El uso del *Skype* y de otras tecnologías de comunicación en la realización de entrevistas cualitativas está reconocido como válido en los casos en los que, por ejemplo, las personas que deben ser entrevistadas están geográficamente dispersas, ya que permite unas condiciones similares a las de una interacción cara a cara (Sullivan 2012; Redlich-Amirav y Higginbottom 2014).

¹³ Varias de las personas entrevistadas colaboraron con diferentes organizaciones a lo largo de sus carreras profesionales y podrían pertenecer a más de un grupo. En esos casos, se optó por identificarlas por su adscripción institucional más larga en el período 2005-2010.

Tabla 1. Perfiles y adscripción institucional de personas entrevistadas.

Grupo 1. Organismos públicos nacionales e organismos internacionales
E01. Perfil técnico. Instituto de la Mujer.
E02. Técnico. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Antes: ONGD, especializada en salud.
E03. Técnico. AECID.
E04. Técnico. AECID.
E05. Técnico. Oficina de Acción Humanitaria (OAH), MAEC. Antes: Género, AECID.
E06. Político. PSOE. Antes: Instituto de la Mujer.
E07. Político. PSOE, Congreso de los Diputados.
E08. Técnico. Organismo internacional de Naciones Unidas (oficina Nueva York).
E09. Técnico. PSOE, Congreso de los Diputados. Antes: ONGD grande, género.
E10. Técnico. Antes: Ministerio de Igualdad e Instituto de la Mujer.
E11. Técnico. Delegación de Gobierno para la Violencia de Género.
E12. Político. PSOE. Antes: fundaciones públicas.
E13. Político. PP. Antes: Instituto de la Mujer y Oficina Técnica de Cooperación (OTC).
E14. Técnico. DGPOLDE, MAEC. Antes: OTC.
Grupo 2. Organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD)
E15. Consultoría. Antes: ONGD especializada en género y ONGD no especializada.
E16. Dirección. ONGD, no especializada.
E17. Dirección. ONGD, especializada en género.
E18. Dirección. ONGD, especializada en género.
E19. Técnico. ONGD, no especializada, cooperación sindical.
E20. Dirección. ONGD, especializada en género.
E21. Dirección. ONGD, especializada en género.
E22. Técnico. ONGD, especializada en género.
E23. Dirección. ONGD, no especializada.
E24. Técnico. ONGD, especializada en género.
E25. Técnico. ONGD, especializada en género.
E26. Equipo técnico. ONGD, especializada en género.
E27. Dirección. ONGD, especializada en género.
E28. Técnico. ONGD, especializada en género.
E29. Técnico. ONGD, especializada en salud.
E30. Técnico. ONGD, especializada en salud.
E31. Dirección. ONGD, especializada en género.
E32. Técnico. ONGD, especializada en salud.
Grupo 3. Expertas, activistas
E33. Especialista, derechos humanos.
E34. Especialista, cooperación sindical.
E35. Activista, derechos humanos.
E36. Activista, derechos de las mujeres.
E37. Activista, derechos de las mujeres. Antes: perfil político, Izquierda Unida.
E38. Especialista, mutilación genital femenina.
E39. Académico, mutilación genital femenina.

Tabla 2. Perfiles y adscripción institucional de personas entrevistadas (Perú)

E40. Consultoría. Antes: Ministerio de la Mujer/AECID.
E41. Dirección. AECID, OTC y Organismo internacional (Oficina Lima).
E42. Técnico. OTC, punto focal de género.
E43. Político. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
E44. Dirección. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
E45. Técnico. ONG peruana, especializada en género.
E46. Técnico. ONG peruana, especializada en género.
E47. Técnico. ONG peruana, especializada en género.
E48. Técnico, activista. ONG, especializada en género.
E49. Técnico. ONG española, no especializada.
E50. Técnico. ONG española, especializada en género.
E51. Académico, activista. Antes: ONGD peruana, especializada en género.

Aunque se disponía de un guión flexible, adaptado a cada ocasión, a veces no pudo utilizarse integralmente, debido a limitaciones de tiempo de la persona entrevistada o simplemente porque, como señala Flick (1998, 90), este tipo de interacción puede encaminarse hacia la ‘entrevista retórica’. En esos casos, la persona interrogada, más que contestar las preguntas, expone el tema a su manera, dificultando la conversación y el que sea posible dirigirla hacia temas que interesan a la investigación. Asimismo, se ha logrado que las entrevistas cumplan las funciones adicionales de esa modalidad mencionadas por Valles Martínez (1997): el acceso a personas de menor rango y a documentación no publicada. No obstante, también se ha dado el caso contrario: entrevistar personas de perfil técnico y de menor rango, aunque con larga y reconocida trayectoria en la administración pública, facilitó el acceso a personas de rango superior o con un perfil político y de más difícil acceso.

La mayoría de las personas han dado su consentimiento para ser mencionadas en la investigación, pero se ha preferido mantener su anonimato, pues lo que se buscaba no era tanto centrarse en las posturas individuales, sino en las percepciones y consideraciones que podrían aportar desde sus respectivos puestos institucionales, experiencias y especializaciones.

2.2. Análisis documental y construcción de la base de datos

Respecto a la **recopilación y el análisis documental**, es evidente que el uso de la información disponible en documentos en formatos variados constituye un paso obligado para cualquier investigación social. Para llevar a cabo los objetivos del trabajo,

se consultaron diversos tipos de fuentes documentales: legislación nacional, europea e internacional sobre cooperación al desarrollo, sobre igualdad de género y sobre violencia contra las mujeres; documentos de cooperación al desarrollo y políticas de igualdad (MAEC, AECID, Instituto de la Mujer, entre otros); informes de instituciones que forman el Sistema de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales; actas de las reuniones de Consejo de Ministros; informes, manuales y guías elaborados por *think tanks* y organizaciones de la sociedad civil; y, por último, pero no menos importante, un extenso y fragmentado material relativo a las intervenciones financiadas por la cooperación española al desarrollo en relación al tema investigado.

Los documentos oficiales de la política española de cooperación al desarrollo analizados en esta investigación constituyen un amplio conjunto, en el que están incluidos tres planes directores cuadriennales, diez planes de planificación anual, doce estrategias sectoriales, sesenta y nueve actas de comisiones bilaterales, y cincuenta y tres documentos de planificación geográfica.

Asimismo, la parte más abultada e importante de todo el corpus documental analizado está formada por la documentación concerniente a las intervenciones¹⁴ financiadas que abordan la problemática de la violencia contra las mujeres en el período estudiado. Este conjunto mereció además un tratamiento específico, pues su examen permitiría identificar cómo los lineamientos generales de esta política se traducen en propuestas de actuación en lo que se refiere a este tema. Como se detalla en el siguiente apartado, el contenido de estos documentos constituiría luego el banco de datos de las proposiciones de la cooperación española al desarrollo sobre violencia contra las mujeres, al que se eligió denominar **Coopvidac**.

Pero volviendo al proceso de identificación y acceso a la documentación en que se basa el mencionado banco de datos, éste fue una fuente de inquietud desde el primer momento en que se plantea la propuesta de esta investigación. Como se explica con más detalles a continuación, dicha preocupación se debía en gran medida al carácter descentralizado, disperso y poco transparente de la política pública analizada, pues aunque existen un ministerio y una agencia estatal responsables de definir y, en gran parte, implementar la cooperación al desarrollo en España, hay múltiples unidades administrativas con competencias en la materia. Como resultado de ello, la

¹⁴ En este trabajo, se entenderá por ‘intervención’ cualquier unidad de cooperación al desarrollo cuyos recursos están considerados como Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Esto significa que las intervenciones hacen referencias a variados instrumentos administrativos y modalidades de cooperación, tales como proyectos, programas, convenios o subvenciones.

documentación a la que deseábamos acceder se encontraba dispersa en los distintos organismos, sólo parcialmente disponible en formato electrónico o incluso ilocalizable, en especial para los primeros años considerados.

De ese modo, fue necesario contactar hasta veintitrés ministerios, secretarías de estado, departamentos y otros organismos de la Administración General del Estado (AGE), y depender, en gran medida, de la buena disposición y del tiempo de los correspondientes equipos técnicos para localizar y facilitarnos el acceso a los documentos, incluyendo a aquellos no digitalizados y guardados en archivos raramente consultados. Tales dificultades ocurrieron incluso en los contactos con la AECID y el MAEC, ya que tampoco los principales organismos de esta política cuentan (o al menos no contaban en el momento en que se realizaron los contactos) con instrumentos de gestión de información de todas sus divisiones internas¹⁵. El envío de las solicitudes formales, realizado simultáneamente por correo electrónico y en el registro de las respectivas unidades administrativas (en el caso de la AECID, una solicitud para cada división sectorial y geográfica), fue precedido por contactos informales con personas de los organismos. De esa manera, se ha dado precisión a las tareas de identificación, selección y priorización de las acciones a cuya documentación se quería acceder.

Así, el primer paso en la construcción del corpus documental cuyo contenido conformaría nuestro banco de datos (véase ilustración 1, a continuación), fue reunir lo que se denomina internamente en el MAEC el ‘volcado’ de los datos relacionados con la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Se trata del conjunto de informaciones sobre la AOD reportadas al MAEC por todos los agentes de la cooperación (Administración General del Estado, comunidades autónomas, corporaciones locales y universidades). Ese material bruto, con tablas en formato de enormes hojas de cálculo (una para cada año), contempla en cada entrada o línea un desembolso¹⁶ realizado; las columnas

¹⁵ La gestión de la información deficiente y poco transparente es un problema mencionado de manera recurrente en los trabajos sobre la cooperación española –por ejemplo, los estudios de Lagunas (2009) y Lagares, Álvarez y Cuns (2011)–, algo que es aún más problemático cuando se trata de conocer el trabajo en las cuestiones transversales. De este modo, la falta de una base de datos de la AECID que organice la información de todos sus departamentos por instrumentos, áreas geográficas, sectores o líneas estratégicas limita el conocimiento sobre el trabajo realizado en materia de igualdad de género (Tomás Pérez 2010, 2767).

¹⁶ Entiéndase por *desembolso* el montante de gasto real en cada intervención. Cuando se trata de un ingreso (la devolución de un préstamo contabilizado como AOD), se habla de *reembolso*. En muchos casos, el desembolso puede encontrarse desglosado según país destinatario, año o sector, aunque se trate de una misma intervención. Esto significa que cada intervención de cooperación al desarrollo puede presentarse con más de una línea en las hojas de cálculo que reúnen la totalidad de la información disponible sobre los flujos de AOD. Eso ocurre especialmente en intervenciones

contienen información sobre la acción correspondiente, como título, resumen, país de destino, recursos destinados, unidad financiadora y organizaciones involucradas, entre otros aspectos. Si bien se encuentra disponible en la página web de la AECID, para poder contar con la versión más adecuada a los propósitos de la investigación, se optó por solicitarlo a la entonces Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE) del MAEC, responsable de elaborar y realizar el seguimiento de las políticas de cooperación al desarrollo. Tras un encuentro en el verano de 2011 con una de las funcionarias de su Servicio de Estadística, fue posible obtener el ‘volcado’ de las acciones de la AGE¹⁷ en una versión que no incluía los sectores con acciones no relacionadas con los propósitos de nuestra investigación, según el criterio del personal de este Servicio (industria, pesca, turismo y agricultura). Aun así, la abundancia del material era considerable, alcanzando casi las diecisiete mil líneas en las hojas de cálculo.

A partir de ese momento, fue preciso entender, organizar y priorizar las acciones cuya documentación se pretendía solicitar. Para eso, primeramente se excluyó todo tipo de intervención considerada no relacionada con el tema de la investigación (becas, cursos y actividades culturales variadas, apoyo al Instituto Cervantes, ayuda alimentaria, envío de material humanitario, etc.). Las acciones restantes se dividieron en dos tipos: 1) aquellas cuyos títulos y/o descripciones abordaban explícitamente el tema investigado; 2) aquellas cuyos títulos y/o descripciones no permitían extraer conclusiones definitivas sobre si en ellas se trataba el tema (principalmente las relacionadas con derechos humanos, empoderamiento económico de las mujeres, salud, derechos sexuales y reproductivos, entre otros asuntos). Para este último bloque, era necesario obtener más información antes de incluir una acción en el rol de intervenciones que debían ser analizadas.

Si bien el procedimiento descrito resultó lento y laborioso, por depender prácticamente de una interpretación caso a caso, éste se presentó como la única manera de incluir todas las acciones relacionadas con la violencia contra las mujeres, ya se tratara este tema de manera explícita, de un modo transversal o como un objetivo relacionado con otros temas y problemáticas. Ante la imposibilidad de realizar una

plurianuales o realizadas en más de un país. En estos casos, fue necesario comprobar por medio de otros datos disponibles si se destinaban a una misma intervención aprobada, ya que para nuestra investigación era pertinente considerarla una única vez.

¹⁷ Eso es, sin considerar los niveles subnacionales (comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos) y otros actores (sindicatos, universidades y empresas).

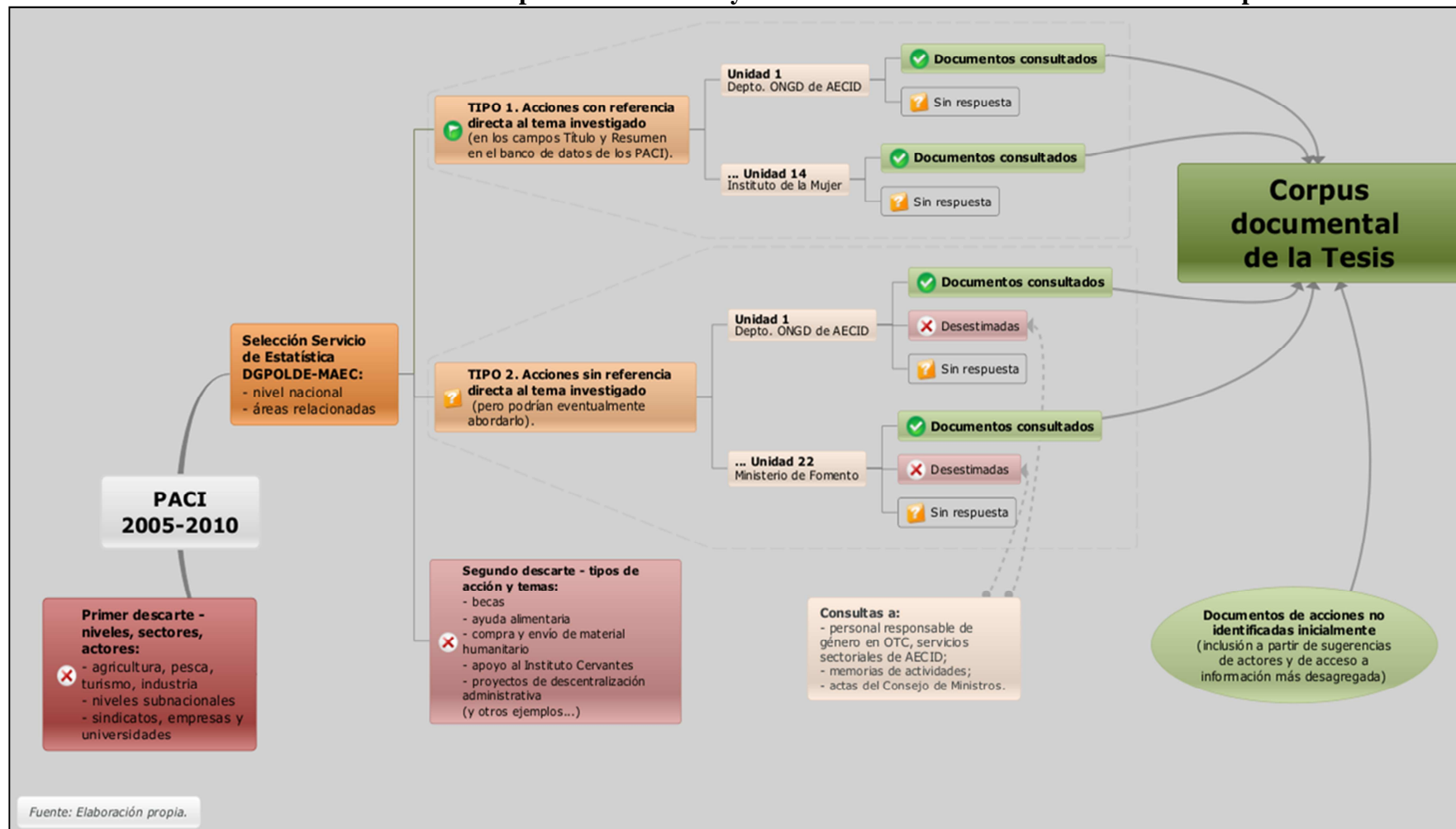
búsqueda temática, por palabras clave o incluso por las estrategias y los objetivos marcados por los planes directores (ya se ha mencionado la ausencia de un sistema de gestión unificado que permitiera ese tipo de identificación), se optó por utilizar unos criterios de búsqueda lo más amplios posible y, poco a poco, ir depurando, accediendo a su documentación y cruzándola con informaciones provenientes de otras fuentes como memorias institucionales, contactos informales y entrevistas.

Esta primera selección, indicada en la ilustración 1, produjo un conjunto de aproximadamente seis mil quinientos desembolsos diferentes, entre los que, como ya se ha explicado, algunos hacían referencia a una misma intervención. Aproximadamente quinientas de ellas tenían títulos y/o resúmenes en los que se hacía mención explícita al problema investigado, pasando a ser identificadas como de tipo 1 y teniendo prioridad en la solicitud de información. Sobre el resto, existían dudas respecto a si abordaban el tema y fueron incluidas dentro del tipo 2. Los organismos responsables de esos desembolsos eran varios: ocho unidades administrativas de la AECID, las dos Secretarías de Estado del MAEC, nueve Ministerios además del de Asuntos Exteriores y Cooperación y cuatro Institutos (de la Mujer, de la Juventud, de los Mayores y Servicios Sociales, y de Salud Carlos III).

La depuración de ese corpus documental se extendió durante varios meses y tuvo dos frentes de trabajo paralelos: la solicitud de acceso a los documentos de las acciones identificadas como tipo 1 (dirigiendo las demandas a cada una de las correspondientes unidades administrativas) y la solución de las dudas sobre las acciones de tipo 2, una vez resueltas las cuales, se intentaría acceder a la correspondiente documentación, si era el caso.

Para este último gran subconjunto, fue fundamental el contacto con el personal técnico. En la AECID: responsables de áreas temáticas de género, salud, pueblos indígenas, gobernabilidad, microcréditos, agua y saneamiento, ayuda humanitaria. En las OTC: los ‘puntos focales’ de género, responsables de que el enfoque de género se adoptara en el terreno de manera transversal. Por medio de esas consultas, realizadas electrónicamente en el caso de las oficinas en el extranjero y personalmente para las de Madrid, se consiguió reducir el número de acciones dudosas de tipo 2 aproximadamente a la mitad, incorporándose al conjunto de tipo 1 aquellas en las que se pudo constatar que tenían el tema investigado entre sus objetivos prioritarios.

Ilustración 1. Proceso de construcción del corpus documental cuyo contenido conforma el banco de datos Coopvidac



Finalmente, se identificaron 357 intervenciones diferentes dentro del conjunto de acciones tipo 1. Dentro de este grupo, se recibió y analizó información para 288 de ellas, aunque solo en 239 la información obtenida era completa. Las tablas en la página a continuación resumen esos subconjuntos: intervenciones de las que se recibió documentación completa y cuya información pudo ser insertada en el banco de datos y, finalmente, analizada en profundidad (tabla 3); intervenciones de las que se recibió documentación insuficiente (tabla 4) e intervenciones de las que no se recibió documentación (tabla 5). Para la información desagregada de cada una de las intervenciones, consultar los anexos 12, 13 y 14.

Aunque lamentablemente la investigación no pudo acceder a la totalidad de la documentación de las intervenciones identificadas como potencialmente vinculadas al tema, deben destacarse la relevancia del conjunto obtenido, así como los motivos que impidieron obtener la información sobre las 49 intervenciones restantes. Como muestra la tabla 4, el conjunto de acciones para las que no se ha recibido la documentación suficiente representa un desembolso de poco menos de 21 millones de euros. De estas acciones, al menos cinco son acciones que representan una o más etapas de otras intervenciones que sí han sido analizadas (como indican los números entre paréntesis), lo que disminuye a 44 el número de propuestas con documentación insuficiente cuyo análisis eventualmente podría aportar novedades (ya que las acciones de continuidad raramente contienen cambios radicales respecto a sus etapas anteriores).

La mayor parte de esa documentación insuficiente procede del Departamento de Cooperación con América Latina y el Caribe, pero eso no impidió que la región estuviera suficientemente representada en el estudio, ya que otras unidades financiadoras también desarrollan intervenciones allí. Asimismo, habría sido interesante poder tener un conocimiento más profundo de otros tipos de acciones, como las de cooperación policial llevadas a cabo por el Ministerio del Interior en el período. Sin embargo, la escasa información adicional obtenida ha permitido considerar en el estudio, al menos en términos cuantitativos, nueve de las 261 acciones de cooperación policial mencionadas en los documentos de seguimientos Planes Anuales de Cooperación Internacional (PACI) del período 2005-2010, al centrarse en ‘violencia doméstica, de género o trata de personas’. Del Departamento de ONGD, no se consiguió la documentación referente a dos convenios plurianuales iniciados en 2010, pero el resto de los documentos de ese importante instrumento de cooperación puesto en marcha en el 2006 sí se recibieron.

Tabla 3. Intervenciones identificadas con documentación completa

Unidad financiadora	Año(s)	Intervenciones	Desembolso €
Instituto de la Mujer	2005-2010	53	2.326.248
AECID, Depto. de África y Asia	2005-2010	44	9.071.778
AECID, Depto. de AL y Caribe	2006-2010	30	4.693.865
AECID, Depto. de RCC	2009	1	23.000
AECID, Depto. de ONGD	2006-2010	82	53.780.726
AECID, Depto. Multilateral	2006-2009	14	13.963.093
MAEC, SECI	2007-2008	12	30.228.119
Instituto de la Juventud	2007	3	54.581
TOTAL		239	114.142.220

Tabla 4. Intervenciones identificadas con documentación insuficiente

Unidad financiadora	Año(s)	Intervenciones (continuidad)	Desembolso €
Instituto de la Mujer	2005	1 (1)	28.000
AECID, Depto. de África y Asia	2010	1	50.000
AECID, Depto. de AL y Caribe	2005-2010	33 (4)	16.226.824
AECID, Depto. de ONGD	2010	2	2.201.697
AECID, Depto. Multilateral	2009	1	50.000
MAEC, SECI	2008	2	2.021.275
Ministerio del Interior	2005-2010	9	442.225
TOTAL		49 (5)	20.985.025

Tabla 5. Intervenciones identificadas sin documentación recibida

Unidad financiadora	Año(s)	Intervenciones (continuidad)	Desembolso €
Instituto de la Mujer	2006/09/10	5 (2)	294.100
AECID, Depto. de África y Asia	2005	1	69.500
AECID, Depto. de AL y Caribe	2005-2010	15 (6)	4.588.218
AECID, Depto. de RCC	2007/09/10	10 (1)	227.277
AECID, Gabinete Técnico	2005/06/08	3	301.000
AECID, Depto. de ONGD	2005	6 (3)	1.179.585
AECID, Of. Acción Humanitaria	2007-2009	8	2.230.040
AECID, Depto. Multilateral	2008/09	2	1.300.000
MAEC, SEAE	2006	1	200.000
MAEC, SECI	2006-2010	16(1)	48.866.040
Ministerio de Educación	2008	1	14.150
Ministerio de Sanidad	2009	1	14.150
TOTAL		69 (13)	59.284.060

En el caso del conjunto de las acciones para las que no se ha recibido ninguna documentación (tabla 5), lo más significativo, tanto en términos de número de acciones como de volumen de recursos, se refiere a acciones desembolsadas por las Secretarías de Estado del MAEC y destinadas a organizaciones internacionales de cooperación multilateral. Son contribuciones tanto obligatorias como voluntarias y se diferencian de las subvenciones provistas por departamentos de la AECID en que suelen estar vinculadas a alguna intervención específica, para la cual se presenta una propuesta de financiación determinada. Las entrevistas y los contactos realizados en los que se abordó este asunto confirmaron la dificultad para acceder a la documentación relacionada con esos desembolsos o incluso la inexistencia de ella. Lamentablemente, tampoco se pudo acceder a la documentación de intervenciones de tipo humanitario (bajo la responsabilidad del Gabinete Técnico de la AECID y luego de la Oficina de Acción Humanitaria - OAH). Sin embargo, como en el caso del conjunto de acciones con documentación insuficiente, se debe tener en cuenta que al menos 13 intervenciones son continuación de acciones cuya documentación está incluida en el conjunto analizado en profundidad, lo que disminuye a 56 las intervenciones de las que no se recibió ninguna documentación y cuyo análisis podría aportar novedades respecto al resto de las acciones estudiadas.

Es importante resaltar que esos documentos analizados son de carácter técnico y que obedecen a una gran variedad de formatos y estilos: fueron originalmente dirigidos a diferentes instituciones (en el caso de las convocatorias realizadas de manera periódica, seguían un formulario común, aunque cambiante a lo largo de los años) y presentados por organizaciones igualmente diversas en cuanto a especialización, perfil e interés. Además, no se debe olvidar que su elaboración obedecía a propósitos específicos, como participar en convocatorias competitivas de subvenciones públicas o justificar la solicitud de financiación. La mayoría de los documentos estaban redactados en castellano, aunque también se tuvo acceso a aproximadamente una veintena de ellos en inglés o francés.

La mayor parte de la documentación analizada se recibió electrónicamente, desde las respectivas unidades responsables¹⁸. Una parte de las propuestas referidas a intervenciones multilaterales se descargó desde la página web del organismo

¹⁸ El proceso en algunos casos se vio ralentizado debido a que la documentación proporcionada por organismos públicos se recibía en formatos (imágenes, etc.) que impedían incorporar los datos directamente al banco de datos que se estaba creando, demandando un trabajo previo de transcripción.

internacional correspondiente; para el resto, la consulta se realizó presencialmente, en oficinas de la AECID y en las sedes del Instituto de la Mujer y del Instituto de la Juventud, siendo necesario copiar manualmente su contenido, pues en la mayoría de los casos no se contaba con la versión electrónica de dichos documentos.

Como último recurso, se intentó buscar otras vías de acceso a la información. Por un lado, se solicitó la documentación correspondiente a las ONGD proponentes. Esto se realizó de manera puntual con dos organizaciones pequeñas y recurrentemente citadas como pioneras en entrevistas y cuyas propuestas de intervenciones financiadas por la AECID no habían sido enviadas por esta agencia. Por otro lado, se revisaron memorias institucionales de organismos oficiales y fundaciones públicas españolas que también se dedican a la cooperación al desarrollo y que recibieron subvenciones del MAEC en el período 2005-2010, así como las actas de Consejo de Ministros (organismo encargado de aprobar los acuerdos con organismos internacionales, además de los créditos y aportaciones directas derivadas de tales acuerdos) de este mismo período. En este último caso, el propósito era buscar cualquier información adicional sobre las contribuciones voluntarias a organismos y fondos internacionales que debían ser aprobados por este organismo, una vez constatada la existencia de contribuciones con estas características asignadas específicamente a la violencia de género y a otras formas de violencia contra las mujeres. En algunos casos, fue posible obtener algo más de información, ya que las subvenciones suelen ir acompañadas de una pequeña justificación o motivación.

Por último, hay que destacar que la investigación ha logrado cubrir la mayor y más importante parte de las intervenciones de la cooperación española estatal en violencia contra las mujeres en el período 2005-2010. El conjunto analizado abarca las principales convocatorias, modalidades e instrumentos de cooperación al desarrollo existentes en esos años y contempla todas las regiones geográficas en las que han actuado tanto la AECID como los demás organismos de cooperación internacional al desarrollo a nivel estatal. Todo ello, ratifica la representatividad y la relevancia del conjunto analizado.

2.3. La explotación del banco de datos Coopvidac

Teniendo en cuenta la existencia de múltiples maneras de acercarse a un corpus documental y debido a las características de extensión y variedad del material recopilado, la elección del método de análisis adquirió una especial relevancia. En este

sentido, el enfoque utilizado debía tener en cuenta las características típicas del análisis de políticas públicas, como la implicación de múltiples y diversos actores políticos, la formación de la agenda pública, la elaboración de soluciones, etc., y permitir tener en consideración la literatura existente a la hora de definir las categorías de análisis, de modo que se pudieran capturar los posibles matices en conceptos-clave de la investigación (como la violencia contra las mujeres) dentro del conjunto de documentos de intervenciones analizadas.

Para lograr esos objetivos, este trabajo se ha inspirado en una investigación sobre políticas de igualdad de género en la Unión Europea y en países europeos (incluyendo España) que tuvo que hacer frente a desafíos parecidos: un gran número de documentos en formatos variados y de diversas autorías, y la preocupación por dar visibilidad a la diversidad de interpretaciones explícitas e implícitas atribuidas a conceptos-clave y estrategias adoptadas por la política pública analizada (Bustelo y Lombardo 2006; Verloo y Lombardo 2007). Ese proyecto, denominado MAGEEQ¹⁹, utilizó el análisis de los marcos de interpretación aplicado al estudio de políticas públicas (*policy frame analysis*), una propuesta analítica compleja que incorpora contribuciones teóricas bastante diversas, como se expone a continuación. Nuestra investigación, por tanto, toma como base esta propuesta, adaptándola luego a las necesidades y posibilidades que marca el contexto de esta tesis doctoral, como también se detalla en las siguientes páginas.

El *policy frame analysis* parte del concepto de ‘marco’ o ‘marco de interpretación’, que tiene más difusión en la literatura sobre movimientos sociales, donde frecuentemente se utiliza para articular procesos de interpretación, atribución y construcción social de significados. Estos procesos enmarcadores, tal y como los entienden sus precursores inspirados en la perspectiva interaccionista de Erving Goffman, constituyen “esfuerzos estratégicos conscientes realizados por grupos de personas” con el objetivo de “forjar formas compartidas de considerar el mundo y a sí mismas que legitimen y muevan a la acción colectiva” (McAdam, McCarthy y Zald

¹⁹ El proyecto MAGEEQ (*Mainstreaming Gender Equality in Europe*), financiado por la Comisión Europea, comparó los ‘marcos interpretativos’ políticos de la desigualdad de género en la Unión Europea y seis países miembros (España, Grecia, Holanda, Austria, Hungría y Eslovenia). En España, la investigación estuvo a cargo del equipo de María Bustelo, de la Universidad Complutense de Madrid (véase la página web del proyecto: www.mageeq.net).

Interesa mencionar el uso del análisis de marcos de interpretación en otra investigación dedicada a estudiar las respuestas políticas de España y Holanda contra la violencia doméstica entre 1980 y 2009 (Roggeband 2012).

1999, 27). Los marcos de interpretación incluirían tres tareas centrales: diagnosticar algún aspecto de la vida social como problemático, proponer una solución a ese problema especificando lo que habría que hacer y realizar una llamada a la participación en esa acción (Snow y Benford 1988, 199); la buena interrelación entre esos tres marcos interpretativos (diagnóstico, pronóstico y acción) constituiría uno de los factores explicativos del éxito en la movilización y del alcance de los resultados de los movimientos sociales (Snow y Benford 1988).

Este enfoque combinaría la perspectiva interaccionista, al entender que los “marcos son colectiva y continuamente contruidos y reconstruidos por actores de los movimientos y sus públicos” (Polletta y Kai Ho 2006, 190), con la instrumental, en la medida que aporta ‘paquetes de interpretación’ sobre las acciones. En el estudio de las políticas públicas, ambas son importantes, ya que permiten poner en evidencia su aspecto socialmente construido, las influencias y relaciones entre actores implicados y la verificación de continuidades e inconsistencias entre las fases de diagnóstico, formulación y ejecución de las políticas públicas.

Considerando lo expuesto, tomamos del citado proyecto de investigación la formulación del concepto de marco de interpretación aplicado a las políticas públicas, por considerarlo adecuado a los propósitos de este trabajo:

[E]s un principio organizacional que transforma la información fragmentaria o incidental en un problema de política pública estructurado y significativo, cuya solución está implícita o explícitamente incluida.

Por lo tanto, los marcos interpretativos de las políticas no son descripciones de la realidad, sino construcciones específicas que dan significado a la realidad y moldean su comprensión. (Verloo 2005, 20)

En ese sentido, el análisis aquí propuesto se centra en los marcos de diagnóstico (cómo se formula el problema, qué causas se le atribuyen, por qué y por quién es visto como un problema, cuáles son los actores involucrados) y de pronóstico (qué solución se propone, qué metas y objetivos se presentan y qué actores están involucrados en esa propuesta). Se ha considerado que el tercer marco sugerido por la literatura dedicada al análisis de los movimientos sociales, el que describe la racionalidad para la acción, no estaría relacionado con los objetivos de nuestra investigación, puesto que dicho marco se centra en la potencialidad de activar e incentivar la participación individual en favor de determinada causa (Snow y Benford 1988, 204). Más concretamente, se parte de un examen de diferentes aspectos de los marcos de diagnóstico y pronóstico que realizan las acciones de la cooperación española respecto a la problemática de la violencia contra las mujeres, con el propósito de encontrar los enfoques predominantes en lo que respecta a esta política pública. Una vez identificados esos enfoques, se procede a

discutir y reflexionar sobre el significado y las posibles implicaciones de su adopción, relacionando los enfoques identificados con los demás datos e informaciones obtenidas durante la investigación. Todo ello porque en el ámbito de los estudios sobre la igualdad de género (Lombardo 2008) y de los estudios sobre el desarrollo²⁰, la cuestión de la violencia contra las mujeres está sujeta a una gran diversidad de interpretaciones y formas de actuación.

Asimismo, es importante señalar que este trabajo ha tenido en consideración recomendaciones metodológicas propias del estudio de la ayuda internacional, especialmente los planteamientos de Gasper (2003) para el examen de proyectos, programas y políticas. En primer lugar, este autor sugiere analizar los documentos correspondientes a estas intervenciones según su propia lógica, teniendo en cuenta que la mayoría sigue una matriz de formulación casi invariable (con campos como resumen narrativo en forma de cadena de medios-fines, actividades, objetivo general y objetivos inmediatos o propósitos). Es una fórmula derivada de herramientas de planificación y monitoreo por objetivos, siendo la más conocida de estas herramientas el llamado Enfoque del Marco Lógico (EML). No obstante, también es necesario identificar supuestos no explicitados en el diseño de las intervenciones, las divergencias y contradicciones con los acontecimientos reales para aprender toda la narración pretendida en relación a la temática en cuestión (Gasper 2003, 10). Estas orientaciones metodológicas, combinadas con el análisis de marcos de interpretación de políticas públicas y conceptos extraídos de la revisión de la literatura, permitieron definir un listado de preguntas-guía (véase la tabla 6) que fue aplicado a la lectura de los documentos de intervención sobre violencia contra las mujeres a los que se tuvo acceso. La combinación de las respuestas a esas preguntas y de las informaciones descriptivas de las intervenciones analizadas (año, país, presupuesto, etc., aspectos ya aportados en el ‘volcado’) dio lugar a la elaboración del banco de datos Coopvidac.

El listado de preguntas-guía se dividió en tres partes: Marco de Diagnóstico, Marco de Pronóstico y Otros aspectos. La mayoría de las preguntas-guía de los marcos de diagnóstico y pronóstico se basaban en las usadas en la investigación MAGEEQ (Lombardo 2008, 118-20), aunque fue necesario reducir su número, priorizando las consideradas más importantes y de mayor potencial analítico para los objetivos buscados. Fue necesario, también, añadir otras con el propósito de captar aspectos

²⁰ En el contexto de las políticas de desarrollo, Apthorpe (1996) advierte sobre cómo maneras rivales de nombrar, enmarcar y medir la pobreza definen agendas de acción absolutamente diferentes.

propios del ámbito de la cooperación al desarrollo (como las dimensiones geográficas y las de los contextos considerados), así como un campo en cada marco dedicado al tema de la masculinidad, debido a la relevancia que ha adquirido este tema recientemente en las acciones y los estudios sobre violencia contra las mujeres. En el contexto de la política de cooperación internacional, hay que tener en cuenta que se trabaja con documentos relacionados con entornos locales y nacionales diversos, cada uno con sus respectivas normativas, políticas, actores, etc.

La última columna de la tabla 6, a continuación, recoge aspectos descriptivos de la acción y del documento analizados, cuyos registros fueron considerados relevantes (idioma, tipo de acción o instrumento administrativo, duración y el presupuesto inicialmente solicitado), así como elementos complementarios que no se ajustaban a los campos de los marcos de diagnóstico y pronóstico (observaciones de la investigadora sobre equilibrio, coherencia y ausencias en relación a lo que se consideraba como problema y las soluciones propuestas; referencias a políticas internas españolas y europeas de igualdad de género y violencia contra las mujeres; reconocimiento de límites y riesgos de la intervención propuesta; y menciones a la legitimidad de la propuesta o de los actores).

Tabla 6. Preguntas-guía aplicadas a documentos para la elaboración de Coopvidac

Marco Diagnóstico	Marco Pronóstico	Otros aspectos
D.1. ¿Qué violencia(s)?	P.1. ¿Qué hacer?	DESCRIPCIÓN:
D.2. ¿Por qué está considerado un problema?	P.2. ¿Por qué actuar?	O.1. Idioma (del documento)
D.3. ¿Cuáles son las causas?	P.3. ¿Qué prioridad o estrategia adoptar?	O.2. Instrumento/ procedimiento adm.
D.4. ¿Dónde existe?	P.4. ¿Dónde actuar?	O.3. Años de duración
D.5. Dimensiones de género (descripción del problema)	P.5. Dimensiones de género (consideradas en la acción)	O.4. Presupuesto inicialmente solicitado
D.6. Interseccionalidades (descripción del problema)	P.6. Interseccionalidades (consideradas en la acción)	ELEMENTOS COMPLEMENTARES:
D.7. Contextos (descripción del problema)	P.7. Contexto (considerado en la acción)	O.5. Obs.– equilibrio, coherencia, ausencias
D.8. Roles: ¿quién la causa?	P.8. ¿Quién actúa?	O.6. Límites reconocidos
D.9. Roles: ¿quién es responsable?	P.9. ¿Por qué actúa?	O.7. Legitimidad – de la acción o de los actores
D.10. Roles: ¿a quién afecta?	P.10. ¿Quién propone?	O.8. Mención a políticas sobre violencia de género o igualdad (España o Unión Europea)
D.11. Roles: ¿quién identifica?	P.11. ¿Sobre quién se actúa?	
D.12. Masculinidades	P.12. Masculinidades	

La primera fase de inserción de datos se hizo con documentos del Programa de Cooperación Internacional ‘Mujer y Desarrollo’, del Instituto de la Mujer, un conjunto más homogéneo (en él se priorizan países de una única región y líneas de trabajo exclusivamente en temas de género) y aparentemente más sencillo que los documentos de otros instrumentos de cooperación, como por ejemplo los de la AECID. Este trabajo piloto para la construcción del banco de datos puso de manifiesto la necesidad de crear campos no relacionados con los marcos de interpretación con el objetivo de mejorar la caracterización de las intervenciones, y también de hacer más precisas las preguntas-guía relacionadas con las dimensiones de género. Tras esta ampliación, se volvió a examinar ese primer conjunto de documentos para completar los campos que faltaban; a continuación, se continuó introduciendo los datos correspondientes al resto de las intervenciones, hasta dar por concluida la construcción de Coopvidac.

Así, a lo largo de varios meses de trabajo y a medida que se recibían y se consultaban los documentos, se fueron recogiendo las respuestas en los campos de manera textual, sin resumir o interpretar previamente los contenidos. De este modo, cada intervención relacionada con la violencia contra las mujeres financiada en el período 2005-2010 y a cuya propuesta se había podido acceder, contó con una entrada en el banco de datos, lo que permitió realizar una sistematización de los contenidos de estos documentos (relacionándolos, además, con la información pública y anteriormente obtenida con el ‘volcado’) que luego pudieron ser categorizados y analizados. Es importante señalar que, dada la diversidad de formatos y extensión de los documentos, frecuentemente no se encontró en ellos respuestas para todas las preguntas.

Por otro lado, como muchas acciones habían sido sometidas a una convocatoria pública, lo que suele exigir la cumplimentación de una matriz de planificación o de un formulario predeterminados, en la mayoría de los casos las respuestas a una pregunta-guía se encontraban bajo los mismos epígrafes de los documentos. Por ejemplo: el tipo de violencia (campo D.1 en la tabla anterior) solía encontrarse en el título, el porqué era considerada un problema (D.2) estaba generalmente descrito en la contextualización o en el árbol de problemas, y la propuesta de qué hacer (P.1) se localizaba normalmente en los objetivos o en el árbol de objetivos. Sin embargo, esto no significaba que los campos del banco de datos se pudieran completar de forma automática con un simple acto de cortar y pegar fragmentos. Muchas respuestas eran difusas o poco explícitas, lo que exigió una lectura atenta del contenido integral de esos documentos.

Una vez finalizada esa etapa, el siguiente paso fue trasladar el banco de datos en formato Excel al software de análisis cualitativo NVivo 10, para realizar la codificación

de su contenido textual a diferentes niveles. La utilización del NVivo 10 ha facilitado la aplicación de herramientas analíticas diversificadas, como la comparación constante y el conteo de palabras, dependiendo de las características de cada parte del banco de datos examinada²¹. El tratamiento cuantitativo de los datos cualitativos, otra de las funciones de programas como NVivo 10 (Bazeley 1999), también ha facilitado la identificación de aspectos significativos de esas acciones. En los primeros análisis realizados, más que aspectos destacables o comparables, se observaba dispersión, diversidad. Por esta razón, se tomó la decisión de reorganizar el banco de datos en grupos más pequeños y homogéneos entre sí (aunque éstos siguiesen incluyendo acciones bastante diversas) y así encontrar elementos que permitiesen construir los marcos de interpretación preponderantes sobre violencia contra las mujeres en el ámbito de esa política pública. Como se verá en el capítulo 7, el análisis se desarrolló finalmente a partir de cuatro subtemas: violencia familiar y de género, trata y explotación sexual y laboral, violencias enmarcadas como ‘prácticas tradicionales nocivas’, y contextos de conflictos armados, postconflictos o inseguridad ciudadana extrema.

El análisis cuantitativo, a su vez, analizó esas mismas propuestas de acción teniendo en cuenta los recursos financieros invertidos, su duración, los países y regiones priorizados, y los tipos de violencia considerados, situándolas, además, en el contexto general de esa política pública en el período que nos ocupa. Al igual que ocurría con los datos cualitativos, la información de tipo cuantitativo muestra sesgos derivados del acceso desigual que se ha tenido a los documentos. De todas maneras, los datos obtenidos y contrastados a lo largo de la investigación han posibilitado, tras los análisis pertinentes, aportar aproximaciones inéditas sobre la inversión económica realizada por parte de la cooperación española para combatir las violencias contra las mujeres y conocer dónde se ha trabajado más intensamente en el tema.

La investigación también se basó de modo sustantivo en el material emanado de las entrevistas a los actores, utilizándolas fundamentalmente para completar y profundizar la identificación de los enfoques predominantes sobre violencia contra las mujeres en la política española de cooperación internacional al desarrollo. Asimismo se obtuvieron datos de otros documentos de la cooperación española y en la literatura que aborda el proceso de institucionalización de esta política pública española y la incorporación del enfoque de género en ese ámbito. Las entrevistas aportaron tanto la

²¹ Para un examen de las posibilidades en el uso de programas informáticos de análisis cualitativo de datos, véase, por ejemplo, Leech y Onwuegbuzie (2011).

visión de actores directamente implicados en la toma de decisión de esa política pública, como impresiones y consideraciones de personal experto.

2.4. Decisiones y limitaciones metodológicas

Antes de dar por concluidas las consideraciones metodológicas, queremos apuntar por qué hubo que cambiar algunas decisiones iniciales sobre el diseño de esta investigación o no pudieron ser ejecutadas tal como se había pensado.

En principio, se había planteado solicitar entrevistas e información si no a todas, al menos a las principales unidades administrativas responsables por la política pública analizada. Sin embargo, no todos los contactos realizados tuvieron un resultado positivo. Los motivos para ello fueron variados. Algunos de los responsables de las unidades u organismos contactados prefirieron no atender a la solicitud de entrevista, argumentando, en la mayoría de los casos, que no podrían aportar el tipo de información requerida, aunque estuviesen en unidades administrativas con responsabilidad bastante evidente en la ejecución de la política de cooperación al desarrollo. Tales contactos (presenciales, telefónicos, por correo electrónico e incluso vía correo postal) supusieron una inversión de tiempo y esfuerzo importante durante varios meses. Aunque muchas veces el resultado no fue el esperado, contribuyeron a orientar la obtención de datos y la priorización de esfuerzos a lo largo de la investigación, motivo por el cual merecen ser registrados (la tabla 7, página 51, recoge las unidades administrativas contactadas).

También merecen mención las dificultades encontradas para realizar una parte considerable de las entrevistas. En la administración pública, el período previo a las elecciones generales anticipadas de 2011, el subsiguiente cambio de Gobierno y la reestructuración ministerial que este conllevó, supusieron la suspensión durante meses de los contactos ya en marcha. En lo que respecta a las organizaciones de la sociedad civil y de desarrollo, el recorte de fondos públicos durante los años en que la crisis económica se agravó, dejó a estas organizaciones en una situación de inestabilidad, con menos recursos financieros, personal y tiempo disponible. Por todo ello, hubo respuestas negativas (o ausencia de respuestas) y retrasos en la realización de algunas entrevistas, pese al constante seguimiento que se hizo de cada uno de los casos. Es especialmente desafortunado que por estos motivos el estudio no haya podido recoger las opiniones de determinados actores-clave de esa política, como la representación en el Parlamento del partido gobernante, algunos organismos internacionales receptores de fondos españoles o determinadas unidades de la AECID o del MAEC.

Inicialmente, también se planteó la realización de una encuesta online dirigida al personal expatriado, en especial a especialistas en género o a responsables de programas en las Oficinas Técnicas de Cooperación (OTC), las unidades de representación de la AECID en el exterior (en cuarenta y cuatro países en el momento en que se inició la investigación). Sin embargo, pronto se constató la imposibilidad de identificar con precisión el grupo al que dirigir un cuestionario sobre acciones aprobadas o llevadas a cabo entre tres y ocho años antes de la realización de la encuesta. Además de la frecuente rotación de este personal por diferentes países y organizaciones, ya se había puesto en marcha una notable reducción del número de OTC con responsables de este tipo. Algunos meses después se confirmó el cierre de varias de estas unidades²².

Por fin, queremos señalar posibles limitaciones resultantes de elecciones metodológicas. Como ya se ha indicado, esta tesis propone un análisis del contenido de las acciones relacionadas con las violencias contra las mujeres dentro de la política de cooperación al desarrollo, y no es su objetivo realizar una evaluación de las mismas o de sus resultados. El estudio se orienta, por tanto, a la construcción de conocimiento a partir de los planteamientos de las intervenciones analizadas; no pretende tener carácter aplicado, es decir, explorar cómo se ponen en práctica con el propósito de mejorarlas, rendir cuentas o ilustrar acciones futuras, aspectos estos propios de las actividades evaluativas (Bustelo 1999).

En diversas ocasiones, durante esta investigación, hubo que aclarar a personas contactadas y entrevistadas que no se trataba de una evaluación de la política española de cooperación al desarrollo. Por un lado, esta elección tiene la desventaja de que no se puede saber hasta qué punto las observaciones y conclusiones de este estudio reflejan la situación real de dichas acciones, en el sentido de que seguramente existan aspectos que escapen a un examen que aborda estas iniciativas desde la distancia, a través del análisis documental y de entrevistas con personas que no son ni ‘beneficiarias’ ni necesariamente están vinculadas de manera directa a su ejecución. Por otro lado, sin embargo, esta misma opción metodológica permite obtener un conocimiento exhaustivo y preciso a la vez que relevante de las prioridades y enfoques de la política de cooperación internacional en relación al tema abordado, algo que posiblemente escape a un trabajo de carácter evaluativo o incluso a una investigación sobre el terreno.

²² Fueron cerradas en los últimos años al menos las siguientes OTC: Angola, Argentina, Brasil, Camboya, Chile, Irak, Líbano, Namibia, República Democrática del Congo, Timor Oriental, Túnez, Uruguay, Venezuela.

Tabla 7. Otros contactos realizados a lo largo de la investigación

Unidad administrativa	Cómo
Servicio de Estadística, Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), MAEC.	Visita, emails.
Oficina de Derechos Humanos, MAEC.	Visita.
Dirección General de Política Exterior y Asuntos Multilaterales, Globales y de Seguridad, MAEC.	Visita, emails.
Oficina de Acción Humanitaria, AECID.	Visita, emails.
Gabinete Técnico, AECID.	Teléfono, emails.
Área de Organismos Internacionales, Departamento de Cooperación Multilateral, AECID.	Teléfono, emails.
Departamento de Relaciones Culturales y Científicas de AECID.	Visitas, emails.
Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada (PIFTE), AECID-OEI.	Emails.
Centros de Formación AECID (Bolivia, Colombia, Guatemala y Uruguay).	Emails.
Programa Indígena, AECID.	Visita, emails.
Fondo para Concesión de Microcréditos, AECID.	Emails.
Subdirección General de Cooperación y Defensa Civil, Ministerio de Defensa.	Carta.
Dirección General de Financiación Internacional, Ministerio de Economía y Hacienda.	Teléfono, emails.
Secretaría General de Fomento Financiero para la Internacionalización, Ministerio de Economía y Competitividad.	Emails.
Subdirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo	Emails.
Dirección General de Integración de Inmigrantes, Ministerio de Trabajo e Inmigración.	Visita.
Área de Coordinación Relaciones Internacionales, Secretaría de Estado de Empleo, Ministerio de Trabajo e Inmigración.	Emails.
Subdirección General de Cooperación Policial Internacional, Ministerio del Interior.	Teléfono, emails.
Área de Relaciones Externas y Actividades Comerciales, Ministerio de Fomento.	Emails.
Subdirección Gral. Programas Internacionales de Investigación y Relaciones Institucionales, Instituto de Salud Carlos III.	Emails.
Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.	Visita.
Unidad de Finanzas Públicas Institucionalidad Democrática y Diálogo Social, Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).	Teléfono y emails.
Servicio de Organismos Internacionales y Cooperación Bilateral, Instituto de la Juventud.	Visitas.
Organización Iberoamericana de Juventud, Secretaría General Iberoamericana - OIJ/SEGIB.	Visita, emails.

PARTE II – MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO

CAPÍTULO 3 - EL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, UN FIN Y UN MEDIO A EXAMEN

Capítulo 3 – EL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, UN FIN Y UN MEDIO A EXAMEN

Los distintos significados del término desarrollo provocan que, implícita o explícitamente, se entienda de manera diversa el papel y la necesidad de las políticas de cooperación al desarrollo y, dentro de ellas, de las acciones relacionadas con las violencias contra las mujeres. En este capítulo, ‘desarrollo’ y ‘cooperación internacional al desarrollo’ se tratarán separadamente. Se entenderá la cooperación internacional como “una herramienta, un instrumento, en este caso diseñado para contribuir al desarrollo, mientras que el desarrollo es la finalidad, el objetivo que se pretende conseguir mediante la cooperación” (Sotillo Lorenzo 2010, 73).

Es posible que esa división resulte artificial, ya que es difícil separar el concepto de desarrollo de su aplicación política, pero permitirá evidenciar que igual que en el caso del desarrollo, la cooperación internacional al desarrollo se entiende de diversas maneras: desde un camino posible (no siempre el más importante) para alcanzar el ‘desarrollo’ hasta una práctica (y un discurso, dirían algunos autores) que contribuye a mantener el ‘subdesarrollo’. Aunque este trabajo privilegia la perspectiva de la cooperación internacional como una política pública específica de un país donante (España, en este caso), se reconoce que hay otros matices y enfoques, lo que contribuye a dar al debate una mayor complejidad. Esas posiciones se examinarán a continuación, con especial atención hacia las confluencias teóricas y prácticas sobre las mujeres y las relaciones de género.

3.1. Desarrollo: continuidad y divergencias de una idea

Evolución, crecimiento, progreso, desarrollo casi siempre han sido considerados sinónimos en la historia del pensamiento occidental. La aparición de la idea de desarrollo como explicación de los cambios en una sociedad se remontaría a la filosofía griega clásica, y su persistencia en el tiempo podría atribuirse a la creación de una poderosa ‘metáfora del crecimiento’ (Nisbet 1976, 1981)²³. Cambiaron los tiempos y las

²³ La metáfora del crecimiento para Nisbet supone una concepción del desarrollo que lleva implícitas las propiedades de naturalidad, immanencia, continuidad y acumulación (posee etapas o fases que se suceden) y direccionalidad (se mueve de un punto a otro), se presenta, además, como necesidad lógica y una diferenciación que va de lo más homogéneo a lo más heterogéneo, de lo simple a lo complejo.

ideologías, pero la analogía con el ciclo vital permaneció en la explicación del conocimiento humano, la historia, la civilización, el capitalismo o la cultura.

El auge de la idea de progreso coincide con el período de surgimiento y consolidación de las ciencias sociales. Siguiendo a Nisbet y Bock en sus revisiones de las corrientes clásicas, se observa que desde mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XX, la idea de progreso dominó el pensamiento académico en esas disciplinas, “incluso teniendo en cuenta la creciente importancia de ideas como las de igualdad, justicia social y soberanía popular” (Nisbet 1981, 243). Esta idea era útil para explicar el pasado y la diversidad de situaciones, al tiempo que proporcionaba una visión optimista del futuro. Teóricos de la historia natural, como Rousseau y Adam Smith, se interesaron por identificar aquellos factores de la naturaleza humana o social que habrían sido determinantes para el desarrollo de la civilización, mostrándose convencidos de la progresividad natural de las sociedades (Bock 1988).

En este contexto, la teoría del **evolucionismo social** asume algunas premisas de la metáfora del crecimiento y de la historia natural sobre el cambio, pero ampliándolas y apoyándolas en los cada vez más abundantes datos etnográficos. Hay, sin embargo, una distancia teórica con respecto al posterior evolucionismo biológico decimonónico, fundamentado en la idea de la selección natural para explicar la variación de los organismos. La evolución social explica la diferencia por medio de la construcción de tipologías y del progreso continuo a lo largo de esas categorías. Además, utiliza el método comparativo, que organiza y analiza la variación del fenómeno estudiado en el tiempo y el espacio. En sus inicios, las ciencias sociales frecuentemente establecían unas tipologías de sociedades con polos opuestos y excluyentes, sintetizadores de una comparación entre la emergente sociedad industrial moderna y las sociedades consideradas tradicionales, estableciendo en ocasiones tipos intermedios. El método comparativo se utilizó para justificar la posición superior de la sociedad occidental en cualquiera de esas tipologías evolutivas utilizadas²⁴. Su carácter etnocéntrico fue duramente criticado a partir del siglo XX; sin embargo, sigue aplicándose, aunque posiblemente de forma más suavizada:

Continuamos dividiendo las sociedades del mundo en ‘desarrolladas’ y ‘no desarrolladas’, con uno o más grados de desarrollo intermedio intercalados, para

²⁴ Los evolucionistas sociales no se preocuparon por aplicar sus secuencias lineares a todo el mundo, ya que al contrario de lo que harán los funcionalistas décadas más tarde no se ocuparon de pueblos y culturas concretas. El objetivo era identificar el camino natural de desarrollo de la civilización en conjunto, tomando la sociedad occidental como parámetro y destino último (Nisbet 1976).

facilitar esa continuidad tan apreciada hoy como lo fue en cualquier período del pasado. No nos permitiríamos utilizar las palabras ‘salvaje’, ‘bárbaro’ y ‘civilizado’ hoy, creyendo que pueden sugerir etnocentrismo (...). (Nisbet 1976, 212-3)

Las **teorías del conflicto**, que a grandes rasgos atribuían la razón del cambio social al conflicto derivado de un antagonismo interno, también se basaban en la idea de progreso. El materialismo histórico tal vez sea la más influyente de ellas. En lo que concierne al desarrollo, lo que interesa resaltar de la teoría de Marx y Engels sobre el cambio social es que entienden este proceso como un fenómeno continuo, resultado de la interacción humana con la naturaleza e impulsado por la dialéctica de la lucha de clases inherente a la estructura de los modos de producción económica. En cierto modo, no está lejos del evolucionismo social en el sentido de que entiende la historia de la humanidad como una imparable y necesaria sucesión de etapas, caracterizadas por su modo de producción económico y forma de propiedad (Nisbet 1976; Solé 1998). La peculiaridad de su teoría respecto al concepto de desarrollo, es que además de la creación de una tipología social y un agudo análisis del capitalismo occidental, posee un aspecto práctico que propugna un programa para transformar las condiciones sociales y promover la evolución hacia modos de producción considerados superiores. Otro aspecto importante es que la atención de Marx estaba fundamentalmente dirigida hacia las sociedades industrializadas y sus posibilidades de superar el modo capitalista de producción económica (Strasser y Randall 1981; Noble 2000).

Las **teorías funcionalistas**, por su vez, aunque centradas en una cultura, una sociedad o un sistema social (en general simple, primitivo y elemental) y en la explicación de su funcionamiento, extrapolaban sus conclusiones a otros sistemas de la escala evolutiva que describían. La idea subyacente era que si se lograba explicar el funcionamiento del sistema más simple, la misma teoría podría ser aplicada a sistemas más evolucionados. Es erróneo pensar que la finalidad de la teoría funcionalista era explicar la estabilidad social, ya que su interés también radicaba en el cambio, en encontrar qué elementos del funcionamiento interno de la estructura social que estudiaba posibilitarían cambios, adaptación y supervivencia. Radcliffe-Brown, Talcott Parsons y otros funcionalistas no ignoraban los factores exógenos de cambio ni negaban el proceso histórico o casualidades que afectaban al sistema social. Sin embargo, para ellos eran más importantes las fuentes naturales de cambio existentes dentro de los sistemas sociales, de las que “fluyen pautas de cambio que son tan congruentes al sistema social como el crecimiento lo es dentro del organismo vivo” (Nisbet 1976, 245).

3.1.1. Nuevas teorías y (algunos) supuestos no tan nuevos

No es difícil reconocer en las principales teorías sobre el desarrollo formuladas en el siglo XX hipótesis fundamentadas en supuestos de las corrientes anteriores. A partir de mediados del siglo, la preocupación por entender y explicar el desarrollo (y el subdesarrollo) aumentó al tiempo que se iniciaba la institucionalización de la cooperación al desarrollo. Surgieron teorías específicas, muchas de ellas próximas a las ciencias económicas, formando incluso un subcampo en esa disciplina, el de la Teoría Económica del Desarrollo. Las referencias al desarrollo, sin embargo, ya existían en la economía clásica de los siglos XVIII y XIX, preocupada por la dinámica de crecimiento a largo plazo, en los estudios de Karl Marx sobre las áreas menos desarrolladas y en las contribuciones de pensadores neoclásicos sobre un desarrollo gradual, continuo, armónico y acumulativo (Hidalgo Capitán 1998). Otro pionero en la reflexión económica sobre este tema fue John Maynard Keynes, que aun sin dedicarse directamente a ello, sentó las bases para que surgiesen nuevas teorías sobre desarrollo. Su pensamiento rompe con el neoclasicismo (Bustelo 1998) y permite que la cooperación al desarrollo se fortalezca como opción política, pues fue inspirada por el Plan Marshall y otras prácticas estatales de la posguerra basadas en su propuestas (Leys 1996).

Al igual que ocurre con el funcionalismo, se suele acusar a las **teorías de la modernización** de mantener intactos los supuestos del evolucionismo social, como por ejemplo la atribución del cambio a factores endógenos. Pero, contrariamente al funcionalismo, el foco de atención de las teorías de la modernización fueron los procesos de industrialización y transformación económica y tecnológica de las sociedades occidentales capitalistas a mediados del siglo XX. En los años 40 y 50 del siglo XX, prestaron especial atención a aquellas sociedades recién salidas de la colonización para encontrar los factores que dificultaban o propiciaban su pleno desarrollo.

Walt Rostow y sus cinco etapas del crecimiento económico de las sociedades modernas es uno de los teóricos de esta corriente más recordados. Su análisis sigue la habitual división en sociedades modernas y tradicionales, pero va más allá de la observación histórica y sostiene que hay un camino de desarrollo que deben seguir las sociedades en sus etapas iniciales o intermedias de crecimiento económico, cuya culminación sería el régimen capitalista y la democracia representativa al estilo estadounidense. Asume que la diversidad de sociedades en etapas intermedias de desarrollo desaparecería con la industrialización y la llegada a la etapa final de este

proceso (Eisenstadt 1992). La influencia de estas teorías en la acción política de los Estados suele ser atribuida a la formulación de una respuesta clara sobre cómo actuar, lo que sumado a la tradición occidental evolucionista, justificaba prácticas de dominación político-económicas (Rist 2002). Aunque muchas de las críticas dirigidas a esta corriente no diferenciaban sus matices, la diversidad de conceptualizaciones sobre la modernidad y sobre las explicaciones de mecanismos que promueven y obstaculizan el desarrollo (Smelser 1992), es cierto que invariablemente partía de supuestos sesgados y etnocéntricos:

La aparición de la noción de modernización en la literatura sociológica gira en torno a un hecho histórico reciente, a saber, el fin del colonialismo y la propagación en los países del “Tercer Mundo”, de movimientos nacionalistas por la independencia (...). Consciente o inconscientemente, los teóricos sociales occidentales tienen presente este hecho histórico al enfocar el problema de la modernización. Implícita y explícitamente, comparan a los países recientemente independientes con sus propias sociedades occidentales (Solé 1998, 176).

Su influencia aún se nota. En la Sociología contemporánea continúan los esfuerzos, algunos de ellos explícitos, para revisar la teoría de la modernización²⁵. En la Economía, también se buscaba que los países considerados menos desarrollados alcanzasen esa modernización, entendiendo ésta siempre como la situación en la que se encuentran los países más industrializados y ricos. Además de la simplicidad y el etnocentrismo de su argumento sobre una senda universal del desarrollo, se les criticaron otros aspectos, entre ellos que resaltaban las particularidades negativas de las economías subdesarrolladas (entendidas como obstáculos y generadoras de círculos viciosos de pobreza y más subdesarrollo), la identificación unívoca que hacían entre desarrollo y crecimiento económico, y su idea de la industrialización como elemento clave para la modernización y su defensa de medidas de protección económica. En ese sentido, ha servido para justificar las políticas de cooperación, además de incentivar las inversiones extranjeras y el endeudamiento externo²⁶. Así, muchas de las intervenciones ejecutadas con el objetivo de romper dichos círculos tuvieron el efecto contrario:

²⁵ Inglehart (1999) e Inglehart y Welzel (2006) proponen una relectura de la teoría de la modernización sin sus supuestos etnocéntricos, deterministas o lineales (en sus términos, una 'teoría de la posmodernización'), con el objetivo de comprobar probabilidades (y no justificar determinismos culturales o económicos) respecto la relación entre mejora socioeconómica y difusión de valores del desarrollo humano y la democracia.

²⁶ Las consideraciones modernizadoras sobre las causas del subdesarrollo llegaron al campo del Derecho. En el contexto de la Guerra Fría y de las acciones del Gobierno estadounidense para evitar la influencia comunista, se defendió la vinculación entre el desarrollo socioeconómico y el jurídico y se buscó promover reformas en la enseñanza del derecho en países asiáticos, africanos y latinoamericanos. Sin embargo, su fracaso (atribuido a su etnocentrismo, ingenuidad de propósitos y resistencias en los sistemas educativos receptores) fue rápidamente evidente (Rodríguez Garavito 2006).

reforzaron las relaciones de dependencia y empeoraron la situación económica de esos países (Bustelo 1998; Hidalgo Capitán 1998). Aun así, se atribuye a esta corriente el logro de poner de manifiesto la existencia de barreras estructurales para el crecimiento económico en los países subdesarrollados (Hidalgo Capitán 1998, 78).

Por todo lo expuesto, la cooperación internacional al desarrollo pensada dentro del neoevolucionismo social, especialmente según las teorías de modernización, se configura como una acción convencida de los beneficios del progreso y de la superioridad de las sociedades que se encuentran en la cima de la escala evolutiva, dirigida, por lo tanto, a promover la modernización de sociedades no occidentales.

Para esos primeros planificadores del desarrollo, las mujeres representaban sobretudo un obstáculo al progreso, una resistencia a la modernización que era preciso superar (Parpart 1994). En 1970, la economista danesa Ester Boserup, en una inédita crítica a los esquemas de desarrollo dirigidos a ‘modernizar’ la agricultura de países africanos, llamó la atención sobre la exclusión de las mujeres. La autora cuestionó la asunción de que el progreso económico siempre las beneficiaría y demostró el deterioro de su estatus con la implantación de proyectos que sólo tenían en consideración a los varones. Poco más tarde, la estadounidense Irene Tinker también señaló el incremento de la brecha entre hombres y mujeres en estas circunstancias, debido a factores como la falta de reconocimiento del rol productivo de las mujeres, la prioridad de actividades que las limitaban al hogar y reforzaban roles tradicionales, y la aplicación de perspectivas occidentales no ajustadas a la realidad local (Moser 1993b; Kabeer 1998). Pero fue en el clásico trabajo de su mentora, *La Mujer y el Desarrollo Económico*, donde se destacó por primera vez, y en un lenguaje accesible y propio de la planificación, los efectos nocivos de la acción de colonos y asesores técnicos extranjeros en los sistemas agrícolas africanos:

Se enseña a los hombres a aplicar los métodos modernos en el cultivo de una determinada cosecha, mientras que las mujeres continúan empleando los métodos tradicionales en el cultivo de sus cosechas, y debido a ello obtienen un rendimiento mucho menor por sus esfuerzos. (...) [A] los hombres se les instruye en el cultivo de cosechas destinadas a la venta. Estas cosechas mejoran de manera gradual gracias a la investigación sistemática y a otras inversiones de la administración pública. Sin embargo, el cultivo de las cosechas para el autoconsumo, el realizado por las mujeres, no se ve favorecido por ningún apoyo o investigación por parte del Estado, por lo menos hasta fechas recientes. (...) Las técnicas modernas las emplean los hombres, que utilizan métodos industriales, mientras que las mujeres efectúan los trabajos manuales degradantes. (...) En pocas palabras, los hombres representan la agricultura moderna, las mujeres las labores tradicionales. (Boserup 1993, 67-9)

Otra crítica de esas pioneras de los estudios sobre mujer y desarrollo se refería a la situación de las mujeres en las políticas de desarrollo: las consideraba vulnerables (al

lado de las personas enfermas o con discapacidad) o exclusivamente como madres, esposas y cuidadoras de sus familias. Inspiradas en programas europeos de bienestar social de la posguerra (Buvinic *apud*. Moser 1993b), las medidas de ayuda dirigidas a la población pobre en general y a las mujeres en particular fueron impulsadas bajo lo que se conoció como el **enfoque del bienestar**. Su principal preocupación era garantizar la supervivencia física de la familia, mediante la provisión directa de alimentos. Caroline Moser sugiere que este enfoque se basaba en tres supuestos problemáticos: (i) las mujeres son receptoras pasivas del desarrollo, (ii) la maternidad es su rol más importante, (iii) la crianza de los hijos es su rol más eficaz en el desarrollo económico. El enfoque del bienestar “se centra enteramente en la mujer en términos de su rol reproductivo, supone productivo el rol de los hombres e identifica la díada madre-hijo como la unidad de preocupación” (Moser 1993b, 38).

Al pensamiento catastrofista sobre la ‘bomba poblacional’, preocupación latente que se hizo más fuerte en la agenda internacional a mediados del siglo XX (Pérez Díaz 1994), se sumó otro objetivo de este enfoque: controlar el crecimiento de la población. Las mujeres pobres de países del Tercer Mundo se convirtieron en las responsables de la limitación del tamaño de sus familias: “los primeros programas asumieron que se podría reducir la pobreza simplemente limitando la fertilidad mediante la difusión amplia de información y tecnología anticonceptiva para las mujeres” (Moser 1993b, 39-46). Como sintetiza Richey (2000, 250), la ‘población’ se volvió un problema de desarrollo y la solución parecía encontrarse en la ayuda internacional dirigida a fomentar la contracepción mediante programas de planificación familiar, especialmente en el caso de la política exterior estadounidense influida por la presión política de grupos neomalthusianos. Aunque los programas de planificación familiar se aplican hoy en día siguiendo, generalmente, directrices distintas a estas –gracias, entre otros motivos, a la influencia ejercida por profesionales de organizaciones dedicadas a la demografía, activistas y organizaciones feministas y de mujeres en la salud (Dixon-Mueller y Germain 1994; Presser 2000; Smyth 2000)–, el enfoque del bienestar fue dominante hasta al menos los años 70. Este enfoque también seguiría presente en acciones relacionadas a la desnutrición infantil y de ayuda de emergencia a personas refugiadas, damnificadas y otros grupos vulnerables (Moser 1993b).

Las críticas sobre la ausencia de las mujeres en las políticas de desarrollo adquirieron especial relevancia al aparecer en un período de reactivación del movimiento feminista, de intensas protestas sociales en países del Norte y de luchas de liberación colonial en otras partes del mundo, lo que provocó que las instituciones y las

teorías del *mainstream* del desarrollo se abrieran a otras cuestiones, además del crecimiento económico (Kabeer 1998). Desde mediados de los años 60, empezaron a incorporar temáticas sociales a las preocupaciones de las que se ocupaba este campo, especialmente la erradicación de la pobreza.

Uno de los hitos de este cambio ocurrió en 1969, en la 11ª Conferencia Mundial de la Sociedad Internacional para el Desarrollo celebrada en Nueva Delhi, India, con la presentación de una propuesta para enfocar el desarrollo económico que mostraba un alto contenido social. A partir de esta conferencia, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) puso en marcha misiones en distintos países para encontrar vías para superar el desempleo y el subempleo. Sus informes apuntaban, entre otros aspectos, la necesidad no sólo de crear empleos, sino también de generar oportunidades de empleo productivo para reducir la incidencia de la pobreza, posibilitando la elaboración de hipótesis sobre las trabas que la desigualdad podría poner al desarrollo. Por primera vez, la situación específica de la mujer (y no de su familia o grupo social) entró a formar parte del debate sobre el desarrollo, aunque de manera limitada y circunscrita al ámbito laboral (Bustelo 1998, 147).

En torno a las mencionadas críticas al enfoque del bienestar y a la falta de consideración del rol productivo de las mujeres, fue desarrollando el campo conocido como **Mujeres en el Desarrollo – MED**. Aunque tuvo luego varias perspectivas, su preocupación original era integrar de manera equitativa a las mujeres en el desarrollo, especialmente a través del acceso al empleo, a la educación, a la tierra y al crédito. Según una conocida tipología propuesta a principios de los 80 y ampliada por Caroline Moser a finales de esa década, la corriente MED se subdivide en cuatro enfoques principales: equidad, antipobreza, eficiencia y empoderamiento²⁷. Aunque disfrutó de una duración breve, el **enfoque de la equidad** tuvo importancia ya que se proponía considerar “la subordinación de las mujeres no sólo en el contexto de la familia, sino también en las relaciones entre hombres y mujeres en el mercado y, por lo tanto, [dar] un énfasis considerable a la independencia económica como sinónimo de equidad” (Moser 1993b, 44). Novedoso en el momento en que surgió, el campo MED se configuró como un reflejo de las preocupaciones feministas liberales occidentales de esa

²⁷ La subdivisión de enfoques MED debe entenderse como una propuesta analítica y no como una distinción absoluta o estática: “cada uno de estos diferentes planteamientos representaba una propuesta a distintos conjuntos de imperativos, pero no hay que verlos ni como cronológicos ni como mutuamente excluyentes. En algunas de las agencias perduraron viejos enfoques a medida que se intentaba introducir otros nuevos; en otras, se regresó a los antiguos cuando se fueron a pique los nuevos” (Kabeer 1998, 23).

época y, por lo tanto, no pudo escapar al paradigma de la modernización que inicialmente criticaba (Vargas Valente 1992; Parpart 1994). La contradicción es solamente superficial:

No era el modelo principal de modernización lo que se atacaba sino el hecho de que las mujeres no se hubieran beneficiado de él. No era la solución del mercado *per se* la que había fallado a las mujeres sino los planificadores y empleadores –y a veces las mismas mujeres–, cuyos prejuicios irracionales e hipótesis extraviadas llevaron a resultados discriminatorios. (Kabeer 1998, 37)

Posiblemente gracias a que no criticaban en profundidad el modelo vigente, los argumentos MED rápidamente alcanzaron las instituciones internacionales: el Segundo Decenio del Desarrollo de las Naciones Unidas (1971-1980)²⁸ así como la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer (1975) establecieron como objetivo la integración y participación activa de las mujeres en el desarrollo. Ya a principios de los años 70 surgen encuentros, grupos y unidades sobre ‘mujer y desarrollo’ en agencias de cooperación internacional, así como programas MED en organismos de Naciones Unidas (Jain 2005, 56-7). La agencia estadounidense USAID fue la primera en cambiar su línea de actuación, tras la aprobación en 1973 de una ley que pronto sirvió de ejemplo a otros países (Rodríguez Manzano 2008, 72).

El énfasis en la distribución y reducción de la desigualdad como estrategia para el crecimiento económico fue posteriormente sustituido por la priorización de la lucha contra la pobreza, un enfoque más restrictivo, menos polémico y que apenas cuestionaba aspectos relacionados con el poder. Esto se produjo tanto en el campo más amplio de las teorías sobre el desarrollo, como en el MED. Sobre este último, pesaba aún la acusación de haber exportado a las mujeres del Tercer Mundo un feminismo occidental “simpatizante con el imperialismo” (Moser 1993b, 46), algo que también contribuiría al surgimiento de enfoques alternativos en ese campo.

En el pensamiento hegemónico sobre el desarrollo, la combinación de tres nuevas preocupaciones (crear empleos, disminuir la desigualdad y combatir la pobreza) dio lugar a lo que se conoce como **enfoque de las necesidades básicas** (o fundamentales), corriente amparada y protagonizada por instituciones internacionales a partir de mediados de los años 70. Ésta ha sido sobre todo una reacción pragmática a la

²⁸ “Desde principios de los sesenta, las Naciones Unidas han distinguido cada ‘década del desarrollo’ oficial con una declaración que sintetiza las lecciones aprendidas de las experiencias anteriores y las prioridades del organismo para los diez años siguientes. La declaración que anunciaba la Primera Década del Desarrollo (1961-1970) estaba desprovista de cualquier referencia específica a las mujeres” (Kabeer 1998, 19-20).

necesidad de abordar la pobreza mundial como impedimento al desarrollo económico, pero realizada desde propuestas menos radicales. La comunidad internacional del desarrollo se vio obligada a dar respuesta a algunas críticas formuladas por las teorías de la dependencia (abordadas a continuación) y otras corrientes consideradas alternativas. Así, temas como participación, desigualdad, discriminación y agotamiento de recursos naturales fueron por primera vez incorporados a la agenda de este campo, sin dejar de lado su motivación central, el interés por elevar la productividad económica (Leys 1996). Este enfoque fue criticado por su debilidad teórica (por la dificultad en definir ‘necesidad básica’, por ejemplo) y por la escasa posibilidad de ejecutarlo debido a impedimentos políticos y económicos. No obstante, se elaboró una propuesta llamativa y basada en una idea simple: atacar los problemas más urgentes de la mayoría de la población.

En el campo MED, el enfoque de las necesidades básicas se tradujo en el **enfoque antipobreza**, que al igual que en el del bienestar, daba mayor importancia a las funciones de las mujeres como madres y esposas, al entender que ellas satisfacen necesidades básicas de la familia. A diferencia del enfoque de la equidad, en éste se prioriza la situación de pobreza y no la de desigualdad respecto a los varones para explicar la condición de subordinación económica de las mujeres (Vargas Valente 1992). Adquieren importancia los proyectos de microcréditos, la generación de ingresos y el aumento de productividad de las mujeres pobres. Las agencias donantes y los gobiernos de países en desarrollo se resistirían a abordar aspectos considerados ‘culturales’, por eso no se incidió en la división sexual del trabajo dentro o fuera del hogar y se ignoraron limitaciones derivadas del cumplimiento de los roles reproductivos (Moser 1993b, 48-52). Otros problemas eran la carga añadida de trabajo que esos proyectos suponían para las mujeres y la visión de los ingresos femeninos como ‘complementarios’ a los sueldos de los varones (Richey 2000, 251-2). El tema de la población seguía teniendo mucho relieve, pero otros factores pasaron a ser considerados determinantes para el control del aumento de población en esos países: la reducción de la fecundidad “iba a ser un beneficio lateral” (Parpart 1994, 13) del desarrollo económico, de la mejora de la vida de las mujeres, de la reducción de la pobreza, de la satisfacción de las necesidades básicas e, incluso, de la occidentalización del Tercer Mundo.

Antes de que surgiera el enfoque de las necesidades básicas, se puede observar una **recuperación del pensamiento neoclásico** que, aun teniendo un período limitado de vigencia, abrió el camino al enfoque liberal o neoliberal de los años 80 y 90. La

insatisfacción con los resultados de las propuestas anteriores sobre el desarrollo justificó ese nuevo giro, que se materializaba en la insistencia en la idea del mercado como factor de desarrollo, la crítica a los insuficientes esfuerzos del Estado en su fomento, la oposición a las políticas proteccionistas y la atención a la agricultura como condición previa al desarrollo. Al mismo tiempo, aportó novedad al ampliar los factores que se tenían en consideración en la valoración del desarrollo económico, aspecto no retomado por el neoliberalismo algunas décadas después. Sin embargo, al poner el énfasis en el mercado como única vía posible de desarrollo, la cooperación internacional estaba poco valorada. Al haber descartado de manera tajante el Estado y las políticas públicas como promotores del desarrollo, no tenía sentido considerarlos como agentes del desarrollo en otro país, frente a lo que ocurría en la corriente anterior.

A principios de los años 80, con la emergencia del **neoliberalismo**, se produjo una vuelta al pensamiento neoclásico y una defensa todavía más radical del liberalismo económico. La ruptura con lo que se venía haciendo fue tanto metodológica –se consideraba innecesaria la aplicación de un análisis particular a los países del Tercer Mundo– como teórica, criticando la intervención del sector público e insistiendo en la eficiencia del mercado y en las ventajas de participar plenamente en el mercado mundial. Las consideraciones sobre las insuficiencias del enfoque de las necesidades básicas y de las teorías sobre el desarrollo tuvieron como resultado dos conjuntos de recetas: la liberalización interna (reducción del intervencionismo estatal) y la liberalización externa (reducción o fin de la protección al mercado interior) (Bustelo 1998, 165).

Esas medidas constituyeron la base de programas de estabilización macroeconómica (control de inflación y déficit externo) y ajuste estructural (reducción de gasto público, focalización de inversiones públicas y reducción del proteccionismo interno, entre otras medidas), promovidos por el Banco Mundial con especial intensidad durante los años 80 y principios de los 90 en esos países. La recepción de préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) se condicionaba a la adhesión a dichas políticas y a la velocidad de implantación de las mismas. Para estos organismos, el desarrollo de los países del Tercer Mundo se producía tras la estabilización, liberalización y privatización de sus economías. Las críticas a los efectos del llamado Consenso de Washington, como se ha conocido este conjunto de recetas liberalizadoras, vinieron de muchos ámbitos. El Banco Mundial terminó por reconocer los poco satisfactorios resultados que se produjeron y progresivamente fue abriéndose a una moderada intervención estatal; incluso se formó una especie de ‘consenso pos-Consenso de

Washington' que reconocía lo ampliamente inadecuado de esas propuestas para los países en desarrollo (Stiglitz 2008).

La **economía feminista** mostró el impacto negativo de las políticas de ajuste estructural sobre la vida de las mujeres, debido especialmente a la escasa atención que se prestaba a las condiciones de pobreza y desigualdad de género en el mercado de trabajo, en la realización de actividades no remuneradas, en el reparto de la renta y de los recursos domésticos, entre otros aspectos (MacDonald 1995; Pyle 1999). El aumento de la desigualdad y la creciente 'feminización de la pobreza', a raíz de la adopción de las medidas derivadas de las políticas de ajuste estructural, también aparecen en diversos informes publicados por instituciones de Naciones Unidas en los años 80 y 90 (Jain 2005, 105-9).

El reconocimiento de las críticas, la 'década perdida' en términos de crecimiento y distribución de riqueza para muchos de los países latinoamericanos y africanos, así como la aceptación de que la actuación estatal podía ser un factor que propiciaba el desarrollo (gracias al ejemplo de los llamados Tigres Asiáticos a principios de los años 90) desembocaron en un nuevo cambio de perspectiva. Se admite explícitamente la intervención del Estado, siempre que esté dirigida a sustentar necesidades del mercado y no a sustituirlo: es el **enfoque favorable al mercado**. Se aceptan las políticas encaminadas a mantener la estabilidad macroeconómica, a crear un entorno empresarial competitivo, económica y legalmente, a invertir en infraestructuras y capital humano con especial énfasis en educación, salud y atención a personas pobres, y a potenciar el desarrollo institucional estatal. Sin embargo, su aparente novedad se debe tomar con precaución: "lejos de suponer un cambio de paradigma, no es más que un refinamiento, más o menos artificioso, de la ortodoxia neoclásica" (Bustelo 1998, 181).

Las propuestas del Banco Mundial seguían planteando una teoría general sobre el desarrollo y una receta única aplicable a todos los países en desarrollo, pero ahora se empezaba a dar importancia a la influencia que las instituciones ejercen sobre los aspectos materiales de una sociedad. Se examinan, entonces, un amplio abanico de organizaciones formales e informales en lo que se refiere a su capacidad de favorecer el crecimiento económico y la liberalización comercial, entre ellas: instituciones políticas, legislativas, judiciales, reguladoras y comerciales, medios de comunicación y grupos de la sociedad civil, como evidencia un repase de sus informes periódicos (Yusuf 2009).

Los enfoques que dan prioridad al mercado no descartan la cooperación internacional al desarrollo pero, al igual que ocurre en otras acciones del Estado, ésta se

verá supeditada al equilibrio macroeconómico de donantes y a cubrir las necesidades que el mercado no satisface en los países receptores. Así, no se rechazarían las acciones de cooperación destinadas a promover la igualdad de género o a combatir la violencia contra las mujeres, pero estarían regidas por principios de eficacia y eficiencia económicas –por ejemplo, reducir las desigualdades entre hombres y mujeres como estrategia para aumentar la productividad laboral, evitar la violencia de género para disminuir los gastos en asistencia sanitaria derivados de la atención a las víctimas, etc. (Banco Mundial 2001)–.

En este marco se encuadra la tercera de las perspectivas MED, el **enfoque de la eficiencia**, cuya principal contribución fue desplazar el énfasis “de las *mujeres* hacia el *desarrollo*, bajo el supuesto de que una mayor participación económica de las mujeres del Tercer Mundo se vincula automáticamente a una mayor equidad” (Moser 1993b, 52). Este desarrollo no siempre estaba orientado a la mejora de las condiciones de vida de las mujeres, sino que su objetivo era no desaprovechar el potencial como fuerza de trabajo de esa mitad de la población. Asimismo, esta perspectiva permitió la consolidación de un cambio significativo en el discurso sobre las mujeres en la corriente principal del desarrollo, que pasó a considerarlas agentes económicos por sus propios ‘méritos’ (Kabeer 1998), más allá de su rol de cuidadoras.

El renovado interés por el papel del Estado y sus instituciones está influenciado por la relevancia que adquiere en las ciencias sociales, especialmente en la ciencia política norteamericana, el **neoinstitucionalismo**, corriente que privilegia el estudio comparativo del Estado y de sus estructuras. Esto hace que se utilicen conceptos como ‘buen gobierno’, ‘gobernanza’, ‘estado de derecho’ cuando se trata de entender el crecimiento económico (Haynes 2005). Aunque no es el momento de detallarlos, es necesario señalar que sus enfoques son diversos y no siempre se identifican con el punto de vista neoliberal que los impulsó. Los diferentes enfoques económicos, históricos o sociológicos pueden adoptar marcos de análisis variados para explicar el cambio y la persistencia de las instituciones, resaltar los diferentes niveles de las instituciones formales e informales o los mecanismos concretos presentes en una sociedad (Oriol Prats 2007). Sin embargo, suele ser el enfoque económico el que predomina cuando se trasladan al campo del desarrollo sus conceptos más cercanos.

Un ejemplo de ello serían las reformas jurídicas puestas en marcha en América Latina por agencias de cooperación y organismos internacionales en las décadas de 1980 y 1990, que vinculaban de nuevo el sistema jurídico de un país y su nivel de desarrollo. Como en los años 70, se trató de trasladar el paradigma estadounidense,

aunque con el propósito más definido de privilegiar un modelo de Estado que promoviera el mercado y diera mayor importancia a la seguridad contractual y a reforzar el orden público (Rodríguez Garavito 2006, 2008)²⁹.

3.1.2. La búsqueda de alternativas

Existen enfoques que proponen conceptualizaciones consideradas alternativas y que se posicionan críticamente respecto a las teorías sobre desarrollo mencionadas anteriormente. Estas perspectivas se hacen especialmente evidentes a partir de los años 40, cuando emerge un abundante número de críticas, muchas de ellas de inspiración marxista y originadas en Latinoamérica. En general, no llegaron a tener la influencia y el reconocimiento de los enfoques que a los que se ha hecho referencia en el punto anterior, pero contribuyeron a abrir la puerta a la inclusión de las mujeres y de los temas de género en los estudios sobre el desarrollo.

El **estructuralismo latinoamericano** surgió en la Comisión Económica de las Naciones Unidas para la América Latina (CEPAL) entre 1940 y 1950 y es la primera doctrina sobre desarrollo originada en el llamado Tercer Mundo. Entre sus innovaciones se encuentra la premisa de la existencia de un sistema del que el subdesarrollo y sus características formaban parte desde un punto de vista histórico-estructural. Esta perspectiva dio lugar a un análisis de la relación centro-periferia, considerando las estructuras productivas de los países centrales y periféricos como esencialmente distintas, aunque interconectadas por la división internacional del trabajo y reforzadas por las relaciones asimétricas de comercio internacional. En ese sentido, no sorprende que el rechazo que muestra hacia la búsqueda del beneficio mutuo en las relaciones económicas internacionales se considere su principal característica.

El **enfoque de la dependencia**, por su parte, se ve como una evolución radical de lo anterior con distintas corrientes en cuyas peculiaridades no es el momento de detenerse. Sus diferentes corrientes dan lugar a consideraciones tanto pesimistas como optimistas sobre la posibilidad de que la periferia capitalista logre el desarrollo económico. Las críticas que recibió resaltaban la poca claridad en la aplicación de sus

²⁹ El autor señala que los programas de reformas judiciales de esa nueva etapa tienden a priorizar la equidad y la accesibilidad al sistema de justicia, pero se muestra escéptico en cuanto a la sustancialidad del cambio. Su sistematización de las reformas judiciales financiadas por el Banco Mundial, BID y USAID en el continente americano recoge tres iniciativas sobre violencia contra las mujeres en Ecuador, Guatemala y Honduras (Rodríguez Garavito 2006, 446-7).

propuestas y la falta de definición del concepto de ‘desarrollo’ que se manejaba, a pesar de brindar una compleja explicación sobre el fenómeno (Bustelo 1998). Pese a haber constatado la existencia de mecanismos y estructuras de producción del subdesarrollo y de sus lazos con el sistema económico internacional, la teoría de la dependencia siguió considerando el crecimiento económico como condición necesaria para acceder al bienestar colectivo, dentro de los parámetros del sistema productivo occidental (Rist 2002). Asimismo, el planteamiento determinista sobre la inevitabilidad del subdesarrollo la aproximó a la teoría de la modernización, aunque en sentido contrario (Leys 1996; Bustelo 1998). Tuvo una vida corta y a mediados de los años 70 había perdido su influencia al no haber podido explicar la realidad de algunos países de la periferia del capitalismo que pasaban por un acelerado proceso de industrialización.

En el estudio de la situación de las mujeres en la ‘periferia del capitalismo’, se entendió la marginación femenina como el resultado de las “conexiones sistemáticas entre diferentes formas de desigualdades en los ámbitos internacional, nacional y doméstico” (Kabeer 1998, 65). Sin duda, era novedoso señalar el trabajo doméstico y no remunerado realizado por mujeres como un elemento necesario en el proceso de acumulación capitalista. Sin embargo, las **feministas de la dependencia** reproducían la limitación marxista frecuentemente señalada de relacionar todos los fenómenos sociales con aspectos estructurales. Se ignoraba así el hecho de que la opresión femenina en el espacio privado beneficia, además de al capital, a los hombres, individual y socialmente. Usando un tipo análisis semejante, otra corriente próxima al marxismo antepuso las relaciones de dominación patriarcal a las de clase para explicar la subordinación de las mujeres en la división internacional del trabajo. Hay que notar que en ese análisis del ‘patriarcado capitalista’, una de las claves de la opresión de las mujeres es la violencia masculina, que existiría independientemente de cualquier otra condición. A Maria Mies, una de las autoras más destacadas de esa perspectiva, se le critica que:

[t]oda la historia se presenta como un catálogo de las diversas atrocidades cometidas contra las mujeres. Desde las primeras prácticas de secuestro, violación y encarcelamiento de las mujeres en harenes, hasta la cacería, la tortura y la quema de miles consideradas brujas en la Europa medieval, a la esclavización en el Tercer Mundo y el saqueo de la naturaleza (...), Hoy, el catálogo de la violencia contra las mujeres continúa en formas diferentes como golpes, violación, tráfico sexual, circuncisión femenina, control de la población como “genocidio”, asesinatos por dote, feticidio femenino: “la violencia contra las mujeres parece, por lo tanto, el denominador principal que compendia su explotación y opresión, independientemente de la clase, nación, casta, raza, sistemas capitalistas o socialistas, Tercer Mundo o Primer Mundo” [p. 169]. (Kabeer 1998, 68)

De todos modos, desde estas perspectivas, lo más común era ver con recelo las instituciones dedicadas a la cooperación internacional al desarrollo (sobre las cuales las

autoras de los enfoques MED intentaban influir) y reducirlas a manifestaciones del capitalismo imperialista y del patriarcado mundial.

A partir de los años 80, algunas propuestas retomaron el pensamiento estructuralista de la CEPAL e intentaron suplir sus deficiencias criticando la ortodoxia económica dominante. Una de estas corrientes, la **macroeconomía estructuralista**, propuso incorporar el análisis macroeconómico convencional al pensamiento estructuralista, para dar mayor rigor al estudio de las políticas de desarrollo, contrarrestar los argumentos liberales y, a la vez, reconocer la diversidad interna del Tercer Mundo (y no solamente sus diferencias con respecto a las economías desarrolladas). Esta última afirmación implicaba “el rechazo a la existencia misma de una receta general de políticas y estrategias de cambio, así como de la legitimidad misma de una teoría global del desarrollo” (Bustelo 1998, 246). En ese sentido, muestra su desacuerdo con las políticas neoliberales y con el intento de superarlas teórica y políticamente. Considera, asimismo, que el orden de estas políticas (estabilización macroeconómica, ajuste y cambio estructural) no es el más adecuado y propone prestar más atención a la eficacia productiva, que habría quedado desatendida en las recetas del FMI y el Banco Mundial.

El **neoestructuralismo latinoamericano** surgió poco después, a principios de los años 90, recuperando el pensamiento de la CEPAL en un momento relativamente propicio, pues la ineficacia de las políticas ortodoxas más radicales ya era abiertamente admitida por las instituciones que las habían aplicado, como se ha señalado anteriormente. Sus propuestas incluían prestar atención al sector industrial y dar espacio a la actuación estatal; sin negar la necesidad de que existan equilibrios macroeconómicos, pusieron en tela de juicio las medidas ortodoxas para la estabilización. Entre las deficiencias de ese enfoque hay que mencionar su marcado eclecticismo teórico y una tendencia a no distanciarse del enfoque ortodoxo favorable al mercado (Bustelo 1998). Asimismo, la escasa repercusión que tuvo en las políticas de desarrollo latinoamericanas se atribuyó al hecho de que los gobernantes “han preferido, en la mayoría de los casos seguir las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, ya [que] al hacerlo se garantizaba un importante aporte de ayuda al desarrollo” (Hidalgo Capitán 1998, 132).

En ámbitos próximos a las organizaciones de mujeres del Tercer Mundo, se gestionaba una perspectiva alternativa a las MED. El llamado **enfoque del empoderamiento**, distanciándose de lo que se acaba de señalar para parte de las corrientes de inspiración marxista, puso precisamente el “énfasis en el hecho de que las

mujeres experimentan la opresión de manera diferente de acuerdo a su raza, clase, historia colonial y posición actual en orden internacional” (Moser 1993b, 57-8). Originalmente articulada en el seno de una red independiente de organizaciones de mujeres del Tercer Mundo que estuvieron en la Conferencia de Nairobi de 1985 (la red DAWN, que se volverá a mencionar más adelante), esta perspectiva defendía la necesidad de elaborar estrategias a corto y largo plazo para cambiar la situación de las mujeres. Entre las medidas que se propugnaban, se puede mencionar la participación y la organización de carácter popular, de abajo hacia arriba, y el ‘autoempoderamiento’ de las mujeres y de las personas pobres³⁰.

En cierta forma, la noción de empoderamiento radicalizaba una retórica ya existente sobre la importancia de la participación de las personas en el desarrollo, especialmente desde las corrientes consideradas alternativas. En ese sentido, una de estas corrientes tuvo considerable éxito en su crítica al pensamiento dominante y en su propuesta de una alternativa teórica, obteniendo una amplia aceptación entre las instituciones y agencias de desarrollo. Se trata de la perspectiva sobre el **desarrollo humano**, un concepto que centra su atención en los costes económicos y sociales impuestos a los países del Tercer Mundo derivados de la aplicación de las políticas de estabilización, ajuste y reforma estructural, y en el que se recogen muchos planteamientos de la macroeconomía estructuralista. Apoyadas por algunos organismos de las Naciones Unidas, las propuestas de esta corriente defienden la intervención estatal en el proceso de desarrollo y una cuidadosa y gradual ejecución de las políticas de liberalización. Pese la vinculación casi automática entre el trabajo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el concepto de desarrollo humano, éste último refleja las inquietudes compartidas por un grupo de intelectuales –como Paul Streeten, Amartya Sen, Martha Nussbaum y Mahbub ul Haq– sobre los peligros de olvidar a las personas en la medición económica del desarrollo³¹. A lo largo de los años, su influencia creció, incluso entre los partidarios del liberalismo (Clark 2006).

³⁰ Empoderarse, desempoderarse, poder: esos términos tuvieron y tienen muchos significados en este debate. Véase, nuevamente, Kabeer (1998, 235-72), para una discusión de las diferentes estrategias para dar poder a las mujeres, a partir de los significados que empoderamiento puede adquirir. Sin embargo, en general, el empoderamiento se entendió, al menos inicialmente, no como el dominio o la posesión de poder sobre algo o alguien, sino como el proceso por el que se puede adquirir la capacidad y la autoconfianza, sea individualmente o como parte de un grupo, para lograr ejercer el control sobre la propia vida y sobre los recursos de que se dispone (Moser 1993b; Rodríguez Manzano 2008).

³¹ Se suele mencionar un informe del Unicef de 1987 como precursor en este sentido. Titulado *Ajuste con rostro humano*, proponía combinar medidas de estabilización económica y ajuste estructural con la protección de los grupos más vulnerables y con la cobertura de las necesidades básicas de la población.

Inicialmente, el concepto de desarrollo humano se definía como “un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de los individuos, las más importantes de las cuales son una vida prolongada y saludable, acceso a la educación y el disfrute de un nivel de vida decentes” (PNUD 1990, 34). Sin estas oportunidades esenciales, las personas tendrían dificultades en acceder a otras igualmente valoradas e importantes, como la libertad política, económica y social, la posibilidad de ser creativo y productivo, de respetarse a sí mismo y de disfrutar de la garantía de los derechos humanos. Las ediciones subsecuentes del Informe Mundial sobre el Desarrollo Humano trataron de precisar y reformular esa primera definición, hasta que en 2010, en su 20ª edición, se hacen explícitas las ideas de sostenibilidad, equidad y colectividad:

El desarrollo humano supone la expresión de la libertad de las personas para vivir una vida prolongada, saludable y creativa; perseguir objetivos que ellas mismas consideren valiosos; y participar activamente en el desarrollo sostenible y equitativo del planeta que comparten. Las personas son las beneficiarias e impulsoras del desarrollo humano, ya sea como individuos o en grupo. (PNUD 2010, 2-3)

En ese contexto de reconceptualización del desarrollo se produjeron varios intentos de definir y medir los estándares de vida aceptables, más o menos explícitos en lo que concierne a las desigualdades de género. Max-Neef (1998) propuso un ‘desarrollo a escala humana’ y una tipología que diferencia las necesidades fundamentales (por lo tanto, universales) de los ‘satisfactores’ (medios para alcanzarlas que varían según el tiempo, lugar y clase social, y que, por lo tanto, son culturales). Para este autor, los ‘satisfactores’ pueden actuar de manera contradictoria, inhibir o incluso destruir la posibilidad de satisfacer necesidades fundamentales, por lo que pueden satisfacer una necesidad y al mismo tiempo socavar la satisfacción de esa u otra necesidad en el futuro. Destaca también su mención a lo escasamente considerada que está la participación de las mujeres en la satisfacción de necesidades fundamentales, no siempre materiales, como el afecto.

Martha Nussbaum desarrolló su propia versión del **enfoque de las capacidades humanas** de Amartya Sen, con particular consideración de “los problemas especiales que enfrentan las mujeres a causa de su sexo en más o menos todas las naciones del mundo” (2002, 31)³². Para ello, ofreció una lista de diez ‘capacidades humanas centrales’ que “deben procurarse para todas y cada una de las personas, tratando a cada persona como fin y no como una mera herramienta para los fines de otros”, pues

³² Para una reconsideración de esta y otras interpretaciones del trabajo de Amartya Sen, especialmente sus propuestas de transformar las capacidades humanas y los conceptos de justicia, libertad, elección y oportunidad en categorías empíricas y verificables, véase Walby (2012).

“[d]emasiado a menudo se trató a las mujeres como apoyo para los fines de otros más que como fines en sí mismos” (Nussbaum 2002, 33-4). Para evitar argumentos esencialistas o etnocéntricos, la autora define su lista de capacidades humanas como transcultural, flexible y, por lo tanto, sujeta al consenso y a la utilización comparativa, con el propósito de determinar si se promueve la calidad de la vida humana. Interesa destacar que entre los aportes de Nussbaum al análisis crítico sobre el desarrollo, el tema de la violencia contra las mujeres, los abusos y la discriminación adquieren un papel bastante relevante. Señala que éstos impiden el disfrute de algunas de las que considera capacidades humanas centrales, como la vida, la salud corporal, la integridad física. Algunos críticos, sin embargo, identifican en este planteamiento el punto de vista de las corrientes de la filosofía feminista liberal, que consideraría estos problemas cuestiones propias de culturas no occidentales industrializadas y no como algo relacionado con elementos estructurales, políticos y económicos en un mundo globalizado (Jaggar 2008). Se volverá a esa discusión más adelante, en el capítulo 5. De momento, interesa más dar continuidad al repaso de las teorías sobre desarrollo.

Al igual que ocurrió en otros ámbitos académicos, el campo de los estudios del desarrollo no fue inmune al giro epistemológico, teórico y metodológico que propugnó el posmodernismo, en el que se constataba la superación de la modernidad y del predominio de la visión occidental de la historia como algo continuo y progresivo. Cuestionar la idea de progreso o desarrollo no era algo novedoso (Nisbet 1976, 1981); sin embargo, el posmodernismo hizo de este supuesto uno de sus principales argumentos teóricos. Además, niega la posibilidad de acceder a una única verdad objetiva por medio del conocimiento y de la ciencia, rehúsa la existencia de una teoría universalmente válida y señala que la representación y el discurso sobre la realidad caracterizan nuestro modo de conocer el mundo, relativizando, así, la legitimidad del conocimiento científico (Noble 2000). Las contribuciones de Michel Foucault (1968, 1979), Jean François Lyotard (1986) y otros autores, condujeron, entre otras cosas, a declarar la imposibilidad de seguir reivindicando la existencia de una única teoría explicativa del mundo y la neutralidad del conocimiento científico, reconociendo, por tanto, su condición parcial e interesada.

Este paradigma posibilita un significativo cambio de enfoque en los estudios sobre el desarrollo, en los que pierden importancia las grandes teorías sobre el cambio social, sus orígenes y obstáculos, al tiempo que se valorizan las explicaciones que conjugan aportaciones de diversas disciplinas científicas. Se amplía, de este modo, la posibilidad de aceptar otros conocimientos, como pueden ser los generados sobre las

mujeres y las relaciones de género. Un efecto añadido es la actitud crítica que manifiesta ante el desarrollo por considerarlo una visión de mundo occidental impuesta a los demás y que, a la vez, produce unos conocimientos que sirven para legitimar la posición inferior de los países no desarrollados respecto a los que son considerados desarrollados. Esos aspectos serán destacados por dos corrientes: la del desarrollo alternativo y la del posdesarrollo.

A pesar de ambas compartieren críticas radicales al modelo hegemónico y un interés por el nivel local, el **desarrollo alternativo** no rechaza completamente el concepto de desarrollo, sino que cree en la posibilidad de redefinirlo según otros parámetros (Nederveen Pieterse 2000). Esta corriente busca continuamente experiencias prácticas que mejoren los niveles de vida de la población local y tengan potencial para ser reproducidas en otros contextos. En general, son parte de movimientos y organizaciones sociales (Edelman y Hangerud 2007). El enfoque del empoderamiento, mencionado anteriormente, comparte estas preocupaciones y su origen.

El **posdesarrollo** considera que el descrédito del desarrollo y el fracaso de sus políticas para garantizar riqueza y mejores condiciones de vida a las personas, obligan a una continua reinvención del término, al que se van añadiendo adjetivos: ‘sostenible’, ‘humano’, ‘duradero’, ‘socialmente sostenible’, ‘alternativo’, etc., sin que su sesgo occidental y economicista desaparezca. Al constatar la “‘resiliencia’ del desarrollo y del desarrollismo, tanto en el Sur como en el Norte, tanto en el pensamiento dominante como en el ‘altermundista’” (Latouche 2007, 15), se defiende que la verdadera alternativa al desarrollo pasa por salidas plurales de posdesarrollo. Éstas supondrían el replanteamiento de los valores occidentales, la descolonización del imaginario social, el olvido de una visión mítica del término desarrollo, en suma, el replanteamiento de los objetivos y las estructuras de las sociedades, sean del Norte o del Sur.

Un ejemplo de esta corriente de pensamiento es el **decrecimiento**, perspectiva en que convergen propuestas teóricas y prácticas de revisión crítica del impacto del desarrollo y del crecimiento económico a cualquier precio. Con contribuciones desde la economía, la ecología, la filosofía y la sociología, hace hincapié en que el crecimiento económico no conduce al incremento del bienestar social. Considera, además, que los ritmos actuales de producción y de consumo mundiales, en especial los de los países considerados desarrollados, son insostenibles y necesitan revertirse. Argumenta que “[e]l único programa que necesitamos se resume en una palabra: menos. Menos trabajo, menos energía, menos materias primas” (B. Grillo *apud*. Taibo Arias 2009, 34).

Llegados al punto en el que se plantea que cualquier ‘desarrollo’, hegemónico o alternativo, es cuestionable, se puede constatar que la crítica a la pretendida universalidad de la visión occidental está especialmente presente en las contribuciones realizadas desde la Antropología. Al tratarse de una disciplina que desde su inicio está en contacto con los pueblos, culturas y regiones a los que comúnmente se les atribuye la necesidad de acelerar o promover el desarrollo, la Antropología proporcionó a las teorías posmodernas y poscoloniales un amplio terreno donde desplegarse, con repercusiones también sobre la cooperación internacional. En las últimas décadas del siglo XX, la temática del desarrollo –su discurso, sus prácticas y las consecuencias sociales que han provocado las intervenciones realizadas en su nombre– recibió una mayor atención por parte de esta área de investigación, debido a una progresiva especialización interna de la propia disciplina, así como a la creciente participación profesional de antropólogos en organizaciones no gubernamentales e instituciones de desarrollo (Viola 2000).

En ese sentido, las corrientes críticas al desarrollo disfrutaron de un impulso sin precedentes para analizar las relaciones entre conocimiento, poder y discurso en la ‘invención del desarrollo y del Tercer Mundo’, respaldadas por las teorías posmodernas y por trabajos como los de Michel Foucault y Edward Said. Escobar (1988, 1995), uno de los exponentes de estas corrientes críticas, argumenta que los conceptos de desarrollo y Tercer Mundo son productos discursivos de la redefinición que Occidente hizo de sí mismo y del resto del mundo en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial. El desarrollo, para esta perspectiva, es una experiencia histórica singular cuya existencia supuso la creación de un dominio de pensamiento y acción definido por tres ejes y sus interconexiones: el del conocimiento (formado por objetos, teorías y conceptos), el del poder (el sistema político-económico que regula su práctica) y el discursivo (las formas de subjetividad en las cuales las personas se reconocen a sí mismas y a otras). Su propuesta es analizar el concepto de desarrollo desde un punto de vista histórico a través de dos mecanismos bajo los cuales el desarrollo sería operativo y real: los procesos de profesionalización e institucionalización. El proceso de profesionalización se refiere a la creación, difusión, organización y control del conocimiento, tanto por medio de la aplicación de disciplinas ya existentes a los problemas de los países subdesarrollados como por la creación de nuevas subdisciplinas. El proceso de institucionalización está relacionado con la producción, estabilización, modificación de discursos y prácticas puestos en marcha por una red de organizaciones, agencias, instituciones bilaterales, organismos técnicos, etc. “Al usar ciertas formas de conocimiento y crear formas

específicas de intervención, estas instituciones constituyen una red que organiza lo que es visible y hace posible el ejercicio del poder” (Escobar 1991, 431).

En opinión de Escobar y otros autores que se identifican con el posdesarrollo, el Banco Mundial sería el mejor ejemplo de organización a servicio de esta construcción discursiva sobre el desarrollo. Sin embargo, el resto de las instituciones relacionadas con la cooperación internacional al desarrollo también son parte activa en el sistema de dominación mediante los citados procesos de profesionalización e institucionalización del desarrollo y, por lo tanto, sus prácticas y discursos deberían también estar sujetas al mismo análisis etnográfico. De este análisis se desprende una crítica a la participación de profesionales de la antropología en instituciones y proyectos de desarrollo, cuya acción podría legitimar y reforzar esta construcción discursiva.

Para Escobar, los argumentos en favor de la antropología aplicada al desarrollo no se alejan de las visiones tradicionales sobre el desarrollo (algo inevitable, universalmente deseable y deseado) y sobre esa disciplina en general (una ciencia neutra cuyos profesionales disponen de metodologías adecuadas para encontrar las verdaderas necesidades y deseos de los más pobres). Partiendo entonces de la constatación de que los procesos de desarrollo también encuentran resistencias en muchas partes del mundo y de que la práctica de la antropología en este campo está moldeada por la institución que la posibilita o la encarga, Escobar considera inevitable que el paradigma etnocéntrico dominante esté subyacente en el trabajo de ese profesional, aun cuando intente adoptar un método holístico (Escobar 1991, 672). En resumen, la antropología para el desarrollo, según esta visión, no hace más que reciclar discursos de modernización, aunque sus intenciones sean buenas y reclame la relevancia de los problemas locales, la sensibilidad cultural y el acceso a métodos interpretativos holísticos.

De todos modos, si bien las aportaciones del posdesarrollo tuvieron gran influencia en las últimas décadas, no tardaron en detectarse sus limitaciones. Se criticó la excesiva generalización de sus afirmaciones, el que no tuviera en cuenta la heterogeneidad de las actitudes que critica (Gasper 1996) y la evolución de las posturas de agencias y actores en este campo, así como la falta de reflexión sobre el hecho de que aún hay muchas personas que desean alcanzar el desarrollo (Martínez Mauri y Larrea Killinger 2010). Al centrarse en el discurso y no en la práctica, esta corriente no alcanza a percibir que el desarrollo no es tan homogéneo ni tan estable como se desprende de

sus análisis³³. Algunos estudios se han centrado en examinar la similitud de parte de los presupuestos de esta corriente con los puntos de vista que busca combatir y apuntan que muchos partidarios del posdesarrollo tienden a tener una visión romantizada o esencialista de lo ‘local’, como contrapunto a la consideración negativa que tiene lo ‘tradicional’ en las teorías de la modernización que intentan refutar (Edelman y Hangerud 2007, 104). Nederveen Pieterse (2000) hace referencia a otras contradicciones, especialmente en el caso de Escobar, al que acusa de reclamar un ‘nosotros’ para la construcción de una gran alianza para el desarrollo, sin tener en cuenta la diversidad de movimientos sociales existentes, y de prescindir del premisas y análisis marxistas pese a referirse a una lucha anticapitalista. Asimismo, esta corriente tampoco ofrecería alternativas reales al paradigma que estaba rechazando, a pesar de llamarse ‘alternativas al desarrollo’, y se le censura que se haya restringido a la crítica y al aspecto retórico, contribuyendo a mantener el *status quo* (Nederveen Pieterse 2000) y no a la “solución de tragedias globales como la pobreza y la violencia” (Little y Painter 1995, 605).

Como se ha mencionado, no todas las visiones críticas comparten esta total oposición al desarrollo. La defensa de métodos antropológicos de investigación para lograr los objetivos de un proyecto es recurrente³⁴, aunque sería injusto limitar la importancia de esta disciplina a sus aspectos metodológicos, ya que también ha contribuido a sacar a la luz temas como las relaciones de género o la sostenibilidad medioambiental (Grillo 1997). En ese contexto de mayor participación de profesionales de las ciencias sociales, el incremento del uso de metodologías etnográficas y participativas y la ampliación de las dimensiones del desarrollo destacan sobre otros intentos de remodelar los parámetros dominantes sobre el tema.

Un ejemplo de ello es el surgimiento del **Etnodesarrollo**, corriente que propuso integrar la dimensión cultural y elaborar modelos de desarrollo acordes con la identidad étnica y cultural de cada pueblo. Su formulación inicial se atribuye a una comisión de intelectuales y dirigentes indígenas latinoamericanos reunidos en Costa Rica, en 1981,

³³ Esto es especialmente evidente en estudios sobre cómo se producen y negocian las transacciones y conceptos de la cooperación internacional entre distintos actores en cada contexto, más allá de los documentos y discursos de las instituciones que los promueven (Grillo 1997; Mosse 2005).

³⁴ De manera similar, en la sociología rural, Michael Cernea argumenta que los conocimientos sociológicos, el análisis de las variables sociales y las metodologías correspondientes son imprescindibles para que los proyectos de desarrollo satisfagan adecuadamente las necesidades de las personas. Aboga por la participación de profesionales de las ciencias sociales en la definición de las políticas de desarrollo, y no solamente en la elaboración y evaluación de acciones segmentadas (Cernea 1995).

por ocasión de un seminario auspiciado por la UNESCO sobre etnocidio (Palenzuela Chamorro 2009). El etnodesarrollo quedó definido como un proceso de transformación “sustentado por la capacidad social de un pueblo para construir su futuro, aprovechando para ello las enseñanzas de su experiencia histórica y los recursos reales y potenciales de su cultura” (Batalla *apud.* Palenzuela Chamorro 2009, 137). La teoría del etnodesarrollo no propone aislar o apartar a los pueblos indígenas de la sociedad occidental, sino que hace hincapié sobre elementos políticos de resistencia, como: el control del propio grupo sobre el cambio, el acceso a recursos y la toma de decisión, todo ello respetando sus aspiraciones y necesidades (Stavenhagen 1990; Viola 2000; Palenzuela Chamorro 2009).

En la misma línea, más recientemente se ha hecho referencia al concepto del **‘vivir y convivir bien’** (Llistar i Bosch 2009; Martínez Mauri y Larrea Killinger 2010), traducción de las expresiones andinas *sumak kawsay* en quechua y *suma q’ama* en aymara, incorporadas a las constituciones de Ecuador y Bolivia en 2008 y 2009, respectivamente. Recogen una propuesta surgida desde la vida comunitaria indígena andina, la cual “se basa en la reciprocidad, la cooperación y la complementariedad. Busca la vida harmoniosa entre los seres humanos y de éstos con la naturaleza” (Llistar i Bosch 2009, 132). Se opondría, por lo tanto, a los conceptos individualistas de bienestar y ‘vivir mejor’, propios de paradigmas occidentales de desarrollo. ‘Vivir bien’ presupone respetar valores y decisiones de cada pueblo y comunidad. De ahí, que se entienda que la ayuda internacional deba conducir a la creación de políticas que conduzcan a la soberanía local o al menos apoyarlas. Son ideas complejas, diversas, que están también presentes en el pensamiento feminista de mujeres indígenas, preocupadas por construir esa buena vida para las mujeres de sus comunidades a partir de paradigmas diferentes a los de la modernización occidental (Gargallo Celentani 2014).

Aunque su contenido sea cercano a otras conceptualizaciones alternativas ya consideradas y los resultados aún estén pendientes de ser valorados, la novedad que aporta es su origen marginal, externo al ámbito académico, a las organizaciones internacionales y a las élites locales (Tortosa 2010). Si bien reconoce que se trata de un concepto aún en construcción, Stefanoni (2012) señala contradicciones importantes en la aplicación política que ha tenido hasta el momento. Muchas personas que defienden el ‘buen vivir’ (al menos en la experiencia boliviana que analiza) reivindican la cosmovisión andina, pero no parten del conocimiento de esas comunidades y tienen dificultades para ponerla en práctica, lo cual resulta en un desajuste entre el plano

discursivo y los objetivos neodesarrollistas que proponen mediante la priorización del extractivismo, la construcción de infraestructuras y el fortalecimiento del Estado.

Las prácticas y discursos sobre ‘mujer y desarrollo’ también fueron extensamente criticados por académicas y activistas identificadas con los **feminismos posmodernos, poscoloniales y descoloniales**. Mohanty (2008a, b), por ejemplo, analizó con agudeza el esencialismo, la victimización y el reduccionismo que encerraba la figura de la ‘mujer del Tercer Mundo’. Su ensayo *Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses*, publicado originalmente en 1984, se considera un trabajo clave en la crítica al contenido colonialista y etnocéntrico del discurso sobre las mujeres en el desarrollo y en los estudios de la academia feminista occidental. Otros estudios siguieron resaltando la necesidad de sacar a la luz contextos concretos de la vida de las mujeres ocultos por la homogeneización que se produce tanto en perspectivas liberales MED como en feministas de influencia estructuralistas:

La noción de la homogeneidad del Tercer Mundo, especialmente en lo que toca a la mujer, puede facilitarle las cosas a quienes practican el MED, pero resulta nociva para la comprensión y para la práctica. Ignora la intersección de clase y género en el Tercer Mundo y la necesidad de evaluar dicha intersección en circunstancias históricas concretas. (...)

Las críticas feministas postmodernas no sólo cuestionan las ideas recibidas acerca de la modernización, sino que además ofrecen nuevas percepciones de las experiencias vividas de las mujeres, en especial la manera en que las sociedades definen la concepción que tienen las mujeres de sí mismas y las limitaciones de dicha sensibilidad para el cambio social y el desarrollo. (Parpart 1994, 20-1)

Más recientemente, Falquet (2014) describe a las ‘feministas autónomas’ latinoamericanas y caribeñas como pioneras en el pensamiento descolonial sobre el desarrollo y ofrece una mirada sobre tensiones y disidencias entre feministas respecto al concepto de género, el modelo de desarrollo, las prácticas de la cooperación internacional en el continente y la participación de ‘la mujer’ en él.

Una vez propuestos estos procesos de ‘deconstrucción y dismantelamiento’ de la ‘mujer del Tercer Mundo’ como sujeto monolítico singular (Mohanty 2008a, 117-8), es importante encontrar un “marco de referencia compartido entre feministas de Occidente, poscolonialistas y del Tercer Mundo” (Mohanty 2008b, 412) para activar una solidaridad transnacional respetuosa de las especificidades. Cabe preguntarse, entonces, si la cooperación internacional al desarrollo puede ser uno de los espacios en los que esta solidaridad transnacional se exprese. El capítulo 5 retomará esa reflexión.

3.1.3. Género y desarrollo, una nueva apuesta de cambio

Desde finales de los años 70, se venía cuestionando lo inadecuado de fijarse en las mujeres de manera aislada, como se hacía predominantemente en las propuestas MED. Aunque se sabía que la subordinación femenina era un aspecto central en ese campo, la naturaleza de las relaciones de género, los conflictos y los desequilibrios de poder subyacentes no se había explorado suficientemente (Razavi y Miller 1995, 12). En ese sentido, algunos estudios empezaron a desplazar el foco de análisis desde ‘las mujeres’ hacia las relaciones sociales entre mujeres y hombres en cada contexto, reconociendo la dominación masculina, pero sin aspirar a convertir la opresión en un elemento de carácter universal, como se había hecho en los planteamientos más estructuralistas (Kabeer 1998, 80-1). Las críticas al MED a las que se ha hecho referencia se sumaron a la creciente institucionalización de los estudios de género en el ámbito académico e impulsaron la formación de un nuevo enfoque, denominado **Género en Desarrollo (GED)**.

El GED reivindica mirar el desarrollo bajo la perspectiva de género, lo que significaría tener una visión integral sobre la vida de mujeres y hombres y sus relaciones sociales. De ahí que se hable del género como un aspecto transversal que debe ser tenido en consideración en cualquier sector en el que se intervenga. En esta perspectiva, se tiene en cuenta la desigual ubicación de hombres y mujeres en las estructuras económicas y sociales, lo que lleva a reconocer que pueden existir necesidades e intereses diferenciados según el género en el proceso de desarrollo. Asimismo, se intentan evitar los errores cometidos por enfoques anteriores que resaltaban determinados aspectos vitales y no otros, como los roles femeninos en la esfera reproductiva (bienestar) o en la productiva (equidad, eficiencia) (Vargas Valente 1992). Este enfoque ha tenido también sus variantes, algunas de ellas consideradas asépticas o reformistas por no tocar lo que se ha considerado desde las perspectivas feministas el aspecto central de las relaciones de género, la desigualdad de poder (Lagarde 1996).

Para trasladar el enfoque GED a la práctica de los proyectos de desarrollo, se han elaborado diferentes instrumentos de identificación y planificación, los cuales han dado lugar a metodologías de capacitación en género con ‘subtextos políticos’ igualmente variados (Kabeer 1998, 273-311), esto es, maneras diversas de articular necesidades y prioridades en las intervenciones relacionados con el cambio social buscado. Del mismo modo, las instituciones de desarrollo han adoptado y preferido distintos enfoques GED “en función de su propia concepción respecto a la pertinencia

de adoptar un enfoque de género en el proceso de desarrollo” (Cirujano Campano 2005, 65). En algunos casos, lo que se da prioridad son los roles atribuidos a cada género en actividades productivas y en el ámbito doméstico, contando para ello con instrumentos que analizan quiénes producen, acceden y controlan los recursos y beneficios. Esta perspectiva se aproximaría a la idea de maximizar la eficiencia en el desarrollo, siguiendo el ejemplo de determinadas perspectivas MED, y lejos aún de considerar las relaciones sociales como un factor relevante. Al evitar preguntarse sobre los motivos de la distribución desigual de los recursos entre los géneros, “la cuestión de la asimetría de poder es efectivamente dejada de lado” (Razavi y Miller 1995, 16).

Una contribución del enfoque GED frecuentemente mencionada es su propuesta de identificar los intereses prácticos de género y los intereses estratégicos de género, transformada por Moser (1993b) en el lenguaje de la planificación del desarrollo en necesidades prácticas y necesidades estratégicas de género. Eso permitiría distinguir cuáles responden a relaciones de género ya existentes (intereses/necesidades prácticas) y cuáles poseen el potencial para desafiarlas (intereses/necesidades estratégicas).

Las necesidades estratégicas de género se formulan a partir del análisis de la subordinación de las mujeres en relación a los hombres, de donde se deriva la identificación de los intereses estratégicos de género para lograr una organización más igualitaria y satisfactoria de la sociedad (...).

En contraste, las necesidades prácticas de género se formulan a partir de las condiciones concretas de las mujeres en su posición como género dentro de la división sexual del trabajo, de las cuales derivan sus intereses prácticos de género por la supervivencia humana. (Moser 1993b, 23-4)

Reconocer cómo esas dimensiones interactúan en la visión holística que propugna la perspectiva de género amplía la manera de acercarse al empoderamiento de las mujeres. “La forma de deconstruir la subordinación de las mujeres, entonces, no siempre y no necesariamente tiene que comenzar desde una conciencia explícita de género” (Vargas Valente 1992, 18), sino que considerando el género como elemento fundamental para cualquier aspecto de la vida de las mujeres, se pueden encontrar rutas para iniciar la reflexión sobre necesidades e intereses estratégicos de género. En la planificación del desarrollo, las necesidades prácticas de las mujeres son fácilmente reconocibles porque “son las que mejor encajan con las preocupaciones convencionales del desarrollo (...). Por otra parte, para quienes son capaces de asumir planteamientos más innovadores, el concepto de las necesidades estratégicas ofrece un conjunto de pautas útiles” (Kabeer 1998: 303). En la visión de esta autora, sin embargo, aún faltaría asumir que la planificación y la gestión del desarrollo están en sí mismas marcadas por las relaciones sociales de género, motivo por lo cual sería necesario:

“*volver a pensar* los planteamientos, conceptos y herramientas de la política existente desde una perspectiva de género para revelar sus prejuicios y limitaciones y descartarlos, modificarlos y transformarlos en los intereses de lograr el desarrollo con equidad de género; por lo tanto, la meta es una política y una planificación *consciente de género*”. (Kabeer 1998: 306)

No bastaría abandonar la ‘ceguera frente al género’, contar con herramientas neutrales o tener en cuenta que las mujeres tienen necesidades e intereses más allá de los roles sociales que les son asignados en cada contexto y momento. Se debería sacar a la luz las tensiones y los conflictos que implica focalizar en intereses y necesidades estratégicas, así como los obstáculos para hacerlo. Sería imprescindible moverse desde el terreno técnico y planificador hasta la arena política *per se*, pensando en las implicaciones políticas del análisis de las relaciones sociales de género (Razavi y Miller 1995). En este sentido, no cabe duda de que es importante identificar y reconocer los intereses estratégicos de género de los hombres en esos procesos, pues, posiblemente, éstos sean una fuente de resistencia a la implementación de políticas que busquen tanto la redistribución de recursos como la transformación social desde la perspectiva de género.

Además de reelaborar teóricamente los temas de género en el desarrollo, este nuevo enfoque GED propone otra manera de implementar las intervenciones desde la cooperación al desarrollo, partiendo de la constatación de que es necesario ir más allá de las estructuras y los mecanismos específicos, como ocurría con las unidades MED de los años 70 y 80. Estas unidades no habían tenido como resultado los cambios esperados sino que incluso, en algunos casos, habían provocado resultados contraproducentes, como la reducción de recursos destinados a mujeres (Moser 1993a) y marginación del tema de la desigualdad de género de la agenda principal del desarrollo (Kabeer 1998). La IV Conferencia de la Mujer de Beijing, en 1995, recomienda aplicar el *gender mainstreaming* (que significa integrar el género a la corriente principal) en toda política pública y en todas sus fases, lo que también sirvió para impulsar este enfoque dentro de las instituciones de desarrollo, sus unidades e intervenciones. Sin embargo, lejos de tratarse de una cuestión técnica, administrativa o incluso retórica, la adopción del *gender mainstreaming* acarrea disputas teóricas y políticas, tanto en torno a los análisis de género (Kabeer 1998) como en la reconducción de las políticas públicas a partir de esta propuesta (Verloo 2005).

Así, pese a la extendida aceptación e incorporación de su vocabulario a la agenda política del desarrollo, en la revisión de los avances logrados tras Beijing, saltan a la vista las dudas, el desconocimiento sobre sus resultados (Richey 2000; Moser y

Moser 2005) y la generalizada decepción entre quienes apostaron por su potencial transformador (Davids, Van Driel y Parren 2013). Parece que, una vez más, se vuelven a hacer evidentes las limitaciones impuestas por las concepciones dominantes de desarrollo, de manera que la radicalidad de la propuesta de hacer transversal el enfoque de género se vería reducida por una apropiación neoliberal del *gender mainstreaming* (Bacchi y Eveline 2003). Davids, Van Driel y Parren (2013), en una perspectiva más optimista, proponen considerar la adopción de la transversalidad de género como parte de una *slow revolution*, propiciada por la incorporación de críticas e ideas feministas en los enfoques de desarrollo y en la promoción de cambios sociales. De todos modos, se comprueba una gran dificultad en replantear a fondo la agenda política hegemónica del desarrollo en lo que se refiere a las cuestiones de la desigualdad de género.

3.2. La cooperación internacional al desarrollo, sus intenciones e instituciones

Las perspectivas sobre el desarrollo abordadas tienen estrecha vinculación sobre si debe existir la cooperación internacional al desarrollo y cómo ésta debe funcionar. Sin embargo, muchas veces las teorías sobre el desarrollo no hacen sus supuestos explícitos ni corresponden de manera unívoca a posiciones teóricas concretas, sino a diversos intereses y preocupaciones. En una clasificación de la literatura sobre la ayuda al desarrollo (de Haan 2009), se observa cómo perspectivas diferentes sobre el desarrollo pueden dar lugar a una propuesta similar en lo que respecta a la cooperación, lo que resulta especialmente llamativo en el caso de las posturas que demandan su extinción.

Para de Haan, existirían al menos cinco posturas: 1) la de defensa, que demanda aumento en los flujos de la ayuda, tanto para responder a situaciones de emergencia específicas como para el objetivo general de combatir la pobreza; 2) la de oposición, que reivindica su extinción, basándose para ello en diferentes argumentos, tales como: los recursos destinados a la cooperación serían excesivos y crearía imperfecciones en la competitividad económica, la cooperación al desarrollo sería una forma de opresión, crearía dependencia y no contribuiría al desarrollo de los países receptores, y no serían correctas las prioridades y motivaciones de los países donantes para ejecutar la cooperación al desarrollo—; 3) la tecnócrata, preocupada por el modo en que se dirige la ayuda y crítica con aspectos como la elección de objetivos, la gobernabilidad de la ayuda en los países de destino y la descoordinación de los donantes, lo que limitaría su efectividad; 4) la relativista, que enfatiza que la cooperación no es tan importante como

sus defensores quieren hacer ver, apoyándose para realizar esta afirmación en argumentos relacionados con los propósitos geopolíticos y diplomáticos de la ayuda, y con la creciente importancia de los flujos comerciales y financieros privados y de las remesas de migrantes enviadas a sus familiares en los países de origen; 5) la contable, que reuniría los abundantes estudios sobre los resultados de proyectos de desarrollo, su monitoreo e implementación. Antes de posicionarse con respecto a estas posturas, esta investigación procurará tenerlas presentes con el propósito de captar los posibles matices de las acciones analizadas en relación con su visión sobre la ayuda al desarrollo.

Para concluir este capítulo, es necesario entender la cooperación internacional al desarrollo, especialmente en su faceta de política pública de un país donante dentro del 'sistema de la ayuda' (Sogge 2002). Como detalla más adelante la tercera y última parte de este trabajo, la política española de cooperación internacional al desarrollo opera por medio de una compleja interacción entre instituciones político-administrativas de carácter público y estatal, organizaciones no gubernamentales de desarrollo y de otro tipo, resultando de ello la puesta en práctica de un conjunto extramadamente diversificado de intervenciones. Antes de proceder al análisis de los compromisos y las acciones sobre la violencia contra las mujeres en este ámbito, es imprescindible entender las fronteras y especificidades de la cooperación internacional al desarrollo como política pública. Ésta, en el contexto de las relaciones internacionales del país que la promueve, adopta tanto mecanismos de funcionamiento propios de un sistema internacional de cooperación (descritos a continuación) como instrumentos de la administración pública de la cual forma parte (cuyos detalles se verán en el capítulo 6, donde se analizan los aspectos institucionales de esta política).

3.2.1 La cooperación internacional al desarrollo como política pública

Los orígenes de la cooperación internacional al desarrollo suelen vincularse al plan de reconstrucción económica de Europa Occidental tras la Segunda Guerra Mundial y a la creación de la Organización Económica de Cooperación Europea, precursora de la OCDE³⁵. Se identifica, además, su nacimiento con un discurso

³⁵ Esta consideración necesita algunos matices. Hay antecedentes también en la solicitud por parte de China de colaboración técnica a la Sociedad de las Naciones, predecesora de la ONU, alrededor de 1920 en temas de higiene, salud, educación, transporte y cooperativas rurales (Rist 2002). Khotari (2010) atribuye la insistencia en considerar 1945 como el año clave para el inicio de la cooperación al desarrollo a un intento de desvincular la administración colonial previa existente en el aparato estatal de los donantes y el proyecto humanitario de la 'industria de la ayuda'.

pronunciado en 1949 por el entonces presidente estadounidense Harry Truman, en el que se proponía un programa de ayuda técnica y científica para las ‘regiones insuficientemente desarrolladas’, ‘necesitadas’ de los ‘inconmensurables recursos en materia de conocimientos técnicos’ de su país. Así, aunque la emergencia de la cooperación internacional al desarrollo se produjo en ese contexto occidental y con estos objetivos, siguió siendo una idea y una práctica reivindicada por diferentes conceptualizaciones sobre el desarrollo.

Sin olvidar esos orígenes, la cooperación internacional se puede entender como una de las maneras utilizadas por los distintos actores estatales y no estatales para alcanzar el desarrollo en sus múltiples definiciones. No sería exagerado decir que la parte más controvertida de la definición de la cooperación internacional al desarrollo está relacionada con el significado atribuido al término desarrollo, el cual a su vez influye y determina la elección de acciones e instrumentos de cooperación. En su vertiente política, la cooperación internacional al desarrollo se entiende como una política pública que integra la acción exterior de un Estado, pues:

“es un ámbito especializado de la actividad internacional que engloba todas las actividades, recursos y posibilidades que los países desarrollados (del Norte, industrializados) realizan, ponen a disposición o facilitan a los países del Sur (países en desarrollo...) con el objetivo de favorecer su progreso económico y social. [...] Así pues, la política de cooperación para el desarrollo no implica necesariamente transferencias materiales o humanas del Norte al Sur, sino que puede consistir en actividades comerciales” (Barbé 2007 *apud*. Sotillo Lorenzo 2010).

La cooperación al desarrollo como una acción política responde a la orientación de un Estado (en general, ‘desarrollado’) que aporta recursos con el fin –al menos el que se hace público– de promover el desarrollo en otro territorio³⁶. Asimismo, “conforma un ámbito de decisión gubernamental híbrido en el que se integran diferentes aspectos de las políticas industriales, comerciales, financieras y sociales” (Jerez, Sampedro y López Rey 2008, 113) y que puede ser un instrumento utilizado por un Estado o grupo de Estados (como la Unión Europea) para proyectar, aumentar y ejercer su poder más allá de sus fronteras (Sogge 2002; Llistar Bosch 2009; Prado Lallande 2009) al tiempo que incrementa las relaciones comerciales transnacionales en las que tiene interés (Úbeda-Portugués 2007). Asimismo, aunque una determinada política pública de cooperación al desarrollo esté delimitada y cada vez más influenciada por compromisos y acuerdos políticos internacionales, esos no especifican las obligaciones de un Estado en relación a

³⁶ No obstante, es necesario mencionar que los ‘nuevos donantes’ (Brasil, China, India, entre otros) ganan importancia en el destino de la ayuda internacional (Woods 2008; Kabunda 2011).

esta política y, por lo tanto, exigir su cumplimiento según las orientaciones de los compromisos establecidos (Teijo García 2009a).

Además de la influencia de otras políticas, de intereses ajenos a los propósitos oficialmente reconocidos y de la discrecionalidad en su ejecución, la cooperación al desarrollo se puede entender de una forma más amplia que escapa a su dimensión de política pública, aunque no sea esta la mirada adoptada por la presente investigación, que se centra en las intervenciones financiadas de manera directa o indirecta por instituciones públicas estatales de un país donante. Hay que reconocer, sin embargo, que existen actores que llevan a cabo acciones en este ámbito sin hacer uso de fondos públicos y sin guiarse por políticas gubernamentales. Se suele mencionar a menudo la actuación de fundaciones privadas, aunque también están los donantes individuales, las empresas y las organizaciones religiosas. En relación con el tema de la investigación que nos ocupa, además de los actores que se han mencionado³⁷, se podrían destacar los llamados Fondos de Mujeres que, si bien manejan menos recursos económicos que otros donantes no públicos, están creciendo en número e importancia³⁸.

Con relación a la escasa posibilidad de exigir el cumplimiento de los compromisos de los Estados en este ámbito, hay dos casos que se pueden citar como ejemplo: la meta de destinar el 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional a la Ayuda Oficial al Desarrollo (véase el siguiente apartado) y el reconocimiento del derecho al desarrollo como un derecho humano. En 1988 la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, tras más dos décadas de debate y estudios sobre el tema³⁹, definiéndolo en su Artículo 1, § 1, como “un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el

³⁷ Un estudio sobre 145 fundaciones filantrópicas europeas que promueven los derechos de las mujeres y las niñas sitúa la violencia contra las mujeres entre los temas que mayor interés despiertan, junto con la lucha contra la pobreza y la promoción del acceso a la educación (Shah, McGill y Weisblatt 2011).

³⁸ Con respecto a ese tema, ver los informes de la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo - AWID (Clark, Sprenger y VeneKlasen 2006; Hopenhay, Carrasco Scherer y Raaber 2008). Para un análisis histórico-institucional de esas organizaciones en los Estados Unidos, especialmente de una red que las agrega (*Women's Funding Network - WFN*), consultar Brilliant (2000).

³⁹ El progresivo reconocimiento del derecho al desarrollo no estuvo exento de discordancias, en gran parte enmarcadas en la confrontación existente durante la Guerra Fría. Sin embargo, pese la continuada oposición occidental, con EE.UU. a la cabeza, el tema fue paulatinamente ganando espacios en diversos ámbitos de las Naciones Unidas. Los puntos de desacuerdo para la redacción de la Declaración se debían a la consideración de los pueblos (no solamente a los individuos) como portadores de ese derecho, a la pretensión de abordar las relaciones entre desarme y desarrollo y, por último, a la aceptación de la necesidad de “la transferencia neta de recursos del Norte rico al Sur pobre” (Villán Durán 1999, 116).

que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él”. Dicha declaración⁴⁰ atribuye a los Estados la tarea de promover el desarrollo, entendido como algo universalmente aceptado y deseable. Sin embargo, su tono es vago, no explicita medidas o propuestas para su realización y evita hacer referencia al papel que podrían jugar las organizaciones internacionales, la cooperación entre los Estados (en especial el peso relativo de países más y menos desarrollados) y la sociedad civil en ese proceso (Gómez Isa 1998, 1999).

Formalmente, el derecho al desarrollo se reafirmó mediante compromisos internacionales posteriores, como en las conferencias de Río de Janeiro (Medio Ambiente y Desarrollo, 1992), Viena (Derechos Humanos, 1993), El Cairo (Población y Desarrollo, 1994), Beijing (sobre la Mujer, 1995), Estambul (Hábitat, 1996); y cumbres internacionales de Copenhague (Desarrollo Social, 1995), Roma (Alimentación, 1996), Monterrey (Financiación para el Desarrollo, 2002) y Johannesburgo (Desarrollo Sostenible, 2002). No obstante, sigue siendo complicada su aplicabilidad y exigibilidad en el marco del derecho internacional (Angulo Sánchez 2005).

Los donantes prefieren basar “sus políticas de cooperación al desarrollo en el terreno de las obligaciones morales y no en el ámbito de lo jurídico” (Teijo García 2009b, 52). Al no existir un marco internacional impositivo sobre las obligaciones de los Estados para promover el desarrollo y conceder ayuda al desarrollo, todo queda supeditado a la voluntad política y financiera de cada Estado: “el esfuerzo presupuestario, los objetivos de esta actividad, así como la orientación geográfica de la AOD por parte de cada país oferente son de carácter soberano (y, por ende, discrecional)” (Prado Lallande 2009, 29).

Específicamente sobre la cooperación internacional al desarrollo, Sogge (2002) describe un ‘sistema de ayuda’ que funciona de manera jerárquica y articulada, por medio del cual políticas y recursos financieros fluyen desde el país donante hasta el receptor. En los niveles superiores estarían: organizaciones internacionales, como la OCDE, el Banco Mundial, el FMI e instituciones pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas; ministerios de economía y bancos centrales, que suelen incidir en la

⁴⁰ Una declaración es un instrumento jurídico de carácter intermedio en términos de obligatoriedad. Tiene valor formal, solemne y superior a las recomendaciones u observaciones, pero no alcanza el rango de los tratados, pactos y convenciones de derechos humanos. La principal norma de este tipo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual tiene, sin embargo, una amplia aceptación (Jongitud 2008).

regulación financiera y administrativa, incluyendo los nombramientos de representantes en instituciones internacionales; ministerios de asuntos exteriores, que influyen en aspectos relacionados con la diplomacia, la cultura y la seguridad; agencias bilaterales de cooperación, instituciones de la burocracia estatal nacional dedicadas a la gestión de las políticas de desarrollo (si bien están comúnmente sometidas a los niveles superiores mencionados anteriormente e influidas, además, por otros ministerios, como aquellos que dirigen el comercio exterior y las fuerzas armadas); y autoridades parlamentares con poderes para decidir aspectos presupuestarios y de acceso a los recursos.

Gobernada desde arriba por esas instituciones, funcionaría una ‘cadena de ayuda’ encargada de ejecutar la política: agencias bilaterales, ya citadas; contratantes semipúblicos que con modelos (fundaciones, organizaciones no gubernamentales, etc.) y especializaciones diversas, gestionan directamente la ayuda; y contratantes privados, buscados por las agencias para realizar servicios variados, como obras de infraestructura, consultorías, gestión y asistencia legal, etc. Si bien el control jerárquico sobre esta política no es total, difícilmente se puede observar un movimiento en sentido contrario (de abajo a arriba) y, si ocurre, éste se localiza fuera de las instituciones: “[l]as cadenas de ayuda dirigidas desde abajo son extremadamente raras. Surgen fuera de los sistemas oficiales de ayuda, como en el caso de las diásporas étnicas viviendo en el extranjero” (Sogge 2002, 94).

3.2.2. Ayuda al desarrollo y criterios oficiales de contabilización

Hasta aquí se han utilizado de manera indiscriminada los términos ayuda y cooperación al desarrollo. Sin embargo, es importante precisar que solamente parte de la cooperación al desarrollo está englobada dentro de la definición de *ayuda al desarrollo*. Ésta última se refiere a “modalidades de transferencia de recursos de un país desarrollado a otro menos desarrollado que se realizan con determinado grado de ‘concesionalidad’ por parte de la instancia (...) que aporta la ayuda” (Gómez Galán y Sanahuja 1999, 19). Al contrario de la cooperación al desarrollo como un todo, y su supuesta corresponsabilidad de las partes implicadas, la ayuda al desarrollo tiene implícita una relación donante-receptor. Aún más específica y delimitada es la *Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)*, término adoptado por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE en 1971, que comprende solamente recursos de origen público de países donantes transferidos a otros bajo determinadas condiciones y características:

Según este organismo, la AOD está constituida por “los flujos que las agencias oficiales, incluidos los gobiernos estatales y locales, o sus agencias ejecutivas, destinan

a los países en desarrollo y a las instituciones multilaterales, y que en cada operación satisfacen las siguientes condiciones: a) tienen como principal objetivo la promoción del desarrollo económico y el bienestar social de los países en desarrollo, y b) son de carácter concesional y contienen un elemento de donación de al menos el 25%". (Gómez Galán y Sanahuja 1999, 19)

Esta definición de AOD sirve para contabilizar y comparar las aportaciones de los países de la OCDE⁴¹. Quedan excluidos en esta contabilización los gastos militares y de lucha contra el terrorismo, los recursos para acciones de mantenimiento de la paz no aprobadas por Naciones Unidas y de promoción de la cultura de los donantes (DAC-OECD 2008), así como toda ayuda destinada a países que no están 'en desarrollo' (según la OCDE) o los préstamos a países en desarrollo que no tengan un elemento de donación de al menos el 25%⁴².

Conviene recordar que la AOD puede ser descompuesta de diversas maneras, aunque la más frecuente sea descomponerla en flujos *bilaterales* (canalizados directamente del donante al receptor, a través de administraciones públicas u otras organizaciones) y *multilaterales* (destinados a instituciones internacionales financieras y no financieras). Este último tipo, a su vez, puede tener carácter obligatorio (debido a la condición de miembro de esas instituciones o a la asunción de compromisos internacionales) o voluntario (aportaciones realizadas a organismos, programas o fondos multilaterales por decisión propia, para expresar compromiso con la solución de un problema o responder a una estrategia determinada). Siempre que una aportación voluntaria esté dirigida a un proyecto determinado y especifica el país receptor, se la denomina *multilateral* y el CAD la contabiliza en las estadísticas de la AOD bilateral.

⁴¹ Su creación afectó la coordinación de las políticas de cooperación de los donantes: "En la mayoría de los países, las actividades de cooperación quedaron durante los primeros años dispersas entre diferentes departamentos, según el objeto de cada una de las acciones realizadas. En muchos casos, hasta que el CAD no comenzó a solicitar informes para completar sus estadísticas, no se había llevado a cabo una contabilidad conjunta y fue la voluntad de sumar un cierto volumen de gasto en AOD la que llevó al recuento de diferentes partidas" (Ayuso 1998, 166).

⁴² Rodríguez Gil (2001) problematiza la contabilización de la AOD. Él considera que los datos no son enteramente fiables, ya que cada país calcula su propia AOD sin supervisión externa y sin cotejar los datos con los países receptores. Añade que no se deduce de esos montos lo que se gasta en el propio país en sueldos de cooperantes o gastos en oficinas y equipamientos de la cooperación oficial. Citando el ejemplo del caso español en el año 2000, Gómez Gil (2003, 27) señala que las cifras de AOD divulgadas por los gobiernos pueden no coincidir con las del CAD, que usa criterios más estrictos. Informes independientes identificaron otras interpretaciones contables erróneas de la ayuda española: en 2001, el Gobierno nacional intentó computar como AOD contribuciones privadas individuales a las ONG y fondos de las NNUU (Intermón Oxfam 2001, 50). En 2003, consideró los recursos de fondos europeos y de cooperación descentralizada como parte de su ayuda humanitaria a Irak (Intermón Oxfam 2003, 49-53).

Además, la cooperación al desarrollo y la transferencia de recursos de la AOD adoptan formas variadas, las cuales además han cambiado a lo largo del tiempo. Aquí, interesa repasar la manera en que se suelen abordar en la literatura especializada, con el objetivo de seguir ahondando en el funcionamiento de esta política pública. Los compromisos internacionales de principios del siglo XXI relacionados con la mejora de la calidad y la eficiencia de la ayuda⁴³, hicieron más compleja la gestión de la ayuda y diversificaron el abanico de instrumentos y modalidades utilizados (Alonso 2009), de ahí que sea frecuente encontrarlos divididos en tradicionales y nuevos:

i. *Instrumentos tradicionales.* Proyecto, programa y asistencia técnica son ejemplos típicos de cooperación bilateral. Mientras el proyecto se suele definir como una intervención limitada en términos de objetivo, plazo y zona de actuación, el programa se entiende como una intervención dirigida a una política pública, con actuaciones múltiples y a diversos niveles, sea para un sector o una región determinada.

Hasta mediados de los años 70, los proyectos constituían el tipo de instrumento más importante; los programas no surgieron hasta principios de la década de 1980. Para Mosley y Eeckhout (2000), la preponderancia de los proyectos en los inicios de las políticas de cooperación al desarrollo responde a los enfoques dominantes sobre pobreza y subdesarrollo que existían en la época. La creciente importancia de los programas en el período siguiente debe ser, a su vez, entendida en el contexto de las operaciones de estabilización macroeconómica y ajuste estructural, en las cuales la transferencia de recursos estaba condicionada al cumplimiento de esas operaciones. La asistencia o cooperación técnica se caracteriza por el envío de personal experto para la puesta en marcha o mejoría de políticas públicas. Se espera que ambas partes trabajen juntas y que la contraparte local aprenda del ejemplo y de la experiencia del donante. Arndt (2000, 175-6) hace un detallado repaso de este instrumento y, entre otros aspectos, concluye que los buenos resultados dependen de la existencia de personal

⁴³ Hasta el momento ha habido cuatro foros de alto nivel sobre la calidad de la ayuda. Éstos definieron líneas de actuación para la 'nueva arquitectura de la ayuda', expresados en la *Declaración de Roma sobre Armonización de las Prácticas de los Donantes* (2003), la *Declaración de París sobre la Eficiencia de la Ayuda* (2005), el *Programa de Acción de Accra* (2008) y el *Partenariado Global por la Eficacia de la Cooperación para el Desarrollo de Busan* (2011). El segundo de los documentos mencionados define cinco principios que la ayuda debe perseguir: apropiación (liderazgo de los países en desarrollo), alineamiento (adaptación de los donantes a estrategias nacionales de desarrollo y sistemas de gestión de los receptores), armonización (convergencia en procedimientos de los donantes), gestión por resultados y mutua rendición de cuentas. El último de estos compromisos contiene la novedad de incluir la firma de países donantes emergentes, organizaciones de la sociedad civil y países receptores (CIDOB 2011).

cualificado en la institución receptora, de la continuidad de los programas formativos y de la promoción de un ambiente político-económico adecuado.

Nuevos instrumentos y nuevas formas de cooperación. Para hacer frente a las críticas dirigidas contra los formatos tradicionales de cooperación (que se traducirían, entre otros aspectos, en la dispersión y duplicación de acciones, en las dificultades de apropiación de objetivos y resultados por parte del país receptor o comunidad beneficiaria y en la distancia respecto a las prioridades locales), y mejorar lo ya existente, se prestó atención a otros mecanismos de cooperación. Entre los ‘nuevos instrumentos’ están:

a. *Apoyo presupuestario.* Apoyo financiero al presupuesto público del país receptor. En sentido estricto, apoya a la gestión del Gobierno receptor a través de su estrategia de reducción de la pobreza u otro plan de desarrollo. En la práctica, existen apoyos presupuestarios vinculados a resultados en un sector.

b. *Enfoques sectoriales* (SWAP, *Sector-Wide Approach* en inglés). Busca que los recursos dedicados a un sector por el Gobierno del país receptor y la cooperación externa respondan a una política y a planes de actuación y de gasto únicos. No debe entenderse como una intervención específica, sino una orientación general para intervenciones de varios tipos⁴⁴.

c. *Fondos globales.* Combinan esfuerzos y capital público y privado procedentes de diferentes donantes, y actúan a través de organismos nacionales en los países receptores. También se los denomina fondos comunes o cestas de donantes.

Entre las ‘nuevas modalidades’ de cooperación, se encuentran:

d. *Cooperación delegada.* Cuando, para reforzar la armonización, aumentar la eficacia o reducir costes de transacción, un donante o grupo de donantes (‘mandatario’ o líder) concede a otro(s) (‘mandante’ o donante ‘silencioso’) la posibilidad de actuar en su nombre para ejecutar una etapa de un proyecto, un programa o toda su política (Palacio Blasco 2008).

e. *Cooperación triangular y Cooperación Sur-Sur.* Ambas ponen énfasis en las capacidades de los países receptores. En la cooperación triangular, como el propio

⁴⁴ Un manual destinado a actores de la cooperación española insiste en que: "[e]l enfoque sectorial es una forma de trabajar que persigue coordinar todo el apoyo gubernamental y de los donantes dentro de un sector para un programa común (...). [E]n el enfoque sectorial se pueden encuadrar una variedad de instrumentos, incluyendo el apoyo presupuestario, los fondos comunes, la ayuda vía proyectos y asistencias técnicas que pueden o no estar ‘marcados’ para gastos específicos" (AECID 2008, 14-5).

nombre indica, existen tres lados: un país donante, un país receptor y un tercer país en desarrollo o socio que lidera la canalización de recursos (hay casos en los cuales existe más de un donante –o una organización multilateral con el rol de donante individual–, más de un receptor o más de un país socio, pero, en todo caso, siguen existiendo tres lados). Cuando se habla de cooperación Sur-Sur, lo que se quiere es hacer hincapié sobre los donantes emergentes o nuevos que, sin llegar a ser considerados países en desarrollo, llevan a cabo cooperación con países menos desarrollados.

Además, deben citarse como instrumentos de cooperación internacional al desarrollo los siguientes tipos de intervención:

ii. *Actuaciones en materia de deuda externa.* Mecanismos para el alivio de la deuda externa, como su condonación, canje o conversión por proyectos de desarrollo.

iii. *Ayuda alimentaria.* El aporte de alimentos durante emergencias, catástrofes naturales, conflictos, etc., constituye una de sus formas. El programa de ayuda alimentaria se define por el envío de alimentos para la venta en el mercado interno del país receptor, con el objeto de equilibrar la balanza de pagos y usar los ingresos obtenidos en el gasto público. El proyecto de ayuda alimentaria se centra en el alivio de la pobreza y en la mejora de la condición nutricional de poblaciones concretas, y puede asumir el formato de ‘trabajo por comida’, donde los servicios públicos son parcial o totalmente realizados por quienes reciben la ayuda (Colding y Pinstrup-Andersen 2000).

iv. *Acción humanitaria.* Dirigida a atender las necesidades de poblaciones afectadas por situaciones de desastre, y a garantizar su protección y el ejercicio de sus derechos.

v. *Vía organizaciones no gubernamentales.* Mecanismo por el cual un Gobierno canaliza recursos a través de organizaciones no gubernamentales, realizando para ello convocatorias públicas para la puesta en marcha de convenios y proyectos de cooperación, según objetivos y prioridades definidos previamente.

vi. *Microcréditos.* Programas de microcréditos, microfinanzas o inclusión financiera tienen como objetivo incentivar el autoemprendimiento y la lucha contra la pobreza.

vii. *Educación para el desarrollo y sensibilización social.* También se considera AOD las acciones dirigidas a educar y sensibilizar a la población de los países donantes en relación a los esfuerzos, necesidades y temáticas de la cooperación al desarrollo.

viii. *Gastos con refugiados.* Pueden ser computados como AOD los recursos destinados a personas refugiadas durante su primer año de permanencia en el país donante.

Los países de la OCDE reportan anualmente sus estadísticas de AOD al CAD según un conjunto de códigos (el CRS, *Creditor Reporting System*, véase el anexo 9, para un listado resumido de esos códigos), que entre otros aspectos clasifica los recursos desembolsados dependiendo del propósito de la ayuda (sectores). El CRS permite contabilizar un sólo propósito por actividad y a una parte considerable de la AOD no se le asigna un sector, es la ‘AOD no distribuida por sectores’, donde entran, por ejemplo, apoyos presupuestarios, canje de deuda o ayuda por emergencia.

Aunque los países donantes asumieron en las últimas décadas diferentes compromisos relacionados con la cooperación internacional, su cumplimiento sigue siendo escaso. Uno de los más significativos es el de destinar el 0,7% de sus respectivos PIB a AOD, algo que se ha propuesto sistemáticamente y que todavía no se ha conseguido alcanzar. La idea de que los países ricos tuviesen que llegar a una meta en la promoción del desarrollo de los países pobres aparecía ya en los años de 1940 en el ámbito de los organismos internacionales, aunque se propusiera oficialmente propuesta durante la Segunda Década para el Desarrollo de Naciones Unidas, en 1970. Con el posterior giro liberal fue rápidamente olvidada, pero fue retomada de nuevo por la OCDE en reuniones de alto nivel sobre la calidad de la ayuda a mediados de los 90 (Jerez, Sampedro y López Rey 2008). Algunos países se acercaron más que otros a su cumplimiento, especialmente en el período anterior a la reciente crisis financiera internacional, pero pocos han conseguido la meta⁴⁵. Por todo ello, es comprensible que se vean con recelo las propuestas de los donantes tradicionales para redefinir el concepto de la AOD a partir de 2015 –cuando finalizó el plazo para el cumplimiento de esta meta (así como para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) a los que se volverá a hacer referencia más adelante), por lo que la comunidad internacional necesitó encontrar nuevos objetivos hacia a los que orientarse–. Se consideran estas nuevas propuestas una forma de maquillar el fracaso para alcanzar el 0,7% del PIB y a la vez de atraer a las orientaciones del CAD a los nuevos donantes (Domínguez Martín 2013).

⁴⁵ El porcentaje máximo que España llegó a destinar fue el 0,46% en 2009. Un informe de la OCDE, publicado en un período en el que los recursos destinados a la AOD aún iban en aumento en la mayoría de los países donantes, destaca entre buenas prácticas de gestión de la AOD el incremento de la AOD española, así como el compromiso del Gobierno de alcanzar la meta del 0,7% en el 2012, "tres años antes del plazo estipulado por la Unión Europea" (OECD 2009, 50). Sin embargo, con los recortes presupuestarios de los últimos años, la proporción AOD/PIB alcanzó sus valores mínimos: el 0,16%, en 2012 y 2013. Consulta realizada a la Base de datos de la OCDE sobre los flujos de AOD (<http://www.aidflows.org>) el 10 de noviembre de 2014.

3.2.3. ¿Cómo medir la atención a la violencia contra las mujeres en los flujos de ayuda internacional?

Dentro de la maraña de modalidades, instrumentos y compromisos que caracterizan el sistema de ayuda internacional y la actuación de sus instituciones, no es sencillo ubicar con precisión cómo y dónde se trata una temática específica y que afecta a tantos ámbitos como la violencia contra las mujeres. Las críticas de las organizaciones feministas a las agendas internacionales sobre la eficacia de la ayuda a la que se ha hecho referencia anteriormente, ponen en relieve la dificultad de garantizar por parte de los donantes el cumplimiento de los compromisos relacionados con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Esto se observa, especialmente, si estas cuestiones no se mencionan de manera explícita como elementos que se deben tener en cuenta en programas y políticas de desarrollo (Craviotto y Antolín 2009), o si la transversalidad de género no se asume de manera decisiva en la aplicación de esos nuevos instrumentos y modalidades (Holvoet 2010). Asimismo, un reciente informe menciona la falta de información específica sobre el gasto en iniciativas para lograr la igualdad entre los géneros en el contexto de la cooperación Sur-Sur para el desarrollo (ONU Mujeres 2015, 60).

Como se ha explicado en el anterior apartado 3.2.2, la distribución de la AOD de los países que integran el CAD puede medirse y compararse de acuerdo con la clasificación en sectores que los países donantes hacen de los recursos que destinan a la ayuda internacional. Dentro de este formato, se considera que hay sectores que se identifican más con la promoción de la igualdad de género: dentro del sector general denominado ‘Infraestructuras Sociales y Administrativas’ se incluyen los sectores ‘130 Programas/políticas sobre población y salud reproductiva’ y ‘151 Gobierno y sociedad civil’ y, dentro de éste último, el ‘15170 Organizaciones e instituciones para la igualdad de la mujer’⁴⁶. En todo caso, esta manera de contabilizar los recursos no permite contemplar aquellas intervenciones que tienen la igualdad de género como elemento transversal pero que están ubicadas en otros sectores.

Con respecto al problema del cual se ocupa esta tesis, al no existir ningún sector o subsector que identifique la violencia contra las mujeres en general o cualquiera de sus formas de manera específica, el cómputo de la AOD destinada a este aspecto

⁴⁶ Hasta 2006, este subsector se identificaba como ‘410 Mujer y Desarrollo’ y se adscribía al ‘400 Multisectorial’ (MAEC-SECI 2008b, 46)

comúnmente se ignora. No extraña, por lo tanto, que sean escasos los estudios que intentan dar a conocer cuáles son las características, cuantitativa o cualitativamente, las acciones financiadas por la ayuda internacional sobre la violencia contra las mujeres. Es interesante mencionar algunos documentos que mapean las iniciativas de la cooperación internacional sobre este tema. Estos, en general, son elaborados o están apoyados por agencias de cooperación de los países donantes, como en el caso de dos estudios sobre programas financiados por Alemania y Gran Bretaña (GTZ 2005; OPM 2014). Asimismo, existe un interés por parte de organizaciones de la sociedad civil internacional por conocer los recursos que organismos de cooperación y fondos globales dedican a la temática específicamente al problema. En el trabajo de Fried (2007), se intenta, sin demasiado éxito, precisar el montante de recursos destinados a combatir la violencia contra las mujeres y niñas en los programas de los cinco principales financiadores (bilaterales y multilaterales) para la cuestión del VIH/Sida. Arend (2011) rastrea los programas e inversiones de instituciones financieras internacionales de desarrollo (Banco Mundial y cuatro bancos regionales) dedicados a combatir la violencia de género de manera directa, pero no profundiza en ello.

Además de constatar la imposibilidad de determinar con exactitud el montante de recursos destinados a la violencia contra las mujeres en el ámbito de una política o de un organismo de cooperación internacional al desarrollo, los cuatro mapeos anteriormente mencionados confirman que una estimación al respecto obliga a realizar de un recuento manual *ad hoc*. Esta contabilización, no obstante, dependerá de la información que cada donante decida hacer disponible sobre los programas, proyectos u otro tipo de intervención que financie, y del conocimiento que su personal tenga sobre el contenido de las acciones en los diferentes sectores, no solamente en aquellos más identificados con la promoción de la igualdad de género. Como se verá en el capítulo 6, ésta es la estrategia utilizada por esta investigación para estimar la distribución de la ayuda española destinada a este problema entre los años 2005 y 2010.

CAPÍTULO 4 – LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES BAJO ATENCIÓN INTERNACIONAL: TEORÍAS Y MÉTODOS

Capítulo 4 – LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES BAJO ATENCIÓN INTERNACIONAL: TEORÍAS Y MÉTODOS

A la hora de plantear el estudio de la violencia contra las mujeres resulta difícil dar una única definición, ya que el término posee múltiples connotaciones y es un fenómeno estudiado en diferentes ámbitos. Por esta razón, este capítulo empieza ofreciendo una aproximación a las definiciones y tipologías de violencia contra las mujeres a nivel internacional, relacionándolas, además, con la perspectiva sobre la violencia en general que existe desde las ciencias sociales. A continuación, en la segunda parte, se profundiza en las consideraciones que ofrecen las principales corrientes teóricas sobre la violencia contra las mujeres, destacando dos de ellas, la doméstica y la feminista, así como sus respectivas definiciones conceptuales y algunos debates metodológicos. El tercer apartado ahonda en las contribuciones realizadas por las teorías y movimientos feministas, al reconocerlos como los impulsores del tema a nivel internacional y en diferentes países. Finalmente, el capítulo termina con un análisis de cómo se han reflejado estas cuestiones en el debate conceptual y normativo desarrollado en España en épocas más recientes.

4.1. Acercamiento conceptual y algunas tipologías

Para empezar a abordar la cuestión de la violencia contra las mujeres, es interesante repasar las definiciones y tipologías más representativas sobre el tema, para luego continuar profundizando en las perspectivas teóricas más significativas, con el fin de clarificar los significados de las expresiones relacionadas utilizadas en este campo y la opción terminológica que se ha decidido utilizar en este trabajo (violencia contra las mujeres), tal y cómo se explicitó en el capítulo introductorio.

La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, en sus iniciales en inglés), aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas en diciembre de 1979, fue el primer instrumento internacional relevante dedicado a la defensa de los derechos de las mujeres. Asimismo, hay que recordar algunos esfuerzos que se habían realizado con anterioridad en el ámbito de las Naciones Unidas y sus diferentes organismos para que estos derechos fueran reconocidos e incorporados a la legislación internacional. Podemos mencionar, por ejemplo, la adopción de un lenguaje neutro en cuanto al género en la versión final de la

Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 o las diferentes normativas promulgadas a principios del siglo XX sobre derechos laborales, maternidad, nacionalidad de la mujer casada y la trata de mujeres⁴⁷.

Originalmente, la CEDAW no hacía mención explícita de la violencia como una de las formas de discriminación, aunque al menos dos de sus artículos mencionasen fenómenos citados en documentos de Naciones Unidas de las siguientes décadas: la trata de mujeres, la explotación de la prostitución y el matrimonio infantil⁴⁸. La vinculación entre discriminación y violencia se ha realizado *a posteriori*, por medio de tres recomendaciones generales elaboradas por el Comité que examina los progresos realizados en el cumplimiento de sus disposiciones⁴⁹.

La más importante de estas disposiciones es la Recomendación General n° 19, de 1992⁵⁰, en la cual el Comité hace una amplia argumentación sobre el tema y repasa los artículos de la Convención que obligan a los Estados a actuar frente a este problema en sus diferentes formas, nombrando las siguientes: violencia familiar, violencia sexual, violencia perpetrada por las autoridades públicas, violencia basada en la tradición y la cultura, la trata de mujeres y niñas y la explotación de la prostitución, y la violencia relacionada con la fecundidad y la reproducción. Asimismo, deben mencionarse dos recomendaciones realizadas en años anteriores: la Recomendación General n° 12, de 1989, que solicita a los Estados incluir en los informes periódicos remitidos al Comité datos relativos a legislación, políticas, servicios y estadísticas sobre cualquier tipo de

⁴⁷ Para una cronología detallada de los hitos más significativos sobre los derechos de las mujeres en el ámbito de las Naciones Unidas, véase Rodríguez Manzano (2008) y Jain (2005).

⁴⁸ Art. 6. Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.

Art. 16. 2. No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro oficial (ONU 1979).

⁴⁹ El análisis de Johnstone (2006) invita a llevar la mirada más allá de la CEDAW. La autora investiga la incorporación de la perspectiva de género en el trabajo de otros Comités de Naciones Unidas que examinan el cumplimiento de las Convenciones de derechos humanos a las que se relacionan y revela progresos en la forma de abordar el tema de la violencia contra las mujeres.

⁵⁰ Este texto es, además, considerado un punto de inflexión en el formato de las recomendaciones generales adoptadas: “durante los diez primeros años de existencia del Comité fueron precisas y centradas sobre todo en cuestiones como el contenido de los informes de los Estado parte, las reservas a la Convención y los recursos del Comité. Frente a esta práctica inicial, en su décimo período de sesiones de 1991, el Comité decide formular recomendaciones de carácter general sobre disposiciones concretas de la Convención y sobre la relación entre sus artículos y diversos temas o cuestiones” (Rodríguez Manzano 2008, 123).

violencia cotidiana contra la mujer; y la Recomendación General n° 14, de 1990, que insta a la erradicación de la ‘circuncisión femenina’, término usado para referirse a la mutilación genital femenina, como es más usualmente mencionada esa práctica en la actualidad en este tipo de documento⁵¹.

En 1985, la III Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Nairobi declaró la violencia contra las mujeres un obstáculo al desarrollo, la igualdad y la paz y llamó los países a implementar políticas de prevención, medidas legales y servicios de asistencia a las víctimas. A raíz de la conferencia de Nairobi y a petición de Canadá, se crea un grupo de trabajo de expertas sobre violencia doméstica en el ámbito de los organismos de Naciones Unidas relacionados con los derechos de las mujeres. Su trabajo habría ayudado a dar mayor legitimidad al impulso del tema (incluso para la adopción de la mencionada Recomendación General n° 12 por parte del Comité de la CEDAW), aunque lo abordara de manera restringida y vinculada solamente al ámbito doméstico (Joachim 2007, 116-22).

No fue hasta 1993, en el contexto de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, que se elaboró la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En este documento, la ONU fija una definición propia de violencia contra la mujer, por considerar que se necesitaba una ‘definición clara y completa’ para lograr que los Estados y la comunidad internacional asumiesen sus responsabilidades frente a la cuestión:

por ‘violencia contra la mujer’ se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada (ONU 1993).

La misma idea aparece en la Plataforma de Acción de la IV Conferencia sobre la Mujer de Beijing (ONU 1995), que expresa el compromiso de casi todos los países del mundo sobre doce áreas de especial preocupación en relación a las desigualdades entre hombres y mujeres, entre las que está la violencia⁵². La Declaración y la Plataforma de

⁵¹ Consulta a la página web <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm#top>, realizada el 13 de febrero de 2013.

⁵² Si bien las distintas versiones en inglés de esos documentos no presentan diferencias en los términos empleados, no ocurre lo mismo en español. En el texto de 1993 la expresión *gender-based violence* se tradujo como “acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino”. En la versión de la Plataforma de Beijing, se adoptó “violencia basada en el género”. Barrère (2008) ha señalado tal variación, pero no que esta diferencia se debe a dos traducciones distintas al español.

Beijing dividen los actos violentos según su naturaleza (física, sexual y psicológica) y el ámbito en el que se producen (familia, comunidad y Estado):

- a) La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación;
- b) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educativas y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada;
- c) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra. (ONU 1993, Art. 2)

En Beijing se incluyeron, además, elementos que no estaban presentes anteriormente en instrumentos internacionales: las formas de violencia en contextos de conflicto armado (asesinatos, violaciones sistemáticas, esclavitud sexual y embarazos forzados), la violencia relacionada con la sexualidad y los derechos reproductivos (esterilización forzada y aborto forzado, utilización coercitiva o forzada de anticonceptivos, infanticidio de niñas y determinación prenatal del sexo), y la desarrollada contra las niñas (acoso sexual en instituciones educativas, violencia física o mental, lesiones o abusos, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, elección prenatal del sexo e infanticidio femenino, mutilación genital, incesto, abusos sexuales, explotación sexual, prostitución y pornografía infantiles), que aparecen en los § 114, 115 y 283, respectivamente. Reconoce, asimismo, en el § 116, la particular vulnerabilidad de determinados grupos de mujeres y cita los siguientes: las que pertenecen a grupos minoritarios e indígenas, las refugiadas, desplazadas, repatriadas y emigrantes, las mujeres pobres que viven en comunidades rurales o distantes, las indigentes y aquellas que están recluidas en instituciones o cárceles, las niñas y ancianas, las mujeres con discapacidades y aquellas que se encuentran en situaciones de conflicto armado, ocupación extranjera, guerras de agresión, guerras civiles y terrorismo, incluida la toma de rehenes.

Otro elemento importante presente en la Plataforma de Acción de Beijing es el reconocimiento del derecho a no sufrir violencia o coerción por cuestiones de sexualidad y salud sexual y reproductiva. Este reconocimiento se formula dentro de una concepción todavía embrionaria de los derechos sexuales (Petchesky 2002) y de los derechos humanos de las mujeres, reafirmados en esa IV Conferencia Mundial sobre la Mujer:

Los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción, la discriminación

y la violencia. Las relaciones igualitarias entre la mujer y el hombre respecto de las relaciones sexuales y la reproducción, incluido el pleno respeto de la integridad de la persona, exigen el respeto y el consentimiento recíprocos y la voluntad de asumir conjuntamente la responsabilidad de las consecuencias del comportamiento sexual (ONU 1995, § 96).

También en ese período se aprueba el primer instrumento jurídico internacional con carácter vinculante⁵³ relacionado con este tema: la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (OEA 1994), conocida como la Convención de Belém do Pará, nombre de la ciudad brasileña donde fue presentada para su ratificación por parte de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. Este texto introduce la muerte como uno de los resultados que puede producir la violencia basada en el género, algo que hasta ese momento no había aparecido de forma explícita.

Los países europeos tardaron más tiempo en disponer de un tratado internacional jurídicamente vinculante al respecto, el denominado Convenio de Estambul (Consejo de Europa 2009, 61), aunque estaban sujetos a otros compromisos en materia de derechos humanos relacionados con este tema. Hasta 2011 no se aprobó ni se propuso la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y contra la Violencia Doméstica (Consejo de Europa 2011). Hay que destacar que este Convenio, al contrario que el instrumento interamericano, no se refiere exclusivamente a la violencia contra las mujeres, sino que también incluye a varones y menores de edad entre las víctimas de la violencia doméstica. Por otro lado, este documento contempla una nueva ampliación en la tipología de la violencia contra las mujeres al introducir en su definición los daños de naturaleza económica infligidos a las víctimas. Un informe elaborado en 1997 por un grupo de especialistas de este mismo organismo, añadió a este concepto tres dimensiones (la económica, la estructural y la espiritual) que no habían aparecido en documentos internacionales hasta entonces:

- **violencia económica:** desigualdad en el acceso a los recursos compartidos. Incluye negarle y/o impedir su acceso al dinero común, generar dependencia económica, impedir su acceso a un puesto de trabajo, a la educación, a la salud, negarle los derechos de propiedad, etc.

⁵³ Como ya se ha mencionado, la CEDAW no incluyó inicialmente el tema de la violencia de manera explícita, y las recomendaciones posteriores al respecto del Comité no tienen la misma fuerza vinculante que el texto de la Convención aprobado y ratificado por los Estados; estas recomendaciones se habrían diseñado para indicar a los Estados sus obligaciones, en el caso de que no estén suficientemente explicadas o expresadas en el texto de la Convención (Engle Merry 2003, 952).

- **violencia estructural:** barreras intangibles e invisibles que impiden el acceso de las mujeres a los derechos básicos. Incluye la negación de la información inherente a los derechos fundamentales y las relaciones de poder en los centros educativos o de trabajo.
- **violencia espiritual:** destrucción de las creencias culturales o religiosas de las mujeres mediante el castigo, la ridiculización o la imposición de un sistema de creencias ajeno al propio. Incluye el sometimiento e invisibilidad de las creencias culturales o religiosas de las mujeres o el analizarlas desde una perspectiva etnocéntrica. (Ferrer Pérez 2008, 64)

Esta consideración de aspectos simbólicos y culturales, y no solamente de las formas directas de violencia, amplía significativamente la dimensión de la definición de la violencia contra la mujer, constituyendo un importante salto interpretativo en el alcance de esta problemática.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), por su parte, si bien hace referencia a la tipología según el ámbito y naturaleza de la violencia, propone una clasificación que se ajuste a las fases del ciclo vital humano, haciendo hincapié en el riesgo que corren personas del género femenino de sufrir violencia a lo largo de su vida:

- **Prenatal:** abortos selectivos según el sexo; efectos sobre el recién nacido de la violencia durante el embarazo.
- **Infancia:** infanticidio femenino; abuso físico, sexual y psicológico.
- **Niñez [sic]:** matrimonio infantil; mutilación genital femenina; abuso físico, sexual y psicológico; incesto; prostitución infantil y pornografía.
- **Adolescencia y vida adulta:** violencia durante el cortejo y el noviazgo (e.g. alteración de bebidas y violaciones); sexo forzado por razones económicas (e.g. niñas estudiantes que tienen relaciones sexuales con adultos a cambio de favores); incesto; abuso sexual en el sitio de trabajo; violaciones; acoso sexual; prostitución y pornografía forzada; tráfico de mujeres; violencia conyugal; violación marital; abuso y homicidio; homicidio conyugal; abuso psicológico; abuso de mujeres discapacitadas; embarazos forzados.
- **Vejez:** ‘suicidio’ forzado u homicidio de viudas por razones económicas; abuso físico, sexual y psicológico (OMS 1998, 4).

Además de esa reordenación, la OMS introduce algunas novedades, como la referencia a la violencia durante el embarazo como un factor de riesgo para el feto y el recién nacido, las violencias contra las viudas (dando por hecho que son ancianas), en las relaciones de pareja diferentes de las matrimoniales (cortejo y noviazgo) y la violencia dirigida contra mujeres con discapacidad.

Elementos para los significados del concepto de violencia

Antes de seguir con los enfoques teóricos sobre la violencia contra las mujeres, conviene reflexionar sobre la definición de lo que constituye la violencia entendida de una forma amplia, pues pese los intentos de abarcar la totalidad de sus expresiones y de enfocarla interdisciplinariamente (Heitmeyer y Hagan 2003; Beriain 2004; Scheper-Hughes y Bourgois 2004), su definición continúa siendo de difícil precisión y consenso.

Más allá de lo que se puede identificar visible e intuitivamente como violencia, ésta se configura como una noción cambiante. Puede estar en los ojos de quien la ve (Scheper-Hughes y Bourgois 2004, 2) y tener límites tan borrosos que resulta difícil señalar un rasgo común a todos los fenómenos que podrían incluirse en su definición (García Selgas y Romero Bachiller 2006, 16). En cualquier caso, resulta evidente que tiene afinidad con un gran número de términos relacionados –autoridad, fuerza, potencia (Arendt 2005), opresión (Young 2005), poder, conflicto, actos violentos, coerción, agresión, crimen (Imbusch 2003)–, pero también guarda importantes diferencias con cada uno de ellos.

Arendt (2005) señala el carácter instrumental de la violencia, dirigido a multiplicar la potencia natural y a mantener un poder en peligro. Young (2005) coincide en conceptualizarla como un instrumento para mantener el poder y la dominación, pero enfatiza su dimensión grupal: la violencia sería una de las cinco caras asumidas por la opresión, un elemento estructural y sistémico de la subordinación que distintos grupos pueden sufrir (juntamente con la explotación, la marginación, la ausencia de poder y el imperialismo cultural). Imbusch (2003) recuerda la cosificación de la violencia en formas específicas (como el asesinato) y su carácter cambiante (formas que desaparecen y otras que se hacen visibles gracias a alteraciones en la sensibilidad social en cada momento y contexto). Los límites de su definición responderán siempre, afirma, a intereses específicos, y el uso de un vocabulario más dramático manifiesta la voluntad de llamar la atención sobre un determinado hecho (por ejemplo, el uso de la palabra genocidio). Con relación a las violencias contra las mujeres, los conceptos de feminicidio o femicidio (abordados más adelante), así como su eventual tipificación legal, son un caso evidente de ello.

Al expresarse la violencia, además, de diferentes formas y en contextos diversos, resulta difícil encontrar una teoría que la explique en su totalidad (Collins 2009). Buscando una forma desde la que acercarse al tema, los estudios de tipo cuantitativo suelen partir de un concepto restringido y verificable de violencia: la producción de daño físico a otra persona o grupo de personas de manera intencionada (Imbusch y Velt 2011), aunque no se reduce a esto. La cuestión de la intención importa en la medida en que permite excluir actos en los que el dolor o el sufrimiento se infligen de mutuo acuerdo y sin conflicto de intereses. Si se distribuyen las conceptualizaciones sobre la violencia en un continuo, desde su significado más restringido hasta el más amplio, en el medio estarían aquellas que añaden a esta definición inicial las amenazas y los daños psicológicos (WHO 2002 *apud.* Imbusch, Misse y Carrión 2011). En el extremo con el

significado más amplio, el concepto incluiría, además, aspectos simbólicos y culturales, elementos de difícil cuantificación, pero esenciales para entender la justificación y la legitimación de las formas visibles:

La violencia no puede nunca entenderse únicamente en términos físicos –fuerza, agresión o imposición de dolor–. La violencia incluye también ataques a la personalidad, dignidad, sentido de valor o valores de la víctima. Las dimensiones sociales y culturales de la violencia son siempre las que le dan su poder y significado. (Scheper-Hughes y Bourgois 2004, 1)

Una vez reconocida la complejidad del término y las dificultades para llegar a una definición universalmente válida para todas sus formas y características, Imbusch (2003) propone empezar distinguiendo los significados que el concepto de violencia puede tener (tabla 8). Sugiere siete preguntas-guía: ¿quién ejerce la violencia?, ¿qué ocurre cuando se ejerce la violencia?, ¿cómo se ejerce la violencia?, ¿a quién va dirigida la violencia?, ¿cuáles son las razones de ejercer la violencia?, ¿cuáles son los objetivos para ejercer la violencia? y, finalmente, ¿cuáles son las justificaciones para ejercer la violencia? Las tres últimas están relacionadas con el porqué, pero se centran en diferentes aspectos de su explicación. Este planteamiento evidencia que la violencia es simultáneamente acción individual y cuestión estructural, y en ella la relación víctima-agresor/a puede ser importante, pero también insuficiente para comprenderla.

Tabla 8. Elementos para los significados del concepto de violencia

Categoría principal	Dimensiones relevantes	Criterios definidores	Elementos de definición
¿Quién?	Sujetos	Perpetradores como agentes	Individuos, grupos, instituciones, estructuras
¿Qué?	Fenomenología	Lesión, daño, otros efectos	Personas, blancos
¿Cómo?	Modos de ejercicio	Medios, circunstancias	Físico, psicológico, simbólico, comunicativo
¿A quién?	Objeto de violencia	Víctimas	Personas, blancos
¿Por qué? (razón)	Causas y razones	Intereses, posibilidades, contingencias	Formas de justificación
¿Por qué? (objetivo)	Objetivos y motivos	Grados de oportunidad	Intenciones
¿Por qué? (justificación)	Modelos de justificación	Correspondencia / desviación a normas	Legal / ilegal Legítima / ilegítima

Fuente: Adaptado y traducido de Imbusch (2003).

En el uso de la expresión ‘violencia contra las mujeres’, el énfasis recae claramente sobre las víctimas. Los aspectos relacionados con sus causas y motivos quedan más explícitos en otros términos considerados por algunos enfoques como equivalentes, como violencia machista, sexista o de género. El énfasis y la descripción de formas específicas de violencia (como las enunciadas en las tipologías anteriormente mencionadas) acentúan su dimensión fenomenológica y el que se haya utilizado en algunas ocasiones ‘maltrato’ como sinónimo de la violencia física o psicológica contra mujeres o menores. A Imbusch, sin embargo, se le escapa una importante categoría, la que aportaría la dimensión geográfica al significado de la violencia. El ¿dónde?, como se verá en ese mismo capítulo, es una importante categoría en el debate sobre la violencia que dirigida contra las mujeres, dado el extendido uso de conceptos como violencia doméstica, familiar o intrafamiliar.

Según ese mismo autor, el paso siguiente debe ser reconocer y distinguir los niveles de aplicación de la violencia. En el extremo más alejado de su sentido fáctico o material, se encontraría su manifestación *metafórica*, una forma de expresar fenómenos, impresiones y sensaciones que connotan poder, fuerza o superioridad. También distinta de la violencia restringida a actos no deseados, estaría la violencia *ritualizada*, en la que se presume la aceptación por parte de la persona que la sufre⁵⁴. Entre estos tipos de violencia, la abstracta y la ritual, estaría el núcleo del concepto de violencia concretado en las variantes directa, institucionalizada, estructural y cultural, las cuales presentan, a su vez, diferentes niveles de intensidad, incidencia y periodicidad.

La denominada violencia *directa* está en la base de la noción restrictiva de la violencia, manifestada de manera física, visible e intencional; su poder estriba en la vulnerabilidad del cuerpo humano, por eso no depende de precondiciones culturales para que se entienda y sea efectiva. También se puede incluir en este tipo la violencia psicológica, vinculada igualmente a la parte física humana, ya que va dirigida contra la mente de una persona; se basa en palabras, gestos, imágenes, símbolos, privaciones cuyo objetivo es subyugar, intimidar o chantajear. La violencia *institucional* podría definirse como el “poder de disponer de sujetos e individuos dependientes concedido a titulares de posiciones jerárquicas y apoyado mediante sanciones físicas” y su prototipo sería la exigencia de soberanía por parte del Estado moderno y la obediencia de los individuos (Waldmann 1995, 431 *apud*. Imbusch 2003, 24). Aunque las fuerzas del

⁵⁴ El sadomasoquismo sería un ejemplo, fenómeno que, en todo caso, es visto como violencia contra las mujeres por corrientes feministas preocupadas por la pornografía (Rubin 1993).

orden de un Estado democrático gozan de legitimidad para intervenir de manera coercitiva, sus actos no dejan de ser considerados violentos; los mismos límites de legalidad y legitimidad pueden ser controvertidos al enfrentarse a situaciones concretas, como ataques policiales, penas de muerte o formas de combatir la insurgencia y el terrorismo.

La violencia *estructural*, concepto presente en la obra de Johan Galtung, engloba las formas de violencia en las que no existe un responsable directo que las inflija sino que son resultado de un permanente estado de injusticia social y marginación. Esta violencia se expresa en las condiciones de desigualdad, pobreza y muerte de multitud de personas en todo el mundo. En ese mismo sentido, Scheper-Hughes y Bourgois (2004, 19-22) hablan de ‘pequeñas guerras y genocidios invisibles’, instándonos a ver en las prácticas cotidianas de la vida social la violencia que subyace en las desigualdades de clase, raza, género o de otro tipo. Por último, la violencia *cultural*, también mencionada por Galtung (1990), se define como cualquier aspecto de la cultura, entendida ésta como la esfera simbólica de nuestra existencia (lengua, religión, ideología, arte, ciencia, etc.), utilizado para legitimar o justificar la violencia, sea directa o estructural.

De manera similar, Pierre Bourdieu sostiene que la dominación simbólica:

no se produce en la lógica pura de las conciencias conocedoras, sino a través de los esquemas de percepción, de apreciación y de acción que constituyen los hábitos y que sustentan, antes que las decisiones de la conciencia y de los controles de la voluntad, una relación de conocimiento profundamente oscura para ella misma. (...) La fuerza simbólica es una forma de poder que se ejerce directamente sobre los cuerpos y como por arte de magia, al margen de cualquier coacción física; pero esta magia sólo opera apoyándose en unas disposiciones registradas, a la manera de unos recortes, en lo más profundo de los cuerpos (Bourdieu 2000, 53-4).

Así, para captar su complejidad, es necesario alejarse de los esquemas de oposiciones –fuerza versus consentimiento, coerción versus voluntariedad/sumisión calculada–. La paradoja de la dominación simbólica, espontánea y al mismo tiempo impuesta, sólo se percibe a largo plazo, cuando los dispositivos de percepción de los que habla el autor están en sintonía con el orden social que los impone. La inmaterialidad de la violencia simbólica, dice, es nada más que aparente, ya que sus consecuencias son efectivamente reales. Las estructuras de dominación que permiten que la violencia simbólica ocurra estarían en permanente trabajo de reproducción, a lo que contribuyen agentes e instituciones muy específicos (Bourdieu 2000, 2004). Galtung (1990), a su vez, describe su idea sobre la interrelación de las esferas de la violencia como un ‘triángulo vicioso’ en el que sitúa la violencia cultural en uno de los vértices y en los otros las ‘formas-tipo’ de violencia directa y estructural. Las tres

formas se refuerzan mutuamente. Pese a conceder mayor importancia a la violencia cultural como legitimadora de los otros dos tipos, destaca que los flujos de transmisión funcionan en todas las direcciones y, por eso, sería poco eficaz trabajar para eliminar una de las formas de violencia (por ejemplo, la más visible de ellas, la directa) sin enfocar también las otras.

Distinguir los niveles cultural/simbólico, estructural y directo en las violencias dirigidas a las mujeres constituye un ejercicio igualmente interesante. La dominación masculina sobre las mujeres es para Bourdieu el prototipo de la violencia simbólica, debido a su difusión y a una persistencia histórica difícilmente equiparable (Fernández 2005). Galtung (1990) recuerda el esfuerzo de los movimientos feministas para mostrar su presencia en diferentes ideologías, religiones y en el lenguaje. Además, el reconocimiento de cómo opera la violencia cultural llevó a problematizar conductas consideradas rituales o tradiciones y, en algunos casos, a negar la existencia de la libre voluntad en esta forma de violencia. En el caso de las violencias directas, las últimas décadas han sido muy fructíferas en la elaboración de herramientas teóricas y metodológicas que han dado visibilidad a sus diferentes manifestaciones, influyendo de manera significativa en la aparición y la reforma de leyes y políticas específicamente dirigidas a esas problemáticas.

Reconocer los refuerzos mutuos entre tales dimensiones nos hace percibir que para desarticular los flujos de violencia, no basta actuar sobre las dimensiones directa y estructural, más fácilmente identificables y medibles, también es necesario intervenir contra la violencia simbólica e insistir en la promoción de la igualdad.

4.2. Supuestos diferentes, denominaciones diversas

Las ciencias sociales adoptan diversos enfoques en el tratamiento de la violencia contra las mujeres, además de mostrar evidentes y continuas interacciones con muchas disciplinas, como la Historia, la Psicología, la Salud Pública, la Medicina, la Pedagogía, la Filología, el Derecho, la Criminología e, incluso, la Economía. Así, aunque la comprensión inter y multidisciplinar debe considerarse importante (Messing, Adelman y Durfee 2012), se dará prioridad fundamentalmente a las contribuciones de las ciencias sociales, especialmente de la Sociología, resaltando la vinculación con esas otras disciplinas cuando sea oportuno.

4.2.1. Violencia familiar y violencia patriarcal: dos enfoques contrapuestos

El interés de la Sociología por esa problemática surge después de la primera mitad del siglo XX, en gran parte gracias a la renovada atención que le dedicaron los movimientos feministas, pero también debido al aumento de la disponibilidad de datos estadísticos, especialmente de las formas de violencia directa y visible⁵⁵. Es a partir de la década de 1970 cuando se empiezan a realizar encuestas poblacionales sobre la experiencia personal de la violencia de manera general y en la familia en particular, inicialmente en Estados Unidos y luego en otros países considerados desarrollados⁵⁶. En ese período surgen las primeras iniciativas para sistematizar y divulgar datos criminales relacionados con el problema. También se ponen en marcha los centros de acogida temporal para las mujeres que dejaban sus casas para huir de sus maltratadores⁵⁷.

Se esbozan, entonces, especialmente en el mundo anglosajón, dos corrientes académicas en torno a ese problema (Kurz 1993; Johnson 1995; Hagemann-White 2003). El **enfoque de la violencia familiar**, como refleja su nombre, sitúa la violencia de pareja como parte de un patrón violento en las relaciones entre todos los miembros de la familia. Los precursores de esta corriente son especialmente dos investigadores estadounidenses, Richard Gelles y Murray Straus, con una abundante producción académica financiada, en gran medida, por el Instituto Nacional de Salud Mental de ese país. Dentro de esta corriente, se suele utilizar la expresión ‘violencia doméstica’, pero también los términos violencia familiar, íntima o de pareja, alternados ocasionalmente con los de maltrato o agresión.

La segunda corriente es el **enfoque feminista** que, pese a su diversidad interna, se caracteriza por dar mayor énfasis al análisis de la desigualdad entre hombres y

⁵⁵ No obstante se pueden detectar en la filosofía política intentos esporádicos (y poco exitosos) para romper el silencio respecto a este tema, al menos desde la publicación del ensayo de John Stuart Mill sobre “La sujeción de las mujeres” en 1869 (Jackman 1999, 275).

⁵⁶ Hagemann-White (2003) advierte de que la investigación social dominante en Alemania, Austria, Holanda, Suiza y países escandinavos ignoró el tema hasta bien entrados los años 1990. Asimismo, el estudio comparado de los movimientos feministas en países europeos muestra diferentes formas y momentos de aproximación a la cuestión (Griffin y Braidotti 2002).

⁵⁷ A principio, los refugios estaban gestionados por asociaciones civiles o grupos autónomos locales, con poca o ninguna articulación entre ellos. Al margen de la actuación pública estatal, surgieron de las necesidades de las mujeres y de la reflexión llevada a cabo por los grupos feministas de liberación y autoconciencia (Dobash y Dobash 1977, 1981). Susan Brownmiller (2000) atribuye el inicio de la atención feminista al tema en Estados Unidos al trabajo de Erin Pizzey, fundadora del primer refugio en Londres y autora de *Scream Quietly or the Neighbours Will Hear*. Janovicek (2007) relata el surgimiento de los primeros abrigos en pequeñas ciudades y comunidades rurales de Canadá, entre 1970 y 1980.

mujeres y de las relaciones de poder entre unos y otras, especialmente mediante el uso del concepto de patriarcado, como se verá a continuación. En ese caso, las denominaciones preferidas son principalmente violencia patriarcal, machista o de género y, en algunas ocasiones, terrorismo patriarcal o machista. Las divergencias existentes en definiciones y métodos de medición provocaron un intenso y todavía vivo debate conceptual, metodológico y político. Es necesario recordar que ambas corrientes centraron inicialmente su atención en la violencia en las parejas heterosexuales, con relaciones estables o vínculos matrimoniales.

Los estudios con enfoque familiar parten del supuesto de que la violencia impregna las relaciones de los miembros de la familia, estando todos expuestos a sufrirla y a cometerla debido a la falta de normas sociales que la condenen. Para comprobar sus hipótesis, realizan mediciones sobre la prevalencia de la violencia entre familiares, especialmente a través de una Escala de Táctica de Conflictos (CTS, en sus siglas en inglés). Este instrumento dispone las formas de resolución de conflicto en la pareja a lo largo de un continuo que va desde las medidas no violentas (discusiones calmadas) hasta las más violentas (uso de arma blanca o de fuego). La CTS se utilizó en las primeras grandes encuestas estadounidenses sobre violencia familiar y, más tarde, en estudios locales, sufriendo a lo largo del tiempo modificaciones para incluir, por ejemplo, la gravedad de las agresiones y las formas psicológica y sexual de violencia, inicialmente ausentes. En general, esa escala se aplica a una muestra de hombres y mujeres emparejados, pero no entre sí, a los que se pide que respondan si han perpetrado formas específicas de violencia contra su pareja y cuántas veces lo han hecho en los últimos doce meses, u otro período que se establezca. En algunos casos, también se les pregunta sobre las violencias sufridas. Una de las grandes contribuciones de ese instrumento es la desvinculación entre violencia y crimen, ya que los actos agresivos no criminales, o no vistos como tales por las personas involucradas, también se computan. Las investigaciones en las que se aplican arrojan en sus resultados niveles parecidos de violencia por parte de hombres y mujeres en la resolución de sus conflictos conyugales (incluso llegan en ocasiones a mostrar que las mujeres son más agresivas que los hombres). Por este motivo, el argumento de la simetría de género (o de sexo) en las agresiones de pareja (Straus 2006) ha predominado en esa literatura (Johnson y Ferraro 2000).

Así, aunque se llegue a reconocer el sexismo o la desigualdad de género como un factor importante para la ocurrencia de la violencia en la familia (Gelles 2003), éste no se considera central en la argumentación de esta corriente. La respuesta pública al

problema, sugieren sus investigadores, debería, por tanto, ir más allá de la atención a la situación de las mujeres víctimas. Se debería dar al menos igual importancia a la situación de los hombres maltratados por sus parejas y, fundamentalmente, concentrar los esfuerzos en reducir la legitimidad de la violencia en el seno de la familia (Dutton 2006).

Las críticas metodológicas a la CTS e instrumentos de medición equivalentes se centran en el predominio que se da al relato de eventos violentos, ignorando tanto el contexto en que esos hechos ocurren como las posibles diferencias en la fiabilidad de las respuestas o en la interpretación que hombres y mujeres dan sobre sus propios comportamientos. Se critica, asimismo, de esta herramienta, la falta de datos sobre el porcentaje de agresiones producidas en defensa propia y la gravedad y la frecuencia de las mismas (Dobash *et al.* 1992; Dobash y Dobash 2004). El conocimiento de esta información permitiría conocer con mayor precisión las diferencias de victimización de hombres y mujeres en ese contexto. Las escalas como la CTS, si bien sirven para dimensionar la incidencia del fenómeno en poblaciones amplias, no son los instrumentos más adecuados para captar los casos más serios (M.P. Johnson 2005), dado que no evalúan el rango y el patrón de comportamientos abusivos y controladores, y tienen pocas probabilidades de incluir entre las personas entrevistadas los casos más graves y que requieren una mayor intervención (Gordon 2008).

El enfoque feminista, que parte de las posiciones que mujeres y hombres suelen ocupar en la pareja y en la sociedad (subordinada e inferior para ellas, dominante y superior para ellos), no considera comparables la participación en estos actos y la intensidad de los mismos. Evidencia, además, que la existencia y el funcionamiento de determinadas estructuras sociales legitiman y normalizan la violencia masculina hacia las mujeres, pero no la ejercida en sentido contrario (Dobash y Dobash 1977).

En ese sentido, un concepto fundamental es el de patriarcado, entendido como una estructura e ideología que impregna las diferentes instituciones y que sostiene y reproduce la subordinación de las mujeres frente a los hombres en la familia y en la sociedad en general. Basándose en las aportaciones de Kate Millet y su obra más importante, *Política Sexual*, a la que se volverá a hacer referencia en este capítulo, Amelia Valcárcel define el patriarcado como “un sistema de dominación genérico en el cual las mujeres permanecen genéricamente bajo la autoridad a su vez genérica de los varones”, cuya existencia persiste gracias a “sus propios elementos políticos, económicos, ideológicos y simbólicos de legitimación” (1991, 142). Hay muchas críticas respecto a la capacidad explicativa del patriarcado como causa última de la

violencia, pero se considera que uno de los pocos consensos en la perspectiva feminista es la idea de que la violencia contra las mujeres constituye una de sus expresiones más brutales o extremas (Castro y Riquer 2003).

Antes de profundizar en esta posible limitación, interesa resaltar que este segundo enfoque no considera que las mujeres constituyan un grupo de víctimas como cualquier otro dentro de la familia, sino que su condición tiene especificidades que deben ser resaltadas. La prueba empírica de sus hipótesis se apoya fundamentalmente en fuentes estadísticas sobre criminalidad (denuncias y condenas relacionadas con agresiones en pareja), datos médicos (registros sobre frecuencia, gravedad y tipo de lesiones) e información asistencial (datos sobre mujeres que buscan hogares abrigo u otro tipo de servicio social). Los datos muestran consistentemente que las mujeres constituyen la inmensa mayoría de las víctimas (siendo, además, las que sufren mayor daño), y los hombres son mayoritariamente los agresores. Desde esta perspectiva, la violencia masculina hacia la pareja sería una forma más (junto con la intimidación, las amenazas, la imposición del aislamiento, etc.) de ejercer el control sobre las mujeres, conducta que sólo muy recientemente se ha considerado moralmente rechazable y criminalmente punible (Dobash y Dobash 1977, 1981; Dobash *et al.* 1992; Bart y Moran 1993). Por estas razones, se insiste en la necesidad de diferenciar la intensidad, frecuencia e intencionalidad en los comportamientos de cada miembro de la pareja, puesto que en caso contrario, no se entendería el fenómeno correctamente:

El modelo de las causas y consecuencias de la violencia en la pareja nunca será convincente mientras se incluyan en el mismo comportamientos tan dispares como la bofetada 'femenina', el patrón aterrador de golpes acompañados de abusos psicológicos humillantes, una discusión que se intensifica hasta un juego de empujones mutuos, o un homicidio cometido por una persona que siente que no tiene otra manera de salvar su propia vida (Johnson y Ferraro 2000, 959).

La utilización de los registros médicos y sobre criminalidad es otro punto de desacuerdo: la corriente feminista reconoce un sesgo en la recopilación de datos que sobrestima los casos más graves (M.P. Johnson 2005, 1127), mientras que el enfoque de violencia familiar destaca la subestimación de la totalidad de los casos, la escasa rigurosidad y la inadecuación de las definiciones utilizadas en la investigación social (Gelles 2003, 839-40).

La interpretación de las tasas de homicidios conyugales, especialmente cuando han sido cometidos por mujeres, es igualmente controvertida. A grandes rasgos, el enfoque familiar rechaza la utilización de diferentes interpretaciones para explicar por qué hombres y mujeres matan a sus parejas. La perspectiva feminista insta a tener en consideración el contexto y los abusos previos para determinar, por un lado, en qué

medida los homicidios cometidos por las mujeres contra sus parejas serían el resultado de actos desesperados de autodefensa y protección a sus hijos (Hartline 1997), y por otro, la poca confianza depositada en la protección ofrecida por la policía y el sistema judicial (Guggisberg 2009).

La insatisfacción con las encuestas sobre violencia familiar y el uso de escalas de comportamiento dirigidas a ambos géneros llevó a la realización de estudios exclusivos sobre violencia sexual y victimización de mujeres, por lo general identificados con la corriente feminista. Se suele citar el estudio de Diana Russell, realizado en 1978, como el primer intento de observar la prevalencia y la incidencia de la violación entre las mujeres en Estados Unidos. La primera encuesta nacional sobre violencia contra las mujeres vino más tarde, en 1993, fue realizada en Canadá y su modelo se extendió luego a otros países. Ésta y las siguientes mediciones que se centraban exclusivamente en el tema mostraron índices de violencia significativamente superiores a los detectados en las encuestas genéricas o sobre violencia familiar que se habían desarrollado en los mismos países. La razón para tales diferencias radicaría en el que “el contexto de una encuesta sobre delincuencia en general ha tendido a restringir la forma en que se formulaban las preguntas acerca de la violencia contra las mujeres” (Walby y Myhill 2001, 507). Más concretamente, se mencionan tres factores: en las encuestas genéricas el tiempo dedicado a ese tipo de violencia es escaso y las preguntas suelen realizarse sin una advertencia previa; el mayor cuidado puesto en determinados aspectos metodológicos de las encuestas específicas (preparación adecuada, mujer entrevistadora y garantía de un entorno de privacidad) aumentaría la confianza y la disposición a reportar los actos de violencia sufridos; y, por último, el marco criminal de la encuesta genérica afectaría a la forma de responder a preguntas relacionadas con incidentes que no se consideran delitos.

En todo caso, hay que tener en cuenta que los datos de incidencia sobre las formas de violencia contra las mujeres se pueden obtener desde distintas fuentes de información (registros criminales, judiciales y administrativos, u otras estimativas basadas en encuestas y otros estudios), que emplean metodologías de medición y definiciones operativas diferentes, no siempre comparables entre sí. Además, se recuerda que el fenómeno difícilmente puede ser conocido en su totalidad: “[e]l total de los hechos de violencia contra las mujeres que ocurren en una sociedad solamente pueden ser estimado a partir de encuestas representativas aplicadas a la población en general, ya que muchos de estos hechos nunca serán denunciados” (Almérás y Magaña 2012, 47). A principios del siglo XXI, al menos setenta países hacían encuestas

poblacionales específicas sobre victimización de mujeres (PNUD 2005 *apud.* Johnson, Ollus y Nevala 2008, 14).

Las encuestas internacionales comparativas (García-Moreno *et al.* 2003; OMS 2005; Johnson, Ollus y Nevala 2008) empezaron a realizarse gracias al impulso de organismos internacionales⁵⁸ y nacionales que demandan datos precisos y fiables con el objeto de desarrollar políticas y estrategias de intervención. En el ámbito de la Unión Europea, la primera encuesta amplia y a escala realizada sobre el tema en los 28 Estados miembros tuvo sus resultados publicados en el primer semestre de 2014. “[O]rganizaciones intergubernamentales y la sociedad civil lleva[ba]n años solicitando datos sólidos y exhaustivos sobre la violencia contra las mujeres con los que formular políticas y definir vías de actuación”, como reconocen los organizadores de la publicación que difunde sus resultados (FRA 2014, 7).

Aparte de las críticas ya expuestas, se suele atribuir al enfoque feminista una incapacidad para explicar por qué algunos hombres muestran actitudes violentas hacia sus parejas y otros no. Por ese motivo, y aun reconociendo la importancia de las explicaciones que sitúan en el centro de su argumento las relaciones de poder entre hombres y mujeres, se recomienda conjugar éste con modelos explicativos complementarios (Gordon 2008). De hecho, los análisis de este enfoque parecen haberse refinado a lo largo de las últimas décadas para dar cuenta de una mayor diversidad de situaciones. Así, aunque los aspectos vinculados al poder y al control masculino siguen siendo fundamentales, se reconocen otros factores en la interpretación de la violencia contra las mujeres. Desde una perspectiva micro-social, podrían citarse las diferencias de estatus educacional, económico o de otro tipo entre los integrantes de la pareja (Sagrestano 1992 *apud.* Gordon 2008: 22).

No obstante, quizás la contribución teórica más influyente relacionada con la necesidad de realizar un análisis que capte la complejidad de este problema proceda de la consolidación de un novedoso paradigma interdisciplinar de análisis e interpretación de las desigualdades y discriminaciones: el de la interseccionalidad. Este paradigma, en todos sus enfoques, plantea tratar de manera articulada las múltiples dimensiones de subordinación que experimentan ciertos individuos y grupos sociales concretos, debido a los diversos elementos que conforman sus identidades, como el género, la etnia o raza,

⁵⁸ El Comité de la CEDAW reiteradamente recomienda implantar o perfeccionar instrumentos oficiales de recogida de datos sobre la violencia contra las mujeres en los diferentes países (Engle Merry 2003; Alméras y Magaña 2012, 33-4).

la nacionalidad, la clase social y la orientación sexual, aunque no exclusivamente (Crenshaw 1995; Collins 1998)⁵⁹.

El surgimiento de esta propuesta teórica aúna el activismo y los trabajos de las feministas negras y latinas estadounidenses con las teorías críticas sobre la raza, prestando desde sus orígenes especial atención al problema de la violencia contra las mujeres. Uno de sus textos pioneros trata sobre las interacciones entre las dimensiones de género y raza (también de clase y nacionalidad) en la violencia doméstica y en las agresiones sexuales sufridas por mujeres de color e inmigrantes en EE.UU., así como su invisibilidad en los discursos feministas y antirracistas y en las políticas públicas de atención derivadas de esos activismos (Crenshaw 1995). Kimberlé Crenshaw ha sido criticada por haber dado más importancia al silencio de las feministas blancas y del activismo antirracismo que al papel jugado por el racismo y el sexismo estructurales (Walby, Armstrong y Strid 2012, 229-30) en el desarrollo y mantenimiento de la subordinación de estas mujeres. Sin embargo, la propuesta de estudiar la intersección de identidades en los análisis y las políticas de violencia contra las mujeres sigue siendo una referencia para abordar algunas facetas del problema aún poco visibles.

En definitiva, la propuesta que hace la perspectiva sobre la interseccionalidad ha contribuido a la crítica de los esencialismos sobre el género, su construcción y la experiencia de ser mujer que habían sido asumidos por determinadas corrientes feministas a las que, hasta entonces, les había resultado difícil reconocer las discriminaciones y desigualdades múltiples (Harris 2000). En un sentido semejante, se puede mencionar la ya citada contribución de Iris Marion Young en la que discute la ‘opresión’ sufrida por determinados grupos sociales. Su idea de la opresión se define en términos de una articulación estructural de desventajas e injusticias que afecta a colectivos concretos. Cuando se presenta en forma de violencia, está tan socialmente legitimada que la mayoría de las personas no se sorprende de que se produzca y el acto generalmente queda impune; cita, a modo de ejemplo, la violación de las mujeres y la violencia policial dirigida contra los jóvenes negros (Young 2005, 102).

La literatura sobre violencia doméstica sigue incluyendo en un mismo marco conceptual los diferentes tipos y contextos de violencia dentro de la pareja⁶⁰. Asimismo, en esta literatura se considera que la preocupación por la violencia contra la mujer ha

⁵⁹ Véase McCall (2005) y Hancock (2007) para tipologías de los enfoques centrados en la mirada interseccional, y Walby, Armstrong y Strid (2012) para una discusión de sus elementos más importantes.

⁶⁰ Dutton (2006) constituye un ejemplo relativamente reciente de ello.

supuesto una negativa fragmentación del campo y una segmentación de esfuerzos y recursos para combatir tanto el abuso infantil como el maltrato hacia las mujeres (Gelles 2000). En la misma línea, se ha llegado a argumentar que la falta de un marco teórico común para la investigación sobre la violencia sufrida por hombres y mujeres ha dado lugar a una amalgama de informaciones sobre formas específicas de violencia en las que se pone un énfasis desproporcionado sobre las formas de violencia doméstica y sexual (Jackman 1999). Las corrientes feministas temen que este énfasis en las víctimas de la violencia en la pareja quite visibilidad a la victimización de aquellas mujeres que son agredidas por hombres a los que no conocen o que poseen un perfil menos apreciado socialmente, como prostitutas, drogadictas o presas (Websdale y Chessney-Lind 1998).

4.2.2. Algunas consideraciones sobre teorías y métodos

La adopción de diferentes conceptos, teorías y metodologías por cada una las corrientes que se ha mencionado en el apartado anterior conduce a resultados disímiles, a veces completamente opuestos. Hay, sin embargo, iniciativas que intentan acercar la perspectiva de la violencia familiar o doméstica y la perspectiva feminista. Asimismo, algunas críticas evidencian las limitaciones de destacar únicamente las diferencias metodológicas y conceptuales y de hacer un uso restringido de las teorías en las que se basan dichas perspectivas.

Michael P. Johnson señala que el enfoque feminista y el de violencia familiar observan y miden fenómenos distintos, y sugiere reconocer que si bien toda violencia en la familia es reprochable, se debe tener en cuenta que no son todas iguales. Según Johnson, hay un tipo de violencia que deriva del ‘terrorismo patriarcal’ (término que usa para resaltar aspectos estructurales y desmarcarse de expresiones que hacen hincapié en la víctima, su género, orientación sexual o estado civil) y la ‘violencia ordinaria en la pareja’:

La primera forma de violencia de pareja, a la que llamaré terrorismo patriarcal, ha sido el foco de atención del movimiento de mujeres y de los investigadores que trabajan bajo la perspectiva feminista. El terrorismo patriarcal, producto de tradiciones patriarcales que dan derecho a los hombres a controlar a ‘sus’ mujeres, es una forma de control terrorista de las esposas por sus esposos que implica no sólo el uso sistemático de la violencia, sino la subordinación económica, las amenazas, el aislamiento y otras tácticas de control. (...)

[La] violencia común en la pareja no es tanto un producto del patriarcado, sino de procesos causales menos relacionados con el género y ampliamente discutidos por Straus y sus colegas de trabajo (...). Se trata de una dinámica en la que los conflictos de vez en cuando quedan ‘fuera de control’, lo que conduce por lo general a formas ‘menores’ de violencia y convirtiéndose, más raramente, en formas graves, a veces incluso con peligro para la vida (Johnson 1995, 284-5).

Si originalmente su definición de terrorismo patriarcal incluía el uso sistemático de la violencia, más tarde considerará que este tipo no necesariamente se manifiesta con el uso de la violencia, ya que otras tácticas de coerción pueden resultar más eficaces (Johnson 2009, 284-6). Al segundo tipo lo denomina ‘violencia de pareja circunstancial’, señalando que incluso para esta forma se debería evitar hablar de simetría de género, pues la violencia masculina suele producir lesiones más frecuentes y graves, infundiendo así un miedo que es más raro que se produzca cuando la violencia proviene de las mujeres (M.P. Johnson 2005, 1129). Por último, completa su tipología con dos otros tipos (M.P. Johnson 2005; Johnson 2009). El más importante de ellos es la ‘resistencia violenta’, definida como el uso de la violencia con el objetivo de resistir al intento de control propio del primer tipo de violencia señalado. Se trataría de los homicidios perpetrados por la pareja con el fin de impedir que se repitan situaciones previas de abusos, evitando de ese modo la utilización de la expresión ‘en defensa propia’ pues no todos los casos encajan en la definición legal de este término. El cuarto tipo de violencia es el ‘control mutuo violento’, que comprendería los casos de dos terroristas íntimos luchando por el control de la relación. El autor, sin embargo, no pone mucho énfasis en este último tipo, pues son pocos frecuentes los casos y no aparecen en todas las muestras estudiadas.

La posibilidad de un doble o múltiple fenómeno permitiría reconocer lo que cada una de las corrientes aporta al debate y salir del punto muerto en el que se encuentra la cuestión sobre simetría o no simetría en la violencia entre hombres y mujeres. De esa forma, no quedarían ocultos los casos más graves en los estudios censales que agregan todas las formas de violencia y obtienen promedios de incidencia, y se advertiría sobre los peligros de extrapolar los resultados de investigaciones enfocadas sobre una de las formas de violencia a los que se ocupan de la totalidad de la violencia presenciada en la pareja. El debate sigue activo y muchas sugerencias sobre futuras investigaciones abordan los puntos de desacuerdo sobre la (a)simetría de género (Dobash y Dobash 2004; Straus 2006; Barner y Carney 2011) o la mejora de los instrumentos de medición (Walby y Myhill 2001; Gordon 2008, 577).

Otras críticas, sin embargo, señalan lo inadecuado de una agenda investigadora centrada en las definiciones y los aspectos metodológicos, y negligente con el corpus conceptual y teórico que se ha desarrollado en las ciencias sociales, especialmente en las teorías de género. Refiriéndose a la situación reciente de ese campo en América Latina y el Caribe, Castro y Riquer (2003) reclaman investigaciones que vayan más allá de una visión caricaturesca del patriarcado, que si bien es definido en términos estructurales,

acaba casi siempre reducido, dicen los autores, a variables individuales, como características sociodemográficas y aspectos conductuales. En ese sentido, recomiendan superar una visión atomista de lo social, privilegiar una comprensión de la violencia como una forma de expresión que asume la relación entre sujetos y no como una característica individual, y desarrollar instrumentos de investigación acordes a ello:

Básicamente lo que se ha preguntado es cuántas mujeres son violadas, agredidas física, sexual o emocionalmente por sus parejas, u hostigadas en la escuela o en la oficina; y cuáles son las características de los agresores. Pero, si se acepta que la violencia de género es un problema relacional y específicamente de acceso y uso desigual de diversos recursos entre los integrantes de una pareja y/o al interior del hogar, sobre lo que habría que preguntar es acerca del poder en las relaciones de género. (Castro y Riquer 2003, 138)

Anderson (2005) también sugiere priorizar el fortalecimiento de las bases teóricas, a partir de ideas mejor fundamentadas sobre el concepto del género. Considera que las contribuciones de la perspectiva familiar suelen partir de un enfoque individualista del género. Las investigaciones que explican la violencia por medio de su interconexión con el sexismo en la sociedad, aunque partirían de definiciones más complejas, dejan todavía mucho a desear en cuanto a su base teórica. Por eso, propone que las investigaciones sobre la violencia en la pareja y fuera de ella apliquen con más rigor perspectivas interaccionistas y estructuralistas sobre el género.

Retomando, así, la tipología de las tradiciones teóricas sobre el concepto de género propuesta por Risman (1998), Anderson recuerda que el enfoque individualista presupone que hombres y mujeres incorporen de manera individual las características atribuidas a su género. Llevando esta idea al estudio de la violencia, asume postulados simplistas del tipo: las personas son más o menos violentas según el género al que pertenecen, o cuando los niveles de violencia son similares, la influencia del género no existe. La perspectiva interaccionista ve el género como algo que se hace continuamente –un complejo resultado de prácticas sociales de interacción y expectativas culturales de comportamiento–, más que como un conjunto de características individuales que predicen la forma de actuación personal. Aplicada al estudio de la violencia en la pareja, “propone que la violencia puede ser un método compensatorio de ejercer control y construir masculinidad entre hombres que sienten que su autoridad o masculinidad han sido puestas en cuestión” y, por eso, ayudaría “a entender por qué el ejercicio de la violencia es evaluado de manera diferente dependiendo de las atribuciones de género del perpetrador y de la víctima” (Anderson 2005, 858).

Las teorías estructuralistas de género consideran que éste es parte de la estructura social y constituye una fuerza externa que organiza la sociedad y actúa con

independencia de la voluntad o del deseo individual, sin que esto signifique que sea inmutable o igual en todas las sociedades (Risman 1998). “Se necesita la teoría estructuralista de género para entender las maneras en las que mujeres y hombres encuentran diferentes restricciones al ejercicio de la violencia y diversas barreras para acabar con la violencia o dejar la relación”, además de ser “útil para analizar las maneras en que las tasas de la violencia de pareja varían en los diferentes contextos sociales” (Anderson 2005, 859-61).

Las contribuciones feministas se ubicarían, así, fundamentalmente, en esta última perspectiva, por su empeño en llamar la atención sobre el contexto social de desigualdad entre hombres y mujeres. Por eso, Anderson critica la insistencia de esta corriente en hacer mediciones, así como su incapacidad para explicar cómo el género influye y estructura la violencia. Sugiere que en lugar de entrar en la disputa metodológica y sobre instrumentos de medición, esta corriente debería demostrar que la investigación sobre la simetría sexual se basa en una visión individualista del género lo que conlleva evidentes limitaciones explicativas (2005, 859).

4.2.3. La socialización violenta y otros elementos interpretativos

Además de estas dos grandes corrientes en las que se ha concentrado esta revisión (violencia en la pareja como violencia doméstica o violencia patriarcal), es necesario apuntar la existencia de otros enfoques (Brewster 2002; Dutton 2006; McCue 2008).

En Sociología, tienen relevancia teorías que resaltan la **socialización** de las conductas agresivas y la transmisión intergeneracional de los comportamientos violentos. Estos aspectos ya estaban presentes en la perspectiva doméstica o familiar cuyas primeras investigaciones demostraban que tanto hombres como mujeres (nuevamente la cuestión de la simetría) tenían más probabilidad de agredirse mutuamente si han presenciado lo mismo en sus progenitores. Ambos repetirían comportamientos presenciados durante su desarrollo temprano: los hombres pegarían a sus parejas porque de niños aprendieron a resolver sus conflictos de manera violenta y las mujeres aceptarían parejas violentas al haber asistido de niñas a la violencia que se dirigía contra sus madres. Relacionado con esto, se pueden mencionar las investigaciones que se interesan por otras instituciones de socialización temprana (escuela, equipos deportivos) y sus roles de refuerzo y reproducción de estereotipos proclives a la aceptación de la violencia (Hodges, Card y Isaacs 2003). Los medios de

comunicación y la pornografía también preocupan en los estudios que se ocupan de los procesos socializadores, así como en determinadas perspectivas feministas, como se verá a continuación.

Otras corrientes se centran en aspectos **biológicos y psicopatológicos** (en especial los masculinos) tanto en los casos de la violencia en general y como en aquella ejercida en el contexto de relaciones de género. Las explicaciones basadas en argumentos biológicos, genéticos, patológicos o psicológicos tienden a naturalizar comportamientos agresivos y dominadores, negando (o cuando menos atenuando) la influencia de las estructuras sociales e históricas. En ese sentido, se ha intentado encontrar las causas de la violencia masculina hacia las mujeres en una larga y variada lista de factores: la genética, los mecanismos de desarrollo de la especie humana y su reproducción, el funcionamiento y los daños cerebrales, los traumas psicológicos, las alteraciones metabólicas y hormonales, etc. Muchos de esos estudios fueron criticados por basarse en muestras pequeñas y sesgadas (personas condenadas por la justicia o en tratamiento psiquiátrico, por ejemplo), cuyos integrantes se alejaban del perfil típico de los agresores, los hombres considerados ‘normales’. Además, los estudios comparativos realizados se encargaron de demostrar la heterogeneidad de la cuestión y de su ocurrencia en distintas sociedades, haciendo aún más difícil aceptar los argumentos biológico-deterministas⁶¹.

De manera similar, pero tal vez con más importancia en el debate, las teorías de enfoque psicológico se interesaron por posibles psicopatías y otras enfermedades mentales graves de los agresores. En ese sentido, algunas investigaciones basadas en muestras amplias y mejor construidas proponen que al menos una parte de la violencia doméstica sería perpetrada por personas con alteraciones de personalidad o personalidad agresiva. Este aspecto, en la opinión de Dutton (2006), habría sido ocultado por la resistencia de las corrientes feministas a abordar cuestiones de cuño psicosocial.

No obstante, también la teoría feminista buscó en la Psicología argumentos para fundamentar su comprensión del problema, especialmente para explicar por qué algunas mujeres continúan en relaciones violentas, cambiando de este modo el foco de atención

⁶¹ Un texto clásico en ese aspecto es el estudio de Sanday (2007) sobre los contextos socioculturales de la violación en el que compara 156 sociedades tribales y constata que frente a 47 de ellas en las que la violación es rara y a las que llama ‘sociedades libres de la violación’, se encuentra una sociedad como la estadounidense, a la que denomina ‘sociedad propensa a la violación’ por las cifras (oficiales) que presenta. Más recientemente, la obra editada por Travis (2003) cuestiona la argumentación del libro *Natural History of Rape: biological bases of sexual coercion* (Thornhill y Palmer), publicado tres años antes, que trataba la violación desde una empobrecida y trasnochada perspectiva evolucionista.

del acto a la víctima. Esa perspectiva gozó de cierto predicamento durante la década de 1960, pero su contribución más recordada llegó a principios de los años 80, con la definición de lo que se denominó ‘síndrome de la mujer maltratada’. La estadounidense Lenore Walker acuñó esta expresión para referirse a los efectos de la violencia sobre las víctimas, conceptualizándola como un tipo de trastorno del estrés postraumático. Su uso en el discurso legal y en tribunales tenía el propósito de ofrecer una evaluación argumentada científicamente sobre el comportamiento de mujeres que matan a sus compañeros para defenderse o librarse de una violencia continuada.

Sin embargo, pese a reconocerse el efecto positivo que tuvo en el apoyo público al entonces emergente movimiento de defensa de estas mujeres (Rothenberg 2003), el hecho de considerar que padecen un síndrome reforzó una visión que atribuye a las víctimas patologías, culpa, incapacidad e indefensión, desviando el foco de desigualdad estructural de género hacia aspectos individuales, siempre que las víctimas encajen en un perfil previamente descrito (Schneider 2000; Barner y Carney 2011). Tanto autoridades como activistas abandonaron estos argumentos (Rothenberg 2003), pero las referencias a ellos no han desaparecido del todo, ni en la academia ni en la legislación o los tribunales⁶², aunque ahora se prefiera un término neutro que incluya también a víctimas hombres y parejas del mismo sexo (Walker 2006; Russell, Ragatz y Kraus 2012).

4.3. Un problema público y mundial

La violencia en la pareja ha sido solamente una de las posibles aproximaciones a un debate más amplio y de proporciones internacionales sobre las violencias contra las mujeres, pero existen otros aspectos que aún necesitan ser abordados antes de tratar este tema en el marco de la política de cooperación internacional. De este modo, reconociendo la contribución del feminismo para que entren “en la esfera de lo

⁶² En España, la LOI 1/2004 cita en el tercer párrafo de su exposición de motivos, sin mencionar la fuente, la existencia de “una definición técnica del síndrome de la mujer maltratada que consiste en «las agresiones sufridas por la mujer como consecuencia de los condicionantes socioculturales que actúan sobre el género masculino y femenino, situándola en una posición de subordinación al hombre y manifestadas en los tres ámbitos básicos de relación de la persona: maltrato en el seno de las relaciones de pareja, agresión sexual en la vida social y acoso en el medio laboral»” (España 2004). Sin embargo, estas consideraciones se alejan notablemente de la idea original de este síndrome: no se refiere a las consecuencias para las víctimas que la sufren ni explica los motivos por los cuales las mujeres continuarían en una relación violenta. Además, no se discute cómo reconocer la existencia de este síndrome es importante para la realidad sobre la cual la ley busca incidir o cómo influye en la protección y en la asistencia que se debe prestar a las víctimas, por ejemplo.

políticamente discutible o contestable unos objetos y unas preocupaciones descartados o ignorados por la tradición política porque parecen corresponder a la esfera de lo privado” (Bourdieu 2000, 140), se repasará a continuación cómo el tema de la violencia contra las mujeres ha llegado a ocupar un lugar destacado en la agenda pública mundial y cuáles son las implicaciones que ello tiene.

Siguiendo a Ana de Miguel (2005, 2008) y su examen de las demandas feministas en relación a la violencia desde un enfoque de marcos de interpretación, se captan tres momentos clave de la deslegitimación y redefinición de la violencia contra las mujeres:

El primero, enraizado en los feminismos del siglo XIX —sufragistas y socialistas— tiene como objetivo desarticular la ideología de la naturaleza diferente y complementaria de los sexos, luchar por los derechos básicos y denunciar y hacer visibles las condiciones de coacción y violencia que rodean a la condición femenina. En segundo lugar el feminismo radical de los años sesenta con su giro epistemológico hacia el análisis de la esfera de lo privado y su nuevo concepto de lo político como toda área de la acción humana atravesada por relaciones de poder desvelará la cara oculta de la familia y las relaciones personales. En tercer y último lugar se sitúan todas las investigaciones que desde los estudios feministas y de género han tenido como objetivo consciente la consolidación de un nuevo marco interpretativo —«la violencia de género»— desde el que contribuir a una nueva autoconciencia de la especie y a la erradicación de esta vergüenza para la humanidad. (de Miguel 2008, 129-30)

Entre las feministas ilustradas del siglo XVIII, el tema no tuvo tanta importancia. Sus preocupaciones se centraban en que las mujeres adquiriesen el estatus de ciudadanas y en la reafirmación de la igualdad de los sexos, aspectos que se materializaron en las luchas por los derechos políticos y educativos (Valcárcel 2009). En el segundo gran momento para la historia de los derechos de las mujeres, el tema de la violencia hizo ya su aparición, pero todavía modestamente: de la mano de las sufragistas y feministas liberales del siglo XIX, surgen las denuncias contra el matrimonio como un peligro para las mujeres, comparándolo frecuentemente a la condición de la esclavitud⁶³. Es un momento en el que se le concede visibilidad al problema de la violencia contra las mujeres, pero aún con evidentes limitaciones: “la violencia doméstica no se tematiza como un problema separado y específico de reflexión” (de Miguel 2008, 133), tal como se estaba haciendo con la prostitución en el mismo período.

⁶³ En su estudio sobre la historia de los movimientos feministas en diferentes regiones del mundo, Mary Nash recuerda que “[c]omo foro reivindicativo, el abolicionismo, en su defensa de los derechos de las personas negras, promovió una percepción política de la opresión fácilmente trasladable a la discriminación de la mujer. Desde la época de la Ilustración, se había desarrollado una analogía entre la situación del esclavo y la de la mujer” (2012, 86).

Hay que recordar que a finales del XIX empezaban a organizarse las primeras reuniones internacionales para la abolición de la prostitución y la ‘trata de blancas’ (con este término se hacía referencia al tráfico y trata de mujeres blancas europeas para la explotación sexual y laboral en las colonias y en países periféricos y se marcaba una distinción con respecto al tráfico transatlántico de personas negras africanas del período colonial). En España, donde también había llegado este debate, se abordó la prostitución y la explotación al margen de las demandas feministas del período (Guereña 2003).

Se observa también en este momento un interés (no muy duradero) por cuestionar la imposibilidad de que ocurriera la violación sexual dentro del matrimonio. Se pretendía de este modo abordar el problema de la maternidad obligatoria, ya que esta implicaba que la mujer estaba, de facto, sujeta a la violación marital.

En una época anterior a que existieran medios fiables para el control de la natalidad, era fundamental que se respetara el “no” de una mujer. Los índices de mortalidad maternal eran elevados. Muchas mujeres quedaban físicamente arruinadas para el resto de sus vidas después del parto: los prolapsos de útero, los desgarros perineales no suturados y las fístulas vaginales eran un destino habitual y temido. (Bourke 2009, 385)

La elaboración de un nuevo marco (esta vez de carácter estructural y explicativo, no sólo de denuncia) sobre la violencia dirigida contra las mujeres no se produjo hasta los años sesenta del siglo XX, con el resurgimiento del feminismo –en el contexto más general de aparición de nuevos movimientos sociales, y su particular pretensión de desarrollar una idea universal sobre ‘la mujer’ y la opresión de la misma (Nash 2012)–. La llamada tercera ola feminista, especialmente su corriente radical o cultural, invitaba a ver como una cuestión política lo que ocurría en los ámbitos personal y privado de la vida de las mujeres y a utilizar el concepto de patriarcado para hacer visible el sistema de dominación masculina.

De Miguel (2005, 2008) señala las contribuciones de dos autoras: Kate Millett (*Sexual Politics*, de 1969) y Susan Bronwmler (*Against Our Will*, de 1975), para explicar, respectivamente, la violencia como instrumento de control, intimidación y amenaza (no necesariamente de uso recurrente) hacia las mujeres en la sociedad patriarcal y la violación como amenaza permanente que condiciona el comportamiento cotidiano femenino. El uso de la fuerza como algo excepcional, pero que significa una constante amenaza, y la socialización en normas sexuales patriarcales son centrales para Millett:

No se acostumbra asociar el patriarcado con la fuerza. Su sistema socializador es tan perfecto, la aceptación general de sus valores tan firme y su historia en la sociedad humana tan larga y universal, que apenas necesita el respaldo de la violencia. (...) Y, sin embargo, al igual que otras ideologías dominantes, como el racismo y el colonialismo, la sociedad patriarcal ejercería un control insuficiente, e incluso ineficaz,

de no contar con el apoyo de la fuerza, que no sólo constituye una medida de excepcionalidad, sino también un instrumento de intimidación constante. (Millett 1995, 100)

Brownmiller (1986) también enfatiza el proceso socializador y la intimidación constante, pero lo hace al describir la violación como un acto de poder y dominación (no como un acto sexual *per se*) al que las mujeres aprenden a temer desde la infancia y los hombres a saber que lo pueden ejercer. Expone, además, una ‘ideología de la violación’ que permea toda la sociedad y repasa los diversos contextos en los que ocurre, como la guerra, la cárcel, la esclavitud, el campus universitario o en relaciones interraciales –lo que además le valió acusaciones de racismo y de hacer retroceder la lucha por los derechos civiles en su país, como lo recuerda en su autobiografía (Brownmiller 2000)–.

A pesar del alcance explicativo de las propuestas de estas dos pioneras, se pueden mencionar otras contribuciones que también intentan desvelar la constancia y la extensión de las prácticas de control, abuso, maltrato y violación de los cuerpos femeninos. En 1973, por ejemplo, se publicó *Por su propio bien – 150 años de consejos de expertos a mujeres* (Ehrenreich y English 1990) que trata sobre la aparición de los expertos en la naturaleza femenina (mayoritariamente varones, médicos, psicólogos, puericultores), y en el que se hace un inventario de un conjunto de técnicas violentas relacionadas especialmente con los órganos sexuales y reproductores de las mujeres, y que continuaron siendo utilizadas hasta muy entrado el siglo XX⁶⁴.

Recientemente, ha ido ganando prominencia la cuestión de la ‘violencia obstétrica’, entendida como una forma de violencia institucional contra las mujeres, que consiste en actos innecesarios, agresivos, no consentidos o no informados realizados por personal sanitario a embarazadas y parturientas –tales como tactos vaginales dolorosos, rechazo de la petición de alivio del dolor, negarse a dar atención, falta de explicación de los procedimientos adoptados, gritos, insultos, humillaciones y amenazas por parte del personal sanitario (Fundação Perseu Abramo y SESC 2010)–. Por un lado, las referencias académicas que la caracterizan como una forma específica de violencia de género o contra las mujeres aún son escasas, así como las investigaciones que la miden y las iniciativas políticas que la abordan (Jewkes y Penn-Kekana 2015). Por otro, la

⁶⁴ Puede resultar chocante la descripción de tales ‘asaltos médicos’ al cuerpo femenino (sanguijuelas, inyecciones o cauterizaciones con nitrato de plata o hierro candente de la vulva o del cuello del útero, extirpación de clítoris u ovarios), así como justificaciones utilizadas (curar la ninfomanía, la masturbación, la histeria...).

OMS, en una reciente y pionera declaración sobre la ‘Prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en centros de salud’, describe un panorama alarmante sobre el trato irrespetuoso, ofensivo o negligente durante el parto (OMS 2014). En sentido similar, otros estudios proponen conceptualizar determinadas actitudes médicas sexistas y discriminatorias como formas de violencia específicamente dirigida a las mujeres⁶⁵.

Retomando los marcos de interpretación anunciados al inicio de este apartado, falta mencionar el tercero y último, el que consolida la visión del problema como algo socialmente grave y que apuesta por exigir respuestas a los poderes públicos. “En menos de 30 años, hemos pasado de una situación en la que muchas de las formas de violencia no eran ni siquiera nombradas (...), a la definición de la violencia de género como una violación fundamental de los derechos humanos de las mujeres” (Kelly 1999, 119).

El carácter reivindicativo de ese nuevo marco se ha traducido en una extensa y diversificada lista de reivindicaciones dirigida a una mayor intervención por parte de los poderes públicos. Por ejemplo: servicios de protección y asistencia a las víctimas (de carácter jurídico, psicológico, médico-sanitario), acciones educativas y campañas masivas de prevención, programas de sensibilización y de formación dirigidos a profesionales y a la población en general, programas de intervención con agresores, mejora de los instrumentos estadísticos y de recolección de datos, cambios legislativos, penales y procesales, además de la creación y adecuado funcionamiento de determinadas instituciones, como comisarías y juzgados especializados, centros de emergencia y de acogida temporal y unidades de investigación (Johnson, Ollus y Nevala 2008; Consejo de Europa 2009).

Sin embargo, hay críticas que consideran que la lucha contra la violencia contra las mujeres se ha concentrado excesivamente en el aspecto jurídico, simplificando y reduciendo la solución del problema al momento de la denuncia por parte de la víctima y a la penalización del agresor (Marugán Pintos y Vega Solís 2002; Osborne 2009). El

⁶⁵ Valls-Llobet (2009), desde la crítica al androcentrismo en la atención sanitaria y desde una lectura del concepto de ‘micromachismos’ del psicólogo clínico Luís Bonino, identifica las ‘microviolencias de género’ en el acto médico, eso es, actitudes que expresan estereotipos de género, minimizan la escucha a las pacientes o las victimizan. Menos conocida, y a la vez más específica, es la interpretación dentro de este marco de la violencia de género de la terapia de electrochoque, a partir de la constatación de que su aplicación es desproporcionadamente superior entre mujeres y de que es utilizada como mecanismo de castigo y control, especialmente en pacientes que no se ajustan a los roles femeninos tradicionales (Burstow 2006).

debate no es reciente y las posturas siempre han sido diversas, desde un minoritario rechazo a acudir a aquellas instituciones percibidas como androcéntricas y patriarcales (el Estado, los tribunales, las fuerzas de seguridad), pasando por la desconfianza en el derecho penal como solución, hasta llegar a la defensa “de la necesidad de ampliar y endurecer los tipos penales y exigir una contundente y severa aplicación de la ley” (de Miguel 2005, 242). De todos modos, incluso a quienes defienden el papel simbólico de la ley les preocupa el énfasis que se pone en las formas más visibles y directas, y la desatención a todo lo que las justifica y las refuerza (Galtung 1990). Específicamente sobre la violencia de carácter psicológico dirigida a las mujeres, Segato (2003) señala la superficialidad con la que se aborda la cuestión, pues frecuentemente aparece definida de manera complementaria a la agresión física o asociada al inicio de un proceso violento⁶⁶.

De Miguel atribuye el auge del actual marco sobre la violencia contra las mujeres a la consolidación académica de los estudios feministas, de la mujer y, más recientemente, de género que se produce a partir de mediados de los 70 que han permitido “fundamentar y prestar aval científico y académico a la visión feminista de la violencia” (2005, 243). Otras autoras destacan que la actual e inédita atención al tema se debe a la influencia que han ejercido sobre la política las organizaciones feministas y de mujeres, especialmente a partir de las Conferencias sobre la Mujer de Nairobi y Beijing, en un constante flujo entre los niveles local, nacional e internacional (Keck y Sikkink 1998; Tripp 2006; Weldon 2006; Roggeband 2016). En un trabajo en el que se comparaban las políticas sobre violencia contra las mujeres de más de setenta países a lo largo de cuatro décadas, Htun y Weldon (2012) concluyeron que la existencia de movilizaciones feministas, fuertes y autónomas, en la sociedad civil son el mejor predictor del aumento de la atención gubernamental al problema (no la ideología de los partidos políticos en el poder, la presencia de mujeres en el Gobierno ni la pujanza económica del país).

Se volverá a mencionar la labor activista transnacional sobre la violencia contra las mujeres en el siguiente capítulo. Antes de pasar a ello, sin embargo, se van a abordar

⁶⁶ Segato prefiere la expresión ‘violencia moral’ para referirse a “todo aquello que envuelve agresión emocional, aunque no sea consciente ni deliberada. Entran aquí la ridicularización, la coacción moral, la sospecha, la intimidación, la condenación de la sexualidad, la desvalorización cotidiana de la mujer como persona, de su personalidad y sus trazos psicológicos, de su cuerpo, de sus capacidades intelectuales, de su trabajo, de su valor moral. Y es importante enfatizar que este tipo de violencia puede muchas veces ocurrir sin ninguna agresión verbal, manifestándose exclusivamente con gestos, actitudes, miradas” (Segato 2003, 115).

otros aspectos que merecen ser mirados con más detenimiento: la ampliación del significado de la violencia sexual proporcionado por determinadas corrientes feministas y el desarrollo del concepto de feminicidio. También se tratará del uso de la expresión ‘violencia de género’ en este tercer momento interpretativo, referida la violencia contra las mujeres, especialmente debido a la relevancia que ha adquirido en España el debate sobre sus significados, ventajas e inconvenientes.

4.3.1. Violencia sexual: nombrar, definir, ampliar

El feminismo radical, en sus diversas corrientes, se caracterizó por dar nombre y visibilidad a la violencia patriarcal, especialmente referido a la violencia sexual (Puleo 2005). Aunque la violación y la agresión sexual ya eran objeto de preocupación anteriormente⁶⁷, el tema toma una nueva perspectiva con la reivindicación del derecho al propio cuerpo y con la conceptualización del patriarcado como sistema de dominación universal. La sexualidad pasa a considerarse la principal explicación de la opresión de las mujeres y, en su sentido más extremo, en el instrumento por medio del cual la dominación patriarcal se perpetúa (Osborne 2005).

Desde los inicios en los años setenta, el movimiento feminista relacionó las agresiones sexuales con la subordinación social general de las mujeres. Las agresiones se veían como un problema social basado en la histórica dominación masculina y en los vínculos establecidos socialmente entre *propiedad* –las mujeres como propiedad de los varones–, *sexualidad* –por medio de un modelo androcéntrico de sexualidad– y *violencia* real o como amenaza –violencia administrada a discreción o sistemáticamente a quienes son consideradas como una propiedad, como una pertenencia de quien se rige por un determinado modelo de sexualidad– (Osborne 2009, 69).

Esta reconceptualización dio lugar a una ampliación de definiciones, ámbitos en lo que se produce e, incluso, de posibles víctimas de la violencia de carácter sexual. Al mismo tiempo, al feminismo radical se le acusa de que tal visión desprende una excesiva generalización y una visión esencialista de las conductas sexuales de tanto hombres como de mujeres, partiendo muchas veces de una dicotomía con la que precisamente se intentaba derrumbar.

⁶⁷ Eso fue verdad especialmente para los casos con víctimas menores de edad o ‘decentes’, aunque siempre se ha priorizado el efecto de la agresión para la familia o el varón al que se vinculaba la víctima. La sensibilización social contra la violencia sexual ocurre primero cuando la persona afectada es menor de edad, antes que una mujer adulta, quien sólo a mediados del siglo XIX pasa a ser vista como sujeto y, por lo tanto, víctima de un delito (Vigarello 1999). En sentido parecido, Segato afirma que solamente en la época moderna la violación deja de ser vista como agresión que afecta a otro hombre por medio del cuerpo de una mujer para ser considerada un delito contra la persona que la sufre (2003, 26-7).

Aparece también la figura del **acoso** u **hostigamiento sexual**, denominación que antes de los años 70 no existía, y que inicialmente se identificó con el ambiente laboral (Thomas y Kitzinger 1997). Con ella se pretendía dar visibilidad a la práctica llevada a cabo por parte de compañeros o jefes de requerir favores sexuales a cambio de recompensas o para evitar represalias, pero también a comportamientos y comentarios de contenido sexual, hostiles o degradantes dirigidos a mujeres por razón de su género. También se producen en ese período las primeras marchas nocturnas de reivindicación de espacios públicos seguros para las mujeres y de denuncia del acoso callejero (Nash 2012). Todo ello motivó la aparición de diversas tipologías de acoso, especialmente en el ámbito estadounidense, además de una intensa discusión sobre sus causas y el reconocimiento de su existencia en ámbitos como el educativo y el político (Roth 1999). Desde el feminismo radical se insistió en señalar las relaciones de poder sistemáticamente desiguales entre mujeres y hombres como origen de la victimización femenina desproporcionada en cualquiera de los tipos de acoso considerados. Más recientemente, se ha podido ver cómo los estudios sobre el tema han empezado también a ocuparse “de la sexualidad y de los roles sexuales implicados en el acoso y de la forma que adoptan en las organizaciones empresariales” (Osborne 2009, 142). Asimismo, en el ámbito de los países europeos, las primeras medidas punitivas aparecieron a mediados de los 80, gracias a la reivindicación del activismo feminista, aunque terminó siendo considerado un tipo de discriminación sexual laboral, y menos una forma de violencia (Zippel 2008)⁶⁸.

En ese contexto de ampliación de la atención a la violencia sexual, la **prostitución** y la **pornografía** se consideran las máximas expresiones de la explotación sexual femenina, y son temas que causaron y siguen causando divergencias importantes en el feminismo. Sin pretender agotar todos los puntos de este debate, es importante repasar algunos de ellos, por la vinculación que pueden tener con determinadas acciones de cooperación internacional.

Un efecto no previsto y no deseado de la revolución sexual de los años 60, habría sido la proliferación de la pornografía (Osborne 1989). Como respuesta a este fenómeno, surgen iniciativas cuya finalidad es combatir algo considerado degradante

⁶⁸ España, siguiendo el ejemplo de muchos países, define en su legislación (Art. 7 de la Ley de Igualdad) dos tipos de acoso: el sexual y el de género (o por razón de sexo), con el objeto de distinguir comportamientos de contenido sexual que atentan contra la dignidad humana y aquellos realizados en función del sexo o género de la persona al que se dirige. Ambos son considerados discriminaciones sexuales (España 2007). Asimismo, la Plataforma de Beijing menciona el acoso sexual como forma de violencia en el ámbito de la comunidad y en el educativo contra las niñas.

para las mujeres y que contribuye además a sostener la ideología masculina dominante. El activismo antipornografía esgrimía como principal argumento para su prohibición la premisa de que su difusión constituía una causa directa de las agresiones a las mujeres, víctimas ya no solamente simbólicas de esas imágenes. En este sentido, el contenido pornográfico proporcionaría a los hombres ‘guiones de violación’. Atacar prioritariamente su forma más dura o extrema constituyó una táctica para evitar ser tachadas de moralistas –‘la pornografía no es un asunto moral’, repetían (MacKinnon 1997), a la vez que arremetían contra las prácticas que se alejaban de una concepción tradicional de la sexualidad–. Esta apuesta, sin embargo, las aproximó a los grupos conservadores, evidenciado por el apoyo que obtuvieron de la derecha estadounidense en la fracasada propuesta de una ley antipornografía formulada a mediados de los años 80 por dos de sus autoras más prominentes, Catharine MacKinnon y Andrea Dworkin (Osborne 1989, 1993)⁶⁹.

En una contundente alegación sobre los costes y peligros que acarrea para la lucha feminista ocuparse de lo que llama el ‘falso problema’ de la pornografía, Rubin (1993) considera tautológicas las definiciones de MacKinnon y otras investigadoras de esta corriente (es pornográfico porque es degradante; es degradante, entonces, es pornográfico) y se niega a considerar la pornografía como portadora en sí misma de un discurso anti-mujer, sexista o incitador a la violencia, al menos no más que otros formatos audiovisuales plenamente aceptados. Específicamente sobre su vínculo con la violencia, denuncia el encubrimiento de aspectos que debilitarían el argumento abolicionista y la realización de generalizaciones malintencionadas. Por ejemplo, el hecho de que no todo contenido considerado pornográfico representa actos violentos y la existencia de materiales dirigidos a lesbianas y minorías sexuales. Aquellos que cuestionan que la pornografía sea eminentemente violenta o degradante, suelen recordar la existencia de corrientes que la ven como un elemento que puede llegar a contribuir a la liberación femenina y a la expresión de su sexualidad (Ogien 2005).

Hay que reconocer que sigue sin existir un consenso sobre el tema, pero las demandas para que se prohíba y reprima ya no tienen la misma intensidad. También es necesario recordar que la validez científica de los estudios que vinculaban de manera directa el consumo de pornografía y los actos de violencia sexual fue duramente

⁶⁹ Todavía preocupa el uso que se puede llegar a hacer de argumentos feministas antipornografía (y antiprostitución) para legitimar agendas políticas moralizadoras y de control estatal sobre conductas sexuales determinadas. Véase el artículo de Carline (2011) para un debate sobre esos aspectos en una iniciativa reciente para criminalizar la prostitución y la pornografía extrema en el contexto británico.

desacreditada. Aun así, persiste el interés por investigar esta relación desde modelos causales menos simplistas⁷⁰, y por plantear otras estrategias para el activismo feminista que no se limiten a la estrategia jurídico-legal. Por ejemplo, prestar más atención a las imágenes y a todo tipo de contenido donde se exhiba a las mujeres y a las niñas como objetos sexuales, no centrándose tanto en la pornografía considerada dura y realizar una crítica más amplia del sexismo y la misoginia en cualquier manifestación cultural o medio de comunicación.

También vuelve a cobrar fuerza y visibilidad la postura abolicionista sobre la prostitución, ya presente en la preocupación sufragista por la ‘trata de blancas’. Las normas impulsadas a partir de mediados del siglo XIX, aunque ya no se basaban explícitamente en argumentos religiosos o morales, sino en razones sanitario-higiénicas para el control de las enfermedades venéreas, se materializaban siempre en actuaciones y abusos contra las prostitutas (o mujeres ‘sospechosas’ de serlo), y difícilmente o prácticamente nunca contra los hombres o las condiciones socio-económicas subyacentes (Nash 2012, 107-15). En el feminismo radical, así como para muchos posicionamientos abolicionistas actuales, pornografía, prostitución y explotación sexual son formas equivalentes o similares de violencia contra las mujeres y abominables mecanismos de comercialización del acto sexual (MacKinnon 2005). Se critica que en esta postura prevaleciera el silencio sobre las prácticas discriminatorias llevadas a cabo contra las prostitutas y que se excluyera su voz (Osborne 1989; Pheterson 1992; Juliano 2001). Quienes abogan por su reglamentación o legalización rechazan conceptualizar la prostitución como violencia contra las mujeres y la diferencian de la explotación sexual por el carácter obligatorio y coercitivo de esta última. Igualmente, está a debate cómo defender los intereses y derechos de las prostitutas (o trabajadoras sexuales, según qué postura), sin silenciarlas o tratarlas como víctimas.

Aunque sigue siendo un punto de profundas divergencias, son interesantes los intentos por entender y abordar este tema más allá de reduccionismos, dicotomías y enfrentamientos –abolir/prohibir versus reglamentar/liberalizar; esclavitud/violencia versus opción/trabajo legítimo–, tanto para buscar estrategias con las que combatir la prostitución sin caer en vías contraproducentes para los propósitos feministas (Gimeno

⁷⁰ Véase Hinson Shope (2004), para una discusión sobre la compleja concurrencia positiva entre violencia sexual en la pareja y consumo de pornografía por parte del agresor; y Baron y Straus (1989), para una llamada de atención al establecimiento relaciones directas de causalidad, aun cuando la investigación encuentra una correlación positiva entre índices de violación y de circulación de material pornográfico.

2011), como para mejorar la comprensión de sus diferentes y actuales facetas (Boris, Gilmore y Parreñas 2010). Además, ciertos trabajos etnográficos dedicados a analizar, por ejemplo, el denominado ‘turismo sexual’ (Kempadoo 1999; Piscitelli 2007; Alcázar Campos 2010) y otras prácticas similares, desafían a abandonar las categorías dicotómicas y a reconocer la agencia de las mujeres involucradas.

Poner el acento en la complejidad de formulaciones y perspectivas sobre la prostitución contribuye a examinar con más propiedad la creciente atención internacional otorgada a la trata de personas (incluyendo la que le prestan la cooperación al desarrollo y sus actores), y su concentración en algunas de sus formas, como la trata con fines de explotación sexual.

4.3.2. Otras categorías de alcance internacional

En ese contexto de interrelación entre academia y activismo y de difusión internacional de nuevas interpretaciones sobre la violencia contra las mujeres, es importante mencionar al menos dos de ellas que han impulsado de manera significativa la visibilidad pública internacional del tema: el feminicidio y la violencia sexual como arma de guerra.

El primero de estos conceptos, **femicidio** o **feminicidio**, se usa para referirse a los asesinatos de mujeres por razón de género. El origen del término suele atribuirse a una conferencia de la investigadora Diana Russell ante el Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres, que tuvo lugar en 1976, en Bruselas –evento, además, considerado uno de los momentos iniciales del proceso de definición de la cuestión de la violencia contra las mujeres en el ámbito de las Naciones Unidas (Joachim 2007, 105). Russel rastreó los primeros usos del término en inglés *femicide* hasta el inicio del siglo XIX y, posteriormente, hizo algunas modificaciones en su propuesta de definición del término, con el fin de resaltar los aspectos misóginos y sexistas de los asesinatos de mujeres cometidos por varones, cuando estaban motivados por sentimientos de odio, superioridad, sadismo o idea de propiedad (Russell 2005). Otra característica que define el femicidio, según esta visión, es constituir el “punto final en un *continuum*” (Pasinato 2011, 224) de abusos, violencias y privaciones.

Marcela Lagarde propone el uso en español de feminicidio, adaptando además el contenido de su definición a los contextos mexicano y latinoamericano. Con ese término, quiere dejar claro que no se trata solamente de un tipo específico de homicidio que afecta a personas del género femenino, sino que un factor clave para entender su

perpetuación es la “inexistencia o debilidad del estado de derecho”, lo que favorece la impunidad y, por lo tanto, constituiría “un crimen de Estado” (Lagarde *apud.* Garita Vilchez 2013, 16). El tema adquirió relieve con la misteriosa y poco investigada sucesión de muertes y desapariciones de mujeres ocurridas desde al menos los años 90 en Ciudad Juárez, en la frontera norte de México. Gracias a las denuncias de organizaciones de mujeres y de familiares de las víctimas de esos crímenes en los últimos años, el debate teórico sobre este tipo de violencia saltó al mundo del derecho internacional. En 2009, un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por el caso de tres jóvenes asesinadas cuyos cuerpos con signos de violación y tortura fueron encontrados en una fosa común en 2001 (sentencia Campo Algodonero). Fue la primera vez que se condenó a un Estado por homicidios por razón de género, aun sin demostrar la participación de agentes públicos, debido al incumplimiento de los deberes de investigar los crímenes, sancionar a los responsables y garantizar los derechos de las víctimas.

Muchos países de América Latina incorporaron (o discutieron la incorporación) del feminicidio/femicidio como figura penal específica (Garita Vilchez 2013). Aun en los casos en que el cambio legal no llegó a materializarse, el debate pareció impulsar la recopilación de datos oficiales en algunos países (Alméras y Magaña 2012). Esto no significa que se pasara a hacer un registro detallado de las causas de las muertes violentas de mujeres (Muñoz Cabrera 2011) o que se utilizara adecuadamente la tipificación, debido en muchas ocasiones a una insuficiente o incorrecta investigación de esos crímenes (Alméras y Magaña 2012). Todo ello provoca divergencias en las estadísticas, además de dudas sobre lo que efectivamente se está considerando feminicidio en la actualidad en cada contexto y por parte de las diferentes instituciones públicas.

Asimismo, independientemente de su registro, definición legal y posible uso jurídico, es común encontrar en la literatura sobre el tema la mención a tres categorías de feminicidio: íntimo, no íntimo y por conexión (Pasinato 2011)⁷¹, definidas a continuación:

⁷¹ Cabe recordar que hay muchas propuestas de tipologías de femicidio/feminicidio, empezando por la de Russell (2005), que llega a contemplar una categoría de ‘feminicidio disimulado’ que incluiría las muertes resultantes de diferentes prácticas con raíces misóginas y sexistas con las que se asesinaría a mujeres de manera encubierta, como abortos ilegales mal realizados, infanticidios y abortos selectivos debido a la preferencia por hijos varones en muchas culturas, así como distintos tipos de mutilación genital femenina.

- Feminicidio íntimo: se presenta en aquellos casos en que la víctima tenía o había tenido una relación de pareja con el homicida. Este tipo de feminicidio no se limita a aquellos en que existía un vínculo matrimonial, sino que se extiende a concubinos, novios, parejas sentimentales, amantes. También comprende las muertes de mujeres a manos de integrantes de la familia (ascendientes, hermanos, primos).
- Feminicidio no íntimo: corresponde a las muertes en que el homicida no tenía una relación de pareja o familiar con la víctima. En esta categoría se incluye la muerte perpetrada por un cliente (en el caso de trabajadoras sexuales), por amigos o vecinos, por desconocidos, cuando se ataca sexualmente a la víctima antes de matarla, así como las muertes de mujeres en el contexto de la trata de personas.
- Feminicidio por conexión: se da en los casos en que las mujeres fueron muertas [sic] en la “línea de fuego” de un hombre que pretendía matar o herir a una mujer. Por lo general, las víctimas son parientes que intentaron prevenir o evitar el homicidio o la agresión, o que se encontraban en el lugar de los hechos. (Villanueva Flores 2010 *apud*. Alméras y Magaña 2012, 91).

Sin embargo, en los últimos años, ha surgido en el ámbito feminista un debate sobre la estrategia de reservar el término feminicidio para determinados tipos de muertes de mujeres, en oposición a un uso amplio del término (como el que se presenta en la anterior tipología), en el que se incluyen también las muertes de mujeres a manos de sus parejas y familiares. Posiblemente, en uno de los extremos de ese debate estarían los posicionamientos de Russell (2005) y de Lagarde (2009). Esta última autora, además del uso del término feminicidio para prácticamente todos los casos de homicidios de mujeres, propone identificar como ‘violencia feminicida’ cualquier muerte que esté causada por actos violentos evitables (como accidentes, suicidios, desatención a la salud) derivados de la opresión de género y tolerados por el Estado y la sociedad.

Sin cuestionar la importancia de que con esta categoría se haya logrado enmarcar estos asesinatos de mujeres en el universo del patriarcado, Rita Segato (2005, 2006) propone un uso selectivo de ella. Más que el impacto de las cifras que aporta la propuesta de considerar como feminicidio la muerte de cualquier mujer por razón de género, el interés de esta autora residiría en resaltar lo que considera la idiosincrasia de asesinatos como los de Ciudad Juárez, distanciándolos de los crímenes cometidos cuando hay una relación sentimental entre víctima y agresor: es decir, cuando se produce una agresión a una mujer genérica, simplemente por el hecho de ser mujer. Esto es, una agresión despersonalizada y dirigida a una categoría social y no a un individuo específico (como podría ser el caso de los asesinatos que ocurren en el ámbito de la pareja o de la familia, donde víctima y agresor se conocen o tienen algún tipo de vínculo).

En ese sentido, según Sagato, la idea de feminicidio en esos términos se aproximaría a la del crimen de genocidio como una “agresión genérica y letal a todos aquellos que pertenecen al mismo grupo étnico, racial, lingüístico, religioso o ideológico” (Segato 2006, 10). Más recientemente, ha propuesto referirse a ese tipo de

homicidios como ‘femigenocidio’ (Segato 2014), para marcar el carácter bélico de los feminicidios cometidos en contextos actuales de lo que considera nuevas formas de guerra en la vida de las mujeres. Estas nuevas modalidades de violencia ejercida contra las mujeres estarían marcadas por la informalidad y la afirmación de un código letal, sexualizado y cruel sobre sus cuerpos, aspecto que la autora denomina de ‘escritura’ realizada sobre el cuerpo de las mujeres asesinadas (Segato 2005). Otro argumento a favor del uso selectivo de esta categoría considera que la utilización homogeneizadora o indistinta del feminicidio contradice el énfasis en la intersección del género con otras dimensiones de la identidad y en las experiencias contextualizadas de las mujeres:

se puede considerar que las muertes de jóvenes obreras en Ciudad Juárez son un buen ejemplo de lo que es el feminicidio. La contradicción está precisamente en aplicar esa misma categoría para explicar todas las muertes de mujeres, independientemente de su edad, de su clase social, del contexto y circunstancia en que los crímenes ocurren, y de quienes los practican (Pasinato 2011, 238).

Como se puede observar, el debate respecto al feminicidio es un elemento más que sigue abierto en la forma de abordar las violencias contra las mujeres. En lo que dice respecto a las cuestiones teóricas, estas disputas también revelan diferencias en cómo se entienden las relaciones de género y poder en el análisis de estos crímenes, si como resultado de una dominación patriarcal fija, estática y polarizada, o si deben entenderse de manera contextualizada cultural e históricamente, lo cual podría enfatizarse mediante una aplicación selectiva de esta categoría (Pasinato 2011).

Otro debate sobre las particularidades de determinadas formas de violencia contra las mujeres se suscitó cuando a mediados de los años 90 se conocieron las violaciones en masa realizadas durante los conflictos de Ruanda y de la antigua Yugoslavia. Aunque la discusión feminista sobre la guerra, el militarismo y el uso de la violencia sexual en contextos bélicos no es reciente⁷², ésta se reavivó al ser reconocida la **violación como arma de guerra** por parte de los tribunales penales internacionales creados a raíz de esos conflictos. Así, se pasa a entender la violación en tiempos de guerra como algo deliberadamente pensado, planificado y ejecutado, con una aplicación sistemática e incluso oficialmente orquestada, y no como uno de sus productos o efectos no deseados (Buss 2009).

Este reconocimiento se amplía pocos años después con la aprobación del Estatuto de Roma que pasaría a regir la actuación de la Corte Penal Internacional,

⁷² Recuérdese que Brownmiller (1986) dedica un capítulo de su obra a repasar la violación en las guerras a lo largo la historia.

cuerpo judicial permanente de ámbito internacional para investigar y castigar los crímenes de genocidio, contra la humanidad y de guerra. En él se considera que los **crímenes de género**, entre los cuales está incluida la violación y otras violencias sexuales, pueden constituir genocidio y crímenes contra la humanidad. Los artículos 7 y 8 del Estatuto de Roma enumeran un amplio espectro de delitos específicos de género, entre los cuales se incluyen: la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual de comparable gravedad. Hasta entonces, ningún otro instrumento del derecho internacional o del derecho humanitario internacional abordaba adecuadamente la violencia sexual o la violencia basada en el género (Bedont y Hall Martinez 1999).

Esas novedosas incorporaciones al derecho penal internacional no estuvieron exentas de tensiones y contradicciones⁷³ que van más allá del ámbito estrictamente jurídico o penal⁷⁴. Hay que resaltar, sin embargo, que alianzas y organizaciones feministas y de mujeres hicieron un intenso trabajo de presión política para lograr esos avances, evidente tanto en la negociación del Estatuto de Roma (Bedont y Hall Martinez 1999), como en denuncias presentadas en los tribunales internacionales y las movilizaciones para incluir el tema de la ‘violación sistemática’ durante los conflictos armados en documentos internacionales, como la Declaración de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, ocurrida en Viena en 1993 (Copelon 2001).

4.4. La violencia de género a debate en España

Para concluir este capítulo, se destacan a continuación el alcance, las posibilidades y las limitaciones que la conceptualización de la expresión ‘violencia de género’ ha adquirido más recientemente en el contexto español.

⁷³ Al igual que ocurriera en la Conferencia de Beijing, durante el proceso de elaboración del Estatuto de Roma, las activistas feministas debieron hacer frente a resistencias de carácter religioso por parte de representantes de algunos estados, incluyendo el Vaticano, en relación a la definición de género y al aborto (Rodríguez Manzano 2008). Uno de los resultados de esas objeciones es que el embarazo forzado sólo se reconoce como un crimen contra la humanidad en los casos en que se pueda probar que la intención era la de influir en la composición étnica de la población o realizar alguna otra grave violación del derecho internacional (Chinkin 2009).

⁷⁴ En el caso de Ruanda, el concepto de violación como genocidio reconoció la victimización de las mujeres Tutsi pero, a la vez, dejó invisibles a otras víctimas de las violaciones ocurridas durante este conflicto, como las mujeres Hutu, o incluso los hombres, impidiendo o limitando el reconocimiento de otras dimensiones de la vulnerabilidad ante la violencia sexual en ese contexto (Buss 2009), aparte las de género y raza.

Prácticamente desde el inicio de la transición política tras el fin de la dictadura franquista, las organizaciones feministas del Estado español mostraron preocupación por la cuestión de la violencia sexual y en la pareja, siendo Madrid y Barcelona las primeras ciudades en las que empezaron a funcionar centros de atención a víctimas de violación al inicio de la década de 1980 (Roggeband 2004, 165-6). Sin embargo, el establecimiento de instrumentos oficiales para la recopilación de datos sobre violencia contra las mujeres a nivel estatal se ha producido de forma gradual y relativamente tardía. Hubo que esperar hasta el año 2000 para conocer los resultados de la primera ‘macroencuesta’ sobre violencia contra las mujeres, realizada en 1999 por el Instituto de la Mujer, cuya ejecución estaba prevista en el Plan de Acción contra la Violencia Doméstica de 1998 y en el III Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 1997-2000. Con esta encuesta se buscaba, además, cumplir con las recomendaciones del Comité de la CEDAW, de la Plataforma de Acción de Beijing y del Parlamento Europeo respecto a la promoción de la investigación, la recogida y la elaboración de información estadística sobre la materia⁷⁵.

Las encuestas específicas que empezaron a llevarse a cabo detectaban índices de victimización superiores a los datos oficiales de denuncias y delitos que había disponibles hasta entonces en el país. Se observa, asimismo, que las cifras aumentan en cada encuesta realizada, lo que en ningún caso debía suponer una interpretación automática de que aumentaba la incidencia de la violencia (Pérez Díaz y MacInnes 2007), sino que había que tener en consideración los criterios de contabilización utilizados y los límites de la definición de lo que se consideraba violencia, ambos ampliados en ediciones sucesivas de la encuesta (Osborne 2008).

Habría que analizar si, al intentar reflejar un contexto más amplio de maltrato hacia las mujeres, las iniciativas de medición en España impulsadas por el Instituto de la Mujer no pecarían de un afán cuantificador que muchas de las investigaciones sobre el

⁷⁵ Las observaciones del Comité de la CEDAW a ese respecto están recogidas en las ya mencionadas Recomendaciones Generales de 1989 y 1992. En sentido parecido, la Plataforma de Acción de Beijing, en su §129, dice: "Medidas que han de adoptar los gobiernos, las organizaciones regionales, las Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales, los institutos de investigación, las organizaciones femeninas y juveniles y las organizaciones no gubernamentales, según corresponda: a) Promover la investigación, recoger datos y elaborar estadísticas, especialmente en lo concerniente a la violencia en el hogar, relacionadas con la frecuencia de las distintas formas de violencia contra la mujer, y fomentar las investigaciones sobre las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de esta violencia, así como sobre la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y reparar sus efectos (...)" (ONU 1996). Ya en el ámbito europeo, en 1997, se pone en marcha la primera campaña de tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres, en la que también se insta a los Estados a adoptar criterios comunes de recogida de datos estadísticos (Parlamento Europeo 1997).

tema demuestran. En ese sentido, estas macroencuestas trataron de medir tanto la violencia directa reconocida por la víctima, llamada ‘maltrato declarado’, como aquella que no es reconocida por la víctima como tal, el ‘maltrato técnico’, que se puede deducir de las respuestas de las mujeres a una batería de preguntas sobre insultos, amenazas o actitudes controladoras por parte de su pareja. Uno de sus puntos problemáticos, sin embargo, sería haber incluido en esa última categoría comportamientos derivados de situaciones de conflicto en la pareja que no obligatoriamente estarían clasificados como violentos, aunque posiblemente fueran sexistas (Casado Aparicio, García y Selgas 2012). La falta de una división clara entre sexismo y maltrato, dice Raquel Osborne, hace un flaco favor a quienes sufren esa forma de violencia, además de presuponer que el sexismo conduce siempre y de manera automática a la violencia o que todo hombre machista es necesariamente violento con su pareja (2008, 113-4).

Como ya se ha mencionado al hacer referencia al actual contexto de problematización de la violencia contra las mujeres, de Miguel enfatiza la existencia de una nueva manera de definirla, la ‘violencia de género’. Aunque reconoce que el uso de esta expresión “no ha satisfecho por entero a casi nadie” (de Miguel 2008, 136), retoma argumentos de Alice Puleo (2008) para su defensa en el contexto español (especialmente para referirse al momento de la discusión y aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género)⁷⁶. Hablar en ‘violencia de género’, según esas dos filósofas, supone desnaturalizarla, abordarla como algo social y relacional, y por lo tanto aprendido y sujeto a cambios y transformaciones. Al ser el género un concepto sociológico que se diferencia del sexo biológico, permite separar, al menos operacionalmente, las características sociales y culturales imputadas a mujeres y a hombres de las características biológicas, y evidenciar relaciones de poder y situaciones de exclusión y discriminación derivadas de tal atribución (Scott 1986; Oliva Portolés 2005). Implica, asimismo, articular las políticas públicas de prevención y lucha contra la

⁷⁶ Este análisis se ciñe a las críticas sobre el uso de la expresión ‘violencia de género’ de los ámbitos feminista y académico. Se evita, así, el debate de cuño lingüístico, tan prominente en la prensa en los últimos años, por considerarlo menos relevante a los objetivos de esta investigación. Para una mayor información sobre este debate, especialmente la posición contraria a su uso expresada por la Real Academia Española en un informe previo a la aprobación de la mencionada Ley Orgánica Integral 1/2004, así como los cambios realizados por el Gobierno en su título cuando aún se discutía el proyecto de ley, véase Velando Casanova (2005).

violencia de género en torno a la identificación de la desigualdad de género, considerando dicha desigualdad como la causa principal de esta forma de violencia.

Otras autoras, sin embargo, consideran inadecuado el uso de una categoría analítica para definir políticamente la violencia contra las mujeres: “[e]xpresiones como *violencia de género*, encubren más que aclaran de qué violencia se trata, o sea, de qué género es la violencia de género” (Valcárcel 2009, 255). Igualmente, se considera que el término violencia de género difumina la identidad sexual de víctimas y perpetradores, pues, al igual que en otras formulaciones, como violencia intrafamiliar o doméstica ya rechazadas anteriormente por el enfoque feminista, encubre que la mayoría de víctimas son mujeres y la mayoría de agresores, varones (Marugán Pintos y Vega Solís 2002).

Aunque este debate ya existía antes de la adopción de la expresión violencia de género por la legislación española, la definición legal dada por la LOI 1/2004, lo ha avivado. Esto se debe a que aunque en su exposición de motivos rechaza reducir el problema al ámbito privado y mencione la Declaración de Naciones Unidas de 1993, la Plataforma de Beijing y otros instrumentos internacionales y europeos (que como ya se ha visto, definen la violencia contra las mujeres de manera amplia), su artículo 1 adopta una definición más restringida de esa problemática:

La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, *se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia*. (España 2004) [Sin cursivas en el original.]

Eso significa que el delito de violencia de género en España, instituido por esta normativa, se restringe a la violencia (o su amenaza, como precisa más adelante el artículo 37) ejercida contra una mujer y su(s) hijo(s) e hija(s) en el ámbito de sus relaciones de pareja o expareja con un hombre, aunque no exista convivencia. De esta manera, “no recoge lo que en toda la legislación internacional y en todo el debate feminista ha quedado ya claramente definido” (Bodelón 2008, 279): que violencia de género incluye otras manifestaciones de violencia contra las mujeres, además de aquellas de pareja o expareja. “Deja fuera del ámbito de su intervención el acoso sexual en los ámbitos laborales o la violencia sexual [ocasional o fuera del ámbito de las relaciones de pareja o expareja] y no tiene en cuenta la dominación masculina que sigue plenamente vigente en todos los ámbitos de la vida pública” (Marugán Pintos 2012, 165). Esta vinculación entre desigualdad de género y una forma específica de violencia desplaza teóricamente el análisis de los mecanismos de poder, para circunscribirlos únicamente a este dominio íntimo, el de las relaciones afectivo-amorosas,

“(...) excluyéndose así del imaginario colectivo aquellos otros nudos esenciales donde se geste la desigualdad sexual y la violencia, el ámbito económico, las relaciones laborales, sociales inter-personales. Esta confusión genera problemas serios, como por ejemplo, que en algunos ámbitos judiciales se haya exigido que se demuestre la desigualdad de poder para el caso concreto enjuiciado.” (Bodelón 2008, 283)

Sin embargo, el debate no se cierra ahí. En las últimas décadas e incluso después de la aprobación de la referida LOI 1/2004, iniciativas políticas del ámbito estatal ocasionalmente entienden y nombran formas de violencia como el acoso sexual, la prostitución y la trata de mujeres como manifestaciones de violencia de género (López Rodríguez 2011). La definición jurídicamente válida en el país no las contempla como tales, lo que crea como mínimo algunas dudas sobre la satisfacción de la propia administración pública con la definición legal vigente. En el mismo sentido, conviene mencionar que la unidad administrativa creada a raíz de la LOI 1/2004, la Delegación de Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, para impulsar la creación de políticas públicas dirigidas a ofrecer tutela a las víctimas de esa violencia, pasó en 2008 a llamarse Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, y su finalidad fue modificada para impulsar políticas relacionadas con ‘las distintas formas de violencia de género’. A principios de 2012, en una reorganización administrativa tras la extinción del Ministerio de Igualdad, se ampliaron las competencias de esta unidad para coordinar también las respuestas a la trata de mujeres con fines de explotación sexual, una forma de violencia reconocida como ‘de género’ por los planes integrales que se impulsan desde el 2010, aunque no se considera un delito de violencia de género en la actual legislación española⁷⁷.

El escenario sobre el uso y los límites de uso de la expresión violencia de género queda aún más complicado si se piensa en lo que la separa y la acerca a las agresiones dirigidas contra personas homosexuales, bisexuales, travestis o transexuales, cuyo motivo sea la identidad sexual o el incumplimiento de los roles de género socialmente esperados. El debate sobre la violencia de género en España ha evitado entrar en este ámbito, circunscribiéndola a las parejas heterosexuales. Sin embargo, aunque poco frecuente, ya que la construcción del término ha estado primordialmente relacionada con la problematización de la situación que sufren las mujeres por una condición de subordinación en relación a los varones, en ocasiones se conceptualiza la violencia de género de modo que incluya también ese tipo de casos. Pérez del Río (2007), por ejemplo, al tratar de la violencia de género en el ambiente laboral abordada en

⁷⁷ Esta reorganización administrativa se formaliza a través del Real Decreto 200/2012, de 23 de enero, que desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

normativas internacionales y europeas respecto al acoso sexual y al acoso por razón de género, incluye la discriminación laboral derivada de lo que llama decisiones legítimas sobre la propia sexualidad.

Más allá de una cuestión episódica relacionada con una u otra forma específica de violencia, es esencial tener en cuenta la disputa teórica latente respecto a los conceptos de género y de desigualdades de género en la definición de la violencia de género. Muchas veces, al reivindicar que se trate en el mismo marco conceptual que la violencia homófoba o similar, se está entrando en un campo que entiende el género de manera más amplia que una categoría binaria de análisis de la desigualdad entre mujeres y hombres, como pretenden las aportaciones posestructuralistas y constructivistas (Oliva Portolés 2005). Desde este punto de vista, se postula abordar su tratamiento de manera que se prioricen en sus análisis y modelos de intervención las complejidades e intersecciones de la problemática (Coll-Planas y Cruells 2013) y se señalen las deficiencias o lagunas de las políticas que ignoran la especificidad de la intersección entre género e identidad sexual. Como resultado, las violencias que sufren las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales pueden ser más invisibles que aquellas sufridas tanto por las mujeres heterosexuales como por los hombres homosexuales. Sin este enfoque desde la interseccionalidad, ni el marco de la violencia de género ni el de la violación de los derechos humanos de la población LGBT podrían articular adecuadamente la confluencia de los aspectos de género y de orientación sexual en cuanto a su posibilidad que tienen de ser susceptibles a estar sometidos a abusos en los ámbitos familiar, laboral y público (Pichardo 2006).

La insuficiente protección que ofrece la legislación española en lo que se refiere a la violencia de género contra las mujeres lesbianas, bisexuales o transexuales, no constituye un caso aislado. La poca diversidad de voces y representaciones en las demandas feministas acogidas e incorporadas institucionalmente a lo largo de los últimos años por la Administración española, en especial en la lucha contra la violencia de género, habría sido una causa determinante para que no se haya reconocido la intersección existente entre la discriminación de género y otros aspectos de desigualdad social (etnicidad, clase, nacionalidad y estatus de inmigrante, por ejemplo) en ese nuevo marco legislativo (Sandu 2013).

**CAPÍTULO 5 - LÍMITES Y POSIBILIDADES:
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y
LA ACCIÓN DE LA COOPERACIÓN AL
DESARROLLO**

Capítulo 5 – LÍMITES Y POSIBILIDADES: LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LA ACCIÓN DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO

El reciente interés manifestado por estados, instituciones públicas y organizaciones internacionales hacia la violencia contra las mujeres, una cuestión que históricamente había quedado al ámbito doméstico-privado, se extiende también a los estudios y políticas de desarrollo internacional. Esto ocurre cuando están entrando en el escenario de la cooperación al desarrollo nuevas perspectivas, como el enfoque del desarrollo humano o el enfoque Género en Desarrollo (GED), al que nos hemos referido ya en páginas anteriores. En este contexto, es necesario examinar con detenimiento las posibilidades que se abren para la lucha contra la violencia contra las mujeres en la cooperación internacional al desarrollo, y poner al descubierto algunos de los riesgos y limitaciones que tiene su acción cuando hace frente al problema.

El primer apartado de este capítulo aborda en profundidad algunos puntos de encuentro entre la violencia contra las mujeres en la agenda y la práctica de la cooperación internacional al desarrollo a nivel global. Se repasan los vínculos entre lo que se entiende por desarrollo y la violencia contra las mujeres, especialmente a partir de que esta cuestión ha pasado a ser contemplada en las propuestas de medición del desarrollo y de la definición de metas para alcanzarlo. Seguidamente, se señalan algunos puntos en los cuales siguen existiendo dificultades a la hora de abordar la cuestión de la violencia contra las mujeres dentro del enfoque Género en Desarrollo. Trataremos concretamente tres cuestiones con muchos puntos de enlace con el problema discutido en este estudio: la lucha contra la pobreza, las masculinidades y la sexualidad. Finalmente, para concluir este capítulo y la parte de esta tesis dedicada a aspectos teórico-conceptuales, se muestra cómo el debate sobre esencialismos culturales en el desarrollo y en la discusión de las cuestiones de género puede reflejar en la forma en la que se hace frente a la violencia contra las mujeres desde la cooperación internacional al desarrollo.

5.1. La violencia contra las mujeres en la agenda del desarrollo

Los planteamientos que relacionan el fenómeno de la violencia en general con el desarrollo presentan orientaciones muy diversas. A final, como se ha tratado de exponer

en los capítulos 3 y 4, ambas ideas, separadamente, ya poseen en sí mismas muchas perspectivas y tensiones en sus definiciones.

Las primeras investigaciones que exploraban la confluencia entre ambos fenómenos solían partir de conceptualizaciones etnocéntricas influidas por teorías de la modernización, presentando la violencia como un problema propio de territorios no desarrollados, periféricos (McIlwaine 1999). Actualmente, sin embargo, estos vínculos suelen entenderse desde perspectivas menos simplistas, en las que se reconoce la importancia de la interacción de aspectos sociales, políticos y económicos. En estudios comparativos sobre la violencia, Imbusch y Velt (2011), en un monográfico sobre la violencia en el ‘Sur Global’ y las investigaciones en ese campo, identifican tres categorías en los nexos entre violencia y desarrollo. En primer lugar, estarían aquellos que resaltan los inmensos costes directos e indirectos que la violencia impone al crecimiento económico de una sociedad y al desarrollo que se supone asociado a ese crecimiento. Otros autores demostraron que las relaciones entre pobreza y violencia se retroalimentan, ya que la falta de recursos impide o dificulta la autoprotección frente a la violencia y ésta, a su vez, frustra los esfuerzos para reducir la pobreza. Finalmente, también hay que tener en cuenta el impacto a nivel de gobernanza, en especial para el anormal funcionamiento de instituciones sociales y estatales en sociedades con elevados índices de violencia. En todo caso, estas consideraciones tienden a priorizar las manifestaciones visibles y directas de violencia.

Si, por otro lado, se partiera de definiciones más amplias sobre lo que se considera violencia, en la línea de lo que Galtung (1990) propone como violencia estructural, mencionada anteriormente, entonces los vínculos con las cuestiones del campo del desarrollo serían constantes y todavía más amplios. Esto es, si consideramos que también constituyen violencia “los insultos a las necesidades básicas humanas, y más generalmente a la vida, reduciendo el nivel real de satisfacción de necesidades por debajo de lo que es potencialmente posible” (Galtung 1996 *apud*. Cockburn 2007, 191), está claro que también se pueden entender como violencia las principales problemáticas abordadas por el campo de los estudios y políticas del desarrollo tales como la pobreza, la exclusión o la destrucción de la sostenibilidad del medioambiente.

Asimismo, desde las perspectivas más críticas al desarrollo, se reflexiona sobre las causalidades y se considera la práctica modernizadora del desarrollo como un elemento inductor de diferentes formas de violencia (Kothari y Harcourt 2004). Según este enfoque, se debería prestar más atención a la violencia, explotación y exclusión que se producen al imponer acciones de transformación económica, social y política

justificadas en nombre del desarrollo. Se requiere una vigilancia permanente sobre los procesos de cambios socioeconómicos drásticos y cómo pueden afectar a la naturaleza e incidencia de la violencia contra las mujeres, una vez que estas logran incrementar su participación en la esfera pública, aunque continúen viviendo en contextos de amplia desigualdad de poder en relación a los hombres y con escasa protección legal (Khan 2005). Aunque se tengan presentes estas perspectivas, este capítulo revisa principalmente la literatura que discute aspectos relacionados con la práctica de una política pública de cooperación internacional al desarrollo en los términos mencionados anteriormente en lo que refiere a la acción específica de lucha contra la violencia contra las mujeres.

5.1.1. Consensos y marginación

Volviendo al lugar que ocupan las relaciones desiguales entre mujeres y hombres en ámbito de los estudios sobre el desarrollo, la cooperación internacional y sus instituciones, tenemos que señalar que la revisión teórico-conceptual sobre el desarrollo, realizada en el capítulo 3, aunque posiblemente incompleta, evidencia el carácter controvertido y complejo de esta idea, y permite destacar otros elementos. Por un lado, se percibe la creciente importancia de las instituciones internacionales financieras y no financieras en los debates teóricos sobre el desarrollo⁷⁸, así como la falta de unanimidad entre ellas; por otro, se aprecia la dificultad de abandonar la idea de crecimiento económico, incluso cuando se adopta un concepto como el de desarrollo humano (Rist 2002).

La existencia de elementos como las críticas que promueven cambios en las posiciones dominantes respecto al desarrollo, la aparente convergencia de posturas originalmente opuestas y la creciente influencia de organizaciones internacionales en el debate teórico, se asemejan a lo ocurrido con el Enfoque Mujeres en Desarrollo (MED) y, posteriormente, con el de Género y Desarrollo: sus supuestos más innovadores y

⁷⁸ Se han mencionado contribuciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del PNUD y de UNICEF. Sin embargo, el Banco Mundial está considerado el centro de un 'complejo financiero/intelectual de la ayuda exterior' (Samoff 1999 *apud*. Sogge 2002). La publicación anual de sus *Informes Mundiales sobre el Desarrollo* y el hecho de disponer de más de dos mil 'indicadores clave para el desarrollo' en su página electrónica, por ejemplo, posicionan la institución de manera privilegiada en la producción y difusión de conocimiento. El primer *Informe Mundial sobre Desarrollo* fue publicado en 1978, momento en el que este tipo de publicación aún no era demasiado frecuente. Su influencia en el debate teórico sobre el desarrollo queda ilustrada por el documento de 1990, en el cual se propuso el conocido parámetro de un dólar al día como umbral de la pobreza (Yusuf 2009).

críticos fueron progresivamente adoptados por el *mainstream* del desarrollo, muchas veces sin la radicalidad y los objetivos iniciales.

La imposibilidad de dar una definición única y definitiva sobre el desarrollo, desde cualquier disciplina o corriente académica –teniendo especialmente en cuenta las insuficiencias de la visión económica ortodoxa dominante–, ha propiciado la ampliación de este debate hacia consideraciones interdisciplinarias y críticas, incluyendo aquellas originadas en estudios feministas y de género (Kabeer 1998; Kanbur 2002). Dicho de otro modo, “la ‘humanización’ del desarrollo ha traído consigo, de forma inevitable, su ‘feminización’” (López 2005, 3). Es a partir de esa humanización y feminización cuando se vislumbra la violencia contra las mujeres como un tema de desarrollo, aunque esta preocupación no haya surgido de manera tan inmediata como las de la maternidad (muy presente en el pionero enfoque del bienestar) o de la inserción laboral femenina (cuestión abordada, por ejemplo, en el enfoque de la equidad). En algunos casos, esta inclusión se hace de manera bastante perversa, por ejemplo, cuando la atención a la violencia contra las mujeres se justifica por sus ‘efectos nocivos’ sobre la productividad de las trabajadoras, afectadas por problemas de salud derivados de los malos tratos (Banco Mundial 1995 *apud.* Reeves 2000, 330).

De este modo, pese a que en los últimos años existe un aparente consenso en torno a la igualdad de género y una cierta convergencia respecto a la importancia que merece el tema en la cooperación internacional, se constata que “las mujeres siguen ocupando un lugar marginal en el pensamiento y la política del desarrollo” (Kabeer 1998, 26).

Es necesario reconocer que, en los diez años que transcurrieron entre las tres primeras Conferencias Mundiales sobre la Mujer (México en 1975, Copenhague en 1980 y Nairobi en 1985), el discurso sobre las mujeres en el desarrollo cambió significativamente. Se crearon oportunidades para abordar la violencia contra las mujeres y para incluir nuevas voces que demandaban más investigaciones y espacio en las organizaciones de desarrollo. En Nairobi, fue destacable el esfuerzo que se realizó para dar más visibilidad a las perspectivas de las organizaciones de mujeres de los países en desarrollo que, reunidas en plataformas como la red DAWN (*Development Alternatives with Women for a New Era*), expresaron su descontento con los enfoques MED y reivindicaron un desarrollo alternativo, centrado en las necesidades de las personas más pobres, especialmente las mujeres (Jain 2005). Se recuerda asimismo este momento como uno de acercamiento y recuperación del diálogo entre las feministas occidentales y las de los países en desarrollo, teniendo como punto de partida la

comprensión de las desigualdades de clase y género en un contexto global (Parpart 1994).

Solo recientemente se ha asumido la violencia contra las mujeres como algo relevante en la agenda internacional del desarrollo, desde cualquiera de sus perspectivas o propuestas de medición. Desde el momento que se acepta y se reconoce que cualquier intervención de desarrollo necesita tener en consideración el enfoque de género, entendiendo éste como un minucioso análisis de las necesidades de mujeres y hombres, las violencias que sufren las mujeres aparecen inevitablemente como una cuestión central a la que se debe atender. Este tema aparece explícitamente en el programa de acción aprobado en 1980 durante la Conferencia de Copenhague y sigue siendo considerado como un problema relevante por otras instancias de Naciones Unidas hasta la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Nairobi, a diferencia de lo que había ocurrido en la primera Conferencia de México y en el texto de la CEDAW, aprobado pocos años después (Rodríguez Manzano 2008, 147), en los que se ignoraba. Durante la tercera Conferencia en el país africano, en el foro paralelo de las organizaciones de la sociedad civil que se suele citar como el espacio en el que se articuló por primera vez el enfoque del empoderamiento por la red DAWN, también se discutió abundantemente la violencia contra las mujeres, lo que permitió colocar este tema entre las prioridades que se aprobaron en el documento final (Rodríguez Manzano 2008, 158; 75). La Conferencia de Nairobi supuso también la inclusión en la agenda internacional de la cuestión de las mujeres refugiadas, víctimas de conflictos armados y guerras, tema luego abordado por otras instancias de Naciones Unidas en los siguientes años (Jain 2005, 120-2).

De manera similar a lo ocurrido en las Conferencias Mundiales, el Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), creado en 1976, no vinculó explícitamente violencia contra las mujeres y desarrollo cuestiones durante sus dos primeras décadas de existencia (Jain 2005, 129); tampoco incluyó entre sus prioridades de este período la lucha contra la violencia contra las mujeres. Así, pese a un reconocimiento discursivo a inicios de los años 90 por parte de su dirección sobre el obstáculo al desarrollo que representaba el problema (Carrillo 1991), el cambio interno de esta organización en relación con el tema que nos ocupa se produjo años después, una vez establecido un Fondo Fiduciario dedicado exclusivamente a financiar proyectos relacionados con el problema, cuya creación surge a raíz de una recomendación de la Plataforma de Acción de Beijing (Heyzer 1998).

Hoy en día, no se puede negar que la violencia contra las mujeres es un tema recurrente en la agenda del desarrollo, pese a las dificultades para incorporarla de manera decidida y definitiva. Está presente en iniciativas de desarrollo de innumerables temas y sectores, tales como la ayuda humanitaria, los conflictos armados, la infancia, la salud, las migraciones y las relaciones laborales (Naciones Unidas 2009; UNFPA 2010b, a; Cruz y Klinger 2011), por citar solamente los más obvios. Incluso puede parecer anecdótico que la mayor exposición a la violencia sexual a la que están sujetas mujeres y niñas integre el argumentario utilizado en campañas internacionales promovidas por las Naciones Unidas en favor del saneamiento básico y la adecuada instalación de retretes⁷⁹. Sin embargo, ésta es solamente una de las maneras en las que alguna práctica o contexto específico de la violencia contra las mujeres integra las prioridades de las instituciones internacionales y agencias financiadoras del campo del desarrollo.

Obviamente, hay matices y diferencias en la forma de abordar el problema que necesitan ser tenidos en cuenta. Cuando se consideró que la violencia contra las mujeres era un problema lo suficientemente importante para incluirlo en el campo del desarrollo, surgieron numerosas perspectivas. Sen (1998) identifica tres enfoques principales sobre la violencia contra las mujeres al ámbito del desarrollo. Uno de estos enfoques considera que la violencia contra las mujeres limita la eficiencia de los proyectos de desarrollo; otra de estas perspectivas la ve como un obstáculo a la participación de las mujeres en este tipo de acciones; y, finalmente, un enfoque resalta el agravio al desarrollo humano y la violación de los derechos humanos de las mujeres que supone la existencia de la violencia contra las mujeres.

En el primer punto de vista, se considera a las mujeres un recurso para el desarrollo y la violencia se percibe, principalmente, como una limitación de su productividad o un coste económico directo o indirecto evitable para los individuos, el Estado o la sociedad. Este tipo de enfoque suele concentrarse en determinadas formas de violencia contra las mujeres, en general las más visibles o cuantificables, ignorando

⁷⁹ Con ocasión del Día Mundial del Saneamiento del 2014, instituido por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año anterior y celebrado el 19 de noviembre, una declaración del Secretario de Naciones Unidas afirmaba: “Tenemos la obligación moral de acabar con la defecación al aire libre y tenemos el deber de velar por que mujeres y niñas no corran peligro de ser víctimas de agresiones o violaciones simplemente porque carecen de acceso a servicios de saneamiento. Por ello, el tema de este año del Día Mundial del Retrete se centra en “La igualdad, la dignidad y la relación entre la violencia por razón de género y el saneamiento” (consulta realizada el 21 de noviembre de 2014: <http://www.un.org/en/events/toiletday/>).

de ese modo tanto el entramado social que las favorece o las justifica como el papel del Estado y las instituciones de la cooperación internacional al desarrollo a la hora de que se produzcan o se perpetúen. Dentro de la serie de Informes sobre Desarrollo Mundial del Banco Mundial, la publicación correspondiente al año 2012 se centra en la igualdad de género (World Bank 2011). Pese a expresar un inédito reconocimiento de la igualdad de género como un objetivo de desarrollo en sí mismo por parte de esta institución (Razavi 2012), el contenido de la publicación no rompe con la desatención a aspectos estratégicos y estructurales que perpetúan las desigualdades entre mujeres y hombres (Herrfahrdt-Pähle y Rodenberg 2012). La violencia contra las mujeres, además de verse circunscrita mayoritariamente al ámbito doméstico, vuelve a ser abordada en términos de eficiencia económica.

Además de reducir la eficiencia de las acciones dirigidas a la promoción del desarrollo, la violencia puede obstaculizar o impedir la participación de las mujeres en las intervenciones o en el disfrute de los servicios que éstas ofrecen. Aunque la participación se ha convertido en un elemento importante en los proyectos de desarrollo, ésta debe ser abordada de manera crítica, poniendo atención a la seguridad e integridad física de las mujeres. En contextos de relaciones de género desiguales, incentivar la presencia de las mujeres en espacios públicos o en actividades para generar ingresos, por ejemplo, puede afectar a estas relaciones y provocar amenazas e prohibiciones de sus parejas.

El problema se agrava cuando se produce o se recrudece la agresión masculina debido a la participación de las mujeres en estas actividades. Una acción de cooperación al desarrollo, aunque bien intencionada y efectiva en lo que se refiere a sus objetivos, puede influir en las relaciones de poder de sus participantes a nivel doméstico y familiar, aspectos inseparables de la violencia ejercida contra las mujeres en el ámbito privado, como ya alertaba Jacobson (1993) en un texto pionero dirigido al personal de las agencias de cooperación. También en esa misma época, cuando la violencia contra las mujeres aún no se discutía abiertamente en los equipos e instituciones del desarrollo, El-Bushra y Piza Lopez (1993) llamaron la atención sobre esta cuestión en el ámbito de los espacios comunitarios y públicos, y no solamente en el de las relaciones de pareja, a la vez que recomendaban el uso de un mecanismo específico de seguimiento de la violencia basada en el género dentro de las etapas de cualquier proyecto, desde su programación hasta su evaluación.

De todos modos, este riesgo no debería ser motivo para seguir negando la participación de las mujeres en los proyectos de desarrollo, sino que debería servir para

prevenir los posibles efectos de las intervenciones en dinámicas sociales que pueden exacerbar esta forma de violencia. Se resalta, así, la necesidad de considerar la violencia contra las mujeres como una cuestión transversal en cualquier intervención en desarrollo⁸⁰. Aunque cuando la violencia contra las mujeres no se trate de manera directa, esta problemática se presenta en cualquier intervención de cooperación al desarrollo que afecte a las relaciones de poder entre mujeres y hombres:

Todos los organismos de desarrollo deben ser conscientes de los riesgos del aumento de la violencia contra las mujeres y tenerlos en cuenta en el conjunto de su planificación e intervenciones (...). Los proyectos de desarrollo necesitan tener ese aspecto en consideración cuando proporcionan a las mujeres recursos económicos, acceso a la planificación familiar, nuevas redes de apoyo y un estatus diferente fuera de casa. Todas esas intervenciones pueden aumentar el estatus de las mujeres, lo cual puede resultar en reacciones violentas por parte de los varones. (Pickup, Williamns y Sweetman 2001, 302)

Finalmente, hay un enfoque que se centra en las personas como beneficiarias del desarrollo y en el que se identifican tres variantes, según la perspectiva sobre el desarrollo en la que se ponga el énfasis. Una de ellas prioriza la universalidad de los derechos humanos, entendiendo la violencia contra las mujeres como un problema de alcance mundial⁸¹. La segunda variante incide sobre la violencia contra las mujeres como una violación de la integridad de los cuerpos de las mujeres y de sus derechos reproductivos. Ésta se puede ver, por ejemplo, en el Programa de Acción de la ya mencionada Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, que considera por primera vez la eliminación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres una de las piedras angulares de los programas de población y desarrollo (López Méndez 2006, 106-7). La tercera variante de este enfoque, al considerar que la violencia contra las mujeres impide el control del propio cuerpo y la toma de decisiones vitales, estaría vinculada a teorías sobre desarrollo humano. Se entiende este desarrollo humano en términos de ampliación de oportunidades y decisiones de los individuos sobre sus propias vidas, lo que se vería claramente afectado por la expresión violenta del poder masculino sobre las mujeres.

⁸⁰ Relacionado con esto, la violencia basada en el género se muestra como una cuestión a tener en cuenta de forma sistemática en la protección de activistas que trabajan en la promoción de los derechos de las mujeres alrededor del mundo, como señalan informes de la relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos y de una coalición internacional de defensores de los derechos de las mujeres (United Nations 2010; Asoka 2012).

⁸¹ Un repaso de las políticas y mecanismos de inversión de instituciones financieras internacionales tales como el Banco Mundial y otros bancos de desarrollo, indica que esas organizaciones raramente abordan la violencia basada en el género como un tema de derechos humanos, además de actuar con negligencia respecto al impacto de sus acciones en la aparición de este problema (Arend 2011).

Las perspectivas anteriormente mencionadas, así como sus variantes (seguramente más interrelacionadas de lo que una simple, aunque útil, esquematización pueda dar a entender), evidencian una multiplicidad de puntos de vista en cuanto a los vínculos existentes entre la violencia contra las mujeres y los debates sobre el desarrollo. La violencia contra las mujeres en el contexto de la intervención de la cooperación internacional al desarrollo puede parecer, con frecuencia, algo inabarcable debido a la infinidad de formas y contextos en los que se presenta y los ámbitos de actuación en los que se requiere trabajar. No obstante, se debe evitar en estas situaciones las simplificaciones y reducir a eslóganes los complejos problemas a los que se enfrenta el campo del desarrollo, especialmente en asuntos relacionados con la desigualdad (Rodríguez Manzano 2006, 44).

Asimismo, es necesario reconocer que los sesgos y obstáculos en la recogida de datos fiables sobre la violencia contra las mujeres (aspecto que se discutió en el capítulo anterior), favorecen que se las margine en el ámbito de cualquier política pública, incluyendo la cooperación internacional al desarrollo. Como muestra, a continuación se van a examinar dos propuestas que han destacado en las últimas décadas en este campo: el Índice de Desarrollo Humano (IDH), considerado una forma de medición alternativa del desarrollo, y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), una propuesta de metas para promover el desarrollo que se ha descrito como innovadora en lo que respecta a sus planteamientos, pero reduccionista en cuanto a su alcance.

5.1.2. Mediciones del desarrollo

En 1990, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó el primer informe sobre desarrollo humano (PNUD 1990). Este documento, además de proponer una conceptualización del desarrollo considerada innovadora, como se ha mencionado en el capítulo 3, incluía una propuesta de medición alternativa al Producto Interior Bruto (PIB) *per capita* para comparar la situación de los distintos países: el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Se trata de un índice sintético que logró atraer la atención pública hacia el tema, además de ser una herramienta para ejercer presión política y permitir realizar comparaciones internacionales sobre aspectos hasta entonces poco visibles en el debate sobre el desarrollo⁸².

⁸² Este índice combina indicadores, relativos a i) longevidad (esperanza de vida al nacer, para medir los elementos de salud y nutrición); ii) logros educacionales (medidos actualmente por años de escolarización en el caso de personas adultas mayores de 25 años y años de escolarización previstos en

A partir de 1995, año de la Cuarta Conferencia sobre la Mujer de Beijing, los informes anuales sobre desarrollo humano contaron con índices relacionados con la desigualdad de género: el Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) y el Índice de Potenciación de Género (IPG) (Jain 2005). El primero fue formulado para ser una versión del IDH sensible a las desigualdades de género: esto es, la posición de cada país en el IDH se veía penalizada de manera proporcional a la desigualdad de género medida por la combinación de los tres componentes del IDG (esperanza de vida, acceso a la educación e ingresos de mujeres y hombres). En ese sentido, la interpretación de los resultados del IDG dependía de su comparación con los resultados del IDH: a mayor desigualdad de género, mayor diferencia entre ambos índices. El segundo de los índices de género mencionados, el IPG, medía la desigualdad de género a partir de dimensiones e indicadores relacionados con el control de las mujeres sobre los recursos económicos y la participación en la vida política y económica.

Estos dos índices se tomaban frecuentemente (y erróneamente) como medida directa de la desigualdad. Al igual que ocurrió con la medición del desarrollo humano por medio del IDH, la propuesta de los índices sobre ‘desarrollo de género’ provocó un amplio debate académico sobre su adecuación y validez metodológica, así como sobre sus resultados e interpretaciones, incluyendo varias propuestas para su revisión y para elaborar índices alternativos (Bardhan y Klasen 1999; Cueva Beteta 2006; Klasen y Schüller 2011). En 2010, el PNUD reformuló la medición del impacto de la desigualdad de género en el desarrollo humano y lanzó un nuevo índice sintético, el Índice de Desigualdad de Género (IDG), con el objetivo de captar las desventajas de género en la mayor cantidad de países posible utilizando el mayor número de datos disponibles y fiables (Gaye *et al.* 2010). Así, en la actualidad, el desarrollo de género se mide por medio del IDG, compuesto por tres dimensiones (empoderamiento, actividad económica y salud reproductiva) y cinco indicadores (tasa de mortalidad materna, tasa de fecundidad entre adolescentes entre 15 y 19 años, logro educativo en educación secundaria y superior, representación femenina en el parlamento y participación relativa en el mercado laboral).

Pese a representar un avance respecto a propuestas anteriores, el PNUD reconoce que el IDG sigue teniendo limitaciones, debido, entre otros aspectos, a que no tiene en consideración elementos centrales para la igualdad de género como el uso del

el de niños y niñas en edad escolar); iii) ingresos (Ingreso Nacional Bruto *per capita* ajustado según el poder adquisitivo).

tiempo, la participación en decisiones comunitarias y la violencia de género, para los cuales aducen que la disponibilidad de datos es limitada, lo que hace inviable la realización de series comparativas internacionales periódicas⁸³.

Con respecto a la propuesta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que también omite la cuestión de la violencia contra las mujeres, hay que señalar que éstos retomaban, en parte, la idea de desarrollo como satisfacción de las necesidades básicas señalada anteriormente. Considerados innovadores por ser resultado de un inédito consenso mundial sobre reducción de la pobreza, los ODM fueron muy criticados por las organizaciones de la sociedad civil y especialistas, que vieron en ellos, sobre todo, un recorte de los compromisos internacionales anteriormente asumidos. Adoptados en 2001, los ODM tradujeron en ocho objetivos (cuantificados por medio de 21 metas y 60 indicadores) el compromiso asumido el año anterior por 189 países en la Declaración del Milenio de Naciones Unidas de erradicar la pobreza extrema en un plazo que concluyó en 2015. Entre las acusaciones lanzadas contra el tratado, está la de entender la pobreza de manera utilitaria y material, ignorar aspectos de redistribución de ingresos, recursos, y acceso a servicios (Fukuda-Parr 2012), y suprimir completamente el tema de las desigualdades estructurales (Saith 2006), limitaciones que ya se habían señalado respecto al enfoque de las necesidades básicas.

Algunas críticas a los ODM enfocadas en temas de género no cuestionaron el concepto de desarrollo que tenían implícito y optaron por señalar ausencias más específicas (WHO 2005; OECD Development Centre 2010), así como insuficiencias e inadecuaciones metodológicas en el diseño de las metas e indicadores de los ODM (Antrobus 2005; R. Johnson 2005; Kabeer 2005). Se llegó, incluso, a proponer su utilización estratégica, en alianza con otros instrumentos internacionales, para reivindicar recursos y atención a la desigualdad de género (Hayes 2005) y para elaborar recomendaciones sobre cómo implementar programas de desarrollo centrados en el cumplimiento de los ODM teniendo en cuenta su confluencia con el problema de la violencia contra las mujeres (WHO 2005). También se ha señalado, aunque con menos frecuencia, su falta de adecuación para dirigir los avances en igualdad de género, al derivar de un paradigma de desarrollo neoliberal que deja bastante que desear en cuando a reconocimiento de determinados derechos de las mujeres, como los derechos sexuales y reproductivos (Antrobus 2005, 95-6).

⁸³ Véase la página web del PNUD: <http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idg/> (consulta realizada el 14 de septiembre de 2012).

Con todo esto, lo que se quiere destacar es que aunque la prevención y la lucha contra la violencia contra las mujeres sean consideradas relevantes en la promoción del desarrollo, incluso desde las perspectivas dominantes –“la violencia contra la mujer sigue socavando los esfuerzos de alcanzar todos los Objetivos [de Desarrollo del Milenio]” (ONU 2012, 5)–, son elementos que cuesta introducir en las mediciones, metas y objetivos. Esta exclusión suele atribuirse a la escasez de datos o a la poca adecuación, fiabilidad y comparabilidad de los mismos (Beetham y Demetriades 2007) a nivel internacional.

Esta dificultad quedó reflejada nuevamente en el proceso de discusión de la nueva agenda ‘post-2015’, aprobada por la 70ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 2015. A lo largo de los dos años en los que se discutió la elaboración de los nuevos compromisos internacionales para la promoción del desarrollo, se hizo un llamamiento para articular el problema de la violencia contra las mujeres y niñas mediante metas, indicadores y resultados concretos que se debían alcanzar, no limitándose a expresar compromisos políticos generales (Kabeer 2014). Finalmente, entre los 17 nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se incluyó uno (el ODS 5) dedicado exclusivamente a la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas. Dentro de él, hay seis metas entre las cuales dos mencionan de manera explícita el problema de la violencia. Una meta propone “eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y privados, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación” y otra, “eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina (MGF)” (Naciones Unidas 2015, 20-1).

Aunque se puede considerar un avance que la violencia contra las mujeres y niñas (incluyendo la mención a formas y prácticas específicas de este fenómeno) se haya incorporado a los compromisos que orientarán la actuación internacional en el campo del desarrollo hasta el año de 2030, existen compromisos internacionales anteriores sobre este problema más ambiciosos. Además, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, que propone lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, y sus seis metas constituyen la única parte de esta nueva agenda que carece de un marco temporal explícito para alcanzar su cumplimiento. Para todas las demás metas que integran los recientemente aprobados ODS, se estipula que deben alcanzarse dentro de los quince años de vigencia de esta nueva agenda internacional. Sanahuja (2014, 79) opina que en esta nueva agenda “si bien hay metas más claras y específicas –parte de ellas las que dan continuidad a la agenda más limitada de los

ODM—, otras son muy genéricas y declarativas, (...) lo que puede anunciar compromisos poco eficaces”. En lo que se refiere a los compromisos de la Agenda 2030 relacionados con la igualdad de género, empoderamiento de la mujer y la lucha contra la violencia contra las mujeres, estas consideraciones son especialmente preocupantes.

5.2. Otros debates abiertos de los enfoques GED

En el marco teórico-conceptual de este trabajo se ha intentado recoger aspectos que pudiesen aportar nuevas maneras (o menos estudiadas) de aproximarse a la cuestión de la violencia contra las mujeres dentro de la cooperación internacional al desarrollo. Esto nos hizo considerar conveniente ampliar las fronteras de la discusión hacia otros importantes temas de la agenda del desarrollo, como la lucha contra la pobreza, las masculinidades y la sexualidad.

Hemos considerado conveniente revisar las dificultades de abordar la violencia contra las mujeres en el marco de una agenda de desarrollo enfocada a la reducción de la pobreza. En la elección de los dos últimos puntos mencionados se ha tenido en cuenta, además, que se tratara de elementos todavía poco planteados en las acciones financiadas por la cooperación española al desarrollo analizadas en esta investigación. Como se verá a continuación, comúnmente escasea la problematización de los roles y mandatos sociales a los que se ven sujetos los varones. Esto puede ser resultado de que cuando las instituciones y organismos de cooperación internacional al desarrollo adoptan los enfoques Género en Desarrollo (GED), no siempre incorporan los aspectos más innovadores o críticos en temas de género. Por otro lado, el predominio de una visión limitada de la sexualidad humana y los derechos sexuales y reproductivos, ha contribuido a una actuación también restrictiva respecto a la violencia contra las mujeres en la cooperación internacional al desarrollo.

5.2.1. Los vínculos con la lucha contra la pobreza

Recientemente, el papel central que tiene la reducción de la pobreza en la acción de la cooperación internacional al desarrollo es indudable, apareciendo como uno de los principales objetivos, sino el principal, en cualquiera de los compromisos internacionales o documentos de sus principales actores. Asimismo, hay que recordar que el debate sobre lo que se considera pobreza o quiénes son las personas pobres se ha vuelto mucho más complejo en las últimas décadas: hay propuestas de mediciones e

intervenciones que tienen en cuenta múltiples factores –las privaciones nutricionales, el acceso al agua, al saneamiento básico o la educación (PNUD 2010)–, más allá de los ingresos monetarios en el hogar o la renta *per capita* del país.

Pese a ello, sigue habiendo muchos obstáculos para la inclusión del tema de la violencia contra las mujeres (en todas sus dimensiones y formas) en una agenda de desarrollo enfocada prioritariamente a la reducción de la pobreza, en un marco en el que todavía se privilegian los aspectos económicos, como también se ha tratado de demostrar anteriormente. Por otro lado, si bien es importante reconocer que “la pobreza y la falta de empoderamiento de la mujer, así como su marginación (...), pueden colocarla en situación de mayor riesgo de violencia, y que la violencia contra la mujer obstaculiza el desarrollo social y económico” (Naciones Unidas 2008, 2), debe evitarse la vinculación acrítica de la pobreza con la violencia contra las mujeres. Sen (1998), al igual que otras autoras identificadas con el enfoque Género en Desarrollo, recuerda el riesgo que conlleva para el trabajo en cooperación al desarrollo la consideración de la violencia contra las mujeres como un correlato de la pobreza o del subdesarrollo. Una visión simplista de estos problemas (reduciendo la violencia contra las mujeres a la violencia doméstica en los hogares empobrecidos, por ejemplo) contribuiría a estigmatizar a las mujeres pobres como víctimas y a los hombres pobres como maltratadores.

Asimismo, al examinar las causas de la exclusión de la violencia contra las mujeres de los programas de reducción de la pobreza, se observa que esto se debe especialmente a la incapacidad que muestra este tipo de intervenciones para reconocer los complejos esquemas causales y multidireccionales que vinculan los dos problemas (Terry 2004). Los cambios sociales, económicos y políticos que podrían contribuir a erradicar las causas estructurales de las desigualdades (que dan lugar a la pobreza y la violencia contra las mujeres), difícilmente pueden alcanzarse en el tiempo que duran las intervenciones promovidas por las políticas e instituciones de la cooperación al desarrollo.

5.2.2. Masculinidades y la ‘domesticación’ de la violencia

Durante al menos las tres últimas décadas, el constructo teórico del género viene siendo aplicado al estudio de los mandatos sociales a los que los varones están sujetos. La investigación sobre actitudes e ideales de los varones (O'Barr 2003; Wedgwood 2009) suele resaltar las falacias de los argumentos androcéntricos basados en ‘el

hombre' genérico que luego son aplicados a la mayoría de los hombres. Frecuentemente se hace uso del concepto de 'masculinidad(es)' para referirse a este conjunto de prácticas o atributos de los sujetos del género masculino (McMahon 1993), lo que permite poner de relieve la diversidad de los varones, así como sus prácticas y comportamientos (Brod 1987; Guash Andreu 2008). Sin embargo, Connell (1995) recuerda que aunque los varones no siempre logran alcanzar el ideal de la masculinidad hegemónica que impera en cada momento y contexto, siguen disfrutando de las ventajas que respecto a las mujeres les otorga el sistema patriarcal.

El estudio de las masculinidades y de su proceso de construcción puede resultar muy interesante a la hora de analizar otros aspectos de las violencias que sufren las mujeres en diferentes contextos. En ese sentido, hay que evitar supuestos que lleven a considerar a todos los hombres agresores (y, consecuentemente, a todas las mujeres, víctimas) porque el simple hecho de que la concepción de masculinidad hegemónica muestre conductas violentas u opresivas hacia las mujeres. Reconocer la dominación masculina en todos sus aspectos, incluyendo en el ejercicio de la violencia basada en el género, no debe significar condenar a todos los varones.

Este es un campo de estudio que ha surgido y ha prosperado especialmente en países occidentales considerados desarrollados, sobre todo anglosajones, y todavía es necesaria precaución cuando se extrapola el concepto de masculinidad a otras partes del mundo (Guash Andreu 2008). Aunque los estudios académicos que tratan de las confluencias entre masculinidades y desarrollo están aumentando, en los discursos y prácticas del campo de la cooperación internacional aún son poco frecuentes las consideraciones sobre los hombres como personas afectadas por las normas sociales de género (Chant y Gutmann 2002). Además, se critica el énfasis que se hace en apreciaciones predominantemente negativas: son violentos, individualistas e irresponsables (frente a las mujeres cuidadoras y dedicadas), y ponen obstáculos al desarrollo de las mujeres (White 1997; Cleaver 2002; Jacobsen 2006). Además, en estas consideraciones sobre los hombres en el ámbito del desarrollo, se ha podido constatar la presencia de estereotipos asociados a las identidades de clase, edad, etnia/raza (Barker y Ricardo 2006), que aportarían una imagen casi exclusivamente negativa de los jóvenes y adultos negros y pobres.

De todos modos, hay que señalar que si bien algunos autores reclaman una mayor atención a los problemas específicos de los varones en las acciones de desarrollo, la mayoría ofrece otro tipo de justificación para la inclusión de las masculinidades en este debate. Se reclama que los varones se impliquen para lograr cambios duraderos en

el comportamiento, especialmente cuando se trata de prevenir la violencia contra las mujeres y poner en marcha acciones de salud sexual y reproductiva, y de prevención a VIH/Sida (Cleaver 2002). Cuando se discuten las mejores estrategias para el empoderamiento de las mujeres en el campo del desarrollo, se insiste que “de poco sirve prestar atención y servicios a las mujeres víctimas de violencia si no pretendemos erradicarla, y la erradicación se fragua tanto en la mente femenina (...), como especialmente en la masculina (educada para someter)” (López Méndez 2006, 102). Esta necesidad de promover cambios en los comportamientos masculinos para alcanzar relaciones de género menos desiguales, está presente en los compromisos internacionales para alcanzar la igualdad de género, al menos desde la Conferencia sobre la Población de El Cairo en 1994. Su Plataforma de Acción menciona de manera pionera la necesidad de implicar más decididamente a los hombres para lograr el respeto de los derechos de las mujeres (WHO 2010, 12-3).

Cornwall, Edström y Greig (2011), sin embargo, consideran que en el debate sobre el desarrollo, el tema ‘hombres y masculinidades’ se ha despolitizado, en el sentido de que suelen prevalecer las intervenciones paliativas frente a acciones realmente transformadoras de las relaciones de poder en las sociedades. Esto se atribuye a una forma selectiva en que las cuestiones de género son abordadas por parte de las agencias de desarrollo, que evitan tratar en profundidad las desigualdades estructurales de género. Es significativo que las masculinidades hayan entrado en el debate y en la práctica de la cooperación internacional al desarrollo y de sus instituciones más importantes, pero limitarse a influir sobre los comportamientos y las normas sociales y culturales para transformar las masculinidades, habría impedido ahondar en la discusión sobre la naturaleza institucionalizada de la violencia contra las mujeres.

Este interés por fomentar un cambio de comportamiento entre los varones se puede observar en la publicación en los últimos de diferentes documentos de agencias internacionales e instituciones del campo de la cooperación al desarrollo. A continuación, se mencionan algunos ejemplos recientes, aunque como la política española de cooperación internacional al desarrollo hasta el momento no ha prestado atención a este tema de forma específica, los ejemplos mencionados corresponden a organismos internacionales y otros países donantes.

Schäfer (2013) propone unas recomendaciones a la política austríaca de cooperación al desarrollo a partir de un conjunto de buenas prácticas identificadas en el trabajo llevado a cabo con hombres y niños, tanto víctimas como agresores en contextos de conflictos armados y posconflictos. En otro informe Ricardo, Eads y Barker (2011)

analizan los resultados de intervenciones orientadas a involucrar a niños y hombres en la prevención de la violencia sexual, tanto en países desarrollados como en desarrollo. Asimismo, un manual de Oxfam (Ataya y Usta 2010), financiado por UNIFEM y diseñado para apoyar acciones de tipo preventivo, constituye una herramienta de capacitación para trabajar con varones en los países árabes. Por último, hay que mencionar un informe de la Organización Mundial de la Salud (WHO 2010) que incluye propuestas y buenas prácticas para involucrar a niños y hombres jóvenes y adultos en las políticas de igualdad de género y salud en esos temas. Se mencionan intervenciones con agresores, entre otros grupos, también con el objetivo de propiciar un cambio de actitudes y roles de los varones y así contribuir a la reconstrucción de las relaciones de género de forma más igualitaria y menos violenta.

En este contexto, con una crítica a la ‘domesticación’ de la violencia masculina en los estudios sobre masculinidades, Greig (2011: 224-226) reivindica vincular esta forma de violencia a los mecanismos político-económicos de opresión, y no solamente a los procesos de socialización que refuerzan una visión de la desigualdad entre los géneros. Este enfoque nos recuerda que casi dos décadas antes, McMahon (1993) ya consideró que la literatura sobre masculinidades daba poca importancia a las teorías feministas que privilegian el análisis de cuestiones estructurales, inclinándose más bien hacia las de cuño psicoanalítico. Según esta perspectiva, los estudios sobre masculinidades en la agenda y la literatura sobre el desarrollo, y en concreto sobre la violencia contra las mujeres, han llegado tarde y sus contribuciones todavía siguen siendo escasas. Además, continúa predominando una visión restrictiva y que indaga poco sobre las causas de este problema.

Sin embargo, Peacock y Barker (2014) son más optimistas y celebran que en las últimas dos décadas se hayan multiplicado las experiencias de intervenciones con niños y varones para impulsar cambios positivos en los roles y normas sociales de género y para prevenir la violencia de género. Estos dos autores defienden que la puesta en marcha de programas bien diseñados puede ser efectiva y conducir a resultados importantes en la promoción de la igualdad de género, pero puntualizan que este tipo de acción aún necesitaría desarrollarse a mayor escala y a más largo plazo para lograr alcanzar un impacto más significativo y sostenible en el tiempo.

5.2.3. Cuando el desarrollo (no) descubre la sexualidad

En general, se considera que se ha evitado abordar los elementos relacionados con la sexualidad tanto en la práctica como en la agenda política del desarrollo. Sin embargo, esta cuestión siempre ha estado presente en los debates sobre el crecimiento y control de la población y, últimamente, sobre la prevención del VIH/Sida y otras enfermedades de transmisión sexual.

Mencione la palabra "sexualidad" a las personas que participan en la política y práctica del desarrollo y la reacción es a menudo de perplejidad (...) Hay quienes ven la sexualidad como un asunto privado, algo con lo que el desarrollo debe mantener una distancia apropiada –excepto para ayudar a reducir la incidencia de embarazos no deseados y de enfermedades de transmisión sexual. Están los que consideran el asunto en general bastante incómodo y están los que perciben la mención a la sexualidad y al placer sexual como una distracción de los ‘verdaderos problemas’ del desarrollo, una especie de complemento frívolo, en lugar de algo que está íntimamente entrelazado a preocupaciones centrales del desarrollo, como la pobreza y la marginación. (Cornwall, Corrêa y Jolly 2008, 5)

Hasta las conferencias internacionales de El Cairo y Beijing, a mediados de los años 90, no se empezó a adoptar a nivel global un discurso en el que se incluyera la sexualidad de manera incontestable y con una perspectiva menos negativa. Pese a que en aquel momento se trabajaba con una concepción “embrionaria” de los derechos sexuales (Petchesky 2002) y su promoción de la agenda de la igualdad de género debía hacer frente a resistencias procedentes de las fuerzas conservadoras y religiosas, que pronto cobrarían aún más relevancia (Sen 2006), se logró incluir en ambas Conferencias compromisos inéditos sobre el tema.

Este contexto fue el punto de arranque de cambios importantes en los programas de desarrollo y cooperación internacional. El documento final de El Cairo incluyó la expresión ‘salud sexual’ en el listado de derechos que los programas de desarrollo deberían promover en sus acciones relacionadas con los temas de la población. En Beijing, las mujeres fueron finalmente reconocidas como seres sexuales y reproductivos⁸⁴, lo que permitió marcar una distancia importante con respecto, por ejemplo, a anteriores iniciativas de planificación familiar, muy preocupadas por controlar el crecimiento de la población y centradas casi exclusivamente en limitar el tamaño de las familias, haciendo a las mujeres pobres de países en desarrollo las responsables del crecimiento poblacional.

⁸⁴ Para una discusión más detallada de las interrelaciones entre los derechos sexuales y los derechos reproductivos en el marco de los derechos humanos y acuerdos internacionales de las últimas décadas, así como del debate en relación a la promoción de esos derechos en el campo de la salud, véase Miller (2000).

Aun así, y pese a algunos avances discursivos en la agenda internacional, sigue siendo difícil abogar por los derechos sexuales con una mirada amplia, emancipadora y de disfrute del propio cuerpo. No obstante, si bien se observa una resistencia a adoptar una perspectiva positiva de los derechos sexuales, la oposición a introducir iniciativas que den prioridad a la prevención y la protección frente a los abusos, violencia, explotación o mutilación suele ser menor (Miller 2000, 82; Petchesky 2002, 414). Esto es especialmente evidente en cuestiones que ya habían alcanzado cierta visibilidad social y política, como ocurre con algunas de las formas de violencia contra las mujeres. En lo que respecta a la violencia sexual, por ejemplo, se puede observar una mayor atención en la agenda internacional. No obstante, cuando las causas o condiciones que favorecen esta forma de violencia no se tratan de manera satisfactoria, esto podría fomentar y reforzar ideas estereotipadas con respecto a la sexualidad y a las mujeres, además de restringir la protección de sus derechos (Miller 2004).

En este sentido, no es de extrañar la ausencia de referencias a temas más controvertidos. Este es el caso de la práctica del aborto en condiciones de inseguridad y riesgo para la vida de las mujeres, cuya omisión es patente en gran parte de los documentos sobre salud sexual y reproductiva de organismos e instituciones de la cooperación internacional al desarrollo (Cornwall, Standing y Lynch 2008). A pesar de constituir una de las causas más importantes de mortalidad materna en distintas partes del mundo, la relación entre aborto y promoción del desarrollo es escasa. El acceso a servicios de aborto seguro raramente se aborda en la práctica o en los mensajes “de las organizaciones que se centran en los derechos de las mujeres, la pobreza, la democracia, los derechos humanos, la salud, la educación de las mujeres y el buen gobierno en muchos países en desarrollo” (Adewole, Orji y Oye-Adeniran 2008, 47).

En general, el campo del desarrollo está todavía lejos de reconocer la existencia de la diversidad en la expresión de la sexualidad humana (Corrêa y Jolly 2008), por no mencionar que en muchos casos y contextos la sexualidad sigue siendo un elemento completamente ausente⁸⁵. De todos modos, implícita o explícitamente, los debates en ese ámbito muestran una visión esencialista de la sexualidad, entendiéndola como parte

⁸⁵ Para un ejemplo de la dificultad para aceptar una concepción positiva de la sexualidad y los derechos sexuales en la agenda del desarrollo, véase de Camargo y Mattos (2008). Los autores, en el marco de una investigación comparativa, examinan el discurso público del Banco Mundial y constatan un silencio en torno a la cuestión de la sexualidad. Pese a los documentos específicos que se ocupan a fondo de temas sobre la sexualidad, esta perspectiva no se refleja en aquellos de mayor relevancia institucional, en los cuales la sexualidad queda reducida a un conjunto de prescripciones médicas, acorde con la visión tecnocrática predominante en el Banco.

de la experiencia humana guiada primordialmente (si no completamente) por imperativos naturales y biológicos y poco merecedora de mayor consideración –salvo para destacar sus peligros, riesgos y desviaciones (Jolly 2007), especialmente en lo que se refiere a la salud y a la prevención de enfermedades de transmisión sexual–. Incluso, algunas aportaciones realizadas en el marco del enfoque Género en Desarrollo estarían fuertemente basadas en dicotomías relacionadas con el sexo y/o con el género, como ocurrió con ciertos enunciados con sesgos heterosexistas en las Conferencias de Beijing y El Cairo con respecto a los temas de salud de las mujeres y población (Corrêa y Jolly 2008, 39).

Así, para alcanzar una perspectiva más amplia que la simple distinción entre mujeres y hombres (predominante todavía en el discurso y en la práctica del desarrollo), se podría utilizar los análisis de las estructuras de desigualdad propios del enfoque Género en Desarrollo para abordar la opresión y marginación que sufren las personas que no cumplen los roles de género socialmente establecidos. La situación de vulnerabilidad extrema y violencia a las que frecuentemente se ven sujetas las personas que no se auto-identifican con las categorías hombre/mujer, podría constituir un argumento lógico para reivindicar una mayor visibilidad de estos sujetos en las intervenciones de la cooperación internacional al desarrollo (Puri 2010).

Sin embargo, la cuestión no se reduce a dar visibilidad a estas personas o a incluirlas de manera prioritaria de las intervenciones, sino que es importante saber hasta qué punto el debate y la práctica sobre el desarrollo y los temas de género logran incorporar visiones que no sean heteronormativas y esencialistas. En este sentido, Jolly (2000), por ejemplo, sugiere algunas formas específicas para introducir en el desarrollo la visión *queer* –entendida como una perspectiva que reconoce la diversidad sexual más allá de distinciones biológicas binarias y los roles de género que suelen acompañarlas– en el desarrollo. Jolly realiza una serie de recomendaciones: dar cabida a las minorías sexuales como beneficiarias de los programas de desarrollo mediante la financiación a organizaciones y grupos locales ya existentes y el fomento de un enfoque inclusivo de conceptos como familia, comunidad u hogar en los contextos en que estén especialmente marginados; la integración de preocupaciones específicas de estas poblaciones en sectores como la salud y en programas de prevención de la violencia física y sexual; y la institucionalización de este enfoque en las agencias internacionales de desarrollo, incluyendo la relación con sus propios trabajadores.

La entrada de la cuestión de la violencia contra las mujeres en la agenda internacional del desarrollo genera tantas expectativas como dudas. Aunque varias

perspectivas la contemplan como un tema de importancia para el desarrollo, son muchas las dificultades y las barreras que todavía existen para afrontar el tema en toda su complejidad y multiplicidad de aspectos. El predominio de una concepción negativa del sexo y de la sexualidad, el silenciamiento de la diversidad sexual y la persistencia de estereotipos de género (incluyendo los referentes a los varones en el debate sobre el desarrollo, presentados en el apartado sobre las masculinidades), resultan problemáticos a la hora de tratar la cuestión de la violencia contra las mujeres en la cooperación internacional al desarrollo. En este sentido, la superación de los desencuentros entre los ‘mundos’ de la sexualidad y del desarrollo (Correa 2008), puede contribuir a la adopción de una perspectiva amplia sobre esta problemática en la cooperación internacional.

5.3. La ‘culturalización’ de la violencia como límite para una acción global

Los puntos discutidos anteriormente, además de hacer evidente que muchas cuestiones de género se abordan de forma selectiva y restringida en el campo del desarrollo, también se muestran relacionados con debates más amplios y muy presentes en la literatura sobre el género en el desarrollo: la cuestión de la diversidad y la controversia respecto al multiculturalismo y los relativismos culturales en la defensa de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres de manera específica. Este debate ha tenido amplia resonancia en la teoría feminista contemporánea (Guerra Palmero 2001), especialmente en las posiciones opuestas existentes en relación al respeto de los derechos de las mujeres en un marco de reconocimiento a las diferencias culturales que propugna el multiculturalismo⁸⁶.

No cabe duda de que el debate sobre los esencialismos culturales en el desarrollo y en la discusión de cuestiones de género se refleja en las posibles acciones de la cooperación internacional al desarrollo para luchar contra la pobreza, abordar las masculinidades y cuestiones relacionadas con la sexualidad, y hacer frente a la violencia contra las mujeres. En este sentido, es razonable preguntarse por las maneras en las que la cooperación internacional al desarrollo podría incluir las diversas prioridades y las

⁸⁶ En este sentido, véanse los trabajos de Will Kymlicka y Susan Moller Okin, entre otros, autores a los que, sin embargo, critica Tripp (2008) por no tener en cuenta las dimensiones políticas y económicas que tiene el conflicto entre los derechos de las mujeres y los de los grupos religiosos, étnicos y culturales.

distintas formas de combatir la violencia contra las mujeres en los contextos en los que actúa, sin caer en los esencialismos culturales que muchas veces rodean esta cuestión y sus víctimas.

5.3.1. Adjetivos y esencialismos

La identificación de las formas y contextos en los que ocurre la violencia contra las mujeres y el hecho de considerar estas violencias un problema universal y una violación de los derechos humanos, han proporcionado mayor visibilidad a este fenómeno. Esta visibilidad puede ir en muchos casos acompañada de una serie de adjetivos y valoraciones que merecen nuestra atención. Así, a menudo se habla de formas de violencia contra la mujer que son ‘tradicionales’, ‘culturales’, ‘nocivas’, ‘extremas’, ‘brutales’, ‘bárbaras’, ‘cruelles’, ‘invisibles’, o ‘sutiles’. En la actualidad, como se vio en el capítulo 4, apenas se discute el carácter ‘cultural’ de cualquier forma de violencia (incluida la dirigida contra las mujeres, dado que ya no es aceptable pensar que las personas del sexo femenino son naturalmente más propensas a sufrirla). Sin embargo, el adjetivo ‘cultural’ (muchas veces intercambiable por ‘tradicional’) suele hacer referencia a las violencias que sufren las mujeres en países en vías de desarrollo, no occidentales o en comunidades pobres, rurales, no blancas. Lo mismo podría decirse de los adjetivos utilizados para las violencias de extrema crueldad y gravedad, que resaltan la intensidad del daño sufrido y la asociación con la muerte o a la desfiguración del rostro y cuerpo de las víctimas.

De todos modos, es importante hacer hincapié en el hecho de que el debate de los esencialismos en el discurso sobre el desarrollo no es reciente y tampoco afecta únicamente a las cuestiones de género o a la violencia contra las mujeres (Escobar 1988, 1995). Ya se han apuntado anteriormente las críticas de diferentes corrientes feministas a los contenidos homogeneizadores sobre las mujeres en el campo del desarrollo y en los estudios feministas occidentales (Parpart 1994; Mohanty 2008a, b). Sin embargo, las representaciones esencialistas de las mujeres y de las relaciones de género en la práctica y en el discurso del desarrollo sigue siendo una constante, hallándose frecuentemente en narrativas que las identifican como “heroínas y víctimas a la vez”: heroínas por su capacidad de lucha y firmeza, y víctimas por las limitaciones de sus opciones vitales, por la triple carga de trabajo y por la opresión masculina que sufren (Cornwall, Harrison y Whitehead 2007, 3).

No es exagerado decir que la violencia es uno de los temas favoritos para la construcción de estas imágenes. En este sentido, lo que se trata de discutir aquí no es si las prácticas mencionadas merecen o no esos calificativos, sino el hecho de que se utilicen para referirse a las mujeres de los países ‘en desarrollo’ y no a las mujeres de los países ‘desarrollados’. Así, si las ‘peores’ prácticas de violencia contra las mujeres se vinculan mayormente a países en desarrollo, a la pobreza o a determinadas culturas y grupos sociales, es posible que se esté atribuyendo muchas de esas situaciones de violencia más a la condición social de las mujeres o a su identidad religiosa y cultural, que a su propia condición de mujeres.

En el contexto de la controversia respecto al multiculturalismo y los relativismos culturales, Benhabib (2006) alerta de que entender la cultura como algo monolítico, homogéneo y poco permeable al cambio sirve para marginar al otro y al diferente, y representa un riesgo para la igualdad, la diversidad y los derechos de las mujeres. La autora responde al provocador interrogante de Okin (1999) *¿Es el multiculturalismo malo para las mujeres?* evitando las posturas frecuentemente identificadas como antagónicas: por un lado, la defensa de la autonomía y la libertad individual, y, por otro, el pluralismo cultural. Benhabib prefiere mostrar la existencia de tensiones en el interior de las culturas y de fuerzas opresoras contrapuestas que actúan para someter a las mujeres en diferentes ámbitos, para, así, proponer la necesidad de alianzas y diálogos que superen esas polarizaciones.

De manera concreta, la ‘culturalización’ de la percepción sobre la violencia contra las mujeres es una tendencia observada y estudiada en diferentes ámbitos. La acción político-normativa de algunos organismos de la Unión Europea ofrece, en muchos casos, una conceptualización de la violencia como un problema extraño a Europa y perteneciente a culturas extranjeras (Montoya y Rolandsen Agustín 2013). Argumentos basados en cuestiones culturales también aparecen en los informes que los países están obligados a enviar al Comité de la CEDAW, encargado de evaluar sus compromisos en relación a la violencia de género, entre otros temas (Engle Merry 2003). Una representación estática y homogeneizadora de la ‘cultura’ se manifiesta especialmente en la discusión de los estereotipos de género y cuando se habla de la erradicación de prácticas y costumbres culturales dañinas, como forma de justificar los pocos avances alcanzados (*ibíd.*, 959). Como señala Maquieira (2010, 76), la defensa de la particularidad cultural se hace presente en los foros y conferencias internacionales de Naciones Unidas desde al menos la aprobación de la CEDAW, en 1979, cuando

muchos países plantearon importantes reservas a este texto con base en cuestiones culturales y religiosas.

Al mismo tiempo, sin embargo, se puede observar un intento de abandonar los enfoques en los que los aspectos culturales determinaban las formas de violencia contra las mujeres. En un informe de sus primeros quince años de actividad, la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres explicaba que, dado que esta vinculación es reconocidamente problemática, a partir de su segundo informe se abandonaba el uso del término ‘tradicional’ (United Nations 2009).

Asimismo, las prácticas definidas como ‘invisibles’, ‘poco conocidas’ o ‘nuevas’, a las cuales se resta importancia socialmente por lo que se les busca dar visibilidad, contemplan un gran número de experiencias. En la literatura del campo del desarrollo dedicada a las cuestiones de género se encuentran algunos ejemplos, como la apropiación de las tierras de las mujeres que se quedan viudas en algunos países africanos (Venekai-Rudo White *et al.* 2002; Izumi 2007) o el boicot político a las representantes electas en comunidades rurales de la India (Mayaram 2002). En este sentido, conviene reflexionar sobre el carácter estratégico de usar un concepto ya ampliamente aceptado teórica y políticamente a nivel internacional, como es la violencia basada en el género o la violencia contra las mujeres, para referirse a esta variedad de situaciones. La elección de dicho término podría dar mayor legitimidad a las denuncias realizadas y fortalecer tanto a los actores involucrados como las acciones emprendidas para combatir el problema. Esto es especialmente relevante cuando se trata de defender la priorización de la lucha contra la violencia contra las mujeres en el campo de la cooperación internacional al desarrollo, un campo cuyas prácticas y discursos siguen marcados por prioridades económicas y políticas anti-pobreza y que, en general, tienden a la reducción interpretativa de las cuestiones complejas.

5.3.2. Reflexión final sobre una lucha global

La simplificación que se observa en las narrativas sobre las mujeres y en las relaciones de género, aunque puede contribuir a la movilización de esfuerzos y a la acción en el campo del desarrollo, no siempre logran una acción transformadora. Es de destacar que estos enfoques reduccionistas pueden ser impulsados por activistas y técnicas de género como medio para influir la pauta de prioridades de las instituciones internacionales más reacias a prestar atención a estas cuestiones, tal como discuten Cornwall, Harrison y Whitehead (2007) en la introducción a una colección de artículos

sobre contradicciones y desafíos para las prácticas feministas en el campo del género y desarrollo. La dificultad para alcanzar transformaciones más profundas se puede ver en el cuestionamiento de los resultados alcanzados al adoptar la transversalidad de género en el ámbito de las agencias e instituciones del desarrollo, al que se ha hecho referencia anteriormente.

En lo que se refiere concretamente a la violencia contra las mujeres, las organizaciones, movimientos y demandas feministas son consideradas grandes agentes del cambio e impulso para alcanzar la visibilidad de esta cuestión a nivel político y legal – nacional (Htun y Weldon 2012) e internacionalmente (Jain 2005). Sin embargo, pueden contribuir a la culturalización de la violencia contra las mujeres, al igual que otras instituciones y movimientos menos comprometidos con la erradicación de este problema, si adoptan actitudes y discursos de tipo ‘salvador’ respecto a mujeres no occidentales, enfatizando o reforzando así las diferencias y no las similitudes entre las causas de las violencias ejercidas contra las mujeres. En el mismo sentido, esta visión esencialista puede manifestarse en la imposición de un enfoque externo sobre la violencia sin escuchar las demandas y necesidades de las mujeres y de las organizaciones locales, lo cual termina a menudo siendo contraproducente y, posiblemente, obstaculizando los esfuerzos que se estén realizando para combatir el problema (Jaggar 2008).

Frente a visiones monolíticas y totalizadoras de la cultura, existe la posibilidad de apoyar e impulsar reelaboraciones culturales para la erradicación de prácticas discriminatorias y violentas con las mujeres y niñas, a partir de la inclusión de las voces disidentes de las mujeres y de la alianza con un feminismo global atento al etnocentrismo (Serrano Niza y Guerra Palmero 2005). Frente a un ‘feminismo colonial del pasado’ y una retórica de salvación de las mujeres no occidentales en peligro, se propone un lenguaje igualitario de alianzas, coaliciones y solidaridad para reconocer las diferencias y superar los relativismos culturales en el apoyo a quienes, dentro de las comunidades, luchan por mejorar la vida de las mujeres (y hombres) (Abu-Lughod 2012 [2002]).

En sentido parecido, aunque en referencia a la preocupación expresada por las activistas feministas occidentales respecto a la práctica de la mutilación genital femenina, Nnaemeka (2001) recomienda que se la vincule a una lucha igualmente energética contra cualquier tipo de violencia contra las mujeres que se produzca en su entorno más inmediato. Sus observaciones, sin embargo, se pueden aplicar a cualquier contexto de violencia sobre el que pueda actuar la cooperación internacional:

La cuestión relevante no debe ser la 'tradición' (...). La pregunta crucial debe ser: ¿por qué el cuerpo femenino es sometido a todo tipo de abuso y humillación en diferentes culturas y lugares (incluyendo el Occidente)? Es poco prudente por parte de las mujeres occidentales pensar que son plenamente capaces de resolver sus propios problemas, mientras que las mujeres del 'Tercer Mundo' necesitan su ayuda porque son totalmente incapaces. Tal pensamiento engendra resistencia. El problema de las mujeres que viven bajo el patriarcado es un problema mundial que requiere una acción global. (Nnaemeka 2001, 183)

Como bien señala Guerra Palmero (2014), evitar esta visión salvadora ya se ha convertido en un tópico para los debates feministas sobre la interculturalidad. De acuerdo con Sánchez Muñoz (2014, 282), son muchas las voces que reclaman un diálogo intercultural feminista plasmado “en un feminismo de corte transnacional en el que se intentaría superar las fragmentaciones locales, en aras de establecer una agenda global”. No obstante, aún falta por ver en qué medida la cooperación internacional al desarrollo, sus instituciones, su personal técnico y las organizaciones no gubernamentales que participan en sus intervenciones y están sensibilizadas con el problema de la violencia contra las mujeres, pueden contribuir a esta acción global de los feminismos transnacionales.

Como se ha tratado de argumentar, hay desafíos pendientes a la hora de abordar los vínculos de la violencia contra las mujeres con otras cuestiones igualmente complejas de la agenda del desarrollo (la pobreza, las masculinidades, la sexualidad y los esencialismos culturales). Posiblemente, estos desafíos no se podrán superar sin que estos actores se muestren dispuestos a escuchar y a apoyar las demandas e intereses de las personas que sufren discriminación o están afectadas por las distintas formas de violencia con las cuales trabajan.

**PARTE III – ANÁLISIS DE LA
POLÍTICA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL AL
DESARROLLO DE ESPAÑA**

CAPÍTULO 6 - EL LUGAR DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA AL DESARROLLO

Capítulo 6 – EL LUGAR DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA AL DESARROLLO

Este sexto capítulo contiene tres partes principales, además de las consideraciones finales. La primera de estas partes presenta y describe de manera sucinta el contexto de la progresiva institucionalización de la cooperación española al desarrollo, y ofrece una caracterización de esta política pública en el período 2000-2010. Se detallan los aspectos más relevantes de los instrumentos, las modalidades y los procedimientos administrativos utilizados para la ejecución de esta política pública, precisando, de esta manera, el contexto de las acciones sobre violencia contra las mujeres y las dificultades para el acceso a la información de estas acciones.

La segunda parte de este capítulo examina los antecedentes de la perspectiva de género en el ámbito de la cooperación española al desarrollo y destaca el lugar ocupado por el tema de la violencia contra las mujeres. La tercera parte se acerca a percepciones de los diferentes actores respecto a la atención de esta política a la problemática de la violencia contra la mujeres, así como a la evolución de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española, especialmente en los sectores vinculados a la igualdad de género. Se propone, además, una inédita cuantificación de los recursos dedicados a intervenir en el tema de la violencia contra las mujeres en el ámbito de esta política pública.

6.1. De país receptor de ayuda internacional a donante

En 1981, el Banco Mundial dejó de considerar a España país receptor de ayuda internacional –la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) lo hace en 1985– y, a partir de entonces, se inició la primera etapa de la política de cooperación al desarrollo, marcada por una progresiva institucionalización y un creciente aumento de su AOD (J.A. Alonso 1994)⁸⁷. Sin embargo, no se aprobó una ley

⁸⁷ El aumento continuo de recursos tuvo un período de excepción (1986-88) e incluso en períodos de expansión no se alcanzaron los niveles de otros países europeos y desarrollados en lo que se refiere a la AOD *per cápita* o a la proporción de la AOD en relación al PIB nacional. Rodríguez Gil (2001, 105) recuerda que la ampliación de recursos que se produjo de 1989 a 1992 no estaba relacionada con los objetivos de esa política, sino que fue el resultado del cumplimiento de las obligaciones impuestas para la entrada en la Unión Europea, de la internacionalización de empresas españolas y de los gastos de la conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América.

específica al respecto hasta diez años después de la creación de la agencia dedicada a implementar esta política. Sólo entonces se definieron de forma firme sus principios, objetivos y prioridades, además de las modalidades de actuación y sus instrumentos de planificación, gestión y evaluación. La Ley 23/1998, de 8 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España 1998), estableció que la cooperación al desarrollo es parte de la acción exterior del Estado, motivo por el cual también se la debe entender en relación a otros aspectos e intereses de España en el extranjero.

Los inicios de esta política pueden situarse en los primeros años de la transición política hacia la democracia, con la creación del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) en 1976 y del Centro Iberoamericano de Cooperación, en 1977. Sin pretender revisar cada paso dado en el camino hacia su formalización⁸⁸, es importante resaltar la creación de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECIPI) en 1985, adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, así como la constitución a finales de 1988 de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). “A mediados de la década de los ochenta, el Gobierno de Felipe González [1982-1996] asumió la tarea de dotar al Estado español de un aparato de cooperación que tenía que aspirar a ser, al menos, como el de los socios de la Comunidad Europea” (Marcuello Servós 2007, 140). La AECI (todavía sin la D de ‘Desarrollo’, añadida en el Real Decreto 1403/2007) surgió con el objetivo de concentrar competencias en la política de cooperación al desarrollo⁸⁹ y ejecutar programas de manera autónoma.

Asimismo, el ingreso del país en el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE en diciembre de 1991 impulsó un mayor desarrollo de esa política. Durante la primera década de pertinencia de España al CAD, las recomendaciones a la cooperación española señalaron reiteradamente la necesidad de precisar el marco institucional emergente (definir funciones de unidades administrativas involucradas, fortalecer el Ministerio y dar más autonomía a su Agencia), y de seguir otras orientaciones del Comité. Entre las últimas, se destacaban, muy especialmente, la reducción del peso de los créditos comerciales y de la llamada ayuda ligada, el aumento del volumen de la ayuda dirigida a los países más pobres y la desvinculación de la cooperación de intereses domésticos (DAC-OECD 1998, 2002).

⁸⁸ Para más información, véase el primer capítulo de Gómez Gil (1996).

⁸⁹ Una encuesta realizada en 1983 por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) ya había identificado en aquel momento 79 unidades u organismos de la Administración General del Estado (AGE) con competencias en materia de cooperación (Juárez 1994 apud. J.A. Alonso 1994, 279).

La influencia europea sobre esta política quizás sea más difícil de percibir. La adaptación de la cooperación española a la comunitaria ha sido paulatina y ha ganado impulso más recientemente, pues solamente en el II Plan Director 2005-2008 se empiezan a encontrar en esta política referencias a asuntos europeos (Sotillo 2007). A pesar de las orientaciones para la cooperación al desarrollo de los estados miembros de la Unión Europea y de existir desde el año 2000 dos organismos especializados en el ámbito de la Comisión Europea (EuropeAid, para ayuda al desarrollo, y ECHO, para ayuda humanitaria), aún predominarían la incoherencia, la descoordinación y la falta de complementariedad en las acciones desarrolladas. Estas características pueden atribuirse, en gran parte, a la resistencia de los países a ceder competencias en esta materia (y en los asuntos de política externa como un todo) a nivel supranacional (Echart Muñoz y Sotillo Lorenzo 2005; Smith 2006; Smith, Crowe y Peterson 2006). La influencia española sobre la política europea se puede observar sobre todo en que la entrada de España (junto con Portugal) en el bloque europeo en 1986 ayudó a incluir los países latinoamericanos en la agenda exterior europea y, consecuentemente, en la lista de receptores de ayuda al desarrollo, en la que hasta entonces prevalecían los del entorno mediterráneo y las antiguas colonias de Francia, Bélgica y Reino Unido (Sotillo Lorenzo 2006; Cameron 2007).

De manera general, durante las primeras décadas de la cooperación española al desarrollo internacional, las legislaturas de los dos partidos políticos que gobernaron en el período –Partido Socialista Obrero Español - PSOE (1989-1993 y 1993-1996) y Partido Popular - PP (1996-2000 y 2000-2004)– no impusieron demasiados cambios en el rumbo de esta política pública (Rodríguez Gil 2001).

La ruptura no se produjo hasta el inicio del primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE, 2004-2008), considerado el comienzo de una etapa de madurez de esta política pública. Se pueden percibir notables avances: mayor claridad de objetivos, aumento de recursos presupuestarios e incremento del fortalecimiento institucional de los actores gubernamentales vinculados a esta política (Iglesia-Caruncho, Hernando y Del Campo 2007), así como una significativa ampliación de la plantilla de personal técnico, tanto en la sede central como en las oficinas en el extranjero (DAC-OECD 2011, 19). Esta etapa habría sido el segundo momento relevante de la política pública española de cooperación internacional al desarrollo, el cual estuvo marcado por el “impulso” político y el “alineamiento con la comunidad internacional en términos de volumen y esfuerzo” (Cascante *et al.* 2011, 18), y el restablecimiento de las relaciones con actores de los ámbitos académico y de la

sociedad civil organizada, después de muchos momentos de tensión vividos a lo largo de la legislatura anterior (Schulz 2010).

Asimismo, los cambios percibidos en la cooperación internacional al desarrollo deben contextualizarse en la nueva dirección de la política exterior que se intentaba impulsar (García-Calvo 2010). En el ámbito internacional, el principio de la primera legislatura de Zapatero estuvo marcado por la retirada de las tropas españolas que apoyaban la invasión de Irak, así como por el énfasis en relaciones multilaterales, frente a las estrategias de política exterior del Gobierno anterior (Iglesia-Caruncho 2011).

Como ocurre en cualquier política pública, en la puesta en práctica de la cooperación al desarrollo intervienen diversos actores, tanto gubernamentales como no gubernamentales. En lo que se refiere a su configuración institucional, esta esfera de la política española ha sufrido varios cambios a lo largo de las últimas décadas⁹⁰. Sin embargo, ha persistido en la Administración General del Estado (AGE) una división de responsabilidades entre los dos principales organismos públicos relacionados con esta política. Por un lado, existe una unidad encargada del ámbito político y de las tareas de planificación y evaluación –siempre dentro de una de las secretarías de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC)– y, por otro, una agencia autónoma con competencias de coordinación, promoción y gestión de la ayuda no reembolsable –la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)–. Dentro de esta estructura institucional, la parte de AOD que tiene carácter reembolsable (esto es, la transferencia de recursos a los países en desarrollo en formato de préstamos) constituía una excepción, pues hasta 2010 estuvo bajo la responsabilidad directa de otros ministerios y no del MAEC (anteriormente, en el Ministerio de Economía, y más recientemente en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio)⁹¹.

⁹⁰ A este respecto, resultan interesantes las revisiones periódicas de la cooperación española al desarrollo realizadas por el CAD-OCDE, en las que se dedica siempre un capítulo a su estructura y organización y se describe la configuración de esos actores en los diferentes momentos de esta política pública (véase DAC-OECD 2002, 41-50; 2007, 41-51; 2011, 55-66).

⁹¹ En 2011, el FAD, fondo que distribuía los préstamos concedidos por España a los países en desarrollo, pasó por una reforma y fue sustituido por dos nuevos fondos. Se separó así en instrumentos diferenciados los créditos destinados a la promoción de intereses comerciales españoles en el extranjero y aquellos destinados a la reducción de la pobreza, reunidos respectivamente en el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) y el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), bajo la administración del Ministerio de Economía y Competitividad y del MAEC y la AECID, respectivamente (DAC-OECD 2011, 51). Asimismo, el FAD a lo largo de los años se había convertido en "un gran cajón de sastre" de la cooperación española, acogiendo otros instrumentos además de las operaciones de préstamos (ayuda reembolsable), como la ayuda humanitaria y de emergencia, cuotas, suscripciones y aportaciones de capital a instituciones financieras internacionales,

Las atribuciones por parte de la AECID para la ejecución de esta política se distribuyen en unidades administrativas internas, organizadas según región (actualmente, direcciones generales para África, Asia y Europa Oriental, y para América Latina y el Caribe) y por modalidad de cooperación (Oficina de Ayuda Humanitaria, Dirección de Cooperación Multilateral, que actualmente incluye el Departamento de ONGD, y Dirección de Relaciones Culturales y Científicas). Este diseño institucional ha sufrido cambios en sucesivas reformas y reestructuraciones administrativas. La cooperación española al desarrollo, asimismo, siempre se ha caracterizado por una significativa participación de organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD), las cuales constituyen en sí mismas un conjunto diversificado en lo que respecta a los recursos que manejan, temáticas, regiones de actuación, etc. Las ONGD son reconocidas por la Ley de Cooperación como actores de la política de cooperación al desarrollo y ejecutan una parte considerable de la AOD bilateral por medio de diferentes instrumentos sobre los que se hablará a continuación. Otra conocida característica de la cooperación al desarrollo de España es la participación de la administración pública descentralizada.

Todo lo anterior –las amplias redes de actores de esta política y su descentralización multigobernanza–, contribuye a la existencia de un complejo conjunto de caminos por los cuales fluye la AOD española, incluyendo, obviamente, aquella destinada a las acciones contra la violencia hacia las mujeres. De aquí han surgido parte de las dificultades de esta investigación a la hora de obtener la totalidad de la información o de los documentos que han conformado el banco de datos. Además, como se señala en el capítulo 3, la cooperación internacional al desarrollo posee diferentes modalidades e instrumentos: en cada país donante, las formas de hacer cooperación se concretan en mecanismos administrativos, legales y presupuestarios específicos. España tiene procedimientos administrativos propios que permiten que cada actor gubernamental con competencias en esta política pública ponga en marcha la transferencia de recursos a una entidad en un país socio, a un organismo internacional o a una ONGD, de la manera que corresponda en cada caso (AECID 2014). Por todo ello, se señalarán a continuación los aspectos generales de los procedimientos administrativos más significativos presentes en las intervenciones cuyos contenidos

además de cuotas y contribuciones a programas y fondos de organismos multilaterales de desarrollo (Fresnillo i Sallán y Gómez-Olivé i Casas 2011, 15).

están reunidos en el banco de datos Coopvidac. Esto ayudará a entender mejor la diversidad de propuestas en relación al tema que ocupa esta tesis.

Primeramente, conviene destacar las convocatorias competitivas de subvenciones, en especial aquellas promovidas por la AECID y destinadas a organizaciones de la sociedad civil. Estas subvenciones son de tres tipos y se diferencian según su duración y los montantes máximos asignados. Está la anteriormente llamada Convocatoria Abierta y Permanente – CAP (en 2012, pasaron a llamarse Acciones de Cooperación para el Desarrollo), a la que las organizaciones de los países socios también podían acceder, con un límite de 600 mil euros durante un plazo de hasta 18 meses; las convocatorias de proyectos destinadas a ONGD españolas, con financiación de 900 mil euros como máximo por un período máximo de dos años; y, desde 2006, las convocatorias de convenios plurianuales con ONGD españolas calificadas (estatus que reciben aquellas organizaciones que cuentan con mayor trayectoria, experiencia, recursos humanos y solvencia financiera) y desembolsos de un máximo de 20 millones de euros a lo largo de hasta cuatro años (AECID 2014).

Además, en el período analizado en esta tesis funcionó el programa de cooperación internacional del Instituto de la Mujer, que financiaba pequeños proyectos anuales de organizaciones de mujeres en países latinoamericanos y al cual se volverá a hacer mención en las siguientes páginas. El programa Jóvenes Cooperantes, desarrollado por el Instituto de la Juventud, la AECID y el Servicio Público de Empleo Estatal, constituyó otro pequeño instrumento específico de financiación. Suprimido en 2012, tuvo veintidós convocatorias anuales en las que se seleccionaban alrededor de setenta y cinco jóvenes profesionales que, durante nueve meses, trabajaban en tareas relacionadas con intervenciones bilaterales financiadas por la AECID en diferentes países. También dentro de la modalidad bilateral, existen subvenciones directas, destinadas a gobiernos y a organizaciones públicas y privadas de los países receptores; pueden ser dinerarias o en especie, por ejemplo a través de los mecanismos de cooperación técnica y fortalecimiento institucional los diferentes ministerios, no sólo los de la AECID.

Las contribuciones a organismos internacionales, comúnmente se las diferencia según tengan un carácter obligatorio o voluntario. Dentro de estas últimas están incluidas aquellas marcadas sectorial o geográficamente, esto es, consideradas ‘multilaterales’ porque se destinan a fondos, programas o países específicos.

6.2. Primero las mujeres, luego el género, ¿y sólo entonces la violencia?

Una vez considerada esta política pública de manera general, se pasará a analizar la incorporación de los temas y del enfoque de género en las distintas orientaciones e instrumentos. Esta incorporación ocurrió de manera gradual y tardía, y que fue bastante desigual para los diferentes actores vinculados a esta política pública. Perona Larraz (2006) indica que durante los años 80 –antes por lo tanto del ingreso de España en el CAD, de la proliferación de normativa internacional sobre el enfoque de género y de la promulgación de la Ley de Cooperación–, se observaba solamente una atención especial a determinados grupos de mujeres. El enfoque Mujeres en Desarrollo (MED), según la autora, no habría existido en esta política pública hasta mediados de los años 90, que es cuando la AECI empieza a adoptar instrumentos centrados en las mujeres como agentes de desarrollo (de manera limitada y con escasos recursos), aunque internacionalmente ya se discutían los límites de este enfoque.

En esta primera etapa, la población objetivo de la cooperación la constituían estos grupos especiales de mujeres que se encontraban en situaciones más extremas y cuya problemática varía de un país a otro. La estrategia consistía, fundamentalmente, en mejorar la modesta condición de la mujer en la sociedad. Los escasos proyectos que se ejecutaron desde la cooperación española se dirigían hacia los grupos de mujeres vulnerables y en situación de mayor desventaja (Perona Larraz 2006, 148).

En 1997, tras el cambio de Gobierno en el año anterior y una reestructuración interna de la Agencia, se formaliza la Unidad de Género de la AECID, vinculada al gabinete de dirección y con el mandato de integrar la perspectiva de género en todas sus acciones. La entonces responsable y única persona formalmente vinculada a esta unidad, relata cómo se partía prácticamente desde cero:

[E]n 1996, todavía no existía información desagregada por sexos de las actuaciones en AOD (...). Es decir que no sólo no se contemplaba una perspectiva cualitativa de objetivos y trabajos, sino que ni siquiera se podían cuantificar las ejecuciones presupuestarias en las cuales la mujer era beneficiaria directa de la ayuda española al desarrollo. (Galvani Foresi 2000, 46-7)

Se creó, además, desde un “marco de provisionalidad legal” (Galvani Foresi 2001, 103), ya que esa Unidad de Género fue establecida antes de existir una legislación específica en cooperación que abordara este tema.

En 1998 se aprueba la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, cuyo texto menciona la igualdad de género entre los objetivos, principios y prioridades

sectoriales de la cooperación española⁹². El texto de la ley, sin embargo, no hace explícito el significado de ninguno de los conceptos utilizados relacionados con la cuestión de la igualdad de género o de las mujeres en el desarrollo (condiciones de igualdad, no discriminación por razón de sexo, desarrollo con equidad de género, igualdad de oportunidades, participación e integración social de la mujer). Por este motivo, Rodríguez Manzano (2005) resalta la poca solidez de tales referencias y la ausencia de una vinculación explícita a instrumentos jurídicos internacionales, como la Plataforma de Beijing, de solamente tres años antes. Es destacable, además, el silencio de este documento legal sobre cualquiera de las formas de violencia contra las mujeres, aunque sí propone dedicar especial atención, por ejemplo, a la erradicación de la explotación laboral infantil.

La primera convocatoria de subvenciones de cooperación al desarrollo que tuvo como prioridad a las mujeres no vino de la AECID o del MAEC, sino del Instituto de la Mujer (IM), organismo que casi diez años antes, en 1988, había creado el Programa de Cooperación Internacional ‘Mujeres y Desarrollo’ (Instituto de la Mujer 2004). Su puesta en marcha, como manifiestan las personas entrevistadas, habría sido impulsada por recomendaciones de la Conferencia de Nairobi en relación al apoyo a organizaciones de mujeres. De manera específica, como aclara una experimentada funcionaria del Instituto de la Mujer [*E01, técnico, IM*], habría constituido una respuesta a una petición de un grupo de mujeres ligado a la Coordinadora de ONGD,

⁹² Entre sus principios (Artículo 2): b) La defensa y promoción de los Derechos humanos y las libertades fundamentales, la paz, la democracia y la participación ciudadana en **condiciones de igualdad para mujeres y hombres** y, en general, **la no discriminación por razón de sexo**, raza, cultura o religión, y el respeto a la diversidad. c) La necesidad de promover un desarrollo humano global, interdependiente, participativo, sostenible y con **equidad de género** en todas las naciones, procurando la aplicación del principio de corresponsabilidad entre los Estados, en orden a asegurar y potenciar la eficacia y coherencia de las políticas de cooperación al desarrollo en su objetivo de erradicar la pobreza en el mundo. Entre sus objetivos (Artículo 3): La política de cooperación internacional para el desarrollo determinará estrategias y acciones dirigidas a la promoción del desarrollo sostenible humano, social y económico para contribuir a la erradicación de la pobreza en el mundo a través de los siguientes objetivos: a) Fomentar con recursos humanos y materiales el desarrollo de los países más desfavorecidos para que puedan alcanzar un crecimiento económico con un reparto más equitativo de los frutos del desarrollo, favoreciendo las condiciones para el logro de un desarrollo autosostenido a partir de las propias capacidades de los beneficiarios, propiciando una mejora en el nivel de vida de las poblaciones beneficiarias, en general, y de sus capas más necesitadas, en particular, y promoviendo mayores garantías de estabilidad y participación democrática en el marco del respeto a los derechos humanos y las **libertades fundamentales de mujeres y hombres**. Entre sus prioridades sectoriales (Artículo 7): c) Protección y respeto de los derechos humanos, **igualdad de oportunidades, participación e integración social de la mujer** y defensa de los grupos de población más vulnerables (menores, con especial atención a la erradicación de la explotación laboral infantil, refugiados, desplazados, retornados, indígenas, minorías) [sin destaque en el original].

entidad que agrega esas organizaciones a nivel estatal y que fue constituida también a mediados de la misma década. Este Programa estuvo vigente hasta el año 2010, cuando ya bajo responsabilidad del entonces Ministerio de Igualdad, no sobrevivió a los recortes presupuestarios motivados por la crisis económica y a la falta de coordinación entre este nuevo organismo –suprimido también en 2010, después de funcionar por aproximadamente dos años– y el Instituto de la Mujer que lo había liderado durante décadas.

La propuesta del programa consistía en apoyar de manera directa el movimiento asociativo de mujeres en países de América Latina (Cirujano Campano 2005, 156-7), sin olvidar que la cooperación española al desarrollo en ese período también priorizaba esta región⁹³. Se considera que con su creación se estaba favoreciendo una apertura al tema de la mujer –sin cabida, al menos en aquel momento, en las grandes estructuras de cooperación, sus prioridades y líneas de actuación [*E13, político, PP*]–, dentro del cual la atención a la problemática de la violencia ya se hacía notar [*E01, técnico, IM; E14, técnico, DGPOLDE, MAEC*], incluso en formas todavía poco visibles, como la trata de personas [*E15, consultora en género*]. Cada convocatoria anual solía financiar entre 20 y 25 proyectos propuestos por ONG latinoamericanas⁹⁴. Paralelamente, se hacía una convocatoria de pequeñas subvenciones dirigidas a ONG españolas que recibían el 10% del desembolso total del proyecto con el propósito de encargarse de repasar los recursos a la organización local y asistir en la ejecución de las intervenciones.

Este programa es recordado por sus aspectos pioneros. Fue la primera iniciativa en ese campo en apoyar los temas relacionados con las mujeres y la igualdad de género, marcando una línea de acción específicamente centrada en ello [*E06, político, PSOE*]

⁹³ Habría que precisar que el mencionado programa tenía también otras dos áreas: una dedicada a la formación de expertas en temas de género, por medio un programa de posgrado becado que incluía la realización de pasantías en el extranjero; y otra volcada a la participación española en foros internacionales en materia de cooperación, dentro de la cual se inscribían las primeras contribuciones voluntarias del Estado a organismos internacionales de género, como UNIFEM, INSTRAW y otros (Durán y Lalaguna 2000). Esta situación se mantuvo hasta finales de la primera década de siglo XXI, cuando el programa de formación se suspendió y el área internacional fue trasladada al Ministerio de Igualdad. Aún está por investigarse en profundidad el impacto que este programa de formación becado tuvo en la institucionalización de la perspectiva de género en la cooperación española, considerando que muchos de los documentos oficiales al respecto fueron elaborados por ex-alumnas del programa. A ese respecto, véase Strzelecka *et al.* (2009).

⁹⁴ En las últimas convocatorias realizadas, el montante aprobado para cada proyecto no excedió los 25 mil euros. El apoyo a organizaciones de regiones distintas a la latinoamericana fue siempre excepcional, con un total de siete proyectos a lo largo de los primeros quince años de existencia, uno en Bosnia-Herzegovina dos en Jordania, uno en Marruecos, uno en Mozambique y dos en los Territorios Saharauis (Instituto de la Mujer 2004, 57-100).

en coherencia con las propuestas del enfoque MED que prevalecía entonces. Además, propició, por un lado, la financiación directa a organizaciones de mujeres en países receptores⁹⁵ y, por otro, el acercamiento a la cooperación internacional por parte de organizaciones recién creadas o que se habían dedicado a la defensa de los derechos de las mujeres en el territorio nacional.

Desde las organizaciones españolas participantes, aunque se insista en la insuficiencia de fondos, las percepciones suelen ser positivas, destacando la posibilidad que tuvieron de conocer el trabajo de organizaciones similares en otros países y el funcionamiento de la cooperación internacional. Para las organizaciones españolas sin experiencia previa en cooperación internacional, el programa funcionó como una ventana de acceso a este campo, ya que acreditar la participación previa en otros proyectos es uno de los requisitos exigidos en las convocatorias competitivas de subvenciones, tanto por parte de la agencia estatal (AECID 2014, 47-8) como de otros organismos de la cooperación descentralizada.

Sin embargo, no todo es consenso y hay quienes expresan descontento con el lugar asignado a las organizaciones españolas en la relación con las ONG locales y proponentes de las acciones. Como menciona una de las personas entrevistadas, “la participación [de la organización española] era mínima, se limitaba a controlar la ejecución del proyecto, supervisar el proyecto, pero no participar activamente. Ni en su diseño, ni en su ejecución ni en su desarrollo” [E21, dirección, ONGD, especializada en género]. Ese aspecto del programa, en cambio, es mencionado por otros actores como ventajoso y favorecedor de relaciones menos verticales y marcadas por aprendizajes compartidos entre organizaciones y activistas de ambos países [E09, técnico, PSOE, Congreso de los Diputados].

De vuelta al marco de la cooperación española en general, es necesario señalar que diversas autoras (Rodríguez Manzano 2005; Cirujano Campano 2006; Perona Larraz 2006; Vargas Escobar 2006) se han dedicado a estudiar los cambios progresivos hacia la incorporación del género como doble prioridad (sectorial y transversalmente) en esta política y la evolución desde el enfoque MED al Género en Desarrollo (GED). Aunque escapa a los propósitos de esta investigación profundizar en ello, es importante señalar que se reconocen los avances en la institucionalización del enfoque de género,

⁹⁵ Al contrario de la cooperación nórdica y la cooperación británica, la cooperación bilateral española no contó con instrumentos de apoyo directo (*core funding*) a organizaciones de la sociedad civil en los países receptores (Bustinduy Amador 2009, 2).

así como la asunción de compromisos internacionales en esa materia y el aumento de recursos financieros (elemento que se podrá observar en los gráficos a lo largo de este capítulo), especialmente a partir del II Plan Director.

Las críticas, sin embargo, recuerdan que aun habiendo puesto en marcha medidas para la incorporación de este enfoque, no se ha llegado tan lejos como hubiera sido necesario, además de haber tardado en producirse. Faltarían elementos operativos básicos –por ejemplo, indicadores de impacto de género (Craviotto Ortega 2009, 92)–, la promoción activa de cambios en la cultura institucional, más formación del personal y la asignación de recursos para la unidad especializada de género (Tomás Pérez 2010). Ésta última, al igual que ocurre en otras estructuras sectoriales dentro de la reconfiguración que toma la AECID a partir de 2008, siguió sin presupuesto propio y con escasa dotación de personal (Atalaya 2012), además de ocupar siempre una posición en el organigrama de la AECID inferior al que actores especializados en políticas para la promoción de la igualdad de género desearían.

Con respecto a la violencia contra las mujeres, es significativo que el estudio de Perona Larraz (2006) –originalmente una tesis doctoral y uno de los primeros (si no el primero) realizado en el ámbito académico sobre la incorporación del enfoque de género en la cooperación española al desarrollo– no mencione la existencia de actividades sobre esta problemática en el período. Tal ausencia podría dar pistas sobre la atención hacia este tema por parte de esta política todavía poco visible o escasa, al menos hasta recientemente.

Las entrevistas realizadas, sin embargo, sí sugieren la existencia de un interés temprano por la problemática, pero concentrado en intervenciones sobre la mujer y, de manera específica, en el mencionado programa del Instituto de la Mujer. Se describe la atención al tema como algo que venía desde abajo (desde las instituciones de algunos países receptores, desde organizaciones concretas o desde el personal expatriado ya sensibilizado o formado) y todavía sin un carácter institucionalizado. Se habla de este interés en términos de selección geográfica e intereses localizados [*E09, técnico, PSOE, Congreso de los Diputados; E14, técnico, DG POLDE, MAEC*], pero también como respuesta al trabajo individualizado, de expertas y activistas en el terreno [*E05, técnico, AECID*]. Este trabajo en todo caso quedaba limitado por la existencia de pocos instrumentos y canales administrativos de la cooperación española al desarrollo receptivos a abordar la violencia contra las mujeres [*E31, dirección. ONGD, especializada en género*] y por la falta de interés de la mayoría de las organizaciones en abordar el tema [*E32, técnico, ONGD, especializada en salud*].

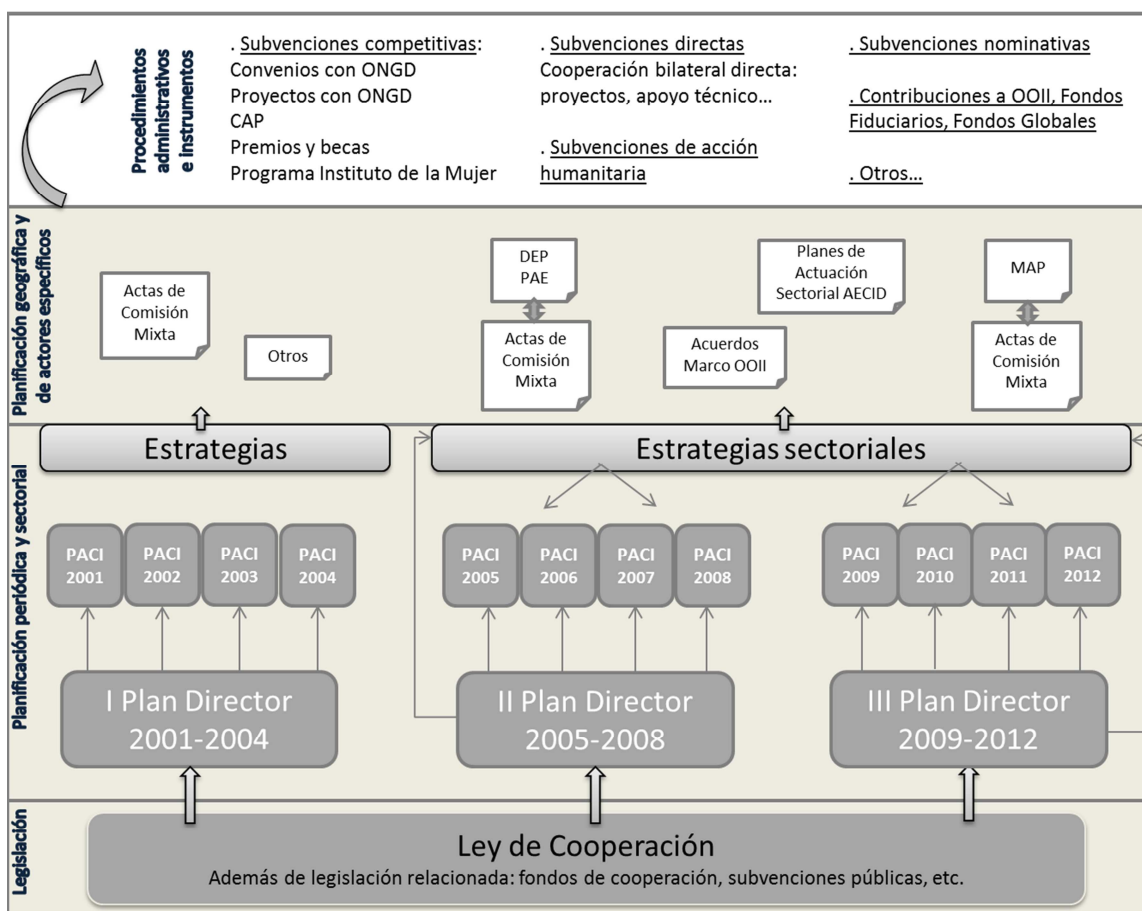
Además, conviene resaltar que hasta el momento no existe un documento oficial de esta política que aborde de manera específica o exclusiva la problemática, de ahí la necesidad de repasar otros documentos, como publicaciones, actas, planes, estrategias, en busca de planteamientos relacionados con el tema⁹⁶.

Considerando lo expuesto, se desarrollará en los siguientes apartados un análisis de las orientaciones existentes sobre el problema de la violencia contra las mujeres en el ámbito de la cooperación española al desarrollo. El punto de partida será la lectura y la sistematización de los principales documentos que orientan la puesta en práctica de esta política pública (véase la ilustración 2), entendiéndolos como productos relevantes para comprender y explicar su funcionamiento. Sin embargo, como ocurre en cualquier campo, los vínculos entre las etapas de planificación y de ejecución de una política pública no deben verse como automáticamente secuenciales o lineares (Knoepfel *et al.* 2007). Por ello, aunque no sean aspectos abordados en profundidad en este análisis, no hay que olvidar que la ejecución sobre el terreno de tales orientaciones de la etapa de la planificación estaría sujeta a pautas determinadas por la relación con los países receptores, sus instituciones y demás actores locales.

El período más detallado en esta investigación corresponde a los años 2005 a 2010. Sin embargo, dada la ausencia de estudios previos sobre el tema, es necesario tener en cuenta lo que ya se había realizado o estaba en marcha en los años anteriores. Así, se revisarán los documentos oficiales y de planificación de esta política pública a partir de la publicación del I Plan Director, en 2001. El objetivo es conocer, sistematizar y analizar todo el contenido relacionado con la violencia contra las mujeres, obteniendo así una visión pormenorizada sobre compromisos, intenciones y prioridades (al menos en su nivel declaratorio y público) en relación al tema mencionado.

⁹⁶ Por otro lado, los organismos de cooperación de otros países donantes sí tienen posicionamientos específicos al respecto. En lo que respecta a la agencia estadounidense, por ejemplo, se podría destacar un documento que marca una estrategia para responder y prevenir la violencia de género a nivel global (USAID 2012), además de uno anterior con orientaciones técnicas para la actuación en programas sectoriales de salud (USAID 2006). La cooperación alemana enmarca su posición sobre la violencia contra las mujeres y las niñas en una revisión de buenas prácticas recogidas en proyectos financiados anteriormente (GTZ 2005). En el caso británico, se cuenta con un balance de acciones recientes, elaborado por un equipo de investigación y destinado a informar y a orientar la futura planificación y distribución de la AOD en esta misma temática (OPM 2014).

Ilustración 2. Planificación y procedimientos administrativos de la cooperación española al desarrollo.



Fuente: Elaboración propia, a partir de AECID (2014).

El conjunto de documentos considerados para este análisis está dividido en dos grupos (véase el anexo 2) que abarcan períodos diferentes de la política de cooperación española: 2001- 2004, correspondiente a la vigencia del primer Plan Director, elaborado durante legislatura del PP; y 2005- 2010, correspondiente al segundo Plan Director y parte del tercero, elaborados durante legislaturas del PSOE. Esta primera división se ha hecho de modo que coincida con los primeros momentos en los que se adopta la transversalidad del enfoque de género en esta política pública. Cada uno de estos conjuntos contiene los documentos más relevantes de la política española de cooperación al desarrollo en cada período, especialmente los planes anuales y plurianuales, y las estrategias temáticas y geográficas. En esos grupos se tienen en cuenta también las actas de comisiones mixtas bilaterales, que recogen las intenciones de la cooperación bilateral entre España y sus socios para un período determinado.

Se buscará en el contenido de esos documentos las menciones a la violencia contra las mujeres en sus distintas denominaciones, sea como parte de los análisis que

elaboran, sea como parte de sus objetivos o estrategias. De esta manera, se tratará de observar cómo se presentan las definiciones sobre la cuestión que se está estudiando, así como las respuestas que se proponen a lo largo del tiempo en las líneas generales de esta política pública.

6.2.1. Primeros momentos, escasos compromisos

El *I Plan Director 2001-2004* (MAE-SECIPI 2000b) es el primer documento que recoge objetivos plurianuales, tal como establece la Ley de Cooperación aprobada dos años antes. Sin embargo, su valoración no es positiva, sino más bien todo lo contrario: es considerado como “un documento de ‘compromiso’, de escaso valor estratégico y técnico que se limita a ratificar las actuaciones y prioridades que, de facto, venía desarrollando la Cooperación Española” (Cámara López y Puras Higuera 2007, 67)⁹⁷.

En lo que se refiere a los temas de género, considera la promoción de la igualdad de género entre mujeres y hombres una de las tres prioridades horizontales (junto con la lucha contra la pobreza y la protección del medioambiente) que debe implementarse mediante el análisis y las investigaciones sobre los efectos de las políticas de desarrollo sobre las mujeres, los indicadores de impacto, los datos desagregados por sexo y los proyectos específicos. Sin embargo, no explica en qué consisten cada uno de esos instrumentos ni cómo y con qué fines deben utilizarse. Dice, además, que la igualdad entre mujeres y hombres está integrada en la prioridad sectorial de participación social, desarrollo institucional y buen gobierno (MAE-SECIPI 2000b, 19), pero el tema no vuelve a aparecer entre los objetivos propuestos para este sector.

Por todo ello, se ve en este primer plan cuatrienal un intento de trasladar a la cooperación española una parte de los consensos alcanzados en torno a la igualdad que se iban generando en el ámbito del CAD⁹⁸. Sin embargo, no se ahonda en la discusión

⁹⁷ El proceso de elaboración del documento y su resultado final recibieron críticas de representantes de las ONGD y de universidades en el Consejo de Cooperación. El voto particular de la Coordinadora de ONGD menciona, entre otros aspectos, el escaso desarrollo de estrategias e instrumentos y la poca utilidad del documento como herramienta estratégica de la política de cooperación. Tardó casi dos años en ser elaborado y aprobado, ya que la primera versión elaborada a lo largo de 1999 fue rechazada por el nuevo equipo del presidente de Gobierno reelegido en marzo de 2000 (Vera 2001).

⁹⁸ En el año 2000, la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica publicó en castellano ‘las principales aportaciones doctrinales del CAD’, incluidas aquellas relacionadas con uno de sus temas transversales, la igualdad entre mujeres y hombres (MAE-SECIPI 2000a). Dos años antes, el CAD había actualizado sus directrices y guía de conceptos sobre la igualdad entre mujeres y hombres en

sobre la igualdad de género y, como consecuencia, no existen referencias a violencia, maltrato u otra expresión relacionada con acciones violentas contra mujeres y niñas.

Con respecto a los documentos de planificación anuales de este período, los Planes Anuales de Cooperación Internacional (PACI) (MAE-SECIPI 2001, 2002, 2003b, 2004b), el silencio sobre la cuestión de la violencia contra las mujeres continúa en los dos primeros años (2001 y 2002). En 2003 y 2004, y solamente dentro de la acción multisectorial para Magreb y Oriente Medio, se propone prestar una especial atención a la situación de la mujer por medio de la inserción laboral de víctimas de violencia (en 2003, se prioriza Argelia; en 2004, los países árabes y especialmente Argelia y Palestina). Las menciones son exiguas, casi idénticas y no parten de un diagnóstico previo sobre la situación de las mujeres en esa región o la relevancia de la inserción laboral como solución.

Se podría esperar que se mencionara el tema de la violencia en la *Estrategia de la Cooperación Española para la Promoción de la Democracia y del Estado de Derecho* (MAE-SECIPI 2003a), documento sobre el sector en el que, según el I Plan Director, la igualdad de género está incluida. De hecho, al detallar sus áreas de intervención, hay referencias a situaciones relacionadas con la violencia contra las mujeres (dificultad de acceso a la justicia por razones de sexo, asistencia a víctima de delitos violentos y tráfico ilegal de personas), pero en ningún momento se aborda de una manera explícita. Esta mención sí se hace en un documento publicado ya al final de la legislatura y del período correspondiente al I Plan Director: la *Estrategia de la Cooperación Española para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres*, específicamente en cuatro de sus sectores de actuación. En salud, se considera que las violaciones, agresiones y abusos sexuales inciden de forma negativa en la salud de mujeres y niñas y que la violencia de género constituye a la vez vulneración de derechos humanos y problema de salud pública (MAE-SECIPI 2004a, 24). Una de sus seis sub-áreas es ‘violencia contra las mujeres’ y su breve contenido, citado íntegramente a continuación, evidencia una visión bastante restringida del problema: prioridad a la violencia sexual, atención dirigida a la víctima y al maltratador, y énfasis en el alcoholismo en las acciones de prevención.

En concordancia con la defensa de los derechos humanos de las mujeres, la Cooperación Española ha de fomentar el desarrollo de programas de salud que atiendan

el ámbito del desarrollo, bajo la influencia de la Conferencia de Beijing (OCDE-CAD 2001). Sus anteriores ‘principios para apoyar el papel de la mujer en el desarrollo’ eran del año 1983, aunque fueron revisados seis años después, para recoger los avances de la Conferencia de Nairobi (1985).

de forma integral a las mujeres víctimas de la violencia física y psíquica en el ámbito de la sexualidad, cuya terapia requiere atención médica especializada, tanto para la víctima como para el maltratador, en particular mediante la prevención y atención médica y psicológica necesaria.

Asimismo, es importante promover campañas de información y sensibilización para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en diferentes ámbitos, incluyendo campañas para el tratamiento del alcoholismo, un factor que contribuye en gran medida a situaciones de violencia contra las mujeres. (MAE-SECIPI 2004a, 26-7)

En educación, la sub-área de calidad de la educación prevé el desarrollo de contenidos curriculares no sexistas, recomienda que dichos materiales deben “educar sobre una cultura de relaciones entre los sexos que excluya la violencia contra las mujeres y las niñas” y además “educar a las niñas para que conozcan sus derechos según la legislación del país y desarrollen su capacidad de exigir protección jurídica en el futuro” (MAE-SECIPI 2004a, 32). En la promoción de la democracia y el Estado de derecho, se hace un primer análisis inicial sobre las insuficiencias de los sistemas de justicia de los países receptores de la ayuda, pero esto no se transforma luego en objeto de atención o recomendación específica en las áreas prioritarias. El último sector que aborda la violencia contra las mujeres es el de la ayuda humanitaria, prevención de conflictos y procesos de reconstrucción de paz, debido a su incidencia en situaciones de emergencia, conflicto y desplazamiento. Además, dentro del área ‘mujer migrante’, se hace referencia a la necesidad de cuidar aspectos de seguridad y protección de mujeres refugiadas y migrantes en general ante el abuso sexual, el tráfico y la violencia, pues se especifica su mayor vulnerabilidad debido a su estatus a menudo inferior. En todo caso, no se encuentran justificaciones para las medidas propuestas o detalles sobre quiénes deben actuar y de qué manera.

También en relación con ese período previo a la adopción de la transversalidad de género, se han podido localizar dos documentos en los que se realiza un balance de las acciones puestas en marcha. Uno de ellos (AECI 2004a) presenta en forma de tablas una selección de las acciones llevadas a cabo por distintos actores de la cooperación española en treinta y dos países, recogiendo dos referencias a actuaciones dirigidas a mujeres víctimas de violencia: en Argelia (también en el plan anual para 2003, como ya se ha señalado) y en Bosnia-Herzegovina. Ambas son subvenciones a ONGD (sin citar cuáles) dentro del sector de participación social, desarrollo institucional y buen gobierno. La primera se dirige a un centro de atención, acogida y reinserción de mujeres y niños víctimas de la violencia, y la segunda a un centro de atención y prevención de la violencia doméstica. El segundo documento es un informe que resume lo más destacado de la actuación de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica hasta el año 2004 (AECI 2004b). Hay referencias genéricas a sectores

priorizados y actuaciones desarrolladas, faltando información sobre acciones dirigidas al tema aquí investigado.

6.2.2. El enfoque GED entra en escena

En 2005 entra en vigor el *II Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008* (MAEC-SECI 2005b), el cual:

(...) representa un claro avance con respecto a su antecesor. Se trata de un documento mucho más completo que recoge, además de la priorización geográfica y sectorial, la preocupación por mejorar tanto la cantidad como, sobre todo, la calidad de la Ayuda, estableciendo criterios claros de intervención.

(...) [C]on su segundo Plan Director, la Cooperación Española alcanza un grado de madurez, al menos teórica, de la que no había gozado hasta el momento (Cámara López y Puras Higuera 2007, 69).

En ese contexto, el cambio de enfoque con relación a la igualdad de género es también significativo, pues además de considerarla como una de las cinco prioridades horizontales (junto con lucha contra la pobreza, defensa de los derechos humanos, sostenibilidad medioambiental y respeto a la diversidad cultural), dedica todo un sector de actuación a combatir las desigualdades de género (género y desarrollo). Al justificar por qué la igualdad de género es una de las prioridades horizontales de ese nuevo período de planificación de la cooperación española, se cita que la violencia contra las mujeres fue uno de los temas de especial atención de la Plataforma de Acción de Beijing. Aparece más profusamente dentro de las áreas sectoriales, específicamente en las líneas estratégicas y actuaciones prioritarias⁹⁹ de cuatro de los siete sectores de este II Plan Director (gobernanza democrática, participación y desarrollo institucional, cobertura de necesidades básicas, género y desarrollo, prevención de los conflictos y construcción de la paz). El tema de la violencia contra las mujeres se aborda desde los ámbitos jurídico-legal, médico-sanitario, político y sociocultural, y también en contextos de conflictos violentos. En el sector género y desarrollo se afirma que el apoyo de la cooperación española a medidas para erradicar la violencia de género es coherente con el interés interno del Gobierno en temas de violencia de género (en el momento de la elaboración del documento, se encontraba en fase final de discusión la Ley Orgánica 1/2004 sobre la violencia de género).

⁹⁹ Para cada uno de los siete grandes sectores prioritarios del Segundo Plan Director 2005-2008 se especifican líneas estratégicas y actuaciones prioritarias, siendo las últimas más detalladas.

Cuatro años más tarde, el *III Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012* (MAEC 2009) amplía a doce los sectores prioritarios de intervención. De ellos, cuatro (governabilidad democrática, género en desarrollo, migración y desarrollo, construcción de la paz) siguen formulando mediante objetivos específicos y líneas de actuación diversas acciones contra la violencia hacia las mujeres. Comparando ambos planes directores, se observa que el último continúa incidiendo en la atención a aspectos jurídicos-legal (sector de gobernabilidad democrática), políticos (sector de género en desarrollo) y relacionados con situaciones de conflicto (sector de construcción de la paz). Una novedad es que vuelvan a aparecer referencias a violencias relacionadas con la migración, especialmente la trata y la explotación sexual, que también aparecen en otros documentos publicados durante el período de vigencia del II Plan Director, como se verá a continuación.

El contenido del II Plan Director 2005-2008 define y contextualiza de forma amplia la violencia contra las mujeres. Asimismo, sin esbozar una reflexión previa, recomienda la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres (por lo que respecta a las formas de violencia, la única medida concreta mencionada está relacionada con la mutilación genital femenina), la lucha contra la violencia contra niñas e infancia en general y la prevención de la violencia de género en situaciones de conflictos armados (sin establecer medidas específicas para esos dos últimos ámbitos). En el período 2009-2012, el análisis se centra en contextos de posconflicto y estados frágiles. Al igual que en el período anterior, la propuesta de acción se hace de manera más extendida, incluyendo referencias a la violencia de género de manera amplia.

Con relación a los PACI de este período (MAEC-SECI 2005a, 2006a, 2007j, 2008a, 2009b, 2010b), hay que destacar que ninguno de ellos analiza el problema, aunque la mayoría propone acciones específicas para diferentes sectores y países. Las referencias, no obstante, son más bien para destacar algún proyecto ya aprobado, previsto o en curso. Es interesante que en los dos primeros años de este período, encontramos principalmente acciones localizadas en un país, destacando la lucha contra la mutilación genital femenina (MGF) en Malí y África, y la atención a mujeres víctimas de violencia en Paraguay. A partir del año siguiente, cuando dejan de ser publicadas las llamadas ‘fichas-país’, especie de resúmenes de las actuaciones de la cooperación española en cada país, las referencias al tema ya no aparecen tan vinculadas al elemento geográfico, sino al sector: salud en 2007 y género y desarrollo en 2007 y 2008, aunque para este último año exclusivamente en relación con las migraciones internacionales. Finalmente, en 2009, el tema no se cita de manera explícita y en 2010 la

mención se hace de manera más diluida: como tema prioritario en un acuerdo multilateral a ser puesto en marcha con el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y, de manera genérica, en la necesidad de proteger derechos laborales en países en desarrollo y en contextos migratorios.

La mirada conjunta sobre esos seis planes anuales permite identificar tenues líneas de continuidad en la actuación contra la violencia hacia las mujeres y la preocupación por su vinculación con la migración en los años 2008 y 2010. Asimismo, en comparación con los marcos de actuación propuestos por los respectivos planes directores, los documentos anuales dejan algunos temas de lado, como las propuestas de acción para la erradicación del trabajo infantil y de la violencia contra niñas, la atención a niñez de la calle, las campañas de sensibilización contra la violencia de género (II Plan Director), y la atención a las violencias de género y sexual en contextos de conflictos armados (III Plan Director).

También es necesario considerar aquellos documentos de contenido temático. La *Estrategia ‘Género en Desarrollo’ de la Cooperación Española* (MAEC-SECI 2007a) integra una nueva serie de estrategias sectoriales elaboradas por la entonces Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE) de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI) durante la vigencia del II Plan Director 2005-2008¹⁰⁰. En comparación a sus equivalentes publicados anteriormente, se trata de un documento de planificación más detallado con respecto a las orientaciones de las acciones que deben desarrollarse, pero con una amplitud de objetivos y acciones considerada excesiva: “su afán omnipresente y la prolijidad y complejidad de los esquemas que se proponen generan a menudo bastante confusión sobre cuál es realmente el rumbo a seguir” (Cámara López y Puras Higuera 2007, 73)¹⁰¹.

¹⁰⁰ Asimismo, algunas de ellas, como la Estrategia Multilateral (MAEC-SECI 2009a), vinieron a la luz durante la vigencia del III Plan Director 2009-2012. En todo caso, como ya no se han vuelto a hacer estrategias sectoriales para estas temáticas, en principio continúa su validez en el periodo siguiente. Aunque los sectores de la cooperación española sufrieron cambios, se ha considerado que son orientaciones todavía válidas.

¹⁰¹ En 2009, según la entonces Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, el MAEC tenía la intención de dotar a cada OTC de una estrategia de género propia, siguiendo los pasos de lo que había hecho un año antes la oficina instalada en Colombia (AECID - OTC Colombia 2008), para reforzar la prioridad que se concedía al sector de género y desarrollo en los diferentes países durante la vigencia del III Plan Director (2009-2012) [declaración realizada el 16 de abril de 2009, durante la jornada sobre género y medios de comunicación organizada por la campaña Muévete por la Igualdad. Es de Justicia.]. Según la información de que disponemos, la OTC de Colombia, sin embargo, sigue siendo la única oficina que hasta el momento ha publicado un documento de este tipo. Fuera del ámbito de la

Teniendo en cuenta que dicho material fue elaborado siguiendo las directrices del II Plan Director, el examen realizado a continuación evita repetir las coincidencias y destaca de qué manera la estrategia amplía y profundiza la forma de abordar la cuestión de la violencia contra las mujeres. En lo que respecta a las convergencias con los demás sectores de cooperación, son novedosas las siguientes referencias: i) en protección de colectivos vulnerables, se incide en la necesidad de prestar una especial atención a las niñas y mujeres que sufren múltiples discriminaciones, como las víctimas de conflictos armados, trata y explotación sexual y en otras situaciones de extrema dificultad; ii) en las acciones de medio ambiente, se priorizan las iniciativas de diversidad cultural que incluyen actuaciones para la protección de la seguridad integral de las mujeres y medidas contra la violencia de género; iii) y en la construcción de la paz, se realiza la recomendación de favorecer procesos contra delitos de lesa humanidad dirigidos específicamente contra las mujeres como género, como el feminicidio, la explotación sexual y la violencia de género (MAEC-SECI 2007a, 95-9).

Quizás lo más innovador de este documento esté en cómo detalla las acciones según se dirijan a lograr la igualdad formal, la igualdad real o a reforzar el sector de género dentro de cada uno de sus cinco objetivos específicos. Con las acciones para la igualdad formal se quieren impulsar líneas de cumplimiento y adecuación a la normativa internacional sobre género, igualdad y no discriminación; las líneas para la igualdad formal están pensadas para fortalecer la gobernabilidad, las políticas públicas y la cohesión social; y, finalmente, las líneas específicas del sector de género se centran en el empoderamiento de las mujeres en la sociedad civil.

En relación a los elementos que compondrían los diagnósticos y pronósticos de la estrategia sectorial de género y desarrollo aquí analizada, hay que resaltar, en primer lugar, la correspondencia entre los problemas enunciados y propuestas de acción y sus medidas más específicas; a grandes rasgos, y al contrario de lo que ocurre en los otros documentos mencionados anteriormente, muchos de los problemas que se presentan se ven reflejados en propuestas de acción. Se recogen las distintas maneras en las que mujeres y niñas se ven afectadas por actos violentos. Asimismo, si bien se describe la violencia contra las mujeres como una violación generalizada de los derechos humanos, frecuentemente tolerada e impune, y se nombran formas recurrentemente encontradas

AECID, dos de las principales organizaciones sindicales españolas, Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO.), también publican estrategias de género para sus acciones de cooperación internacional al desarrollo (Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo 2009; CC.OO. 2012).

en cualquier parte del mundo, también se hace referencia a otras formas de violencia que están específicamente vinculadas a determinados contextos: prácticas nocivas y asesinatos para ‘restaurar la honra’ en los países musulmanes y africanos, infanticidio femenino en India y China, y feminicidio en tres países latinoamericanos (Guatemala, El Salvador y México). Al mismo tiempo, se observa un intento de aproximación a enfoques interseccionales, traducido en la propuesta de apoyar políticas de seguridad integral a mujeres que sufren más violencia de género a causa de las peores formas de discriminación.

En relación a contextos específicos, marcados por la inseguridad ciudadana y el acoso sexual en lugares de trabajo, se propone luchar contra esas prácticas por medio de sensibilización, mejora de las condiciones de trabajo y combate a la explotación sexual. Asimismo, se considera la trata y la explotación sexual como fenómenos cuya incidencia aumenta debido a la migración, y se sugiere combatirlas mediante el fortalecimiento de redes y organizaciones de apoyo a las víctimas. Sobre el problema de los obstáculos a la denuncia de casos de violencia de género y acoso sexual en el entorno educativo protagonizados por profesores y compañeros, se propone apoyar las iniciativas de las propias niñas y profesoras. Respecto a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos, y a las dificultades de muchas mujeres para tener el control sobre su propio cuerpo, se propone la protección social y jurídica de estos derechos, el apoyo a programas que buscan eliminar prácticas lesivas, como la mutilación genital femenina y la recopilación de buenas prácticas sobre este tipo de violaciones en ‘culturas arraigadas y discriminatorias’. En relación a las situaciones de conflictos armados, se menciona el apoyo a la aplicación de la Resolución 1325 y la lucha contra la violencia de género, pero sin especificar cómo hacerlo.

Respecto a las demás estrategias sectoriales publicadas en el período del II Plan Director (2005-2008), se constata que cinco de ellas eluden hacer referencia a formas de violencia contra las mujeres, a saber: *Acción Humanitaria*¹⁰², *Cultura y Desarrollo*, *Lucha contra el Hambre*, *Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible*, *Multilateral (MAEC-SECI 2007b, d, g, h, 2009a)*.

¹⁰² Dos responsables de género de la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID, en un artículo que trata de la aplicación técnica de esta estrategia sectorial bajo la perspectiva de género, reconocen esta ausencia. Las autoras del artículo señalan que la violencia contra las mujeres es, junto con la pobreza, un tema que debería ser revisado e incluido en futuras reformulaciones de este documento (García Beltrán y Sanz Velasco 2009, 292-4).

En las otras cuatro estrategias sectoriales publicadas en el período de vigencia del II Plan Director que sí abordan la cuestión aquí analizada, las referencias al tema de la violencia aparecen en las intersecciones con otras prioridades sectoriales y horizontales de la cooperación española, así como en la definición de líneas y acciones estratégicas propias. Véase a continuación qué dice cada una de ellas a este respecto.

Los documentos *Estrategia de Construcción de la Paz* y *Estrategia con los Pueblos Indígenas* (MAEC-SECI 2007f, c) se refieren al tema de modo bastante genérico: la primera propone acciones similares a lo ya expuesto en relación a la estrategia de género y la segunda trae como novedad la propuesta de políticas específicas dirigidas a mujeres indígenas en organismos públicos dedicados a la igualdad de género. La *Estrategia de Educación* (MAEC-SECI 2007e), por su parte, no lo identifica como un problema, aunque propone tres medidas específicas para el impulso de una educación no sexista: denunciar la violencia contra niñas y mujeres, impedir el acoso sexual a niñas y adolescentes e implementar canales de denuncia y sanción del acoso, abuso y maltrato sexual y psicológico en el entorno educativo.

Finalmente, la *Estrategia de Salud* (MAEC-SECI 2007i) proporciona un diagnóstico más fundamentado, ya que cita la definición de violencia de género de Naciones Unidas, presenta datos de incidencia de una de sus formas (mutilación genital femenina), y hace referencia a secuelas de otras formas de violencia (se menciona de manera explícita el acoso sexual, los feminicidios, las bodas forzadas, las violaciones y el cebamiento¹⁰³). La solución propuesta pasa por la mejora de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, aunque como medidas específicas cita solamente programas contra la mutilación genital femenina. Asimismo, y sumado a otras acciones para fortalecer los recursos humanos del sistema de salud, se propone dar mayor seguridad al personal sanitario contra posibles violencias, especialmente las llevadas a cabo contra las mujeres, aunque este no era un aspecto que se hubiera manifestado previamente como un problema en el documento.

La estrategia del sector de salud se caracteriza por definir prioridades relacionadas con la violencia contra las mujeres para cada región geográfica (con excepción de Europa Central y Oriental). Para América Latina y el Caribe, tanto el diagnóstico como el pronóstico sobre este aspecto son bastante sucintos y no se insta a

¹⁰³ Se trata de la alimentación forzosa de niñas y mujeres para que engorden con el objeto de que cumplan un patrón de belleza que valoriza la obesidad y así lograr casarse. Es considerada un tipo de práctica tradicional nociva, presente en determinados grupos poblacionales de Mauritania (*BBC News* 26/01/2004).

la adopción de medidas específicas. Para el Magreb y el Oriente Próximo, aunque no se parta de una definición de la violencia, ésta aparece como un problema que ha de ser atendido en situaciones de conflicto y posguerra (Territorios Palestinos e Irak), y en el ámbito familiar (violencia de género, maltrato y abuso infantil). En el caso de las otras dos regiones a las que se hace referencia, Asia y Pacífico y África Subsahariana, se observa que ambos diagnósticos hacen hincapié en la mutilación genital femenina y en formas de violencia contra las mujeres menos citadas (prostitución forzada y explotación sexual en el caso de Asia y Pacífico y matrimonios precoces en el de África Subsahariana). Para ambas regiones, las soluciones propuestas están relacionadas con la salud sexual y reproductiva: proporcionar atención a las víctimas jóvenes de la explotación y del tráfico sexual en el caso asiático, y aunar esfuerzos con iniciativas locales y nacionales ya existentes en el caso africano.

Antes de pasar a los documentos relacionados con los diferentes países socios, es pertinente hacer referencia a un documento único por sus características: el *Plan de Acción* para el cumplimiento de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Mujeres, Paz y Seguridad en el ámbito de la política de cooperación al desarrollo de España (MAEC-SECI 2009c). Este documento se presenta como el resultado de la puesta en práctica de dos de las estrategias sectoriales mencionadas anteriormente (la de género en desarrollo y la de construcción de la paz) y como un elemento de coherencia en la actuación del Gobierno español para la aplicación de la referida resolución. Su apartado de justificación está íntegramente articulado en torno a la existencia de la victimización diferenciada de hombres y mujeres en los conflictos armados debido a las relaciones de género desiguales previamente construidas. De este modo, se realiza un razonamiento genérico sobre la cuestión y se destaca la importancia de la perspectiva de género en las actuaciones de la cooperación. Además, en su contenido se especifican cuáles deben ser las prioridades para los diferentes actores de la política española encargados de la identificación, planificación y gestión de recursos, entre las cuales la violencia contra las mujeres se menciona de manera frecuente. Sin embargo, pese a hacer un exhaustivo listado de mecanismos de seguimiento y evaluación de estas actuaciones, no se establecen metas ni plazos que se deben cumplir.

A partir del II Plan Director, la planificación geográfica de esta política pública se ha expresado en Documentos de Estrategia País (DEP) y Planes de Actuación Especial (PAE), tratados aquí de manera conjunta. Los DEP se comenzaron a elaborar a

partir de 2005¹⁰⁴ con el objetivo de delimitar la actuación en los países definidos como ‘prioritarios’. Debían estar en consonancia con la realidad local y orientar las acciones bilaterales, multilaterales y descentralizadas desarrolladas en el país. De manera similar, para el resto de los países se elaboraron los PAE¹⁰⁵. Al igual que ocurre con los instrumentos de planificación sectoriales, los DEP y los PAE recibieron críticas por su excesivo formalismo, por el amplio horizonte de posibilidades en la combinación de sus variados objetivos y prioridades, y por la falta de concreción de muchos aspectos (Cámara López y Puras Higuera 2007)¹⁰⁶.

Un examen de los veintitrés DEP y de los treinta PAE muestra que trece de ellos no contienen ningún tipo de referencia al tema investigado, siendo siete DEP (Angola, Filipinas, Mauritania, Mozambique, Namibia, Población Saharaui y Senegal) y seis PAE (Chile, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Indonesia, Siria y Sudáfrica).

Para ocho de los países, se hace solamente una consideración general sobre el tema de la violencia contra las mujeres (consultar el anexo 3) y no lo vinculan a ningún sector específico de la cooperación al desarrollo (con la excepción de Brasil). Se aportan datos cuantitativos sobre la violencia sufrida por las mujeres (Ecuador) o se la enmarca dicha violencia en un contexto más amplio de discriminación (Bangladesh, Santo Tomé y Príncipe, Sri Lanka, Timor Oriental, Vietnam), guerra (Sri Lanka) y desplazamiento (Timor Oriental). Asimismo, se mencionan el tráfico de mujeres y niños (Vietnam) y el feminicidio (México) y se hace referencia a la desprotección que sufre la infancia y juventud (sin distinción de género) ante el comercio infantil, la prostitución, la

¹⁰⁴ Durante la vigencia del I Plan Director se intentó sin éxito elaborar documentos similares, siguiendo las instrucciones de la Ley de 1998 y las recomendaciones de la Comisión de Cooperación para el Desarrollo del Congreso de los Diputados (Cámara López y Puras Higuera 2007, 67).

¹⁰⁵ El II Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008 clasifica los países receptores en tres categorías: prioritarios, en los que se debía concentrar el mayor volumen de recursos; con atención especial, aquellos que se encuentran en circunstancias especiales por la necesidad de prevenir conflictos o contribuir a la construcción de la paz, por la debilidad del respeto a los Derechos humanos y del sistema democrático y por crisis derivadas de desastres naturales, o crisis financieras y sociales, y preferentes, que reciben una atención focalizada y puntual y son países grandes y/o no dependientes de la ayuda que poseen sectores de la población en condiciones de bajo desarrollo económico y social.

¹⁰⁶ Con el III Plan Director, se empezaron a elaborar nuevos acuerdos, los Marcos de Asociación País (MAP), cuya principal diferencia respecto a los documentos anteriores sería la participación más activa de los socios locales en su elaboración (MAEC-SECI 2011a). Los primeros MAP fueron publicados a finales de 2010, pero algunos entraban en el período de planificación correspondiente al IV Plan Director, esto es, a partir de 2012. En todo caso, son documentos que exceden el marco temporal priorizado en esta investigación. Hasta el principio de 2015, eran veinte los MAP concluidos: Bolivia, El Salvador, Namibia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Uruguay, Paraguay, Etiopía, Perú, Filipinas, Senegal, Mauritania, Marruecos, República Dominicana, Mozambique, Territorios Palestinos (según fecha de publicación).

pornografía o el trabajo esclavo (Brasil). Hay otros ocho documentos que omiten cualquier análisis previo y únicamente proponen acciones, mayoritariamente en el sector Género y Desarrollo (anexo 4). Tanto Bolivia como Haití, Líbano y Perú proponen medidas contra la violencia de género o para su prevención y tratamiento. Asimismo, los documentos boliviano y peruano priorizan los sistemas jurídico-legales y las instituciones públicas mientras que Colombia y Jordania, enmarcan este trabajo dentro de la gobernanza democrática. Propuestas enfocadas en el cambio cultural y en la sensibilización social aparecen de manera genérica en el caso de Bolivia y Níger, dentro de la misma acción prioritaria. Sudán y Colombia proponen, además, acciones relacionadas con la prevención de conflictos.

En veinticuatro de los documentos geográficos, sin embargo, los contenidos sobre violencia contra las mujeres son un poco más extensos. En general, la atención se centra en la violencia doméstica, intrafamiliar y de género, con algunas referencias a violencias de carácter sexual y a la trata y el tráfico de personas (véase el anexo 5). No obstante, los asuntos abordados y las propuestas formuladas son diversas y en algunos casos sumamente específicas. En ese sentido, Argelia, Argentina, Cabo Verde, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marruecos, Panamá, República Dominicana y Venezuela son los países cuyos diagnósticos se centran únicamente en violencias de género, doméstica o intrafamiliar sin mención a formas más específicas de violencia. Costa Rica y Paraguay también las señalan, aunque aluden a la vez al feminicidio, la prostitución, el abuso sexual y a la trata de personas; al contrario de lo que ocurre en el caso de Guatemala, que hace valoraciones y proposiciones más bien abstractas. Nicaragua y Uruguay apuntan la existencia de violencia física y sexual.

En algunos casos se destaca la falta de información (Cabo Verde y Honduras) y en otros se señala su alta prevalencia o el aumento que se ha ido produciendo en los registros realizados (Argelia, Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Venezuela), pero sin aportar datos al respecto. Asimismo, hay análisis que identifican una preocupación de los respectivos gobiernos por prestar atención al tema (Argelia, Costa Rica, Marruecos y Paraguay) y otras que consideran que el problema aún no tiene el necesario reconocimiento en las políticas e instituciones nacionales (Cabo Verde, El Salvador, República Dominicana Uruguay y Venezuela). Las propuestas de actuación distan de ser detalladas. El énfasis más evidente recae sobre el ámbito institucional, jurídico-legal y de atención a las víctimas (Argelia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Marruecos, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay), aunque también se recomiendan acciones en salud sexual y reproductiva (República Dominicana),

formación de personal de la administración (Argelia) y sensibilización social (Honduras y Venezuela). Argentina es el único país que prioriza grupos específicos (comunidades rurales, indígenas y desfavorecidas, por considerar que viven un aumento de la violencia de género). Túnez, por su parte, enmarca la violencia de género y doméstica en el ámbito de la salud sexual y reproductiva y en la atención prestada por los servicios de planificación familiar y hace especial referencia a cambios y lagunas en el tratamiento legislativo del tema, pero no menciona la mutilación genital femenina, que también se practica en el país. Ya el pronóstico del documento tunecino no posee este acento en salud sexual y reproductiva observado en la parte diagnóstica.

Los documentos de Egipto, Etiopía y Malí merecen ser considerados conjuntamente por sus referencias a la mutilación genital femenina. Egipto se concentra en la violencia de género en general, pero menciona asimismo la alta prevalencia de esa práctica y la necesidad de luchar contra ella de manera horizontal. Etiopía también hace referencia a ambas prácticas, a las que califica de ‘dañinas’ y como problemas sociales y de salud, además de recordar otras formas de violencia a las mujeres, como los matrimonios tempranos y las violaciones. En relación a las propuestas, éstas se vinculan a diferentes sectores, como educación (prevención de la violencia de género), salud (lucha contra la mutilación genital femenina), acceso a agua potable (reducción de la vulnerabilidad las mujeres y niñas a ser atacadas) y género (medidas contra la violencia de género y su vinculación a la lucha contra prácticas nocivas). El documento de Malí menciona únicamente la mutilación genital y la necesidad de seguir apoyando acciones que ya desarrollan organizaciones no gubernamentales en la zona. Para esos tres países, véase el anexo 6.

Para concluir, se puede hacer referencia a los países cuyos documentos contienen peculiaridades en relación al tema de la violencia contra las mujeres. Los documentos de Bosnia-Herzegovina y de la República Democrática del Congo abordan exclusivamente las violencias sexuales contra las mujeres como armas de guerra durante los conflictos en los que se han visto inmersos. En el caso de Bosnia-Herzegovina, el documento se centra en nombrar las formas, fines y amplitud de la violencia, y en el de la República Democrática del Congo se pone el énfasis en las consecuencias para las mujeres y niñas que la sufrieron. En lo que respecta a las propuestas, ambas publicaciones incluyen atención a la víctima en aspectos jurídicos, médicos y psicológicos, y en el caso de Bosnia-Herzegovina, se alude además a acciones internacionales de reconocimiento y protección de las víctimas. Asimismo, si bien el tráfico y la explotación sexual de mujeres, niños y niñas son preocupaciones presentes

en otros documentos, en el de Camboya son cuestiones que tienen mayor peso: se parte de la constatación de que es un problema muy extendido en el país por lo que en las acciones propuestas las mujeres y niñas víctimas de la explotación sexual son reiteradamente citadas como grupos prioritarios de atención. De manera similar, el documento para Albania pone el énfasis en la vulnerabilidad de los niños y especialmente de las niñas, ante la explotación laboral y sexual, y da a conocer otras formas de violencia, como las venganzas familiares relacionadas con las tradiciones locales y los secuestros o abusos que se producen en los desplazamientos escolares. Las acciones propuestas para este país se concentran en la protección de las mujeres que sufren la violencia de género. En el documento de Afganistán, la atención se centra en los actos de auto-inmolación, definido como una forma de suicidio habitual de las mujeres en protesta por los abusos que sufren, y en la atención que se debería prestar a las pacientes que sobreviven a esos sucesos (véase el anexo 7).

De esta revisión se desprende que la planificación geográfica de la cooperación española posee evidentes disparidades en la manera de abordar la violencia contra las mujeres. Algo similar se verá a continuación al analizar los documentos de negociaciones bilaterales país a país.

6.2.3. Las negociaciones bilaterales

En este punto, se examinan las actas de las comisiones bilaterales, documentos oficiales que registran los acuerdos firmados en reuniones formales entre España y los países socios¹⁰⁷, entre los años 1999 y 2011. Señalan intereses y prioridades de ambas partes y pueden constituir pasos previos a la aprobación de documentos plurianuales de planificación pero, en general, no detallan acciones. La lectura de sesenta y nueve documentos vinculados a treinta y siete países o regiones ha permitido comprobar que el tema de la violencia contra las mujeres tuvo mayor presencia en estas negociaciones a partir de la adopción del enfoque GED, aunque no en todos los casos.

Como se puede ver en el anexo 8, menos de la mitad de los documentos (en concreto, veintiocho) menciona la violencia contra las mujeres¹⁰⁸. De las dieciocho

¹⁰⁷ En algunos casos, son grupos de países, como la Comunidad de Estados del Caribe (Caricom) y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

¹⁰⁸ Las otras actas disponibles en la página web de la AECID y cuyos contenidos no mencionan el tema son: 1999: Venezuela; 2000: Chile, Nicaragua; 2001: Ecuador, Guatemala, Paraguay, Uruguay; 2002: Caricom, Jordania, México, Perú; 2003: Argentina, Bolivia; 2004: Cabo Verde, Mauritania, Túnez; 2005:

actas del período que va hasta el final del I Plan Director, solamente dos se refieren a las mujeres como víctimas de actos violentos. De las treinta y cinco actas firmadas en los años correspondientes al II Plan Director, veinte abordan el tema que investigamos. En ese período, además, se usa la expresión ‘violencia de género’ de manera reiterada y surgen referencias a la explotación sexual comercial y a prácticas nefastas contra la salud de la mujer. A partir de la entrada en vigor del III Plan Director las actas disponibles son más escasas y se pueden leer referencias al tema en seis de las dieciséis actas firmadas que han sido analizadas.

Solamente una pequeña parte de estos documentos toma como base una definición previa del problema. Filipinas, Jordania, México y Panamá lo presentan sucintamente y sus propuestas al respecto son igualmente exiguas. Los documentos filipinos mencionan proyectos de atención a mujeres víctimas de malos tratos llevados a cabo por organizaciones no gubernamentales (en 2001, un centro de la Cruz Roja, del que no se ofrecen detalles sobre el tipo de vinculación con la cooperación española); Jordania recomienda el fortalecimiento del Gobierno y de las instituciones civiles; México menciona la prevención, capacitación e intercambio de experiencias sobre el tema, pero no cita quiénes deberían impulsar tales acciones o a quiénes se dirigirían; y Panamá ni siquiera tiene una definición. Los otros tres países que hacen un análisis previo del tema, lo caracterizan como un problema en el sector de la salud (Nicaragua y República Dominicana) o de la educación (Paraguay), con referencias a los contextos o culturas de desigualdad en los cuales se inscribe. En el caso paraguayo, además, se hace referencia a acciones anteriores de la cooperación española en violencia de género y explotación sexual. Pero luego, sólo la primera acta de este país especifica propuestas: protección de ‘mujeres jefas de hogar’ que sufran violencia (identificando este colectivo como uno de los más vulnerables que deben ser atendidos de manera transversal) y continuidad en el funcionamiento de un centro piloto de atención a víctimas de violencia intrafamiliar. En ambos casos, se sitúa la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico. Para Nicaragua y República Dominicana, los marcos de acción son parecidos. Las actas del año 2005 de estos dos países priorizan el sector de salud y el de género, con propuestas transversales (Nicaragua) y de políticas específicas de atención al problema (República Dominicana). Las siguientes actas de ambos países sugieren continuidad en el trabajo contra la violencia de género.

Angola, Argelia, Ecuador, Egipto, Panamá, SICA, 2006: Namibia, Vietnam; 2007: Cabo Verde, Cuba, Guinea Bissau; 2008: Brasil, Etiopía, Malí, Territorios Palestinos; 2009: Argentina, Corea del Sur, Guinea Ecuatorial, SICA; 2010: Bolivia, Ecuador, El Salvador; 2011: Colombia, Costa Rica, Etiopía.

El resto de actas no contiene análisis previos y proponen acciones directamente. Se observan enunciados genéricos sobre cómo combatir la violencia de género (Bolivia, Caricom, Chile) y otros que vinculan ese tipo de acción al impulso de políticas por parte de los organismos con responsabilidades sobre los asuntos ‘de la mujer’ (Costa Rica, Uruguay y Túnez). Lo mismo ocurre en Perú, cuya propuesta también incluye el apoyo a políticas dirigidas a contrarrestar la violencia familiar y sexual contra niños/as y adolescentes y a favorecer la protección de este colectivo en el contexto de un convenio con UNICEF. Para Níger, existen referencias a aportaciones a fondos de Naciones Unidas relacionados con el tema; además, se menciona la continuidad del apoyo para la reducción de ‘prácticas nefastas’ y sus complicaciones. Por último, Colombia, El Salvador y Guatemala hacen hincapié en soluciones centradas en los problemas de seguridad, acceso y atención jurídica a mujeres. En los dos documentos de Colombia, se pone el énfasis en la atención a las poblaciones afectadas por el desplazamiento y el conflicto interno, dentro de las que se incluye a las mujeres.

6.3. Hechos y percepciones sobre la atención a la violencia contra las mujeres en la cooperación española al desarrollo

Considerando que los datos sobre la acción de política española de cooperación internacional al desarrollo, en lo que se refiere a las formas de violencia contra las mujeres, son escasos y dispersos, es necesario seguir profundizando en el análisis de algunos de sus aspectos más relevantes. En ese sentido, interesa tener en consideración las percepciones que expresan los actores de esta política pública al respecto, y aportar una aproximación al volumen de los recursos financieros destinados al problema.

De manera similar a lo observado en el análisis documental realizado en las páginas anteriores, los actores contactados a lo largo de esta investigación identifican el período del II Plan Director de la cooperación española, vigente entre los años 2005 y 2008, como el momento en que aumenta de manera significativa la atención de la cooperación española al desarrollo de la lucha contra la violencia contra las mujeres. La mayoría de las personas entrevistadas relacionan el crecimiento exponencial del interés sobre la cuestión con el contexto político favorable de aquel momento. Se reconoce que durante el Gobierno Zapatero, especialmente durante su primera legislatura (2004-2008), la lucha contra la violencia de género y la promoción de la igualdad de género se habían convertido en temas clave en las diferentes políticas públicas y acciones gubernamentales.

El inicio de esta legislatura socialista estuvo marcado por la aprobación unánime de la ya mencionada ley sobre violencia de género. Otras iniciativas legislativas también aumentaron la atención política a la violencia contra las mujeres en los años siguientes. Mereciendo especial mención los cambios legislativos referidos a la lucha contra la trata de personas en España (la reforma del Código Penal, que introduce por primera vez el delito de la trata de personas en el ordenamiento jurídico español, y de la legislación de extranjería, que antepone la protección de la víctima de la trata de personas a la persecución de la inmigración irregular)¹⁰⁹. Asimismo, es destacable la puesta en marcha de la Orden Europea de protección a las víctimas de violencia de género, siendo el debate para su adopción impulsado por España durante el período que ocupó la presidencia del Consejo de la Unión Europea (enero a junio de 2010)¹¹⁰. Esta Orden prevé extender la aplicación de una orden de protección dictada por la justicia de un país de la Unión Europea a los demás estados miembros, con idénticas o equivalentes características.

Con relación a la problemática de la trata y el tráfico de personas, cabe mencionar también que el Consejo de Ministros aprobó en diciembre de 2008 el Plan integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual (Ministerio de Igualdad 2010b), considerada la primera medida de planificación intersectorial dirigida a dar respuesta a este problema a nivel estatal. Previsto inicialmente para tener una vigencia de tres años (2009 a 2011), fue prorrogado hasta 2012. Su aprobación se enmarca en un momento de desarrollo de la política pública española respecto a la trata y tráfico de personas. No obstante, pese al incremento de iniciativas por parte de los distintos organismos y entidades no gubernamentales empeñados en dar soluciones al problema, aún prevalecía la falta de coordinación y la pugna por obtener recursos (López Sala *et al.* 2011). Además, el Plan se ha mostrado como una respuesta parcial al problema, dado que se centraba solamente en una de las formas de explotación, la sexual, excluyendo, por ejemplo, la trata con fines de explotación laboral, y no utilizó indicadores ni especificó medidas para las víctimas menores de edad. Es, asimismo, importante hacer hincapié en el hecho de que este Plan, así como su sucesor –no

¹⁰⁹ El informe monográfico *La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles* (Defensor del Pueblo 2012) aborda con detalle las innovaciones legislativas relacionadas con esta temática, y reúne los datos oficiales producidos desde diferentes instituciones públicas sobre este tema.

¹¹⁰ La aprobación de la Orden Europea de protección a las víctimas de violencia de género finalmente no ocurrió durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, sino más de un año después, ya que las negociaciones en todo el momento estuvieron llenas de tensión y desacuerdo, como detalla en un artículo la jurista Martín Martínez (2011).

aprobado hasta mediados de 2015, para estar vigente entre los años 2015 y 2018 (Ministerio de Sanidad 2015)–, definieron las directrices para la actuación de la cooperación al desarrollo en relación con este problema. Pese a ello, es difícil precisar hasta qué punto la participación de representantes del MAEC y de la AECID en espacios interministeriales y técnicos de coordinación, previstos en el Plan para realizar su implementación, influyó en la planificación y ejecución de acciones sobre esta temática dentro de la política de cooperación al desarrollo.

Lo que sí parece cierto es que la inclusión de la cuestión de la violencia contra las mujeres en numerosos espacios de la agenda pública española, hizo inevitable que se incluyera en la cooperación internacional al desarrollo. Así, era esperable la visión positiva sobre aquel contexto que manifiestan la mayoría de profesionales y ONGD dedicados a cuestiones de género y a combatir la violencia contra las mujeres antes de que éstas se definiesen como prioridades. La predisposición que ahora mostraban los organismos de la cooperación española al desarrollo a considerar las demandas y prioridades expresadas por profesionales y ONGD se refleja en documentos y directrices oficiales¹¹¹. “Todo eso se vivía con muchísima ilusión, como un período en el que por fin podíamos plasmar los temas que nos parecían importantes” [E15, consultora en género]. Otra profesional de este campo se expresa de manera similar sobre este momento: “mira qué bien, pensábamos nosotras, hay receptividad a nuestras ideas” [E18, dirección, ONGD, especializada en género].

En especial, se señala la elaboración de la *Estrategia de “Género en Desarrollo”* como el hito más relevante para en la incorporación del conocimiento acumulado sobre cuestiones de género en el desarrollo en los planteamientos oficiales de esta política pública. Para las personas entrevistadas no hay duda de que esta situación estaba propiciada por la existencia de espacios de formación especializados como el programa de posgrado impulsado por el Instituto de la Mujer desde mediados de la década de 1990 y otras experiencias pioneras en la introducción de la transversalidad de género en la cooperación española realizadas en algunas de las OTC.

¹¹¹ Las declaraciones públicas de representantes de organismos vinculados a la política de cooperación internacional al desarrollo y relaciones exteriores reforzaban esa sensación de apertura: el entonces jefe de la Oficina de Derechos Humanos del MAEC afirmó en un evento público que “la lucha contra la violencia contra las mujeres constituía una de las principales directrices de la acción exterior de España durante la presidencia del Consejo de la Unión Europea”, a la que correspondió España ocupar durante el primer semestre de 2010 [declaración realizada el 15 de febrero de 2011, durante actividad sobre los feminicidios en Iberoamérica, promovida por la Universidad Carlos III de Madrid con el apoyo de ese organismo estatal].

Como también se ha visto en el análisis documental realizado en páginas anteriores, este documento de planificación para el sector de género de la cooperación española al desarrollo es un marco fundamental para incluir un tratamiento amplio y en profundidad de la violencia contra las mujeres en este ámbito.

Además de la atención política a la violencia contra las mujeres, otro elemento que se suele resaltar es que la institucionalización del enfoque GED coincide con un período de significativa expansión presupuestaria de la política española de cooperación al desarrollo en general y de los sectores de género en particular (véase a continuación un examen de la evolución de los recursos financieros destinados en el período 2001-2010). Casi todos los actores consideran que la financiación concedida a las intervenciones sobre la violencia contra las mujeres aumentó de manera significativa, así como el apoyo a organizaciones de mujeres, feministas y dedicadas a combatir las diferentes formas de violencia. Sin embargo, la dimensión de ese aumento de recursos no se conoce con exactitud, ya que son pocos los actores que tienen una visión amplia de las iniciativas financiadas por la cooperación española sobre la violencia contra las mujeres; la mayoría hacen referencia a iniciativas específicas en el sector de actividad, organización, país o región en la que suelen trabajar.

Asimismo, hay quien cuestiona la existencia de un avance real en este aspecto. Desde una organización especializada en la atención a mujeres víctimas de la trata con fines de explotación sexual y de la violencia sexual en guerras y conflictos armados [*E31, dirección, ONGD, especializada en género*], se considera que la mejora fue ‘sobre el papel’ y que la financiación destinada a este tema, incluso en los años de mayor inversión, fue insuficiente. La dinámica de funcionamiento de la cooperación internacional también puede ser percibida como un lastre para el trabajo en violencia contra las mujeres:

En muchos de los países donde trabajamos las organizaciones, el tema de violencia no está formalmente reconocido (...). Para poder trabajar con las mujeres, hay un tiempo de abrir espacios, generar confianza y conciencia. Generalmente, el tiempo que dura un proyecto, no da pie para todo eso [*E32, técnico, ONGD, especializada en salud*].

Por este motivo, es factible considerar como parte del trabajo sobre violencia contra las mujeres en la cooperación internacional las intervenciones vinculadas a otras cuestiones, como los derechos humanos de las mujeres, el empoderamiento económico o la salud sexual y reproductiva. La atención a estas y otras cuestiones crearían el ‘caldo de cultivo’ necesario para actuar de manera directa contra un problema percibido como demasiado complejo para ser tratado en un primer acercamiento a una determinada

comunidad o grupo social, especialmente si la organización que propone la intervención no tiene suficiente experiencia en ello [*E16, dirección, ONGD, no especializada*].

No es una característica exclusiva de las organizaciones que trabajan sobre violencia contra las mujeres plantear una determinada intervención como una sucesión de fases, para las cuales que se solicita financiación de manera periódica o a diferentes agencias simultáneamente. Sin embargo, es común encontrar en el caso de la violencia contra las mujeres referencias a cómo acciones que en un primer momento no la contemplaban, en fases posteriores desarrollaron actividades y estrategias de prevención, sensibilización o atención sobre las diferentes formas de violencia contra las mujeres, tras percatarse de la importancia de este problema entre la población con la que trabajaban. En cambio, no existe apenas mención del proceso contrario en las entrevistas realizadas e, incluso cuando se produce el caso, la situación de violencia (o de riesgo de sufrirla) puede seguir definiendo a los grupos de mujeres con las que se trabaja como las beneficiarias de intervenciones sobre empleabilidad, incremento de los ingresos domésticos, entre otros temas.

Respecto a la mayor disponibilidad de financiación, es importante mencionar que la puesta en marcha, a partir de 2006, de un nuevo instrumento institucional de cooperación en el ámbito de la AECID, el convenio plurianual con las ONGD, permitió contemplar la realización de trabajos a más largo plazo en los diferentes sectores, incluyendo el de género y desarrollo (Tomás Pérez 2010, 2760-1). En algunos casos, también se aprobaron convenios específicos para tratar la problemática de la violencia contra las mujeres, como se detallará en el capítulo 7.

6.3.1. Una mirada a la financiación destinada a la igualdad de género y acciones sobre violencia

Cuantificar con exactitud el montante que destina la cooperación española al desarrollo a acciones vinculadas a la violencia contra las mujeres constituye una tarea complicada, por no decir casi imposible. El cálculo debe hacerse caso a caso, una vez que se han identificado las intervenciones que tienen como centro esta problemática. Además, está el dilema de decidir cómo deben considerarse las acciones que no están exclusivamente dedicadas al tema de la violencia contra las mujeres, aunque lo incorporan como uno de sus objetivos o ejes de trabajo, especialmente en el caso de las intervenciones con una mayor duración en el tiempo.

En este apartado se presentan y discuten algunas estimaciones del volumen y la distribución de esos recursos, a partir de los datos obtenidos a lo largo de nuestra investigación. También se hace hincapié en el hecho de que muchos aspectos de la inversión destinada a la lucha contra la violencia contra las mujeres quedan invisibles en la cuantificación oficial de los flujos de AOD. Antes, sin embargo, es fundamental conocer la evolución de los recursos destinados a la política española de cooperación internacional al desarrollo en general, y a la igualdad de género en particular, en especial los proporcionados por la AGE, ya que esto ayudará a poner en perspectiva los recursos destinados a la violencia contra las mujeres.

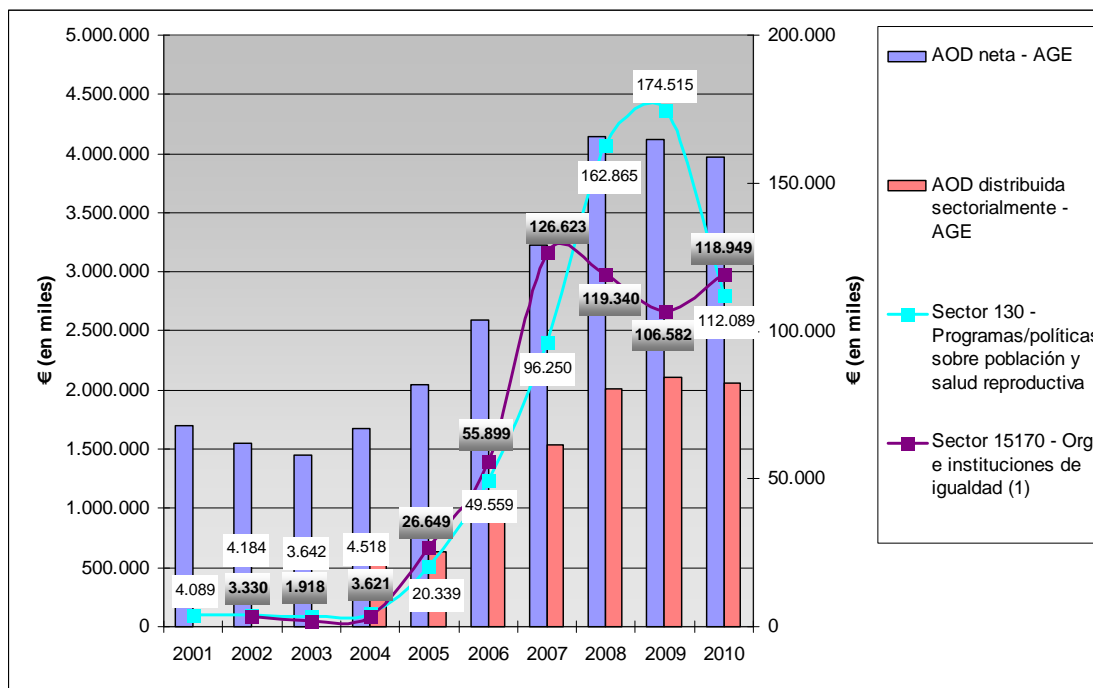
La labor de identificar y cuantificar los datos relativos a la igualdad de género no es menos desafiante que la de precisar el montante destinado a acciones relacionadas con el combate a la violencia contra las mujeres. Además del sector género y desarrollo, habría que tener en cuenta la transversalidad del enfoque de género. Considerando la imposibilidad de contabilizar los recursos destinados a la transversalidad del enfoque de género y a efectos comparativos –en el período anterior a 2005 la transversalidad de género no era un objetivo ni existía un sector específico para ello–, se puede apreciar la importancia concedida al tema por medio de los recursos destinados a dos sectores estrechamente relacionado con la promoción de la igualdad de género, a saber: Programas/políticas sobre población y salud reproductiva y Organizaciones e instituciones para la igualdad de la mujer.

A continuación se presenta la evolución de recursos totales netos de AOD (descontados reembolsos de créditos) y recursos sectoriales netos de AOD (esto es, con un sector específico asignado) en el período 2001-2010 (las barras en el gráfico 1). En ambos casos, es llamativo el crecimiento entre 2005 y 2008, hasta casi doblar el total de recursos disponibles en comparación al período anterior¹¹². Las líneas en este mismo gráfico marcan los montantes destinados a los dos sectores del CAD mencionados anteriormente. Comparando ambas evoluciones, la de AOD neta y la de AOD sectorial por un lado, y la de sectores ‘de género’ del CAD por otro, se aprecia cómo el aumento de AOD disponible fue determinante para la ampliación de los recursos a ambos sectores. Al mismo tiempo, también se observa que en los años de expansión de AOD

¹¹² Tan significativos como el aumento en el volumen de la AOD neta en este período son los aspectos de mejora de la calidad de la composición de esa ayuda –disminución de las proporciones de ayuda no reembolsable y de ayuda ligada (Larrú 2010) –, elementos que, sin embargo, se dejan a un lado en este trabajo para mirar con más detenimiento los aspectos relacionados con los recursos para la igualdad de género.

los recursos para los sectores a los que nos referimos crecieron de forma aún más significativa, duplicándose de un año a otro en alguna ocasión y multiplicándose hasta por diez veces el montante total destinado (en comparación al período anterior a 2005).

Gráfico 1. Evolución de la AOD neta estatal (total, distribuida sectorialmente y sectores relacionados con la igualdad de género), período 2001 a 2010.



Fuente: Elaboración propia, a partir de los Seguimiento de los PACI 2002 a 2010 (MAE-SECIPI 2003c; MAEC-SECI 2004, 2006b, c, 2007k, 2008b, 2009d, 2010c, 2011b).

(1) De 200 a 2005, se considera el anterior subsector '410 Mujer y Desarrollo'.

El informe de la evaluación entre pares que hizo el CAD en el año 2011 sobre la cooperación española, pese a reconocer el esfuerzo para aumentar la asignación de recursos a la igualdad de género a partir de 2005, señala que el porcentaje total de la AOD bilateral de España dedicada a los dos sectores anteriores no llega a la media de la proporción de los demás países donantes, incluso en los años de mayores desembolsos (DAC-OECD 2011, 51). De hecho, Larrú y Tezanos Vázquez (2012, 906) calculan que el apoyo al sector 'Organizaciones e instituciones para la igualdad de la mujer' ocupó el noveno lugar en la distribución del volumen de la AOD entre 2005 y 2009, y lo atribuyen a "una apuesta sectorial estratégica por parte del PSOE que no se había hecho anteriormente". Sin embargo, para los últimos dos años aquí analizados, cuando la política española de cooperación al desarrollo sufrió los recortes presupuestarios derivados de la reciente crisis financiera, ambos sectores relacionados con la igualdad

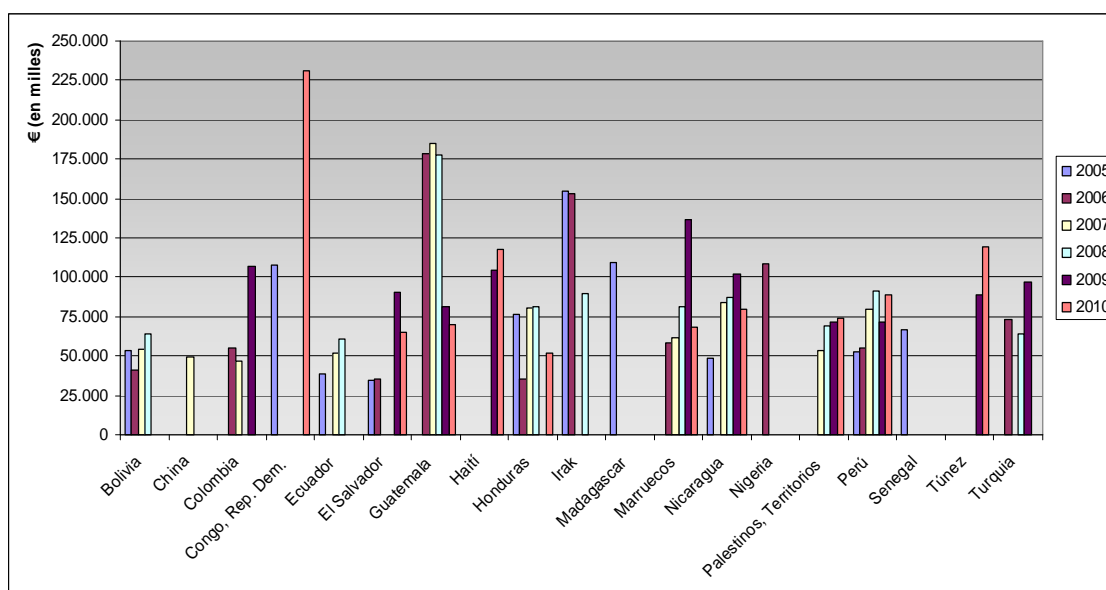
de género sufren con más intensidad la disminución de recursos, ya que sus montantes en 2010 descienden a niveles próximos a de los de tres años antes, algo que no ocurre con el conjunto de la AOD o de la AOD sectorial en ese mismo período.

La AOD española se ha caracterizado por ser geográficamente dispersa y por la falta de continuidad en su propuesta de países beneficiarios de las ayudas, la cual ha ido cambiando con cada nuevo plan director (Gómez Galán y Sanahuja 1999; DAC-OECD 2002, 2007; Larrú 2010; DAC-OECD 2011). Teniendo en cuenta esta evolución, parece interesante observar cómo se comportaron los sectores ‘de género’ (Programas/políticas sobre población y salud reproductiva y Organizaciones e instituciones para la igualdad de la mujer) en relación a esos aspectos. En este sentido, se propone una mirada a los diez principales países receptores de AOD (gráfico 2) y a los diez principales países receptores de los dos sectores del CAD vinculados a la igualdad de género (gráfico 3), en cada año para el período 2005-2010. Aunque casualmente en las dos listas son 19 los países más beneficiados¹¹³, solamente diez de ellos coinciden en ambas y no siempre en los mismos años (Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marruecos, Nicaragua, Perú, Senegal y Territorios Palestinos).

Cuando se realiza una comparación entre los países preferentes de la ayuda española (denominados prioritarios o de asociación amplia, según términos de los II y III Planes Directores) y los más beneficiados por la AOD neta, se puede observar una mayor correspondencia entre ambos tipos en lo que respecta a los dos sectores de género que se están considerando. En los años 2006 y 2010, los diez principales receptores en estos sectores eran todos países prioritarios o de asociación amplia (con la excepción de Colombia, que entra en la categoría de ‘especial atención’ para 2005-2008 y está entre los principales beneficiarios en esos cuatro años), cosa que no ocurre para la AOD neta general en ninguno de los años considerados. En 2005, 2007 y 2008, hay además un único país que no se encuentra en categorías prioritarias (Níger en 2005, Etiopía en 2007 y Kenia en 2008), y en 2009, tres (India, Tanzania y Zambia). En cuanto a la AOD en general, Madagascar, Nigeria y Turquía aparecen entre los diez principales receptores en algunos de estos años, a pesar de no estar en los listados de países prioritarios o de asociación amplia. China y Túnez también aparecen entre los más beneficiados, aunque hayan entrado en la última categoría de países prioritarios en el segundo y en el III Plan Director, respectivamente.

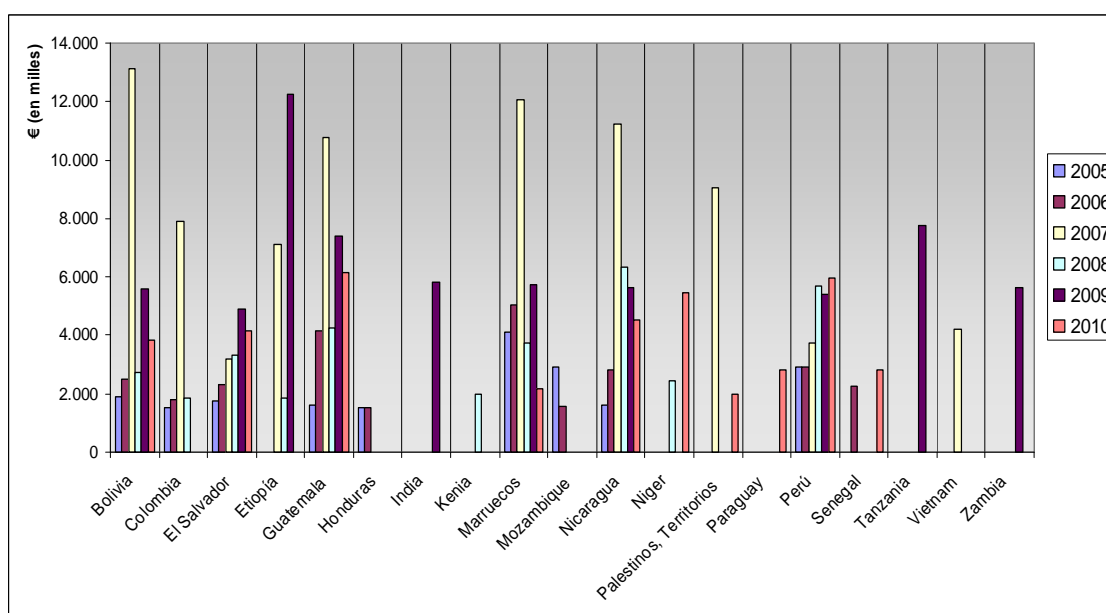
¹¹³ No fue posible considerar el período anterior a 2005, pues los seguimientos de los PACI de esos años no especifican los principales países receptores por sector del CAD.

Gráfico 2. Principales países receptores de AOD neta, período 2005 a 2010.



Fuente: Elaboración propia, a partir de los documentos de Seguimiento de los PACI 2005 a 2010 (MAEC-SECI 2006c, 2007k, 2008b, 2009d, 2010c, 2011b).

Gráfico 3. Principales países receptores de AOD en sectores relacionados a la igualdad de género, período 2005 a 2010.



Fuente: Elaboración propia, a partir de los documentos de Seguimiento de los PACI 2005 a 2010 (MAEC-SECI 2006c, 2007k, 2008b, 2009d, 2010c, 2011b).

De acuerdo con esto, parece que la ayuda destinada a los ‘sectores de género’ (con la excepción del año 2009) es más coherente con la priorización geográfica establecida en la planificación que la distribución de la AOD en su conjunto.

Debido a las limitaciones que tenía medir el compromiso financiero hacia la igualdad de género utilizando solamente los dos sectores del CAD de los que se ha venido hablando, el sistema de ‘marcadores’ que comenzó a implementarse en el 2006 incluyó también la igualdad de género entre los que temas que debían medirse. Este sistema ayuda a identificar iniciativas relevantes en el tema de la violencia contra las mujeres, más allá de la clasificación sectorial que reciba la intervención en cuestión.

En el caso de España, los datos sobre el marcador de género empiezan a hacerse públicos en el 2008¹¹⁴. Las proporciones de AOD bilateral bruta dirigida a promover proyectos que contribuyeran de manera prioritaria a la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y/o a la reducción de la discriminación por razón de sexo, fueron del 6,85% en 2008, 6,65% en 2009, y 6,71% en 2010. Si se consideran las acciones que contribuyen significativamente a la igualdad de género, los porcentajes alcanzaron el 24%, 17,8% y 27,46%, respectivamente (MAEC-SECI 2009d, 2010c, 2011b).

De todos modos, el marcador de género aporta todavía datos poco precisos, ya que no discrimina entre intervenciones específicas de género y las que se dirigen a mujeres como beneficiarias (San Miguel Abad 2009), al estilo de lo que ocurría con el enfoque MED. Teniendo todo esto en consideración, es poco prudente hacer valoraciones sobre el significado de estos datos, más allá de constatar una estabilidad en la proporción de recursos en que la igualdad de género ha sido prioritaria y una mayor fluctuación en el montante de contribución significativa en los últimos tres años del período 2005-2010 para los cuales hay información disponible. Habría que conocer mejor cómo se realiza el proceso de asignación de los marcadores para cada intervención. Incluso la definición de los sectores según los códigos del CAD en lo que se refiere a temas de género, que lleva más tiempo en marcha, es de dudosa fiabilidad, pues sería necesario disponer de directrices más claras para que el personal técnico responsable de su cumplimiento pudiera realizar una interpretación correcta de ellos (Tomás Pérez 2010, 2768).

¹¹⁴ "La recopilación de datos sobre los marcadores se basa en un sistema de índices con tres valores: Principal (primario): aquellos que pueden ser calificados como fundamentales en el diseño e impacto de la actividad y que constituyen un objetivo explícito de la misma. Significativo (secundario): aquellos que pese a su relevancia no son una de las acciones imprescindibles para llevar a cabo la acción. No orientado: cuando la actividad no contribuye al objetivo a estudio" (MAEC-SECI 2009d, 56). El CAD tiene los siguientes marcadores: Equidad de género, Sostenibilidad ambiental, Desarrollo participativo, buen gobierno y derechos humanos, Comercio y desarrollo. La cooperación española, además, tiene dos marcadores propios: Migraciones y desarrollo y Diversidad cultural y pueblos indígenas (MAEC-SECIPI 2012, 73).

Al final y, con respecto a la violencia contra las mujeres, ¿cómo se comportó la AOD española en el período analizado? ¿De qué manera y hacia dónde se dirigieron los recursos? ¿A qué sectores de cooperación estuvo vinculada? ¿Cuál era la importancia relativa de estos recursos destinados a combatir la violencia contra las mujeres?

Las cifras que se presentan a continuación intentan responder a esas preguntas. Han sido calculadas a partir de información inédita, rastreada y contrastada a lo largo de esta investigación. Aquí se está considerando ‘AOD destinada a intervenciones sobre violencia contra las mujeres’ (resumida en la sigla AOD-VCM) a la suma de recursos destinados a proyectos, programas, subvenciones o cualquier otro tipo de intervención de cooperación al desarrollo que tuvo esta cuestión como problema u objetivo central, siempre que ello estuviese explícitamente descrito en el volcado de datos y/o en los documentos de propuestas consultados¹¹⁵. El total de AOD-VCM para el período 2005-2010, considerando siempre y solamente los recursos de esta política a nivel estatal, se muestra en el gráfico 4.

Además, con fines comparativos, se reunió la información disponible sobre los años anteriores, correspondientes al I Plan Director. Para el período 2001-2004, el volcado menciona un total de cuarenta proyectos relacionados con el tema entre 2001 y 2004 (anexo 11). Llama la atención las lagunas existentes en los datos (en muchos casos, no se informa, por ejemplo, el nombre de la organización proponente), así como la importancia de la mencionada convocatoria del Instituto de la Mujer, promotora de diecinueve de esos proyectos. El total de recursos destinados al problema de la violencia contra las mujeres en esos cuatro años fue de cerca de 3,7 millones de euros.

Para los siguientes años, como muestra el gráfico 4, el montante es más significativo. En 2005, la AOD-VCM superaba los 3 millones de euros, alcanzando así casi el total de recursos destinados en los cuatro años inmediatamente anteriores. En 2006, ese total rozó los 25 millones de euros; en 2007, 40 millones de euros. Su máximo estuvo en casi 57,5 millones en 2008 y luego el montante disminuyó a poco menos de 38 y 35 millones en los años 2009 y 2010, respectivamente.

Tan importante como examinar los valores absolutos, es observar los cambios en su distribución, según los tipos de flujo de la AOD (multilateral, bilateral directa o vía

¹¹⁵ Fueron consideradas, por lo tanto, las acciones identificadas en los Anexos 11, 12 y 13 cuyos datos generales están descritos en las Tablas 2, 3 y 4 del capítulo metodológico. Por otro lado, no se tuvieron en cuenta las acciones transversales, que podrían estar en conjunto descrito en el capítulo 2 como acciones de Tipo 2.

ONGD) en el referido período. En ese sentido, es significativo el crecimiento en la proporción de contribuciones multilaterales dedicadas al problema de la violencia contra las mujeres: pasaron de ser prácticamente inexistentes en 2005 a constituir más de la mitad de la AOD-VCM en los tres años siguientes (14,5 millones de euros en 2006, 26 millones en 2007 y otros 32 millones en 2008), para volver a verse reducidas de manera drástica en los últimos dos años considerados (cerca de 16 y 9 millones de euros en 2009 y 2010 respectivamente). Para los desembolsos bilaterales realizados vía ONGD, además de su crecimiento en paralelo al aumento de los recursos hasta el 2008 (1,6 millones de euros en 2005, 7 millones en 2006, 9,5 millones en 2007 y 17 millones en 2008), llama la atención que los desembolsos en los años 2009 y 2010 se mantuviesen relativamente constantes (15,5 y 18,5 millones de euros, respectivamente). Otro punto a considerar es que en todo momento estos desembolsos vía ONGD fueron superiores a las contribuciones bilaterales directas, que también experimentaron incrementos constantes hasta el 2008, pero a un ritmo más lento (1,5 millones de euros en 2005, poco más de 3 millones en 2006, 4,5 millones en 2007 y casi 8 millones de euros en 2008). Asimismo, la reducción en 2009 y 2010 no fue tan abrupta como en el caso de las contribuciones multilaterales, sino que se mantuvieron a niveles parecidos al año anterior a la crisis, es decir, en casi 7 millones de euros.

En relación a la distribución geográfica de esos recursos, la región de América Latina y el Caribe es la que tiene más importancia como destinataria de recursos –algo que, de todos modos, no se aleja de la tendencia histórica del conjunto de la AOD española para el período 2005-2010, pese a la incorporación de nuevos países africanos (Larrú y Tezanos Vázquez 2012)–. Eso se observa tanto en la desagregación de la AOD-VCM por grandes regiones del mundo (gráfico 5), como en la realizada por países, en la que encontramos ocho países latinoamericanos en los doce primeros puestos (gráfico 6). En ambos casos, es significativa la participación de las ONGD, aunque en la distribución por países haya algunas excepciones (en Colombia y en el Congo, ambos con una situación de conflicto interno, prima la cooperación multilateral, mientras que en Guatemala y en Paraguay, los flujos bilaterales directos tienen un peso ligeramente superior a los bilaterales canalizados vía ONGD).

En segundo lugar, aparece África y Oriente Próximo, que sin alcanzar las cifras destinadas a América Latina y Caribe, recibió un flujo creciente de AOD-VCM hasta el año 2008, aunque en los dos años siguientes sufrió la caída más abrupta de todas las regiones. Tiene, además, dos de los países que más recursos recibieron recursos para acciones contra la violencia contra las mujeres (Marruecos y República Democrática del

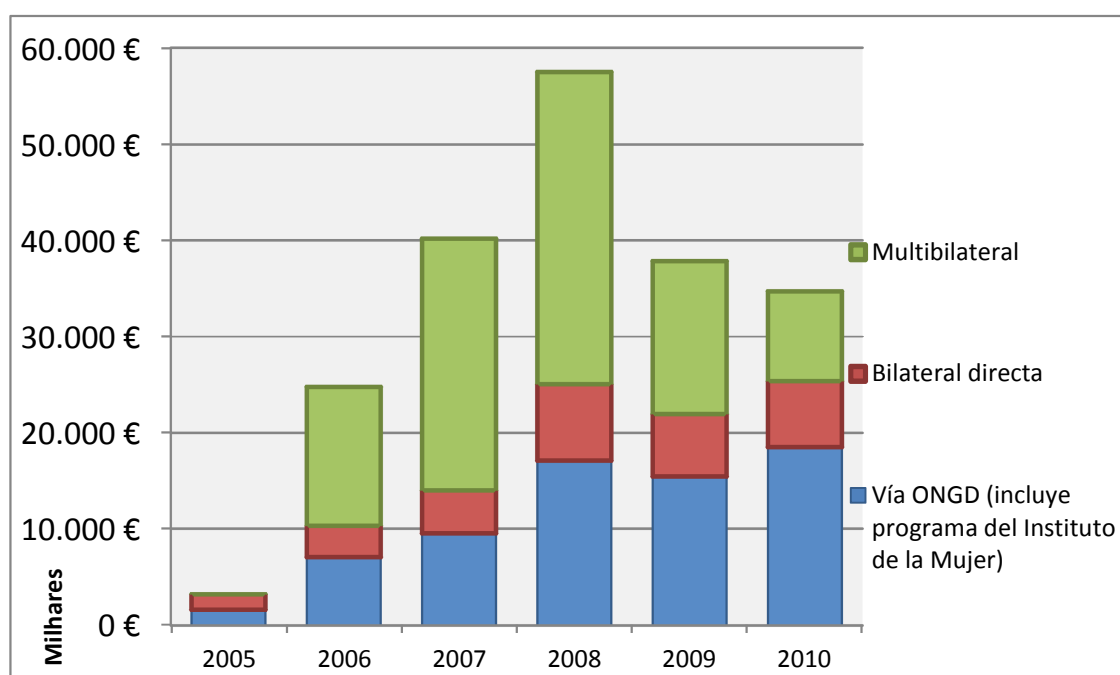
Congo). Finalmente, la AOD-VCM destinada al continente asiático fue la que tuvo el comportamiento más particular: alcanzó su máximo en el 2007 (aproximadamente 8,6 millones de euros) y se mantuvo relativamente constante en torno a la mitad de ese valor en los tres años siguientes. Siempre con recursos inferiores a los destinados al continente africano, Asia tiene dos países que se sitúan entre los que recibieron más recursos para el problema de la violencia en el período, Camboya y Vietnam, siendo en ambos casos la cooperación vía ONGD la más importante.

En la distribución sectorial de la AOD-VCM (gráfico 7), es visible el destaque que ocupa el sector ‘Gobierno y sociedad civil’. Bajo este epígrafe, están clasificadas las acciones de apoyo a instituciones del sector público, de participación democrática, de derechos humanos y de ayuda a organizaciones e instituciones para la igualdad de las mujeres. Asimismo, en los tres últimos años estudiados (2008-2010), otros sectores fueron ganando importancia en el volumen de esos flujos (destacan especialmente los de ‘Prevención y resolución de conflictos, paz y seguridad’, ‘Programas/políticas de población y salud reproductiva’ y ‘Otros servicios e infraestructuras sociales’), pero sin superar nunca el sector de ‘Gobierno y sociedad civil’.

Además del volumen de AOD destinada a violencia contra las mujeres, cuyas características fueron detalladas en los cuatro últimos gráficos, es necesario acercarse a la importancia relativa de esos recursos en el total de la AOD española. Para ello, se propone comparar la AOD-VCM con el total de la AOD neta distribuida sectorialmente en el período 2005-2010, cuya evolución se muestra en el gráfico 1.

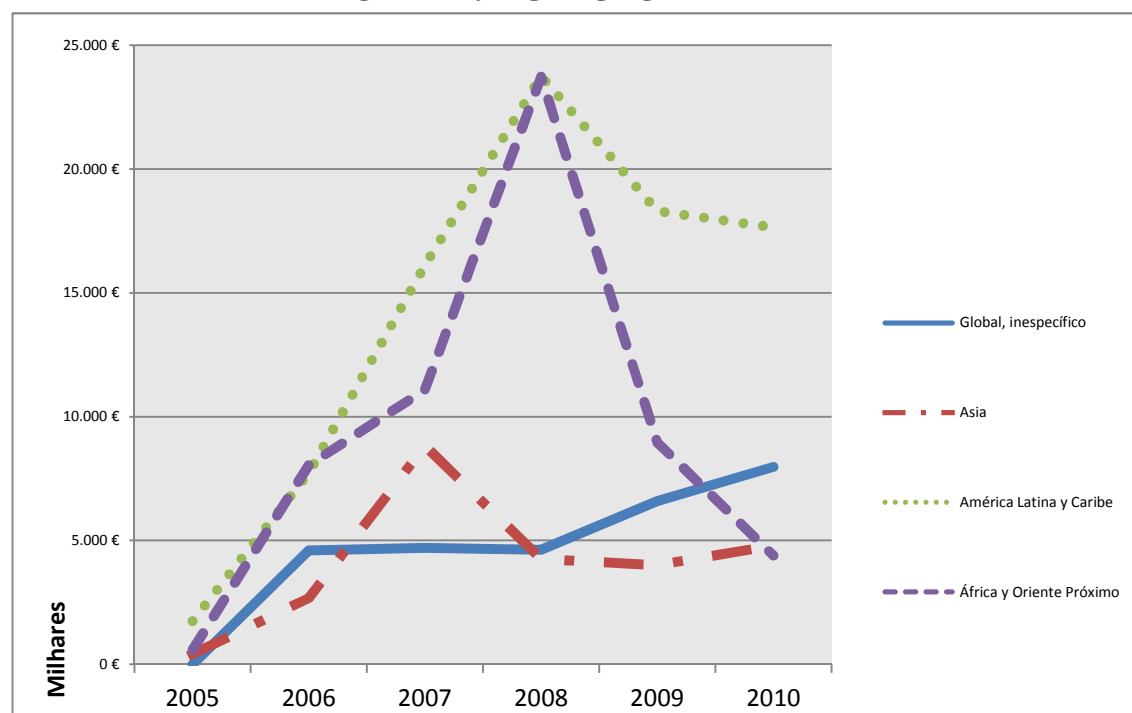
Como ya se ha señalado, falta información para un examen más detallado de los recursos de la AOD destinados a la violencia contra las mujeres en años anteriores, y aun reconociendo que los datos sobre el volumen de AOD-VCM para el período 2005-2010 posiblemente también sean incompletos, la información recopilada permite proponer y elaborar una comparación aproximada, que se espera sea de utilidad a la hora de tener una perspectiva más amplia sobre la cuestión. En ese sentido, y con los datos que se ha podido reunir en esa investigación, se constata que la AOD-VCM en relación a la AOD neta sectorial, por parte de los agentes estatales de la política española de cooperación al desarrollo, evolucionó de la siguiente manera: tenía un modesto porcentaje en el año 2005, representando el 0,51% de los recursos sectoriales; en los tres años siguientes se quintuplicó, alcanzando el 2,57%, 2,60% y 2,8% en 2006, 2007 y 2008, respectivamente, para luego volver a caer en 2009 y 2010, representando el 1,79% y el 1,68%, respectivamente.

Gráfico 4. AOD-VCM, según año y tipo de flujo (nivel estatal).



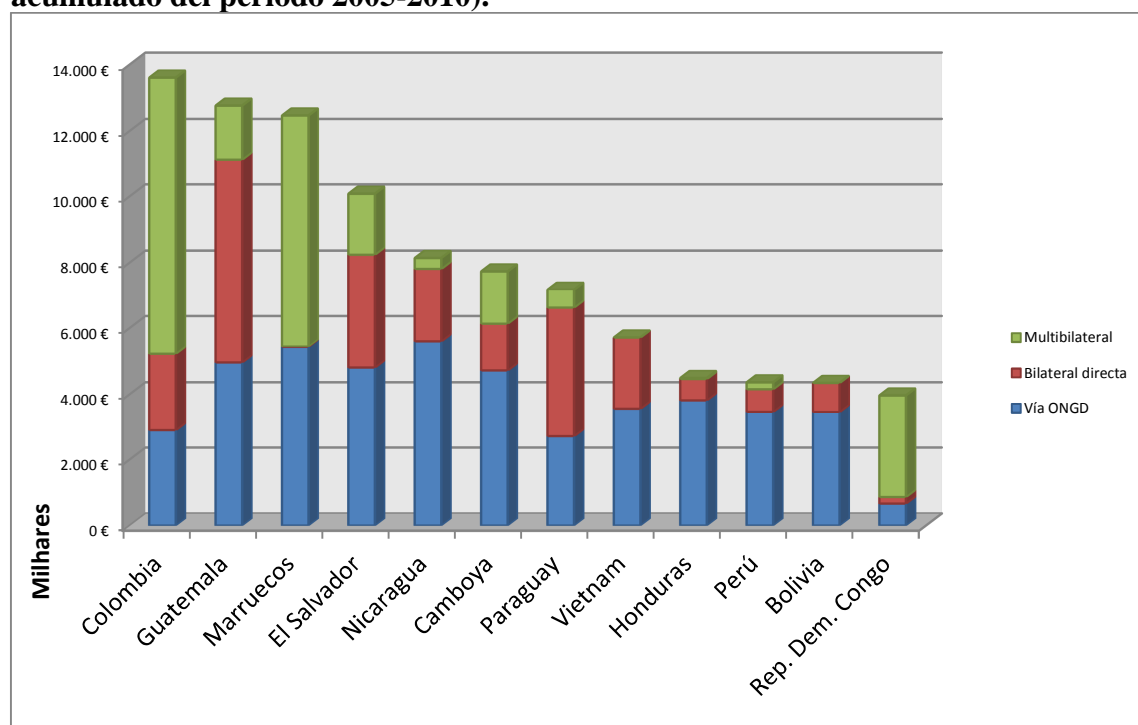
Fuente: Elaboración propia, a partir del banco de datos Coopvidac..

Gráfico 5. AOD-VCM, según año y región geográfica (nivel estatal).



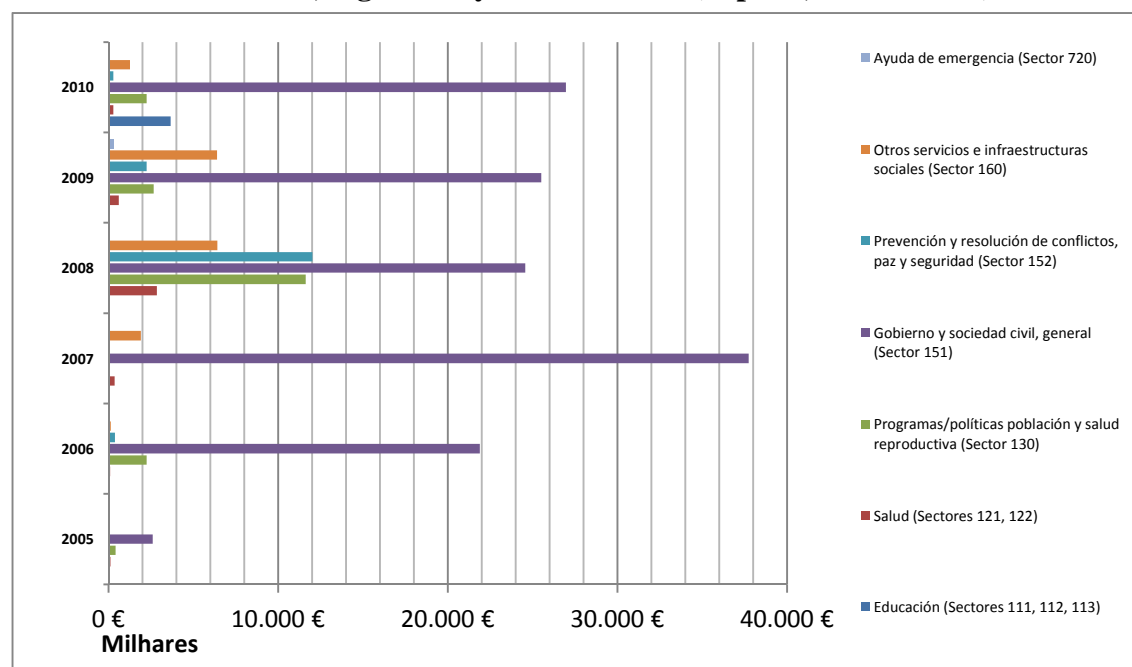
Fuente: Elaboración propia, a partir del banco de datos Coopvidac..

Gráfico 6. Principales receptores de AOD-VCM, según tipo de flujo (nivel estatal, acumulado del período 2005-2010).



Fuente: Elaboración propia, a partir del banco de datos Coopvidac.

Gráfico 7. AOD-VCM, según año y sectores CAD (España, nivel estatal).



Fuente: Elaboración propia, a partir del banco de datos Coopvidac.

6.3.2. Las acciones transversales y otros datos de interés

Es importante señalar que existen acciones dirigidas a la lucha contra la violencia hacia las mujeres en los países receptores de la ayuda oficial española cuya financiación escapa a las estimaciones de AOD-VCM realizadas en las páginas anteriores y que tampoco se ven reflejadas en nuestro Banco de Datos. Entre las innumerables situaciones de este tipo a las que hicieron referencia los actores entrevistados, mencionamos dos: la existencia de intervenciones generalistas que ocasionalmente incluyen la temática de la violencia contra las mujeres entre sus objetivos prioritarios, y la atención al problema en foros y organismos internacionales en los que España tuvo una participación destacada. Ambos elementos son difíciles de medir y es complicado obtener información precisa sobre ellos. Sin embargo, tenerlos en consideración (aunque brevemente y con las limitaciones derivadas de la ausencia de un registro específico en las fuentes consultadas) ayuda a tener una mirada más amplia (y posiblemente más ajustada a la realidad) de la actuación de la cooperación española al desarrollo en lo que se refiere a las diferentes formas de violencia contra las mujeres.

El nivel de inclusión de la violencia hacia las mujeres como cuestión relevante dentro de las intervenciones generalistas difícilmente se puede determinar solamente a través del seguimiento de desembolsos de la AOD. Son acciones cuyo registro es opaco, al menos en comparación con otras intervenciones que pasan por convocatorias competitivas, como los convenios plurianuales con las ONGD y otros instrumentos de la cooperación española mencionados anteriormente. La forma transversal en que se aborda la cuestión no suele proporcionar detalles sobre el enfoque adoptado. Por otro lado, siendo la violencia contra las mujeres un tema complejo y que afecta a un gran número de ámbitos de actuación de la cooperación al desarrollo, no sorprende que esté incluida en muchos de los tipos de acción de la cooperación española, especialmente a partir del momento en que el problema pasa a ser más visible en la agenda de esta política pública. Poder rastrear ese tipo de información depende, fundamentalmente, de la posibilidad de acceder a registros y archivos internos de las correspondientes unidades administrativas y del contacto con actores clave de esta política pública.

Este es el caso de un programa de la AECID para la asistencia técnica y formación especializada de funcionarios públicos de América Latina y el Caribe, en funcionamiento desde 1987 y desarrollado tanto en España como en los cuatro centros de formación que la Agencia posee en las ciudades de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Cartagena de Indias (Colombia), La Antigua (Guatemala) y Montevideo (Uruguay) (MAEC-AECI 2006). El Programa Iberoamericano de Formación Técnica

Especializada (PIFTE) llegó a tener la violencia de género como una de sus líneas de actuación prioritarias¹¹⁶. Además, incorporó en sus acciones periódicas una formación específica sobre la investigación de los crímenes de feminicidio [*E42, técnico, OTC*], especialmente dirigida al personal de fiscalías, juzgados y fuerzas de seguridad de los países de aquel continente [*E05, técnico, AECID, MAEC*]. La realización, dentro de este programa, de cursos de formación sobre la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual [*E11, técnico, Delegación de Gobierno para la Violencia de Género*] se menciona en los informes de seguimiento para la implementación del Plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual (Ministerio de Igualdad 2010a; Ministerio de Sanidad 2011; Ministerio de Sanidad 2012), pero no hay detalles al respecto.

Un ejemplo similar al anterior puede verse en las acciones de cooperación entre terceros países apoyadas por la cooperación española al desarrollo. Este es el caso de las iniciativas impulsadas por la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) y los organismos regionales vinculados a ella para intercambiar experiencias en políticas públicas de atención a víctimas de violencia de género (Xalma 2010, 97).

También se mencionaban en las entrevistas realizadas iniciativas puntuales en las que la AECID fomentó la participación de organismos especializados en la violencia de género en España en la puesta en marcha de acciones de asistencia técnica a instituciones públicas de los países receptores [*E41, dirección, organismo internacional; E42, técnico, OTC*]. El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, creado en el año 2002, es uno de los organismos estatales españoles nombrados por los actores en relación con este tipo de iniciativa¹¹⁷. Sin embargo, la participación de representantes o colaboradores de organismos estatales españoles en actividades de cooperación internacional se recuerda como algo complicado de llevar a cabo, debido a la falta de procedimientos

¹¹⁶ Según comunicación interna entre el Instituto de la Mujer y la unidad de la AECID responsable del PIFTE, con fecha de octubre de 2008 (archivos internos del Instituto de la Mujer, consulta realizada en enero de 2014). Un material de promoción del programa, publicado en 2006, todavía no recogía la priorización de la violencia de género dentro de las temáticas del sector 'género y desarrollo' de los cursos a ser promovidos en los siguientes años (MAEC-AECI 2006, 48).

¹¹⁷ Las memorias institucionales de este organismo reflejan la colaboración con la AECID a partir del año 2007, pero es solamente a partir de 2010 cuando estos documentos dan a conocer las actividades realizadas de manera individualizada, aunque sin detallar temáticas o fechas de eventos a los que acudió su máxima representante (Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014).

administrativos apropiados, incluso habiendo sido reconocida la violencia contra las mujeres como una clara prioridad política [E42, técnico, OTC].

El segundo elemento al que hay que hacer referencia para tener una visión amplia de la preocupación de la cooperación española al desarrollo por la violencia contra las mujeres, es la importancia dada a esta problemática por parte de la representación española en foros y organismos internacionales. Como se ha sugerido anteriormente, se considera que el énfasis conferido a la promoción de la igualdad de género y a combatir la violencia de género en las políticas internas españolas a partir de la primera legislatura de Zapatero se ha extendido al terreno de las relaciones exteriores, en especial en espacios multilaterales. Este elemento será tratado con más detalle en la siguiente sección, juntamente con un repaso de las contribuciones financieras dirigidas a los organismos multilaterales de cooperación en relación a la igualdad de género.

6.3.3. Multilateralismo y ‘diplomacia de género’

Antes de pasar a las consideraciones finales de este capítulo, parece importante intentar ahondar en el lugar que pudo haber ocupado la problemática de la violencia contra las mujeres en la relación de la cooperación española al desarrollo y sus instituciones con organismos multilaterales de desarrollo, ya que la modalidad multilateral es la menos detallada en este trabajo.

Con excepción de las aportaciones de tipo multilateral, resulta prácticamente imposible averiguar a dónde se destinan y cómo se ejecutan el resto de los recursos aportados a fondos y organismos internacionales, esto es, las aportaciones multilaterales de AOD *stricto sensu*. Como ya se ha explicado anteriormente, las contribuciones multilaterales (también llamadas ayuda bilateral vía organismos multilaterales) están clasificadas dentro de la ayuda bilateral, pues el país donante hace contribuciones a países o sectores específicos. La opacidad en el uso de los demás recursos destinados a los organismos multilaterales se debe a la complejidad de sus mecanismos de funcionamiento. Resulta imposible saber, por ejemplo, a qué o a dónde se destinó la contribución española realizada al presupuesto general (*core funding*) del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) o al de cualquier otro organismo multilateral de desarrollo¹¹⁸. Además, los organismos españoles que hacen

¹¹⁸ El problema aquí investigado ocupó un lugar privilegiado en el llamado ‘acuerdo de asociación estratégica’ firmado entre UNIFEM y la cooperación española al desarrollo y negociado entre los años 2009 y 2010. Una de las tres áreas prioritarias a las que se destinaron los recursos concedidos a este

contribuciones a la AOD multilateral no justifican con el mismo nivel de detalle estas aportaciones, aunque sean voluntarias, al contrario de lo que ocurre con las contribuciones de tipo bilateral y multilateral, cuyas propuestas de financiación, en su gran mayoría, fueron incorporadas al banco de datos Coopvidac.

A pesar de la escasez de información detallada, se recuerda como significativa la aportación española a fondos y organismos de género durante en el período 2005-2010. En concreto, se suele destacar que España llegó a ser el primer donante de UNIFEM y sus fondos fiduciarios en los años 2008 y 2009 (UNIFEM 2009, 2010). En este sentido, es importante contextualizar estas aportaciones en relación al conjunto de la AOD española destinada a los organismos multilaterales de desarrollo en general y a los organismos de Naciones Unidas de manera particular¹¹⁹. La tabla 9, a continuación, recoge datos oficiales sobre la distribución de la AOD española destinada al INSTRAW y al UNIFEM (dos de los organismos multilaterales que se ocupaban de la igualdad de género en el seno de Naciones Unidas¹²⁰) y también a los organismos de Naciones Unidas y al conjunto de los organismos multilaterales de desarrollo entre los años 2004 y 2011. Hay similitudes, pero también diferencias, en la evolución de la distribución de estos recursos. En general, el aumento de recursos a los organismos multilaterales de desarrollo, y a los de Naciones Unidas de manera específica, coincide con un crecimiento de las aportaciones al INSTRAW y al UNIFEM. Asimismo, la evolución de la financiación a estos dos últimos organismos mencionados solamente puede ser entendida si se tiene en cuenta que las aportaciones voluntarias a ese tipo de organismos, además de depender de la disponibilidad de recursos y el crecimiento de aportaciones para todos los organismos multilaterales, están sometidas al influjo de otros elementos.

En ese sentido, y de manera coherente a una declarada voluntad de aumentar la participación e influencia de España en foros y organismos internacionales (Equipo

organismo internacional (de tipo multilateral y multilateral) era la reducción de la violencia contra las mujeres y niñas (MAEC-SECI 2010a, 7-10).

¹¹⁹ Los seguimientos de los Planes Anuales de Cooperación Internacional (PACI) presentan pocos detalles sobre el destino y la distribución de esos fondos, además de tratar de manera conjunta los flujos multilaterales y los multilaterales. Asimismo, las aportaciones voluntarias y obligatorias a organismos multilaterales tampoco son justificadas de manera pormenorizada en las actas del Consejo de Ministros que las aprueba.

¹²⁰ Con la creación de la ONU Mujeres, en julio de 2010, se reunieron en una única estructura los organismos de Naciones Unidas relacionados con la igualdad de género: el UNIFEM, el INSTRAW, la División para el Adelanto de la Mujer (DAW) y la Oficina del Asesor Especial en cuestiones de género (OSAGI).

Multilateral de DGPOLDE 2007, 152; Iglesia-Caruncho, Hernando y Del Campo 2007, 28), no es una mera coincidencia que los años de mayor inversión del MAEC al UNIFEM fuesen aquellos en los que la presidencia del Fondo estuvo ocupada por la académica española Inés Alberdi (2008 a 2010). Sin embargo, cuando los recortes presupuestarios derivados de la crisis financiera empezaron a afectar a la cooperación española al desarrollo, especialmente a partir de 2009 como se ha visto anteriormente, los recursos destinados al UNIFEM sufrieron una reducción más drástica que el grupo de organismos multilaterales Naciones Unidas y el de organismos multilaterales de desarrollo (OMUDES) en general, como muestra la tabla 9.

Tabla 9. Distribución de la AOD bruta española canalizada a través de UNIFEM, INSTRAW, Naciones Unidas y OMUDES (millones €) (2004-2010).

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
UNIFEM	0,1	1,2	8,2	10,6	74,1	32,1	33,4
INSTRAW	0,06	0,06	0,06	0,06	4,79	1,08	4,79
TOTAL - NN.UU.	38,5	103,5	308,6	931,5	905,1	714,2	803,9
TOTAL - OMUDES	866,8	1.016,0	1.485,1	2.235,5	2.756,7	2.613,9	2.497,9

Fuente: Elaboración propia, a partir de MAEC-SECI (2004); (2006c); MAEC-SECI (2007k, 2008b, 2009d, 2010c, 2011b) y de Actas de Consejo de Ministros.

También se puede destacar el incremento de las donaciones voluntarias al INSTRAW, que llegó a recibir más de 10 millones de euros entre 2008 y 2010, frente a la contribución anual de cerca de 60 mil euros que el Instituto de la Mujer hacía desde algunos años¹²¹). Esta aportación excepcional se trataba de un compromiso plurianual asumido con este organismo en 2008 (por lo tanto, antes del inicio de la crisis financiera y presupuestaria que afectó al país y a la política de cooperación al desarrollo). Estas contribuciones, además de convertir a España en el principal donante al presupuesto del organismo, habrían sido decisivas para continuar con sus actividades en aquel momento, al menos según lo narrado por dos funcionarias con experiencia en el trato con

¹²¹ Los valores mencionados aparecen de manera desglosada en las Actas del Consejo de Ministros de las siguientes fechas: 18/11/2005, 26/06/2006, 27/10/2006, 27/07/2008, 23/10/2009, 02/07/2010 y 24/09/2010.

organismos internacionales para la igualdad de género desde organismos públicos españoles [E01, técnico, IM; E14, técnico, DGPOLDE, MAEC].

Más allá de las cifras y de lo que puede ser contabilizado en los flujos de la AOD, en sus diferentes modalidades e instrumentos de cooperación, hay en la agenda internacional española aspectos relacionados a la violencia contra las mujeres y la igualdad de género que son de más difícil apreciación. En las entrevistas realizadas durante esta investigación (principalmente con representantes de organismos públicos vinculados a la cooperación española y de organizaciones de la sociedad civil cercanas al partido que gobernaba en el período analizado, el PSOE) se destaca la necesidad de tener en consideración, en el ámbito de las relaciones exteriores y multilaterales de España, otras iniciativas sobre estas dos temáticas. Se mencionan, especialmente, la promoción de encuentros con organizaciones y activistas feministas latinoamericanas, los llamados Diálogos Consonantes, y la puesta en marcha de la Red de Mujeres Africanas y Españolas por un Mundo Mejor. Las iniciativas sobre la temática de la igualdad de género que contaron con recursos de la política española de cooperación internacional al desarrollo y de sus organismos fueron muchas y muy diversas, por lo cual resulta difícil abarcar todas ellas en esta investigación. Otras entrevistadas [E12; E22; E50] mencionaron, por ejemplo, eventos organizados en España que reunieron a mujeres líderes de América Latina y el Caribe promovidos por la Fundación Carolina, también con recursos de organismos españoles de cooperación al desarrollo, que además habrían servido como espacio para la planificación de los Diálogos Consonantes.

La iniciativa de los Diálogos Consonantes habría surgido a partir del interés de algunas organizaciones del movimiento feminista latinoamericano por conocer las prioridades que la cooperación española al desarrollo empezaba a mostrar en relación a la igualdad de género [E14, técnico, DGPOLDE, MAEC]. La Red de Mujeres Africanas y Españolas por un Mundo Mejor se realizó en alianza con organizaciones de la sociedad civil y el UNIFEM, organismo que ostentaba la secretaría técnica de la Red.

Dicha Red fue definida como “un espacio de interacción y hermanamiento entre mujeres, organismos y organizaciones africanas y españolas”, con objetivos dirigidos a reducir la pobreza femenina, acabar con la violencia contra mujeres, invertir la tendencia de propagación de enfermedades sexuales como el VIH/SIDA entre la población femenina y, por último, alcanzar la igualdad de género en situaciones de gobernabilidad democrática en épocas de paz y de guerra (MAEC-SECI 2010a, 22). Esta acción quedó muy identificada con la figura personal de la entonces vicepresidenta primera de Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y se reconoce

como una operación más del Gobierno del aquel momento para buscar un acercamiento a las instituciones de los países africanos, en este caso a mujeres políticas, activistas y personalidades destacadas, además de organizaciones de mujeres y organismos públicos de esos países que se ocupan de las cuestiones de género.

En relación a los Diálogos Consonantes, las personas entrevistadas que los citaron evaluaron como positivo el legado de sus encuentros, especialmente por dar a conocer a las organizaciones latinoamericanas participantes los instrumentos españoles de cooperación internacional al desarrollo, abrirles la posibilidad de participar en las distintas convocatorias de proyectos, incluyendo la cooperación descentralizada y la europea [*E05, técnico, AECID*], además de tomar parte en la discusión mundial sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo [*E14, técnico, DGPOLDE, MAEC*].

Con respecto a la Red de Mujeres Africanas y Españolas por un Mundo Mejor, ha resultado extremadamente difícil conseguir rastrear información al respecto, aunque algunos artículos en publicaciones especializadas de autoría de sus promotoras traten de explicar la iniciativa (véase, por ejemplo, Alcalde (2007)). En el momento en que se desarrollaba esta investigación la iniciativa ya había concluido (el último de sus encuentros tuvo lugar en abril de 2011) y las personas que habían estado en su comité de coordinación y que fueron entrevistadas para esta investigación mostraron sentirse incómodas al ser preguntadas sobre la Red y los resultados logrados con ella. Asimismo, en el examen del seguimiento de los Planes Anuales de Cooperación Internacional (PACI) es posible identificar al menos tres desembolsos al UNIFEM y uno a la Fundación Carolina, con el propósito específico de apoyar las actividades de la Red (un total aproximado de 4,8 millones de euros, distribuidos entre los años 2006 y 2009).

En todo caso, ni la Red de Mujeres Africanas y Españolas por un Mundo Mejor ni los Diálogos Consonantes presentaron de manera pública una sistematización de los resultados alcanzados. Aunque algunas intervenciones financiadas por la AECID en los años siguientes a los encuentros de ambas iniciativas las mencionan, es difícil apreciar si su aprobación estuvo influenciada por la participación de la organización proponente de estos eventos. Sería arriesgado, por lo tanto, hacer una valoración del impacto que pudieron tener en los instrumentos de la cooperación española al desarrollo para incorporar sus demandas y preocupaciones.

6.4. Algunas consideraciones finales

Por todo lo anterior, es posible afirmar que la violencia contra las mujeres, en cualquiera de sus manifestaciones, no constituye un tema de especial interés en la planificación oficial de la cooperación española al desarrollo hasta el año de 2004. Además, se observa que desde las primeras etapas de esta política pública, la forma de abordarla no ha sido uniforme. Incluso en el período en el que el problema gana más atención, hay limitaciones evidentes en diferentes aspectos.

En la Ley de Cooperación y en el I Plan Director 2001-2004, el tema no llega a ser mencionado, ni tampoco en los PACI 2001 y 2002 ni en los dos documentos del período que hacen balance de las acciones más destacadas de la cooperación española en aquel momento. La Estrategia para la promoción de la democracia y del Estado de Derecho, correspondiente al sector que contemplaría las acciones de género, reconoce la violencia contra las mujeres como un problema (aunque no se indague sobre sus motivos o contextos), pero esta consideración no se transforma en una propuesta de acción. La Estrategia para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es el documento del período que más atención dedica al tema, pero aparece al final de la legislatura 2001-2004 y apenas se menciona en entrevistas o se cita en la documentación consultada. Es el único de ese período que tiene en consideración instrumentos internacionales relacionados con la igualdad de género y la violencia contra las mujeres, como la CEDAW (1979), la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (1993) y la Plataforma de Acción de Beijing (1995). No obstante, no se menciona ninguna medida de protección a mujeres y niñas en situaciones de conflictos armados, tal como recomienda a los gobiernos y a las organizaciones de la cooperación al desarrollo la Resolución 1325 del Consejo de las Naciones Unidas (2000).

Otro aspecto que merece destacarse en este primer período analizado (2001-2004) es la existencia de una única referencia a la figura de la persona que comete la violencia ('el maltratador'). Esta referencia se encuentra en el primer documento de la cooperación española sobre igualdad de oportunidades (MAE-SECIPI 2004a), y solamente se refiere a crímenes sexuales y como posible receptor de ayuda especializada brindada por la cooperación, al considerarlo un sujeto que también requiere atención médica especializada. No se parte de un diagnóstico sobre quién comete o quién sufre tal violencia. Las causas de este tipo de actos también constituyen otra de las ausencias en los documentos de la cooperación española hasta 2004. No hay ningún intento de relacionar la violencia que sufren mujeres y niñas con un contexto

más amplio de desigualdad entre mujeres y hombres. La única razón considerada relevante para estos actos es el alcoholismo, descrito como un factor que contribuye a que se produzcan. En definitiva, se puede concluir que, en ese período, la política española de cooperación internacional al desarrollo entendía la violencia contra las mujeres como algo exclusivo del ámbito privado y de las relaciones de pareja, en el cual importaban poco cuestiones estructurales.

A partir de 2005, crece de manera sustancial el tratamiento de la cuestión de la violencia contra las mujeres en los documentos orientativos y de planificación de esta política pública. Los dos planes directores siguientes reconocen y trasladan a objetivos y estrategias los instrumentos internacionales de lucha por la igualdad de género y contra la violencia. Los documentos anuales de planificación también proponen acciones en determinados países y para algunos temas, aunque ignoran parte de las acciones propuestas por los distintos planes directores sobre violencia.

Los documentos sectoriales, especialmente el dedicado al tema de género, profundizan en un tratamiento multidimensional de la cuestión y plasman sus orientaciones en objetivos y líneas de actuación. Con relación a las víctimas o potenciales víctimas, los documentos citan diferentes grupos vulnerables, lo que contribuye a dar visibilidad a situaciones a las que la cooperación al desarrollo podría dedicar más atención. Se mencionan a las niñas, a las víctimas de la trata de personas y de la explotación sexual, a las víctimas de prácticas nocivas, a las mujeres y niñas en situaciones de conflictos armados, a las mujeres indígenas y a las trabajadoras sanitarias. Hay que señalar, además, que en las actas de las comisiones mixtas, el tema de la violencia contra las mujeres aparece con más frecuencia a partir del II Plan Director, siendo las referencias no solo más abundantes, sino también más diversas, pues contemplan formas de violencia diferentes y no sólo las vinculadas al ámbito privado, como ocurría anteriormente.

No obstante, al referirnos a las ausencias destacaríamos, en primer lugar, algunas de las formas de violencia contra las mujeres omitidas en los documentos analizados. Al no ser mencionadas en objetivos o líneas de actuación, se puede entender que la cooperación española al desarrollo no tiene entre sus prioridades determinadas formas de violencia contra las mujeres presentes en instrumentos internacionales, como la esterilización forzada, el aborto forzado o la utilización coercitiva o forzada de anticonceptivos. En este mismo sentido, hay que destacar que la vinculación entre formas específicas de violencia contra las mujeres y violación de sus derechos sexuales y reproductivos se hace preferentemente en relación a la mutilación genital femenina,

aunque también hay una mención en la Estrategia Género en Desarrollo al infanticidio de niñas y a la determinación prenatal del sexo, sin que se proponga una acción específica para contrarrestarlo. Tampoco se hace hincapié en señalar el Estado como perpetrador o tolerante con las violencias, una de las tres dimensiones recogidas en la definición de violencia contra las mujeres que da la Plataforma de Beijing, aunque los documentos analizados mencionen formas de violencia para las cuales la acción del Estado, sus instituciones y funcionarios, es indispensable. Entre estas formas de violencia podrían incluirse las guerras, los conflictos armados, las situaciones de violencia por parte de agentes o funcionarios estatales, como la policía y las fuerzas militares, entre otros, o en dependencias públicas como hospitales, escuelas y prisiones, y prácticas que se llevan a cabo con el beneplácito de los gobiernos y autoridades (Pillay 2002, 61).

Respecto a cómo se han distribuido los recursos para la igualdad de género y para combatir la violencia contra las mujeres, es oportuno volver a destacar la dificultad que todavía existe para lograr una contabilización precisa de los mismos. En este sentido, aunque las estimaciones de AOD-VCM presentadas en este capítulo puedan estar incompletas por los motivos ya discutidos, retratan con claridad un desplazamiento en la atención de la cooperación española al desarrollo en el período considerado, pasando de tratarse de un tema para el cual apenas se registraba la existencia de recursos específicos a ocupar un lugar destacado, tanto en la cooperación bilateral (directa y vía organizaciones no gubernamentales) como en los recursos destinados a organismos multilaterales de desarrollo.

CAPÍTULO 7 - ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS: ENFOQUES DE ACTUACIÓN RESPECTO LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Capítulo 7 – ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS: ENFOQUES DE ACTUACIÓN RESPECTO LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Este séptimo capítulo presenta y analiza las propuestas de intervención relacionadas con la violencia contra las mujeres de las que se recibió documentación durante el transcurso de esta investigación. El capítulo está dividido en cuatro secciones principales, estando la primera de ellas dedicada a señalar los aspectos generales del conjunto de propuestas. La segunda y más importante de las secciones de este capítulo expone, a partir de un exhaustivo análisis inspirado en la propuesta de los marcos de interpretación aplicados a las políticas públicas, tres enfoques adoptados por la cooperación española al desarrollo en lo que respecta a las diferentes formas de violencia contra las mujeres. Aunque cada uno de ellos se detalla de manera separada y sucesiva, se sigue una estructura similar respecto en sus elementos más importantes. La tercera sección evidencia algunas características ausentes o poco destacadas en el conjunto de propuestas analizadas, tanto en lo que referente a conceptos y debates teóricos sobre la cuestión de la violencia contra las mujeres como a orientaciones y prioridades de la política española de cooperación al desarrollo como un todo. Finalmente, se concluye con una discusión sobre los hallazgos más significativos del análisis realizado.

7.1. Panorama general de las intervenciones relacionadas con la violencia contra las mujeres

Las propuestas de intervenciones financiadas por la cooperación española al desarrollo en el período analizado (2005-2010) abarcan facetas bastante variadas del problema de la violencia contra las mujeres. Además de la diversidad de contenido, que se abordará en detalle a continuación, es necesario tener presente que el conjunto de acciones que se ha podido examinar en esta investigación incluye una copiosa lista de actores involucrados en la planificación y la ejecución de las diversas actividades. Además, constituye un grupo de propuestas de volumen económico, importancia y duración variados, conformando, por lo tanto, unidades analíticas bastante dispares. Por este motivo, ha sido necesario cotejar cuidadosamente estas propuestas.

feminicidio, reproductivos o prostitución. Asimismo, son llamativas las reiteradas referencias a la infancia y la juventud (niñas, niños, infantil, menores, adolescentes, juvenil), y la asociación de la violencia a otros problemas y contextos sociales en la denominación de las violencias priorizadas en estas propuestas de intervención (destacan cuestiones como la discriminación, las guerras, los conflictos armados, el desplazamiento forzado y la inseguridad ciudadana en general).

Al observar el resto de las respuestas a las preguntas-guía recogidas en el banco de datos, la sensación de diversidad aumenta todavía más. Las intervenciones analizadas reúnen distintas variables clasificatorias, entre las cuales se podría mencionar aquellas relacionadas con: i) objetivos o campos de actuación (prevención, atención, reparación o sanción, además de planteamientos transversales para la formación y la sensibilización de todo tipo de público); ii) sujetos destinatarios (hombres, mujeres, grupos mixtos, colectivos sociales específicos o definidos según características demográficas); iii) actores (organismos públicos, entidades privadas, medios de comunicación, organizaciones y asociaciones locales y comunitarias de todo tipo y composición, incluyendo organizaciones de mujeres y organizaciones feministas); iv) sectores gubernamentales involucrados (policial, judicial, asistencial, sanitario, educativo, de políticas de igualdad, juventud, infancia, etc.); v) contextos de intervención (comunidades indígenas y afrodescendientes, contextos rurales y urbano-marginales, cárceles de mujeres, campos de personas desplazadas y refugiadas, etc.), distribuidos por casi medio centenar de países y regiones en las que actuaba la cooperación española al desarrollo en el período 2005 a 2010.

Considerando todo esto, se pensó inicialmente que la organización de las intervenciones en grupos menores (según el principal tipo de violencia que abordaban) aportaría elementos suficientes para la identificación de los enfoques predominantes. Sin embargo, no ocurrió así y la reorganización temática que hubo que hacer de estas intervenciones permitió trabajar con selecciones algo más homogéneas y poner de manifiesto otros elementos detallados a continuación.

En primer lugar, se constató la preponderancia de las propuestas dirigidas a abordar de manera prioritaria las violencias ejercidas por la pareja (o expareja), familiares y conocidos de las víctimas, sin importar cómo se las denominara. Esta constatación demostró ser verdadera para cualquiera de los procedimientos administrativos utilizados, tanto si se consideraba el número de acciones aprobadas

como si se lo que se tenía en cuenta era el volumen de recursos destinados¹²⁴. Asimismo, un número significativo de acciones se centra en otros ámbitos que quedan fuera de los límites doméstico o íntimo y pueden dividirse a su vez en otros tres subgrupos: i) trata y explotación sexual y laboral, ii) violencias incluidas dentro de las ‘prácticas nocivas’, especialmente la mutilación genital femenina, y iii) contextos de conflictos armados, postconflictos e inseguridad ciudadana extrema.

La tabla 10, a continuación, resume la distribución de las cuatro temáticas anteriormente mencionadas (violencia ejercida por pareja o expareja, trata y explotación sexual y laboral, prácticas nocivas y violencia en contextos de conflictos) según modalidades de cooperación o procedimientos administrativos utilizados, así como los tres enfoques en la forma de abordar la violencia contra las mujeres que se han identificado en este trabajo, los cuales se presentan y analizan a continuación.

Una lectura descriptiva de los datos reunidos en el Coopvidac, a la cual hace referencia de manera resumida en las páginas anteriores, ya resulta de por sí interesante por presentar información hasta ahora inédita, tanto para los análisis sobre cooperación internacional al desarrollo como para los estudios sobre violencia contra las mujeres. Sin embargo, está lejos de agotar el potencial analítico que este conjunto posee. En este sentido, inspirándonos en la propuesta de los marcos de interpretación aplicados a las políticas públicas, se ha pretendido dar un paso más e identificar qué enfoques existen en estas propuestas de acción¹²⁵. Se ha analizado cómo esta política pública en su conjunto abordó la problemática de la violencia contra las mujeres, no en sus intenciones abstractas o planteamientos planificadores (como aquellos revisados en el capítulo anterior), sino en las propuestas finalmente llevadas a cabo en los diferentes países receptores de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española.

Para ello, se han tratado de identificar los enfoques existentes en relación a este problema, tomando como punto de partida las respuestas a las preguntas-guía del llamado marco diagnóstico (véase la tabla 6 en el capítulo 2). En especial, se presta atención a las respuestas en las que se trata de justificar la necesidad o conveniencia de

¹²⁴ Con procedimientos administrativos, nos referimos a los diferentes instrumentos y modalidades de cooperación mencionados en el capítulo anterior y resumidos en la ilustración 2.

¹²⁵ Como se ha tratado de explicar en el capítulo metodológico, pese a hacer un uso parcial de esta perspectiva analítica, la utilización de los marcos de diagnóstico y pronóstico en el examen del contenido del banco de datos ha proporcionado una manera sistemática de acercarse a estos datos y ha permitido identificar con suficiente claridad tres enfoques sobre violencia contra las mujeres en las intervenciones de la cooperación española al desarrollo en el período aquí considerado.

la intervención de la política pública (por qué el tipo de violencia identificada es un problema que merece atención), sus causas (qué la motiva, la origina o la extiende), así como las dimensiones relacionadas con la igualdad de género (qué aspectos institucionales, sociales o de conducta relacionados con las desigualdades de género contribuyen al entendimiento de la violencia contra las mujeres) y los roles atribuidos a personas o grupos en la perpetración de la violencia (fundamentalmente, quiénes son las personas o grupos identificados como causantes y víctimas de la violencia en cuestión; ocasionalmente también se identifica quién es responsable de la existencia de este fenómeno y quién lo identifica como un problema).

Tabla 10. Distribución del número de intervenciones analizadas, según enfoques adoptados y tipo principal de violencia abordada

	1. Enfoque Feminista	2. Enfoque Naturalizado	3. Enfoque Indiferente
Violencia en la pareja, íntima o familiar	Inst. de la Mujer: 37 CAP/Proyectos: 40 Convenios ONGD: 11 Subv. bil. directas: 7 Multilateral: 9 Coop. Delegada: 1 Coop. Cult. y Cient.: 1	Inst. de la Mujer: 3 CAP/Proyectos: 12 Convenios ONGD: 2 Subv. bil. directas: 9 Multilateral: 1 Jóvenes Cooperantes: 3	CAP/Proyectos: 3 Convenios ONGD: 2
Trata y explotación sexual y laboral	Inst. de la Mujer: 2 CAP/Proyectos: 7 Convenios ONGD: 1	Inst. de la Mujer: 1 CAP/Proyectos: 9 Subv. bil. directas: 2 Multilateral: 2	Inst. de la Mujer: 3 CAP/Proyectos: 6 Convenios ONGD: 2 Multilateral: 1
Prácticas nocivas	CAP/Proyectos: 15 Multilateral: 1	CAP/Proyectos: 2	
Conflictos armados, posconflicto, inseguridad ciudadana	Inst. de la Mujer: 5 CAP/Proyectos: 14 Multilateral: 10	Inst. de la Mujer: 2 CAP/Proyectos: 4 Subv. bil. directas: 1	CAP/Proyectos: 4 Multilateral: 3
Número total intervenciones	161 + 1 (convenio con los 4 temas a la vez)	53	24
Total €	81.857.075 €	13.737.470 €	18.547.675 €

Fuente: elaboración propia, a partir de Bando de Datos Coopvidac.

Asimismo, el análisis de estos enfoques se extiende al marco de pronóstico con el propósito de identificar cómo se trabaja en las respectivas intervenciones: qué se proponen hacer (específicamente qué definen como objetivos, estrategias y prioridades), con quién y sobre quién actuar. Para facilitar y acelerar el proceso de codificación de este extenso y diversificado contenido sobre el ‘¿qué hacer?’ y ‘¿qué estrategias utilizar y qué prioridades abordar?’, reunido en las respuestas a estas dos preguntas-guía del pronóstico, se ha considerado imprescindible partir de un listado inicial de tipos de acciones posibles contra la violencia contra las mujeres. Para ello, se utilizó un informe publicado por PNUD y ONU Mujeres (2013) sobre políticas y planes en países latinoamericanos y caribeños en el que se identifican cinco dimensiones de acción (prevención, atención, sanción, reparación y transversalidad) para las cuales se desglosan una serie de intervenciones específicas. Según se avanzaba en la codificación de esta parte del material, fue necesario introducir algunas nuevas acciones específicas no contempladas en el listado inicial. Para el listado finalmente utilizado en la codificación de esta parte del contenido del banco de datos, consultar el anexo 10.

Partiendo de que la formulación de cada una de las propuestas debía (al menos idealmente) mostrarse coherente con las estrategias y objetivos enunciados en los documentos de planificación de esta política pública vigentes (véase ilustración 2, en el capítulo 6), no se deberían esperar grandes discrepancias entre ellas a la hora de enmarcar este problema. La cuestión es que, ya como se ha señalado, la orientación (si es que se puede hablar en singular en este caso) de la política española de cooperación al desarrollo respecto a la violencia contra las mujeres es prolija, extensa y se encuentra dispersa en varios documentos, pese a concentrarse en todos los casos en la estrategia sectorial sobre género y desarrollo (MAEC-SECI 2007a). Considerando todo lo anterior, así como la complejidad de la problemática, no parecía acertado partir de una premisa opuesta, es decir, esperar que el conjunto de acciones analizadas asumiera una perspectiva única y homogénea. Por lo tanto, más que destacar las contradicciones y oposiciones, se estimó necesario centrarse en las sutilezas, silencios y ausencias detectadas durante el examen.

7.2. Tres enfoques diferentes, pero no contrapuestos

El análisis descrito anteriormente muestra que existía un enfoque predominante o hegemónico (pero no único o absoluto) respecto a la violencia contra las mujeres dentro de la cooperación española al desarrollo, al menos en el período al que hace

referencia esta tesis. Este enfoque predominante o hegemónico se caracteriza principalmente por destacar los aspectos estructurales de la desigualdad de género y de la discriminación contra las mujeres a la hora de determinar las causas de la violencia contra las mujeres y justificar la actuación de los actores de la cooperación al desarrollo para luchar contra este problema. Relacionado con esto, estaría el uso frecuente de conceptos intrínsecamente vinculados a teorías y debates feministas, como patriarcado, feminicidio o violencia sexual como arma de guerra, tal como se va detallará en las siguientes páginas.

Esta primera perspectiva, a la que hemos denominado **enfoque feminista**, por las características anteriormente descritas (que, además, en sí misma posee matices) convivió con otros dos enfoques, menos prominentes, pero con una acogida no desdeñable en el conjunto analizado. Se trata de los que hemos denominado enfoque naturalizado y enfoque indiferente. El **enfoque naturalizado** reconoce, pero no aborda, la desigualdad de género como elemento explicativo de la violencia contra las mujeres, lo que conduce a una visión que apenas cuestiona la problemática considerada. En el **enfoque indiferente** esta materia está aún menos presente, predominando una mirada que, sin ignorar por completo la existencia de los aspectos relacionados con las desigualdades de género, no los considera importantes o significativos. En ese sentido, más que de neutralidad frente a la cuestión de género abordar la violencia contra las mujeres, se estaría hablando de indiferencia hacia la cuestión del género, con la consecuente búsqueda de otras explicaciones para las causas de las violencias contra las mujeres.

Es importante mencionar también que uno de los enfrentamientos teórico-políticos más persistentes en el debate sobre la violencia contra las mujeres, el de la violencia de género frente a la violencia doméstica o familiar (ya expuesto en el capítulo 4), no se ha mostrado pertinente a la hora de determinar los distintos enfoques sobre la violencia contra las mujeres existentes en la cooperación española al desarrollo. Dejando a un lado los casos en los que una misma propuesta de intervención utiliza una mezcla desordenada de expresiones, se ha podido comprobar que la predilección por un término más vinculado a una u otra de esas corrientes teóricas no se reflejaba en la existencia de diagnósticos contrapuestos en lo que se refería a las causas y justificaciones para problematizar la violencia en el ámbito de esta política pública. Se pudo identificar, por ejemplo, intervenciones que afirman priorizar la violencia intrafamiliar y que están vinculadas muy claramente al enfoque estructural de género. También se ha observado el caso contrario: acciones que se situarían dentro del tercer

enfoque, el más alejado de los planteamientos relacionados con la desigualdad entre los géneros, usando una terminología propia de la corriente que aboga por el uso de términos como violencia patriarcal o sexista.

En definitiva, es posible afirmar que la terminología utilizada para nombrar el tipo de violencia al que se hace referencia no sirve para predecir la forma de abordar la problemática, al menos en este ámbito y en el nivel más operativo de la cooperación al desarrollo. Dicho de otro modo, no es posible vincular la elección de un término específico con una adscripción teórica o política intencionada. Es de suponer, sin embargo, que la tipificación legal, la forma en la que se hacen los registros administrativos o la recogida de datos en encuestas y la terminología utilizada por los servicios asistenciales de los distintos países, serían elementos a tener en cuenta en las preferencias a la hora de utilizar un término u otro. En todo caso, profundizar estos aspectos escapa a los propósitos y límites de nuestra investigación.

A continuación, se describe separadamente cada uno de los tres enfoques, empezando siempre por los aspectos relacionados con los diagnósticos y, a continuación, los relacionados con los marcos de los pronósticos. De este modo, se pretende destacar las coherencias e incoherencias, continuidades y rupturas entre las consideraciones sobre qué constituye el problema y cómo se propone a resolverlo en cada una de las tres perspectivas.

7.2.1. El enfoque feminista y algunos de sus matices

Como se ha adelantado, hay un conjunto significativo de intervenciones que se caracteriza por adoptar un enfoque que centra su atención en la desigualdad de género como causa última de las violencias ejercidas contra las mujeres en diferentes contextos y ámbitos. En esta perspectiva, además, las violencias están explícitamente relacionadas con la vigencia y la reproducción de discriminaciones, normas y comportamientos sexistas, pero sobre todo con el funcionamiento de instituciones y estructuras sociales patriarcales. Por todo ello, esta perspectiva ha sido denominada **enfoque feminista**, ya que otra de sus características es la frecuente referencia a ideas, conceptos y organizaciones identificadas con esta visión.

Las intervenciones que otorgan mayor peso a aspectos estructurales no suelen hacerlo únicamente para contextualizar el tema, sino que lo reflejan en las distintas orientaciones y propuestas de acción. Es necesario reconocer, sin embargo, que no todas lo hacen de la misma manera. Una pequeña, pero no despreciable parte de ese conjunto

aborda el problema de una manera que podría considerarse más superficial, tal como se tratará de detallar en un apartado específico más adelante.

De todas maneras, es importante destacar que se trata del enfoque predominante o hegemónico en el conjunto de las acciones de la cooperación española al desarrollo relacionadas con la problemática de la violencia contra las mujeres, ya que está presente en 162 de las 239 intervenciones analizadas, las cuales suponen, además, casi el 72% de los recursos financieros invertidos de ese conjunto. Como se puede apreciar en la tabla 10, en el apartado anterior, es la perspectiva más frecuente en tres de los cuatro temas prioritarios en los que se han dividido las intervenciones: violencia en la pareja, íntima o familiar, prácticas nocivas, violencia en contextos de conflicto armado, posconflicto o de inseguridad ciudadana. Solamente en el conjunto de acciones que abordan la trata de mujeres y la explotación laboral y sexual no predomina este enfoque (aunque no se distancie de los otros dos enfoques en cuanto al número de intervenciones). Asimismo, esta perspectiva sobre la violencia contra las mujeres está presente en todos los procedimientos o instrumentos administrativos adoptados por la cooperación española al desarrollo, incluyendo el único proyecto de cooperación delegada sobre este problema en el período¹²⁶.

Dentro propiamente del contenido de estas intervenciones y con respecto a los **diagnósticos**, la mayoría comienza señalando aspectos generales sobre la gravedad y la extensión de la problemática en cada uno de los contextos considerados. También aportan distintos datos cuantitativos, en general con vistas a resaltar la necesidad de la actuación de la cooperación internacional, como ocurre en casi todas las solicitudes de financiación en ese ámbito. En el caso concreto de los diagnósticos mencionados, se suele incluir información sobre dictámenes médico-forenses, estadísticas criminales, evolución en los números de denuncias y condenas y resultados de encuestas de victimización de ámbito nacional y local. A menudo presentan cifras recogidas por organizaciones de la sociedad civil, dando visibilidad a movimientos y organizaciones feministas o de mujeres no solo como fuente de información, sino también como actores que impulsan la identificación, estudio y tratamiento del problema, especialmente cuando faltan datos oficiales o son sesgados.

¹²⁶ Se trata de una intervención para mejorar el acceso a la justicia por parte de las mujeres víctimas de la violencia de género, prevista para durar entre 2010 y 2015, a cargo de la agencia alemana de cooperación internacional GTZ, en un país del Sudeste Asiático.

Los datos sobre violencia contra las mujeres están frecuentemente asociados, entre otros aspectos que caracterizarían la situación de las mujeres, a información sobre las desigualdades salariales y de participación política de las mujeres respecto a los varones, y sobre las brechas existentes en el acceso a los servicios públicos y en el ejercicio de derechos por parte de mujeres y niñas. Así, aunque no se afirme de manera directa la existencia de una relación de causa-efecto con las violencias analizadas, el uso extensivo de este tipo de datos favorece una visión que busca en elementos sociales y económicos más amplios la causa de que se produzcan. De todas maneras, cada una de las propuestas reunidas bajo este enfoque feminista menciona la violencia contra las mujeres como algo intrínseco a sistemas o sociedades patriarcales. Está considerada una expresión extrema de la subordinación de las mujeres a los hombres, una forma de controlar los cuerpos, la sexualidad y la vida de las mujeres, una práctica normalizada por diferentes instituciones sociales e, incluso, aceptada en los patrones culturales machistas a los que se hace referencia con este término, especialmente en intervenciones en América Latina. En ocasiones, se la vincula a cuestiones culturales o religiosas específicas, que darían prevalencia a un rol servil y pasivo de las mujeres tanto en las comunidades indígenas y campesinas de Asia como en las de Centroamérica; provocan el aislamiento de las mujeres en el mundo doméstico y su dependencia de una figura masculina en las sociedades rurales musulmanas; y reflejan la voluntad autoritaria y caudillista de los varones sobre la vida de sus esposas e hijos en Sudamérica.

No obstante, aunque la pobreza y la extrema pobreza aparezcan constantemente mencionadas como factores de vulnerabilidad en todo tipo de violencia, las causas estructurales de la violencia contra las mujeres hay que buscarlas principalmente en el ámbito social, cultural y político, y muy pocas veces en el ámbito económico. Una propuesta de una asociación feminista latinoamericana dentro de una convocatoria del Instituto de la Mujer, por ejemplo, señala, pero no detalla, que el recrudecimiento de la violencia contra las mujeres se debe al empeoramiento de la situación de las mujeres en la región a causa de la aplicación de políticas neoliberales. Asimismo, existen propuestas de cooperación bilateral vía organización no gubernamental de desarrollo (ONGD) relacionadas con la explotación sexual en países del Sudeste Asiático que constatan el crecimiento del ‘mercado de la prostitución’ y de la industria del sexo tras los conflictos militares. Es decir, la pobreza difícilmente aparece mencionada de manera aislada como un factor que causa o agrava la violencia contra las mujeres, sin la vinculación a otros elementos políticos y económicos.

Específicamente en contextos de los conflictos armados, el ejercicio de la violencia contra las mujeres se atribuye, aunque no de manera exclusiva, a la difusión de determinados conceptos de masculinidades que reivindican la subordinación de las mujeres respecto a los varones. Esto se puede ver especialmente en los procesos de socialización de niños y jóvenes en los que se exalta la heroicidad, la agresividad y la misoginia.

En las intervenciones que priorizan la lucha contra la mutilación genital femenina y su prevención¹²⁷, invariablemente calificada como una práctica dañina o nefasta e incluso una forma de tortura, la causa última de que se produzca se atribuye a la cultura o la tradición. Se considera un elemento que forma parte de creencias y costumbres muy arraigadas que buscan el sometimiento de las mujeres al colectivo de los varones por medio de la mutilación de sus cuerpos, su sexualidad y sus derechos. Sin embargo, las formulaciones encontradas varían de menciones genéricas, aplicables a prácticamente cualquier fenómeno social –como la que reconoce la existencia de lógicas socioculturales que apoyan tal práctica–, a vinculaciones más directas a una determinada religión o cultura. En este sentido, algunas de las propuestas analizadas se dirigen a difundir entre líderes religiosos y grupos sociales específicos que los argumentos para la defensa de la mutilación genital femenina y otras prácticas nocivas están basados en ‘falsos mitos’, los cuales deben ser esclarecidos entre sus seguidores.

Por este motivo, es importante destacar que al menos dos de los documentos estudiados apuestan por una lógica que, sin dejar de vincular la mutilación genital femenina a la desigualdad de género, se muestra más respetuosa, o al menos más atenta, con las interpretaciones que los grupos sociales practicantes otorgan a la práctica, evitando descalificarlas. Uno de estos documentos contiene la única propuesta sobre esta forma de violencia elaborada por una organización no gubernamental de un país receptor (por tanto, ni española ni internacional). Esta propuesta, además, precisa que se trata de una práctica con efectos nocivos sobre la salud femenina (como el incremento del riesgo de mortalidad materna) que está realizada por mujeres para complacer a los hombres. El segundo caso es un convenio de una ONGD especializada en salud que define la práctica de la mutilación genital como una convención social que tiene tal peso en la sociedad que las propias mujeres y niñas desean someterse a ella, empujadas por

¹²⁷ Se mencionan otras ‘prácticas tradicionales nocivas’ en diagnósticos de las intervenciones reunidas en esta temática, pero estas otras formas de violencia no pasan a objetivos o estrategias de acción de las intervenciones, en ninguno de los tres enfoques identificados.

sus iguales y por el temor (no sin fundamento) de ser sancionadas y rechazadas por la comunidad. Como se puede observar, ambos ejemplos muestran el papel activo de las mujeres en su ejecución, y no solamente de los varones en sus distintos roles sociales (padres, futuros maridos, líderes religiosos o comunitarios), como suele ser común.

Volviendo a las consideraciones sobre la presentación de datos cuantitativos, es llamativo que parte de las propuestas también se preocupe por matizar e interpretar las estadísticas que citan. Lo hacen sobre todo para resaltar cómo las cifras manejadas, en general, no dan cuenta de la totalidad de las formas de la violencia contra las mujeres o de su complejidad. Los motivos encontrados para ello varían: se identifica la falta de un sistema de información veraz para todas las formas de violencia contra las mujeres, la dispersión en registros administrativos y judiciales de los casos que podrían ser reconocidos como ‘de género’, o simplemente la falta de recogida de datos y variables que pondrían de manifiesto la magnitud de la victimización de las mujeres (como el sexo de víctimas y de los agresores en el caso de los delitos de violencia sexual). La lejanía existente entre el sistema de justicia y las víctimas también constituye un factor que oculta la mayoría de los casos. Se mencionan las dificultades para realizar denuncias y, en los casos más extremos, el sentimiento de miedo y vergüenza que se apodera de las víctimas, que temen ser culpabilizadas por su familia o su comunidad de la violencia que han sufrido. Asimismo, algunas intervenciones señalan que un aumento de denuncias en comisarías no significa que éstas sirvan para determinar de forma directa el número de casos existente, sino que puede responder a una mayor sensibilización social (las mujeres cada vez lo denuncian más) o incluso a una (rara) mejora de la actuación policial y de las instituciones judiciales.

Sin embargo, lo que realmente destaca en estos diagnósticos no es el buen trabajo de las instituciones públicas, sino todo lo contrario. Así, se señala lo limitado, insuficiente e ineficaz de su actuación en la lucha contra la violencia contra las mujeres en la mayoría de los contextos considerados.

Con relación a las situaciones de conflicto y posconflicto, la situación anterior se repite: se señala el funcionamiento deficiente de las instituciones y la escasa aplicación de la legislación existentes, en este caso internacionales, a la vez que se reclama la implementación de las resoluciones de Naciones Unidas sobre la participación de las mujeres en la construcción de la paz. Se hace constar la falta de refugios y centros de atención en general para atender a las mujeres sometidas a violencia de género, la demora en el reconocimiento de dicha violencia, la inexistencia de acciones para la reparación de las formas específicas de violencia que atañen a las mujeres (como las

violaciones utilizadas como arma de guerra en el conflicto de los Balcanes o las esterilizaciones forzosas en el conflicto interno peruano), la culpabilización de las víctimas de violencia sexual por parte de autoridades, etc. Las propuestas multilaterales sobre el problema suelen constatar que las respuestas nacionales e internacionales a la violencia sexual durante y después de las situaciones de conflicto son insuficientes. Además, se reconoce que los esfuerzos de prevención y protección a las mujeres, los servicios de apoyo a las supervivientes tienden a ser poco sistemáticos y con una cobertura bastante limitada.

En el caso de la mutilación genital femenina, destaca no tanto el trabajo de organismos internacionales, gobiernos o instituciones estatales (aunque se mencione, por ejemplo, si el país tiene una ley que la prohíba), como la importancia de la actuación de las organizaciones locales y de las comunidades para el abandono de esta práctica.

De todos modos, aunque se cite la existencia de avances y mejoras en las leyes y políticas públicas respecto a cualquiera de las formas de violencia consideradas, casi siempre se hace para destacar su incumplimiento. Recordando la división elaborada en la estrategia sectorial de género (MAEC-SECI 2007a) –que en definitiva es el documento que aborda de manera más detallada el tema de la violencia contra las mujeres– sobre las prioridades de esta política según vayan dirigidas al nivel de la igualdad formal, al de la igualdad real o al de las acciones específicas en género, sería posible afirmar que se considera la cuestión de la igualdad formal como una dimensión relativamente resuelta. Pocas son las intervenciones que defienden cambios o adaptaciones legislativas en relación a este problema. La tendencia es resaltar que aunque ya existen leyes y normativas, mejorables en muchos casos, el gran problema es que siguen sin cumplirse o aplicarse en su totalidad.

En general, en la contextualización del tema, se contrasta el reconocimiento formal de derechos con la realidad vivida por las víctimas. Así, se destaca que los instrumentos legales, institucionales y políticos diseñados para la erradicación de la violencia doméstica, de género o como se la denomine, conviven con la persistencia de esta problemática. En este mismo sentido, se puede constatar frecuentemente que la acción de los organismos públicos revictimiza a las mujeres que denuncian o buscan algún tipo de atención o reparación. Incluso en países donde existen instituciones específicas para la atención a estas víctimas, dichas instituciones culpabilizan a la víctima por la violencia sufrida o intentan inducir su conciliación con la pareja para preservar a la familia, como diagnostican muchas de las intervenciones, cualquiera que sea el tipo de actor que las proponga.

Aun así, son pocas las propuestas que cuestionan la importancia de las herramientas legales y políticas. Alrededor de una veintena de intervenciones (tanto de ONGD como de organismos internacionales) resaltan que los sistemas de justicia son intrínsecamente androcéntricos y que las decisiones y procedimientos en ese ámbito siguen teniendo tintes sexistas y misóginos, y que incluso que van en contra los derechos de las mujeres ya reconocidos. Se llega a afirmar que la justicia dentro de un sistema patriarcal niega, en la práctica, el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. No obstante, incluso en los casos de las críticas más severas, no se reivindica ignorarlo, sino corregirlo y mejorarlo, para lo cual en la mayoría de los casos en los que se constatan deficiencias en este ámbito, se elaboran a propuestas de capacitación, formación y sensibilización de funcionarios y autoridades, así como de promoción de la perspectiva de género de manera más general.

Todavía en relación con el contenido diagnóstico de las intervenciones reunidas bajo este primer enfoque, hay que mencionar la importancia de identificar quién es la víctima y quién es el causante de la violencia. Se considera de forma unánime que las principales víctimas de esta violencia son las mujeres: de diferentes edades (se hace referencia en mayor proporción a las niñas, pero también se habla de adolescentes, jóvenes y, en el caso de intervenciones sobre salud, de mujeres en edad reproductiva), grupos sociales (indígenas, de manera especial) y circunstancias (refugiadas, migrantes, en situación de prostitución). Los niños que aparecen como víctimas, están siempre relacionados con sus madres, a diferencia de las niñas víctimas, a las que se menciona como blanco preferente de las agresiones en un sinnúmero de otros contextos, como la escuela, la comunidad o los conflictos armados.

Respecto a los causantes de la violencia, su identidad se revela explícitamente en la mayoría de las intervenciones (al contrario de lo que ocurre en los otros enfoques, como se verá a continuación), destacando los individuos del sexo masculino (maridos, compañeros y novios). Frecuentemente también se hace referencia al ‘cabeza de familia’, a padres, suegros, otros familiares, vecinos, conocidos y amigos. En el caso de las situaciones de conflictos armados e inseguridad ciudadana, la lista de agresores también se explicita y las referencias son más colectivas que individuales: actores armados en general, bandas urbanas, guerrillas, grupos paramilitares, fuerzas armadas e incluso las fuerzas de paz de Naciones Unidas. Se mencionan asimismo mujeres como causantes de algunas de las formas de violencia. Esto ocurre en el caso de intervenciones relacionadas con la mutilación genital femenina (a pesar de que en algunos de los casos se recuerda que aunque son las mujeres las encargadas de llevar a

cabo esa práctica sobre el cuerpo de las niñas y jóvenes, la responsabilidad es de los varones, las comunidades y los grupos étnicos en general) y en un proyecto sobre trata con fines de explotación laboral en la que se mencionan agresiones de los jefes.

Por lo que respecta al contenido **pronóstico** que hace este conjunto de intervenciones, lo primero que hay que resaltar es el predominio de propuestas de carácter preventivo y transversal, generalmente combinando estrategias de ambos tipos. El espacio que se concede a la reparación, la sanción y la atención es inferior, y ocurre especialmente cuando se abordan formas más específicas de la violencia.

Entre los proyectos financiados por el programa de cooperación del Instituto de la Mujer que adoptaron este primer enfoque feminista, un número significativo de ellos prioriza las acciones de presión política, monitoreo y control social, compartiendo la idea que la lucha contra la violencia contra las mujeres pasa necesariamente por una mayor vigilancia de la actuación de las autoridades y organismos públicos. Se asume, pues, que los estados y gobiernos no garantizan de manera espontánea la protección necesaria a las mujeres contra la violencia, pues en muchas ocasiones no existe una verdadera intención política de cambiar la situación de subordinación y violencia en la que se encuentran las mujeres. Otro foco de atención son los medios de comunicación, sobre cuya actividad también se considera necesario realizar un seguimiento.

A tenor de todo esto, se puede afirmar que una aspiración común de las distintas propuestas para poner en marcha mecanismos u organismos de control social (que adoptan formatos como el de observatorios, inspectorías o veedurías sociales) es articular la producción de información y conocimiento, la documentación de casos y la sensibilización y presión políticas.

Pero, ¿quién se encarga de este trabajo de vigilancia continua? Tanto en estas propuestas de carácter transversal como en las de otros ámbitos (que priorizan, por ejemplo, la capacitación de grupos de mujeres en comunidades locales en algunos países centroamericanos) se enfatiza siempre el trabajo de las organizaciones de mujeres y feministas, e incluso de los grupos informales de mujeres. Uno de los proyectos expresa que son los grupos y movimientos de mujeres quienes han dado respuesta a la ‘pandemia de la violencia’, brindando atención directa a víctimas, exigiendo el cumplimiento de la legislación nacional e internacional que protege los derechos de las mujeres, y obligando a los estados a tomar medidas para reducir y eliminar la violencia contra las mujeres. No obstante, afirmaciones como la anterior podrían atribuirse, aparte de a dar una mayor justificación a la estrategia propuesta, a las características del

instrumento y de la unidad administrativa financiadora de la convocatoria, orientadas precisamente a apoyar este tipo de organizaciones en América Latina y el Caribe, como se ha señalado en el capítulo anterior.

Sin embargo, lo que hay que destacar es que este reconocimiento directo y explícito, que coloca a las organizaciones de mujeres y feministas como los principales actores que impulsan a las instituciones públicas a dar mejores respuestas al problema de la violencia contra las mujeres, ocurre solamente en acciones con este enfoque feminista que se ha percibido como predominante en el conjunto de propuestas. Esta característica también se encuentra en muchas de las demás acciones bilaterales vía ONGD, financiadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Aunque en esos casos es menos frecuente que se propongan mecanismos específicos de control o vigilancia ciudadana, el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres sigue estando muy presente. Tanto en las intervenciones financiadas por la AECID como por el Instituto de la Mujer, se mencionan coaliciones con organizaciones e instancias internacionales de protección de derechos humanos. Lo más frecuente es que dicho apoyo a las organizaciones de mujeres se justifique por la influencia que se ejercen sobre las instituciones públicas a nivel local y nacional y por la visibilidad social que dan a la violencia contra las mujeres.

Las propuestas encaminadas a desarrollar un trabajo directo con las instituciones públicas, en especial aquellas intervenciones de cooperación bilateral directa, ponen el énfasis en la elaboración de planes y políticas integrales, aunque también son frecuentes las acciones para el estudio y la recogida de datos sobre la victimización de las mujeres. En este sentido, destaca el fortalecimiento institucional que se ha producido en al menos siete países en el período 2005-2010 (Camboya, Filipinas, Paraguay, Perú, República Dominicana, Túnez, Uruguay). Las propuestas realizadas en este sentido se dirigen tanto a organismos directamente vinculados a temas de género (ministerios, institutos o secretarías) como a otros ámbitos sectoriales de las políticas públicas (sanidad o justicia)¹²⁸. Asimismo, entre las propuestas transversales del enfoque estructural, hay que situar una intervención de cooperación científica y cultural dirigida a la elaboración

¹²⁸ En todo caso, siempre se centran en la cuestión de la violencia contra las mujeres. Durante el proceso de identificación de las intervenciones que forman el Banco de Datos, se han encontrado propuestas de este tipo que, aun centradas en el fortalecimiento institucional de estos organismos, no tenían en consideración la violencia contra las mujeres y, por lo tanto, fueron descartadas para este análisis.

y aplicación de una encuesta sobre ‘violencia doméstica’ entre un grupo de mujeres indígenas de un país sudamericano¹²⁹.

En la modalidad multilateral, las acciones transversales priorizadas no difieren demasiado de las de tipo bilateral directo a las que nos hemos referido. Antes de analizarlas en detalle, conviene recordar que una parte considerable de los recursos multilaterales analizados se refiere a aportaciones realizadas al Fondo España - Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). El formato de estas propuestas suele ser el de apoyo y coordinación del trabajo ya realizado por agencias de las Naciones Unidas, por medio del establecimiento de los llamados *joint programmes*, o programas conjuntos, que definen estrategias y objetivos comunes para la actuación de estos organismos en un tema vinculado al cumplimiento de los ODM en un país determinado. En ese sentido, generalmente prevalecen las acciones transversales dirigidas a la institucionalización de los servicios y organismos públicos, especialmente mediante la elaboración y fortalecimiento de planes y políticas públicas a diferentes niveles administrativos. Relacionado con esto, destacan los programas de capacitación de funcionarios y autoridades públicas. Asimismo, como bien se puede apreciar en una propuesta dedicada a Marruecos, aparte de una estrategia de refuerzo institucional a nivel nacional, esas propuestas suelen actuar también para el apoyo local y para el empoderamiento de mujeres y niñas supervivientes de violencias. Aun sin escapar el esquema general de este tipo de acciones, la propuesta para Guinea Bissau destaca en este conjunto por centrarse exclusivamente en el sector de la justicia y proponer sobre todo acciones en un marco sancionador.

El trabajo con el sistema de justicia también destaca en las contribuciones voluntarias a otros fondos y organismos, aunque es posible encontrar propuestas muy variadas. Combinan acciones de tipo preventivo y de transversalidad del enfoque de género, en especial, las propuestas del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), con servicios de atención, especialmente en contextos de conflictos armados y para dar respuesta a los casos de violencia sexual.

¹²⁹ Hay que recordar que fue la única subvención del Departamento de Relaciones Culturales y Científicas de la AECID relacionada con el tema investigado a cuyo contenido se ha podido acceder y analizar. Esta unidad de la Agencia es la responsable por la convocatoria de pequeñas subvenciones dirigidas a promover la colaboración entre universidades españolas y extranjeras, especialmente latinoamericanas.

Asimismo, también en relación a los contextos de conflictos armados, es importante mencionar la existencia de tres desarrolladas en el ámbito de la política de cooperación al desarrollo de España en conexión con la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Mujeres, Paz y Seguridad. Dos de ellas son desarrolladas organizaciones no gubernamentales y una por un organismo internacional especializado en género. Obviamente, la Resolución 1325 se menciona en otros documentos analizados, todos ellos propuestas de financiación por parte de organismos o fondos de Naciones Unidas en las cuales la Resolución 1325 es parte de la justificación para la intervención. Sin embargo, solamente en Bosnia-Herzegovina, Colombia y en una propuesta del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la promoción de la Mujer (INSTRAW) para África y América Latina, se plantean actuaciones encaminadas a su implementación de manera específica. En las dos primeras propuestas, la estrategia utilizada es la formación y la capacitación de grupos de mujeres pensando en su participación e influencia en los procesos de negociación tras los conflictos. La última propuesta propone acciones más genéricas de difusión, estudios e intercambio entre actores, destacando, asimismo la necesidad de esas acciones específicas en su diagnóstico de la cuestión. Esto se debe a que no se estarían cumpliendo los mandatos internacionales, como la Resolución 1325, de manera sistemática ni sostenible, siendo necesaria la puesta en marcha de estrategias específicas para que sus disposiciones no queden en un simple gesto simbólico.

Aún dentro de este primer enfoque de tipo feminista, pero en el caso de la mutilación genital femenina, se puede afirmar que prevalecen las acciones preventivas. Éstas se encaminan a la ‘sensibilización de las comunidades’ que la practican, y en especial, pero no únicamente, de los líderes locales y religiosos, padres y madres. Se asume, así, que quienes la legitiman socialmente debe conocer los efectos negativos sobre la salud de las niñas y mujeres que la sufren. Solamente dos de los proyectos proponen de manera directa la atención médica y psicológica a las niñas que ya pasaron por ello, aunque no a posibles víctimas o a la población femenina en general que pueda necesitar los servicios de salud sexual y reproductiva. Por otro lado, todas las organizaciones implicadas en esas intervenciones, salvo una de ellas, parecen reconocer que les falta información, puesto que estas propuestas siempre incluyen actividades relacionadas con el estudio del problema y con el registro y recogida de datos.

En relación a la identificación de los actores en el marco del pronóstico de esas acciones, ya se ha sido puesto en relieve el lugar destacado que ocupan las organizaciones y grupos de mujeres y feministas como impulsores de las actividades

propuestas. Cabe señalar también que las intervenciones no sólo se dirigen a las mujeres, estén organizadas o no, abundando las referencias específicas a varones entre los participantes en actividades (mixtas o separadas por sexo) de sensibilización, capacitación, etc. La participación masculina frecuentemente se justifica por su rol de padres o maridos (concienciación sobre la paternidad responsable, planificación familiar o derechos sexuales y reproductivos dirigidos a mejorar la vida en pareja) y por los puestos de poder que ocupan en la sociedad como líderes, autoridades, profesionales y representantes de cargos públicos. Su inclusión iría con vistas a contribuir a una mayor eficacia y sostenibilidad en el cambio de mentalidad hacia la igualdad de género, la cual se conseguiría disminuyendo la resistencia de los que posiblemente se consideran perjudicados y sensibilizando a los chicos jóvenes, que estarían más motivados para aceptar la igualdad de género que la población adulta. En el caso de las intervenciones relacionadas con la mutilación genital femenina, la sensibilización de los jóvenes de ambos sexos se justificaría por su responsabilidad futura como padres y madres para rechazar esta práctica.

Solamente en dos ocasiones hay propuestas de actuación directa con agresores, pero no se concreta cómo se van a desarrollar: una subvención a un organismo público de igualdad de género en un país sudamericano prevé asesoramiento para el diseño de estrategias dirigidas a varones agresores o violentos, y un convenio en un país del Sudeste Asiático propone implementar servicios de atención psicológica que atiende a víctimas y maltratadores. Asimismo, se ha observado que la presencia de grupos o redes de hombres en favor de la igualdad de género o contrarios a la violencia en las intervenciones relacionadas con la violencia contra las mujeres, es esporádica y exclusiva de países latinoamericanos y caribeños (Bolivia, Colombia, Ecuador, Haití, Nicaragua, Perú). En seis ocasiones se menciona este tipo de actor (cinco en propuestas de cooperación bilateral vía ONGD, dos de ellas fases de una misma propuesta, y una en una subvención a un organismo multilateral), generalmente con el propósito de llevar cabo trabajo preventivo con niños, adolescentes y jóvenes del sexo masculino.

Finalmente, es interesante presentar referencias al contexto interno español y a las instituciones estatales españolas, ya que pueden proporcionar una justificación extra a la actuación de la cooperación internacional al desarrollo y de la organización proponente. Aunque este tipo de mención también existe en propuestas asignadas a la segunda de las perspectivas analizadas, en este primer enfoque (feminista) se observan una mayor diversificación respecto al contenido, tipo de actores e instrumentos administrativos. Al menos veinte intervenciones vinculan sus propuestas de actuación a

experiencias y acciones gubernamentales, institucionales y de la sociedad civil puestas en marcha en España en relación a la ‘violencia de género’, pero también sobre igualdad y empoderamiento de las mujeres. Estas intervenciones son las siguientes: dos fases de un proyecto financiado por el Instituto de la Mujer, catorce propuestas de ONGD financiadas por la AECID (nueve en Convocatoria Abierta y Permanente (CAP), cuatro en convocatorias de proyectos y un convenio plurianual), dos fases de una misma subvención bilateral a organismo público e, incluso, dos solicitudes de financiación multilateral a un organismo internacional dedicado a cuestiones de género.

Resulta curioso que las propuestas que se realizan directamente desde instituciones públicas (las intervenciones bilaterales directas) no son las que más destacan los posibles vínculos con el contexto político o institucional interno. Este aspecto es más frecuentemente resaltado en las intervenciones canalizadas vía ONGD. Aunque varía la manera como esas organizaciones abordan tales relaciones, la mención al contexto político o institucional interno español parece dar más importancia a la propuesta presentada. Un ejemplo podría ser el de una organización feminista colombiana, que al solicitar el apoyo del Instituto de la Mujer para respaldar la elaboración de una nueva legislación que abarque todas las formas de violencia contra las mujeres en Colombia, menciona la experiencia de la ley integral española como ejemplo (aunque la legislación española, como ya se ha señalado, no incluye todas las formas de violencia contra las mujeres).

Otras dos propuestas lo que resaltan del contexto español es la posibilidad de fortalecer lazos con el activismo y el asociacionismo feminista. Cuando la forma de violencia priorizada es la trata o las prácticas nocivas, la mirada que se busca es otra. En el caso de la trata de mujeres, en tres propuestas financiadas en el período 2005-2010 se hace referencia a ‘contacto directo’ con la Reina de España y con miembros del Parlamento Europeo y del Congreso de los Diputados para mostrar el reconocimiento que la organización peticionaria posee entre las instituciones españolas. En sentido parecido, pero de forma menos explícita, la formulación de un proyecto de cooperación bilateral en Mauritania menciona la existencia de relaciones privilegiadas entre instituciones de los dos países.

En relación a las dos intervenciones multilaterales mencionadas, se trata de propuestas originadas en el seno de UNIFEM. Una de ellas, en la solicitud de una nueva fase de financiación para una intervención cuyo objetivo es buscar una solución al problema de la inseguridad ciudadana de las mujeres en las grandes ciudades latinoamericanas, propone incluir experiencias de ciudades españolas para aprovechar el

conocimiento adquirido por los gobiernos locales españoles y promover intercambios con la Secretaría de Políticas de Igualdad y el Instituto de la Mujer, incluyendo la participación de personal experto procedente de esos organismos. De todas maneras, ambas presumen de la existencia de sinergias favorables con el sistema institucional y socioeconómico español, el cual estaba en aquel momento a la vanguardia de las propuestas de definición de marcos legales integrales para abordar las violencias de género y en los servicios de atención a las víctimas. En este sentido, el apoyo de la cooperación española al desarrollo se justificaría por permitir el traspaso de experiencias consideradas exitosas en España (aunque las características de esos logros no se llegaban a describir).

Simplificación y generalización del ‘patriarcado’

Como ya se ha mencionado, hay un grupo de intervenciones que, pese tomar como punto de partida elementos de la perspectiva de tipo feminista (como la desigualdad de género o la opresión patriarcal), predominante en la cooperación española cuando el tema es la violencia contra las mujeres, no los aborda en profundidad. Esto es lo que ocurre en al menos veintiocho intervenciones (el 17% de ese conjunto o poco más del 11% de todas las analizadas en esta investigación). El propósito de abordarlas de manera independiente es volver a poner de manifiesto la diversidad del contenido examinado, aunque éste pueda ser identificado dentro de una misma perspectiva.

En un análisis más atento, lo primero que destaca es que a una parte de las intervenciones con el enfoque que hemos denominado como feminista les falta vincular las premisas en las que están basadas a cada contexto, lo que impide incorporarlas de forma justificada a las propuestas de acción para las cuales se busca financiación. Es decir, de este subconjunto emerge una concepción generalizadora y simplificada del patriarcado y de los elementos relacionados con él, dando la impresión de que se trata más bien, de una cuestión comodín a la que se hace referencia, pero cuyo uso ni se explica ni se justifica. En estos casos, simplemente se menciona que los sistemas patriarcales están vinculados a la cultura, que la cultura patriarcal no es cuestionada o que los cambios que se intenta promover contribuirían a la destrucción de estructuras patriarcales. En definitiva, es como si se tratara de un concepto de sentido común que se puede comprender de manera intuitiva, en especial por parte los responsables de examinar y evaluar las propuestas con miras a conceder una posible financiación.

Además, se podría suponer que para estas propuestas, el patriarcado y las concepciones derivadas de él tienen carácter universal, ya que prácticamente no se ahonda en las posibles peculiaridades de cada contexto, sea el de organizaciones indígenas, el de estructuras políticas nacionales o servicios sociales locales.

Sabemos que tampoco se debería esperar encontrar en el tipo de documento que forma el Banco de Datos elaboraciones teóricas o análisis detallados. Aparte de la limitación de espacio propia de los formularios de las convocatorias de financiación a las que una parte de estas intervenciones fueron presentadas, no estaría entre los propósitos de estos documentos ahondar en cuestiones teóricas y conceptuales. Sin embargo, los contenidos analizados muestran una tendencia que sí merece ser estudiada: la de individualizar la forma en que opera el patriarcado en lo que se refiere a la violencia. Esto se hace vinculándolo de manera directa a la expresión de determinados comportamientos y actitudes, especialmente por parte de los varones (en diferentes países sobre todo de América Latina, a los varones se les aconseja acudir a actividades de sensibilización, formación y capacitación). Más allá de la constatación de la existencia de desigualdades e injusticias de género, se observa cierto rechazo o recelo a reflexionar sobre cómo actúan determinadas dimensiones patriarcales relacionadas con procesos y actores institucionales para que se produzca la violencia contra las mujeres. En consecuencia, estos elementos difícilmente se ven reflejados en los objetivos, ya que las propuestas se centran en las posibles víctimas y causantes de la violencia, principalmente con estrategias de empoderamiento personal dirigidas a las mujeres.

El comportamiento que acabamos de describir se observa de manera muy evidente, por ejemplo, en dos fases de un proyecto apoyado por el programa de cooperación del Instituto de la Mujer. En ambas fases, se parte de un diagnóstico que señala como una de las causas principales de la violencia ejercida contra chicas jóvenes y adolescentes en el hogar, en la escuela y en la comunidad, la percepción naturalizada que chicas y chicos tienen sobre la violencia. Coherentemente, la intervención se dirige a la sensibilización de pequeños grupos de esta población. Sin embargo, la organización que solicita la financiación reconoce las limitaciones de una estrategia de acción que obvia otros niveles al considerar que existe el riesgo de que las personas han sido sensibilizadas para ejercer su derecho a la denuncia en los casos de violencia, se desmotiven y no continúen con la denuncia debido a los procedimientos burocráticos y a las respuestas poco asertivas del sistema judicial. En este sentido, este subconjunto de intervenciones se alejaría del resto de intervenciones reunidas bajo el enfoque estructural, que suele estar orientado a estrategias y actores más diversificados.

En conclusión se puede decir que, aunque es posible decir que en los contenidos de una parte de las propuestas que adoptan el enfoque feminista se vislumbra un deseo de suscribir los conceptos y el vocabulario de una perspectiva más abarcadora en la que se reconozca la complejidad del problema, esta tendencia no se traslada después a la forma de actuación que proponen. De ahí que se pueda decir que la adopción de la perspectiva feminista sobre la violencia contra las mujeres en las acciones de la cooperación española al desarrollo tiene diferentes niveles y matices.

7.2.2. El enfoque que naturaliza la violencia contra las mujeres

Entre las acciones sobre violencia contra las mujeres de la cooperación española al desarrollo que no adoptan la perspectiva hegemónica examinada en la sección anterior, el enfoque más frecuente se caracteriza por evitar abordar de manera directa la desigualdad de género o los distintos niveles de victimización entre hombres y mujeres en las diferentes formas de violencia consideradas. Dicho de otro modo, esta segunda perspectiva no se ocupa de las características estructurales de la violencia contra las mujeres, evitando cuestionar a fondo las raíces del fenómeno y llegando incluso en algunas ocasiones a naturalizarlo. Debido a esta escasa predisposición a cuestionar los elementos causales específicos de la violencia, se ha considerado que se trata de un **enfoque naturalizado**¹³⁰.

Este enfoque se observó en cincuenta y tres intervenciones (al menos catorce de ellas eran continuación de otras ya en marcha), lo que representa algo más del 22% de todas las acciones aquí consideradas y desarrolladas en al menos veintitrés países diferentes. Sin embargo, en el período analizado (2005-2010), la financiación destinada a este grupo de intervenciones supuso poco más que el 12% de los recursos destinados a intervenciones relacionadas con la violencia contra las mujeres (en valores absolutos no llega a los 14 millones de euros). Así, a pesar de ser, de los tres enfoques, el segundo más frecuente, ocupa el último puesto en cuanto al valor económico desembolsado para el total de las intervenciones analizadas en este trabajo. Esto se debe a que se trata de una perspectiva adoptada mayoritariamente por proyectos o subvenciones con una financiación más reducida, como las propuestas de proyectos de ONGD aprobadas en

¹³⁰ Se han incluido también en esta perspectiva aquellas propuestas en las que faltaba una discusión sobre el problema, aunque fuera mínima y en cualquiera de sus apartados, o sea aquellas en las que no se pudo encontrar respuestas a las principales preguntas-guía del diagnóstico (o la totalidad de ellas) en los documentos analizados.

convocatorias con unos valores máximos de financiación más modestos. De hecho, hay solamente dos convenios plurianuales y tres contribuciones multilateral que adoptan esta perspectiva, siendo este tipo de procedimientos los que suelen recibir recursos financieros significativamente superiores a los demás (véase nuevamente la tabla 10).

Finalmente, antes de profundizar en las características principales del enfoque que hemos denominado naturalizado, hay que precisar que en él se abordan las cuatro grandes temáticas de la violencia contra las mujeres que se han venido señalando, siendo la distribución de estas temáticas similar a la observada para la totalidad de las intervenciones analizadas. La violencia en la pareja y la familia es la temática más abundante, seguida por la trata y el tráfico de personas, la violencia en contextos de conflictos armados e inseguridad ciudadana y, finalmente, las prácticas nocivas.

Cuando existe un **diagnóstico**, éste se presenta de manera predominantemente descriptiva. En la mayoría de las ocasiones se caracteriza, además, por aportar datos cuantitativos que no van acompañados de un análisis o interpretación. Se siguen incluyendo, sin embargo, apreciaciones negativas sobre las cifras presentadas, consideradas casi siempre alarmantes, récords, elevadas o graves. Menos frecuentemente, insisten en el carácter extremo o terrorífico de la victimización de las mujeres y niñas, en especial cuando se hace referencia a la trata con fines de explotación sexual o a la violencia en conflictos armados. En esos casos, se hace especial hincapié en las consecuencias físicas, psicológicas y sociales a las que las víctimas se enfrentan. De todos modos, la identificación de las causas del problema es casi siempre anecdótica o tan genérica que se aplicaría a prácticamente cualquier realidad de violación de derechos, esté o no relacionada con la victimización de las mujeres y niñas.

Algo parecido ocurre con las dimensiones de género de cada contexto. Las subvenciones bilaterales directas a organismos gubernamentales de los países receptores constituyen una excepción, siendo un poco más detalladas en ese aspecto. Estas propuestas suelen comenzar con un relato en el que se destaca la existencia de un contexto favorable para abordar de la temática. Para ello se menciona políticas, organismos públicos sobre ‘la mujer’ y cambios legislativos que se han puesto en marcha en un país determinado y cuyo fin es proporcionar una respuesta institucional al problema. Otros tipos de intervenciones, sin embargo, suelen hacer hincapié sobre las facetas opuestas a las propias dimensiones de género: las propuestas de las ONG que hacen referencia a las respuestas gubernamentales, lo que no siempre ocurre, suelen resaltar su carácter insuficiente, precario y marginal, hablando incluso de su completa y deliberada ausencia. En referencia a una situación extrema, como la de las mujeres

refugiadas o desplazadas por conflictos armados, una de las organizaciones afirma en su propuesta para la convocatoria del Instituto de la Mujer que, debido a la magnitud del problema y a los escasos recursos con los que contarían para enfrentarlo, algunas administraciones evitan tener datos reales de la situación.

Respecto a la atribución de los roles, las mujeres están consideradas las principales víctimas; los varones aparecen ocasionalmente en esta condición, pero principalmente como hijos de las mujeres víctimas (tal como ocurría ya en el primer enfoque analizado) o para destacar que no constituyen el grupo más vulnerable o mayoritario entre las víctimas. Se afirma, por ejemplo, que los hombres y niños sufren violencia intrafamiliar en proporciones mucho menores que las mujeres y niñas. En este mismo sentido, se señala, pero sin mucho empeño, que ellos también pueden verse afectados por la trata de personas o por los conflictos armados¹³¹. La cuestión de quién inflige la violencia está menos presente, aunque en los casos en los que se menciona de manera explícita, destaca la figura de un varón con vínculos de consanguinidad o de tipo afectivo con la víctima, como familiares, maridos o compañeros. En las propuestas sobre trata y explotación sexual y laboral se señala fundamentalmente a explotadores, tratantes y redes de crimen organizado, aunque sin especificar. En un documento se identifica a clientes y policías entre los agresores más frecuentes, y en otro a las autoridades, ya que responsabilizan a las víctimas de la trata debido al comercio sexual y la clandestinidad que las rodea.

En relación a la parte del **pronóstico** de las intervenciones con enfoque naturalizado, destaca la fuerte presencia de la reparación (uno de los aspectos menos destacados en el conjunto de las intervenciones analizadas). Se trata de propuestas procedentes casi exclusivamente desde organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales. Ninguna intervención con instituciones públicas de los países receptores contempla de manera prioritaria estrategias para la reparación de los derechos vulnerados a las víctimas. En el caso concreto de la reintegración sociolaboral, se observa, por ejemplo, que ésta se contempla desde la participación de las víctimas en las actividades de formación y capacitación que ofrecen los centros de acogida y atención gestionados por las organizaciones no gubernamentales que solicitan la

¹³¹ Incluso, en una ocasión se afirma que los varones adultos no están afectados por la trata de personas. Esto ocurre en un proyecto cuya financiación se destinaba a la construcción de un centro para mujeres de atención a víctimas de la trata con fines de explotación sexual.

financiación. Es decir, que también en este aspecto, la relación con las instituciones públicas y oficiales es prácticamente nula.

A la vez que pone el énfasis en la reparación y se prioriza la atención a las consecuencias de las violencias en la vida de mujeres y niñas, se destaca el silencio en la actuación directa sobre las causas del aumento del fenómeno de la violencia o de su misma existencia. En ocasiones, se observa incluso un rechazo explícito a abordarlos en las propuestas. Un ejemplo de esto es una subvención a un organismo público de un país sudamericano en cuya propuesta reconoce que no actúa para combatir las causas del problema, sino que centra su esfuerzo en paliar las situaciones de urgencia y en atender las necesidades más inmediatas de la infancia que sufre violencia en la calle, especialmente las chicas. Lo mismo ocurre en una solicitud de un proyecto en un país en conflicto, en la que se deja afuera de que no intenta ir al origen del problema identificado, puesto que eso demandaría profundos cambios sociales, imposibles de alcanzar en el tiempo de ejecución del proyecto y con los recursos disponibles para ello.

De todos modos, el enfoque naturalizado no restringe su campo de acción únicamente a esta dimensión de la reparación, aunque sea bastante abundante. También lo son, como en los otros dos enfoques identificados, las estrategias preventivas, especialmente el desarrollo de campañas de sensibilización general de la población con vistas a reducir la tolerancia social a cualquier forma de violencia contra las mujeres, y la movilización comunitaria como medio de involucrar a diferentes grupos sociales locales en esta tarea. Para el primer caso, se especifican esporádicamente contenidos, medios de difusión, públicos o metas. Merece especial mención una subvención destinada a financiar en un país asiático una estrategia nacional para la promoción de cambios de comportamiento de la sociedad en relación a la violencia doméstica, todo ello basándose en los resultados de una encuesta financiada anteriormente por la cooperación española. Lo más común, sin embargo, son los relatos genéricos que aportan poca información sobre en qué consisten las campañas preventivas. Con relación a la movilización comunitaria, destacan las estrategias de educación entre pares y la metodología participativa para involucrar a grupos de estudiantes, jóvenes, mujeres líderes locales, defensoras populares, etc.

Asimismo, en este segundo enfoque, también se destacan las propuestas transversales, entre las que se podría destacar aquellas encaminadas a proporcionar formación especializada sobre derechos de las mujeres, prevención de la violencia y atención a víctimas. Estas propuestas estarían dirigidas a diferentes grupos profesionales (del ámbito sanitario, social, educativo, policial y judicial), así como a activistas y

organizaciones de la sociedad civil que ya han mostrado cierto compromiso con los temas abordados (con menos frecuencia también se dirigen a otros grupos como periodistas, profesionales de la comunicación, líderes y comunidades religiosas). Solamente en tres ocasiones se habla de poner en marcha procesos de capacitación y formación específicamente destinados a defensoras de derechos de las mujeres o a organizaciones feministas o de mujeres (el ‘tejido asociativo femenino’, en palabras usadas en una de esas propuestas). De todos modos, sin tener el peso político que se les atribuía en el enfoque anterior, son actores considerados agentes impulsores de redes y centros de atención a víctimas y promotores de la movilización local y comunitaria.

Entre esas intervenciones transversales algunas destacan por plantear la ejecución de actividades en colaboración con actores de la política estatal española contra la violencia de género, en su mayoría ajenos al mundo de la cooperación internacional al desarrollo. Esto ocurre en el caso de cuatro subvenciones bilaterales a organismos públicos, una de ellas con un país de América Latina y las otras tres fases de una misma propuesta con países del Magreb. En el caso de esas últimas, se incluyen como actividades viajes de intercambio, estudio y formación con el propósito de conocer la experiencia española sobre violencia contra las mujeres, aunque solamente una de ellas especifica la duración, contenido y perfil de los participantes, así como la organización española receptora (una asociación no gubernamental de atención a víctimas de la violencia de género). En el caso de la intervención en un país latinoamericano, la referencia al contexto o a las instituciones españolas es más genérica, afirmando que se espera contar con la asistencia técnica de cuerpos y fuerzas de seguridad en el desarrollo de programas de prevención de delitos, incluyendo os delitos de violencia intrafamiliar y de género.

Asimismo, se han encontrado referencias todavía menos específicas: en dos fases de un mismo proyecto ejecutado vía ONGD se propone llevar al país receptor en Centroamérica la experiencia de las instituciones, autoridades judiciales y cuerpos policiales españoles al desarrollo en la materia. Por último, dos proyectos también de organizaciones no gubernamentales sobre la trata en el Sudeste Asiático recuerdan el compromiso de la cooperación española con la lucha contra la violencia de género y con la defensa de los derechos de las mujeres.

Finalmente, y aún dentro de las propuestas de carácter transversal de este segundo enfoque, se puede aludir a las tres subvenciones del Programa Jóvenes

Cooperantes que se han identificados en este estudio y que se refieren a la violencia contra las mujeres¹³². Se trata de acciones para el apoyo técnico a programas de cooperación bilateral directa en temas de intervención judicial y para la atención a mujeres víctimas de la violencia doméstica, de género o familiar en países latinoamericanos.

Antes de pasar al análisis del tercer y último enfoque, es importante destacar dos temas: las referencias a los varones y a las masculinidades, y la heterogeneidad de las propuestas sobre la trata y la explotación sexual y laboral.

Solamente una de las propuestas que adoptan este segundo enfoque señala en la parte dedicada al diagnóstico a los varones como actores a los que se debe escuchar, y lo hace defendiendo la necesidad de implicarlos para lograr un mayor entendimiento de las causas que provocan las conductas que se quiere erradicar. En los pronósticos, algunos planteamientos proponen involucrar a los varones en actividades concretas de sensibilización, casi siempre como parte de grupos mixtos o de grupos en los que no se especifica el género. Esto es lo que ocurre en una subvención a un organismo público de un país asiático que, sin haber abordado el tema en el diagnóstico, tiene entre los resultados esperados lograr la sensibilización de ‘hombres y familias’ sobre aspectos relacionados con la prevención de violencia doméstica, a través de una campaña que incide en los cambios de conducta. En todo caso, los planteamientos relacionados con las masculinidades o con los varones son algo periférico en los objetivos y estrategias de todas las intervenciones, salvo en un caso ya mencionado en el que se incorpora el trabajo con los varones como una parte esencial de la viabilidad de la propuesta, dejando por tanto de ser una actividad aislada como en el resto de los casos.

Las catorce intervenciones incluidas dentro de la temática de la trata y la explotación sexual y laboral que adoptan este enfoque, son bastante heterogéneas entre sí. De partida, se centran en facetas y tipos diversos: la trata entendida principalmente como la explotación sexual de mujeres y niñas, asociada, además, a todo tipo de violencia: intervenciones sobre la prostitución (sin explicitar una conexión directa con la trata) vinculadas a pequeñas ONG; propuestas que se ocupan de las niñas en situación

¹³² Al igual que en las subvenciones de cooperación cultural y científica, es necesario volver a insistir en que se ha accedido a solamente una parte de las propuestas de este Programa. En este caso, las tres acciones analizadas que se vinculan a la cuestión de la violencia contra las mujeres pertenecen al mismo año, 2007. Pese a la colaboración del equipo del Instituto de la Juventud, aun cuando el Programa Jóvenes Cooperantes ya había concluido cuando se realizó la consulta para este trabajo, no fue posible identificar otras acciones relacionadas con el tema que nos ocupa.

de calle y la explotación laboral, sexual y de la mendicidad asociada a ello; e incluso una intervención multilateral para combatir la esclavitud por deudas existente todavía hoy en un país del norte de África. En todo caso, la mayoría de los pronósticos de este subconjunto sigue dando prioridad a la dimensión de la reparación, como ocurre en todas las intervenciones de este enfoque, con la particularidad de que pone mayor énfasis en las acciones de inclusión sociolaboral y de empoderamiento económico de las víctimas. Así, se subraya la necesidad y la conveniencia de rescatar y rehabilitar a estas mujeres y niñas (y también, ocasionalmente, niños), para reintegrarlas a la sociedad o a sus familias por medio de la formación y de las oportunidades profesionales.

En los dos pequeños proyectos dirigidos a mujeres en situación de prostitución que no hacen referencia al tema de la trata, ambos en países africanos, se busca la inserción social por medio de la inserción en el mercado laboral formal. Las propuestas ofrecen formación profesional y/o concesión de microcréditos y su justificación es la creación de estrategias de supervivencia que permitan a las mujeres a las que se atiende en estos programas a optar a otros modos de vida, proporcionándoles una vía para mejorar sus posibilidades de acceder al mercado laboral formal y para conseguir un trabajo mejor remunerado, menos inestable y más seguro.

7.2.3. El enfoque indiferente en cuanto al género

Por último, el enfoque menos frecuente entre las acciones de la cooperación al desarrollo que abordan la violencia contra las mujeres es el que se ha definido como **‘indiferente en cuanto al género’**. En este enfoque se reúnen las acciones que se caracterizan por no explorar dimensiones relacionadas con la desigualdad de género en las formas y los contextos de violencia en los que se intenta intervenir. ¿Quiere eso decir que son acciones que no adoptan la transversalidad de género o que ignoran los preceptos del enfoque género en desarrollo en la política de cooperación española al desarrollo? No, de hecho, difícilmente se las podría considerar completamente ajenas a esa cuestión.

La financiación que reciben alguna de estas acciones estarían dentro de los sectores definidos por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) como vinculados a la igualdad de género. Por otro lado, ‘la perspectiva de género’ ya constituía un aspecto de obligatorio cumplimiento en las convocatorias competitivas cuando se aprobaron la mayoría de estas acciones. Aun así, un examen detenido de las propuestas lleva a pensar que las cuestiones de género no constituían un aspecto determinante para elaborar los

diagnósticos o sus correspondientes propuestas y objetivos, como se detallará a continuación.

Aproximadamente el 10% de las intervenciones analizadas (24 de las 239 propuestas) adoptan este enfoque, sumando un desembolso total que ronda el 16% de todo el conjunto analizado (cerca de 18,5 millones de euros). Las propuestas se ejecutan en al menos diecinueve países distintos. No hay referencia al contexto, a las políticas sobre violencia de género o a la igualdad entre mujeres y hombres en España, como ocasionalmente ocurre en los otros dos enfoques. Al igual que ocurre en las otras dos perspectivas, el enfoque ‘indiferente en cuanto al género’ no se limita a una o a unas pocas modalidades e instrumentos de cooperación, sino que se encuentra en varios de ellos. Pese a que, como se ha mostrado, es minoritario en términos absolutos y relativos respecto al total de las intervenciones estudiadas, es el segundo en importancia en lo que se refiere a la cooperación multilateral y a los convenios plurianuales con las ONGD. Con respecto a las cuatro principales temáticas señaladas, no se ha identificado ninguna intervención relacionada con prácticas nocivas, y las intervenciones orientadas a violencias en la pareja o en la familia son numéricamente inferiores a las demás. Resulta llamativo el hecho de que la trata y el tráfico de seres humanos sean los problemas más frecuentemente abordados, seguidos por las violencias en contextos de conflicto o inseguridad ciudadana.

Aun siendo el **diagnóstico** la parte menos desarrollada en estas propuestas, hay aspectos en los cuales es necesario detenerse. En primer lugar, hay que señalar que pocas propuestas explican las definiciones de las violencias abordadas y, cuando lo hacen, se trata de valoraciones escuetas que no aportan grandes novedades. La mayoría de las veces, los diagnósticos parecen operar desde conceptos que se sobrentienden, por ejemplo, los abusos contra la infancia o la trata de personas (en sus distintas denominaciones y formas), aunque para este último tema hay una propuesta que recupera la definición del Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños. Asimismo, en al menos tres ocasiones las definiciones con las que se trabaja han sido elaboradas a partir de una descripción del problema en relación con otras violencias, como cuando se especifica que la violencia sexual abarca desde los abusos sexuales que ocurren en el contexto intrafamiliar hasta la explotación sexual comercial en calles y locales cerrados.

Sin embargo, no ocurre lo mismo en las intervenciones dirigidas a contextos de guerra o inseguridad ciudadana. La mayoría de ellas parte de definiciones extensas y particularizadas de las violencias a las que se refieren pues, posiblemente en esos

contextos tan sumamente complejos, las propuestas parecen tener que explicar con más detalle a qué se refieren. Es el caso de temas como la ocupación militar israelí de los Territorios Palestinos, la violencia juvenil en países centroamericanos y la situación de las personas refugiadas por el conflicto armado en el Congo.

Asimismo, en general, solo se pasa de forma parcial y resumida por las causas de las problemáticas abordadas, poniendo el mismo énfasis en los niveles macro y microsociales. En el nivel macrosocial, las causas están relacionadas tanto a generalidades (por ejemplo, la falta de infraestructuras y servicios, sin especificar cuáles, en regiones marginales de cualquiera de los países considerados), como a políticas y actividades económicas concretas que favorecen la existencia o el aumento de determinadas formas de violencia. Un ejemplo de esto último, es la cuestión del turismo en dos intervenciones que abordan la pederastia, entendida como un delito de abuso sexual contra niños y niñas (se mencionan explícitamente ambos sexos, especialmente el masculino) practicado por los extranjeros en el Sudeste Asiático. En el nivel microsocial, se hace especial hincapié en la condición social de las víctimas, definida en términos de una vulnerabilidad determinada o agudizada por su condición de migrante, refugiada, indígena o menor de edad, dependiendo del caso, pero siempre vinculada a la pobreza¹³³.

Salvo en tres propuestas (dos relacionadas con la trata de personas y una al trabajo infantil) que mencionan tangencialmente la desigualdad de género como un factor que se suma a otras causas macro sociales en su explicación, éste es un aspecto que pasa completamente inadvertido. Asimismo, más que la motivación u el origen de tales violencias, se suele resaltar los resultados que provocan, especialmente cómo violan derechos humanos y cómo comprometen el desarrollo individual y el futuro de niños, niñas y adolescentes cuando se ven afectados por los maltratos, la explotación laboral y sexual, así como por los conflictos armados y urbanos.

Respecto a la atribución de roles, las referencias a las víctimas de las violencias que se hacen en los diagnósticos se caracterizan por ser mayoritariamente neutras en

¹³³ La vinculación que se hace en estas propuestas entre pobreza y violencia, así como en el resto de intervenciones analizadas, es de lo más variopinto. Por ejemplo, un proyecto presentado por una ONG atribuye muchos de los casos de maltrato a la infancia a la pobreza y a la promiscuidad de los habitantes de los barrios marginales de una capital de un país africano. Sin querer desviar la atención de los puntos centrales de cada enfoque, el registro de estas asociaciones, poco frecuentes, pero problemáticas (en este caso, entre pobreza, violencia contra menores de edad, condiciones de habitabilidad y juicios morales sobre comportamientos sexuales) debería invitar a una reflexión sobre su acogida en el seno de la cooperación al desarrollo y la legitimidad que ésta última les otorga.

cuanto al género: por un lado, se utilizan sustantivos colectivos (comunidad, población, infancia, juventud) y otras expresiones con este mismo sentido (grupos vulnerables, por ejemplo); por otro, se hace mención de manera simultánea a ambos géneros (hombres y mujeres, niños y niñas, etc.). Incluso en una ocasión se dice que debido al mito existente en la sociedad a la que se refiere de que los varones no pueden ser violados, los niños están más desprotegidos frente a abusos sexuales que las niñas. En cuanto a los agresores, aunque apenas se los menciona, las referencias se centran primordialmente en individuos y se utiliza el género masculino (hombres, esposos, padres, tíos, suegros, guerrilleros, combatientes, etc.). Una propuesta relacionada con las violaciones de derechos humanos en comunidades indígenas y de ascendencia africana en países latinoamericanos, incluye a empresas, instituciones públicas y a sus representantes entre los agentes que provocan las violencias que se analizan. Asimismo, hay que señalar que las intervenciones sobre pederastia ya mencionadas en este capítulo elaboran sus diagnósticos (y también sus propuestas de acción) a partir del comportamiento de los agresores, unos individuos definidos en este caso tanto por su género masculino como por su condición de turistas y extranjeros.

Para concluir este panorama general sobre cómo las intervenciones agrupadas en este enfoque elaboran sus diagnósticos, se puede señalar que el tema de las masculinidades sigue estando mayoritariamente ausente. El único caso en el que podría decirse que se trata este tema, evita también un examen directo de la conducta de los varones. Se trata de una propuesta de intervención sobre violencia juvenil que pese a constatar su ‘rostro masculino’ y a identificar algunos factores que llevan a los chicos jóvenes a vincularse a actos de violencia y delincuencia, no relaciona dichos factores de manera explícita con problemas de género. Asimismo, como cabría esperar, tampoco se observa en los objetivos y estrategias de este u otros pronósticos nada relacionado con este tema.

Lo primero que hay que señalar sobre los **pronósticos** de las intervenciones que adoptan el enfoque indiferente en cuanto al género es el predominio de propuestas preventivas y transversales, curiosamente los mismos aspectos predominantes en el enfoque considerado hegemónico, aunque desarrolladas de manera diferente. Los demás tipos de acción (atención, reparación y sanción) son minoritarios y prácticamente solo aparecen vinculados a propuestas preventivas o transversales. Como excepción, se puede señalar, un proyecto en un país africano que no plantea ninguna actuación en los ámbitos preventivo o transversal y que se centra exclusivamente en la acogida de niños y niñas que huyen de un conflicto armado con el objetivo concreto de ofrecerles

educación primaria. Asimismo, los pronósticos que combinan estrategias diversificadas dentro de una misma intervención suelen ser aquellos con intervenciones más continuadas en el tiempo, prevaleciendo las intervenciones de carácter preventivo y transversal.

Con respecto a la prevención, sobresalen las acciones de sensibilización de amplio alcance y las campañas de información, dirigidas a la sociedad en general y a los grupos considerados más vulnerables a este tipo de violencia. En el primer caso, el objetivo es provocar un cambio de mentalidad y de actitudes en la opinión pública respecto a los problemas abordados, de modo que se cree un contexto social favorable para su eliminación. Las acciones de concienciación dirigidas a posibles víctimas se centran en el caso de la trata de personas, por ejemplo, en los grupos susceptibles de caer en las redes del tráfico de personas, por su género, etnia, nacionalidad o condición social.

Menos frecuentes, pero con una presencia también importante, son aquellas propuestas que pretenden involucrar a actores específicos de la sociedad civil, como organizaciones y movimientos sociales (las organizaciones de mujeres o feministas no se mencionan explícitamente, salvo en una de las intervenciones financiadas por el programa de cooperación del Instituto de la Mujer), así como a comunidades, grupos y autoridades a nivel local. Para ello, proponen actividades relacionadas, por un lado, con la sensibilización de esos actores y la dinamización de redes que podrían involucrarse en la lucha contra estas violencias, y, por otro, con la formación y la capacitación de pequeños grupos. Mucho más reducida, casi anecdótica, es la existencia de actividades preventivas dirigidas a ambientes institucionales seguros, al contexto escolar y a la socialización en la familia, vinculadas todas ellas a una única intervención contra la violencia infantil. La promoción de la masculinidad positiva o el trabajo con grupos específicos de varones no tiene cabida en las propuestas de este enfoque, lo que no debe sorprender puesto que se trata de una perspectiva que se ha considerado indiferente en cuanto al género.

Es necesario reflexionar sobre si es conveniente poner mayor énfasis en la prevención, dirigida principalmente a posibles víctimas o grupos de personas supuestamente más expuestas a la victimización, si, al mismo tiempo, se elude cualquier referencia a quienes causan la violencia de manera directa, ya que podría existir el riesgo de asignar a las propias víctimas la responsabilidad de evitar que se produzca la violencia. El peligro de que se produzca esta situación se constata al examinar una de las propuestas con este enfoque indiferente en cuanto al género sobre violencia sexual

que tiene entre sus objetivos alentar a mujeres y niñas a prevenir los casos de violaciones mediante el aprendizaje de técnicas de autodefensa y de control de su propia sexualidad. En este caso, se dice que deben ser adiestradas en el modo de impedir y denunciar los delitos sexuales, y también a cómo sobreponerse al trauma causado por dichos delitos, sin dedicar mención alguna a los autores de las violencias (ni siquiera se los identificar) o a la creación de ambientes seguros para ellas.

Respecto a la otra vertiente predominante en los pronósticos de este enfoque, las propuestas de actuación transversal, destacan los programas y las acciones de formación y capacitación destinadas a públicos de distintas procedencias. En este caso, destacan las actividades dirigidas a grupos especializados (personal sanitario, policías y otras autoridades judiciales son los más mencionados, pero también otros profesionales como periodistas y docentes) y, en menor medida, a determinados colectivos, como jóvenes, estudiantes y líderes locales que puedan transmitir entre la población local la formación recibida.

También sobresalen las propuestas transversales de diseño, elaboración y ejecución de planes institucionales para luchar contra las violencias contra las mujeres. Aunque la mayoría de las veces no se dan demasiados detalles sobre estos planes, parece que las intervenciones propuestas buscan integrarse en procesos ya en marcha o a punto de iniciarse. En un convenio de una ONGD especializada en infancia en un país andino, por ejemplo, se proponen una serie de actividades en el marco de un plan nacional ya existente para combatir la trata y la explotación sexual, laboral y con otros fines).

En un segundo plano, están las propuestas transversales de desarrollo de sistemas de información, todas ellas muy diferentes entre sí. Destinadas a recoger y visibilizar casos y datos de las violencias contra las mujeres, las propuestas varían desde la elaboración de una página web (en el caso de uno de los proyectos más pequeños de este enfoque) o el establecimiento de un observatorio sobre la violencia contra la que se dirige la acción, hasta la constitución de un grupo de investigación para apoyar el trabajo de las autoridades en la persecución de sospechosos de abusos sexuales a menores. Asimismo, hay que señalar que no existen propuestas de monitoreo o evaluación de planes y políticas públicas dedicadas al problema de la violencia contra las mujeres. Igualmente, se pone muy poco énfasis en el desarrollo de estudios o protocolos comunes de acción interinstitucional. En todo caso, estas propuestas transversales siempre están vinculadas a acciones relacionados con la violencia contra la

infancia y la juventud (maltrato familiar, la trata y explotación comercial y sexual) que presentan propuestas con múltiples niveles de intervención.

7.3. Reflexiones sobre conceptos y prioridades ausentes

Tras exponer los enfoques existentes en el conjunto de acciones de la cooperación española al desarrollo con respecto a la violencia contra las mujeres, es importante señalar las ausencias y olvidos relacionados, por un lado, con los conceptos y debates teóricos en estos campos y, por otro, con las orientaciones y prioridades establecidas previamente para la política pública de cooperación internacional al desarrollo de España. ¿Cuáles son los conceptos y aportes teóricos sobre violencia contra las mujeres, género y desarrollo que no se contemplan en este conjunto de intervenciones o están en segundo plano? ¿Qué objetivos, estrategias o líneas de actuación expresadas en la planificación de esta política pública española no se llevaron a la práctica? Además, habiendo analizado lo que el conjunto de las intervenciones se proponía hacer en ese período, ¿qué otras ausencias u omisiones es posible señalar y cómo se pueden interpretar?

Para empezar, es significativo que muchos de los diagnósticos analizados partan de las definiciones de violencia contra las mujeres utilizadas por las Naciones Unidas, tanto en la Plataforma de Acción de la IV Conferencia sobre la Mujer de Beijing como en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Algunos de ellos, incluso, las citan integralmente y una parte significativa de aquellos que adoptan el primer enfoque estructural, recuerda esos u otros compromisos asumidos por los Estados a nivel internacional, regional o nacional en relación a la lucha contra la violencia contra las mujeres. No obstante, en general, señalan su insuficiencia y su escasa efectividad si no van acompañadas de recursos públicos o se integran en un marco legislativo interno adecuado.

Como se ha venido mostrando, en los pronósticos destaca de manera especial una de las tres dimensiones de la definición de Naciones Unidas, la de la vida privada, íntima y familiar. Aun así, la dimensión de la violencia que ejerce la comunidad en general, el segundo ámbito de violencia establecido por la Plataforma de Beijing, tampoco se olvida, ya que las intervenciones sobre trata y tráfico (y en menor medida sobre la prostitución), son también bastante numerosas. La tercera dimensión de esa definición, la ‘violencia física, sexual o psicológica perpetrada o tolerada por el Estado’, es sin embargo, la menos frecuente en las acciones de la cooperación al desarrollo que

se examinen en este trabajo. Esto se debe a que, aunque a menudo se considera que el Estado es una estructura o actor cuyos representantes deben ser sensibilizados, formados y capacitados para que aborden adecuadamente la violencia contra las mujeres, no es tan frecuente que se reconozca que también puede ser un agente que victimiza y contribuye a que el problema ocurra, se reproduzca y se perpetúe. Incluso cuando este problema se refleja en la propuesta no se integra en ella ni se convierte en el objeto de la intervención. Un ejemplo es una acción clasificada dentro del enfoque indiferente que a pesar de incluir empresas, instituciones públicas y a sus representantes como causantes directos de la violencia (en este caso, violaciones de derechos humanos en comunidades indígenas y afrodescendientes), no afronta este aspecto del problema en la parte propositiva de la intervención.

En lo que concierne a los niveles en los que se manifiesta la violencia (directo, estructural y simbólico), es bastante obvio que el primero de ellos es el que está más presente en el conjunto examinado. La mención constante tanto a la naturaleza física y sexual del problema como a sus aspectos más cuantificables (datos de incidencia, denuncias, condenas, etc.) suelen precisamente reflejar la violencia directa. La insistencia en aportar datos y en abordar aquellas facetas de la violencia contra las mujeres más visibles e identificables, refleja el deseo de poner de manifiesto la necesidad o la urgencia de actuar. Los otros dos niveles de la violencia no se olvidan completamente. El nivel estructural de la violencia contra las mujeres es característico del enfoque predominante, pero está ausente o muy escasamente abordado en los otros dos enfoques, el naturalizado y el indiferente. El nivel simbólico de la violencia recibe cierta consideración en algunos diagnósticos (ocasionalmente se menciona el papel legitimador de la cultura o de la religión), pero está más ausente en las acciones, no encontrándose ninguna intervención que lo aborde manera exclusiva o prioritaria.

Todavía enlazando este análisis con la discusión teórico-conceptual realizada anteriormente, y recordando las conceptualizaciones de la violencia contra las mujeres según las diferentes fases del ciclo vital, la principal preocupación en el conjunto de intervenciones analizadas se centra en las niñas y las mujeres en edad reproductiva, como se ha venido señalando en páginas anteriores. Las adolescentes y jóvenes también son un grupo sobre el cual se intenta actuar con bastante frecuencia, especialmente en aspectos preventivos, aunque no tienen tanta visibilidad como víctimas, ya que son escasas las acciones que tienen en consideración la violencia en el noviazgo y en los ambientes escolares, por ejemplo. Las mujeres mayores parecen ser las grandes olvidadas, pues no se las menciona de manera concreta ni una sola vez, ni como

posibles víctimas a las que atender ni como grupo etario al cual orientar cualquier tipo de actividad.

Dadas las características de los documentos analizados, tampoco se encuentran propuestas cuyos contenidos hagan referencias directas a la perspectiva de la interseccionalidad. Sin embargo, con frecuencia se contempla que ciertas dimensiones de la identidad y algunos factores asociados a las condiciones de vida de determinados colectivos específicos de mujeres y niñas las hacen especialmente vulnerables y susceptibles a sufrir formas de violencia de género. En general, los diagnósticos reconocen que la combinación de diversas formas de discriminación sitúa a algunos grupos de mujeres en una situación de mayor propensión a sufrir violencias. Aun así hay que insistir en que estas referencias son casi siempre una simple constatación, y no ahondan en explicaciones sobre cómo se producen o se mantienen estos procesos.

En un número muy limitado de casos se menciona que el género y la edad (especialmente las primeras etapas de la vida, infancia y juventud), pero también la raza y la etnia (más de una treintena de propuestas de cooperación española sobre violencia contra las mujeres se dirigen fundamentalmente a mujeres indígenas, en especial de países latinoamericanos y asiáticos) interactúan multiplicando, agravando o profundizando la violencia sufrida por las mujeres, coartando sus oportunidades. Asimismo, las dimensiones étnicas y raciales aparecen a veces mencionadas como una característica cultural, religiosa o incluso lingüística, que provoca una mayor victimización de determinados colectivos respecto a otros en un mismo contexto. La cuestión de la nacionalidad de las víctimas se trae a colación principalmente en intervenciones con una perspectiva transnacional sobre la trata de personas o que se ejecutan en zonas fronterizas. En todo caso, en estas acciones no se suscita un debate sobre el problema ni se explican las posibles implicaciones para las propuestas.

La última cuestión que debe ser resaltada en relación con la perspectiva interseccional en el conjunto de intervenciones analizadas, es la completa ausencia de referencias a la orientación sexual y a la identidad de género, sea en la elaboración de estrategias concretas o como parte del diagnóstico de las situaciones que se abordan. En definitiva, la violencia que puedan sufrir las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales no se ha considerado un problema que hay que prevenir o combatir como parte de la violencia contra las mujeres en ninguno de los países en los que ha actuado la cooperación española entre los años 2005 a 2010. Esta consideración remite a lo discutido en el capítulo 4 sobre el énfasis de los enfoques teóricos en la violencia de pareja. También es bastante evidente el olvido de las víctimas ‘no deseadas’, como

pueden ser las mujeres encarceladas (priorizadas únicamente por dos pequeños proyectos en un país latinoamericano) o las mujeres en la prostitución sin que sean víctimas ‘rescatadas’ de la trata o la explotación (solamente dos intervenciones en países africanos van dirigidas a trabajadoras sexuales, como se las denomina, sin hacer referencia al tema de la de la trata o la explotación sexual).

Finalmente, respecto a la forma de abordar las masculinidades, se ha observado que es bastante marginal en las propuestas analizadas. Si se tiene en cuenta que en los documentos de planificación de la cooperación española al desarrollo examinados en el capítulo anterior apenas se menciona como una posibilidad de intervención, no es de extrañar este carácter marginal. Aunque es posible afirmar que la mayoría de estas propuestas parten de una visión negativa de los varones (identificados como los causantes directos de la violencia contra las mujeres), no se llega a naturalizar esta agresividad masculina y casi siempre se recurre a elementos estructurales y culturales para explicarla, como se ha visto en páginas anteriores. Asimismo, es interesante poner de relieve que aunque las masculinidades casi nunca se abordan de manera explícita en las propuestas de la cooperación española sobre violencia contra las mujeres, es bastante frecuente que se intente involucrar a niños, jóvenes y adultos varones en actividades preventivas. En este sentido, también es oportuno señalar la casi inexistencia de acciones destinadas exclusivamente a hombres agresores: las intervenciones suelen dirigirse a los varones de manera amplia y genérica, como personas a las que se debe sensibilizar e informar con vistas a la promoción de cambios sociales y de conducta y a la reducción de la tolerancia social hacia la violencia contra las mujeres.

¿Planificación o lista de intenciones?

Si en el capítulo anterior se realizó un análisis de los documentos políticos y de planificación de la cooperación española al desarrollo y, en este, se ha analizado el contenido de las intervenciones vinculadas a las diferentes formas de violencia contra las mujeres, es lógico indagar en qué medida es posible encontrar coherencias y continuidad entre las etapas de planificación y ejecución de esta política pública. Habrá que determinar, asimismo, si la planificación de la cooperación española al desarrollo en lo que se refiere a las violencias contra las mujeres no pasa de ser una lista de (buenas) intenciones que no cumple el papel de guiar la priorización de las intervenciones. La cuestión es relevante pero como se ha podido ver a lo largo de esta tesis, las referencias a la violencia contra las mujeres en los documentos que proporcionan las directrices

para la puesta en práctica de esta política pública son amplias y difusas, por lo cual resulta difícil, e incluso poco fiable, dar respuestas categóricas. En el caso de la planificación geográfica y sectorial, las dificultades no son menores, ya que los documentos orientativos de cada una de ellas fueron elaborados y publicados al mismo tiempo o, en la mayoría de los casos, después de que se aprobara una parte considerable de las intervenciones analizadas.

Por otro lado, teniendo en cuenta que los objetivos, actuaciones y líneas estratégicas propuestas sobre el tema de la violencia contra las mujeres no se expresan de manera cuantificable en muchos casos y puesto que este trabajo tampoco se plantea hacer una evaluación de los mismos, se considera que no procede una verificación de su cumplimiento o una valoración de sus resultados¹³⁴. Sin embargo, es posible destacar algunos elementos con el propósito de ahondar en los vínculos entre la planificación y las propuestas de intervención sobre violencia contra las mujeres.

Primeramente, hay que señalar que no se ha identificado ninguna propuesta de intervención sobre violencia contra las mujeres (pese a que los documentos de planificación contener referencias al problema) en los siguientes países: Afganistán, Costa Rica, Santo Tomé y Príncipe, Sri Lanka, Timor Oriental (aunque también es cierto que nunca han sido destinos destacados en la recepción de fondos de la cooperación española al desarrollo). En el caso de Costa Rica, una de las acciones de cooperación policial del Ministerio del Interior con este país parece haber abordado el tema (véase anexo 13), pero no se ha podido obtener una información detallada. Además, se han identificado cuatro intervenciones en México en el período que cubre el Banco de Datos (2005 a 2010), pero no se ha accedido a su documentación para realizar el análisis desarrollado en este capítulo (véase anexo 14).

Si bien puede resultar temerario hacer afirmaciones sobre correlaciones entre documentos orientativos y contenidos de las intervenciones sobre violencia contra las mujeres, se puede afirmar que en al menos algunos casos, las formas de violencia priorizadas en la planificación geográfica son las mismas que las abordadas en las intervenciones financiadas. Eso ocurre de manera bastante clara en la atención a

¹³⁴ La correspondencia entre planificación y asignación de recursos es fácilmente verificable cuando se trabaja con sectores de cooperación y modalidades de cooperación determinados cuya información es rápidamente rastreable mediante los códigos que los identifican. Lo mismo no ocurre, sin embargo, con temas transversales, como es el caso de esta investigación, donde además se prioriza un examen de los contenidos.

víctimas de violencia sexual en Bosnia-Herzegovina y en el Congo, la trata de mujeres con fines de explotación sexual en Camboya y la mutilación genital femenina en Malí.

Por último, es necesario destacar que el nivel de detalles con el cual los documentos de planificación abordan el tema de la violencia contra las mujeres no tiene relación directa con el número de propuestas financiadas o el volumen de recursos financieros destinados al problema en el período estudiado. Por ejemplo, aunque la referencia a la violencia contra las mujeres en el documento para Ecuador es realmente escasa (anexo 3), se desarrollaron al menos quince de las intervenciones analizadas en este capítulo, incluyendo dos convenios plurianuales con ONGD. En al menos otras dos se aborda el tema en el período estudiado, aunque no se hayan podido analizar sus propuestas. En el caso de Etiopía y Albania, a los cuales se destinaron, respectivamente dos proyectos CAP y una intervención multilateral de UNIFEM, los diagnósticos y pronósticos de sus documentos de planificación son claramente más extensos en relación a esta temática (anexos 6 y 7). Algo parecido se puede observar en la comparación de los países cuyos documentos de planificación destacan el tema de la violencia contra las mujeres en el sector Género y Desarrollo (anexo 5): en ese caso, hay tanto países que reciben una o dos intervenciones de la cooperación española en relación con este problema (Argelia, Cabo Verde, Panamá), como países cuyo número de intervenciones específicas al respecto casi alcanzan o incluso superan la veintena (Guatemala, El Salvador, Paraguay, Nicaragua).

CAPÍTULO 8 - CONCLUSIONES

Capítulo 8 – CONCLUSIONES

En los estudios sobre el desarrollo, al igual que en muchos otros campos de investigación, los sesgos androcéntricos y sexistas no han sido examinados hasta muy recientemente. Para algunas corrientes del desarrollo de mediados del siglo XX, las mujeres representaban un obstáculo al progreso y una resistencia a la modernización que debía superarse. Asimismo, las primeras consideraciones en este campo respecto a la situación de las mujeres (cuando estaban presentes), las veían esencialmente como seres vulnerables o solamente en su condición de madres, esposas y cuidadoras de los demás integrantes de la familia. Al tratarse de una idea que persiste internamente en el pensamiento occidental, el desarrollo tuvo que abrirse en las últimas décadas a consideraciones más inclusivas y amplias sobre las mujeres, las relaciones de género y las desigualdades en general. En este sentido, y sin perder de vista las dificultades de replantear a fondo su agenda política, el desarrollo tuvo reinterpretaciones novedosas que trataban de ir más allá de los aspectos estrictamente económicos y, así, las distintas formas de violencia contra las mujeres encontraron un lugar relevante en su debate y en sus prácticas más actuales.

Sin embargo, no es solamente en el ámbito del desarrollo donde la preocupación por la violencia contra las mujeres como un fenómeno que hay que combatir tiene un reciente recorrido. De hecho, es un problema que empezó a tenerse en cuenta a nivel mundial en las últimas décadas del siglo XX, gracias en gran parte a un extenso número de investigaciones que desde los estudios feministas y de género consolidaron un nuevo marco interpretativo, el de la violencia contra las mujeres como un fenómeno enraizado en profundas y persistentes desigualdades de género.

Tampoco en la cooperación internacional al desarrollo la atención a la violencia contra las mujeres se produjo de forma automática, aunque se comenzaran a adoptar enfoques que mostraban su preocupación por las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres. Como se ha visto en este trabajo, algunas versiones despolitizadas o instrumentales del concepto de género no abordan la violencia contra las mujeres en toda su complejidad. Tampoco se puede decir que la cooperación internacional al desarrollo exprese un compromiso coherente o permanente con la cuestión, ya que la diversidad de enfoques y propuestas en relación a lo que se considera como desarrollo y a cómo debe actuar la cooperación internacional conlleva a diferentes percepciones sobre este fenómeno, sus formas, causas y contextos. Como se ha mostrado, solo

recientemente este fenómeno ha tenido un espacio específico en la agenda del desarrollo y de las instituciones internacionales que lo promueven, siendo aún muchas veces algo bastante marginal en relación a sus principales preocupaciones o interés. Además, la prioridad de atender algunas formas de violencia y a sus víctimas en detrimento de otras deja de lado muchas situaciones y contextos en los que esta violencia se produce. Al mismo tiempo, cuando la justificación para actuar se basa en cuestiones de productividad o eficiencia, el entendimiento del problema no es correcto y las soluciones propuestas no son las más adecuadas.

La violencia contra las mujeres en la agenda de la cooperación española

Con respecto a la política pública española de cooperación internacional al desarrollo, los compromisos expresados en relación a la erradicación de la violencia contra las mujeres sufrieron un claro punto de inflexión a partir de la incorporación del enfoque Género en Desarrollo (GED) y la formalización de la transversalidad de género a mediados de los años 2000. Hasta que esta política pública no se interesó por discutir las relaciones y desigualdades entre los géneros, más allá de buscar solamente la participación de las mujeres en el desarrollo, el problema de la violencia contra las mujeres no fue incorporado como asunto de especial interés por parte de las instituciones que definen y ejecutan dicha política. Tampoco había despertado interés en la mayoría de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) que participan en convocatorias públicas para financiar acciones de cooperación al desarrollo, exceptuando a aquellas organizaciones que ya se encontraban previamente sensibilizadas y comprometidas con la cuestión, como se puede entrever en las entrevistas. A partir de los relatos de las personas entrevistadas y del examen de los principales documentos de esta política, se ha podido constatar que, anteriormente, la atención de los organismos públicos españoles de cooperación internacional al desarrollo hacia el problema de la violencia contra las mujeres era puntual y asistemática. La decisión de intervenir podía depender de factores circunstanciales, individuales y administrativos, ya que no existían directrices institucionales sobre cómo abordarla.

Desde 2005, sin embargo, el tratamiento que reciben las diferentes formas de violencia contra las mujeres en la cooperación española al desarrollo, al menos a nivel teórico, se ha vuelto más complejo y amplio, incluyendo dimensiones, aspectos y grupos de mujeres que sufren violencia basada en el género que antes no se tenían en

consideración. Ahora, además, a la hora de examinar sus causas y las posibles formas de actuación, se busca el respaldo de acuerdos y tratados internacionales y del pensamiento feminista. Esto se refleja, por ejemplo, en la constante consideración de la violencia contra las mujeres como violación de los derechos humanos, la preocupación por fenómenos como los feminicidios y el interés por poner de manifiesto las discriminaciones interseccionales y por abrir espacio a las organizaciones y movimientos feministas.

El problema es que a veces la aproximación al problema se llevó a cabo de manera fragmentada. La priorización no era clara y resultaba difícil percibir cuáles eran las preocupaciones e intereses concretos de la política española de cooperación internacional al desarrollo en la cuestión de la violencia contra las mujeres, ya que varían según los sectores y los países. En concreto, la amplitud y complejidad de la “Estrategia de Género en Desarrollo” contribuyó a esta sensación de que no existían prioridades claras de actuación. Además, las otras estrategias sectoriales de la cooperación española al desarrollo, elaboradas durante el período aquí analizado, abordaban el tema de manera muy dispar, incluyendo una completa ausencia de referencias a la cuestión en algunas de ellas. Lo mismo puede decirse sobre los documentos que recogen la planificación de esta política pública por área geográfica, en los cuales se definen prioridades de actuación en los diferentes países.

Se ha podido constatar que el tratamiento que el problema de la violencia contra las mujeres tenía a nivel internacional propició que entre las propuestas de la política española de cooperación al desarrollo se incluyera el de combatirlo. El papel de las políticas estatales españolas de igualdad y contra la violencia de género en la atención que se dio a esta cuestión en el ámbito de la cooperación internacional, por su vez, es percibido de manera difusa y velada. Esta influencia del nivel nacional se debe fundamentalmente a un cierto interés político del Gobierno a frente del Estado durante los años 2004 a 2011. Esta actitud influyó sobre distintos ámbitos de las políticas públicas españolas y encontró actores especialmente dispuestos a asumir el reto como prioridad.

En cuanto a las políticas concretas sobre violencia de género y a la legislación aprobada en este período, todavía es más difícil apreciar la relación directa. Aunque algunas de las acciones financiadas incluidas en nuestro banco de datos, especialmente dentro del enfoque identificado como predominante (enfoque feminista), vincularon sus propuestas de intervención a acciones puestas en marcha en España por organismos públicos estatales e instituciones de la sociedad civil, la relación de esas propuestas de

cooperación internacional al desarrollo sobre violencia contra las mujeres con las intervenciones sobre violencia de género llevadas a cabo a nivel nacional no se aprecia de manera rotunda. Más bien parecían acciones pertenecientes a esferas distantes cuyo vínculo se buscaba posteriormente para dar más relevancia a la propuesta presentada al organismo financiador.

Como se ha señalado en este trabajo, uno de los mayores riesgos de la acción de la cooperación internacional al desarrollo en temas de violencia contra las mujeres es condicionar el problema a la existencia de una situación de pobreza, de subdesarrollo o a una determinada cultura o contexto, especialmente en el caso de los países y culturas no occidentales. Los documentos que recogen la política española de cooperación al desarrollo eluden estos aspectos considerando inadmisibles cualquier forma de violencia de género, reconociendo su existencia generalizada y, además, buscando mostrar la coherencia con iniciativas políticas y legislativas a nivel estatal interno que muestran el interés por su erradicación. De todas maneras, es preocupante, que algunos fragmentos de estos documentos vinculen de manera explícita determinadas formas de violencia a religiones, países o regiones del mundo, especialmente aquellos documentos en los que se elabora un diagnóstico más detallado de la situación.

También se ha señalado que es fundamental que las agencias de cooperación internacional y otros actores que actúan en la promoción del desarrollo reconozcan que sus intervenciones, al incidir en las relaciones de género, pueden conllevar un recrudecimiento de la violencia hacia las mujeres, por lo que deben estar preparados para ello. Las herramientas para evitar esta situación pueden proporcionarles el enfoque que prioriza la atención a las relaciones de género y a la transversalización de la perspectiva de género en cada una de las acciones planificadas y ejecutadas, como muestra la extensa literatura al respecto. En ese sentido, en el conjunto de los documentos de la política española de cooperación internacional al desarrollo aquí analizado, se echa de menos una reflexión sobre la propia actuación. En general, no se han encontrado en estos documentos advertencias sobre los posibles efectos no deseados que la acción de los actores de la cooperación internacional al desarrollo puede tener en la presencia, agravamiento o intensificación del problema. Además, no está de más recordar que las distintas formas de violencia contra las mujeres y niñas deben considerarse no solo en las operaciones específicamente diseñadas para combatir dicha violencia, sino que deben ser foco de atención siempre que se trabaje en contextos en los cuales las mujeres y niñas viven situaciones de dominación o discriminación.

Se ha podido constatar que muchos aspectos de la lucha contra las distintas formas de violencia contra las mujeres en el ámbito de la política española de cooperación al desarrollo escapan a la contabilidad oficial de los recursos destinados a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Así, a la hora de hacer balance de la experiencia de esta política pública, debe tenerse en cuenta la atención que se presta al problema de manera transversal en programas de otros sectores de la cooperación internacional al desarrollo, como las intervenciones generalistas de formación y asistencia técnica, y en otros ámbitos de las relaciones exteriores de España, en especial en la participación en foros y organismos multilaterales.

Las soluciones elaboradas por las propuestas de intervención

Con nuestro trabajo, hemos querido aportar un examen de la política pública española de cooperación al desarrollo en lo que se refiere a la violencia contra las mujeres que fuera más allá de los datos sobre los flujos de la AOD. También hemos tratado de realizar un análisis que trascendiera la dimensión de declaración de intenciones y compromisos, expresados en documentos oficiales de planificación, y el aspecto subjetivo de las percepciones y valoraciones de los actores involucrados en esta política pública. Por este motivo, hemos optado por recoger, organizar y analizar la información contenida en las propuestas de intervención, tratando de captar cómo las organizaciones que las ejecutan entienden la violencia contra las mujeres y qué estrategias proponen para prevenirla, reducirla o eliminarla.

En un reflejo de las características generales de la cooperación española al desarrollo en cuanto a la heterogeneidad de actores y dispersión de la ayuda por diferentes países y regiones, estas intervenciones fueron financiadas por diferentes unidades administrativas con responsabilidad en esta política pública y propuestas por organizaciones de distinto tipo, origen y ámbito de actuación. Este aspecto contribuyó a que tuviéramos un conjunto amplio y sumamente diversificado para analizar. Asimismo, debemos reconocer que no se han podido identificar tendencias claras en la priorización geográfica en la financiación de acciones sobre la violencia contra las mujeres. Como mostrado, la planificación geográfica para esta cuestión ni es uniforme ni es determinante para la manera en que se aborda.

La heterogeneidad en los planteamientos del problema y en las formas de violencia contra las mujeres, sin embargo, no ha impedido reconocer aspectos comunes en estas acciones de cooperación al desarrollo, lo que ha resultado en la identificación

de tres enfoques sobre la violencia contra las mujeres en este conjunto de intervenciones: los enfoques feminista, naturalizado e indiferente.

En primer lugar, es importante resaltar la existencia de un enfoque predominante o hegemónico en el conjunto analizado, el feminista. Esta perspectiva está presente en 162 de las 239 intervenciones analizadas en esta investigación, las cuales reúnen, además, casi tres cuartas partes de los recursos financieros invertidos de ese conjunto de acciones correspondiente a los años 2005 a 2010. Asimismo, se ha podido detectar la existencia de dos enfoques menos prominentes (el naturalizado y el indiferente), pero con significativa presencia en el conjunto analizado. El enfoque naturalizado, incluso, aparece en los cuatro subgrupos de intervenciones, establecidos según la forma principal de violencia contra las mujeres contra la que se dirigieron (violencia en la pareja, trata y explotación de personas, prácticas nocivas y violencia en situación de conflictos armados e inseguridad ciudadana).

El primer enfoque considerado, al que se decidió llamar feminista, recibió esta denominación por los aspectos estructurales que destacan sus propuestas, tanto en la conceptualización de la violencia contra las mujeres como en la priorización de las acciones para las que pide la financiación. La mayoría de esas propuestas parten de un diagnóstico de mal funcionamiento de las instituciones públicas en los países en los que se trabaja para prevenir y actuar sobre la violencia contra las mujeres. Algo similar ocurre con el aspecto legal y jurídico de la cuestión. Como se ha señalado, la tendencia de las propuestas reunidas en este enfoque es casi siempre la de resaltar que aunque ya existen leyes y normativas, mejorables en muchos casos, el gran problema es que no se cumplen o no se aplican. En este sentido, y recordando la presencia relativamente frecuente de conceptos intrínsecamente vinculados a teorías y debates feministas (aunque con muchas variaciones en el nivel de profundidad o detalle con el que se abordaban), una parte de estas intervenciones reconoce de manera explícita el trabajo de las organizaciones y los movimientos de mujeres y feministas al enfrentarse a la violencia contra las mujeres en los diferentes contextos en los que se produce.

Asimismo, el segundo enfoque identificado, el naturalizado, reconoce, pero no aborda, la desigualdad de género como elemento explicativo de la violencia contra las mujeres. En general, las intervenciones reunidas en este enfoque dan mayor prioridad que el resto de las intervenciones a la reparación de los derechos vulnerados de las víctimas y a la atención a las consecuencias de las violencias en la vida de mujeres y niñas. Sin embargo, esta prioridad no va vinculada a una disposición a abordar de manera directa las causas de esas violencias. En el enfoque indiferente, predomina una

mirada que, aunque no ignora por completo la existencia de los aspectos relacionados con las desigualdades de género, no los considera importantes o significativos. Incluso la identificación de las víctimas de las violencias priorizadas en las intervenciones reunidas en este enfoque se hace principalmente sin tener en cuenta el género.

Las propuestas de actuación directa con agresores son claramente escasas y las únicas dos identificadas no son suficientemente específicas. También parece que comienza a haber una participación de grupos o redes de hombres en favor de la igualdad de género o contrarios a la violencia, aunque todavía está restringida al continente latinoamericano y al ámbito preventivo. En este sentido, se puede comprobar que la cuestión de las masculinidades constituye algo bastante marginal en las intervenciones sobre violencia contra las mujeres en la cooperación española al desarrollo.

Otras conclusiones e interrogantes para el futuro

Para concluir, queremos señalar algunos planteamientos que necesitarán más atención en futuros estudios sobre los temas aquí abordados.

Las prioridades de la cooperación española al desarrollo internacional en relación a la violencia contra las mujeres (o a prácticamente cualquiera de las temáticas en este ámbito) son establecidas por los actores estatales de esta política, que elaboran planes y distribuyen los recursos disponibles (aunque muy frecuentemente la profusión de documentos y orientaciones impiden tenerlas claramente definidas). Por esta razón, no deja de ser sorprendente la variedad de enfoques que se han identificado en relación a esta cuestión. En este sentido, se puede observar la existencia de espacios que permiten que las organizaciones no gubernamentales de desarrollo y posiblemente los actores locales de los países receptores, realicen aportaciones e incluyan matices, ya que muchas de las propuestas financiadas son formuladas por estos dos tipos de actores. En definitiva, en la práctica de la cooperación española al desarrollo habría espacio para incorporar conceptos y medidas que, a lo mejor, no habían sido contempladas o priorizadas en las orientaciones más generales.

Al mismo tiempo, como se ha tratado de explicar, la simple adopción del enfoque Género en Desarrollo por parte de instituciones, actores y políticas de cooperación internacional al desarrollo no lleva necesariamente a un tratamiento adecuado o suficientemente amplio del problema aquí estudiado. En este trabajo, hemos querido llamar la atención sobre algunos aspectos que se necesita tener en cuenta a la

hora de abordar la violencia contra las mujeres en la cooperación internacional al desarrollo, tales como tener en consideración las diferentes formas de violencia ejercida contra mujeres y niñas, reconocer las intersecciones de la discriminación de género con otras dimensiones, evitar un enfoque esencialista y simplificador de las masculinidades y la sexualidad, y abrirse a la demanda y a la participación de movimientos y organizaciones de mujeres y feministas. La política pública española de cooperación internacional al desarrollo, al menos en el período analizado, muestra señales prometedoras en lo que se refiere a la superación de algunos de estos desafíos.

Con respecto a abordar las masculinidades cuando se interviene en la violencia contra las mujeres, se observa una atención marginal, no institucionalizada, mostrada solamente en algunas de las intervenciones analizadas (especialmente en actividades de sensibilización y capacitación bajo el enfoque feminista en las que se trata de incluir a los varones para la promoción de cambios en sus comportamientos y valores).

En relación a la participación de organizaciones feministas y de mujeres, ésta llegó a tener un espacio específico, el programa de cooperación al desarrollo del Instituto de la Mujer y, además, bastante relieve entre las propuestas analizadas. No obstante, es cierto que este programa del Instituto de la Mujer siempre tuvo dimensiones reducidas y prácticamente estaba restringido a países latinoamericanos y caribeños. En el apoyo bilateral directo a organizaciones feministas y de mujeres predominó la financiación a organismos gubernamentales frente a la sociedad civil organizada.

Finalmente, es necesario hacer constar en estas conclusiones cierta preocupación en lo que se refiere a la sostenibilidad de la atención a la violencia contra las mujeres en la cooperación española, si dentro de la administración pública, de manera general, y de los organismos de cooperación al desarrollo, de manera específica, no se ponen en marcha mecanismos a largo plazo dotados de recursos humanos y financieros suficientes. Durante el período que cubre esta investigación, después de un considerable incremento en los recursos destinados a la igualdad de género y a la violencia en particular, estos recursos se han visto nuevamente reducidos, suprimiéndose incluso el instrumento de cooperación dedicado a estas temáticas con mayor recorrido en el ámbito de la cooperación española: el programa del Instituto de la Mujer. La unidad especializada en temas de género en la AECID no llegó a funcionar con presupuesto propio ni a tener un lugar destacado en el organigrama de este organismo. Tampoco las propuestas para profundizar los vínculos con organizaciones feministas y de mujeres de América Latina y Caribe, y con mujeres líderes de países africanos disfrutaron de un apoyo institucional duradero en la política española de cooperación al desarrollo.

Es importante aclarar que, si bien hemos concluido que dentro del conjunto de acciones sobre violencia contra las mujeres prevalece una concepción del problema basada, en líneas generales, en ideas feministas, esto no significa que consideremos que la cooperación española al desarrollo en su conjunto (ni siquiera la parte dedicada específicamente a cuestiones de género) pueda considerarse de igual manera. Primero, porque las acciones contra la violencia contra las mujeres representan un parte pequeña de esos otros dos conjuntos. Segundo, porque identificar el feminismo como parte del enfoque predominante en las acciones de violencia contra las mujeres no garantiza que ocurra lo mismo en acciones de género y menos aún de otras que no lo tienen en cuenta. Este enfoque feminista predominante no es exclusivo de las organizaciones que se definen a sí mismas como feministas o que privilegian en su actuación de cooperación la violencia contra las mujeres. Son pocas las organizaciones de carácter feminista y bastante amplio el número de organizaciones no específicamente feministas que han decidido consagrarse a ese problema, sea por convicción o para encontrar en una manera más de financiarse.

Se ha podido constatar, además, la necesidad de contar con un elemento que ayude a identificar y visibilizar la violencia contra las mujeres en la cooperación española al desarrollo y en los flujos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en general. En el cómputo que se hizo de la AOD española destinada a intervenciones relacionadas con la violencia contra las mujeres (AOD-VCM), además de los sectores tradicionalmente identificados con la igualdad de género, fueron significativas las aportaciones realizadas desde otros sectores, notablemente educación, salud, prevención de conflictos. Como habíamos supuesto, si esta identificación no va más allá de los sectores de género, se arriesga a tener una visión reducida de cómo se aborda esta temática en la práctica de la cooperación internacional al desarrollo.

Siendo éste el primer estudio dedicado a conocer de forma específica cómo se aborda la violencia contra las mujeres en la política española de cooperación internacional al desarrollo, confiamos en que el examen realizado haya contribuido a una mejor apreciación de las intervenciones llevadas a cabo en este ámbito.

EPÍLOGO

EPÍLOGO

Entre los objetivos planteados por este trabajo no se encontraba el de analizar la política española de cooperación al desarrollo posterior a 2010. Se ha preferido que el examen realizado se desarrollara en un período relativamente más homogéneo en el ámbito de la política española de cooperación al desarrollo, como fue el de los dos Planes Directores (2005-2008 y 2009-2012) elaborados y ejecutados durante las legislaturas socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008 y 2008-2011) – aunque el acceso a los documentos correspondientes a las intervenciones de los años 2011 y 2012 no fue facilitado por tratarse de acciones todavía en ejecución o en proceso de evaluación y auditoría en el momento en que las consultas estaban siendo solicitadas a las unidades administrativas correspondientes–.

Asimismo, es importante hacer constar, aunque de manera abreviada, los considerables cambios sufridos a partir del año 2010 por la política pública a la que estamos haciendo referencia. En lo que respecta a los compromisos con la igualdad de género y la lucha contra la violencia contra las mujeres, el escenario de los últimos años ha sido de inestabilidad, pero hay que reconocer que los datos y análisis más específicos al respecto todavía son escasos. Aun así, a continuación trataremos de aportar algunos elementos considerados oportunos y relevantes.

Al igual que lo ocurrido en el resto de la administración pública española en los últimos años, la política de cooperación al desarrollo no ha sido inmune a las medidas de austeridad fiscal tomadas a raíz de la reciente crisis económica y financiera internacional. En este caso, además, los recortes presupuestarios (de los más bruscos y significativos de toda la administración pública) se suman un marcado cambio en las prioridades, que habrían pasado a dar una primacía (todavía mayor) a los intereses de España y de las empresas españolas en los países socios o receptores de la cooperación al desarrollo. Un ejemplo de ello sería la preponderancia dada a la Marca España en el ámbito de toda la política exterior, incluyendo la cooperación internacional al desarrollo (Espinosa Fajardo 2014).

Ambos aspectos, el presupuestario/financiero y el político, aparecían constantemente mencionados en las entrevistas realizadas, especialmente en el caso de las personas vinculadas a organizaciones no gubernamentales, pero también en el caso de los representantes de los organismos públicos con los que se ha contactado a lo largo de la investigación. Resultaba inevitable la comparación entre la situación de desarrollo

institucional y aumento acelerado de recursos vivida en años anteriores (y la consecuente mejora del perfil político del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y sus organismos vinculados) con la situación de desmantelamiento (o al menos de reducción drástica) de la política de cooperación española al desarrollo y sus instituciones.

En todo caso, conviene precisar que los recortes en las partidas presupuestarias destinadas a la cooperación española al desarrollo a nivel estatal se iniciaron en la última legislatura socialista, especialmente en los dos últimos años considerados en nuestra tesis (2009 y 2010). Como se señala en el capítulo 6, la reducción de los recursos financieros destinados a esta política pública era ya notable tanto para los sectores relacionados con la igualdad de género como para las intervenciones sobre violencia contra las mujeres. A partir de 2011, sin embargo, la disminución en los recursos destinados a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) fue aún más drástica, llegando a representar una reducción del 70% entre 2009 y 2014 (Benavides 2015). A principios de 2015, los datos oficiales recopilados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sitúan a España a la cola de los países europeos, por detrás de Irlanda y Portugal, en la proporción de la AOD en relación a la renta nacional bruta (Atienza 2015). A partir de 2011, también se redujeron los instrumentos de la cooperación al desarrollo dedicados a los temas de género, como el programa de financiación de organizaciones feministas y de mujeres en América Latina del Instituto de la Mujer, y la suspensión o retraso de diferentes convocatorias de proyectos y convenios para la cooperación bilateral vía Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD).

Asimismo, el respaldo social y político del que llegó a disfrutar la cooperación al desarrollo en España estaba alcanzando niveles cada vez más bajos (CeALCI 2011; Angulo 2015). En tiempos de restricciones presupuestarias, la prevalencia de un discurso que percibe la cooperación al desarrollo como algo únicamente beneficioso para los países receptores favoreció que se continuara con los recortes en la AOD española (Olivié 2012), incluso en contra de la tendencia internacional de recuperación de esas inversiones a partir del 2013.

Con respecto a los compromisos con la igualdad de género y contra la violencia contra las mujeres asumidos en el ámbito de la cooperación española al desarrollo, los cambios han sido también evidentes, aunque todavía no han sido suficientemente estudiados. En el entramado institucional de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por ejemplo, la transversalización del

enfoque de género puede haber perdido fuerza en la reorganización administrativa promovida al inicio de la legislatura del Partido Popular (2011-2015), ya que formalmente los temas de género pasaron a ocupar un lugar inferior en el organigrama institucional (Espinosa Fajardo 2014).

De todos modos, como también se ha visto en esta investigación, la institucionalización de la perspectiva de género nunca fue completamente satisfactoria, pese a los considerables avances producidos a partir del año 2005. Se conocen informaciones de aspecto institucional y datos cuantitativos sobre la reducción en la AOD para los sectores más directamente vinculados a la promoción de la igualdad de género (Organizaciones e instituciones de igualdad y Programas de salud sexual y reproductiva), especialmente a partir de 2011 y 2012 (Grande Gascón y García Guindo 2012). No obstante, como sobre el papel la promoción de la igualdad de género sigue siendo considerada relevante y prioritaria –al menos así lo expresan el más reciente Plan Director (MAEC 2012), con vigencia entre 2013 y 2016, y la dirección de la AECID en posicionamientos públicos¹³⁵–, será necesario obtener más datos y realizar más estudios para conocer en profundidad el impacto que estas medidas pueden tener a corto y a medio plazo.

Cuando se hace balance de las políticas de igualdad y contra la violencia de género a partir de la adopción de las medidas de reducción de gasto fruto de la crisis –y más especialmente desde la llegada al poder de un gobierno conservador con mayoría absoluta en el Parlamento–, también hay que destacar su exclusión de la agenda política prioritaria. Aunque no es este el lugar de realizar extensas valoraciones a este respecto, los análisis atribuyen las incertidumbres y los retrocesos de esas políticas públicas en años recientes a cuestiones tanto políticas –derivadas de un giro conservador y del impulso de una agenda ‘antifeminista’ (Alfama, Cruells y Fuente 2014)–, como económico-financieras en las que se prioriza la estabilidad macroeconómica frente a las políticas sociales y de igualdad (Lombardo y León 2014). Como las esferas política y económica pueden difícilmente disociarse, algunas autoras consideran que “la actual crisis económica ha supuesto una ventana de oportunidad para el recorte de las

¹³⁵ En un artículo, su director ha señalado la incapacidad de la Agencia de “mantener el despliegue y la totalidad de los programas que la cooperación española”, a la vez que ha expresado querer dar continuidad a la “orientación” del trabajo realizado en la promoción de la igualdad de género en la región latinoamericana, debido al posicionamiento como un referente que habría logrado España (Garranzo 2013, 73-9).

instituciones relacionadas con la igualdad de género” (López, Peterson y Platero 2014, 185).

Por otro lado, aunque la legislación y las políticas estatales sobre violencia de género fueron temas que volvieron a destacar recientemente en los debates públicos de la campaña para las elecciones generales de diciembre de 2015, la atención al problema no se desarrolló como hubiesen deseado las activistas y las organizaciones feministas y de mujeres¹³⁶. Asimismo, se puede reconocer que la discusión sobre las diferentes propuestas de los partidos políticos sobresalía en las noticias políticas y podría haber sido determinante en los resultados¹³⁷.

De todas maneras, no hay duda de que en los últimos años se ha reducido la importancia concedida a la cooperación internacional al desarrollo y a las políticas estatales destinadas a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y a combatir la violencia de género. Aunque está por ver si se trata de un repliegue temporal o permanente, no sorprendería que la igualdad de género y la lucha contra la violencia contra las mujeres desaparecieran o quedaran arrinconadas en la agenda de prioridades de la política española de cooperación internacional al desarrollo. A ello se suma un escenario internacional incierto para la promoción de los derechos de las mujeres, en el cual las demandas relacionadas con la igualdad de género y la lucha contra las diferentes formas de violencia contra las mujeres siguen siendo temas pendientes que, además, deben enfrentarse a múltiples formas de oposición y resistencia, como se ha podido constatar a lo largo de esta tesis.

Igualmente complejo se presenta el panorama para la cooperación internacional al desarrollo, en el cual se perciben algunas novedades importantes (el endeudamiento de los donantes tradicionales, el aumento de importancia de nuevos donantes públicos y privados y la existencia de nuevos instrumentos y modalidades de cooperación), además

¹³⁶ Varias organizaciones expresaron su rechazo a los mensajes electores del Partido Popular respecto a las políticas durante la legislatura de Mariano Rajoy (*El Plural* 09/12/2015). La Ley Orgánica 1/2004, también fue objeto de debate durante la campaña: hubo críticas a la propuesta de Ciudadanos de extinguir las penas específicas por violencia de género y a la resistencia por parte del PSOE en reconocer fallos en la legislación que ha promovido (véase, por ejemplo, los artículos publicados en *El Mundo* (10/12/2015) y en *El Público* (08/12/2015)).

¹³⁷ Días después de las elecciones, el partido político Ciudadanos divulgó un informe en el que considera que su propuesta de cambios en la legislación sobre violencia de género pudo ser uno de los elementos determinantes para no haber logrado el resultado electoral esperado inicialmente por esta formación (*El Diario* 07/01/2016; *El Mundo* 22/12/2015). De hecho, en la campaña para las nuevas elecciones generales de junio de 2016, este partido reformuló la parte de su programa sobre las penas para los delitos de violencia de género debido al rechazo causado, aunque mantuvo la esencia de la propuesta de retirar el agravante para las penas por este tipo de delito (*El País* 07/06/2016).

de ya persistente y antiguo cuestionamiento de la pertinencia de la AOD como mecanismo de promoción del desarrollo (de Haan 2009; Domínguez Martín 2013). De hecho, difícilmente se podrían entender los cambios en el escenario español sin enmarcarlos en un contexto internacional que vuelve a dar preponderancia a una concepción de desarrollo definida en términos de crecimiento económico (Martínez y Martínez 2014).

Concluimos este trabajo con la convicción de que es necesario dar continuidad a las tareas de recopilación, producción y análisis de datos sobre las diferentes formas de violencia contra las mujeres en las políticas e intervenciones de la cooperación internacional al desarrollo, con el fin de intentar entender con más precisión estos procesos. Solo así se podrá seguir observando hasta qué punto y bajo qué enfoques y prioridades la cooperación española al desarrollo sigue comprometida, allá donde actúe, con la promoción de la igualdad de género y el combate de la violencia contra las mujeres.

ANEXOS

Anexo 1. Guión inicial para la realización de las entrevistas

A. PERFIL PERSONAL

Cargo actual

Formación y trayectoria profesional

Instituciones y cargos anteriores

Experiencia en relación a violencia contra las mujeres, género, cooperación.

B. ANTECEDENTES/CONTEXTOS GENERALES

B.1. Percepciones sobre el período previo (hasta 2004) de la política española de cooperación al desarrollo: contexto, características, objetivos, prácticas, actores, desde el punto de vista del entrevistado.

B.1.1. Relación con temas de igualdad de género y, más específicamente, las violencias contra las mujeres.

B.2. Percepciones sobre el período posterior (2005 en adelante) de la política española de cooperación al desarrollo: contexto, características, objetivos, prácticas, actores, desde el punto de vista del entrevistado.

B.2.1. Descripción del período iniciado con el segundo plan director.

B.2.2. Relación con temas de igualdad de género y, más específicamente, las violencias contra las mujeres

B.3. Percepción de cambios y continuidades: institucional, de planificación, financiero...

B.3.1. ¿Y en relación a los temas de género?

C. REMEMORACIÓN: GÉNERO EN LA POLÍTICA DE COOPERACIÓN

C.1. Contexto político, económico y social del cambio simbolizado por el II Plan Director y la Estrategia de Género.

C.2. Objetivos manifiestos y latentes, dificultades y facilidades en el proceso, en la percepción del/la entrevistado/a.

C.3. Descripción de hitos significativos.

C.4. Consideraciones sobre la recepción por parte de actores interesados: personal administrativo de la política de cooperación, personal expatriado, organizaciones en España, organizaciones en países receptores, gobiernos de países receptores, sociedad en general.

C.5. Participación o relación con ese proceso.

D. REMEMORACIÓN: VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA AGENDA POLÍTICA

D.1. ¿Cuándo escuchó por primera vez el tema en el debate sobre la cooperación española? De manera complementaria o alternativa, cuándo se ha dado cuenta de que era un tema que ganaba espacio. ¿En qué ámbito? ¿Quién lo propuso? ¿Quién lo discutía? ¿A qué estaba relacionado?

D.1.1. Relación de su surgimiento con los contextos interno e internacional.

D.1.2. Cómo notaba demanda desde los países receptores. ¿De qué manera y dónde? ¿Y desde organizaciones españolas? ¿Y las instituciones públicas?

D.2. Iniciativa relacionada a la aparición de ese tema en la agenda:

¿II Plan Director?

¿Estrategia Género en Desarrollo?

¿Planes de igualdad de oportunidad de España?

¿Ley contra Violencia de Género - 2004?

¿Ley de Igualdad - 2007?

D.3. ¿A qué factores atribuye el inicio/aumento del interés por el tema? ¿Externos? ¿E internos?

E. PERCEPCIONES SOBRE LA PRÁCTICA

E.1. De manera general, ¿qué concepción de violencia contra las mujeres piensa que trabaja (o ha trabajado en los últimos años) la cooperación española? ¿Por qué?

E.1.1. ¿Nota ausencias?

E.1.2. ¿Qué diferencias de cómo actúa la cooperación bilateral directa y vía ONGD? ¿Y la multilateral? ¿Y según las regiones de actuación?

E.1.3. ¿Cómo considera que está enfocada la participación masculina?

E.1.4. Si y cómo se aborda la actuación de la cooperación como elemento que cause/agrave la violencia hacia las mujeres.

E.2. ¿Cómo percibe la relación entre lo que se discute y lo que se financia en el tema?

E.3. Personalmente, y dada su experiencia en el campo, ¿qué importancia atribuye la política de cooperación al desarrollo de España a esa problemática?

E.3.1. ¿Cree que tuvo más o menos espacio en la agenda que en otros países? ¿Por qué?

E.3.2. ¿Qué opina del (de los) enfoque (s) trabajado(s)?

E.3.3. ¿Qué opina del financiamiento destinado?

E.3.4. ¿Cómo evalúa la consolidación del tema en la agenda de esta política pública?

E.4. ¿En su opinión, cuáles tipos de violencia recibieron más recursos y atención de la cooperación española en ese período? ¿Por qué?

E.4.1. ¿Qué enfoques piensa que ha predominado?

E.4.2. ¿En qué países piensa que se trabajó más?

E.4.3. ¿Y con cuales actores de cooperación?

F. SUGERENCIAS

F.1. ¿Otras personas o instituciones con las que debería hablar?

F.2. ¿Otros aspectos que considera importante que esa investigación aborde?

F.3. ¿Qué aporte cree que podría dar esta investigación a la política de cooperación al desarrollo?

Anexo 2. Documentos de la cooperación española al desarrollo analizados.

Período 2001-2004

I Plan Director de la Cooperación Española (2001-2004)
Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI): años 2001, 2002, 2003 y 2004
Estrategia para la Promoción de la Democracia y del Estado de Derecho
Estrategia para la Promoción de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
Actuaciones de cooperación española en países prioritarios y de especial atención 2003
Actuaciones de la SECIPI de 2000 a 2004
Actas de comisiones mixtas bilaterales: 18 documentos
"Programa de Cooperación Internacional 'Mujeres y Desarrollo'" (Instituto de la Mujer, 2004)

Período 2005-2010

II Plan Director de la Cooperación Española (2005-2008)
III Plan Director de la Cooperación Española (2009-2012)
Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI): años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010
Estrategia "Género en Desarrollo"
Estrategia con los Pueblos Indígenas
Estrategia de Acción Humanitaria
Estrategia de Construcción de la Paz
Estrategia de Cultura y Desarrollo
Estrategia de Educación
Estrategia de Lucha contra el Hambre
Estrategia de Medio Ambiente y Desarrollo
Estrategia Multilateral
Estrategia de Salud
Actas de comisiones mixtas bilaterales: 51 documentos
Documentos de Estrategia País (DEP): 23 países
Planes de Actuación Especial (PAE): 30 países
Plan de Acción: mujeres y construcción de la paz. Aplicación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU en la política española para el desarrollo

Anexo 3. Referencias a violencia contra las mujeres en documentos geográficos (I)

Bangladesh	La mujer sufre discriminación, violencia e injusticias en casi todos los ámbitos de su vida.
Brasil	<u>Cobertura de necesidades sociales.</u> Los colectivos más vulnerables y excluidos son infancia y juventud, por su desprotección, violencia, desempleo y baja calidad de la educación. Especial riesgo -comercio infantil, prostitución, pornografía o trabajo esclavo. <u>Género y Desarrollo.</u> A pesar de progresos, violencia doméstica es otro problema.
Ecuador	Hay niveles altos de violencia de género, tanto por maltrato físico (27.7% de los casos de agresión) como psicológico (24.9%).
México	Constituye uno de los desafíos la violencia física y emocional que padecen las mujeres. Un 40% de las mujeres de 15 años o más, casadas o unidas, reportaron haber sufrido violencia de pareja (emocional, económica, física o sexual) en los doce meses anteriores. En el examen ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se señaló como reto pendiente: medidas para erradicar discriminación y violencia contra las mujeres (sobre feminicidios se recomendó continuar investigaciones y sancionar a responsables).
Sto. Tomé y Príncipe	A pesar de algunos indicadores positivos, la discriminación de la mujer y la violencia de género todavía son elementos predominantes en la cultura santomense.
Sri Lanka	Discriminación y violencia de género están prohibidas por ley, pero todavía existen leyes y prácticas discriminatorias. La guerra aumenta la vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia y los abusos, tanto por parte del LTTE como del ejército. Existen deficiencias importantes, en particular en violencia, discriminación en legislación tradicional, derechos de propiedad y carga de trabajo.
Timor Oriental	La vulnerabilidad de niños y mujeres se ve afectada en desplazamientos (más violencia sexual y de género, acceso más difícil a DDHH básicos). Muchas mujeres sufren a diario la violencia de género.
Vietnam	Es preciso estudiar más a fondo la evolución del papel de las mujeres en la sociedad, el acceso a educación superior, el acoso sexual en el trabajo, el tráfico de mujeres (y niños) y la migración interna/ internacional de las mujeres y condiciones de trabajo aplicadas.

Fuente: Elaboración propia, a partir de los documentos DEP y PAE relativos a cada uno de los países mencionados (DGPOLDE/SECI y AECL s. d.-h, x, m, s. d.-ag, s. d.-e, s. d.-af, m, i).

Anexo 4. Referencias a violencia contra las mujeres en documentos geográficos (II)

Bolivia	<p><u>Género y Desarrollo</u>. Se apoyará el Plan Nacional para el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, impulsado por el Viceministerio de Género. Acciones que favorezcan políticas de facilitación del acceso de mujeres a servicios de atención y prevención de la violencia de género, a través de Servicios Legales Integrales a la Mujer.</p> <p>Sensibilización en el cambio cultural en favor de la equidad de género en todo el país y en la reducción de la violencia hacia las mujeres.</p>
Colombia	<p><u>Gobernanza democrática</u>. AP 6: Fortalecimiento y apoyo a órganos e instituciones que velan por aplicación, respeto y garantía de los derechos y la legalidad. Se apoyarán acciones de prevención, protección y sanción en violencias de género, la revisión del marco legislativo, mejora de protocolos de atención a las víctimas, formación de agentes, sensibilización a través de medios de comunicación.</p> <p><u>Prevención de los conflictos</u>. Fortalecimiento del Estado Social de Derecho (reparación y restitución de derechos de víctimas), acceso a justicia y erradicación de violencias de género. OH: se promoverá la visualización del impacto del conflicto armado en la vida y la seguridad de las mujeres y la atención según sus intereses y necesidades.</p>
Haití	<p><u>Género y Desarrollo</u>. OE: Apoyo y fortalecimiento de medidas integrales para prevención y tratamiento de la violencia de género y mejora de servicios públicos que faciliten el acceso y utilización por parte de las mujeres.</p>
Jordania	<p><u>Gobernanza democrática</u>. OE: Asegurar y fortalecer el papel institucional en la defensa de los derechos de la mujer, incluida la prevención y lucha contra la violencia de género.</p>
Líbano	<p><u>Género y Desarrollo</u>. OE: Apoyo iniciativas contra la violencia de género.</p> <p>Socios locales: Consejo contra la Violencia de Género</p>
Níger	<p><u>Género y Desarrollo</u>. AP162: Apoyo a campañas de información, educación para el desarrollo y sensibilización para prevenir violencia contra mujeres.</p>
Perú	<p>Acciones de cooperación técnica para prevención y tratamiento de violencia de género, mejora de servicios y programas específicos de acceso de las mujeres, desde el Programa Bilateral con el apoyo de organismos españoles especializados, la cooperación descentralizada y las ONGD.</p> <p>AP 153: Fortalecimiento de sistemas judiciales para mayor acceso a la justicia de las mujeres para la efectividad en la aplicación de las leyes. AP 156: Apoyo y fortalecimiento de medidas de prevención y tratamiento de violencia de género y mejora de servicios públicos que faciliten el acceso de las mujeres.</p>
Sudan	<p><u>Prevención de conflictos</u>. AP 167: Apoyo a acciones de desmantelamiento de minas, junto a programas de educación en prevención de riesgos en los campos, ayuda a desplazados internos y refugiados en su retorno, con especial incidencia en prevención y atención a mujeres y niños víctimas de conflictos violentos.</p>

Fuente: Elaboración propia, a partir de los documentos DEP y PAE relativos a cada uno de los países mencionados (DGPOLDE/SECI y AECL s. d.-f, z, r, u, s. d.-ac, s. d.-k, s. d.-ah, s. d.-t).

Anexo 5. Referencias a violencia contra las mujeres en documentos geográficos (III)

País	Diagnóstico	Pronóstico
Argelia	<u>Género y Desarrollo</u> . Instituto Nacional de Salud Pública (2004) dice que un 44% de maridos utilizarían violencia con sus mujeres. La cifra de UNICEF es superior. El Gobierno manifestó compromiso para proteger las mujeres maltratadas. España tendría capacidad de dar asistencia técnica gracias al avance en prevención y tratamiento de la violencia doméstica.	<u>Género y Desarrollo</u> . AP156: Apoyo a medidas para prevención y tratamiento de violencia de género a través de las instituciones oficiales correspondientes, así como a través de la Sociedad Civil. OH: Formación de personal en sectores de la administración y de la sociedad civil relacionados con la violencia de género.
Argentina	<u>Género y Desarrollo</u> . La violencia doméstica es otro problema considerable.	<u>Género y Desarrollo</u> . La lucha contra la violencia de género. En regiones del NOA y NEA y el Gran Buenos Aires, donde comunidades rurales indígenas y colectivos desfavorecidos siguen caracterizándose por el aumento en la violencia de género.
Cabo Verde	<u>Género y Desarrollo</u> . Cabo Verde no ha firmado el Protocolo Facultativo de la CEDAW. No existen datos estadísticos sobre violencia de género. No existe una política específica. No existen medidas de prevención y atención.	<u>Género y Desarrollo</u> . OE: Apoyo a medidas de prevención y tratamiento de violencia de género. Ventajas comparativas: La experiencia española en cuanto a legislación (Ley contra la Violencia de Género) y puesta en marcha de políticas de igualdad y violencia de género pueden ser compartidas (Institutos de la Mujer).
Costa Rica	Expansión de la violencia de género y femicidio ocupa atención de gobierno y sociedad civil. Ello condujo a adoptar nueva legislación en 2007, reformada en 2011, e inclusión de maltrato emocional y ofensas. Indicadores apuntan a amenazas para derechos de las mujeres (violencia de género, prostitución y abuso infantil).	Mejora de capacidades de las mujeres para el ejercicio de su autonomía económica, el acceso a servicios de calidad, la atención y prevención de la violencia doméstica, para la reducción de las brechas e género, por medio de la implementación del Plan de la PIEG.
Guatemala	La violencia hacia las mujeres se ha incrementado sustancialmente los últimos años en todos los ámbitos, siendo la intrafamiliar uno de los principales problemas, agravado por el alto grado de aceptación o tolerancia social.	<u>Gobernanza democrática</u> . Se hará incidencia en persecución de delitos cometidos contra mujeres y en el diseño e implementación de políticas de prevención del delito a nivel local, especialmente en áreas priorizadas por la cooperación española.
El Salvador	<u>Género y Desarrollo</u> . A pesar de avances en violencia intrafamiliar, no existe política integral de violencia de género.	<u>Gobernanza democrática</u> . Se hará referencia a mejora de garantías y derechos fundamentales en política interior, seguridad pública y ciudadana, especialmente contra la violencia de género.

Honduras	<p>En cuanto a inequidad de género en el país, destaca la escasa participación de las mujeres en la vida política, la violencia de género como un problema de elevadas proporciones y la inequidad en la percepción de ingreso.</p> <p>Alta prevalencia de la violencia de género en Honduras. Aunque no existen datos exactos y existe un alto número de casos no denunciados, el registro de denuncias interpuestas han experimentado un incremento sostenido</p> <p>A pesar de existir una Ley contra la Violencia Doméstica sólo un 10% de las denuncias han finalizado en sentencia.</p>	<p><u>Género y Desarrollo</u>. AP153: Fortalecimiento a sistemas judiciales para un mayor acceso a justicia de las mujeres. AP156: Apoyo a medidas integrales para prevención y tratamiento de violencia de género. OE: Apoyar el fortalecimiento institucional y la consolidación de leyes, políticas y planes en el sector público, con especial énfasis en acciones de prevención y tratamiento de la violencia de género. OH: Promover reconocimiento formal y real de igualdad de oportunidades y trato y el derecho a la no-discriminación por razones de sexo, con especial incidencia en violencia de género. AP162: Apoyo a campañas de información, educación para el desarrollo y sensibilización para prevenir la violencia contra mujeres.</p>
Marruecos	<p>El nuevo Código de Familia y el Plan Nacional contra la Violencia de Género establecen una tendencia de reforma que pretende ampliar los derechos de importantes colectivos y aumentar la cobertura de la justicia. La lucha contra la violencia de género se ha convertido en cuestión de importancia nacional.</p>	<p><u>Género y Desarrollo</u>. OE: Mejorado acceso de mujeres a justicia y servicios de protección para víctimas de violencia doméstica.</p> <p>Atención prioritaria: protección de las mujeres frente a la violencia doméstica.</p>
Nicaragua	<p>Sólo el 27,3% de las denuncias por violencia de género finalizan en sentencia. Cerca del 55% de las sentencias en casos de VIFS son absolutorias. Cobertura judicial y de defensa pública insuficiente y desigual. Alto coste de los procesos judiciales para una gran mayoría de población con bajos ingresos económicos y rezago en la resolución de los casos judiciales. Baja tasa de esclarecimiento de delitos policiales. El 27,6% de las mujeres sufren violencia física durante su vida. El 10,2% de las mujeres sufren violencia sexual su vida. Entre enero y marzo de 2004, la Policía Nacional recibió más de ocho mil casos de violencia intrafamiliar y más de mil cien casos sobre violencia sexual. Escasamente el 0,09% de la sentencias en casos de VIFS hagan referencia a las leyes específicas sobre este tema.</p>	<p><u>Gobernanza democrática</u>: Facilitar el acceso de las mujeres a la justicia penal (violencia intrafamiliar y sexual) y civil (derecho de familia). <u>Cobertura de necesidades sociales. Derechos de la infancia</u>. AP 76: Actuaciones dirigidas a la erradicación del trabajo infantil, la lucha contra discriminación y la violencia contra niñas, la atención a niños y niñas de la calle, y programas de acogimiento y adopción. Disminuir el número de niños y de niñas trabajadores. Apoyar la reducción del alto número de violencia contra las niñas.</p> <p><u>Género y desarrollo</u>. AP153: Fortalecimiento a los sistemas judiciales para un mayor acceso a la justicia de las mujeres para la efectividad en la aplicación de las leyes y garantías de su cumplimiento. AP156: Apoyo a medidas integrales para prevención y tratamiento de violencia de género. OE: Apoyar la reducción de violencia intrafamiliar y sexual.</p>

Panamá	<p><u>Género y Desarrollo.</u> Desde 2000 se registra un promedio anual de 33 muertes por violencia de género (7.33 por mil muertes) y muchas pasan desapercibidas. En áreas indígenas, sus representantes femeninas dicen que en el 90% de los hogares hay malos tratos y en el 60% incestos y abusos sexuales a menores. La Policía registró en 2005 1.811 denuncias por violencia intrafamiliar. De 31.296 denuncias, un 12% fueron violencia de género, según la definición de la ONU -cualquier agresión contra la mujer por el hecho de serlo, en ámbito público o privado.</p>	<p><u>Género y Desarrollo.</u> OE: Apoyo para la creación de una respuesta institucional efectiva y eficiente a víctimas de violencia de género e intrafamiliar en el área judicial, seguridad pública, peritaje legal y rehabilitación. OH: Fortalecimiento de la capacidad del Estado panameño en la protección de las mujeres en su derecho a no ser maltratadas. Zona/s de intervención prioritaria: Intervención de índole institucional y cobertura nacional; no obstante, se pondrá en marcha un proyecto piloto de un Centro de Atención Integral a la Mujer de Colón.</p>
Paraguay	<p>Las mujeres siguen sufriendo distintas formas de violencia, como trata y violencia basada en género. Las iniciativas en materia de género han tenido un fuerte apoyo en el Gobierno de Fernando Lugo, especialmente en materia de violencia de género y trata. La CE ha apoyado a la Secretaría de la Mujer en las políticas públicas para promover la igualdad real de hombre y mujeres y aquellas de violencia sobre las mujeres.</p>	<p>Desarrollo de sistema integral de atención a víctimas de violencia. Transversalización del enfoque de DDHH y gobernabilidad democrática en el sector rural y urbano marginal, con acción positiva hacia mujeres jefas de hogar y víctimas de violencia, comunidades y organizaciones indígenas.</p> <p><u>Gobernabilidad democrática.</u> desarrollar sistema integral de información y atención a víctimas de violencia, en particular intrafamiliar.</p>
República Dominicana	<p>La pobreza, la violencia doméstica, la discriminación económica, la escasa incorporación de la mujer a la actividad económica, son problemas recurrentes entre las mujeres dominicanas. Predomina cultura patriarcal y machista, inequidades en ámbitos doméstico, laboral y público, y preocupantes índices de violencia contra la mujer.</p> <p>Insuficientes políticas de protección y atención a mujeres.</p>	<p><u>Cobertura de necesidades sociales.</u> <u>Salud.</u> Mejora de la salud sexual y reproductiva y reducción de la mortalidad materna. Mejora de la salud infantil. OH: Reducción de la tasa de mortalidad materna y detección de casos de violencia intrafamiliar desde los servicios de salud. <u>Derechos de la infancia.</u> <u>Atención a la juventud.</u> OE: Proyectos de infancia, juventud, desempleados, pobres, inmigrantes excluidos, discapacitados, mujeres cabeza de familia o víctimas de violencia intrafamiliar.</p> <p><u>Género y desarrollo.</u> Fortalecimiento de políticas y mecanismos nacionales de igualdad de género. Mejora de oportunidades de las mujeres en el ámbito económico. Formación en valores ciudadanos. OE: Fortalecimiento Secretaría de Estado de la Mujer, transversalizar perspectiva de género en políticas públicas, servicios (violencia intrafamiliar, etc.), formación y sensibilización ciudadana. Fortalecimiento institucional de la Secretaría de Estado de la Mujer y de sus políticas. Fortalecimiento de ONG de mujeres.</p>

Túnez	<p>Instituciones han realizado esfuerzos en materia de salud reproductiva y se están empezando a preocupar por la violencia doméstica.</p> <p><u>Género y Desarrollo</u>. Faltan estudios sobre incidencia. Sin embargo, un estudio de la ONFP en 2005 preocupa: una de cada tres tunecinas han sufrido o sufrirá violencia de género. De ellas, un 15% acude a urgencias. El 45% de las mujeres que acuden a consultas de <i>planning familiar</i> declaran ser víctimas de violencia. (...) A partir de la reforma del Código Penal de 1993, el vínculo conyugal es agravante de violencia, pero la violencia conyugal no es reconocida por ley. Si bien existen medidas legales que la penalizan, no se aplican debido a resistencia de jueces. Policía, sanitarios y políticos no están concienciados. Casos de violación no se investigan. En cuanto a abusos sexuales, no hay prisión preventiva. Acoso sexual y violación en el matrimonio no reconocidos por ley.</p>	<p>Se llevarán a cabo actuaciones para reforzar la autonomía de las mujeres, sector del que no se ocupa ningún donante en la actualidad, y que ofrece amplias posibilidades. Se reforzaría de este modo la política de Túnez en materia de igualdad entre sexos, y dando respuesta a unos problemas acuciantes como la violencia de género.</p> <p><u>Género y Desarrollo</u>. AP 156: Apoyo a las medidas integrales para la prevención y el tratamiento de la violencia de género. OE: Apoyar programas y proyectos de atención y prevención de violencia de género.</p> <p>AP 162: Apoyo a campañas de información, educación para el desarrollo y sensibilización para prevenir la violencia contra las mujeres.</p> <p>La ONFP tiene intención de trabajar para la prevención y atención y ha puesto en marcha consejos conyugales y quiere establecer “guichets” jurídicos.</p>
Uruguay	<p>A cada 9 días muere asesinada una mujer o niña, víctima de violencia doméstica o sexual. La cobertura institucional es insuficiente y concentrada. Las intervenciones son puntuales y responden al momento de crisis, no aseguran atención efectiva, reparación de daños y modificación de condiciones que mantienen a la mujer en una relación abusiva de poder. Los avances constituyen iniciativas aisladas, sin continuidad ni interrelación entre sectores, por lo que no configuran una Política Pública integral, ni un sistema orientado a prevenir, asistir y atenuar el impacto de la violencia.</p> <p>Si bien se elaboró en el 2004 un Plan Nacional de Lucha contra la violencia doméstica, orientado a prevención, atención y rehabilitación de las personas involucradas, su nivel de implementación ha sido bajo y no ha contado con apoyos ni recursos financieros necesarios.</p>	<p><u>Gobernanza democrática</u>: OH: Se intentará contribuir a generar políticas de género a nivel nacional y departamental. Apoyar creación y fortalecimiento de servicios de prevención y lucha contra violencia doméstica.</p> <p><u>Género y desarrollo</u>. Fortalecimiento de políticas y mecanismos nacionales de igualdad de género. Apoyo a medidas integrales para prevención y tratamiento de la violencia de género. OE: Las políticas institucionales de lucha contra la violencia de género e integración de una perspectiva de género a la seguridad pública serán áreas estratégicas. Se apoyará la implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica, la instalación y fortalecimiento de servicios integrales de prevención y lucha contra la violencia doméstica y la integración de perspectiva de género a seguridad pública.</p>
Venezuela	<p><u>Género y Desarrollo</u>. Es el país de América Latina con los niveles más significativos de violencia intrafamiliar. Las instituciones no cuentan con capacidades técnicas.</p>	<p><u>Género y Desarrollo</u>. OE: Fortalecer planes nacionales de igualdad y programas de sensibilización, información y educación en materia de violencia contra la mujer.</p>

Fuente: Elaboración propia, a partir de los documentos DEP y PAE relativos a los países mencionados (DGPOLDE/SECI y AEI s. d.-d, c, i, s. d.-aa, l, s. d.-s, w, s. d.-aj, s. d.-q, o, y, s. d.-ab, e, k, s. d.-l).

Anexo 6. Referencias a violencia contra las mujeres en documentos geográficos (IV)

País	Diagnóstico	Pronóstico
Egipto	<p>Otros problemas: violencia contra las mujeres y MGF. Egipto hace progresos lentos en Género. Violencia de género está generalizada. Aun así, el gobierno egipcio, a través del Consejo Nacional de la Mujer, intenta trabajar: lucha contra violencia de género, a través de campañas de sensibilización de decisores públicos, policía, jueces, y medios de comunicación; educación, para dar a conocer a mujeres y niñas sus derechos; y adopción de medidas preventivas, incluyendo ejecución de la ley, protección legal y asistencia médica.</p>	<p><u>Género y Desarrollo</u>. AP 156: Apoyo a las medidas integrales para la prevención y el tratamiento de la violencia de género. OE: Apoyo para la prevención y el tratamiento de la violencia de género. OH: Lucha contra la mutilación genital femenina.</p>
Etiopía	<p>Con pobres niveles de acceso a la educación, salud, recursos económicos, etc., las mujeres etíopes sustentan el peso de sus familias y del país, mientras sufren una serie de prácticas dañinas como la MGF y la violencia de género.</p> <p><u>Cobertura de necesidades sociales. Salud</u>. La MGF es común en Etiopía (un 73%), así como matrimonios tempranos, desigualdad en la herencia, que afecta especialmente a viudas, y violencia de género (malos tratos, violaciones, raptos, etc.). Implican severos riesgos para la salud, además de dejar secuelas físicas, psíquicas y sociales. Acabar con ellas requiere trabajo comunitario y participación de instituciones gubernamentales, tradicionales y religiosas.</p> <p><u>Género y Desarrollo</u>. El Gobierno etíope ha ratificado la CEDAW y la legislación penal recoge la violencia contra las mujeres. Sin embargo, su implementación está lejos de ser real. Aunque no existen muchos datos, se calcula que la violencia de género es elevada, sobre todo en zonas rurales, siendo pocas las mujeres que denuncian los hechos por presiones sociales y familiares, falta de información, acceso, atención especializada y de capacidad del cuerpo policial y judicial. La violencia de género es un grave problema social y de salud. El miedo y la falta de recursos económicos; presiones sociales; falta de acceso a información, ayuda o medidas de protección; leyes, instrumentos y políticas, así como de un sistema policial y judicial adecuado; y el bajo nivel educativo de las mujeres, hacen difícil la</p>	<p>La salud sexual y reproductiva necesita mayor atención en cuanto a planificación familiar, reducción de mortalidad materna, educación sexual y lucha contra prácticas que atentan contra los derechos básicos de mujeres y niñas, como mutilación genital femenina y violencia de género (matrimonios precoces, raptos, violaciones, etc.).</p> <p><u>Cobertura de necesidades sociales. Educación</u>. OE: Apoyo a capacitación, que incluya formación en VIH/SIDA, planificación familiar, higiene, prevención de violencia de género. Salud. OE: Apoyo a Programas de lucha contra mutilación genital femenina y otras prácticas que violan derechos de mujeres, a través de líderes religiosos y tradicionales, gobiernos locales y comunidades. Se desarrollarán alternativas de empleo para mujeres que viven de esa práctica. Se podrían establecer mecanismos de intercambio de experiencias y buenas prácticas entre países de la región.</p> <p><u>Acceso a agua potable y saneamiento básico</u>. En tanto que mujeres y niñas son las responsables de ir a buscar agua, una mejora en el acceso al agua tiene incidencia en participación en el sistema educativo o en actividades de generación de ingresos, así como en la reducción de su vulnerabilidad (en concreto, de violencia de género).</p> <p><u>Género y Desarrollo</u>. OE: Desarrollo de medidas integrales de prevención y tratamiento de violencia de género, en especial sensibilización y acceso al sistema policial y judicial. Vincular estas medidas a acciones de erradicación de prácticas tradicionales que</p>

	denuncia. La violación sexual es común: se calcula que hay unas 30.660 violaciones al año y que un 26% de las niñas han sido violadas al menos una vez.	violan derechos de las mujeres (MGF y violencia de género). OE: Campañas, educación para el desarrollo y sensibilización para prevenir violencia de género, conectadas a acciones contra prácticas dañinas (MGF).
Mali	<u>Cobertura de necesidades sociales.</u> Los porcentajes de mujeres que sufren mutilación genital es elevado y su prevención es indispensable.	<u>Cobertura de necesidades sociales.</u> Apoyar a ONG que trabajen en este sector continúa siendo necesario. Actores: el proyecto en marcha contra la MGF es acertado, debe continuar y ver la posibilidad de extenderlo a otras zonas.

Fuente: Elaboración propia, a partir de los documentos PAE relativos a cada uno de los países mencionados (DGPOLDE/SECI y AECl s. d.-n, v, p).

Anexo 7. Referencias a violencia contra las mujeres en documentos geográficos (V).

País	Diagnóstico	Pronóstico
Bosnia-Herzegovina	Uno de los dramas del conflicto en la antigua Yugoslavia fue el uso de violencia sexual contra mujeres como arma de guerra: violaciones públicas y/o en presencia de familiares, violaciones sistemáticas en campos de concentración, embarazos y maternidades forzadas y secuestros en hoteles u hogares privados en los que eran esclavas sexuales. Las violaciones se produjeron de manera estratégica y bajo órdenes militares, con el fin de humillar al enemigo, sembrar el pánico y fomentar la huida. Aunque constan registrados 25 mil casos, la cifra puede alcanzar 60 mil. Sólo a partir del 1/09/2006 y en una de las entidades del país, las mujeres violadas han alcanzado el estatus de víctimas civiles de guerra.	La CE procederá a apoyar a las mujeres víctimas de violencia sexual durante la guerra a través de acciones que faciliten su acceso a la justicia, fomenten la denuncia de los culpables y ofrezcan la debida asistencia social, médica y psicológica a las mismas. La CE apoyará iniciativas nacionales e internacionales que velen por el reconocimiento y seguridad de las mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto bélico y estudiará impulsar iniciativas para incluir el enfoque de género en el Derecho Humanitario Internacional.
República Democrática del Congo	Elevado número de mujeres y niñas víctimas de violencia sexual como arma de guerra, con graves problemas médicos (enfermedades de transmisión sexual, incluido VIH/SIDA, fístula traumática), psicológicos y sociales que ello conlleva.	OE: se fomentará la participación en acciones que comprendan no sólo la prevención sino también la asistencia a las víctimas.
Afganistán	<u>Cobertura de necesidades sociales.</u> Auto-inmolación es una forma de suicidio habitual en protesta contra los abusos de la sociedad contra las mujeres –violencia doméstica, abusos sexuales...	<u>Cobertura de necesidades sociales.</u> OH: Atención especial han de recibir las pacientes quemadas en actos de auto-inmolación
Albania	<u>Cobertura de necesidades sociales. Educación.</u> Al menos 2/3 de los niños viven en entorno de violencia familiar y un número incalculable ha sido víctimas del tráfico de menores (explotación sexual o laboral). En el norte, donde el kanun está vigente, muchos permanecen encerrados en sus casas por miedo a venganzas intrafamiliares. Con respecto a las niñas, el panorama se agrava pues la sociedad albanesa conserva modelos patriarcales de desigualdad y enfrentan riesgo más elevado de secuestro o abuso al desplazarse a otras zonas para escolarizarse.	OH: Ampliación de oportunidades laborales, mediante formación u otros estímulos, servirá como prevención contra violencia de género y tráfico de mujeres. <u>Gobernanza democrática.</u> OH: El fortalecimiento del Estado de Derecho crea mecanismos para hacer valer derechos de población desfavorecida -órganos para la protección de mujer (especialmente de aquellas que sufren violencia de género). <u>Promoción del tejido económico.</u> Se adoptará perspectiva de género, favoreciendo el acceso al mercado laboral y autosuficiencia económica de las mujeres, especialmente de las más vulnerables (rurales y afectadas por violencia de género).

Camboya	<p>Destacar la difícil situación de mujeres y niñas, que sufren de discriminación en la educación, el trabajo, el acceso a la salud, las esferas de decisión pública, y son frecuentemente víctimas de violencia y/o explotación sexual.</p> <p>Expertos y organizaciones españolas tienen experiencia en Camboya, en temas como la lucha contra la trata y la explotación sexual, el apoyo a los afectados por las minas, las TIC, y el trabajo con minorías indígenas.</p> <p>El tráfico de mujeres y niños para su explotación sexual es un serio problema en Camboya.</p>	<p>Se trabajará por formación profesional que no discrimine a la mujer y se dirija a colectivos vulnerables (víctimas de explotación sexual). A nivel bilateral, atención a la defensa de derechos y seguridad de mujeres y niñas, particularmente en tráfico, explotación sexual (y vínculos con turismo) y violencia doméstica. La CE apoyará la lucha contra este serio problema de salud pública y la atención a sus víctimas.</p> <p><u>Cobertura de necesidades sociales.</u> AP76: Actuaciones dirigidas a erradicación del trabajo infantil, lucha contra discriminación y violencia contra las niñas, atención a niños/as de calle, y programas de acogimiento y adopción.</p> <p><u>Género y desarrollo.</u> OE: Protección de mujeres con especial vulnerabilidad: apoyo integral a mujeres y niñas víctimas de tráfico, explotación sexual o violencia.</p>
----------------	---	---

Fuente: Elaboración propia, a partir de los documentos PAE relativos a cada uno de los países señalados (DGPOLDE/SECI y AEI s. d.-a, b, g, s. d.-ad, s. d.-j).

Anexo 8. Expresiones relacionadas con la violencia contra las mujeres en las actas de Comisiones Mixtas de Cooperación.

PAÍS	AÑO DE CELEBRACIÓN DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA		
	I Plan Director: 18 actas	II Plan Director: 35 actas	III Plan Director: 16 actas
Bolivia		Violencia de género (2006)	
Caricom		Violencia de género (2006)	
Chile		Violencia contra mujeres (2006)	
Colombia	Niños y mujeres afectadas por violencia (2003)	Violencias de género, contra mujeres; conflicto armado (2007)	
Costa Rica		Violencia de género (2007)	
El Salvador		Violencia de género; intrafamiliar (2006)	
Filipinas	Mujeres maltratadas (2001)	Malos tratos; violencia física y psicológica (2006)	
Guatemala		Violencia contra las mujeres; de género (2005)	Violencia de género, contra las mujeres (2009)
Jordania		Violencia de género (2005)	
Mauritania		Prácticas nefastas (2007)	
México		Violencia de género; violencia intrafamiliar (2007)	Trata de personas; violencia de género (2011)
Nicaragua		Violencia sexual, intrafamiliar, de género (2005) Violencia de género; malos tratos (2007)	
Níger		Práctica tradicional nefasta; violencia de género (2008)	
Panamá			Violencia de género (2011)
Paraguay		Violencia de género, intrafamiliar; explotación sexual comercial (2007)	Violencia de género; explotación sexual (2011)
Perú		Violencia familiar y sexual (2007)	
República Dominicana		Violencia de género, emocional, física, intrafamiliar; maltrato (2005). Violencia basada en género, maltrato (2007)	Violencia contra la mujer, de género, intrafamiliar (2009)
Túnez		Violencia contra la mujer; comportamientos violentos (2007)	
Uruguay		Violencia de género (2005)	Violencia de género (2011)

Fuente: Elaboración propia, a partir de actas disponibles en la página electrónica de la AECID. Consultas realizadas en 14 de abril y 16 de agosto de 2011. (<http://www.aecid.es/es/servicios/publicaciones/Documentos/cmc/>).

Anexo 9. Listado de Códigos CAD y CRS para clasificar la AOD (resumen).

Cód. CRS¹	Cód. CAD	Descripción	Información complementaria
110		EDUCACIÓN	
111		EDUCACIÓN, NIVEL NO ESPECIFICADO	
	11182	Investigación educativa	Investigación y estudios sobre eficacia, adecuación y calidad educativa; evaluación y control sistemáticos.
112		EDUCACIÓN BÁSICA	
	11220	Educación primaria	Enseñanza primaria infantil académica y no académica; toda enseñanza básica y de primer ciclo sistemática; suministro de material escolar.
	11240	Educación primaria infancia	Educación preescolar académica y no académica.
113		EDUCACIÓN SECUNDARIA	
	11320	Educación secundaria	Enseñanza secundaria generalizada en todos sus ciclos.
	11330	Educación profesional	Formación profesional básica y enseñanza técnica a nivel secundario; formación en el puesto de trabajo; formación de aprendices; se incluye formación profesional no académica.
120		SALUD	
121		SALUD, GENERAL	
	12191	Servicios médicos	Laboratorios, clínicas, hospitales (equipamiento y suministros), ambulancias, servicios dentales, salud mental, rehabilitación, control enfermedades no infecciosas, control abuso medicamentos.
122		SALUD BÁSICA	
	12220	Atención sanitaria básica	Programas de asistencia sanitaria primaria y básica; programas de cuidados paramédicos y de enfermería; suministro de fármacos, medicamentos y vacunas para atención sanitaria básica.
	12240	Nutrición básica	Programas de alimentación directa (materna, lactancia y alimentación tras destete, infantil, escolar); identificación de deficiencias; suministro de vitamina A, yodo, hierro, etc.; seguimiento de condiciones de nutrición; enseñanza de nutrición e higiene alimentaria; seguridad alimentaria doméstica.
	12281	Educación sanitaria Formación personal sanitario	Información, educación y formación de la población para la mejora de conocimientos y prácticas sanitarias; campañas de sanidad pública y programas de sensibilización. Promoción de prácticas de higiene personal, incluido el uso de instalaciones de saneamiento y el lavado de manos con jabón. Formación de personal sanitario para asistencia básica.

130		PROGRAMAS/ POLÍTICAS SOBRE POBLACIÓN Y SALUD REPRODUCTIVA	
	13010	Políticas sobre población y gestión administrativa	Políticas demográficas/desarrollo; trabajo de censos, registro de nacimientos y fallecimientos; datos inmigración y emigración; análisis/investigación demográfica; investigación salud reproductiva.
	13020	Atención salud reproductiva	Fomento salud reproductiva; cuidados prenatales y perinatales, incluido el parto; prevención y tratamiento de la infertilidad; prevención y gestión consecuencias del aborto; actividades maternas saludables.
	13030	Planificación familiar	Servicios de planificación familiar, incluida la orientación; actividades de información, educación y comunicación; distribución de anticonceptivos; capacitación y formación.
	13040	Lucha contra ETS, incluido el VIH/SIDA	Actividades relacionadas con enfermedades de transmisión sexual (ETS) y el control del VIH/SIDA, como información, educación y comunicación; diagnóstico precoz; prevención; tratamiento; cuidados.
	13081	Formación de personal sobre población y salud reproductiva	Educación y formación de personal sanitario para servicios de población y salud reproductiva.
140		ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO	
150		GOBIERNO Y SOCIEDAD CIVIL	
151		GOBIERNO Y SOCIEDAD CIVIL, GENERAL	
	15120	Gestión financiera sector público	Fortalecimiento de la contabilidad financiera y gerencial; gestión del gasto público; mejora de sistemas de gestión financiera; procedimientos de cálculo de los ingresos impositivos; elaboración de presupuestos; auditoría sobre el terreno; medidas contra el despilfarro, el fraude y la corrupción.
	15130	Desarrollo legal y judicial	Apoyo a instituciones, sistemas y procedimientos del sector judicial, formales e informales; apoyo a ministerios de Justicia, Interior y Asuntos de Interior, jueces y tribunales; servicios jurídicos; asociaciones de abogados, enseñanza y formación en materia jurídica; mantenimiento de la ley y el orden y la seguridad pública; gestión de fronteras, agencias de aplicación de la ley, policía, prisiones y supervisión; defensores del pueblo, resolución alternativa de conflictos, arbitraje y mediación, asistencia jurídica y letrada; prácticas tradicionales, indígenas y paralegales. Medidas que favorezcan mejora de marcos jurídicos, constituciones, leyes y reglamentos legislativos y constitucionales de redacción y revisión, reforma jurídica, integración de sistemas formales e informales de la ley. Educación pública legal, difusión de información sobre derechos y recursos, campañas de sensibilización.

	15140	Administración pública	Sistemas de gobierno, incluidos parlamento, administración local, descentralización; función pública. Se incluyen servicios generales prestados por la Administración (o por encargo de la misma) no especificados en otro lugar, p.ej. policía, protección contra incendios, cartografía, meteorología, metrología legal, reconocimiento aéreo y teleobservación; edificios administrativos.
	15150	La participación democrática y la sociedad civil	Apoyo al ejercicio de la democracia y las diversas formas de participación de los ciudadanos más allá de los procesos electorales (15151); instrumentos de democracia directa, como referéndum e iniciativas ciudadanas; apoyo a organizaciones para representar y defender a sus miembros, vigilar, involucrar y responsabilizar a los gobiernos en el rendimiento de cuentas, y ayudar a los ciudadanos a aprender a actuar en la esfera pública; los planes de estudio y la enseñanza de la educación cívica.
	15160 15162	Derechos humanos	Medidas de apoyo oficial especializado en derechos humanos y mecanismos universales, nacionales y locales en sus papeles legales para promover y proteger los derechos civiles y políticos, económicos y sociales y culturales, tal como se definen en convenciones y pactos internacionales, el respeto de derechos humanos, compromisos en la legislación nacional, la presentación de informes y seguimiento, así como el diálogo sobre derechos humanos. Defensores de derechos humanos y ONG de derechos humanos; la promoción de los derechos humanos, el activismo, la movilización; la sensibilización pública y educación en derechos humanos. Los derechos humanos de programación dirigida a grupos específicos, por ejemplo, los niños, las personas con discapacidad, inmigrantes, minorías étnicas, religiosas, lingüísticas y sexuales, pueblos indígenas y los que sufren de la discriminación de castas, las víctimas de la trata, las víctimas de tortura.
	15164 15170	Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres	Ayuda para las instituciones y las organizaciones (gubernamentales y no gubernamentales) que trabajan para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.
152		PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	
	15210	Gestión y reforma de los sistemas de seguridad	Cooperación técnica en favor de parlamentos, Ministerios públicos, servicios encargados de hacer respetar la ley, instancias judiciales para ayudar a examinar y a reformar sistemas de seguridad con el fin de mejorar el control democrático del gobierno y de la sociedad civil. Cooperación técnica en favor de Gobiernos en apoyo del refuerzo de supervisión civil y control democrático sobre presupuesto, gestión, transparencia y auditoría de gastos en seguridad, incluidos gastos militares, en el marco de un programa de mejora de la gestión de gastos públicos. Asistencia a la sociedad civil con el fin de reforzar sus competencias en cuanto a seguridad y su capacidad de velar para que el sistema de seguridad esté administrado de acuerdo a normas democráticas y principios de responsabilidad, transparencia y buena gobernanza.
	15220	Construcción de la paz y prevención y solución de conflictos	Actividades civiles relacionadas con construcción de la paz, prevención y solución de conflictos, incluyendo el refuerzo de las capacidades, la supervisión, el diálogo y el intercambio de información.

	15230	Procesos de consolidación de la paz tras los conflictos (Naciones Unidas)	En el marco de operaciones de paz de Naciones Unidas, participación en la fase de consolidación de la paz tras los conflictos (supervisión de la aplicación de medidas de protección de los derechos humanos y observación de elecciones, ayuda para reinserción de soldados desmovilizados, recuperación de infraestructura nacional básica, supervisión o reciclaje de administradores civiles y de fuerzas de policía, formación en procedimientos aduaneros y de control de fronteras, asesoramiento en políticas fiscales o de estabilización macroeconómica, repatriación y desmovilización de grupos armados y destrucción de sus armas; apoyo eliminación minas antipersonas).
160		OTROS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS SOCIALES	
	16010	Servicios sociales	Legislación y administración sociales; fortalecimiento de instituciones y asesoramiento; seguridad social y otros planes sociales; programas especiales para tercera edad, huérfanos, discapacitados, niños abandonados; dimensiones sociales de ajustes estructurales; infraestructura y servicios sociales sin especificar, incluida la protección de consumidores.
	16020	Política de empleo y gestión administrativa	Política y planificación del empleo; legislación laboral; sindicatos; fortalecimiento institucional y asesoramiento a instituciones; programas de ayuda para desempleados; programas de creación de empleo y de generación de ingresos; seguridad e higiene en el trabajo; lucha contra el trabajo infantil.
	16030	Política de vivienda y gestión administrativa	Política de vivienda, planificación y programas; no incluye viviendas a bajo coste y erradicación del chabolismo (16040).
	16050	Ayuda multisectorial para servicios sociales básicos	Servicios sociales: la educación básica, la sanidad básica, la salud reproductiva y las cuestiones de población, el suministro de agua potable y el saneamiento básico.
	16064	Mitigación social de VIH/SIDA	Programas especiales que se destinan a tratar las consecuencias sociales del VIH/SIDA, por ejemplo asistencia social, jurídica y económica a personas viviendo con el VIH/SIDA incluidas seguridad alimentaria y empleo; apoyo a grupos vulnerables y a niños del SIDA, derechos humanos para personas afectadas por el VIH/SIDA.
400		MULTISECTORIAL	
	43010	Ayuda Multisectorial	
700		AYUDA HUMANITARIA	
	72010	Ayuda y servicios materiales de emergencia	Vivienda, agua, saneamiento y servicios médicos, medicinas y otros artículos no alimenticios de emergencia; ayuda a los refugiados y a los desplazados internos en países en vías de desarrollo con excepción de ayuda alimentaria de emergencia (72040) o de protección (72050).

Fuente: Resumido a partir de OCDE-CAD (2014). Para códigos no especificados en el documento anterior, se utilizó uno más antiguo (OCDE-CAD 2006), teniendo en cuenta que se trata de un lista actualizado periódicamente.

¹Esta tabla recoge los códigos CRS y CAD mencionados a lo largo del texto y en los anexos a continuación.

Anexo 10. Guión para codificación de objetivos, estrategias y prioridades del Marco del Pronóstico

PREVENCIÓN

P1. Modificar los patrones socioculturales, económicos y políticos para prevenir la violencia contra las mujeres a través de campañas de prevención, educación, sensibilización, capacitación, concientización y/o de fomento y divulgación de actitudes, valores y prácticas de respeto a los derechos humanos y a una vida libre de violencia.

P2. Crear “contexto institucionales seguros” y transformar las prácticas organizacionales para instaurar ambientes de tolerancia cero a la violencia contra las mujeres tanto en el interior de las instituciones públicas como en el sector privado (ámbito laboral en el sector privado y público, instituciones militares, religiosas, recreativas, deportivas, etc.).

P3. Crear redes entre actores sociales y político-institucionales [entre los que cabe destacar a las organizaciones sociales (movimientos, organizaciones y grupos de mujeres, feministas, de defensa de los derechos humanos, colectiva de lesbianas, de gais, bisexuales y transexuales, etc.), periodistas y otros/as profesionales de los medios de difusión, líderes/lideresas religiosos tradicionales, deportistas, actores/actrices, cantantes u otras personalidades destacadas con capacidad de incidencia para que actúen como “embajadores/as” de la prevención de la violencia contra las mujeres].

P4. Involucrar a jóvenes, hombres y niños (por ejemplo, a través de programas de masculinidad positiva) para que actúen como aliado/as de las transformaciones sociales y la modificación de pautas culturales que exacerban la violencia contra las mujeres.

P5. Fomentar la movilización comunitaria a través de la participación de las organizaciones sociales de base, las autoridades locales para implementar acciones de prevención en el ámbito territorial.

P6. Identificar “problemas conexos” que exacerban la violencia contra las mujeres (por ejemplo, el consumo de alcohol, de drogas, el acceso a armas de fuego, etc.) y crear agendas multisectoriales para garantizar la complementariedad entre las políticas.

P7. Diseñar e implementar programas de intervención temprana dirigidos a niños/as que hayan sido testigos de violencia en el entorno familiar o que hayan sufrido situaciones de violencia, en especial abuso sexual y/o violencia física.

P8. Forjar “entornos escolares seguros” que incluyan revisión y adecuación del material docente y de los textos que son utilizados en todos los niveles de enseñanza y la adaptación curricular para incluir la violencia contra las mujeres como parte de la planificación de los contenidos.

P9. Diseñar e implementar iniciativas que promueven la “crianza positiva y no violenta” a través de programas de prevención dirigidos a las familias, entre las principales estrategias.

P10. Diseñar e implementar iniciativas que promueven la autodefensa femenina frente a la violencia física o sexual.

ATENCIÓN

A1. Crear espacios para brindar una atención integral (atención médica y psicológica, contención emocional, asesoramiento jurídico y acerca de cómo efectuar la denuncia), alojamiento (albergues temporales, casas de acogida, etc.), servicios de intérprete y traducción, y centralizada en las víctimas/sobrevivientes para evitar la revictimización.

A2. Desarrollar programas de empleo y vivienda asistida (empoderamiento a largo plazo).

- A3.** Garantizar el acceso a servicios para la atención inicial o de crisis (emergencia).
- A4.** Elaborar protocolos de atención integral multisectoriales.
- A5.** Crear redes de apoyo multisectoriales.
- A6.** Brindar atención integral a hijos/as de víctimas/sobrevivientes.
- A7.** Habilitar el funcionamiento de líneas de atención telefónica en el ámbito nacional, gratuitas, con atención todos los días, las 24h, brindando asesoramiento, información, orientación y apoyo a las víctimas/sobrevivientes.

SANCIÓN

- S1.** Crear agendas de trabajo multisectoriales para la revisión y armonización de los marcos normativos para modificar y/o derogar disposiciones discriminatorias hacia las mujeres.
- S2.** Incorporar la transversalización del enfoque de género en las políticas.
- S3.** Adoptar medidas para garantizar la protección legal a las víctimas/sobrevivientes.
- S4.** Promover el endurecimiento de las penas a los agresores.
- S5.** Modificar el vocabulario utilizado en la formulación de las leyes con el fin de erradicar sesgos sexistas.
- S6.** Crear y/o fortalecer unidades especializadas de policía para responder a la violencia contra las mujeres (no en reemplazo de todas las unidades de policía ni de la labor de las fiscalías) y sistemas de tribunales especializados o procedimientos judiciales especializados.
- S7.** Desarrollar las capacidades de operadores/as de justicia y funcionarios/as del sistema judicial.
- S8.** Articular la labor de la policía y de los equipos de fiscales para atender la violencia contra las mujeres de manera coordinada y eficaz (por ejemplo, a través de la elaboración de protocolos de actuación).
- S9.** Garantizar la disponibilidad de órdenes de protección eficaces para las víctimas/sobrevivientes y los procesos jurídicos.
- S10.** Implementar programas “de intervención” para agresores (por ejemplo, programas que promueven la modificación de las conductas de los agresores como parte de la sentencia y no como alternativa al proceso jurídico).
- S11.** Incidir para la aprobación de leyes integrales sobre violencia contra las mujeres, o una ley específica sobre alguna de sus formas.
- S12.** Trabajar para la creación de jurisprudencia positiva en torno a la violencia contra las mujeres, en niveles nacional y regional.

REPARACIÓN

- R1.** Diseñar e implementar iniciativas tendientes a la reparación de los derechos vulnerados y los daños morales de las víctimas/sobrevivientes.
- R2.** Diseñar e implementar medidas intersectoriales que logren el empoderamiento económico de las víctimas/sobrevivientes (por ejemplo, a través del otorgamiento de microcréditos).
- R3.** Brindar asistencia psicológica, jurídica, social y económica a las víctimas/sobrevivientes.
- R4.** Priorizar que las víctimas/sobrevivientes accedan de manera inmediata a viviendas, medicamentos y demás insumos médicos u otros requerimientos específicos.
- R5.** Diseñar e implementar medidas encaminadas a la reintegración social y laboral a través de programas de empleo, formación profesional, etc.

ACCIONES TRANSVERSALES (comunes al conjunto de acciones)

- T1.** Desarrollo de capacidades: implementación de programas de formación y capacitación a distintos públicos y ámbitos.
- T2.** Elaboración de protocolos (inter)institucionales: guías, procedimientos, mapas, rutas críticas para el abordaje de la problemática.
- T3.** Desarrollo de estudios e investigaciones: impulso a estudios e investigaciones sobre violencia contra las mujeres, desde ámbitos gubernamentales o no; concesión de becas y financiación para tales fines.
- T4.** Desarrollo de sistemas de información: elaboración de instrumentos para recolección y medición de datos sobre violencia contra las mujeres, como encuestas específicas, módulos sobre violencia contra las mujeres en encuestas generales de población o demográficas, bases de datos en el interior de instituciones, datos administrativos, observatorios dependientes del Estado o de la sociedad civil.
- T5.** Monitoreo y evaluación de políticas y planes nacionales.
- T6.** Elaboración e implementación de planes y políticas (inter)institucionales en distintos niveles.
- T7.** Promoción de acciones de incidencia política, cabildeo o advocacy hacia las instituciones públicas.

Fuente: *Elaboración propia, a partir de adaptación de listado originalmente publicado en PNUD y ONU Mujeres (2013, 24-5; 44-8).*

Anexo 11. Acciones relacionadas con la violencia contra las mujeres, durante I Plan Director (según año y unidad financiadora)

Año	Unidad	Título	Código	País	€	Entidad solicitante
2001	AECI – Unidad ONGD	Centro de atención y prevención de violencia doméstica, Fase 2	16310	Bosnia-Herzegovina	119.911	MZC – Mujeres en Zona de Conflicto
		Ampliación del Centro 'Familia e Infancia' (maltratos infantiles)	16310	Jordania	327.590	
		Niños y niñas víctimas de la guerra, fase I	15063	Angola	27.935	
		Contribuir a la prevención y desvinculación de menores afectados por el conflicto armado en Urabá	16310	Colombia	87.983	
	Instituto de la Mujer	Prevención de la violencia intrafamiliar	42010	Bolivia	50.394	Centro de Ayuda Psicológica
		Prevención de la violencia contra la mujer y asistencia integral a las víctimas de violencia – II	42010	Bolivia	36.331	Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres
		Centro de capacitación para la prevención y atención de violencia cotidiana contra la mujer y el niño	42010	Perú	38.370	Centro de Promoción y Desarrollo de la Mujer
2002	AECI – Unidad ONGD	Centro de atención, acogida y reinserción de mujeres y niños víctimas de la violencia	16310	Argelia	118.644	Lleida Solidaria
		Centro de atención y prevención de violencia doméstica, fase 3	16310	Bosnia-Herzegovina	400.000	MZC – Mujeres en Zona de Conflicto
		Estrategia niños/as víctimas de la guerra en Angola	16310	Angola	187.841	Cruz Roja Española
		Fortalecimiento de capacidades de mujeres afectadas por violencia	42010	Perú	131.681	Cruz Roja Española
	Instituto de la Mujer	Prevención del tráfico de mujeres en el Valle del Cauca	42010	Colombia	42.000	Fundación Esperanza por un Retorno Seguro
		La mujer luchando por sus derechos	42010	Honduras	39.700	Programas para el Desarrollo de la Infancia y la Mujer
		Fortalecimiento de las capacidades jurídicas de las mujeres víctimas de violencia	42010	Marruecos	35.400	Asociación Marroquí para los Derechos de la Mujer
		Capacitación en desvictimización: se aprende a ser víctima, se puede desaprender también	42010	Uruguay	28.000	Casa de la Mujer de la Unión
		Formación y capacitación de capacitadoras para prevención del tráfico de mujeres en comunidades	42010	República Dominicana	45.400	Centro de Orientación e Investigación

2003	AECI –México, Am. Central y Caribe	Mejorar la eficacia de la administración de justicia en los delitos de violencia contra las mujeres	15030	Nicaragua	90.250	
	AECI –África Subsahariana y Asia	Prevención tráfico seres humanos (Camboya, Vietnam y Tailandia)	15063	Asia, Extremo Oriente	175.015	
	AECI – Am. del Sur	Atención humanitaria integral para las víctimas de violencia	43020	Ecuador	40.413	
	AECI–Unidad ONGD	Niños/as víctimas del conflicto en Angola	15063	Angola	188.797	Cruz Roja Española
	Instituto de la Mujer	Mejora de la capacidad de apropiación de las mujeres, de sus derechos para ampliar sus condiciones	42010	Nicaragua	17.112	Asociación para el Apoyo a la Nueva Familia en Nicaragua
		Mejoramiento de la salud física y mental de niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual	42010	Paraguay	26.077	Grupo Luna Nueva
		Mujeres de sectores populares de Guayaquil, afectadas por situaciones de violencia de género	42010	Ecuador	27.294	Centro Ecuatoriano para Promoción de la Mujer
		Atención especializada a víctimas de violencia en Jalapa	42010	Nicaragua	32.341	Asociación de Mujeres Oyanka
		Estrategias de intervención comunitarias para la prevención de la violencia sexual y doméstica	42010	Venezuela	32.525	Asociación Venezolana para una Salud Sexual Alternativa
		Acciones contra discriminación hacia mujeres en prostitución	42010	Perú	33.333	Movimiento El Pozo
		Concertación para la vigilancia ciudadana de los servicios de prevención y detección de la violencia	42010	Perú	33.341	Centro de Promoción y Desarrollo Poblacional
		Capacitación y sensibilización en violencia doméstica	42010	Uruguay	33.983	CLADEM
		Asistencia legal, capacitación y lobby del tráfico de mujeres	42010	Colombia	34.188	Fundación Esperanza por un Retorno Seguro
		Sensibilización y difusión de la situación de las mujeres frente a la violencia familiar y sexual	42010	Perú	34.188	Escuela Mayor de Gestión Municipal
		Prevención y atención al problema del abuso sexual e incesto	42010	Nicaragua	34.188	Mov. de Mujeres Lucrecia Lindo

2004	AECI – Mediterráneo y Europa Oriental	Apoyo asociación mujeres maltratadas	42010	Líbano	30.000	
	AECI – México, Am. Central y Caribe	Mejora y simplificación del procedimiento probatorio en delitos de violencia hacia las mujeres	15030	Nicaragua	90.813	
		Agilización procesos judiciales	15030	Panamá	90.000	
	AECI – África Subsahariana y Asia	Lucha contra la mutilación genital femenina II	42010	Malí	143.922	
	AECI – Am. del Sur	13 jardines materno-infantiles. Casa de los niños de Santa Fe	11240	Argentina	76.200	
	AECI – Unidad ONGD	Apoyo a 1200 mujeres víctimas de violencia	15063	Marruecos	127.686	Intermón-Oxfam
		Empoderamiento de las mujeres víctimas de la violencia en Rafah	42010	T. Palestinos	222.006	ACSUR – Las Segovias
		Atención integral a mujeres y niñas/os de escasos recursos económicos víctimas de violencia intrafamiliar (VIF)	42010	Paraguay	381.973	AIETI
	AECI – Gabinete	Seminario binacional “La violencia contra las mujeres: implicaciones psicosociales, económicas y jurídicas”	15063	Países en vías de desarrollo	15.626	

Fuente: elaboración propia, a partir de MAE-SECIPI (2003c), Instituto de la Mujer (2004) y MAEC-SECIPI (2004, 2006b).

Anexo 12. Intervenciones con documentación recibida y analizada (según unidad financiadora e instrumento de cooperación)

Instituto de la Mujer – Programa de Cooperación Internacional Mujeres y Desarrollo

Inicio	Título	País	€	Código	ONG española	ONG local solicitante
2005	A favor de una ley integral de violencia contra la mujer en Colombia	Colombia	33.000	15164		Corporación Sisma Mujer
2005	Educación, organización y acción ciudadana de las mujeres de Chimborrazo por sus derechos	Ecuador	33.000	15164		Centro de Desarrollo, Difusión e Investigación Social
2005	Monitoreo para la promoción y defensa de los derechos de la mujer, especialmente en prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres	Perú	33.000	15164	ACPP – Asamblea de Cooperación por la Paz	CLADEM
2005	Prevención, atención y sanción de trata de mujeres	Perú	33.000	15164		Movimiento El Pozo
2005	Fortalecimiento de la participación de las mujeres en la democracia y la gobernabilidad, de 4 municipios del Departamento de Matagalpa.	Nicaragua	32.000	15164		Bufete Jurídico Popular
2005	De víctimas a ciudadanas: víctimas del conflicto armado y violencia reivindican sus derechos a la verdad, justicia y reparación en el Oriente Antioqueño	Colombia	32.000	15164	AIETI – Asociación para la Investigación sobre Temas Iberoamericanos	Fundación Mujer, Arte y Vida
2005	Contraloría social para garantizar la vigencia de los derechos de las mujeres a una vida sin violencia	Ecuador	32.000	15164	Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres (CIMTM)	CEPLAES – Centro de Panificación y Estudios Sociales
2005	Violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe, estrategias comunicacionales, trabajo en red	Chile	31.000	15164		Fundación ISIS Internacional
2005	Promoviendo el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia doméstica	Bolivia	28.000	15164		IFFI - Instituto de Formación Femenina Integral
2005	Prevención y atención a adolescentes y mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y sexual	Nicaragua	27.000	15164	CIMTM	FUNDEMUNI – Fundación para Promoción y Desarrollo de las Mujeres y Niñas
2006	Contraloría social sobre la vigencia de los derechos a una vida sin violencia, fase II	Ecuador	52.000	15164	Educación Sin Fronteras	CEPLAES

2006	Educación en el sector educativo de primaria para prevención de violencia contra mujeres y menores	Guatemala	38.000	15164	Federación de Mujeres Progresistas	AMPI – Asociación de Mujeres de Petén IXQIK
2006	Mujeres jóvenes trabajando por sus derechos sexuales y reproductivos	El Salvador	37.000	13020	Asociación Entrepueblos	Asociación de Mujeres “Las Dignas”
2006	Promoviendo el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia doméstica y sexual	Bolivia	37.000	15164	Fundación Intered	IFFI
2006	Proyecto de organización y capacitación con apoyo en salud para mujeres rurales	Nicaragua	36.500	15164	Asociación Mundubat	Colectivo de Mujeres Masaya
2006	Gobernabilidad y democracia desde las mujeres en seis municipios del departamento de Matagalpa	Nicaragua	36.000	15164	AIETI	Asociación Centro Jurídico Popular
2006	Como mujer soy importante y defendiendo mis derechos, etapa II	Nicaragua	34.000	15164	Federación de Mujeres Progresistas	CEPS – Centro de Estudios y Promoción Social
2006	Proyecto a favor de una ley integral de violencia contra la mujer en Colombia, fase 3	Colombia	28.000	15164	ICID – Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo	Corporación Sisma Mujer
2006	Monitoreo para promoción y defensa de derechos de la mujer, con énfasis en prevención, sanción y erradicación de violencia contra las mujeres	América	27.000	15164	Solidaridad Internacional	CLADEM
2007	Programa de prevención de atención en VIF y acceso a políticas públicas de mujeres en cinco municipios del Departamento de Matagalpa	Nicaragua	34.900	15164		Asociación Centro Jurídico Popular
2007	Observatorio de medios de comunicación para la visibilización y trato correcto de las violencias de género en Colombia, fase II	Colombia	37.700	15164		Corporación Humanas
2007	De víctimas a ciudadanas: organización y movilización de víctimas del conflicto armado en 23 municipios del Oriente Antioqueño	Colombia	36.400	15164		CONCIUDADANÍA
2007	Educación al sector educativo de primaria para prevención de violencia contra mujeres y menores	Guatemala	49.448	15164		AMPI

2007	Fortalecimiento de la atención integral, capacitación y promoción de la igualdad de género a mujeres de escasos recursos económicos, víctimas de la violencia intrafamiliar	Paraguay	32.000	15164	AIETI	Fundación Kuña Aty
2007	Redes de movilización social para un cambio en los modelos de comportamientos violentos hacia mujeres	Chile	41.800	15164		Fundación ISIS Internacional
2007	Organización y capacitación de las mujeres con apoyo a su salud sexual y reproductiva	Nicaragua	30.900	13020		Colectiva de Mujeres de Masaya
2007	Sensibilizando sobre la trata de mujeres en la migración de Lima y el Norte del Perú, frontera con Ecuador	Perú	36.900	15164		Movimiento El Pozo
2007	Contraloría social sobre la vigencia de los derechos a una vida sin violencia para las mujeres	Ecuador	36.800	15164		CEPLAES
2007	Promoviendo el acceso a la justicia de mujeres de víctimas de violencia doméstica y sexual desde un enfoque de interculturalidad	Bolivia	31.400	15164		IFFI
2008	Mujeres liderando procesos de prevención contra la trata de personas y el tráfico de migrantes	Ecuador	49.700	15162	Federación de la Mujer Rural	Fundación Esperanza
2008	Educación para la prevención de la violencia contra las mujeres y por una educación no sexista, fase 3	Guatemala	36.900	11220	Educación Sin Fronteras	AMPI – Asociación de Mujeres de Petén IXQIK
2008	Centro integral de atención a mujeres maltratadas CIAMM	Guatemala	58.200	15162	Solidaridad Internacional	CICAM – Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer
2008	Como mujer soy importante y defendiendo mis derechos, fase 3	Nicaragua	55.200	15162	Federación de Mujeres Progresistas	CEPS
2008	Mujeres del norte de Nicaragua haciendo frente a la violencia y discriminación	Nicaragua	57.800	15162	ACSUR – Las Segovias	Asociación Civil Grupo Venancia
2008	Fortalecimiento de la atención integral, capacitación y promoción de la igualdad de género a mujeres de escasos recursos económicos, víctimas de violencia intrafamiliar, fase 2	Paraguay	57.000	15162	AIETI	Fundación Kuña Aty

2008	Observatorio Manuela violencia hacia las mujeres y feminicidio	Bolivia	53.600	15162	CIMTM	CIDEM – Centro de Formación y Desarrollo de la Mujer
2008	Redes de movilización social para un cambio en los modelos de comportamientos violentos hacia las mujeres, fase 3	América del Sur	58.900	15164	Fundación Intered	Fundación ISIS Internacional
2008	Observatorio de medios de comunicación para la visibilización y trato correcto de las violencias de género en Colombia, fase III. Consolidación y transferencia a 5 países de Sudamérica	América del Sur	62.500	15164	Fundación Mujeres	Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género Humanas
2008	De víctimas a ciudadanas: empoderamiento de las víctimas como sujetos de derechos, fase 3	Colombia	57.500	15162	ACPP	CONCIUDADANIA
2009	Capacitación en género y desarrollo integral en comunidades bateyanas	Dominicana, Rep.	42.100	15170	ACPP	Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas
2009	Comunicación y derechos sociales y reproductivos de las mujeres en Haití	Haití	56.200	15170	Solidaridad Internacional	Rezo Fanm Radyo Kominotè Ayisyen
2009	Fortalecimiento de atención integral, capacitación, promoción de igualdad de género a mujeres de escasos recursos, víctimas de VIF, fase 3	Paraguay	59.000	15170	AIETI	Fundación Kuña Aty
2009	Mujeres del norte de Nicaragua, haciendo frente a la violencia y discriminación, fase 2	Nicaragua	46.100	15170	ACSUR – Las Segovias	Asociación Civil Grupo Venancia
2009	Mujeres liderando procesos de prevención y atención contra la trata de personas y tráfico de migrantes, fase 2	Ecuador	73.500	15170	Federación Mujer Rural	Fundación Esperanza
2009	Mujeres y jóvenes rurales por la defensa y promoción sus derechos con equidad, en los Nueva Segovia	Nicaragua	59.800	15170	Asociación Entrepueblos	FUNDEMUNI
2009	Prevención de la violencia de género con enfoque de desarrollo comunitario en 16 comunidades rurales de El Viejo, Chinandega	Nicaragua	58.400	15170	Fundación Mujeres	APADEIM – Asociación para el Desarrollo Integral de las Mujeres
2009	Súbete al colectivo de las TIC para mujeres	Paraguay	59.000	15170	AIETI	Asociación Kuña Roga (Casa de la Mujer)

2010	Proyecto para una vida libre de violencia e igualdad de oportunidades	Bolivia	50.500	15170	Fundación Interred	Oficina Jurídica para la Mujer
2010	Empoderamiento e incidencia política en mujeres trabajadoras sexuales	Ecuador	54.600	15170	Mujeres en Zona de Conflicto	Corporación KIMIRINA
2010	Centros de prevención y atención integral en violencia contra las mujeres en Ciudad Capital, Chimaltenango y Jutiapa	Guatemala	47.900	15170	Solidaridad Internacional	CICAM
2010	Empoderamiento, salud sexual y reproductiva a jóvenes y mujeres empobrecidas en Villa de San Francisco	Honduras	54.600	15170	Fundación Mujeres	CESADEH – Centro de Estudios y Acción para el Desarrollo de Honduras
2010	Consolidación organizativa para toma de decisiones, procesos de desarrollo local y promoción de la lucha contra la violencia de género, fase II	Honduras	54.600	15170	Federación Mujeres Progresistas	CIPE Consultores – Centro de Investigación, Planeamiento y Evaluación
2010	Irradiando el desarrollo local con enfoque de género en Suchitoto	El Salvador	54.900	15170	Asociación Cooperación	Asociación para el Desarrollo y Defensa de la Mujer

Instituto de la Juventud – Programa Jóvenes Cooperantes

Inicio	Título	País	€	Unidad de destino del/la cooperante		
2007 1 año	Programa Jóvenes Cooperantes. XVII y XVIII Edición	El Salvador	18.603	Comisión Coordinadora Sector de Justicia – Unidad Técnica Ejecutiva		
		Guatemala	18.603	Instancia Coordinadora de Modernización del Sector Justicia		
		Uruguay	17.376	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)		

AECID – Dirección de Relaciones Culturales y Científicas – Programa Cooperación Interuniversitaria (PCI)

Inicio	Título	País	€	Código	Universidad española	Universidad local¹
2009	Diagnóstico de incidencia y formas de violencia doméstica por razones de género en mujeres Aymaras urbanas de Arica y Parinacota	Chile	23.000	15170	Universidad de Salamanca	Universidad de Tápaca

AECID – Dirección de cooperación para África, Asia y Europa Oriental – Convocatoria Abierta y Permanente (CAP)

Inicio	Título	País	€	Código	Entidad solicitante
2005 1 año	Proyecto multidisciplinar centrado en las víctimas para rehabilitación y reintegración de mujeres y niñas víctimas del tráfico para esclavitud sexual (II)	Camboya	300.000	15164	AFESIP España

2005 1 año	Apoyo a la prevención del tráfico de personas	Bosnia-Herzegovina	175.000	15162	Fundación La Strada
2005 1 año	Construcción y mejora de centros de acogida y formación para mujeres y niñas víctimas de explotación sexual y taller de costura	Camboya	110.186	15164	AFESIP España
2006 3 años	III fase proyecto de lucha contra la Mutilación Genital Femenina en Segou y Kayes	Malí	299.000	13020	Cruz Roja Española
2006 1 año	Proyecto multidisciplinar de lucha contra causas y consecuencias de la trata para explotación sexual de mujeres y niñas en Mekong	Camboya	300.000	15164	AFESIP España
2006 1 año	Proyecto multidisciplinar de lucha contra causas y consecuencias de la trata para la explotación sexual de mujeres y niñas en la subregión del Mekong	Camboya	130.750	15164	AFESIP España
2006 2 años	Abandono de la escisión: Educación de Base de Tostan en 14 comunidades Dioia Fogni de la Región de Zinguinchor	Senegal	30.000	13020	Tostan
2007 1 año	Fortalecimiento de los Cuerpos de Seguridad del Estado en su labor de persecución de delitos de tráfico de personas	Bosnia-Herzegovina	40.000	15130	Fundación La Strada
2007 1 año	Proyecto multidisciplinar de lucha contra causas y consecuencias de la trata con fines de explotación sexual, y de rehabilitación y reintegración de víctimas en la Subregión del Mekong	Camboya	349.638	15164	AFESIP España
2007 1 año	Hermana Mayor (Aumentar la conciencia pública sobre los delitos sexuales y la Ley que los regula)	Kenia	160.865	15164	Leadership Development Consortium
2008 1 año	Proyecto multidisciplinar de lucha contra la trata para explotación sexual, atención e integración de víctimas en Mekong	Camboya	350.000	15164	AFESIP España
2008 1 año	PROTECT – Lucha contra la pederastia en Phonm Penh y demás regiones	Camboya	110.838	15162	Global Humanitaria
2008 1 año	Lucha contra la Mutilación Genital Femenina, la fístula obstétrica y otras prácticas tradicionales nocivas en Etiopía	Etiopía	120.000	13081	Haurralde Fundazioa – Fundación Vasca de Protección a Infancia, Juventud y Familia
2008 1 año	Contribución a la promoción de la igualdad de género en el medio escolar	Níger	50.000	15164	RAEDD – Red de Acciones Educativas para un Desarrollo Sostenible

2008 2 años	Programa de reforzamiento de capacidades comunitarias para el abandono de Circuncisión Femenina en comunidades Diola Fogni	Senegal	92.565	13020	Tostan
2008 2 años	Formación y sensibilización para prevenir la violencia contra las mujeres en las 13 regiones	Namibia	199.000	15164	Women's Action for Development
2009 2 años	Mejora de condiciones psicosociales de mujeres y niña /os víctimas de guerra y violencia sexual en Bukavu	Congo, Rep. Democrática	172.703	16050	FISC – Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María
2009 1 año	Empoderamiento económico de mujeres víctimas de violencia de género	Etiopía	9.477	15170	Tsotawi Tekat Tekelakay Mahiber [Organización contra la violencia de género]
2009 2 años	Programa de protección para niños vulnerables: observatorio sobre el abuso y el maltrato infantil	Senegal	47.957	16010	CEGID
2009 2 años	Promoción del bienestar psicosocial en la mujer indígena	Camboya	240.000	15170	Psicólogos Sin Fronteras Asturias
2010 2 años	Por la supresión de los abusos sexuales y la explotación comercial sexual en niñas y niños	Camboya	143.983	15130	APLE
2010 2 años	Empoderamiento de las mujeres de la ciudad de Battambang	Camboya	112.702	15170	Fundación Agua de Coco
2010 2 años	Formación y sensibilización en centros escolares de secundaria para prevenir la violencia de género	Namibia	96.409	15170	Women's Action for Development
2010 1 año	Mujeres mediterráneas contra la violencia de género. Grupos y redes de apoyo de mujeres	Palestinos, Territorios	59.550	15170	HELIA - Asoc. de Suport a les Dones que Pateixen Violencia de Genere

AECID – Dirección de cooperación para África, Asia y Europa Oriental – Subvenciones de Estado

Inicio duración	Título	País	€ (2005-10)	Código	Contraparte pública local
2006 1 año	Promoción de la equidad de género y prevención de la violencia contra las mujeres en Túnez, fase 1	Túnez	300.000	15164	Oficina Nacional de la Familia y la Población, Ministerio de Sanidad Pública
2007 2 años	Promoción de la equidad de género y prevención de la violencia contra las mujeres en Túnez, fase 2	Túnez	584.000	15164	Oficina Nacional de la Familia y la Población, Ministerio de Sanidad Pública
2007 1 año	Plan de actuación integral contra las violencias de género	Filipinas	300.000	15164	Departamento de Bienestar Social y Desarrollo

2008 2 años	Plan piloto de actuación integral contra las violencias de género en Caraga, fase II	Filipinas	300.000	15164	Departamento de Bienestar Social y Desarrollo
2009 2 años	Mejoramiento de planificación financiera y capacidad de movilización de recursos de la UMV, elevación de la conciencia comunitaria para reducir la violencia doméstica	Vietnam	350.000	15170	Unión de Mujeres de Vietnam
2009	Apoyo para la realización de encuesta nacional sobre la violencia doméstica contra la mujer	Vietnam	66.500	15170	Oficina General de Estadísticas
2009 2 años	Apoyo para el desarrollo de una campaña nacional de comunicación con objeto de modificar comportamientos hacia la violencia doméstica	Vietnam	490.200	15170	Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, Departamento de Familia
2009 1 año	Campaña de sensibilización sobre la violencia contra las mujeres y mujer rural	Túnez	100.000	15170	Ministerio de la Mujer, de la Infancia, de la Familia y de las Personas Mayores
2010 1 año	Refuerzo institucional y de las capacidades de gestión de la Women's Unión en Vietnam, fase II	Vietnam	510.000	15170	Unión de Mujeres de Vietnam
2010 1 año	Democracia y reforma del sector seguridad. Formación de personal del parlamento palestino en materia de seguridad.	Palestinos, Territorios	237.500	15210	Centro de Ginebra para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas
2010 3 años	Programa de acceso a la justicia	Camboya	1.000.000	15170	Ministry of Women's Affairs (coop. delegada con Agencia Alemana de Cooperación – GTZ)

AECID – Dirección de cooperación para África, Asia y Europa Oriental – otras convocatorias/instrumentos no identificados

Inicio duración	Título	País	€ (2005-10)	Código	ONGD solicitante o contraparte pública local, según el caso
2005 1 año	Apoyo a la campaña de lucha contra la práctica de la Mutilación Genital Femenina (Seminario)	Malí	54.150	13010	Medicus Mundi Andalucía
2005	Acogida promoción y reinserción social de mujeres afectadas por el fenómeno de la prostitución	Angola	50.000	11330	Fundación CODESPA
2005 1 año	Jornada lucha contra Mutilación Genital Femenina	África	35.000	12281	Haurralde Fundazioa – Fundación Vasca de Protección a Infancia, Juventud y Familia
2006 2 años	Centro de acogida destinado a la rehabilitación y reintegración de mujeres y niños víctimas del tráfico de personas en Hanói	Vietnam	95.405	15164	Center for Women and Development

2006 1 año	Creación de mecanismos para prevenir la violencia contra la mujer	Jordania	150.000	15164	Jordanian Women's Union
2006 1 año	Proyecto de lucha contra la Mutilación Genital Femenina	Mauritania	30.000	13020	AMPSFE – Association Mauritanienne des pratiques ayant effet sur la Santé des Femmes et des Enfants
2007	Seminario magrebí sobre la equidad de género y la prevención de la violencia contra las mujeres	Túnez	50.000	15164	Oficina Nacional de la Familia y Población (ONFP), Ministerio de Sanidad Pública
2008 2 años	Establecimiento de centro de acogida destinado a rehabilitación y reintegración de mujeres y niños víctimas del tráfico de personas en Hanói, fase II	Vietnam	638.400	15164	Center for Women and Development
2008	Lucha contra las Mutilaciones Genitales Femeninas, fase II	Mauritania	30.000	13081	AMPSFE

AECID – Dirección de cooperación para América Latina y el Caribe – Convocatoria Abierta y Permanente (CAP)

Inicio duración	Título	País/ región	€ (2005-10)	Código	Entidad solicitante³
2006 1 año	Capacitación y sensibilización de diputados/as acerca de la ley integral contra la violencia familiar: la intervención de funcionarios policiales y judiciales en violencia familiar	Argentina	24.000	15164	Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres
2006 1 año	Empoderamiento económico y genérico de mujeres indígenas en la cárcel de Obrajes para disminuir la pobreza y promover derechos sexuales y reproductivos	Bolivia	59.309	15164	SEVIDA – Asociación Semilla de Vida
2007 1 año	Capacitación y sensibilización de diputados/as acerca de la Ley contra la violencia de género	Argentina	40.000	15162	Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres
2007 1 año	El testimonio como estrategia para el acceso a la justicia de mujeres víctimas de desplazamiento forzado	Colombia	75.000	15150	Liga de Mujeres Desplazadas
2008 1 año	Intervención contra la violencia de género intrafamiliar	Dominicana, Rep.	40.000	15164	Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres
2008 1 año	Género y remesas. Hacia el incremento de capacidades de las mujeres migrantes como agentes de desarrollo, fase II	Colombia	160.000	15164	Sisma Mujer
2009 1 año	Uso del litigio internacional como instrumento de transformación para las mujeres	América	312.300	15162	CLADEM
2009 1 año	Atención social, jurídica y psicológica a mujeres sobrevivientes de violencia	Guatemala	120.000	15170	Fundación Red de Sobrevivientes de Violencia Doméstica

2009 1 año	Asociación Centro Jurídico Popular	Nicaragua	30.000	15170	Asociación Centro Jurídico Popular
2009 1 año	Mujeres indígenas en las cárceles de Obrajés y Miraflores empoderadas en derechos sexuales y reproductivos y prevención de violencia genérica	Bolivia	55.000	13030	SEVIDA
2009 1 año	Inserción sociolaboral para niñas y adolescentes en situación de calle en la ciudad de El Alto	Bolivia	56.982	16010	Enda El Alto
2009 1 año	Acceso a la justicia de las víctimas de violencia intrafamiliar	Ecuador	80.000	15160	Fundación Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados
2009 1 año	Apoyo a programas de promoción y defensa en materia de derechos humanos	Venezuela	75.330	15162	COFAVIC – Comité de Familiares de las Víctimas de Sucesos de febrero y marzo 1989
2009 1 año	Salud reproductiva y sexual adolescentes en situación de calle	Dominicana, Rep.	107.320	13020	Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia (Profamilia)
2010 1 año	Mis derechos de mujer son Derechos Humanos	Nicaragua	85.723	15170	Comunidades Cristianas de Base de Masaya / Bufete Popular Boris Vega
2010 1 año	Mujeres en Tránsito. Mejorando la vida de mujeres migrantes en tránsito y desplazadas a través de disminución de violencia	Haití	100.000	13020	Mujeres del Mundo
2010 1 año	Acceso a la justicia de las víctimas de violencia intrafamiliar	Ecuador	80.000	15130	Fundación Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados
2010 1 año	Construcción de derechos sexuales y reproductivos con género e interculturalidad para fortalecer la salud y prevenir la violencia en cárceles de La Paz	Bolivia	59.900	13020	SEVIDA
2010 1 año	Proyecto empoderamiento mujeres en riesgo	Colombia	59.980	15170	Fundación por la Europa de los Ciudadanos
2010 1 año	Derechos humanos y reparación integral, fase II	Venezuela	78.021	15160	COFAVIC

AECID – Dirección de cooperación para América Latina y el Caribe – Subvención de Estado

Inicio duración	Título	País	€ (2005-10)	Código	Contraparte pública local
2007 1 año	Control y reducción de la impunidad en los delitos contra la vida y la integridad física de hombres y mujeres, fase 3	El Salvador	500.000	15130	

2007 4 años	Implementación del Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer, el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual y el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades	Perú	600.000	15164	Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
2009 1 año	La calle, buscando nuevos rumbos	Paraguay	225.000	16010	Secretaría de la Niñez y la Adolescencia
2009 2 años	Fortalecimiento institucional de la Secretaría de la Mujer	Paraguay	300.000	15170	Secretaría de la Mujer de la Presidencia
2010 2 años	Fortalecimiento de las políticas de género en Uruguay	Uruguay	240.000	15170	Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Presidencia de la República
2010 2 años	Protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia y trata desde el ejercicio fiscal	Paraguay	100.000	15170	Ministerio Público
2010 2 años	Apoyo a la mejora y descentralización de políticas de seguridad ciudadana	Paraguay	200.000	15160	Ministerio del Interior

AECID – Dirección de cooperación para América Latina y el Caribe – contribuciones de tipo multilateral

Inicio duración	Título	País	€	Código	Organización internacional
2009 2 años	Proyecto atención integral para las mujeres víctimas de violencia de género	Nicaragua	300.000	15162	OEI – Organización de los Estados Iberoamericanos
2010 1 año	Refuerzo de las medidas para la igualdad y la lucha contra la violencia de género en el ámbito de la educación	Paraguay	210.000	11110 15170	

AECID – Dirección de cooperación sectorial y multilateral – Departamento de ONGD – convocatorias de convenios

Inicio duración	Título	País	€ (2005-10)	Código	ONGD
2006 4 años	Género y desarrollo: mejora de oportunidades económicas de las mujeres y de acceso a la justicia y servicios de protección para víctimas de violencia doméstica	Marruecos	1.800.000	15164	Intermón Oxfam
2006 4 años	Representación de las mujeres y participación paritaria en los espacios sociales y políticos, a través del apoyo a las organizaciones sociales de promoción y defensa de los derechos de las mujeres	El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua	4.000.000	15164	ACSUR – Las Segovias

2006 4 años	Atención de mujeres y niñas víctimas de la violencia doméstica y de género, niños de la calle y educación, interviniendo integralmente en los diversos sectores para la reparación y la prevención	Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua	3.600.000	15164	FAD – Fundación de Ayuda contra la Drogadiccion
2006 4 años	Fortalecimiento de los derechos de la mujer (a través de la mejora de las oportunidades en el ámbito económico y la lucha contra la violencia de las mujeres)	Guinea Ecuatorial	1.000.000	15164	Ayuda en Acción Fundación Interred
2006 4 años	Aumento de las capacidades y autonomía de las mujeres, mediante capacitación, promoción de oportunidades económicas, microcréditos y planes de igualdad de género	Vietnam	3.000.000	15164	Asociación por la Paz y el Desarrollo
2006 4 años	Empoderamiento de la mujer. Promoción de una mayor representación de mujeres y participación paritaria en los espacios sociales y políticos, así como el fortalecimiento de las políticas y mecanismos nacionales	Bolivia Perú	4.000.000	15164	Solidaridad Internacional
2007 4 años	Fortalecimiento de las capacidades de las instancias gubernamentales y de la sociedad civil para la protección integral de la niñez y la adolescencia con especial incidencia en trata y tráfico de niñas, niños y adolescentes	Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua	5.700.000	16010	Fundación Save The Children
2007 4 años	Fortalecimiento del Estado de Derecho y la gobernanza democrática mediante el apoyo a organizaciones de derechos humanos y sus redes.	Argelia Marruecos Túnez	2.500.00	15162	ACSUR – Las Segovias
2007 3 años	Mejora de la calidad de vida y el acceso a los servicios de víctimas de la violencia de género	Filipinas	1.234.000	12220	Fundación Humanismo y Democracia
2007 4 años	Mejora de oportunidades de las mujeres en el ámbito económico y promoción en espacios sociales y políticos	Camboya	2.300.000	15164	Asociación por la Paz y el Desarrollo
2007 4 años	Protección de la infancia y actores interesados. Enfoque integrado de prevención y respuesta ante la violencia contra la infancia.	Mauritania Marruecos	2.670.000	16050	Fundación Save The Children
2010 4 años	Convenio con actuaciones en protección de la infancia, salud, con especial atención a la lucha contra la MGF y enfermedades de origen hídrico, agua y saneamiento, seguridad alimentaria y actividades generadoras de ingresos	Senegal Mali Guinea Bissau Gambia	542.076	16050	Cruz Roja Española

2010 4 años	Aumento de la calidad de la educación con enfoque de género, en Cabo Delgado, con posibles intervenciones en otras zonas de actuación de la Cooperación Española	Mozambique	750.000	11182	Intermón Oxfam
2010 4 años	Lucha contra la violencia de género y de salud sexual y reproductiva, a través de la aplicación efectiva de las políticas públicas, el fortalecimiento de redes regionales específicas y la vigilancia ciudadana	Bolivia Ecuador Perú	1.240.197	15170	Solidaridad Internacional
2010 4 años	Fortalecimiento de capacidades humanas e institucionales de las poblaciones indígenas guaraníes y de afrodescendiente, altamente vulnerables a situaciones de violación de derechos humanos y violencia de género	Bolivia Colombia Ecuador Paraguay	1.148.668	15160	Fundación IEPALA
2010 4 años	Fortalecimiento de la autonomía de las mujeres, apoyando procesos que aumenten su participación ciudadana y la defensa y el ejercicio de sus derechos humanos	El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua	556.299	15170	ACSUR – Las Segovias
2010 4 años	Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y fortalecimiento de los sistemas de protección nacional de la niñez, con componentes de prevención atención y rehabilitación para casos de abuso, violencia y negligencia	Ecuador Perú	76.3944	11320	Fundación Save The Children
2010 4 años	Mejora de las condiciones de ejercicio del derecho a la salud de las poblaciones en situación precaria, con especial énfasis en los adolescentes y las mujeres, las personas en situación de prostitución y las poblaciones móviles	El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua	1.380.248	13020	Médicos del Mundo
2010 4 años	Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática e instituciones de justicia para apoyar los procesos de prevención de la violencia y la construcción de la Paz	Guatemala	900.000	15130	MPDL – Movimiento por la Paz el Desarme y la Libertad

AECID – Dirección de cooperación sectorial y multilateral – Departamento de ONGD – convocatorias de proyectos

Inicio	Título	País	€	Código	ONGD
2006 1 año	Aumento de las capacidades de las mujeres en prevención y atención de la violencia intrafamiliar y de género	Ecuador	240.000	15164	Solidaridad Internacional
2006 2 años	Fortalecimiento de capacidades integrales de niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual y comercio infantil para su desvinculación	Paraguay	200.000	15164	AIETI

2006 2 años	Reinserción sociolaboral y sostenimiento de recursos sociales para mujeres víctimas de violencia de género en las provincias de Mostar y Nevesinje, fase 2	Bosnia-Herzegovina	200.000	15164	MZC – Mujeres en Zona de Conflicto
2006 2 años	Mejora de las capacidades para enfrentar las situaciones de violencia contra las mujeres	El Salvador	186.779	15164	Associacio Cooperació
2006 1 año	Promoviendo los derechos de la niñez a través de la formación de una red de protección contra la trata, el tráfico y la explotación sexual comercial	Argentina	140.000	16020	Save the Children España
2006 1 año	Estrategia integral de defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres víctimas del conflicto armado interno en el Valle del Cauca	Colombia	80.000	15162	ICID – Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo
2006 1 año	Apoyo al empoderamiento económico y a la ciudadanía de las mujeres de tres barrios de la ciudad de Túnez	Túnez	80.000	15164	ICID
2006 1 año	Salud mental: mujeres y niñ@s en un estado de conflicto	Palestinos, Territorios	100.443	12191	SODEPAZ – Solidaridad para el Desarrollo y la Paz
2007 2 años	Acceso a justicia y reparación en materia de derechos sexuales y reproductivos para mujeres rurales y urbanas en Manta y San Juan de Lurigancho	Perú	328.970	15162	Asociación Entrepueblos
2007 1 año	Desarrollo de la política de género, familia y bienestar comunitario de la OIA para el fortalecimiento de mujeres indígenas de Antioquía	Colombia	165.807	15164	Associació Cooperació
2007 2 años	Empoderamiento de las mujeres en Túnez contra la precariedad y la violencia	Túnez	179.950	15164	ICID
2007 2 años	Fortalecimiento de las capacidades humanas e institucionales de Villarrica para la defensa de los derechos de las mujeres y sus hijas víctimas de VIF	Paraguay	275.000	15164	AIETI
2007 2 años	Programa integral de promoción del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia de género	Nicaragua	220.446	15164	AIETI
2007 2 años	Promoción de los derechos humanos, sociales y económicos de las mujeres y niñas en situación de inequidad y violencia de género en Acahualinca	Nicaragua	399.152	15164	Solidaridad Internacional

2007 2 años	Reinserción sociolaboral y sostenimiento de recursos sociales para mujeres víctimas de violencia de género en las provincias de Mostar y Nevesinje, fase 3	Bosnia-Herzegovina	406.617	15164	MZC
2008 1 año	Apoyo a la construcción de la paz mediante la implementación de la Resolución 1325 en los Balcanes	Bosnia-Herzegovina	250.000	15220	MZC
2008 2 años	Apoyo a la salud básica y reinserción social de mujeres víctimas de la guerra en Kivu Norte	Congo, Rep. Democrática	409.653	12191	Comité Internacional de Rescate, España – Rescate
2008 2 años	Apoyo a las políticas públicas de prevención de la violencia contra la mujer y la atención a sus víctimas, a través de una estrategia de comunicación	Paraguay	250.000	15164	AIETI
2008 2 años	Construcción de la ciudadanía comunitaria en Acahualinca con énfasis en mujeres y jóvenes	Nicaragua	266.856	15150	Solidaridad Internacional
2008 1 año	Contribuir a la prevención y lucha contra violencia de género en comunidades mayas de cinco municipios de Quetzaltenango	Guatemala	80.000	15164	CDHHG - Comisión de Derechos Humanos Hispano Guatemalteca
2008 1 año	Estrategia integral de defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres víctimas del conflicto armado interno en el Valle del Cauca, fase 2	Colombia	194.931	15162	ICID
2008 1 año	Formación de operadoras y operadores en violencia familiar en zonas marginales del conurbano bonaerense	Argentina	70.000	15150	Haurralde Fundazioa – Fundación Vasca de Protección a Infancia, Juventud y Familia
2008 1 año	Formación de promotoras para la prevención y atención a mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar en Paraguay	Paraguay	86.270	15150	SOTERMUN – Solidaridad con el Tercer Mundo
2008 2 años	Fortalecimiento capacidades actores sociales y políticos de 5 cantones para mejorar la prevención y atención integral a mujeres víctimas VIFG	Ecuador	286.356	15150	Solidaridad Internacional
2008 2 años	Fortalecimiento de los servicios de prevención y de atención de la violencia de género en Cabo Verde	Cabo Verde	281.107	15164	Fundación IEPALA
2008 2 años	Mejora de las condiciones de equidad de género, capacidades y condiciones organizativas de jóvenes y mujeres	El Salvador	226.279	15150	ACPP – Asamblea de Cooperación por la Paz
2008 2 años	Prevención e intervención integral ante la violencia contra las mujeres desde un enfoque de derechos humanos	Nicaragua	344.851	15164	ACSUR – Las Segovias
2008 2 años	Prevención y lucha contra la violencia juvenil y de género desde la educación y defensa de los derechos humanos	El Salvador	270.844	15220	AIETI

2008 2 años	Proyecto de creación de un Centro de Atención Integral de la Mujer (ginecología y violencia doméstica) en Villarrica	Paraguay	239.800	13020	FERS – Fundación de Religiosos para la Salud
2008 2 años	Salud mental: mujeres y niños en un estado de conflicto, fase II	Palestinos, Territorios	283.585	12191	SODEPAZ
2009 2 años	Mejora de las condiciones de vida y educativas de los menores huérfanos desplazados, en Goma	Congo, Rep. Democrática	84.650	11220	Fundación Africa Directo
2009 2 años	Protección de niños y niñas en situación de vulnerabilidad y víctimas de explotación infantil en Thies	Senegal	241.000	16050	Fundación Plan International España
2009 2 años	Fortalecimiento del sistema de salud pública en Moughataas periurbanas de Nouakchott a través de la mejora de la SSR y atención a la infancia	Mauritania	182.971	12220	Médicos del Mundo
2009 2 años	Fortalecimiento municipal contra la violencia de género a través de la puesta en marcha de la Casa de la Mujer de Yoro	Honduras	93.855	15220	MPDL – Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad - Aragón
2009 2 años	Atención integral a las víctimas de la violencia doméstica en la región Sous Masa Draa-Agadir.	Marruecos	147.583	15170	Asociación para la Cooperación con Minusválidos Necesitados del Mundo
2009 2 años	Mejora de las condiciones educativas, psicológicas y de salud de las niñas, potenciales víctimas de MGF en Dar el Salam	Egipto	168.714	16010	CONEMUND
2009 2 años	Incidencia de la mujer indígena de los cinturones de pobreza en agenda política pública. Violencia, salud y participación	Bolivia	170.000	15170	Fundación Mundubat
2009 2 años	Mujeres por una vida plena, saludable y sin violencia de género	Honduras	109.077	15220	Federación de Asociaciones Medicus Mundi en España
2009 2 años	Promoción de los derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en la desvinculación de niñas y adolescentes de la explotación sexual	Paraguay	208.429	13081	AIETI
2009 2 años	Proyecto para el abandono de la práctica de la MGF/escisión en las regiones de Kayes y de Ségou	Malí	427.000	13020	Cruz Roja Española
2009 1 año	Fortalecimiento de las capacidades humanas e institucionales de Villarrica para la defensa de los derechos de las mujeres víctimas de VIF, fase II	Paraguay	210.000	15170	AIETI
2009 2 años	Promoción de los DDHH, SLES y ECOS de las mujeres, adolescentes y niñas en situación de inequidad y violencia de género y generacional Acahualinca	Nicaragua	420.000	15162	Solidaridad Internacional

2009 2 años	Prevención de violencia juvenil, mediante la educación, arte, cultura, deportes y la recreación en la Mancomunidad de Municipios del Norte de Lempira	Honduras	515.566	15220	Fundación Benéfica Del Valle
2009 2 años	Identificación, prevención y atención de las fistulas obstétricas en la región de Kayes	Malí	218.150	13020	Associació Cooperació
2009 2 años	Mujeres y niñas fortaleciendo alianzas y construyendo una vida libre de violencia	El Salvador	335.704	15220	Associació Cooperació
2009 1 año	Estrategia integral de defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres víctimas del conflicto armado interno en el Valle del Cauca - Fase 3	Colombia	242.759	15170	ICID
2009 2 años	Mejora de la salud sexual reproductiva y reducción de la mortalidad materna infantil de la Región Atlántico Norte, Jinotega, Rio San Juan y Chinandega	Nicaragua	260.190	13081	FUNDEN – Fundación para el Desarrollo de la Enfermería
2009 1 año	Fortalecimiento del liderazgo social y político de las mujeres de organizaciones de base en los procesos de construcción de paz	Colombia	70.000	15170	Organización Femenina Popular
2009 2 años	Fortalecimiento de medios de comunicación y organizaciones sociales de hombres y mujeres en defensa del derecho a la igualdad y a la no discriminación	Perú	311.612	15170	AIETI
2010 2 años	Fortalecimiento de redes de la sociedad civil para la prevención de la violencia juvenil y de género desde la educación en derechos humanos	El Salvador	240.326	15160	AIETI
2010 2 años	Kuñä tekove pyahurä. Tejiendo acciones de incidencia contra la violencia doméstica y de género en el Departamento de Guairá	Paraguay	357.733	15170	AIETI
2010 2 años	Programa integral de promoción del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia de género, 2ª Fase.	Nicaragua	301.534	15170	AIETI
2010 1 año	Fortalecimiento de la Red Sororidad por la vida de las mujeres para incidir en políticas públicas de prevención y atención sobre femicidio/feminicidio	Guatemala	114.843	15170	AIETI
2010 2 años	Mujeres Mayas fortaleciendo el tejido social para la promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas con justicia y dignificación	Guatemala	250.000	15160	Asociación Entrepueblos

2010 2 años	Creación de empleo y generación de ingresos para mujeres vulnerables de Ezbet El Hagana, zona marginal de El Cairo	Egipto	180.188	16020	CONEMUND
2010 2 años	Aporte a la protección de las niñas víctimas del conflicto armado colombiano en el Departamento de Nariño	Colombia	260.202	15160	Associació Catalana per la Pau
2010 2 años	Consolidando políticas públicas para la igualdad de género y fortaleciendo la incidencia de las mujeres en Cuscatlán	El Salvador	400.528	15170	Associació Cooperació
2010 2 años	Desarrollo de la política de género, generación y familia de la OIA para fortalecimiento de las mujeres indígenas, fase 3	Colombia	329.432	15170	Associació Cooperació
2010 2 años	Mejorada la protección y el reconocimiento de los derechos de las mujeres en los campos de refugiados palestinos en el sur	Palestinos, Territorios	280.000	12191	MPDL
2010 1 año	Empoderamiento psicosocial de la mujer indígena de Camboya y sensibilización social en violencia doméstica	Camboya	121.369	15170	Psicólogos Son Fronteras ONGD
2010 1 año	Promoción de la equidad de género y prevención de las violencias contra las mujeres en el Departamento del Valle y resguardos indígenas del Cauca	Colombia	210.512	15170	ICID
2010 2 años	Videobus Solidario “Qué onda con tus derechos”. Movilización comunitaria por el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos.	Bolivia	198.808	13081	Haurralde Fundazioa
2010 1 año	Empoderamiento e inclusión social de las trabajadoras inmigrantes en el Gran Beirut	Líbano	288.867	15170	AIDA – Ayuda, Intercambio y Desarrollo

AECID – Dirección de cooperación sectorial y multilateral – Departamento Multilateral – contribuciones de tipo multilateral

Inicio duración	Título	País/ región	€ (2005-10)	Código	Organización internacional
2006	Prevención y respuesta multisectorial a violencia género – Darfur	Chad	1.000.000	15162	UNFPA
2006 2 años	Apoyo a mujeres y niñas afectadas por el sida y víctimas de violencia sexual	Congo, Rep. Democrática	1.500.000	13040 16064	UNICEF
2006	Proyecto de acción para terminar con la violencia contra las mujeres	Irak	1.500.000	15164	UNIFEM
2007 2 años	Alto a la Violación (Stop Rape Now)	Países en Desarrollo	900.000	15164	UNIFEM

2007 4 años	Violencia contra las mujeres en políticas de seguridad urbana	Argentina Chile Perú	3.546.805	15164	UNIFEM
2007	Mujeres Paz y Seguridad <i>[ver abajo otro desembolso]</i>	Colombia Guatemala	724.365	15164	UNIFEM
2007 4 años	Fortalecimiento de la responsabilidad del Estado y sociedad civil para erradicación de la violencia contra las mujeres	Haití	251.805	15164	UNIFEM
2008 2 años	Prevención violencia contra la mujer, justicia e igualdad	América	300.000	15164	ILANUD – Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente
2008	Apoyo a la implementación de la Estrategia Nacional para la igualdad de género y violencia doméstica	Albania	250.244	15164	UNIFEM
2008 3 años	Acceso a la justicia en Camboya	Camboya	1.600.000	15130	PNUD
2008 4 años	Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC)	Cabo Verde Guinea Bissau Malí Senegal	1.000.000	16020	OIT – Organización Mundial del Trabajo
2009 2 años	Apoyo a la formulación de planes de acción nacional sobre mujeres, paz y seguridad	Países en Desarrollo	364.335	15170	INSTRAW
2009 2 años	Integración de políticas y programas de VIH y violencia contra la mujer desde un enfoque de derechos humanos	América Central	276.349	13040	OEA – Organización de los Estados Americanos
2009 4 años	Lucha contra la mendicidad, la trata, la migración irregular y las peores formas de trabajo de los niños	Senegal	500.000	15162	UNICEF

MAEC – Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional (SECI)

Inicio duración	Título	País	€ (2005-10)	Código	Organización internacional
2008 2 años	Mujeres Paz y Seguridad en América Latina <i>[desembolsos referentes a la intervención mencionada en esta misma página para Colombia y Guatemala]</i>	América	900.000	15170 15220	UNIFEM

MAEC - SECI – contribuciones de tipo multilateral – Fondo Fiduciario ODM PNUD/España

Inicio duración	Título	País	€ (2005-10)	Código	Ventana temática²
2007 3 años	Programa Conjunto de la ONU para abordar el problema de la violencia contra la mujer en Bangladesh	Bangladesh	6.738.772	15164	Igualdad de género y autonomía de la mujer
2007 3 años	Estrategia integral para la prevención, atención y erradicación de todas las formas de violencia de género	Colombia	6.096.559	15164	Igualdad de género y autonomía de la mujer
2007 3 años	Programa de lucha contra la violencia de género por medio del fortalecimiento del papel de las mujeres y las niñas	Marruecos	7.024.709	15164	Igualdad de género y autonomía de la mujer
2008 3 años	Strengthening Justice and Security Sector Reform in Guinea-Bissau	Guinea Bissau	851.063	15220	Prevención de conflictos y consolidación de la paz
2008 3 años	Programme de prévention des conflits et de renforcement de la cohésion sociale en Mauritanie	Mauritania	1.063.829	15220	Prevención de conflictos y consolidación de la paz
2008 2 años	Closing the chapter: social inclusion and conflict transformation in war affected areas of Croatia	Croacia	638.297	15220	Prevención de conflictos y consolidación de la paz
2008 3 años	Security with citizenship: preventing violence and strengthening citizenship with focus on children, adolescents and youth in vulnerable conditions	Brasil	1.276.595	15220	Prevención de conflictos y consolidación de la paz
2008 3 años	Fortalecimiento de capacidades locales para la construcción de paz en el departamento de Nariño	Colombia	1.489.361	15220	Prevención de conflictos y consolidación de la paz
2008 3 años	Reducción de violencia y construcción de capital social en El Salvador	El Salvador	1.808.510	15220	Prevención de conflictos y consolidación de la paz
2008 2 años	Poverty reduction through crisis prevention and livelihood strengthening	Haití	1.489.361	15220	Prevención de conflictos y consolidación de la paz
2008 3 años	Mejorando la seguridad ciudadana en Panamá: hacia la construcción social de una cultura de paz	Panamá	851.063	15220	Prevención de conflictos y consolidación de la paz

1 La propuesta es realizada por una universidad española, que tiene una contraparte local, también del ámbito académico.

2 Este Fondo tuvo las ventanas temáticas de: Cultura y desarrollo; Infancia, seguridad alimentaria y nutrición, Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres; Medio ambiente y cambio climático; Juventud, empleo y migración; Gobernanza económica democrática; Desarrollo y sector privado; y Prevención de conflictos y construcción de paz.

Anexo 13. Intervenciones con documentación recibida e insuficiente (según unidad financiadora e instrumento de cooperación)

Instituto de la Mujer – Programa de Cooperación Internacional “Mujeres y Desarrollo”

Inicio	Título⁵	País	€	Código	ONG española contraparte	Organización local solicitante
2005	<i>Como soy mujer, soy importante y defiando mis derechos</i>	Nicaragua	28.000	15164		

AECID – Dirección de cooperación para África, Asia y Europa Oriental

Inicio	Título	País	€	Código	Contraparte local pública
2010	Mejora de las capacidades del grupo de mujeres parlamentarias	Etiopía	50.000	15170	Parlamento Etiopía

AECID – Dirección de cooperación para América Latina y el Caribe

Inicio duración	Título⁵	País/ región	€	Código	Entidad solicitante
2005	<i>Control y reducción de la impunidad en delitos contra la vida y la integridad física de hombres y mujeres</i>	El Salvador	200.000	15130	Comisión Coordinadora del Sector Justicia
2005	Apoyo a la gestión y sostenibilidad de la Casa Refugio	Honduras	45.000	15164	Alcaldía de la Ceiba
2005	Vidas seguras para las mujeres – UNIFEM	Colombia	35.000	15164	Oficina del PNUD – Colombia
2005	Fortalecimiento institucional de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, fase II	Colombia	35.000	15164	Pontificia Universidad Javeriana – Instituto Pensar
2005	Fortalecimiento del programa de atención a mujeres víctimas de explotación sexual comercial	Paraguay	32.000	16010	Grupo Luna Nueva
2005	Fortalecimiento institucional y transversalización de género en las políticas públicas, fase IV	Dominicana, Rep.	210.354	15164	Secretaría de Estado de la Mujer
2005	Fortalecimiento institucional de la Oficina de Mujer y Género, fase II	Colombia	50.000	15164	Asociación Mujeres de Río
2006	Mejora y simplificación del procedimiento probatorio en delitos de violencia intrafamiliar y sexual contra mujeres	Nicaragua	50.000	15164	Corte Suprema de Justicia
2006	Apoyo a la ejecución de la política nacional de la mujer en su eje de violencia	Honduras	100.000	15164	Instituto Nacional de la Mujer
2006	<i>Atención integral en derechos humanos a mujeres víctimas de la violencia social y política</i>	Venezuela	60.570	15164	COFAVIC
2006	Mejorar la prevención, atención y protección de mujeres víctimas de la violencia de localidades de Santa Fe	Argentina	45.500	15164	Centro de Estudios Políticos y Sociales sobre Género

2006	Programa regional de cooperación con Centroamérica línea de equidad de género	América Central	142.400	15164	Secretaría de Integración Social del Sistema de Integración Centroamericana (SISCA)
2006 4 años	Programa de justicia y seguridad. Reducción de la impunidad	Guatemala	3.555.000	15210 15130 15140	Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia
2006 4 años	Fortalecimiento del Instituto Nacional de las Mujeres	Uruguay	884.000	15164 15170	Instituto Nacional de las Mujeres
2006 4 años	Programa de apoyo a la construcción de políticas públicas con equidad de género	Colombia	1.120.000	15164	Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género – HUMANAS
2007 2 años	Fortalecimiento institucional de la defensa de la mujer indígena, para la promoción y defensa de los derechos de las mujeres indígenas	Guatemala	600.000	15164	Defensoría de la Mujer Indígena
2007	<i>Apoyo a la puesta en marcha de un sistema de atención integral a víctimas de violencia en género</i>	Nicaragua	420.000	15164	OEI – Organización de los Estados Iberoamericanos
2007	Programa integral de lucha contra la violencia de género	Bolivia	400.000	15164	BOLHISPANIA – Cooperación España-Bolivia
2007	Proyecto de acción global contra la violencia de género	Ecuador	250.000	15164	Consejo Nacional de las Mujeres
2007	Fortalecimiento planificación estratégica de las políticas del Ministerio de Gobernación desde una perspectiva de género	Nicaragua	75.000	15140	Ministerio de Gobernación
2008	Fortalecimiento del programa de atención a madres o embarazadas adolescentes en alto riesgo (víctimas de violencia) y a sus niños	Venezuela	100.000	13020	Ministerio de Planificación y Desarrollo; Fundación Caracas para los Niños; Alcaldía Metropolitana de Caracas
2008	<i>Fortalecimiento institucional de la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República</i>	Paraguay	150.000	15164	<i>Secretaría de la Mujer de la Presidencia</i>
2008	<i>Promoción del gobierno y de la seguridad ciudadana</i>	Paraguay	150.000	15120	<i>Ministerio del Interior</i>
2008	Programa de apoyo a la implementación de nuevas políticas en calidad de vida y salud con equidad y la política nacional de salud para pueblos indígenas, fase I	Paraguay	1.700.000	12220	Viceministerio de Salud y Bienestar Social

2008	Programa de fortalecimiento institucional de la administración pública salvadoreña	El Salvador	2.328.000	15140	Secretaría Técnica de Financiamiento Externo
2009	Fortalecimiento del observatorio de la violencia y creación de la unidad de derechos humanos y género	Honduras	100.000	15162	Universidad Nacional Autónoma
2009	Mejora del servicio de los derechos sexuales y reproductivos en Jinotega y la Raan	Nicaragua	800.000	13020	Ministerio de Salud
2009 2 años	Programa nacional de lucha contra la violencia en razón de género	Bolivia	350.000	15170	Ministerio de Justicia
2009	Fortalecimiento de las políticas públicas de género para la atención, protección y restitución de víctimas de violencia basada en género, con énfasis en trata	Paraguay	1.000.000	15170	Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República
2009	Apoyo al fomento de planes de igualdad y la perspectiva de género en instituciones públicas venezolanas: programas de sensibilización, información y educación en prevención de violencia contra mujeres, madres, embarazadas adolescentes	Venezuela	130.000	15170	Ministerio del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género
2010	Apoyo al Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras 2010-2022, en el eje de provisión, protección y garantía del derecho de la paz y una vida libre de violencia	Honduras	400.000	15170	Instituto Nacional de la Mujer
2010	Fortalecimiento del sistema de protección integral del Plan Nacional para Erradicación Violencia de Género hacia Niñez, Adolescencia y Mujeres	Ecuador	174.000	15170	Ministerio Coordinador de Desarrollo Social
2010	Programa de Género en Desarrollo en Colombia	Colombia	535.000	15170	Alcaldía de Santiago de Cali

AECID – Dirección de cooperación sectorial y multilateral – Departamento de ONGD – convocatorias de convenios

Inicio duración	Título	País	€ (2005-10)	Código	ONGD
2010 4 años	Empoderamiento económico y social con perspectiva de género en Camboya, Timor Oriental y Vietnam.	Camboya Timor-Leste Vietnam	566.666	15170	Asociación por la Paz y el Desarrollo
2010 4 años	Convenio regional en derechos sexuales y reproductivos de las mujeres palestinas, jordanas y libanesas en situación de vulnerabilidad	Líbano Jordania Palestinos, T	167.233	13020	Solidaridad Internacional

AECID – Dirección de cooperación sectorial y multilateral – Departamento Multilateral

Inicio	Título	País	€	Código	Organización internacional
2009	Programa de trabajo correspondiente al año 2009 – Cooperación en la lucha contra la trata de personas	Europa	50.000	15162	OSCE – Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa

MAEC SECI – contribuciones de tipo multilateral – Fondo Fiduciario ODM PNUD/España

Inicio duración	Título	País	€ (2005-10)	Código	Ventana Temática
2008 3 años	Support for stabilization and conflict prevention in North Kivu	Congo, Rep. Democrática	851.063	15220	Prevención de conflictos y consolidación de la paz
2008 3 años	Consolidando la paz en Guatemala mediante la prevención de la violencia y gestión del conflicto	Guatemala	1.170.212	15220	Prevención de conflictos y consolidación de la paz

Ministerio del Interior – Secretaría de Estado de Seguridad

Inicio	Título	País	€	Código
2005	Cooperación policial con otros países	Panamá	55.004	15140
2005	Cooperación policial con otros países	Costa Rica	47.220	15140
2006	Cooperación policial con otros países	Panamá	18.793	15140
2007	Actividades de cooperación policial	Guatemala	55.617	15140
2008	Actividades de cooperación policial	Colombia	91.503	15140
2008	Actividades de cooperación policial	Guatemala	21.843	15140
2009	Actividades de cooperación policial	Uruguay	38.696	
2010	Actividades de cooperación policial	Bolivia	26.239	
2010	Actividades de cooperación policial	Colombia	87.310	

⁵ En *itálico*, intervenciones que contaron con etapas posteriores cuyos contenidos fueron analizados.

Anexo 14. Intervenciones sin documentación recibida (según año, unidad financiadora instrumento de cooperación utilizado)

Instituto de la Mujer – Programa de Cooperación Internacional “Mujeres y Desarrollo”

Inicio	Título⁶	País	€	Código	ONG española	ONG local solicitante
2006	<i>Observatorio de medios de comunicación para la visibilización y trato correcto de violencias de género</i>	Colombia	31.500	15164	Fundación Mujeres	Corporación Humanas
2009	Vida y promoción de la mujer	Paraguay	24.700	15170	MZC	Asociación TATARENDY
2010	<i>Mujeres del norte de Nicaragua, haciendo frente a la violencia y discriminación</i>	Nicaragua	46.200	15170	ACSUR – Las Segovias	Asociación Civil Grupo Venancia
2010	Promoción derechos sociales y políticos de las mujeres	El Salvador	68.500	15170	IEPALA	Fundación Justicia y Género
2010	Lucha contra la violencia de género	Bolivia	54.600	15170	Fundación Interred	Centro de Información y Desarrollo de las Mujeres
2010	Lucha contra la violencia de género	Paraguay	68.600	15170	MZC	Coord. Nacional de Org. de Mujeres Trabajadoras Rurales

AECID – Dirección de cooperación para África, Asia y Europa Oriental

Inicio	Título	País	€	Código	Contraparte local pública
2005	Proyecto AMREF - Castilla y León (Etiopía, Kenia y Tanzania)	Kenia	69.500	13040	AMREF Flying Doctors – Asociación Africana para Investigación y Medicina

AECID – Dirección de cooperación para América Latina y el Caribe

Inicio	Título⁶	País	€	Código	Entidad solicitante
2005	Actuación integral con víctimas de violencia de género	Panamá	170.000	15164	Procuraduría General de la Nación
2006	Consolidación y fortalecimiento del sistema de atención a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar	Paraguay	200.000	15164	Secretaría Técnica de Planificación; Secretaría de la Mujer
2006	Lucha contra la trata de mujeres de explotación sexual	América	223.472	15164	
2007	Nuevas oportunidades para actividades tradicionales en procura de la autonomía económica para mujeres víctimas de violencia	Argentina	66.046	15162	Asociación Lola Mora
2008	<i>Atención integral a víctimas de violencia de género</i>	Nicaragua	600.000	15164	OEI

2008	Fortalecimiento planificación estratégica de políticas del Ministerio de Gobernación desde una perspectiva de género	Nicaragua	150.000	15140	Ministerio de Gobernación
2008	Proyecto de acción global contra la violencia de género	Ecuador	250.000	15164	Consejo Nacional de las Mujeres
2008	Promoción del gobierno y de la seguridad ciudadana	Paraguay	200.000	15140	Ministerio del Interior; Secretaría de la Mujer
2009	Fortalecimiento unidad de género para una propuesta coordinada de prevención de la violencia de género	Países de la CARICOM	20.000	15170	CARICOM – Comunidad del Caribe
2009	Justicia y seguridad: reducción de la impunidad en Guatemala	Guatemala	1.500.000	15130	Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia
2010	Creación de un Centro Internacional para la Atención de Víctimas de Trata de Personas y la Investigación Tapachula	México	110.000	15160	Autoridades federales y estatales del Estado de Chiapas
2010	Lucha contra la impunidad en Centroamérica y justicia transicional	América Central	150.000	15150	Universidad de Salamanca
2010	Fortalecimiento Institucional de la Defensoría de la Mujer Indígena para la Promoción y Defensa de los derechos de las Mujeres Mayas, Garífunas y Xincas	Guatemala	200.000	15170	Defensoría de la Mujer Indígena
2010	Promoción y gestión de políticas públicas para las víctimas de la violencia en 3 departamentos de Colombia	Colombia	148.700	15160	Corporación Nuevo Arco Iris
2010	Apoyo a consolidación de los derechos de las víctimas - III	Colombia	600.000	15160	

AECID – Dirección de Relaciones Culturales y Científicas – Programa Cooperación Interuniversitaria (PCI)

Inicio	Título ⁶	País	€	Código	Universidad española	Universidad local
2007	Evaluación de factores psicológicos de riesgo en mujeres víctimas de violencia conyugal	El Salvador	8.475	15164		Universidad Tecnológica de El Salvador
2007	Evaluación psicosocial de mujeres maltratadas por sus parejas: diseño de estrategias grupales de intervención	Colombia	15.000	15164		Universidad de Cartagena
2009	Relación entre desigualdad de género y riesgo para ETS y VIH/Sida en adolescentes: diseño de estrategias	Perú	18.410	13040	Universidad de Granada	Universidad Andina del Cusco

2010	<i>Diagnóstico de la incidencia y formas de violencia doméstica por razones de género en mujeres Aymaras urbanas de Arica y Parinacota</i>	Chile	27.800	15170	Universidad de Salamanca	
2010	Protección jurídica de las víctimas de la violencia conyugal	Marruecos	3.592	15130	UNED	
2010	Sistemas de tutela jurídico penal de la mujer frente a la violencia	Argelia	4.000	15130	UNED	

AECID – Dirección de Relaciones Culturales y Científicas – otros desembolsos

Inicio	Título	País	€	Código	Entidad solicitante
2009	Mujeres en el Camino. Denuncia y sensibilización sobre mujeres migrantes centroamericanas	América	35.000	15170	OIM – Organización Internacional para las Migraciones
2010	Corazón Seguro, ciudadanía cultural desde las mujeres para la seguridad en espacios públicos	México	40.000	15170	Dirección de Igualdad y Diversidad Social del DF; Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México
2010	Mujeres por la Vida y por la Paz, fase 1	Colombia	40.000	15230	Yuma Video Cine
2010	La coeducación como estrategia hacia la equidad de género y la no violencia a mujeres y niñas en escuelas de Ciudad de México	México	35.000	11220	Secretaría de Educación Pública

AECID – Gabinete Técnico

Inicio	Título	País	€	Código	Entidad solicitante
2005	Cuerpo de mujer - peligro de muerte	México	21.000	15162	Asociación Epikieia
2006	Maternidad mínimo riesgo, Sida, violencia sexual	Congo, Rep. Democrática	200.000	13010	Docs Heal África
2008	Justicia de género. Derecho a verdad, justicia y reparación para mujeres colombianas en el marco del conflicto	Colombia	80.000	15164	Asociación Sisma Mujer

AECID – Dirección de cooperación sectorial y multilateral – Departamento de ONGD

Inicio	Título ⁶	País	€	Código	ONGD
2005	<i>Creación de un centro de atención en violencia y salud sexual y reproductiva para adolescentes y promoción de los derechos humanos, sexuales, reproductivos, equidad de género y de una vida libre de violencia</i>	Paraguay	300.000	13030	AIETI

	<i>Reinserción sociolaboral y sostenimiento de recursos sociales para mujeres víctimas de violencia de género en las provincias de Mostar y Nevesinje</i>	<i>Bosnia-Herzegovina</i>	<i>300.000</i>	<i>15164</i>	<i>MZC</i>
	Promoción del desarrollo integral infantil para reducir la mortalidad, la desnutrición y violencia familiar en áreas pobres	Brasil	80.000	12240	Asociación Tierra y Vida
2006	<i>Acogida y acciones integrales para mujeres e hijos/hijas en situación de exclusión social y que sufren violencia de género en villas marginales del conurbano bonaerense</i>	<i>Argentina</i>	<i>79.981</i>	<i>15164</i>	<i>Haurralde Fundazioa</i>
	Formación en derechos sexuales y reproductivos y prevención de violencia de género	Argentina	44.100	15164	Federación de Mujeres Progresistas
	Apoyo a 9.858 mujeres marroquíes: acceso a ingresos dignos, protección de sus derechos y lucha contra violencia de género	Marruecos	375.504	15164	Intermón Oxfam

AECID – Dirección de cooperación sectorial y multilateral – Departamento Multilateral

Inicio	Título	País	€	Código	Organización internacional
2008	Lucha contra la Mutilación Genital Femenina, Fístula y VIH/SIDA en Níger	Níger	800.000	13081 15162	UNFPA
2009	Fortalecimiento de capacidades nacionales y locales para proteger a niños, niñas y adolescentes de violencia interna generada por el conflicto con grupos armados	Colombia	500.000	15261	UNICEF

AECID – Oficina de Acción Humanitaria

Inicio	Título	País	€	Código	Entidad solicitante
2007 2 años	Prevención y protección de las niñas y mujeres víctimas de violencias en el Departamento del Sureste	Haití	300.000	15164	UNFPA
2007	Proyecto de apoyo a la Asociación de Mujeres Víctimas de la Inmigración Clandestina, AFVIC	Senegal	18.700	15164	
2008	Ayuda humanitaria y de emergencia en salud sexual y reproductiva, desde una perspectiva de género	Filipinas	312.840	13020	UNFPA
2008	Ayuda y reintegración de mujeres y niños supervivientes de la violencia generada por el conflicto	Costa de Marfil	200.000	15164	UNFPA

2008	Ciudades sin violencia hacia las mujeres, ciudades para el desarrollo de la ciudadanía	Haití	300.000	15164	UNIFEM
2008	Reducir la vulnerabilidad de las poblaciones fronterizas y comunidades de acogida a lo largo de las fronteras al VIH/sida y a la violencia sexual	Sierra Leona Guinea; Liberia Costa Marfil	300.000	13040	UNFPA
2009	Ayuda humanitaria y apoyo psicosocial a mujeres afectadas por el conflicto bélico en Liberia	Liberia	348.500	72010	Cruz Roja Liberiana
2009	Protección de mujeres palestinas encarceladas y detenidas en prisiones israelíes y palestinas	Palestinos, Territorios	450.000	15170	UNIFEM

MAEC – Secretaría de Estado para Asuntos Exteriores

Inicio duración	Título	País/ región	€* (2005-10)	Código	Organismo Internacional
2006 4 años	Programa contra la violencia de género	Países en vías de Desarrollo	8600.000	15164	ACNUDH - Oficina del Alto Comisionado de las NNUU para los Derechos Humanos

MAEC – Secretaría de Estado para Cooperación Internacional

Inicio duración	Título ⁶	País/ región	€* (2005-10)	Código	Organismo Internacional
2006 2009	Fondo Fiduciario de protección de la infancia contra violencia, explotación y abuso (África y América Latina)	Países en vías de Desarrollo	5.400.000	15130 16010 15162	UNICEF
2006 4 años	Fondo Fiduciario contra la violencia de género	Países en vías de Desarrollo	16.000.000	15164 15170	UNIFEM
2006	<i>F-ODM – Ventana Temática Igualdad de Género y Autonomía de la Mujer</i>	<i>Países en vías de Desarrollo</i>	<i>2.000.000</i>	<i>15164</i>	<i>PNUD</i>
2007 2 años	Programa NNUU para la prevención del tráfico de migrantes en países de la CEDEAO	África Subsahariana	10.336.000	15162 13010	CEDEAO – Comunidad Económica de Estados de África Occidental
2007 3 años	Fondo del Programa de Apoyo víctimas y testigos con VIH/SIDA	Ruanda	90.000	13040 16064	TPIR – Tribunal Penal Internacional para Ruanda
2008 3 años	Fondo Fiduciario para la lucha contra las formas contemporáneas de esclavitud	Países en vías de Desarrollo	60.000	15160 15162	ACNUDH

2009	Fondo Fiduciario contra la violencia de género. Erradicación de la violencia contra las mujeres	Etiopía	530.000	15170	UNIFEM
2009	Lucha contra la Mutilación Genital Femenina, Fístula y VIH/Sida en Níger	Níger	400.000	13040 15162	UNFPA
2009	Fondo Global España – FNUAP para África. Lucha contra la Mutilación Genital Femenina en Mauritania	Mauritania	200.000	13020	UNFPA
2009	Programa de Género, Paz y Seguridad	Países en vías de Desarrollo	1.000.000	15170 15220	INSTRAW
2010	Programa Global Ciudades Seguras. Ciudades sin violencia para las mujeres, ciudades seguras para todos	Países en vías de Desarrollo	1.300.000	15170	UNIFEM
2010	Campañas regionales contra la Violencia SAY NO UNITE	Países en vías de Desarrollo	400.000	15170	UNIFEM
2010	Lucha contra la trata de mujeres y niñas en Asia del Sur	Asia Sur	400.000	15170	UNIFEM
2010	Involucrando a las mujeres en la Construcción de la Paz: elaboración de Indicadores 1325	Países en vías de Desarrollo	900.000	15170	UNIFEM
2010	Por una Paz palestina-israelí justa y duradera	Palestinos, Territorios	300.000	15170	UNIFEM
2010	Programa contra la violencia de género	Países en vías de Desarrollo	350.000	15170	ACNUDH

Ministerio de Educación

Inicio	Título	País	€	Código
2008	Medidas de protección a la infancia. Análisis y prevención del tráfico de menores	Bolivia	14.150	16010

Ministerio de Sanidad

Inicio	Título	País	€	Código
2009	Medidas de protección a la infancia. Análisis y prevención del tráfico de menores	América del Sur	14.150	16010

⁶ En *italico*, intervenciones cuyas etapas anteriores fueron consideradas en el análisis realizado.

BIBLIOGRAFÍA

- Abu-Lughod, Lila. 2012 [2002]. "As mulheres muçulmanas precisam realmente de salvação? Reflexões antropológicas sobre o relativismo cultural e seus Outros". *Estudos Feministas* 20 (2): 451-70. Publicación original: *American Anthropologist*, v. 104, n. 3, p. 783-790, 2002.
- Adewole, Isaac F., Nnenna C. Orji y B.A. Oye-Adeniran. 2008. "Unsafe abortion and development: a strategic approach". *IDS Bulletin*, 39. Brighton: Institute of Development Studies.
- AECI. 2004a. "Actuaciones de la cooperación española en los países prioritarios y de especial atención durante 2003". Madrid: Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECI). Disponible en: <http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Evaluaci%C3%B3n/ope-actuaciones.pdf>.
- _____. 2004b. "Actuaciones de la SECIPI [Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica] de 2000 a 2004". Madrid: Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECI).
- AECID - OTC Colombia. 2008. "Matriz de la estrategia de la igualdad de género de la cooperación española en Colombia (2008-2011)". Bogotá: Embajada de España en Colombia. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Oficina Técnica de Cooperación.
- AECID. 2008. "La ayuda programática. Guía técnica para la puesta en marcha de los nuevos instrumentos de cooperación". Madrid: Unidad de Nuevos Instrumentos de Cooperación, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. 2014. "Guía de modalidades e instrumentos de cooperación de la AECID". Madrid: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
- Alcalde, Ana R. 2007. "Red de Mujeres por un Mundo Mejor: diplomacia pública y feminismo, una alianza necesaria". En *Mujeres en un mundo global - movimientos y cooperación. XVI Jornadas de Investigación Interdisciplinaria*, editado por Mayte Gallego Méndez, Virginia Maqueira D'Ángelo y Cristina Bernis Carro, 225-44. Madrid: Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid.
- Alcázar Campos, Ana. 2010. "'Jineterismo': ¿turismo sexual o uso táctico del sexo?". *Revista de Antropología Social* 19: 307-36.
- Alfama, Eva, Marta Cruells y María de la Fuente. 2014. "¿Qué ha cambiado con esta crisis? El *mainstreaming* de género en la encrucijada". *Investigaciones Feministas* 5: 69-95. doi: 10.5209/rev_INFE.2014.v5.47957.
- Alméras, Diane y Coral Calderón Magaña. 2012. *Si no se cuenta, no cuenta: información sobre la violencia contra las mujeres*. Cuadernos de la CEPAL, 99. Santiago de Chile: División de Asuntos de Género, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Naciones Unidas. Disponible en:

<http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/27860/S2012012.pdf?sequence=1>.

Alonso, José Antonio. 1994. "España y la Ayuda Oficial al Desarrollo". En *La cooperación internacional para el desarrollo: ámbito y configuración*, 213-330. Madrid: Cideal.

_____. 2009. "La ayuda internacional". En *Financiación del desarrollo: viejos recursos, nuevas propuestas*, editado por José Antonio Alonso. Madrid: Fundación Carolina; Siglo XXI.

Alonso, Luis Enrique. 1994. "Sujeto y discursos: el lugar de la entrevista abierta en las prácticas de la sociología cualitativa". En *Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales*, editado por Juan Manuel Delgado y Juan Gutiérrez, 225-40. Madrid: Síntesis.

Amorós, Celia. 1991. *Hacia una crítica de la razón patriarcal*. Colección Pensamiento Crítico/Pensamiento Utópico. Barcelona: Anthropos.

Anderson, Kristin L. 2005. "Theorizing gender in Intimate Partner Violence research". *Sex Roles* 52 (11/12): 853-65. doi: 10.1007/s11199-005-4204-x.

Angulo, Gloria. 2015. "Nueva epoca, nueva narrativa sobre la cooperación y la justicia social". En *20 años de la Realidad de la Ayuda. La cooperación toma la palabra*, 7. Intermón, Oxfam.

Angulo Sánchez, Nicolás. 2005. *El derecho humano al desarrollo frente a la mundialización del mercado: concepto, contenido, objetivos y sujetos*. Colección Cooperación y desarrollo, Vol. 19. Madrid: IEPALA Editorial.

Antrobus, Peggy. 2005. "Critiquing the MDGs from a Caribbean perspective". *Gender and Development* 13 (1): 94-104. doi: 10.1080/13552070512331332280.

Apthorpe, Raymond. 1996. "Reading development policy and policy analysis: on framing, naming, numbering and coding". En *Arguing development policy: frames and discourses*, editado por Raymond Apthorpe y Des Gasper, 16-35. London; Portland: FrankCass.

Arancibia Tapia, Luis, *et al.* 2012. "La ayuda en educación en examen. Un análisis de la cooperación española 2007-2010", *Estudios e Informes*, 5, editado por Valeria Méndez de Vigo Montojo y José Manuel Moreno Domínguez. Madrid: Alboan; Fundación Entreculturas y Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación.

Arend, Elizabeth. 2011. "International Financial Institutions (IFIs) and gender based violence (GBV): a primer", *Gender Justice Women's Rights*. Washington, DC: Gender Action. Disponible en: <http://www.genderaction.org/publications/gbv/primer.pdf>.

Arendt, Hannah. 2005. *Sobre la violencia*. Madrid: Alianza Editoria. 1ª edición: 1969.

- Arndt, Channing. 2000. "Technical co-operation". En *Foreign aid and development: lessons learnt and directions for future*, editado por Finn Tarp y Peter Hjertholm, 154-77. London; New York: Routledge.
- Arranz Lozano, Fátima. 2015. "Meta-análisis de las investigaciones sobre la violencia de género: el Estado produciendo conocimiento". *Athenea Digital* 15 (1): 171-203. doi: <http://dx.doi.org/10.5565/rev/athenea.1394>.
- Asoka, Kaavya. 2012. "Global report on the situation of women human rights defenders", editado por WHRD International Coalition through the Asian Forum for Human Rights and Development (Forum Asia): Women Human Rights Defenders International Coalition. Disponible en: http://defendingwomen-defendingrights.org/wp-content/uploads/2014/03/WHRD_IC_Global-Report_2012.pdf.
- Astelarra, Judith. 2005. *Veinte años de políticas de igualdad*. Feminismos. Madrid: Cátedra; Universitat de València; Instituto de la Mujer.
- Pueblos. Revista de información y debate*. 2012. "La segunda legislatura de Rodríguez Zapatero en la AECID", por Paz con Dignidad.
- Ataya, Ola y Jinan Usta. 2010. "Women and men: hand in hand against violence. Strategies and approaches to working with men and boys for ending violence against women". Oxford: Oxfam GB.
- Atienza, Jaime. 2015. "2015: año cero", *Realidad de la Ayuda*, editado por Oxfam Intermón. Madrid: Oxfam Intermón.
- Ayuso, Anna. 1998. "Aproximación comparativa a los espacios de coordinación en las políticas bilaterales de cooperación". *Afers Internacionals* (40-41): 163-84.
- Bacchi, Carol y Joan Eveline. 2003. "Mainstreaming and neoliberalism: a contested relationship". *Policy and Society* 22 (2): 98-118. doi: 10.1016/S1449-4035(03)70021-6.
- Banco Mundial. 2001. "Hacia la integración de sexos en el desarrollo económico - mediante la igualdad de derechos, recursos y participación (resumen)", *Informe del Banco Mundial sobre investigaciones relativas a las políticas de desarrollo*. Washington, DC: Banco Mundial.
- Bardhan, Kalpana y Stephan Klasen. 1999. "UNDP's Gender-related Indices: a critical review". *World Development* 27 (6): 985-1010. doi: 10.1016/S0305-750X(99)00035-2.
- Barker, Gary y Christine Ricardo. 2006. "Young men and the construction of masculinity in Sub-Saharan Africa". En *The other half of gender*, editado por Ian Bannon y Maria C. Correia, 159-93. Washington, DC: World Bank.
- Barner, John R. y Michelle Mohr Carney. 2011. "Interventions for Intimate Partner Violence: a historical review". *Journal of Family Violence* 26: 235-44. doi: 10.1007/s10896-011-9359-3.

- Baron, Larry y Murray A. Straus. 1989. *Four theories of rape in American society - a state-level analysis*. New Haven; London: Yale University Press.
- Barrère, María Ángeles. 2008. "Género, discriminación y violencia contra las mujeres". En *Género, violencia y derecho*, editado por Patricia Laurenzo, María Luisa Maqueda y Ana Rubio, 27-47. Valencia: Tirant Lo Blanch.
- Bart, Pauline B. y Eileen Geil Moran. 1993. *Violence against women. The bloody footprints*. London: Sage Publications.
- Bartra, Eli. 2012. "Acerca de la investigación y la metodología feminista". En *Investigación feminista: epistemología, metodología y representaciones sociales*, editado por Norma Blazquez Graf, Fátima Flores Palacios y Maribel Ríos Everardo, 67-77. México, D. F.: Universidad Autónoma de México (UNAM), Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Facultad de Psicología.
- Bazeley, Patricia. 1999. "The *bricoleur* with a computer, piecing together qualitative and quantitative data". *Qualitative Health Research* 9 (2): 279-87.
- BBC News. 26/01/2004. "Mauritania's 'wife-fattening' farm", por Pascale Harter, BBC Mauritania (<http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3429903.stm>).
- Bedont, Barbara y Katherine Hall Martinez. 1999. "Ending Impunity for Gender Crimes under the International Criminal Court". *The Brown Journal of World Affairs* VI (1): 65-85.
- Beetham, Gwensolyn y Justina Demetriades. 2007. "Feminist research methodologies and development: overview and practical application". *Gender and Development* 15 (2): 199-216. doi: 10.1080/13552070701391086.
- Benavides, Lourdes. 2015. "La política de cooperación española a partir de 2015. Contra la pobreza y la desigualdad", editado por Oxfam Intermón. Madrid: Oxfam Intermón.
- Benhabib, Seyla. 2006. *Las reivindicaciones de la cultura: igualdad y diversidad en la era global*. Buenos Aires: Katz.
- Beriain, Josetxo, ed. 2004. *Modernidad y violencia colectiva*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Blazquez Graf, Norma. 2012. "Epistemología feminista: temas centrales". En *Investigación feminista: epistemología, metodología y representaciones sociales*, editado por Norma Blazquez Graf, Fátima Flores Palacios y Maribel Ríos Everardo, 21-38. México, D. F.: Universidad Autónoma de México (UNAM), Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Facultad de Psicología.
- Bock, Kenneth. 1988. "Teorías del progreso, el desarrollo y la evolución". En *Historia del análisis sociológico*, editado por Tom B. Bottomore y Robert A. Nisbet, 59-104. Buenos Aires: Amorrortu.

- Bodelón, Encarna. 2008. "La violencia contra las mujeres y el derecho no-androcéntrico: pérdidas en la traducción jurídica del feminismo". En *Género, violencia y derecho*, editado por Patricia Laurenzo Copello, María Luisa Maqueda Abreu y Ana Rubio Castro, 275-99. Valencia: Tirant lo Blanch
- Boris, Eileen, Stephanie Gilmore y Rhacel Parreñas. 2010. "Sexual labors: interdisciplinary perspectives toward sex as work". *Sexualities* 13: 131-7. doi: 10.1177/1363460709359228.
- Boserup, Ester. 1993. *La mujer y el desarrollo económico*. Madrid: Minerva. 1ª edición: 1970.
- Bourdieu, Pierre. 2000. *La dominación masculina*. Anagrama: Barcelona.
- _____. 2004. "Gender and symbolic violence". En *Violence in war and peace: an anthology*, editado por Nancy Scheper-Hughes y Philippe Bourgois, 339-42. Oxford (UK): Blackwell Publishing.
- Bourke, Joanna. 2009. *Los violadores. Historia del estupro de 1860 a nuestros días*. Barcelona: Crítica.
- Brewster, Mary P. 2002. "Domestic violence theories, research and practice implications". En *Handbook of domestic violence intervention strategies: policies, programs, and legal remedies*, editado por Albert R. Roberts, 23-48. Cary (USA): Oxford University Press.
- Brilliant, Eleanor L. 2000. "Women's gain: fund-raising and fund allocation as an evolving social movement strategy". *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 29 (4): 554-70. doi: 10.1177/0899764000294005.
- Brod, Harry. 1987. "A case for Men's Studies". En *Changing Men: new directions in research on men and masculinity*, editado por Michael S. Kimmel, 263-77. Newbury Park, California: Sage.
- Brownmiller, Susan. 1986. *Against our will: men, women and rape*. Harmondsworth: Penguin Books. 1ª edición: 1975.
- _____. 2000. *In our time - memoir of a revolution*. London: Aurum Press.
- Burstow, Bonnie. 2006. "Electroshock as a form of violence against women". *Violence Against Women* 12 (4): 372-92. doi: 10.1177/1077801206286404.
- Buss, Doris E. 2009. "Rethinking 'rape as a weapon of war'". *Feminist Legal Studies* 17 (2): 145-63. doi: 10.1007/s10691-009-9118-5.
- Bustelo, María. 1999. "Diferencias entre evaluación e investigación: una distinción necesaria para la identidad de la evaluación de programas". *Revista Española de Desarrollo y Cooperación* (4): 9-29.
- Bustelo, María y Emanuela Lombardo. 2006. "Los 'marcos interpretativos' de las políticas de igualdad en Europa: conciliación, violencia y desigualdad de género en la política". *Revista Española de Ciencia Política* (14): 117-40.

- _____, eds. 2007. *Políticas de igualdad en España y en Europa. Afinando la mirada*. Madrid: Cátedra.
- Bustelo, María, Silvia López y Raquel (Lucas) Platero. 2007. "La representación de la violencia contra las mujeres como un asunto de género y un problema público". En *Políticas de igualdad en España y en Europa. Afinando la mirada*, editado por María Bustelo y Emanuela Lombardo, 67-96. Madrid: Cátedra.
- Bustelo, Pablo. 1998. *Teorías contemporáneas del desarrollo económico*. Historia del pensamiento económico. Madrid: Editorial Síntesis.
- Bustinduy Amador, Ana. 2009. "La financiación a organizaciones de mujeres: apuesta imprescindible para la equidad del desarrollo". Memorando OPEX, 111. Madrid: Fundación Alternativas, Observatorio de Política Exterior Española (OPEX).
- Cámara López, Luis y José Manuel Puras Higuera. 2007. "Paradojas de las estrategias". *Revista Española de Desarrollo y Cooperación* 20: 65-82.
- Cameron, Fraser. 2007. "Development Police". En *An introduction to European foreign policy*, 158-71. Oxon: Routledge.
- Carline, Anna. 2011. "Criminal justice, extreme pornography and prostitution: protecting women or promoting morality?". *Sexualities* 14 (3): 312-33. doi: 10.1177/1363460711400810.
- Carrillo, Roxana. 1991. "La violencia contra la mujer: obstáculo para el desarrollo". En *Una nueva lectura: género en el desarrollo*, editado por Virginia Guzmán, Patricia Portocarrero y Virginia Vargas, 159-90. Lima: Entre Mujeres, Flora Tristán Ediciones.
- Casado Aparicio, Elena, Antonio A. García García y Fernando J. García Selgas. 2012. "Análisis crítico de los indicadores de violencia de género en parejas heterosexuales en España". *EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales* 24 (junio-diciembre): 163-86. doi: 10.5944/empiria.24.2012.847.
- Cascante, Katty, *et al.* 2011. "Nunca desaproveches una buena crisis: hacia una política pública española de desarrollo internacional", *Informes Elcano*, 13, editado por Iliana Olivie. Madrid: Real Instituto Elcano.
- Castro, Roberto y Florinda Riquer. 2003. "La investigación sobre la violencia contra las mujeres en América Latina: entre el empirismo ciego y la teoría sin datos". *Cad. Saúde Pública* 19 (1): 165-46.
- CC.OO. 2012. "Estrategia de Género y Desarrollo para la Cooperación Internacional". Madrid: Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.) y Fundación Paz y Solidaridad.
- CeALCI, Fundación Carolina -. 2011. "América Latina y la cooperación al desarrollo en la opinión pública española. Barómetro 2010 de la Fundación Carolina", *Documento de Trabajo*, 49. Madrid: Fundación Carolina - CeALCI.

- Cerne, Michael M., ed. 1995. *Primero la gente: variables sociológicas en el desarrollo rural*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica. 1ª edición: 1985.
- CIDOB. 2011. *Busan 2011: hacia una ayuda al desarrollo más eficaz*. Dossiers CIDOB [Barcelona Centre for International Affairs]. Disponible en: http://www.cidob.org/es/publicaciones/documentacion/dossiers/busan_2011/busan_2011_hacia_una_ayuda_al_desarrollo_mas_eficaz.
- Cirujano Campano, Paula. 2005. *La estrategia demorada – género y cooperación internacional en España*. Madrid: Catarata.
- _____. 2006. "Género, desarrollo y cooperación internacional". En *Género y desarrollo: el camino hacia la equidad*, editado por Marta Carballo de la Riva, 55-86. Madrid: Catarata; Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC).
- Clark, Cindy, Ellen Sprenger y Lisa VeneKlasen. 2006. "¿Dónde está el dinero para los derechos de las mujeres? Una evaluación sobre los recursos y el papel de las financiadoras en la promoción de los derechos de las mujeres y el apoyo a las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres". Toronto: Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID).
- Clark, David Alexander, ed. 2006. *The Elgar Companion to Development Studies*. Cheltenham (UK); Northampton (USA): Edward Elgar.
- Cleaver, Frances. 2002. "Men and masculinities: new directions in gender and development". En *Masculinities matter! Men, gender and development*, editado por Frances Cleaver, 1-27. London: Zed Books.
- Cockburn, Cynthia. 2007. *From where we stand: war, women's activism and feminist analysis*. London; New York: Zed Books.
- Colding, Bjørg y Per Pinstrup-Andersen. 2000. "Food aid as an aid instrument". En *Foreign aid and development: lessons learnt and directions for future*, editado por Finn Tarp y Peter Hjertholm, 195-219. London; New York: Routledge.
- Coll-Planas, Gerard y Marta Cruells. 2013. "La puesta en práctica de la interseccionalidad política: el caso de las políticas LGTB en Cataluña". *Revista Española de Ciencia Política* (31): 153-72.
- Collins, Patricia Hill. 1998. "It's all in the family: intersections of gender, race, and nation". *Hypatia* 13 (3): 62-82. doi: 10.1111/j.1527-2001.1998.tb01370.x.
- Collins, Randall. 2009. "Micro and macro causes of violence". *International Journal of Conflict and Violence* 3 (1): 9-22.
- Connell, R. W. 1995. *Masculinities*. Cambridge Malden, UK: Polity Press.
- Consejo de Europa. 2009. "El Consejo de Europa y la violencia de género. Documentos elaborados en el marco de la Campaña Paneuropea para combatir la violencia contra las mujeres (2006-2008)". Madrid: Ministerio de Igualdad, Subdirección General de Cooperación y Relaciones Institucionales. Disponible en:

http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/colecciones/PDFS_COL_ECCION/libro4_consejoeuropa.pdf.

- _____. 2011. "Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul)". CETS 210.
- Copelon, Rhonda. 2001. "Gender crimes as war crimes: integrating crimes against women into international criminal law". *McGill Law Journal* 46 (1): 217-40.
- Cornwall, Andrea, Sonia Corrêa y Susie Jolly. 2008. "Development with a body: making the connections between sexuality, human rights and development". En *Development with a body: sexuality, human rights and development*, editado por Andrea Cornwall, Sonia Corrêa y Susie Jolly, 1-21. London; New York: Zed Books.
- Cornwall, Andrea, Jerker Edström y Alan Greig, eds. 2011. *Men and development - politicizing masculinities*. London; New York: Zed Books.
- Cornwall, Andrea, Elizabeth Harrison y Ann Whitehead. 2007. "Gender myths and feminist fables: the struggle for interpretive power in gender and development". *Development and Change* 38 (1): 1-20.
- Cornwall, Andrea, Hilary Standing y Andrea Lynch. 2008. "Introduction: putting unsafe abortion on the development agenda". *IDS Bulletin*, 39. Brighton: Institute of Development Studies.
- Correa, Sonia. 2008. *Sexualidad, desarrollo, derechos humanos: revisitando los límites, alargando las fronteras*. Memorias del 1er. Encuentro Latinoamericano y del Caribe La sexualidade frente a la sociedad. Editado por Gloria Careaga. México, D. F.
- Corrêa, Sonia y Susie Jolly. 2008. "Development's encounter with sexuality: essentialism and beyond". En *Development with a body: sexuality, human rights and development*, editado por Andrea Cornwall, Sonia Corrêa y Susie Jolly, 22-42. London; New York: Zed Books.
- Craviotto, Nerea y Luisa Antolín, eds. 2009. *La movilización por la igualdad de género y la eficacia de la ayuda - acciones, estrategias, éxitos y desafíos*. Documento de Trabajo, 36. Madrid: Fundación Carolina - CeALCI, WIDE - Globalizando la igualdad de género y la justicia social.
- Craviotto Ortega, Nerea. 2009. "El papel de la Cooperación Española en el cumplimiento de las metas de la Plataforma de Beijing". Madrid: Campaña 'Muévete por la Igualdad. Es de justicia'. Disponible en: http://mueveteporlaigualdad.org/docs/cooperacion_espanola_beijing_castellano.pdf.
- Crenshaw, Kimberlé Williams. 1995. "Mapping the margins: intersectionality, identity politics and violence against women of color". En *Critical race theory: the key writings that formed the movement*, editado por Kimberlé Crenshaw, Neil Gotanda, Gary Peller y Kendall Thomas, 357-83. New York: The New Press.

- Cruz, Adrienne y Sabine Klinger. 2011. "Gender-based violence in the world of work: overview and selected annotated bibliography". Working Paper, 3. Geneva: International Labour Office (ILO).
- CSIC. 2011. "Recomendaciones para un lenguaje no sexista": Comisión de Mujeres y Ciencia, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Disponible en: <http://www.csic.es/web/guest/mujeres-y-ciencia>.
- Cueva Beteta, Hanny. 2006. "What is missing in measures of Women's Empowerment?". *Journal of Human Development* 7 (2): 221-41. doi: 10.1080/14649880600768553.
- Chant, Sylvia y Matthew C. Gutmann. 2002. "'Men-streaming' gender? Questions for gender and development policy in the twenty-first century". *Progress in Development Studies* 2: 269-82. doi: 10.1191/1464993402ps041ra.
- Chinkin, Christine. 2009. "Gender-related violence and international criminal law and justice". En *The Oxford companion to international criminal justice*, editado por Antonio Cassese, 75-81. Oxford: Oxford University Press.
- DAC-OECD. 1998. "Development Cooperation Review - Spain". Paris: Development Assistance Committee - Organisation for Economic Co-operation and Development (DAC-OECD). Disponible en: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/development-co-operation-reviews-spain-1998_9789264174290-en#page3.
- _____. 2002. "Development Cooperation Review - Spain". Paris: Development Assistance Committee - Organisation for Economic Co-operation and Development (DAC-OECD). Disponible en: <http://www.oecd.org/dac/peer-reviews/2084353.pdf>.
- _____. 2007. "Development Cooperation Review - Spain". Paris: Development Assistance Committee - Organisation for Economic Co-operation and Development (DAC-OECD). Disponible en: <http://www.oecd.org/pcd/39710206.pdf>.
- _____. 2008. "Is it ODA?", *Factsheet*. Paris: Development Assistance Committee - Organisation for Economic Co-operation and Development (DAC-OECD). Disponible en: <http://www.oecd.org/dataoecd/21/21/34086975.pdf>.
- _____. 2011. "Development Cooperation Review - Spain". Paris: Development Assistance Committee - Organisation for Economic Co-operation and Development (DAC-OECD). Disponible en: <http://www.oecd.org/dac/peer-reviews/SpainPR.pdf>.
- Davids, Tine, Francien Van Driel y Franny Parren. 2013. "Feminist change revisited: gender mainstreaming as slow revolution". *Journal of International Development* 26 (3): 396-408. doi: 10.1002/jid.2945.
- Davila, Andrés. 1994. "Las perspectivas metodológicas cualitativa y cuantitativa en las ciencias sociales: debate teórico e implicaciones praxeológicas". En *Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales*, editado por Juan Manuel Delgado y Juan Gutiérrez, 69-83. Madrid: Síntesis.

- de Camargo, Jr., Kenneth y Rubén Mattos. 2008. Buscando sexo en los lugares equivocados: el silenciamiento de la sexualidad en el discurso público del Banco Mundial. En *Políticas sobre sexualidad: reportes desde las líneas del frente*, editado por Richard Parker, Rosalind Petchesky y Robert Sember. México: Sexuality Policy Watch; Fundación Arcoiris por el Respeto a la Diversidad Sexual; Grupo de Estudios sobre Sexualidad y Sociedad.
- de Haan, Arjan. 2009. Aid: the drama, the fiction, and does it work? *ISS Working Paper Series*, 488: 27.
- de Miguel, Ana. 2005. "La construcción de un marco feminista de interpretación: la violencia de género". *Cuadernos de Trabajo Social* 18: 231-48.
- _____. 2008. "La violencia contra las mujeres. Tres momentos en la construcción del marco feminista de interpretación". *ISEGORÍA. Revista de Filosofía Moral y Política* 38 (enero-junio): 129-37. doi: 10.3989/isegoria.2008.i38.407.
- Defensor del Pueblo. 2012. "La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles". Madrid: Defensor del Pueblo.
- DGPOLDE/SECI y AECI. s. d.-a. "Afganistán. Plan de Actuación Especial 2006-2008 de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. s. d.-b. "Albania. Plan de Actuación Especial 2006-2008 de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. s. d.-c. "Argelia. Documento de Estrategia País 2005-2008 de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. s. d.-d. "Argentina. Plan de Actuación Especial 2006-2008 de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. s. d.-e. "Bangladesh. Plan de Actuación Especial 2006-2008 de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. s. d.-f. "Bolivia. Documento de Estrategia País 2005-2008 de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo, Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

- _____. s. d.-g. "Bosnia y Herzegovina. Plan de Actuación Especial 2006-2008 de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. s. d.-h. "Brasil. Plan de Actuación Especial 2006-2008 de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. s. d.-i. "Cabo Verde. Documento de Estrategia País 2005-2008 de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. s. d.-j. "Camboya. Plan de Actuación Especial 2006-2008 de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. s. d.-k. "Colombia. Plan de Actuación Especial 2006-2008 de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. s. d.-l. "Costa Rica. Plan de Actuación Especial 2006-2008 de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. s. d.-m. "Ecuador. Documento de Estrategia País 2005-2008 de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. s. d.-n. "Egipto. Plan de Actuación Especial 2006-2008 de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo, Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
- _____. s. d.-o. "El Salvador. Documento de Estrategia País 2005-2008 de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. s. d.-p. "Etiopía. Plan de Actuación Especial 2006-2008 de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).

- _____. s. d.-q. "Guatemala. Documento de Estrategia País 2005-2008 de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. s. d.-r. "Haití. Documento de Estrategia País 2006-2008 de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. s. d.-s. "Honduras. Documento de Estrategia País 2005-2008 de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. s. d.-t. "Jordania. Plan de Actuación Especial 2006-2008 de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. s. d.-u. "Líbano. Plan de Actuación Especial 2006-2008 de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. s. d.-v. "Malí. Plan de Actuación Especial 2006-2008 de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. s. d.-w. "Marruecos. Documento de Estrategia País 2005-2008 de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. s. d.-x. "México. Plan de Actuación Especial 2006-2008 de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. s. d.-y. "Nicaragua. Documento de Estrategia País 2005-2008 de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. s. d.-z. "Níger. Plan de Actuación Especial 2006-2008 de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).

- _____. s. d.-aa. "Panamá. Plan de Actuación Especial 2006-2008 de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. s. d.-ab. "Paraguay. Documento de Estrategia País 2005-2008 de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. s. d.-ac. "Perú. Documento de Estrategia País 2005-2008 de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. s. d.-ad. "República Democrática del Congo. Plan de Actuación Especial 2006-2008 de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. s. d.-ae. "República Dominicana. Documento de Estrategia País 2005-2008 de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. s. d.-af. "Santo Tomé y Príncipe. Plan de Actuación Especial 2006-2008 de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. s. d.-ag. "Sri Lanka. Plan de Actuación Especial 2006-2008 de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. s. d.-ah. "Sudán. Plan de Actuación Especial 2006-2008 de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. s. d.-ai. "Timor Oriental. Plan de Actuación Especial 2006-2008 de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. s. d.-aj. "Túnez. Documento de Estrategia País 2005-2008 de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).

- _____. s. d.-ak. "Uruguay. Plan de Actuación Especial 2006-2008 de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. s. d.-al. "Venezuela. Plan de Actuación Especial 2006-2008 de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. s. d.-am. "Vietnam. Documento de Estrategia País 2005-2008 de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- Dixon-Mueller, Ruth y Adrienne Germain. 1994. "Population policy and feminist political action in three developing countries". *Population and Development Review* 20 (The new politics of population: conflict and consensus in family planning): 197-219. doi: 10.2307/2807947.
- Dobash, R. Emerson y Russell P. Dobash. 1977. "Love, honour and obey: institutional ideologies and the struggle for battered women". *Contemporary Crisis* 1: 403-15.
- _____. 1981. "Community response to violence against wives: charivari, abstract justice and patriarchy". *Social Problems* 28 (5): 563-81.
- Dobash, Russel P. y R. Emerson Dobash. 2004. "Women's violence to men in intimate relationship: working a puzzle". *British Journal of Criminology* 44 (3): 324-49. doi: 10.1093/bjc/azh026.
- Dobash, Russell P. , *et al.* 1992. "The myth of sexual symmetry in marital violence". *Social Problems* 39 (1): 71-91.
- Domínguez Martín, Rafael. 2013. "Más allá de la ayuda: una nueva métrica de la ayuda oficial al desarrollo post-2015". *Íconos. Revista de Ciencias Sociales* (47): 31-45. doi: 10.17141/iconos.47.2013.821.
- Durán y Lalaguna, Paloma. 2000. "España en los organismos internacionales y el enfoque de género". En *Los organismos multilaterales y la ayuda al desarrollo*, editado por J. A. Alonso y Ch. Freres, 345-60. Madrid: Civitas Ediciones.
- Dutton, Donald G. 2006. *Rethinking domestic violence*. Vancouver: UBC Press.
- Echart Muñoz, Enara y José Ángel Sotillo Lorenzo. 2005. "Interrogantes sobre el futuro de la política europea de cooperación para el desarrollo. Luces y sombras en el Tratado por el que se establece una Constitución Europea". *Revista Española de Desarrollo y Cooperación* (15): 157-72.
- Edelman, Marc y Angelique Hangerud. 2007. "Development". En *A companion to the anthropology of politics*, editado por David Nugent y Joan Vincent. Malden (USA); Oxford (UK); Victoria (Australia): Blackwell.

- Ehrenreich, Barbara y Deirdre English. 1990. *Por su propio bien. 150 años de consejos de expertos a mujeres*. Madrid: Taurus. 1ª edición: 1973.
- Eisenstadt, S. N. 1992. "A reappraisal of theories of social change and modernization". En *Social change and modernity*, editado por Hans Haferkamp y Neil J. Smelser, 412-29. Berkeley; Los Angeles; Oxford: University of California Press.
- El-Bushra, Judy y Eugenia Piza Lopez. 1993. "Gender-related violence: its scope and relevance". *Focus on Gender* 1 (2, Violence: Military and Civilian Strife): 1-9.
- El Diario*. 07/01/2016. "Rivera reconoce que la polémica por la violencia machista lastró la campaña de Ciudadanos", por Andrés Gil (http://www.eldiario.es/politica/Rivera-polemica-violencia-machista-Ciudadanos_0_471053242.html).
- El Mundo*. 10/12/2015. "Ciudadanos toca de oído en violencia de género", por Marisa Soleto (<http://www.elmundo.es/espana/2015/12/10/56697ba5ca47414a7f8b45fd.html>).
- El Mundo*. 22/12/2015. "En busca de los errores de Ciudadanos en la campaña: sus asignaturas pendientes", por Raúl Piña (<http://www.elmundo.es/espana/2015/12/22/5678564a46163f14388b4631.html>).
- El País*. 07/06/2016. "Ciudadanos reformula su propuesta laboral, judicial y contra la violencia de género, pero las mantiene" (http://politica.elpais.com/politica/2016/06/07/actualidad/1465292064_394378.html).
- El Plural*. 09/12/2015. "Organizaciones feministas tachan de irresponsables los mensajes electorales del PP sobre violencia de género" (<http://www.elplural.com/2015/12/09/organizaciones-feministas-tachan-de-irresponsables-los-mensajes-electorales-del-pp-sobre-violencia-de-genero/>).
- El Público*. 08/12/2015. "La violencia de género en las elecciones", por Lidia Falcón (<http://blogs.publico.es/lidia-falcon/2015/12/08/la-violencia-de-genero-en-las-elecciones/>).
- Engle Merry, Sally. 2003. "Constructing a global law-violence against women and the human rights system". *Law & Social Inquiry* 28 (4): 941-77. doi: 10.1111/j.1747-4469.2003.tb00828.x.
- Equipo Multilateral de DGPOLE. 2007. "La cooperación multilateral". En *Avances y retos de la cooperación española: reflexiones para una década*, editado por Manuel Iglesia-Caruncho, 137-56. Madrid: Fundación Carolina; Siglo XXI.
- Escobar, Arturo. 1988. "Power and visibility: development and the invention and management of the Third World". *Cultural Anthropology* 3 (4): 428-43. doi: 10.1525/can.1988.3.4.02a00060.

- _____. 1991. "Anthropology and the development encounter: the making and marketing of development anthropology". *American Ethnologist* 18 (4): 658-82. doi: 10.1525/ae.1991.18.4.02a00020.
- _____. 1995. *Encountering development: the making and unmaking of the third world*. Ed. Sherry B. Ortner, Nicholas B. Dirks y Geoff Eley. Princeton studies in culture/power/history. Princeton: Princeton University Press.
- España. 1998. "Ley 23/1998, de 8 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo". BOE 162, 8 de julio de 1998.
- _____. 2004. "Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género". BOE 313, 29 de diciembre de 2004.
- _____. 2007. "Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres". BOE 71, 23 marzo de 2007.
- Espinosa Fajardo, Julia. 2011. *La igualdad de género en la evaluación de la ayuda al desarrollo: los casos de la cooperación oficial británica, sueca y española*, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
- _____. 2014. "La igualdad de género en la cooperación española y en la iniciativa Marca España. Abordajes e inconsistencias en tiempos de crisis". *Investigaciones Feministas* 5: 259-88. doi: 10.5209/rev_INFE.2014.v5.48135.
- Falquet, Jules. 2014. "Las *Feministas* autónomas latinoamericanas y caribeñas: veinte años de disidencias". *Universitas humanística* (77): 39-63. doi: 10.11144/Javeriana.UH78.fale.
- Fernández, J. Manuel. 2005. "La noción de violencia simbólica en la obra de Pierre Bourdieu: una aproximación crítica". *Cuadernos de Trabajo Social* 18: 7-31.
- Ferrer Pérez, Victoria A. 2008. "Las diversas manifestaciones de la violencia de género". En *Violencia de género - algunas cuestiones básicas*, editado por Esperanza Bosch Fiol, 61-106. Alcalá la Real: Formación Alcalá.
- Flick, Uwe. 1998. *An introduction to qualitative research*. London: Sage Publications.
- Fonow, Mary Margaret y Judith A. Cook. 2005. "Feminist methodology: new applications in the academy and public policy". *Signs* 30 (4): 2211-36.
- Foucault, Michel. 1968. *Las palabras y las cosas: una arqueología de las ciencias humanas*. México, D.F.: Siglo XXI.
- _____. 1979. *La arqueología del saber*. México, D.F.: Siglo XXI.
- FRA. 2014. "Violencia de género contra las mujeres: una encuesta a escala de la UE. Resumen de las conclusiones". Luxemburgo: FRA (Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea), Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Disponible en: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance_es_0.pdf.

- Fresnillo i Sallán, Iolanda y Dani Gómez-Olivé i Casas. 2011. "La cooperación financiera en España: ¿hacia una nuevo paradigma de desarrollo?". Madrid: Coordinadora de ONG para el Desarrollo - España; Plataforma 2015 y más. Disponible en: http://2015ymas.org/IMG/pdf/coop_financiera.pdf.
- Fried, Susana T. 2007. "Show us the money: is violence against women on the HIV&AIDS donor agenda?", editado por Women Won't Wait Campaign. Washington, D.C.: Action Aid.
- Fukuda-Parr, Sakiko. 2012. "Recapturing the narrative of international development", *Gender and Development Programme Paper*. Geneva: United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD).
- Fundação Perseu Abramo y SESC. 2010. "Mulheres brasileiras e gênero nos espaços público e privado. Pesquisa de opinião pública". Disponible en: http://novo.fpabramo.org.br/sites/default/files/pesquisaintegra_0.pdf.
- Galtung, Johan. 1990. "Cultural violence". *Journal of Peace Research* 27 (3): 291-305. doi: 10.1177/0022343390027003005.
- Galvani Foresi, Victoria. 2000. "La Agencia Española de Cooperación al Desarrollo y la igualdad de género en la ayuda oficial al desarrollo". *Revista Española de Desarrollo y Cooperación* (6): 43-57.
- _____. 2001. "El enfoque de género en la cooperación internacional española y la Ayuda Oficial al Desarrollo". *Revista Cooperación Internacional* 4 (6): 99-110.
- García-Calvo, Carola. 2010. "El papel de las ideas, valores y creencias del líder en la definición y acciones de política exterior: España 2000-2008". *Revista Relaciones Internacionales* (13): 35-63.
- García-Moreno, Claudia, *et al.* 2003. "Responding to violence against women: WHO's multicountry study on women's health and domestic violence". *Health and Human Rights* 6 (2): 112-27. doi: 10.1177/1077801204265554.
- García Beltrán, Beatriz y Celinda Sanz Velasco. 2009. "Aplicación técnica bajo la perspectiva de género de la Estrategia de Acción Humanitaria". En *Nuevas líneas de investigación en género y desarrollo*, editado por Estafanía Molina y Nava San Miguel, 287-96. Madrid: Oficina de Acción Solidaria y Cooperación, Universidad Autónoma de Madrid.
- García Selgas, Fernando J. y Carmen Romero Bachiller. 2006. "Violencia y representación: introducción". En *El doble filo de la navaja: violencia y representación*, editado por Fernando J. García Selgas y Carmen Romero Bachiller, 11-26. Madrid: Trotta.
- Gargallo Celentani, Francesca. 2014. *Feminismos desde Abya Yala. Ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos en Nuestra América*. Ciudad de México: Editorial Corte y Confección.

- Garita Vilchez, Ana Isabel. 2013. "La regulación del delito femicidio/feminicidio en América Latina y el Caribe". Ciudad de Panamá: Secretariado de la Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres. Disponible en: http://www.un.org/es/women/endviolence/pdf/reg_del_femicidio.pdf.
- Garranzo, Rafael. 2013. "La cooperación de España con América Latina". En *La renovación de la cooperación iberoamericana. Transformaciones para una agenda post-2015*, editado por Salvador Arriola, Rafael Garranzo y Laura Ruiz Jiménez, 71-83. Madrid: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Ministerio de Asuntos Exterior y de Cooperación (MAEC); Secretaria General Iberoamericana (SEGIB).
- Gaspar, Des. 1996. "Essentialism in and about development discourse". En *Arguing development policy: frames and discourses*, editado por Raymond Apthorpe y Des Gaspar, 149-76. London; Portland: FrankCass.
- _____. 2003. "Studying aid: some methods", *ISS Working Paper Series*, 382. The Hague: Institute of Social Studies.
- Gaye, Amie, *et al.* 2010. Measuring key disparities in human development: the Gender Inequality Index. En *Human Development Research Paper 2010/46*. New York: United Nations Development Programme, Human Development Report Office.
- Gelles, Richard J. 2000. "Public policy for violence against women - 30 years of successes and remaining challenges". *American Journal of Preventive Medicine* 19 (4): 298-301. doi: 10.1016/S0749-3797(00)00245-2.
- _____. 2003. "Violence in the family". En *International handbook of violence research*, editado por Wilhelm Heitmeyer y John Hagan, 837-62. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Gimeno, Beatriz. 2011. *La prostitución*. Barcelona: Edicions Bellaterra.
- Gómez-Quintero, Juan David y Juan Agustín Franco Martínez. 2012. "¿Cooperar o imponer? Análisis crítico de la igualdad de género en el caso de la cooperación internacional hispano-colombiana". *Revista Española de Investigaciones Sociológicas* 137: 59-78. doi: 10.5477/cis/reis.137.59.
- Gómez Galán, Manuel y José Antonio Sanahuja. 1999. *El sistema internacional de cooperación al desarrollo: una aproximación a sus actores e instrumentos*. Madrid: Cideal.
- Gómez Gil, Carlos. 1996. *El comercio de la ayuda al desarrollo: historia y evaluación de los créditos FAD*. Madrid: Catarata.
- _____. 2003. *Oportunidades perdidas: el estado de la Ayuda Oficial al Desarrollo en España*. Bilbao: Bakeaz.
- Gómez Isa, Felipe. 1998. *El derecho al desarrollo: entre la justicia y la solidaridad*. Cuadernos Deusto de Derechos Humanos. Bilbao: Universidad de Deusto.

- _____. 1999. *El derecho al desarrollo como derecho humano en el ámbito jurídico internacional*. Serie Derechos Humanos. Bilbao: Universidad de Deusto.
- Gordon, Malcolm. 2008. "Definitional issues in violence against women". En *Domestic violence*, editado por Michael Freeman, 3-39. Hampshire: Ashgate.
- Grande Gascón, M^a Luisa y Miguel García Guindo. 2012. La estrategia de género en desarrollo en la política de cooperación española: situación actual y perspectivas en un contexto de crisis. Paper read at III Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas, 27 y 28 de septiembre de 2012, at Madrid.
- Grau Creus, Mireia. 2002. "El estudio de las políticas públicas: enfoques y metodologías de análisis". En *Análisis de políticas públicas en España: enfoques y casos* editado por Mireia Grau y Araceli Mateos, 29-58. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Greig, Alan. 2011. "Anxious states and directions for masculinities work with men". En *Men and development - politicizing masculinities*, editado por Andrea Cornwall, Jerker Edström y Alan Greig, 219-35. London; New York: Zed Books.
- Griffin, Gabriele y Rosi Braidotti, eds. 2002. *Thinking differently - A reader in European Women's Studies*. London; New York: Zed Books.
- Grillo, R. D. 1997. "Discourses of development: the view from Anthropology". En *Discourses of development: anthropological perspectives*, editado por R. D. Grillo y R. L. Stirrat. Oxford; New York: Berg.
- GTZ. 2005. "Ending violence against women and girls, Protecting human rights. Good practices for development cooperation". Eschborn: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ).
- Guash Andreu, Óscar. 2008. "Los varones en perspectiva de género. Teorías y experiencias de discriminación". *Asparkia. Investigació Feminista* 19: 29-38.
- Guereña, Jean-Louis. 2003. *La prostitución en la España contemporánea*. Madrid: Marcial Pons Historia.
- Guerra Palmero, Maria José. 2001. *Teoría feminista contemporánea - una aproximación desde la ética*. Madrid: Editorial Complutense, Instituto de Investigaciones Feministas, Universidad Complutense de Madrid.
- _____. 2014. "Feminismo transnacional, globalización y derechos humanos". *Dilemata* 6 (15): 161-9.
- Guggisberg, Marika. 2009. "When intimate partner violence result in women opting for retaliation". *Clepsydra: revista de estudios de género y teoría feminista* 8 (noviembre): 129-38.
- Hagemann-White, Carol. 2003. "A comparative examination of gender perspectives on violence". En *International handbook of violence research*, editado por Wilhelm Heitmeyer y John Hagan, 97-117. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

- Hancock, Ange-Marie. 2007. "When multiplication doesn't equal quick addition: examining intersectionality as a research paradigm". *Perspectives on Politics* 5 (1): 63-79. doi: 10.1017/S1537592707070065.
- Harris, Angela P. 2000. "Race and essentialism in feminist legal theory". En *Critical race theory: the cutting edge*, editado por Richard Delgado y Jean Stefancic, 261-74. Philadelphia: Temple University Press.
- Hartline, Sharon E. 1997. "Battered women who kill: victims and agents of violence". *Journal of Social Philosophy* 28 (2): 56-67. doi: 10.1111/j.1467-9833.1997.tb00375.x.
- Hayes, Ceri. 2005. "Out of the margins: the MDGs through a CEDAW lens". *Gender and Development* 13 (1): 67-78.
- Haynes, Jeffrey, ed. 2005. *Palgrave advances in development studies*. Palgrave Advances. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Heitmeyer, Wilhelm y John Hagan, eds. 2003. *International handbook of violence research*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Herrfahrdt-Pähle, Elke y Birte Rodenberg. 2012. "WDR 2012 "Gender Equality and Development": conceptual turning point – but no change in practice?". Briefing Paper, 2. German Development Institute.
- Heyzer, Noeleen. 1998. "Working towards a world free from violence against women: UNIFEM's contribution". *Gender and Development* 6 (3): 17-26.
- Hidalgo Capitán, Antonio Luis. 1998. *El pensamiento económico sobre desarrollo: de los mercantilistas al PNUD*. Huelva: Universidad de Huelva.
- Hinson Shope, Janet. 2004. "When words are not enough: the search for the effect of pornography on abused women". *Violence Against Women* 10 (1): 56-72. doi: 10.1177/1077801203256003.
- Hodges, Ernest V.E., Noel A. Card y Jenny Isaacs. 2003. "Learning of aggression in the home and the peer group". En *International handbook of violence research*, editado por Wilhelm Heitmeyer y John Hagan, 495-509. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Holvoet, Nathalie. 2010. "Gender equality and new aid modalities: is love really in the air?". *European Journal of Development Research* 22 (1): 97-117. doi: 10.1057/ejdr.2009.50.
- Hopenhay, Fernanda, Lucía Carrasco Scherer y Natalie Raaber. 2008. "FinanciaLas Informe 2008: vigilando el dinero para los movimientos y organizaciones de derechos de las mujeres". Toronto: Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID).

- Htun, Mala y S. Laurel Weldon. 2012. "The civic origins of progressive policy change: combating violence against women in global perspective, 1975–2005". *American Political Science Review* 106 (3): 548-69. doi: 10.1017/S0003055412000226.
- Iglesia-Caruncho, Manuel de la. 2011. "The politics and policy of aid in Spain", *Research Report*, 65. Brighton (UK): Institute of Development Studies at the University of Sussex.
- Iglesia-Caruncho, Manuel de la, Milagros Hernando y David Del Campo. 2007. "Avances y retos de la cooperación española para el desarrollo: aproximación a una visión de conjunto". En *Avances y retos de la cooperación española: reflexiones para una década*, editado por Manuel Iglesia-Caruncho, 3-38. Madrid: Fundación Carolina; Siglo XXI.
- Imbusch, Peter. 2003. "The concept of violence". En *International handbook of violence research*, editado por Wilhelm Heitmeyer y John Hagan, 13-39. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Imbusch, Peter, Michel Misse y Fernando Carrión. 2011. "Violence Research in Latin American and the Caribbean: A Literature Review". *International Journal of Conflict and Violence* 5 (1): 87-154.
- Imbusch, Peter y Alex Velt. 2011. "The nexus of violence, violence research, and development. Introduction to the Focus Section". *International Journal of Conflict and Violence* 5 (1): 4-12.
- Inglehart, Ronald. 1999. *Modernización y posmodernización: el cambio cultural, económico y político en 43 sociedades*. Monografías, Vol. 161. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Inglehart, Ronald y Christian Welzel. 2006. *Modernización, cambio cultural y democracia: la secuencia del desarrollo humano*. Monografías, Vol. 231. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Instituto de la Mujer. 2004. "Programa de Cooperación Internacional 'Mujeres y Desarrollo'". Madrid: Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo. 2009. "Estrategia de Género de ISCOD-UGT". Madrid: Fundación Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD-UGT).
- Intermón Oxfam. 2001. "La realidad de la ayuda 2001-2002: una evaluación independiente de la ayuda al desarrollo española e internacional", *Colección Informes*, 19, editado por José M^a Vera. Barcelona: Intermón Oxfam.
- _____. 2003. "La realidad de la ayuda 2003-2004: una evaluación independiente de la ayuda al desarrollo española e internacional", *Colección Informes*, 26, editado por José M^a Vera. Barcelona: Intermón Oxfam.

- Izquierdo, María Jesús. 1988. "¿Son las mujeres objeto de estudio para la ciencias sociales?". *Papers: Revista de Sociología* 30: 51-66. doi: <http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v30n0.1473>.
- Izumi, Kaori. 2007. "Gender-Based Violence and Property Grabbing in Africa: A Denial of Women's Liberty and Security". *Gender and Development* 15 (1): 11-23.
- Jackman, Mary R. 1999. "Gender, violence and harassment". En *Handbook of the Sociology of Gender*, editado por Janet Saltzman Chafetz, 275-317. New York: Kluwer Academic; Plenum Publishers.
- Jacobsen, Joyce P. 2006. "Men's issue in development". En *The other half of gender*, editado por Ian Bannon y Maria C. Correia, 1-28. Washington, DC: World Bank.
- Jacobson, Ruth. 1993. "Domestic violence as a development issue". *Focus on Gender* 1 (2): 37-9.
- Jaggar, Alison M. 2008. "'Saving Amina': global justice for women and intercultural dialogue". En *Global ethics: seminal essays*, editado por Thomas Pogge y Keith Horton, 565-603. St. Paul: Paragon House. 1ª edición: Real World Justice, ed. Andreas Folesdal and Thomas Pogge (Dordrecht: Springer, 2005).
- Jain, Devaki. 2005. *Women, development and the UN: a sixty-year quest for equality and justice*. United Nations Intellectual History Project. Bloomington: Indiana University Press.
- Janovicek, Nancy. 2007. *No place to go: local histories of the Battered Women's Shelter Movement*. Vancouver: UBC Press.
- Jenkins-Smith, Hank C. y Paul A. Sabatier. 1993. "The study of public policy process". En *Policy change and learning. An advocacy coalition approach*, editado por Hank C. Jenkins-Smith y Paul A. Sabatier. Boulder; San Francisco; Oxford: Westview Press.
- Jerez, Ariel, Víctor Sampedro y José A. López Rey. 2008. *Del 0,7% a la desobediencia civil: política e información del movimiento de las ONG de desarrollo (1994-2000)*. Monografías, Vol. 252. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Jewkes, Rachel y Loveday Penn-Kekana. 2015. "Mistreatment of women in childbirth: time for action on this important dimension of violence against women". *PLoS Medicine* 12 (6). doi: 10.1371/journal.pmed.1001849.
- Joachim, Jutta M. 2007. *Agenda setting, the UN, and the NGOs: gender violence and reproductive rights*. Washington, DC: Georgetown University Press.
- Johnson, Holly, Natalia Ollus y Sami Nevala. 2008. *Violence against women: an international perspective*. SpringerLink (Online service) ed. New York: Springer Science+Business Media, LLC.

- Johnson, Michael P. 1995. "Patriarchal terrorism and common couple violence: two forms of violence against women". *Journal of Marriage and Family* 57 (2): 283-64. doi: 10.2307/353683.
- _____. 2005. "Domestic violence: It's not about gender - or is it?". *Journal of Marriage and Family* 67 (5): 1126-30. doi: 10.1111/j.1741-3737.2005.00204.x.
- _____. 2009. Differentiating among types of domestic violence. En *Marriage and family: perspectives and complexities*, editado por. H. Elizabeth Peters y Claire Kamp M. Dush. New York: Columbia University Press.
- Johnson, Michael P. y Kathleen J. Ferraro. 2000. "Research on domestic violence in the 1990s: making distinctions". *Journal of Marriage and Family* 62 (4): 948-63. doi: 10.1111/j.1741-3737.2000.00948.x.
- Johnson, Robert. 2005. "Not a sufficient condition: the limited relevance of the gender MDG to women's progress". *Gender and Development* 13 (1): 56-66.
- Johnstone, Rachel. 2006. "Feminist influences on the United Nations Human Rights treaty bodies". *Human Rights Quarterly* 28 (1): 148-85. doi: 10.1353/hrq.2006.0005.
- Jolly, Susie. 2000. "'Queering' development: exploring the links between same-sex sexualities, gender, and development". *Gender and Development* 8 (1): 78-88.
- _____. 2007. "Why the development industry should get over its obsession with bad sex and start to think about pleasure". Working Paper, 283. Brighton (UK): Institute of Development Studies (IDS) at the University of Sussex.
- Jongitud, Jaqueline. 2008. *El derecho al desarrollo en el ámbiro de las Naciones Unidas - notas críticas*. Xalapa (México): Universidad Veracruzana.
- Juliano, Dolores. 2001. "Modelos de género a partir de sus límites: la prostitución". En *Multiculturalismo y género: perspectivas interdisciplinarias*, editado por Mary Nash y Diana Marre. Barcelona: Edicions Bellaterra.
- Kabeer, Naila. 1998. *Realidades trastocadas: las jerarquías de género en el pensamiento del desarrollo*. México, D.F.: Paidós.
- _____. 2005. "Gender equality and women's empowerment: a critical anaysis of the third Millennium Development Goal". *Gender and Development* 13 (1): 13-24.
- _____. 2014. "Violence against women as 'relational' vulnerability: engendering the sustainable human development agenda", *Occasional Paper*. New York: UNDP Human Development Report Office.
- Kabunda, Mbuyi, ed. 2011. *África y la cooperación con el Sur desde el Sur*. Madrid: Catarata; Casa África; Observatorio sobre la Realidad Social del África Subsahariana.
- Kanbur, Ravi. 2002. "Economics, Social Science and Development". *World Development* 30 (3): 477-86. doi: 10.1016/S0305-750X(01)00117-6.

- Keck, Margaret E. y Kathryn Sikkink. 1998. *Activist beyond borders: advocacy networks in international politics*. New York: Cornell University.
- Kelly, Liz. 1999. "Violence against women: a policy neglect or a neglect of policy?". En *New Agendas for Women*, editado por Sylvia Walby, 119-47. New York: Palgrave Macmillan.
- Kempadoo, Kamala, ed. 1999. *Sun, sex, and gold: tourism and sex work in the Caribbean*. Lanham; Oxford: Rowman & Littlefield.
- Khan, Farida C. 2005. "Gender violence and development discourse in Bangladesh". *International Social Science Journal* 57 (184): 219-30.
- Khotari, Uma. 2010. "From colonial administration to development studies: a post-colonial critique of the history of Development Studies". En *A radical history of Development Studies: individuals, institutions and ideologies*, editado por Uma Khotari. London; Cape Town: Zed Books; David Philip.
- Klasen, Stephan y Dana Schüler. 2011. "Reforming the Gender-Related Development Index and the Gender Empowerment Measure: implementing some specific proposals". *Feminist Economics* 17 (1): 1-30. doi: 10.1080/13545701.2010.541860.
- Knoepfel, Peter, et al. 2007. *Public policy analysis*. Bristol: The Policy Press.
- Kothari, Smitu y Wendy Harcourt. 2004. "Introduction: The violence of development". *Development* 47 (1): 3-7. doi: 10.1057/palgrave.development.1100024.
- Kurz, Demie. 1993. "Social science perspectives on wife abuse: current debates and future directions". En *Violence against women. The bloody footprints*, editado por Pauline B. Bart y Eileen Geil Moran, 252-69. London: Sage Publications.
- Lagarde, Marcela. 1996. *Género y feminismo – desarrollo humano y democracia*. Madrid: horas y HORAS.
- Lagarde y de los Ríos, Marcela 2009. "Claves feministas en torno al feminicidio - construcción teórica, política y jurídica". En *Nuevas líneas de investigación en género y desarrollo*, editado por Estafanía Molina y Nava San Miguel, 211-33. Madrid: Oficina de Acción Solidaria y Cooperación, Universidad Autónoma de Madrid.
- Lagares, Nieves, Marta Álvarez y Xosé Cuns. 2011. "Cooperación para el desarrollo de la Administración General del Estado y Cooperación Oficial Descentralizada Autonómica: transparencia para la coordinación", *Serie Avances de Investigación*, 59. Madrid: Fundación Carolina, CeALCI.
- Lagunas, Raquel. 2009. "Gestión del conocimiento, calidad de la ayuda y equidad de género: una propuesta de trabajo para la Cooperación Española", *Documento de Trabajo*, 35. Madrid: Fundación Carolina, CeALCI.

- Larrú, José María. 2010. "Más ¿es mejor? Reflexiones en torno a la calidad de la ayuda al desarrollo española", *Documento de Trabajo. Serie CECOD*, 12. Madrid: Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo (CECOD).
- Larrú, José María y Sergio Tezanos Vázquez. 2012. "Ayuda oficial española al desarrollo: los retos de la especialización geográfica y sectorial". *Estudios de Economía Aplicada* 30 (3): 889-914.
- Latouche, Serge. 2007. *Sobrevivir al desarrollo - de la descolonización del imaginario económico a la construcción de una sociedad alternativa*. Barcelona: Icaria.
- Leech, Nancy L. y Anthony J. Onwuegbuzie. 2011. "Beyond constant comparins qualitative data analysis: using NVivo". *School Psychology Quarterly* 26 (1): 70-84. doi: 10.1037/a0022711.
- Leys, Colin. 1996. "The rise & fall of development theory". En *The rise & fall of development theory*, 3-44. Oxford; Bloomington; Nairobi: James Currey; Indiana University Press; EAEP.
- Little, Peter D. y Michael Painter. 1995. "Discourse, politics, and the development process: reflections on Escobar's "Anthropology and the Development Encounter"". *American Ethnologist* 22 (3): 602-9. doi: 10.1525/ae.1995.22.3.02a00080.
- Lombardo, Emanuela. 2008. "Desigualdad de género en la política: un análisis de los marcos interpretativos en España y en la Unión Europea". *Revista Española de Ciencia Política* (18): 95-120.
- Lombardo, Emanuela y Margarita León. 2014. "Políticas de igualdad de género y sociales en España: origen, desarrollo y desmantelamiento en un contexto de crisis económica". *Investigaciones Feministas* 5: 13-35. doi: 10.5209/rev_INFE.2014.v5.47986.
- López, Irene. 2005. "Género en la agenda internacional del desarrollo - un enfoque de derechos humanos". *Revista Académica de Relaciones Internacionales* 2 (junio).
- López Méndez, Irene. 2006. "Más allá del desarrollo: la estrategia del empoderamiento". En *Género y desarrollo: el camino hacia la equidad*, editado por Marta Carballo de la Riva, 87-111. Madrid: Catarata; Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC).
- López Rodríguez, Silvia. 2011. "¿Cuáles son los marcos interpretativos de la violencia de género en España? Un análisis constructivista". *Revista Española de Ciencia Política* (25): 11-30.
- López Sala, Ana María, et al. 2011. *Poblaciones-mercancía: tráfico y trata de mujeres en España*. Colección contra la violencia de género. Documentos. Madrid: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
- López, Silvia, Ellin Peterson y Raquel [Lucas] Platero. 2014. "Políticas públicas". En *Ciencia política con perspectiva de género*, editado por Marta Lois y Alba Alonso, 161-87. Madrid: Ediciones Akal.

- Lyotard, Jean François. 1986. *La condición postmoderna: informe sobre el saber*. Madrid: Cátedra.
- Llistar Bosch, David. 2009. *Anticooperación. Interferencias globales Norte-Sur: los problemas del Sur no se resuelven con más ayuda internacional*. Barcelona: Icaria.
- Llistar i Bosch, David. 2009. "Cooperación, anticooperación y desarrollo". En *Economía y desarrollo humano: visiones desde distintas disciplinas*, editado por Jorge Guardiola, Ewa Strzelecka y Giuliaserena Gagliardini, 119-49. Granada: Universidad de Granada.
- MacDonald, Martha. 1995. "The empirical challenges of feminist economics: the example of economic restructuring". En *Out of margin: feminist perspectives on Economics*, editado por Zafiris Tzannatos, Edith Kulper y Jolande Sap, 175-97. Florence: Routledge.
- MacKinnon, Catharine A. 1997. "La pornografía no es un asunto moral". En *Derecho y pornografía*, editado por Catharine A. MacKinnon y Richard Posner. Bogotá: Siglo del Hombre Editores; Facultad de Derecho, Universidad de los Andes. 1ª edición: "Not a moral issue", Feminism Unmodified. Massachusets: Harvard University Press. 1987.
- _____. 2005. "Pornography as trafficking". *Michigan Journal of International Law* 26: 993-1012.
- MAE-SECIPI. 2000a. "El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): doctrina y actividades". Madrid: Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECIPI), Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE).
- _____. 2000b. "Plan Director de la Cooperación Española 2001-2004". Madrid: Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECIPI), Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE).
- _____. 2001. "Plan Anual de Cooperación Internacional para 2001". Madrid: Oficina de Planificación y Evaluación, Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECIPI), Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE).
- _____. 2002. "Plan Anual de Cooperación Internacional 2002". Madrid: Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECIPI), Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE).
- _____. 2003a. "Estrategia de la Cooperación Española para la promoción de la democracia y del Estado de Derecho". Madrid: Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECIPI), Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE).
- _____. 2003b. "Plan Anual de Cooperación Internacional 2003". Madrid: Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECIPI), Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE).

- _____. 2003c. "Seguimiento del PACI [Plan Anual de Cooperación Internacional] 2002". Madrid: Oficina de Planificación y Evaluación, Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECIPI), Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE).
- _____. 2004a. "Estrategia de la Cooperación Española para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres". Madrid: Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECIPI), Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE).
- _____. 2004b. "Plan Anual de Cooperación Internacional para 2004". Madrid: Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECIPI), Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE).
- MAEC-AECI. 2006. "Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada - fortaleciendo capacidades para el desarrollo". Madrid: Dirección General de Cooperación con Iberoamerica, Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- MAEC-SECI. 2004. "Seguimiento del PACI [Plan Anual de Cooperación Internacional] 2003". Madrid: Subdirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo, Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. 2005a. "Plan Anual de Cooperación Internacional 2005". Madrid: Subdirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (SGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. 2005b. "Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008". Madrid: Subdirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (SGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. 2006a. "Plan Anual de Cooperación Internacional 2006". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. 2006b. "Seguimiento del PACI [Plan Anual de Cooperación Internacional] 2004". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo, Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. 2006c. "Seguimiento del PACI [Plan Anual de Cooperación Internacional] 2005: una mayor orientación de las ayudas hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo, Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).

- _____. 2007a. "Estrategia de "Género en Desarrollo" de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. 2007b. "Estrategia de Acción Humanitaria de la Cooperación Española para el Desarrollo". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. 2007c. "Estrategia de Construcción de la Paz de la Cooperación Española al Desarrollo". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. 2007d. "Estrategia de Cultura y Desarrollo de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. 2007e. "Estrategia de Educación de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. 2007f. "Estrategia de la Cooperación Española con los Pueblos Indígenas". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. 2007g. "Estrategia de Lucha contra el Hambre de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. 2007h. "Estrategia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. 2007i. "Estrategia de Salud de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. 2007j. "Plan Anual de Cooperación Internacional 2007". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).

- _____. 2007k. "Seguimiento del PACI [Plan Anual de Cooperación Internacional] 2006: aumentar la calidad y cantidad de nuestra ayuda mediante una mayor coordinación entre los agentes de la Cooperación Española". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo, Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. 2008a. "Plan Anual de Cooperación Internacional 2008". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. 2008b. "Seguimiento del PACI [Plan Anual de Cooperación Internacional] 2007: mejorar la eficacia de la ayuda a través de la armonización, incrementando la asignación para la cobertura de necesidades sociales". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. 2009a. "Estrategia Multilateral de la Cooperación Española para el Desarrollo". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. 2009b. "Plan Anual de Cooperación Internacional 2009". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. 2009c. "Plan de Acción: mujeres y construcción de la paz de la cooperación española. Aplicación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU en la política española para el desarrollo". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. 2009d. "Seguimiento del PACI [Plan Anual de Cooperación Internacional] 2008". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. 2010a. "Cooperación Multilateral. Informe 2009". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. 2010b. "Plan Anual de Cooperación Internacional 2010". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).

- _____. 2010c. "Seguimiento del PACI [Plan Anual de Cooperación Internacional] 2009". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. 2011a. "Manual para el establecimiento de Marcos de Asociación País - metodología (edición revisada)". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. 2011b. "Seguimiento del PACI [Plan Anual de Cooperación Internacional] 2010". Madrid: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- MAEC-SECIPI. 2012. "Seguimiento del PACI [Plan Anual de Cooperación Internacional] 2011". Madrid: Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SGCID-SECIPI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- MAEC. 2009. "Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012". Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- _____. 2012. "Plan Director de la Cooperación Española 2013-2017". Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- Maquieira, Virginia. 2010. "Mujeres, globalización y derechos humanos". En *Mujeres, globalización y derechos humanos*, editado por Virginia Maquieira, 41-95. Madrid: Ediciones Cátedra; Universitat de València; Instituto de la Mujer.
- Marcuello Servós, Carmen, ed. 2007. *Capital social y organizaciones no lucrativas en España: el caso de las ONGD*. Bilbao: Fundación BBVA.
- Martín Martínez, Magdalena M. 2011. "Protección a las víctimas, violencia de género y cooperación judicial penal en la Unión Europea post-Lisboa". *Revista de Derecho Comunitario Europeo* 39 (mayo/agosto): 407-42.
- Martínez Mauri, Mònica y Cristina Larrea Killinger. 2010. *Antropología social, desarrollo y cooperación internacional: introducción a los fundamentos básicos y debates actuales*. Barcelona: Editorial UOC.
- Martínez, Pablo y Ignacio Martínez. 2014. Ruptura del consenso y desmantelamiento: un análisis de la cooperación española. En *Hacia 2015: visiones del desarrollo en disputa. XI Informe Anual de la Plataforma 2015 y más*. Madrid: Editorial 2015 y más.
- Martínez Ríos, Beatriz. 2012. "La situación de la discapacidad en la política española de cooperación al desarrollo", *Colección Cermi.es*, 57. Madrid. Disponible en: <http://www.cermi.es/es->

- Marugán Pintos, Begoña. 2012. "Domesticar la violencia contra las mujeres, una forma de desactivar el conflicto intergéneros". *Investigaciones Feministas* 3 (Dossier: Espacios generizados): 155-66. doi: 10.5209/rev_INFE.2012.v3.41143.
- Marugán Pintos, Begoña y Cristina Vega Solís. 2002. "Gobernar la violencia: apuntes para un análisis de la rearticulación del patriarcado". *Política y Sociedad* 39 (2): 415-35.
- Max-Neef, Manfred A. 1998. *Desarrollo a escala humana – conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones*. Montevideo; Barcelona: Norden Comunidad; Icaria.
- Mayaram, Shail. 2002. "New modes of violence: the backlash against women in the panchayat system". En *The violence of development: the politics of identity, gender and social inequalities in India*, editado por Karin Kapadia, 393-424. London; New York: Zed Books.
- McAdam, Doug, John D. McCarthy y Mayer N. Zald. 1999. "Oportunidades, estructuras de movilización y procesos enmarcadores: hacia una perspectiva sintética y comparada de los movimientos sociales". En *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*, editado por Doug McAdam, John D. McCarthy y Mayer N. Zald, 21-46. Madrid: Istmo.
- McCall, Leslie. 2005. "The complexity of intersectionality". *Signs* 30 (3): 1771-800. doi: 10.1086/426800.
- McCue, Margi Laird. 2008. *Domestic violence: a reference handbook [Recurso electrónico]*. Santa Barbara (California): ABC-CLIO.
- McIlwaine, Cathy. 1999. "Geography and development: violence and crime as development issues". *Progress in Human Geography* 23 (3): 453-63. doi: 10.1177/030913259902300309.
- McMahon, Anthony. 1993. "Male readings of feminist theory: the psychologization of sexual politics in the masculinity literature". *Theory and Society* 22 (5, Masculinities): 675-95. doi: 10.1007/bf00993542.
- Mediano, Carlos, José María Medina y Consuelo López-Zuriaga. 2011. "La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria. Informe 2011". Madrid: medicusmundi; Prosalus; Médicos del Mundo.
- Mény, Yves y Jean-Claude Thoenig. 1992. *Las políticas públicas*. Trad. Salvador del Carril. Ed. Francisco Morata. Ariel Ciencia Política. Barcelona: Ariel.
- Messing, Jill Theresa, Madeleine Adelman y Alesha Durfee. 2012. "Gender Violence and Transdisciplinarity". *Violence Against Women* 18 (6): 641-52. doi: 10.1177/1077801212453982.

- Miller, Alice M. 2000. "Sexual but not reproductive: exploring the junction and disjunction of sexual and reproductive rights". *Health and Human Rights* 4 (2, Reproductive and Sexual Rights): 68-109. doi: 10.2307/4065197.
- _____. 2004. "Sexuality, violence against women, and human rights: women make demands and ladies get protection". *Health and Human Rights* 7 (2): 16-47. doi: 10.2307/4065347.
- Millett, Kate. 1995. *Política sexual*. Feminismos Clásicos. Madrid: Cátedra. 1ª edición: Sexual Politics. 1969.
- Ministerio de Igualdad. 2010a. "Informe sobre el estado de situación del Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual". Madrid: Secretaria General de Políticas de Igualdad, Ministerio de Igualdad.
- _____. 2010b. "Plan integral contra la trata de seres humanos". Madrid: Secretaría General Técnica, Subdirección General de Cooperación y Relaciones Institucionales, Ministerio de Igualdad.
- Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 2011. "II Informe sobre el estado de situación del Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual. Año 2010". Madrid: Secretaria de Estado de Igualdad, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 2012. "III Informe de seguimiento del Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual. Año 2011". Madrid: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
- _____. 2015. "Plan integral de lucha contra a trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual ". Madrid: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
- Miranda López, M^a. Jesús. 2009. "La retórica de la violencia de género. Etnometodología de un tipo delictivo". En *Amor, razón, violencia*, editado por M^a. Jesús Miranda López, M^a. Teresa Martín-Palom y Begoña Marugán Pintos, 35-43. Madrid: Catarata.
- Mohanty, Chandra Talpade. 2008a. "Bajo los ojos de Occidente: academia feminista y discursos coloniales". En *Descolonizando el feminismo. Teorías y prácticas desde los márgenes*, editado por Liliana Suárez Navaz y Rosalva Aída Hernández Castillo, 117-63. Madrid: Cátedra, Universitat de València, Instituto de la Mujer. 1ª edición: *Boundary*, 2, 12, núm. 3/13, núm. 1 (1984).
- _____. 2008b. "De vuelta a "Bajo los ojos de Occidente": la solidaridad feminista a través de las luchas anticapitalistas". En *Descolonizando el feminismo. Teorías y prácticas desde los márgenes*, editado por Liliana Suárez Navaz y Rosalva Aída Hernández Castillo, 407-64. Madrid: Cátedra; Universitat de València; Instituto de la Mujer.

- Molina Bayón, Estefanía. 2009. "Consideraciones en torno a la cooperación universitaria al desarrollo desde una perspectiva de género". En *Nuevas líneas de investigación en género y desarrollo*, editado por Estefanía Molina y Nava San Miguel, 341-85. Madrid: Oficina de Acción Solidaria y Cooperación, Universidad Autónoma de Madrid.
- Montoya, Celeste y Lise Rolandsen Agustín. 2013. "The othering of domestic violence: the EU and cultural framings of violence against women". *Social Politics* 20 (4): 534-57. doi: 10.1093/sp/jxt020.
- Moser, Caroline y Annalise Moser. 2005. "Gender Mainstreaming since Beijing: a review of success and limitations in international institutions". *Gender and Development* 13 (2): 11-22. doi: 10.1080/13552070512331332283.
- Moser, Caroline O. N. 1993a. *Gender planning and development: theory, practice and training*. London: Routledge.
- _____. 1993b. "Género y desarrollo". Cuaderno de Ciencias Sociales, 60. San José (Costa Rica): Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO.
- Mosley, Paul y Marion J. Eeckhout. 2000. "From project aid to programme assistance". En *Foreign aid and development: lessons learnt and directions for future*, editado por Finn Tarp y Peter Hjertholm, 131-53. London; New York: Routledge.
- Mosse, David. 2005. "Global governance and the ethnography of international aid". En *The aid effect: giving and governing in international development*, editado por David Mosse y David Lewis. London: Pluto Press.
- Muñoz Cabrera, Patricia. 2011. "Violencias interseccionales. Debates feministas y marcos teóricos en el tema de pobreza y violencia contra las mujeres en Latinoamérica". Londres: Central America Women's Network (CAWN).
- Murguialday Martínez, Clara. 2009. "Un encuentro urgente: la cooperación universitaria al desarrollo y el trabajo por la equidad de género". En *Nuevas líneas de investigación en género y desarrollo*, editado por Estefanía Molina y Nava San Miguel, 387-406. Madrid: Oficina de Acción Solidaria y Cooperación, Universidad Autónoma de Madrid.
- Naciones Unidas. 2008. "Intensificación de los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer (RES/62/133)". Nueva York: Asamblea General.
- _____. 2009. "Marco de acción: Programa de actividades de las Naciones Unidas y resultados previstos, 2008-2015". Nueva York: Secretaría de la Campaña del Secretario General UNiDOS para poner fin a la violencia contra las mujeres.
- _____. 2015. "Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (A/RES/70/1)". Nueva York: Asamblea General, septuagésimo período de sesiones. Disponible en: <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1>.
- Nagy Hesse-Biber, Sharlene, Patricia Leavy y Michelle Yaiser. 2004. "Feminist approaches to research as a process. Reconceptualizing epistemology, methodology,

- and method". En *Feminist perspectives on social research*, 3-26. New York: Oxford University Press.
- Nash, Mary. 2012. *Mujeres en el mundo: historia, retos y movimientos*. Madrid: Alianza Editorial.
- Nederveen Pieterse, Jan. 2000. "After post-development". *Third World Quarterly* 21 (2): 175-91. doi: 10.1080/01436590050004300.
- Nisbet, Robert A. 1976. *Cambio social e historia: aspectos de la teoría occidental del desarrollo*. Barcelona: Hispano-Europea.
- _____. 1981. *Historia de la idea de progreso*. Barcelona: Gedisa.
- Nnaemeka, Obioma. 2001. "If female circumcision did not exist, western feminism would invent it". En *Eye to eye: women practising development across cultures*, editado por Susan Perry y Celeste Schenck, 171-89. London; New York: Zed books.
- Noble, Trevor. 2000. *Social theory and social change*. London: Macmillan Press.
- Nussbaum, Martha C. 2002. *Las mujeres y el desarrollo humano*. Barcelona: Herder.
- O'Barr, William M. 2003. "Interview with Michael Kimmel". *Advertising & Society Review* 4 (2). doi: 10.1353/asr.2003.0011.
- Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. 2004. "Memoria del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género desde su creación el 26-9-02 al 15-3-04": Consejo General del Poder Judicial. Disponible en: <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Memorias/>.
- _____. 2006. "Memoria del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género - año 2005": Consejo General del Poder Judicial. Disponible en: <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Memorias/>.
- _____. 2007. "Memoria del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género - año 2006": Consejo General del Poder Judicial. Disponible en: <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Memorias/>.
- _____. 2008. "Memoria del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género - año 2007": Consejo General del Poder Judicial. Disponible en: <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Memorias/>.
- _____. 2009. "Memoria del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género - año 2008": Consejo General del Poder Judicial. Disponible en: <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Memorias/>.

- _____. 2010. "Memoria del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género - año 2009": Consejo General del Poder Judicial. Disponible en: <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Memorias/>.
- _____. 2011. "Memoria del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género - año 2010": Consejo General del Poder Judicial. Disponible en: <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Memorias/>.
- _____. 2013. "Memoria del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género - año 2012": Consejo General del Poder Judicial. Disponible en: <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Memorias/>.
- _____. 2014. "Memoria del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género - año 2013": Consejo General del Poder Judicial. Disponible en: <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Memorias/>.
- OCDE-CAD. 2001. "Directrices y guía de conceptos del CAD sobre la igualdad entre mujeres y hombres". Madrid: Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECIPI), Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE).
- _____. 2006. "Directrices para el establecimiento de los Creditor Reporting System (CRS)": Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - Comité de Ayuda al Desarrollo. Disponible en: http://www.aecid.es/galerias/publicaciones/descargas/directrices_lista_codigos.pdf.
- _____. 2014. "Listado de sectores CRS con sus descripciones": Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - Comité de Ayuda al Desarrollo. Disponible en: [http://www.oecd.org/dac/stats/C%C3%B3digos%20CRS%20\(de%20sectores\).pdf](http://www.oecd.org/dac/stats/C%C3%B3digos%20CRS%20(de%20sectores).pdf).
- OEA. 1994. "Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 'Convención de Belém do Pará'". Organización de Estados Americanos (OEA).
- OECD. 2009. "Managing aid: practices of DAC member countries", *Better Aid*. Disponible en: www.sourceoecd.org/development/9789264060210.
- OECD Development Centre. 2010. "Gender inequality and the MDGs: what are the missing dimensions?". *Issues Paper*: 8.
- Ogien, Ruwen. 2005. *Pensar la pornografía*. Contextos, Vol. 98. Barcelona: Paidós.
- Öhman, Ann y Maria Emmelin. 2014. "Development policies, intimate partner violence, Swedish gender equality and global health". *Women's Studies International Forum* 46: 115-22. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.wsif.2013.12.001>.

- Okin, Susan Moller. 1999. "Is multiculturalism bad for women?". En *Is multiculturalism bad for women?*, editado por Susan Moller Okin, Joshua Cohen, Matthew Howard y Martha C. Nussbaum, 7-26. Princeton: Princeton University Press.
- Olesen, Virginia. 1994. "Feminisms and Models of Qualitative Research". En *Handbook of Qualitative Research*, editado por Norman K. Denzin y Yvonna S. Lincoln, 158-73. London: Sage Publications.
- Oliva Portolés, Asunción. 2005. "Debates sobre el género". En *Teoría feminista: de la Ilustración a la globalización. De los debates sobre el género al multiculturalismo*, editado por Celia Amorós y Ana de Miguel, 15-60. Madrid: Minerva.
- Olivie, Iliana. 2012. "¿Por qué es importante la cooperación al desarrollo para la acción exterior de la España en crisis?", *ARI*, 62: Real Instituto Elcano, área Cooperación Internacional y Desarrollo.
- OMS. 1998. "Violencia contra la mujer. Un tema de salud prioritario": Organización Mundial de la Salud (OMS). Disponible en: http://www.who.int/gender/violence/violencia_infopack1.pdf.
- _____. 2005. "Estudio multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y violencia doméstica contra la mujer - Primeros resultados sobre prevalencia, eventos relativos a la salud y respuestas de las mujeres a dicha violencia". Ginebra: Organización Mundial de la Salud (OMS).
- _____. 2014. "Prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en centros de salud". Organización Mundial de la Salud (OMS). WHO/RHR/14.23.
- ONU. 1979. "Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer". Organización de las Naciones Unidas (ONU). Resolución Asamblea General 34/180, de 18 de diciembre de 1979.
- _____. 1993. "Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993.". Organización de las Naciones Unidas (ONU). A/RES/48/104.
- _____. 1995. "Informe de la Cuarta Conferencia sobre la Mujer. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing". Organización de las Naciones Unidas (ONU). A/CONF.177/20/Rev.1.
- _____. 1996. "Declaración y Plataforma de Acción de Beijing". A/CONF.177/20/Rev.1. Informe de la Cuarta Conferencia sobre la Mujer. Beijing, 4 a 15 de septiembre de 1995. Nueva York: Organización de las Naciones Unidas (ONU).
- _____. 2012. "Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de 2012". Nueva York: Organización de las Naciones Unidas (ONU).
- ONU Mujeres. 2015. "La Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing cumplen 20 años - informe resumido". Nueva York. Disponible en:

<http://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/02/beijing-synthesis-report>.

- OPM. 2014. "Violence against women and girls - Map of DFID programmes, 2014": Oxford Policy Management (OPM), GEFA e-Pact consortium.
- Oriol Prats, Joan. 2007. "Revisión crítica de los aportes del institucionalismo a la teoría y la práctica del desarrollo". *Revista de Economía Institucional* 9 (16): 121-48.
- Osborne, Raquel. 1989. *Las mujeres en la encrucijada de la sexualidad: una aproximación desde el feminismo*. Barcelona: LaSal; Edicions de les dones.
- _____. 1993. *La construcción sexual de la realidad*. Feminismos. Madrid: Cátedra; Universitat de València; Instituto de la Mujer.
- _____. 2005. "Debates en torno al feminismo cultural". En *Teoría feminista: de la Ilustración la globalización. Del feminismo liberal a la posmodernidad*, editado por Celia Amorós y Ana de Miguel, 211-52. Madrid: Minerva Colecciones.
- _____. 2008. "De la «violencia» (de género) a las «cifras de la violencia»: una cuestión política". *EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales* 15 (enero-julio): 99-124. doi: 10.5944/empiria.15.2008.1201.
- _____. 2009. *Apuntes sobre violencia de género*. Barcelona: Edicions Bellaterra.
- Palacio Blasco, Esther. 2008. "Cooperación delegada: algunas experiencias prácticas", *Documento de Trabajo*, 22. Madrid: Fundación Carolina, CeALCI.
- Palenzuela Chamorro, Pablo. 2009. "Mitificación del desarrollo y mistificación de la cultura: el etnodesarrollo como alternativa". *Íconos. Revista de Ciencias Sociales* (33): 127-40. doi: 10.17141/iconos.33.2009.317.
- Parlamento Europeo. 1997. "Resolución A4-250 sobre una campaña europea sobre tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres".
- Parpart, Jane L. 1994. ¿Quién es el "otro"?: una crítica feminista postmoderna de la teoría y la práctica de mujer y desarrollo. Lima: Red entre Mujeres. 1ª edición: *Development & Change* (SAGE, Londres, Nwebury Park y Nueva Delhi), volumen 4, número 3, julio 1993 (439-464).
- Pasinato, Wânia. 2011. "'Femicídios' e as mortes de mulheres no Brasil". *Cadernos Pagu* 37 (julho-dezembro): 219-46. doi: 10.1590/S0104-83332011000200008.
- Peacock, Dean y Gary Barker. 2014. "Working with men and boys to prevent gender-based violence: principles, lessons learned, and ways forward". *Men and Masculinities* 17 (5): 578-99. doi: 10.1177/1097184X14558240.
- Pérez Baldovinos, Alioska. 2008. Los avances para la integración del enfoque de género en la política de desarrollo de la cooperación descentralizada en España, 2005-2007. En *Avances de investigación*. Madrid: Fundación Carolina, CeALCI.

- Pérez Baldovinos, Alioska Vanessa. 2009. "Género y cooperación descentralizada: recomendaciones para la armonización de la AOD". En *Nuevas líneas de investigación en Género y Desarrollo*, editado por Estefanía Molina Bayón y Nava San Miguel Abad, 75-97. Madrid: Oficina de Acción Solidaria y Cooperación, Universidad Autónoma de Madrid.
- Pérez del Río, Tereza. 2007. "La violencia de género en el trabajo". *Themis, Revista Jurídica de Igualdad de Género* (1): 3-68.
- Pérez Díaz, Julio. 1994. "La política mundial de población en el siglo XX". *Papers de Demografia* 90.
- Pérez Díaz, Julio. y John MacInnes. 2007. "Valoración social del incremento de la violencia doméstica". En *Violencia de género: perspectiva multidisciplinar y práctica forense*, editado por Guillermo Barrios y Pilar Rivas, 53-80. Madrid: Aranzadi.
- Perona Larraz, Pilar. 2006. *Globalización, género y desarrollo: pasado y apuntes para el futuro*. Ciencias y humanismo. Madrid: Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).
- Petchesky, Rosalind P. 2002. "Sexual rights: inventing a concept, mapping an international practice". En *Sexualities: critical concepts in Sociology*, editado por Ken Plummer, 408-26. London; New York: Routledge.
- Pheterson, Gail. 1992. *Nosotras, las putas*. Hablan las mujeres, Vol. 5. Madrid: Talasa Ediciones.
- Pickup, Francine, Suzanne Williamns y Caroline Sweetman. 2001. *Ending violence against women: a challenge for development and humanitarian work*. Oxford: Oxfam GB.
- Pichardo, José Ignacio. 2006. "Mujeres lesbianas y derechos humanos". En *Mujeres, globalización y derechos humanos*, editado por Virginia Maquieira, 345-97. Madrid: Ediciones Catédra; Universitat de València; Instituto de la Mujer.
- Pillay, Navanethem. 2002. "Las mujeres en los conflictos armados". La violencia contra las mujeres y los derechos humanos: XVII congreso de la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas, Toledo. Editado por Lucía Ruano, 59-72.
- Piscitelli, Adriana. 2007. "Sexo tropical em um país europeu: migração de brasileiras para a Itália no marco do "turismo sexual" internacional". *Estudos Feministas* 15 (3): 717-44. doi: 10.1590/S0104-026X2007000300014.
- PNUD. 1990. "Desarrollo Humano Informe 1990". Bogotá: Tercer Mundo Editores, S.A. Disponible en: <http://hdr.undp.org/es/content/informe-sobre-desarrollo-humano-1990>.
- _____. 2010. "Informe sobre Desarrollo Humano 2010. Edición del Vigésimo Aniversario. La verdadera riqueza de las naciones: caminos al desarrollo humano". Nueva York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

- PNUD y ONU Mujeres. 2013. "El compromiso de los Estados: planes y políticas para erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y El Caribe". Panamá: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y Entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. Disponible en: http://www.latinamerica.undp.org/content/dam/rblac/docs/Research%20and%20Publications/Empoderamiento%20de%20la%20Mujer/Publicacion_Violencia_FINAL_e span%CC%83ol.pdf.
- Polletta, Francesca y M. Kai Ho. 2006. "Frames and their consequences". En *The Oxford handbook of contextual political analysis*, editado por Robert E. Goodin y Charles Tilly, 187-209. Oxford: Oxford University Press.
- Porras, Antonio, Francisco Gutiérrez y M^a Luisa Morillo. 2002. "La actividad legislativa de los parlamentos autonómicos, 1908-2000: Agenda legislativa y mapa normativo". En *Veinte años de autonomías en España: leyes, políticas públicas, instituciones y opinión pública*, editado por Joan Subirats y Raquel Gallego, 167-201. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Prado Lallande, Juan Pablo. 2009. *El lado oscuro de la cooperación internacional - la discrecionalidad de la ayuda externa en el fomento de la democracia y los derechos humanos*. México, D.F.: Instituto Panamericano de Geografía e Historia.
- Presser, Harriet B. 2000. "Demografía, feminismo y el nexo entre ciencia y política". *Revista Mexicana de Sociología* 62 (1): 3-44. doi: 10.2307/3541177. Publicación original: *Population and Development Review*, vol. 23, núm 2, junio de 1997.
- Puleo, Alicia H. 2005. "Lo personal es político: el surgimiento del feminismo radical". En *Teoría feminista: de la Ilustración a la globalización. Del feminismo liberal a la posmodernidad*, editado por Celia Amorós y Ana de Miguel, 35-67. Madrid: Minerva Ediciones.
- Puleo, Alicia H. . 2008. "La violencia de género y el género de la violencia". En *El reto de la igualdad de género: nuevas perspectivas en ética y filosofía política*, 361-71. Madrid: Biblioteca Nueva.
- Puri, Jyoti. 2010. "Transgendering development: reframing hijras and development". En *Development, sexual rights and global governance*, editado por Amy Lind, 39-53. New York: Routledge.
- Pyle, Jean L. 1999. "Third world women and global restructuring". En *Handbook of the Sociology of Gender*, editado por Janet Saltzman Chafetz, 81-104. New York: Kluwer Academic Plenum Publishers.
- Ramazanoğlu, Caroline y Janet Holland. 2002. *Feminist methodology: challenges and choices*. London: Sage Publications.
- Razavi, Shahra. 2012. "World Development Report 2012: Gender Equality and Development - A commentary". *Development and Change* 43 (1): 423-37. doi: 10.1111/j.1467-7660.2012.01743.x.

- Razavi, Shahrashoub y Carol Miller. 1995. "From WID to GAD: conceptual shifts in the Women and Development discourse", *Occasional Paper*, 1. Geneva: United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD).
- Redlich-Amirav, Dorit y Gina Higginbottom. 2014. "New emerging technologies in qualitative research". *The Qualitative Report* 19 (12): 1-14.
- Reeves, Hazel. 2000. "Los discursos de género en la cooperación multilateral: equidad frente a eficiencia". En *Los organismos multilaterales y la ayuda al desarrollo*, editado por J. A. Alonso y Ch. Freres, 323-42. Madrid: Civitas Ediciones.
- Rey Marcos, Francisco y Jesús A. Núñez Villaverde. 2012. "La acción humanitaria en 2011-2012: tocando fondo. Informe del Observatorio de la Acción Humanitaria". Madrid: Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).
- Ricardo, Christine, Marci Eads y Gary Barker. 2011. "Engaging boys and young men in the prevention of sexual violence: a systematic and global review of evaluated interventions". Washington, DC: Sexual Violence Research Initiative.
- Richey, Lisa Ann. 2000. "Gender equality and foreign aid". En *Foreign aid and development: lessons learnt and directions for the future*, editado por Finn Tarp y Peter Hjertholm. London; New York: Routledge.
- Riordan, Siobhan. 2000. "'Put your money where your mouth is!': the need for public investment in women's organisations ". *Gender and Development* 8 (1): 63-70. doi: 10.1080/741923415.
- Riquelme, Fernando. 2000. "España y los organismos internacionales no financieros de cooperación al desarrollo". En *Los organismos multilaterales y la ayuda al desarrollo*, editado por J. A. Alonso y Ch. Freres, 381-400. Madrid: Civitas Ediciones.
- Risman, Barbara J. 1998. *Gender vertigo: American families in transition*. New Haven; London: Yale University Press.
- Rist, Gilbert. 2002. *El desarrollo: historia de una creencia occidental*. Madrid: Catarata.
- Rodríguez Garavito, César. 2006. "Globalización, reforma judicial y Estado de derecho en Colombia y América Latina: el regreso de los programas de derecho y desarrollo". En *¿Justicia para todos? Sistema judicial, derechos sociales y democracia en Colombia*, editado por Rodrigo Uprimny, César Rodríguez Garavito y Mauricio García, 405-69. Bogotá: Grupo Editorial Norma.
- _____. 2008. *La globalización del Estado de derecho: el neoconstitucionalismo, el neoliberalismo y la transformación institucional en América Latina*. Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, Centro de Investigaciones Sociojurídicas; Ediciones Uniandes.

- Rodríguez Gil, Adolfo. 2001. "La cooperación pública al desarrollo y el caso español". En *Cooperación para el desarrollo y ONG: una visión crítica*, editado por Luis Nieto Pereira, 83-140. Madrid: Catarata.
- Rodríguez Manzano, Irene. 2005. "La promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en la política española de cooperación para el desarrollo. Algunas reflexiones conceptuales". *Revista Española de Desarrollo y Cooperación* (15): 127-41.
- _____. 2006. "Sobre el término género". En *Género y desarrollo: el camino hacia la equidad*, editado por Marta Carballo de la Riva, 31-54. Madrid: Catarata; Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC).
- _____. 2008. *Mujeres y Naciones Unidas: igualdad, desarrollo y paz*. Madrid: Catarata; Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC).
- Rodríguez Martínez, Pilar. 2015. "Un análisis interseccional sobre malos tratos y violencia laboral en mujeres que ejercen la prostitución". *Revista Española de Investigaciones Sociológicas* 151 (123-140). doi: 10.5477/cis/reis.151.123.
- Roggeband, Conny. 2004. "'Immediately I thought we should do the same thing' - international inspiration and exchange in feminist action against sexual violence". *European Journal of Women's Studies* 11 (2): 159-75.
- _____. 2012. "Shifting Policy Responses to Domestic Violence in the Netherlands and Spain". *Violence Against Women* 18 (7): 784-806. doi: 10.1177/1077801212455359.
- _____. 2016. "Ending violence against women in Latin America: feminist norm setting in a multilevel context". *Politics & Gender* 12: 143-67. doi: 10.1017/S1743923X15000604.
- Roth, Louise Marie. 1999. "The right to privacy is political: power, the boundary between public and private, and sexual harassment". *Law & Social Inquiry* 24 (1): 45-71. doi: 10.1111/j.1747-4469.1999.tb00792.x.
- Rothenberg, Bess. 2003. "'We don't have time for social change': cultural compromise and the Battered Woman Syndrome". *Gender and Society* 17 (5): 771-87. doi: 10.1177/0891243203255633.
- Rubin, Gayle. 1993. "Misguided, dangerous and wrong: an analysis of anti-pornography politics". En *Bad girls and dirty pictures - the challenge to reclaim feminism*, editado por Alison Assister y Avedon Carol, 18-40. London: Pluto Press.
- Russell, Brenda, Laurie Ragatz y Shane W. Kraus. 2012. "Expert testimony of the Battered Person Syndrome, defendant gender, and sexual orientation in a case of duress: evaluating legal decisions". *Journal of Family Violence* 27: 659-70. doi: 10.1007/s10896-012-9459-8.
- Russell, Diana E. H. 2005. "Definición de feminicidio y conceptos relacionados". En *Feminicidio, justicia y derecho*, 135-49. México: Comisión Especial para Conocer y

Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada.

- Saith, Ashwani. 2006. "From universal values to Millennium Development Goals: lost in translation". *Development and Change* 37 (6): 1167-99. doi: 10.1111/j.1467-7660.2006.00518.x.
- San Miguel Abad, Nava. 2009. "Oportunidades y propuestas en la agenda de género y eficacia. Avanzando hacia 2015.". En *Nuevas líneas de investigación en género y desarrollo*, editado por Estafanía Molina y Nava San Miguel, 31-74. Madrid: Oficina de Acción Solidaria y Cooperación, Universidad Autónoma de Madrid.
- Sanahuja, José Antonio. 2014. De los Objetivos del Milenio al desarrollo sostenible: Naciones Unidas y las metas globales post-2015. En *Anuario CEIPAZ 2014-2015*.
- Sánchez Muñoz, Cristina. 2014. "Negociaciones culturales y género: hacia un feminismo transnacional". En *Entre Estado y Cosmópolis - derecho y justicia en un mundo global*, editado por Alfonso Ruiz Miguel, 289-314. Madrid: Trotta.
- Sánchez Pérez, Francisco. 2010. "Claves para una epistemología de la cooperación para el desarrollo". En *Metodología de investigación en cooperación para el desarrollo*, editado por Enara Echart Muñoz, Rhina Cabezas Valencia y José Ángel Sotillo Lorenzo, 29-40. Madrid: Catarata; Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC).
- Sanday, Peggy Reeves. 2007. "The socio-cultural context of rape: a cross-cultural study". En *Gender violence: interdisciplinary perspectives*, editado por Laura L. O'Toole, Jessica Schiffman y Margie Edwards, 56-71. New York: New York University Press. 1ª edición: 1981.
- Sandu, Adriana. 2013. "Participation, representation and voice in the fight against gender violence: the case of the women's movement in Spain". *Journal of International Women's Studies* 14 (1): 24-39.
- Scott, Joan W. 1986. "Gender: a useful category of historical analysis". *The American Historical Review* 91 (5): 1053-75. doi: 10.2307/1864376.
- Schäfer, Rita. 2013. "Men as perpetrators and victims of armed conflicts. Innovative projects aimed at overcoming male violence". Vienna: VIDC - Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation.
- Scheper-Hughes, Nancy y Philippe Bourgois, eds. 2004. *Violence in war and peace: an anthology*. Blackwell readers in anthropology. Oxford (UK): Blackwell Publishing.
- Schneider, Elizabeth M. 2000. *Battered women and feminist lawmaking*. New Haven (USA): Yale University.
- Schulz, Nils-Sjard. 2010. "Las políticas de desarrollo españolas: obstáculos para el progreso", *Policy Brief*. Disponible en: <http://www.fride.org/publicacion/709/las-politicas-de-desarrollo-espanolas:-obstaculos-para-el-progreso>.

- Segato, Rita Laura. 2003. *Las estructuras elementares de la violencia: ensayos sobre género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
- _____. 2005. "Território, soberania e crimes de segundo Estado: a escritura nos corpos das mulheres de Ciudad Juarez". *Estudos Feministas* 13 (2): 265-85. doi: 10.1590/S0104-026X2005000200003.
- _____. 2006. "Qué es un feminicidio. Notas para un debate emergente". *Série Antropologia* 401. Brasília: Departamento de Antropologia, Universidade de Brasília (UnB).
- _____. 2014. "Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres". En *Mujeres y guerra: cuerpos, territorios y anexiones*, editado por Fernando Quesada, 147-86. Madrid: Biblioteca Nueva.
- Sen, Gita. 2006. "Reproductive right and gender justice in the neo-conservative shadow". En *Engendering human security: feminist perspectives*, editado por Amrita Chhachhi, Thanh-Dam Truong y Saskia Wieringa, 36-55. London: Zed Books.
- Sen, Purna. 1998. "Development practice and violence against women". *Gender and Development* 6 (3): 7-16. doi: 10.1080/741922827.
- Serrano Niza, Dolores y Maria José Guerra Palmero. 2005. "Una crítica feminista a la 'justificación cultural'". En *Democracia, feminismo y universidad en el siglo XXI. XV Jornadas de Investigación Interdisciplinaria*, editado por Virginia Maqueira D'Ángelo, Pilar Folguera Crespo, M^a Teresa Gallego Méndez, Otilia Mo Romero, Margarita Ortega López y Pilar Pérez Cantó, 613-41. Madrid: Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid.
- Shah, Seema, Lawrence T. McGill y Karen Weisblatt. 2011. "Untapped potential. European foundation funding for women and girls". New York: Foundation Center; Mama Cash. Disponible en: <http://mamacash.org/content/uploads/2013/06/Untapped-Potential-Report.pdf>.
- Smelser, Neil J. 1992. "External and internal factors in theories of social change". En *Social change and modernity*, editado por Hans Haferkamp y Neil J. Smelser, 369-94. Berkeley; Los Angeles; Oxford: University of California Press.
- Smith, Michael. 2006. "The EU as an international actor". En *European Union - power and policy-making*, editado por Jeremy Richardson, 289-309. Oxon: Routledge.
- Smith, Michael E., Brian Crowe y John Peterson. 2006. "International interests - the Common Foreign and Security Policy". En *The institutions of the European Union*, editado por John Peterson y Michael Shackleton, 252-71. Oxford: Oxford University Press.
- Smyth, Ines. 2000. "Gender analysis of family planning – beyond the 'feminist vs. population control' debate". En *Feminist visions of development – gender analysis and policy*, editado por Cecile Jackson y Ruth Pearson, 217-38. New York: Routledge.

- Snow, David A. y Robert D. Benford. 1988. "Ideology, frame resonance, and participant mobilization". En *International Social Movement Research*, editado por Bert Klandermans, Hanspeter Kriesi y Sidney Tarrow, 197-217. London: Jai Press.
- Sogge, David. 2002. *Dar y tomar. ¿Qué sucede con la ayuda internacional?* Barcelona: Icaria.
- Solé, Carlota. 1998. *Modernidad y modernización*. Autores, textos y temas - Ciencias Sociales. Barcelona; México, D.F.: Anthropos; Universidad Autónoma Metropolitana.
- Sotillo, José Ángel. 2007. "España y la política de desarrollo de la Unión Europea: un cambio radical". En *Avances y retos de la cooperación española: reflexiones para una década*, editado por Manuel Iglesia-Caruncho, 51-66. Madrid: Fundación Carolina; Siglo XXI.
- Sotillo Lorenzo, José Ángel. 2006. *Un lugar en el mundo - la política de desarrollo de la Unión Europea*. Madrid: Catarata; Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC).
- _____. 2010. "La cooperación para el desarrollo y las relaciones internacionales". En *Metodología de investigación en cooperación para el desarrollo*, editado por Enara Echart Muñoz, Rhina Cabezas Valencia y José Ángel Sotillo Lorenzo, 13-28. Madrid: Catarata; Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC).
- Stavenhagen, Rodolfo. 1990. "Ethnocide and ethnodevelopment". En *The ethnic question: conflicts, development and human rights*, 85-92. Tokyo: United Nations University Press.
- Stefanoni, Pablo. 2012. "¿Y quién no querría “vivir bien”? Encrucijadas del proceso de cambio boliviano". *Crítica y Emancipación. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales* IV (7): 9-26.
- Stiglitz, Joseph E. 2008. "Is there a Post-Washington Consensus consensus?". En *The Washington Consensus Reconsidered - towards a new global governance*, editado por Narcis Serra y Joseph E. Stiglitz, 41-56. New York: Oxford University Press.
- Strasser, Hermann y Susan C. Randall. 1981. *An introduction to theories of social change*. International library of Sociology. London; Boston; Henley: Routledge & Kegan Paul.
- Straus, Murray A. 2006. "Future research on gender symmetry in physical assaults on partners". *Violence Against Women* 12 (11): 1086-97. doi: 10.1177/1077801206293335.
- Strzelecka, Ewa, et al. 2009. "Programa de formación en cooperación internacional 'Mujeres y Desarrollo' (1989-2007): historia e incidencia en las políticas de desarrollo, de igualdad y de cooperación universitaria al desarrollo". En *Estudios en Género y Desarrollo: balance y propuestas.*, editado por Estefanía Molina Bayón y Nava San Miguel Abad, 283-383. Madrid: Oficina de Acción Solidaria y Cooperación, Universidad Autónoma de Madrid.

- Sullivan, Jessica R. 2012. "Skype: an appropriate method of data collection for qualitative interviews?". *The Hilltop Review* 6 (1, Article 10).
- Taibo Arias, Carlos. 2009. "Doce preguntas sobre el decrecimiento". En *Economía y desarrollo humano: visiones desde distintas disciplinas*, editado por Jorge Guardiola, Ewa Strzelecka y Giuliaserena Gagliardini, 31-40. Granada: Universidad de Granada.
- Teijo García, Carlos. 2009a. "Caracteres generales y tendencias básicas del sistema internacional de ayuda al desarrollo". En *Ayuda al desarrollo: piezas para un puzle*, editado por Irene Rodríguez Manzano y Carlos Teijo García, 57-81. Madrid: Catarata.
- _____. 2009b. "Obligaciones jurídicas de los estados en materia de desarrollo y de cooperación al desarrollo. ¿Algo nuevo bajo el sol?". En *Ayuda al desarrollo: piezas para un puzle*, editado por Irene Rodríguez Manzano y Carlos Teijo García, 39-54. Madrid: Catarata.
- Teresi, Verônica Maria. 2008. "La lucha contra la trata de personas en Brasil: desafíos para la cooperación hispano-brasileña". *Revista Española de Desarrollo y Cooperación* 22: 183-94.
- Terry, Geraldine. 2004. "Poverty reduction and violence against women: exploring links, assessing impact". *Development in Practice* 14 (4): 469-80. doi: 10.1080/09614520410001686070.
- Thomas, Alison M. y Celia Kitzinger. 1997. "Sexual harrassment: reviewing the field". En *Sexual harassment: contemporary feminist perspectives*, editado por Alison M. Thomas y Celia Kitzinger, 1-18. Buckingham, Philadelphia: Open University Press.
- Tomás Pérez, Raquel. 2010. "Una mirada al enfoque de género de la cooperación española: avances y cambios frente a viejos y nuevos desafíos institucionales". Congreso Internacional 200 años de Iberoamérica (1810-2010). Actas del XIV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles, Santiago de Compostela. Editado por Eduardo Rey Tristán y Patricia Calvo González, 2757-76.
- Tortosa, José María 2010. "Sumak Kawsay, Suma Qamaña, Buen Vivir". En *Nombres propios 2009*, editado por Alfonso Gamo, 133-7. Madrid: Fundación Carolina.
- Travis, Cheryl Brown, ed. 2003. *Evolution, gender and rape*. Cambridge (USA): MIT Press.
- Tripp, Aili Mari. 2006. "The evolution of transnational feminisms: consensus, conflict, and new dynamics". En *Global feminism: transnational women's activism, organizing, and human rights*, editado por Myra Marx Ferree y Aili Mari Tripp. New York; London: New York University Press.
- _____. 2008. "La política de los derechos de las mujeres y la diversidad cultural en Uganda". En *Descolonizando el feminismo. Teorías y prácticas desde los márgenes*, editado por Liliana Suárez Navaz y Rosalva Aída Hernández Castillo. Madrid: Cátedra, Universitat de València, Instituto de la Mujer.

- Úbeda-Portugués, José Escribano. 2007. *El Espacio Eurolatinoamericano: perspectivas para la cooperación y el comercio*. Madrid: Cideal.
- UNFPA. 2010a. "Health sector response to gender-based violence. Case studies of the Asia Pacific region". Bangkok: UNFPA [United Nations Population Fund] Asia and the Pacific Regional Office.
- _____. 2010b. "Report: "Delivering as One on violence against women: from intent to action"". New York: Inter-agency Task Force on Violence Against Women, United Nations Population Fund (UNFPA).
- UNIFEM. 2009. "Informe Anual 2008-2009". Nueva York: Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM).
- _____. 2010. "Informe Anual 2009-2010". Nueva York: Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM).
- United Nations. 2008. "The next step: developing transnational indicators on violence against women. Addendum", *Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Yakin Ertürk*, A/HRC/7/6/Add.5. New York: General Assembly, Human Rights Council.
- _____. 2009. "15 years of the United Nations Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences (1994-2009) - a critical review": Human Rights Council. General Assembly. United Nations. (accesado el 27/05/2009).
- _____. 2010. "Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, Margaret Sekaggya", A/HRC/16/44. New York: General Assembly, Human Rights Council. Disponible en: <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/16session/A-HRC-16-44.pdf>.
- USAID. 2006. "Addressing gender-based violence through USAID's health programs. A guide for health sector program officers". Washington, DC: U.S. Agency for International Development.
- _____. 2012. "United States strategy to prevent and respond to gender-based violence globally". Washington, DC: U.S Agency for International Development.
- Valcárcel, Amelia. 1991. *Sexo y filosofía: sobre "mujer" y "poder"*. Pensamento Crítico/Pensamento Utópico. Barcelona: Anthropos.
- _____. 2009. *Feminismo en un mundo global*. 2 ed. Feminismos. Madrid: Ediciones Cátedra; Universitat de València; Instituto de la Mujer.
- Valles Martínez, Miguel S. 1997. *Técnicas cualitativas de investigación social: reflexión metodológica y práctica profesional*. Madrid: Síntesis.
- _____. 2002. *Entrevistas cualitativas*. Cuadernos metodológicos, Vol. 32. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Valls-Llobet, Carme. 2009. *Mujeres, salud y poder*. Feminismos. Madrid: Cátedra; Universitat de València; Instituto de la Mujer.

- Vargas Escobar, Milú. 2006. "El desarrollo como derecho humano y la equidad de género". En *Género y desarrollo: el camino hacia la equidad*, editado por Marta Carballo de la Riva, 18-30. Madrid: Catarata; Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC).
- Vargas Valente, Virginia. 1992. "Importancia de la categoría género e implicaciones sociales del concepto. Aspectos y enfoques a revisar en los proyectos de desarrollo". En *Mujeres y desarrollo. Estrategias y proyectos*, editado por Virginia Vargas Valente y Itziar Lozano, 9-34. Madrid: Coordinadora de ONGD - Grupo de Trabajo Mujeres y Desarrollo.
- Velando Casanova, Mónica. 2005. "La RAE y la violencia de género: reflexiones en torno al debate lingüístico sobre el título de una ley". *Cultura, lenguaje y representación. Revista de Estudios Culturales de la Universitat Jaume I* II: 107-24.
- Venekai-Rudo White, Seodi, *et al.* 2002. *Dispossessing the widow: gender based violence in Malawi*. Blantyre (Malawi): Christian Literature Association.
- Vera, José María. 2001. "Crónica de un año aciago para la cooperación española". En *La Realidad de la Ayuda 2001-2002*, 45-80. Barcelona: Intermón-Oxfam.
- Verloo, Mieke. 2005. "Mainstreaming gender equality in Europe: a critical frame analysis approach". *The Greek Review of Social Research* 117 (B): 11-34.
- Verloo, Mieke y Emanuela Lombardo. 2007. "Contested gender equality and policy variety in Europe: introducing a critical frame analysis approach". En *Multiple means of gender equality: a critical frame analysis of gender policies in Europe*, editado por Mieke Verloo, 21-49. New York: Central European University Press.
- Vigarello, Georges. 1999. *Historia de la violación. Siglos XVI-XX*. Feminismos. Madrid: Cátedra; Universitat de València; Instituto de la Mujer.
- Villán Durán, Carlos. 1999. "El derecho al desarrollo como derecho humano". En *Consolidación de derechos y garantías: los grandes retos de los derechos humanos en el siglo XXI. Seminario conmemorativo del 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos*, 107-40. Madrid: Consejo General del Poder Judicial.
- Viola, Andreu. 2000. "La crisis del desarrollismo y el surgimiento de la antropología del desarrollo". En *Antropología del desarrollo: teorías y estudios etnográficos en América Latina*, editado por Andreu Viola. Barcelona: Paidós.
- Walby, Sylvia. 2012. "Sense and measurement of justice and capabilities: a problem in theory and practice". *Theory, Culture & Society* 29 (1): 99-118. doi: 10.1177/0263276411423033.
- Walby, Sylvia, Jo Armstrong y Sofia Strid. 2012. "Intersectionality: multiple inequalities in social theory". *Sociology* 46 (2): 224-40. doi: 10.1177/0038038511416164.

- Walby, Sylvia y Andrew Myhill. 2001. "New survey methodologies in researching violence against women". *British Journal of Criminology* 41 (3): 502-22. doi: 10.1093/bjc/41.3.502.
- Walker, Lenore E. A. 2006. "Battered woman syndrome - empirical findings". *Annals of the New York Academy of Sciences* 1087 (1): 142-57. doi: 10.1196/annals.1385.023.
- Websdale, Neil y Meda Chessney-Lind. 1998. "Doing violence to women – research synthesis on the victimization of women". En *Masculinities and violence*, editado por Lee H. Bowker, 55-81. London: Sage Publications.
- Wedgwood, Nikki. 2009. "Connell's theory of masculinity - its origins and influences on the study of gender". *Journal of Gender Studies* 18 (4): 329-39. doi: 10.1080/09589230903260001.
- Weldon, S. Laurel. 2006. "Inclusion, solidarity and social movements: the global movement against gender violence". *Perspectives on Politics* 4 (1): 55-74. doi: 10.1017/S1537592706060063.
- White, Sarah C. 1997. "Men, masculinities, and the politics of development". *Gender and Development* 5 (2): 14-22. doi: 10.1080/741922357.
- WHO. 2005. "Addressing violence against women and achieving the Millennium Development Goals". Geneva: Department of Gender, Women and Health Family and Community Health, World Health Organization (WHO).
- _____. 2010. "Policy approaches to engaging men and boys in achieving gender equality and health equity". Geneva: World Health Organization (WHO).
- Woods, Ngaire. 2008. "Whose aid? Whose influence? China, emerging donors and the silent revolution in development assistance". *International Affairs* 84 (6): 1205-21. doi: 10.1111/j.1468-2346.2008.00765.x.
- World Bank. 2011. "World Development Report 2012: gender equality and development". Washington, DC: World Bank. Disponible en: <http://go.worldbank.org/LROQ7XSDA0>.
- Xalma, Cristina. 2010. "Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2010", *Estudios SEGIB*, 5. Madrid: Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).
- Young, Iris Marion. 2005. "Five faces of opression". En *Feminist theory: a philosophical anthology*, editado por Ann E. Cudd y Robin O. Andreasen, 91-103. Oxford: Blackwell Publishing. 1ª edición: *Philosophical Forum* 19(4), 1998, pp. 270-90.
- Yusuf, Shahid. 2009. "Development economics through the decades: a critical look at thirty years of the World Development Report". Washington, DC: World Bank.
- Zhang, Lu. 2009. "Chinese women protesting domestic violence: the Beijing Conference, international donor agencies, and the making of a Chinese women's

NGO". *Meridians: feminism, race, transnationalism* 9 (2): 66–99. doi: 10.1353/mer.0.0042.

Zippel, Kathrin. 2008. "Violence at work? Framing sexual harassment in the European Union". En *Gender politics in the expanding European Union: mobilization, inclusion, exclusion*, editado por Silke Roth, 60-80. New York; Oxford: Berghahn Books.